

**CUADERNOS
DEL INSTITUTO
ANTONIO DE NEBRIJA**

**CUADERNOS
DEL INSTITUTO
ANTONIO DE NEBRIJA**

**DE ESTUDIOS SOBRE
LA UNIVERSIDAD**

8

2005

**UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
EDITORIAL DYKINSON**

Directora:

Adela Mora Cañada (Univ. Carlos III)

Redacción:

Carolina Rodríguez López (Univ. Carlos III) y Manuel Martínez Neira (Univ. Carlos III)

Consejo Asesor:

P. Alonso Romero (Univ. de Salamanca), A. Álvarez de Morales (Univ. Autónoma de Madrid), M. Á. Bermejo Castrillo (Univ. Carlos III), G. P. Brizzi (Univ. Bolonia), Jorge Correa Ballester (Univ. de València), J. R. Cruz Mundet (Univ. Carlos III), E. Fernández García (Univ. Carlos III), E. González González (Univ. Nacional Autónoma de México), P. Grossi (Univ. di Firenze), E. Hernández Sandoica (Univ. Complutense), R. L. Kagan (John Hopkins University), Dámaso de Lario (Ministerio de Asuntos Exteriores), E. López-Aranguren Quiñones (Univ. Carlos III), M. Lucena (Univ. de Alcalá de Henares), M. F. Mancebo Alonso (Univ. de València), E. Martínez Ruiz (Univ. Complutense), A. Mazzacane (UNISTORIA. Italia), G. Peces-Barba Martínez (Univ. Carlos III), J. L. Peset Reig (CSIC), M. Peset Reig (Univ. de València), A. Rodríguez de las Heras (Univ. Carlos III), M. Rodríguez Piñero (Univ. de Huelva), L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Univ. de Salamanca), A. Romano (Univ. di Messina), M.^a Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos (Univ. Carlos III), J. M. Scholz (Max-Planck-Institut), D. Soto Arango (Univ. de Tunja), J. Urrutia Elejalde (Fundación Urrutia Elejalde) y E. Villalba Pérez (Univ. Carlos III).

Esta edición se realiza gracias al patrocinio del Banco Santander Central Hispano

Publicación incluida en el catálogo Latindex

© Edita: Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad
Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 126 - 28903 Getafe (Madrid) España
Tel: 916 249 797 - Fax: 916 249 517
e-mail: anebrija@der-pu.uc3m.es
Internet: www.uc3m.es/uc3m/inst/AN/anebrija.html

Suscripciones y venta: Editorial Dykinson, S.L.
Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Tels. (+34) 915 44 28 46 / (+34) 915 44 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>
Diseño de cubierta: Emilio Torné.

Depósito legal: M. 46.047-1998
ISSN:1139-6628

ÍNDICE

	<u>Págs.</u>
ESTUDIOS	
Humanismo y derecho canónico: la obra de Jean Doujat. <i>Ramon Aznar i Garcia</i>	11
La polémica de la ciencia española (1876-1877). ¿Un debate ideológico acerca de las dos Españas? <i>Eusebio Fernández García</i>	71
A formação da cultura jurídica nacional e os cursos jurídicos no Brasil: uma análise preliminar (1854-1879). <i>Ricardo Marcelo Fonseca</i>	97
La facultad de derecho en los años sesenta. Creación de departamentos y nuevos planes de estudios. <i>Manuel Martínez Neira</i>	117
La universidad fascista y la universidad franquista en perspectiva comparada. <i>Francisco Morente Valero</i>	179
Los estudiantes católicos de la Universidad de Valencia (1875-1936). <i>Germán Perales Birlanga</i>	215
De la <i>historia</i> a la <i>memoria</i> . A propósito de una reciente obra de historia universitaria. <i>Carlos Petit</i>	237
El plan de estudios de derecho en la Universidad Central (1923-1931). <i>José María Puyol Montero</i>	281
Los estudios y los estudiantes de jurisprudencia y teología tras la unificación de las facultades de leyes y cánones. <i>Carlos Tormo Camallonga</i>	359
BIBLIOGRAFÍA	
<i>Annali di Storia delle università italiane</i> (Carolina Rodríguez López) ..	441
Antonio Luis Cárdenas Colménter, <i>El concepto de universidad. Origen y evolución</i> (Manuel Martínez Neira)	442
Juan Luis Polo Rodríguez y J. Hernández de Castro, <i>Ceremonias y grados en la Universidad de Salamanca. Una aproximación al protocolo académico</i> (Manuel Martínez Neira)	443
Isidro Sánchez Sánchez y Esmeralda Muñoz Sánchez, <i>La universidad, un reto de Castilla-La Mancha</i> (Damián Alberto González Madrid)	444
María Ángeles Sotés Elizalde, <i>Universidad franquista: debate sobre la libertad de enseñanza</i> (Manuel Martínez Neira)	446
Diana Elvira Soto Arango, <i>La reforma del plan de estudios del fiscal Moreno y Escandón</i> (Ramon Aznar i Garcia)	447

	<u>Págs.</u>
<i>L'Università degli studi di Firenze. 1924-2004</i> (Manuel Martínez Neira)	448
<i>Viajar para saber. Movilidad y comunicación en las universidades europeas</i> (Manuel Martínez Neira)	449
Pere Ysàs, <i>Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia</i> (Carolina Rodríguez López)	450

VARIA

Actividad del Instituto.....	457
Noticias	461
Resúmenes.....	465
Publicaciones recibidas	473
Presentación de originales.....	477

ESTUDIOS

HUMANISMO Y DERECHO CANÓNICO: LA OBRA DE JEAN DOUJAT

Sumario: 1. Introducción.—2. El autor.—3. Objeto, finalidad, contenido y estructura de las *Praenotiones*.—4. Método de estudio del derecho canónico.—5. Las obligaciones de los catedráticos.—Apéndice.

1. Introducción*

El 11 diciembre de 1772 el Consejo de Castilla promulgó la real provisión que establecía un nuevo plan de estudios para la universidad de Alcalá de Henares¹. No sin controversia, la cátedra de sexto pasó a denominarse de historia eclesiástica². Ya en el dictamen claustral de abril de 1771 se había propuesto que los estudios de licenciatura comenzasen en dicha cátedra a través de las *Praenotiones* de Jean Doujat³. Se trataba —según el redactor del escrito— de un manual propedéutico capaz de suministrar a los jóvenes unas

* No quiero dar comienzo a este escrito sin antes manifestar mi gratitud al Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia de la Universidad Carlos III de Madrid —especialmente a Adela Mora y a Manuel Martínez Neira—. Su apoyo ha posibilitado mi estancia en el *Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno della Università degli Studi di Firenze* —en mayo de 2004 y junio de 2005—. Así mismo, deseo referirme a Paolo Grossi, Carlo Fantappiè y M.^a Pilar Hernando, quienes de uno u otro modo han alentado esta investigación.

¹ R. Aznar i García, *Cánones y leyes en la universidad de Alcalá durante el reinado de Carlos III*, Madrid, 2002, pp. 94 ss.

² Al parecer, no se trató de una decisión carente de significación política, si tenemos en cuenta la oposición jesuítica a este tipo de estudios. Véase H. Jedin (dir.), *Manual de historia de la Iglesia*, 8 vols., Barcelona, 1965-1978, V, pp. 743 ss.

³ *Praenotionum canonicarum libri quinque: quibus sacri iuris, atque universi studii ecclesiastici principia, & adminicula enucleantur*, París, 1687.

nociones histórico-jurídicas básicas⁴. Por su parte, el fiscal Campomanes consideró que la cátedra debía centrarse en la explicación del derecho canónico anterior a Graciano, bien a través de Doujat, bien por medio de Zeger Bernhard Van Espen⁵. Probablemente, las connotaciones políticas de uno y otro autor suscitaron la reacción de los doctores alcalaínos, quienes en octubre de 1772 afirmaron preferir las *Notae historicae* del servita Theodor M. Rupprecht⁶. Sostenían ahora que este texto superaba a Doujat en cuanto a la metodología —las técnicas de la crítica histórica—, el contenido —las decretales pontificias anteriores al Decreto— y la orientación política —la distinción entre las jurisdicciones real y eclesiástica—⁷. Pero, a pesar de las discrepancias, acabó imponiéndose el texto de Doujat⁸.

El presente artículo encuentra su punto de partida en la novedad que supuso la creación de la cátedra de historia eclesiástica. El hecho de que en el manual propuesto se reflexionase acerca de cómo había de ser la enseñanza y el aprendizaje del derecho canónico permite ahondar en el conocimiento del plan de estudios alcalaíno. Por otro lado, debe tenerse presente el «vacío casi absoluto» de estudios referidos a la historia de la ciencia canónica post-tridentina⁹. Tal vez ello se deba a lo que Paolo Grossi ha dado

⁴ R. Aznar i Garcia, *Cánones y leyes...*, p. 94.

⁵ *Tractatus historico-canonicus exhibens scholia in omnes canones conciliorum, tam graecos quam latinos*, Lieja, 1693.

⁶ *Notae historicae in universum ius canonicum rationibus consentaneis adsertae, quaestionibus historico-critico-dogmatico-scholasticis illustratae, munitae, atque in usum cupidae legum sacratiorum iuventutis praecipue directae*, 3 vols., Praga, 1751-1754. Sobre este autor, véase A. M. Rossi, *Manuale di storia dell'ordine dei servi di Maria (MCCXXXIII-MCMLIV)*, Roma, 1956, p. 549.

⁷ R. Aznar i Garcia, *Cánones y leyes...*, p. 115.

⁸ En Salamanca, donde también se erigió la cátedra de historia eclesiástica, se había de estudiar el texto enmendado del Decreto; mientras que en Valladolid ni siquiera se instauró esta asignatura. Véase M. y J. L. Peset, *El reformismo de Carlos III y la universidad de Salamanca. Plan general de estudios dirigido a la universidad de Salamanca por el Real y Supremo Consejo de Castilla en 1771*, Salamanca, 1969, p. 64.

⁹ P. Grossi, «Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica», en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 14 (1985), 587-599, p. 590.

en llamar el «exilio moderno del derecho canónico». Una situación ésta que hallaría sus motivaciones históricas en el carácter severamente disciplinar del derecho de la Contrarreforma, la progresiva secularización que ha caracterizado a la cultura europea y, en fin, el creciente protagonismo del Estado —y su monismo jurídico—¹⁰. Ahora bien, no debe olvidarse que las novedades jurídico-políticas surgidas en los siglos modernos se insertaron en el ámbito de una realidad constitutivamente bipolar: secular y eclesiástica¹¹. Las ocho ediciones de las *Praenotiones* —todas anteriores a 1789— dan una idea de la influencia que ejerció el texto en los decenios que siguieron a su edición¹². Más recientemente ha sido una obra utilizada con frecuencia por los historiadores de las fuentes canónicas¹³.

En el apéndice incluyo la transcripción y traducción del latín al castellano del proemio y del capítulo XXI del libro quinto, «Sobre el método de enseñar y aprender derecho canónico»¹⁴. He designado a los autores que aparecen citados en el texto latino según la denominación internacionalmente aceptada. Para ello me han sido de gran utilidad las ediciones electrónicas de algunos de los más relevantes catálogos bibliográficos¹⁵.

¹⁰ P. Grossi, «Diritto canonico e cultura giuridica», en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 32 (2003), 373-389, pp. 375-376.

¹¹ L. Prosdocimi, «Il diritto canonico di fronte al diritto secolare nell'Europa dei secoli XVI-XVIII», en *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1977, 431-446, p. 432.

¹² De ellas, sólo la primera se dio a la imprenta en Francia —en París—; cinco en Venecia —1717, 1735, 1748, 1762 y 1769— y dos en la ciudad alemana de Lippe —1776 y 1778—.

¹³ G. Le-Bras, «Preface», en M.-A. Lemasne-Desjobert, *La Faculté de Droit de Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles*, París, 1966, p. VII, nota 2.

¹⁴ He consultado el ejemplar conservado en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, editado en Venecia, en 1769. Signatura FA/1441. Quiero hacer constar mi agradecimiento al profesor Agustí Ventura Conejero, catedrático de latín, cuyas observaciones han enriquecido el texto que presento en el apéndice.

¹⁵ En especial, el *Library of Congress Online Catalog*, el *Catalogue Collectif de France* y el *Catalogo generale della Biblioteca Apostolica Vaticana*.

2. *El autor*

Jean Doujat (1609-1688) perteneció a una distinguida familia de juristas estrechamente vinculados al parlamento de Toulouse¹⁶. Hijo de un abogado en el capitolio tolosano, su antepasado Louis había sido el primer letrado de una estirpe que contaba con el hito de Guillaume Doujat, autor de un comentario al Digesto¹⁷. Nuestro autor estudió derecho en Toulouse y allí mismo fue recibido de abogado en 1637. Pronto se trasladó a París, donde a partir de 1639 compaginó su actividad en el foro con la enseñanza particular¹⁸.

Dotado de un espíritu inquieto, sus horizontes culturales excedieron lo estrictamente jurídico. Desde bien pronto manifestó un vivo interés por el conocimiento de las lenguas, así antiguas, como modernas: tuvo un gran dominio del francés y del latín; hablaba italiano, español, griego, hebreo y turco; y tenía conocimientos de inglés, alemán y croata¹⁹. Además publicó un diccionario de occitano y una gramática española²⁰. También los avatares políticos de

¹⁶ M. Michaud (dir.), *Biographie universelle ancienne et moderne*, 45 vols., París-Leipzig, 1854-1865, 2.^a ed., XI, pp. 269-270. También resulta útil la consulta del *Index biographique français*, 7 vols., München, 3.^a ed., 2004, III, p. 1402.

¹⁷ «Ego itaque Tolosae natus, pater & avo advocatis in senatu, hoc etiam capitolino; proavo Guilielmo consiliario regio in parlamento tolosatum (cuius extat enarratio in *Responsa Jurisconsultorum Naturalia* primae & secundae partis digestorum) abavo Ludovico, qui primus regius in magno consilio advocatus fuit», en *Praenotionum...*, p. 440.

Sobre Guillaume Doujat, puede consultarse Nicolaus Hieronymus Gundling (1671-1729), *Triga libellorum rarissimorum. Primus, Ludovici Malquytii vera non simulata ietorum philosophia. Alter, Marquadi Freheri decisiones aeropagitae. Tertius, Guliulmi Douiatii enarrationes in responsa iurisconsultorum naturalia*, Halle-Booienhoven, 1727.

¹⁸ J.-C. F. Hoefer (dir.), *Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources a consulter*, 45 vols., París, 1854-1866, XIV, pp. 692-693.

¹⁹ M. Michaud (dir.), *Biographie...*, XI, p. 270.

²⁰ *Dicciounari moundi de la oun soun enginats principalomen les mouts les plus escarriés, an lesplicaciu francezo*, Toulouse, 1638; *Grammaire espagnole abrégée. Dediée a mademoiselle d'Estampes de Valencey*, París, 1644; y, en fin, *Moyen aisé d'apprendre les langues, qui par leur origine ont la conformité avec*

Francia entraban en el ámbito de sus preocupaciones: en 1645 rememoraba en un soneto la victoria de Louis de Bourbon —entonces duque de Enghien y más tarde príncipe de Condé— en Nordlingen contra las tropas españolas²¹; años después escribiría para demostrar los derechos de la Corona de Francia sobre los Países Bajos católicos y el ducado de Lorena²².

En 1650 era nombrado académico de Francia y un año después, a propuesta de Jean d'Artis, profesor de cánones en el *collège royal*²³. Fue entonces cuando contrajo matrimonio con Marie Doé²⁴. Su vinculación con las principales instituciones culturales de la monar-

celles que nous sçavons; mis en pratique sur la langue espagnole, París, 1646.

²¹ Véase Voltaire, *El siglo de Luis XIV*, México, 1996, pp. 24 ss.

²² *Sur les blessures de monseigneur le duc d'Anguien receuës à la bataille de Nordlingen. Sonnet français*, [s. l.], 1645; *Mémoires pour la défense des droits de la reine sur les Païs-Bas catholiques, ou Abrégé du traité latin intitulé: Apologeticus pro iure reginae christianissimae in belgicas Hispaniae ditionis provincias*, [s. l.], 1668; y *Mémoires de l'état ancien et moderne de la Lorraine, tirés de la géographie historique et politique*, París, 1673. Véase R. d'Amat y R. Limouzin-Lamothe (dirs.), *Dictionnaire de biographie française*, París, 1967, XI, pp. 675-676.

²³ D'Artis —catedrático en el *collège* y en la facultad— había declarado ante notario en 1651 que su enfermedad le impedía atender sus obligaciones docentes y propuso que Jean Doujat le sustituyese en el cargo. Incluso se dirigió a los miembros del parlamento de París solicitándoles el nombramiento de su protegido. Las razones que adujo fueron básicamente dos: que el claustro de la facultad había quedado reducido a sólo un catedrático, Philippe de Buisine, y que Doujat podría cumplir óptimamente sus obligaciones al no estar casado. Ahora bien, esta propuesta suscitó de inmediato la oposición de aquél, quien, pese a los deseos de D'Artis, logró impedir que Doujat ocupase una cátedra en la facultad —que debía proveerse por concurso—; no, en cambio, que fuese nombrado profesor de cánones en el *collège*, en sustitución de D'Artis, para lo que únicamente se requería nombramiento real. Allí enseñó Doujat hasta 1678, cuando dimitió en favor de Jacques Baudin, habiendo sido decano de la institución desde 1676. Sobre esta cuestión, véase M.-A. Lemasne-Desjobert, *La Faculté de Droit...*, pp. 57 ss. Sobre el *collège*, puede consultarse C. P. Goujet, *Mémoire historique et littéraire sur le collège royal de France*, París, 1758; también M. Targe, *Professeurs et régents de collège dans l'ancienne Université de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles*, París, 1902; así mismo A. Alvar Ezquerro y otros, *Les origines du Collège de France (1500-1560). Actes du colloque international (Paris, décembre 1995)*, París, 1998.

quía quedó ratificada al impartir lecciones de historia al delfín, lo que le valdría el título de «historiographe de France». En sus inicios, esta proximidad al poder estuvo marcada por la inestabilidad política —las revueltas de la Fronda—, la hambruna y la peste. Eran tiempos de anarquía generalizada cuando Doujat impartía sus lecciones en Cambrai —sede del *Collège*— y dedicaba un libro a Luis XIV, que en 1651 alcanzaba la mayoría de edad²⁵.

En 1655, tras cuatro años de docencia en el colegio, fue nombrado catedrático en la facultad de decreto de París —la facultad jurídica parisina oficialmente sólo lo era de cánones—²⁶. A instancias del parlamento, empeñado en restañar la crisis que afectaba a la facultad y cubrir las vacantes, Doujat ocupó la cátedra que había regentado D'Artis²⁷. Tras su nombramiento, redactó la biografía y editó las obras de su protector, que había recibido la influencia historiográfica de los benedictinos de la Congregación de San Mauro²⁸.

²⁴ Véase M.-A. Lemasne-Desjobert, *La Faculté de Droit...*, p. 59, nota 1.

²⁵ *Oratio inauguralis de tradendis disciplinarum praenotionibus, habita in regio Cameracensi auditorio*, París, 1652; *Rerum gallicarum impubere Ludovico XIV, liber primus*, [s. l.], 1652.

²⁶ «Tum post quadriennale fere iuris canonici in regio Franciae collegio professionem, de sententia illustrissimi Matthaei Mole [Mathieu Molé (1584-1656)] senatus principis, & illustrissimorum regionum triumvirovum, Aud. Talei [Omer Talon (1595-1652)], Ach. Harlaei [Achille de Harlay (1581-1646)], Hier. Bignonii [Jérôme Bignon (1589-1656)], atque academiae decreto ad primam vacantium in iuridica facultate cathedram cooptatus a V. C. Philippo de Buisine, qui solus antecessor supererat.», en *Praenotionum...*, p. 440.

²⁷ Para ello, Doujat se comprometió a entregar a Philippe de Buisine, mientras éste viviese, quinientas libras anuales procedentes de las rentas del *Collège Royal*. M.-A. Lemasne-Desjobert, *La Faculté de Droit...*, p. 60. Sobre Philippe de Buisine, véase M. Prevost y R. d'Amat (dirs.), *Dictionnaire de biographie française*, París, 1956, VII, p. 642. También R. Mousnier, *Parigi capitale nell'età di Richelieu e di Mazarino*, Bolonia, 1983, p. 87.

²⁸ Jean d'Artis (1572-1651) había estudiado filosofía en Rodez y derecho en Cahors y Toulouse. En 1623 obtuvo una cátedra de derecho canónico en el *Collège royal*, fue decano de la facultad de cánones de París entre 1641 y 1651, y falleció siendo canónigo de la catedral de Noyon. Escribió numerosas obras de derecho canónico y a su muerte legó una considerable fortuna, estableciendo en su testamento que se destinasen mil libras a la edición de sus obras completas. De ello se encargarían la Congregación de San Mauro y su amigo y sucesor en la cátedra, Jean Doujat. Véase J. Balteau, M. Barroux y M. Pre-

Otro tanto hizo con François Florent, canonista de tendencia galicana, de quien editó algunos de sus escritos²⁹. Ambos habían ejercido sobre Doujat una destacable influencia en materia de metodología docente —lo veremos más adelante—. En 1660 participaba en dos obras colectivas, entre cuyos redactores se encontraba Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), al tiempo que se hacía eco, una vez más, de la coyuntura política del momento³⁰. En efecto, en 1659, se había firmado con España la Paz de los Pirineos, sellada con las nupcias de Luis XIV y la infanta María Teresa, evento al que dedicó una de sus *orationes*³¹.

El inicio del gobierno efectivo de Luis XIV, en 1661, estuvo marcado por la tensión permanente con la Santa Sede³². La concepción de la soberanía regia no admitía interferencias político-jurídicas extrínsecas. Y aquí, en el epicentro de la tensión, pugnaban dos principios políticos —monarquía y papado— y dos marcos jurídicos —derecho del rey y derecho de la Iglesia—. Se trataba de una tendencia histórica, que venía de lejos, que se conformaba a través de

vost, *Dictionnaire de biographie française*, París, 1939, III, pp. 1.197-1.201.

Doujat editó *Ioannis d'Artis... Opera canonica a Ioanne Douiatio edita, in tres partes distributa quorum I continentur commentarii in universum Gratiani Decretum. II. Tractatus de beneficiis ecclesiasticis. III. Opuscula varia quorum syllabus initio eius partis occurret*, París, 1656.

²⁹ François Florent (1590-1650) estudió derecho en Toulouse, ejerció como abogado en el parlamento de Dijon y en 1630 fue nombrado profesor de derecho de la universidad Orleans. Relacionado con Jérôme de Bignon, Grotius y los hermanos Dupuy, fue designado catedrático de cánones de la universidad de París en 1649, cargo que desempeñó durante apenas un año. Véase R. Naz (dir.), *Dictionnaire de droit canonique*, V, pp. 854-855.

Doujat editó *Francisci Florentis opera canonica & iuridica, edita a Ioanne Doujatio. Accedunt Nicol. Ianuarii [Nicolas Janvier] Tractatus de officio archidiaconi & Ioannis Tournet [Jean Tournet] de Absolutione ad cautelam*, 2 vols., París, 1679.

³⁰ *Démonstration chrétienne, touchant les vérités de la religion*, París, 1660; *Lettre d'un docteur de Sorbonne, sur le sujet de plusieurs écrits, composés de la vie et de l'état de Marie des Valées, du diocèse de Coutances*, [s. l.], 1660.

³¹ *De pace a christianissimo rege Ludovico XIV cum rege catholico feliciter constituta, oratio panegirica*, París, 1660.

³² B. Cousin, «El 'regalismo' en Francia, de Luis XIV a Bonaparte», en E. La Parra López y J. Pradells Nadal (eds.), *Iglesia, sociedad y estado en*

diversos frentes y que ahora se vio agudizada. La aceptación de las bulas y decretales pontificias —el *exequatur*—, la concesión de beneficios eclesiásticos, la idea de primacía del concilio sobre el papado, la autonomía de cada obispo en su diócesis, la contraposición del decreto de Graciano a las decretales o el control regio de la formación del clero... son algunos de los aspectos de esta disputa. Será la conciencia acerca de la magnitud de esta última cuestión —formativa, académica— la que impulsó a Doujat a redactar una relación de las obras que convenía estudiar en el ámbito de las disciplinas eclesiásticas³³. Por entonces, escribía también una oda en francés para conmemorar el nacimiento del delfín, que no sería su último elogio a la monarquía³⁴.

En la obra colectiva a la que hacíamos referencia más arriba, la presencia de Bossuet apuntaba en una dirección que se confirma en la *oratio* dedicada a Pierre de Marca: las simpatías galicanas de Doujat³⁵. De Marca (1594-1662) había escrito en 1641 una obra de título elocuente, *De concordia sacerdotii et imperii seu libertatibus ecclesiae galicanae*. Jurista —presidente del parlamento de Navarra en 1622—, erudito —autor de una historia de aquel reino—³⁶, accedió en 1652 a la archidiócesis de Toulouse, en recompensa por su fidelidad en la guerra contra la monarquía hispánica. Fue allí donde surgió el aprecio personal que De Marca sentía por Doujat³⁷. Precisa-

España, Francia e Italia (siglos XVIII al XIX), Alicante, 1991, 237-250.

³³ *Illustrissimis et reverendissimis archiepiscopis, episcopis caeterisque admodum venerandis cleri gallici delegatis Ioannes Doujat... Syllabus operum ad promovenda studia ecclesiastica conducentium*, [s. l.], 1661.

³⁴ *Ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin*, París, 1661; en 1671 tradujo del francés al latín el *Panegyricus Ludovico XIV regi*, in *Academia francisca dictus a Paulo Pellissonio Fontanerio* [Paul Pellisson-Fontanier (1624-1693)]; es suyo, en cambio, el *Panegyricus Ludovici Magni ob res hoc anno regni XLI praeclare gestas... dictus in aula regia Cameracensi mense decembri 1684*, París, 1685.

³⁵ *De illustrissimi ac reverendissimi in Christo patris Petri de Marca, archiepiscopi Parisiensis, moribus et rebus gestis oratio*, París, 1664 —que dictó con ocasión del inicio del curso escolástico de 1663—. Pierre de Marca, arzobispo de Toulouse, si bien fue preconizado a la archidiócesis de París, no llegó a tomar posesión.

³⁶ *Histoire de Béarn, contenant l'origine des rois de Navarre*, París, 1640.

³⁷ De Marca propuso su nombre para el cargo de auditor del tribunal de la Rota romana, en representación de Francia, nombramiento que no

mente en 1664, cuando editó esta *oratio*, se firmaba el Tratado de Pisa, en cuya virtud Avignon quedaba libre a cambio de las excusas públicas del pontífice. Una vez más, nuestro autor evidenciaba un agudo sentido de la oportunidad política. Al igual que el arzobispo De Marca, Doujat sostenía que las leyes pontificias no tenían carácter vinculante sino después de la aceptación —*recipio*— por el monarca³⁸. Tampoco podía el papa derogar los cánones y las costumbres vigentes en Francia³⁹.

Un buen canonista debía ser un óptimo civilista. Desde esta perspectiva, se comprende que sus libros sobre la historia del derecho canónico⁴⁰ se compaginaran con otros centrados en la historia jurídica romana⁴¹. También la enseñanza universitaria debía fundarse en esa íntima conexión, lo que ya Lancellotti había propuesto a mediados del siglo XVI. Este jurista abogó por la reelaboración del

llegó a producirse. Véase *Index biographique français*, III, p. 1.402

³⁸ J. Doujat, *Specimen iuris ecclesiastici apud gallos usu recepti...*, París, 1670.

³⁹ A. Fliche y V. Martín (dirs.), *Historia de la Iglesia. De los orígenes a nuestros días*, 36 vols., Valencia, 1974-2000, XXI, p. 181.

⁴⁰ «Martini Bracarenensis episcopi collectio canonum orientalium», escrito de Doujat que se halla en *Bibliotheca iuris canonici veteris, opera et studio Gulielmi Voelli* [Guillaume Voellus] et *Henrici Iustelli* [Henri Justel], 2 vols., París, 1661; *Specimen geographiae ecclesiasticae, veteris, mediae, novae, in quo provinciarum, episcopatuum, monasteriorum... quorum apud SS. Patres aut conciliis... mentio fit, situs, varia nomina...*, París, 1670; *Synopsis conciliorum. Accessit chronologia Patrum, SS. Pontificum, Imperatorum Orientis et Occidentis ab anno I Domini ad annum 1671*, París, 1671; *Histoire du droit canonique avec l'explication des lieux ont donné le nom aux conciles et le surnom aux auteurs ecclésiastiques, et une chronologie canonique...*, París, 1677; *Chronologie des papes, des conciles et des hérésies qu'ils ont condamnées, des pères et autres ecclésiastiques...*, le tout rapporté aux regnes des empereurs et des rois de France..., París, 1688.

⁴¹ *Abregué de l'histoire romaine et grecque, en partie traduit de Velleius Paterculus, et en partie tiré des meilleurs auteurs de l'antiquité, pour suppléer ce qui s'est perdu de cet auteur, accompagné d'une chronologie accommodée au sujet*, 2 vols., París, 1672-1708; *Historia iuris civilis romanorum, qua eius tum origo et progressus, autoritas et utilitas, tum Iustinianae partes atque ordo partium demonstrantur, ubi et gallici iuris origo perstringitur*, París, 1678; *Titi Livii, ... Historiarum libri qui extant... cum interpretatione et notis illustravit Ioannes Douiatius*, 5 vols., París, 1679-1680; *Theophili*

derecho de la Iglesia asumiendo el modelo romano y redactó una Instituta canónica inspirada en la justiniana⁴². Será en 1679 a raíz del edicto de reforma de los estudios jurídicos, cuando Doujat asuma la enseñanza de los principios o elementos del derecho canónico⁴³, lo que dio lugar a su edición de Lancellotti⁴⁴.

En 1688, Doujat fallecía en París. Ese mismo año se editaron sus *Éloges des personnes illustres de l'ancien testament* —obra publicada por el duque de Borgoña—. Y si algunos de los discursos que pronunció en tanto que académico de Francia fueron recopilados⁴⁵, no pocas de sus obras quedaron inéditas⁴⁶.

3. Objeto, finalidad, contenido y estructura de las *Praenotiones*

Cuando Jean Doujat editó en 1687 sus *Cinco libros de prenociiones canónicas en los que se exponen los principios y auxilios del derecho sacro y de todo el estudio eclesiástico* era ya un anciano con una larga trayectoria editorial a sus espaldas. Al parecer, las *Praenotiones* mejoraron la *Histoire du droit canonique*, editada por Doujat en 1677, pudiéndose enmarcar en el ámbito de la historiografía canónica⁴⁷. Ahora bien, a lo largo de XVII será cada vez más difícil distinguir entre historiadores de la Iglesia y canonistas en sentido estricto. La progresiva tensión entre los ordenamientos eclesiástico y estatal hará de la argumentación histórica un instrumento especialmente apto para la controversia⁴⁸. Se comprende así que las *Pra-*

antecessoris Institutionum Iustiniani libri quatuor, París, 2 vols., 1681.

⁴² Giovanni Paolo Lancellotti (1522-1590), *Institutionum iuris canonici*, Venecia, 1564. Véase C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bolonia, 2003, p. 154.

⁴³ M.-A. Lesmaïne-Desjobert, *La Faculté de Droit...*, p. 70.

⁴⁴ *Institutiones iuris canonici ab Ioanne Paulo Lancelotto adiectae sunt hac editione I. Douiatii novae atque uberes nota*, 2 vols., París, 1670-1685.

⁴⁵ *Recueil des harangues prononcées par Messieurs de l'Académie françoise dans leurs réceptions & en d'autres occasions différentes, depuis l'établissement de l'Académie jusqu'à présent*, 2 vols., Amsterdam, 1709.

⁴⁶ R. d'Amat y R. Limouzin-Lamothe (dirs.), *Dictionnaire...*, XI, p. 675.

⁴⁷ Coinciden en esta consideración M. Michaud (dir.), *Biographie universelle...*, XI, p. 270; Hoefler (dir.), *Nouvelle biographie générale...*, XIV, pp. 692-693; también R. Naz (dir.), *Dictionnaire de droit canonique...*, IV, p. 1.437.

⁴⁸ Véase L. Prosdociimi, «Il diritto canonico di fronte al diritto secola-

enotiones no se reduzcan —como veremos más adelante— a lo puramente historiográfico. Por otro lado, debe tenerse presente que la obra —concluida una década después de la *Histoire*— supuso una adaptación a los cambios que experimentó la enseñanza jurídica en París a raíz del edicto de 1679 —Cavanna habla de «rivoluzione dell'ordinamento universitario»—⁴⁹. Desde entonces, Doujat había tenido a su cargo la explicación, durante el primer semestre, de la historia y los principios del derecho canónico⁵⁰, dedicación docente que debió contribuir en buena medida a la maduración del plan de la obra.

Cuando Doujat expresó cuál era el objeto de su escrito apeló de inmediato a Aristóteles, quien había reflexionado en los *Analíticos segundos* sobre la aplicación del silogismo al conocimiento científico —el método científico—⁵¹. Éste, según el Estagirita, dependía de una serie de nociones previas, de un conocimiento precientífico, de unos fundamentos. Utilizando un símil, cabría afirmar que el árbol de la ciencia —del saber apodíctico— se erguía sobre un suelo conformado de verdades logradas por medio de tanteos e indagaciones —o saber heurístico—. Tales nociones previas podían ser de dos tipos: axiomas o principios, es decir, verdades aplicables a cualquier razonamiento científico; y definiciones, o sea, principios inmediatos a cada una de las ciencias en concreto. Pues bien, a este segundo tipo de noción previa —Doujat utilizó los términos «praecognitiones» y «notiones causarum»—se referirá nuestro texto, de lo que da idea el propio título: *Praenotiones*⁵². Se cubría así un vacío, puesto que el derecho pontificio —al decir de Doujat— carecía de un estudio que hubiese abordado satisfactoriamente esta cuestión. Y ello pese a la existencia de algunas tentativas, como las de Boëtius

re...», p. 440.

⁴⁹ A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982, pp. 132 y 369-377, estas últimas sobre métodos docentes. Sobre esta reforma, véase Ch. Chêne, *L'enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793)*, Génova, 1982.

⁵⁰ M.-A. Lemasne-Desjobert, *La Faculté de Droit...*, p. 70.

⁵¹ Véase *Tratados de lógica (Organon)*, 2 vols, Madrid, 1982-1988, II, introducciones, traducciones y notas por M. Candel Sanmartín, pp. 301 ss.

⁵² Paolo Grossi, refiriéndose a otro texto, percibe que las *praenotiones* «sono prevalentemente dedicate a esplorazioni e squarci sul cammino storico degli istituti, alla ricerca delle fondazioni storiche di questi», en P.

Epo⁵³, Antonio Agustín⁵⁴, o François Florent. Las *Praenotiones* aspiraban, pues, a proporcionar una dimensión fundamental o basilar —en un sentido introductorio— al derecho canónico que se enseñaba en las universidades.

Al referirnos a la idea de enseñanza, nos adentramos en otra de las claves interpretativas de un texto, que no pretendía satisfacer las ansias de sofisticación de los doctores o el afán de éxito de quienes se dedicaban al foro —Doujat afirma que esto hubiese acrecido su reputación—. Antes bien, se dirigía a los «principiantes en los misterios del camino», a «los jóvenes aún legos». Es éste, por tanto, un libro con finalidad didáctica, escolástica; un manual que, no obstante, debía contar con el auxilio de las colecciones de derecho canónico. No se trataba de cancelar la enorme tradición científica —hubiese sido una aspiración vana—; pero sí de conjurar los inconvenientes formativos que se derivaban de la ausencia de una guía, de un orden. Y es que los estudiantes dilapidaban su tiempo y sus energías rebuscando entre montañas de libros y autores, lo que con frecuencia les abocaba a la imprecisión y al error. Por lo tanto, el fin perseguido se cifraba en la consecución de una obra que fuese de la máxima utilidad, precisamente porque posibilitase un adecuado aprendizaje del derecho canónico. En adelante, resultaría al alcance de los estudiantes la com-

Grossi, «Storia della canonistica moderna...», p. 594, nota 16.

⁵³ Boëtius Epo (1529-1599) nació en Rordahusa (Frisia). Estudió lenguas y filosofía en Colonia, y teología y derecho en Lovaina. Tras un año en París, en compañía de Eustaque Chappuis (1499-1556) —eclesiástico que prestó servicios diplomáticos al emperador Carlos V y fundó el Colegio de Saboya en Lovaina—, marchó a enseñar a Niza, donde recibió la influencia de ideas ajenas a la doctrina católica. Incluso estuvo un tiempo con Calvino en Ginebra. Tras su vuelta a la ortodoxia romana, y bajo los auspicios de Bérenger Fernand, se graduó en Toulouse en 1560 en ambos derechos. En 1562 fue requerido para que enseñase en la nueva universidad de Douai. Allí permaneció durante treinta y siete años, dedicándose a escribir y a aconsejar sobre cuestiones de uno y otro derecho; recibió el título de conde palatino y fue nombrado primer catedrático de derecho pontificio. Entre sus obras se puede citar, *Antiquitatum Ecclesiasticarum syntagmata*, editada en dos volúmenes. Véase J. Doujat, *Praenotionum...*, pp. 424-425.

⁵⁴ Antonio Agustín, *Epitome iuris pontificii veteris*, así como *Dialogorum libri duo de emendatione Gratiani*, ambas editadas en Tarragona, en 1587. Sobre la producción jurídica de Agustín, puede consultarse con provecho T. Gómez Piñán, *Antonio Agustín (1517-1586), su significación en la*

prensión, en poco tiempo y ordenadamente, de las obras de seiscientos juristas de uno y otro derecho. Además, las eventuales carencias de la memoria ya no serían un obstáculo difícil de sortear, dada la disposición sintética y ordenada de los materiales recogidos.

Habiéndonos referido al objeto —los fundamentos del derecho canónico— y a la finalidad —la formación de los futuros canonistas—, procede ahora explicitar el contenido y la estructura de una obra que, como dirá el autor, estaba embebida de brevedad, historicidad y crítica. Estos tres términos apuntan en la dirección metodológica propia de los autores adscritos al humanismo jurídico o escuela culta del derecho.

Primero, las cuestiones más destacadas —*ordo, nomina, auctores, tempora, rerum summa*— y la autoridad de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento —*omnium utriusque foederis librorum*—, así como la mención de las distintas versiones y ediciones de los textos sagrados; segundo, los concilios generales y particulares; tercero, los decretos y las decretales pontificias —atendiendo a su veracidad y vigencia, y resolviendo las dudas cuya aplicación hubiese suscitado—; cuarto, las obras de los Santos Padres; quinto, las colecciones de derecho romano y francés —materias incorporadas a la enseñanza en 1679—; sexto, las colecciones de cánones; séptimo, las obras de comentadores e intérpretes de cánones; octavo, las obras de historia y geografía eclesiásticas; y, en fin, un capítulo dedicado al objeto y la utilidad del derecho canónico. A ello se añaden un cuadro sinóptico con el plan de la obra y un apéndice, del que destaca la serie de las órdenes religiosas existentes con referencia a su origen. Resulta, pues, evidente que estamos ante una obra caracterizada por una declarada voluntad histórico-crítica, si bien, esta perspectiva no agota un texto que también contiene derecho canónico positivo —*ius canonicum*— y ciencia del derecho canónico —*scientia iuris canonici*—. En cualquier caso, Doujat quería que los estudiantes se habituasen a «comparar el derecho antiguo o común con nuestras disposiciones legales y costumbres de hoy en día o de la posteridad, a fin de que sea evidente hasta qué punto se habrá llegado gradualmente a las que ahora prevalecen entre nosotros».

4. Método de estudio del derecho canónico

La preocupación de Doujat acerca de cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje jurídico se incardinaba en una tradición que

venía de lejos. En el ámbito del derecho canónico, dos profesores con los que él había tenido una estrecha relación reflexionaron sobre estas cuestiones metodológicas. Se trataba de François Florent y Jean d'Artis, algunas de cuyas *orationes* inaugurales —en noviembre se exhortaba a los estudiantes parisinos a un estudio metódico— se habían convertido en textos impresos⁵⁵. Pero, a decir de Doujat, los derechos canónico y civil prácticamente compartían idéntica metodología. Y así, también las reflexiones de ilustres civilistas sirvieron de soporte a las propuestas de nuestro autor⁵⁶, quien, entre otros, citó a Eguinaire Baron (1495-1550), François Baudouin (1520-1573), François Douaren (1509-1559), François Hotman (1524-1590), Claudius Cantiuncula (†1549) y Giulio Pace (1550-1635)⁵⁷. Fue sobre la base de estas lecturas como Doujat fue

ciencia canónica, Madrid, 1929.

⁵⁵ François Florent, en su *Oratio in aperiendis scholis iuris habita VI. non. oct. anno 1632, de recta iuris canonici discendi ratione* [1634], justificó el estudio del derecho canónico. Véase R. Naz, *Dictionnaire de droit canonique*, V, p. 854. Por su parte, Jean d'Artis redactó una *Praefatio de recta docendi et discendi ratione et quod artes nec scindi, nec in compendia traduci, sed... ab authoribus et scriptoribus earum de integro debent disci et sine frustratione doceri*, París, 1647. En este escrito, D'Artis, tras una larga trayectoria docente, reflexionó acerca de las causas de la decadencia de los estudios e intentó establecer mejoras en el método de enseñanza. Criticó la pereza de los maestros, la indiferencia de los estudiantes, recomendó recurrir a los textos originales y citarlos exacta e íntegramente. Véase J. Balteau, M. Barroux y M. Prevost, *Dictionnaire de Biographie française*, París, 1939, III, p. 1.200.

⁵⁶ Resulta provechosa la consulta de F. Carpintero, «'Mos italicus', 'mos gallicus' y el humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica», en *Ius Commune*, 6 (1977), 108-171.

⁵⁷ Eguinaire Baron, además de comentar la Instituta, se había destacado por sus esfuerzos de síntesis, orden, racionalidad y precisión, en una época en la que se manifestó con intensidad la necesidad de reordenar el mar del saber. También François Baudouin compartió el programa humanista de recoger el derecho en una síntesis simple y clara, al tiempo que defendió la íntima conexión entre la historia y el saber lógico-deductivo del jurista. François Douaren, en su *De ratione docendi discendique iuris*, defendió que el jurista debía edificar su ciencia a partir de los elementos esenciales del derecho; era necesario grabar en la mente del estudiante los conceptos fundamentales, sólo a partir de los cuales se podía lograr la solución de los problemas singulares. Por su parte, François Hotman, haciendo uso de sus cono-

capaz de concebir su teoría acerca de la enseñanza del derecho canónico.

Pues bien, sin esfuerzo personal —que consolida los conocimientos— y sin ingenio —que posibilita concluir adecuadamente el trabajo— no cabe adquirir ningún arte, tampoco el canónico. Esto es lo primero que exige Doujat a quienes aspiran a profesar «una disciplina tan necesaria a la Iglesia como al reino [de Francia]». El punto de partida del itinerario formativo sería, pues, la aptitud y la actitud del estudiante.

Doujat, en la estela de Marco Fabio Quintiliano (ca. 35-ca. 95), participaba del criterio didáctico que postulaba el aprendizaje en las escuelas públicas y no privadamente⁵⁸. Lo que el autor clásico había predicado de la retórica y de las gramáticas latina y griega, el cano-nista lo refería al estudio de la jurisprudencia. En las aulas, la for-

cimientos históricos, había observado la diversidad sustancial entre los ordenamientos romano y de la monarquía francesa. Claudius Cantiuncula, en su *De ratione studii legalis paraenesis*, se pronunció en favor de una enseñanza del derecho fundada sobre la historia. Y, en fin, Giulio Pace había puesto de manifiesto sus inquietudes metodológicas en *De iuris civilis difficultate ac docendi methodo* y *De arte iuris*, oraciones en las que combinó su conexión con la tradición científica precedente y los principios del humanismo.

En general, sobre estos autores, resulta muy útil la consulta de V. Piano Mortari, *Itinera juris. Studi di storia giuridica dell'Età Moderna*, Napoli, 1991. Sobre Claudius Cantiuncula, puede consultarse G. von Kisch, *Claudius Cantiuncula Ein Basler Jurist und Humanist des 16. Jahrhunderts*, Basel, 1970. Acerca de Giulio Pace, véase A. Dufour, «Un adepte italien de l'humanisme juridique à Genève. Julius Pacius de Beriga (1550-1635) et son *De juris methodo* (1597)», en *Genève et Italie, études publiées à l'occasion du 50 anniversaire de la Société Genevoise d'Études Italiennes par Luc Monnier*, Genève, 1969, 113-147; también C. Vasoli, «Scienza, dimostrazione e metodo in un maestro «aristotelico» dell'età di Galileo: Giulio Pace da Beriga, logico e giurista», en *Profezia e ragione. Studi sulla cultura del Cinquecento e del Seicento*, Napoli, 1974, 651-777.

⁵⁸ «Utrum utilius domi, an in scholis erudiantur». He consultado *M. Fabii Quintiliani Institutionum Oratoriarum Libri XII*, 2 vols., Genova, 1641, I, pp. 11-15. Pierre Pithou, uno de los comentaristas cuyo estudio recomienda Doujat, participó en esta edición de la *Institutio Oratoria* de Quintiliano. También puede consultarse T. Albadalejo, E. del Río y J. A. Caballero (eds.), *Actas del congreso internacional «Quintiliano: historia y actualidad de la retórica. XIX centenario de la Institutio Oratoria (14-18 de*

mación se estructuraría a través de las lecciones de los maestros y las disputas entre estudiantes. El discurso del catedrático, la *repetitio* más cuidada y demás ejercicios venían a ser diferentes vías que confluían en un mismo objetivo: atenuar la dificultad de la doctrina analizada. El trabajo en casa debía completar lo aprendido en el aula. Por medio de esta combinación de instrumentos formativos, el estudiante iba a poder lograr los grados académicos o actuar en el foro. Y en cualquier caso, sería capaz de comprender las enseñanzas recibidas y de exponer en público lo aprendido.

En el tiempo en que escribía Doujat, las aulas universitarias no estaban bien reputadas. Por lo general, se pensaba que la vida escolástica hacía peligrar la integridad moral de los jóvenes estudiantes y que no pocos catedráticos descuidaban sus obligaciones docentes. Además, era de buena nota entre las familias adineradas francesas encomendar la formación de los jóvenes a preceptores particulares⁵⁹. Doujat, quien había sido instructor del delfín, intentó hacer compatibles uno y otro estadio de la formación, la pública y la particular. Ésta no debía concebirse como una alternativa a la universidad, antes bien, como un auxilio. Ya Quintiliano había escrito contra la mala influencia que podían ejercer lacayos y demás sirvientes, quienes en no pocas ocasiones se hallaban en el origen de los vicios que los estudiantes portaban a las aulas. Ahora bien, una posible solución pasaba por un preceptor que velase por la corrección de las costumbres y la aplicación en los estudios. O, en palabras del orador clásico, por un continuo acompañamiento que les hiciese mejores a través del temor —*illos meliores faciat qui timebantur*—. Pero, en cualquier caso, el estudiante aplicado no necesitaba más auxilios que las explicaciones de su maestro.

Los tres años de estudios que prescribían los estatutos de la universidad de París de 1600 bastarían para aprehender los *principia* necesarios del derecho, así como la *ratio* de la disciplina canónica⁶⁰.

noviembre de 1995)», 3 vols., Logroño-Calahorra, 1995-1999.

⁵⁹ M.-A. Lemasne-Desjobert, *La Faculté de Droit...*, p. 72.

⁶⁰ Los estatutos pueden consultarse en C. E. du Boulay, *Historia universitatis parisiensis ipsius foundationem, nationes, facultates, magistratus, decreta, censuras et iudicia in negotiis fidei, privilegia, comitia, legationes, reformationes. Item antiquissimas Gallorum academias, aliarum quoque universitatum et religionum ordinum, qui ex eadem communi matre exierunt, institutiones et foundationes, aliaque id genus cum instrumentis publicis et authenticis a Carolo Magno ad nostra tempora ordine chronologico com-*

Este bagaje permitiría al graduado desenvolverse en el foro y hallar en las obras de los comentaristas la información que necesitase. Se trataba, pues, de suministrar, no sólo unos conocimientos, sino también una predisposición mental a la solución de problemas prácticos. El resultado —sostenía Doujat— equivaldría a nadar sin corcho en el inmenso piélago de la jurisprudencia.

El primer año de estudios convenía dedicarlo a tratar de los «elementos» de la ciencia jurídica, llamados comúnmente instituciones. O sea, el alumno había de conocer las partes y libros que integraban el *Corpus iuris*, así como el motivo de su ordenación en distinciones, causas, *quaestiones* y títulos o rúbricas. Debía también saber cuáles eran los principales autores de derecho canónico. Tenía que aprender a manejar con precisión el lenguaje específico de la disciplina canónica. Necesitaba relacionar los principios generales con las excepciones particulares a la regla. Y, en fin, se le urgía a asumir —y a ser capaz de contradecir a quienes lo negasen— que la conciliación era el primer fundamento de uno y otro derecho. Como ya se ha dicho, la formación partía de las *praelectiones* diarias y de las *repetitiones* semanales, basadas ambas en la reflexión diligente y en la pronta respuesta a las dudas planteadas por el profesor. Las instituciones civiles y canónicas serían los textos de referencia durante este primer año, que podrían completarse con las obras de muy pocos intérpretes. Tratándose del derecho romano, Doujat recomendaba el estudio de la *Paráfrasis* de Teófilo —obra editada por él mismo en 1681—, las *Notas* de Arnold Vinnen⁶¹ o la *Descripción sinóptica* de Claude Colombet⁶². Por su parte, en el ámbito del derecho canónico, optaba por Lancellotti y Pierre Halley⁶³. En cualquier

plectens, 6 tomos, París, 1665-1673.

⁶¹ Arnold Vinnen (1588-1657), *Iustiniani sacratissimi principis Institutionum sive elementorum libri quatuor: notis perpetuis multo quam huiusque diligentius illustrati*, Amsterdam, 1652.

⁶² Claude Colombet, *Synoptica institutionum imperialium descriptio*, París, 1685. Este jurista, consejero del parlamento de París desde 1636, efectuó una edición de las obras póstumas de Cujas: *Iacobii Cuiacii ... operum postumorum, quae de iure reliquit...*, 4 vols., París, 1617. Véase J. Fr. Michaud, *Biographie universelle ancienne et moderne*, 45 vols., Graz, 1966, VIII, p. 646.

⁶³ Pierre Halley (1606-1689), *Institutionum canonicarum libri quatuor. Opus ad praesentem ecclesiae Gallicanae usum accommodatum. Studio ac*

caso, había de quedar claro que el derecho y la costumbre de Francia prevalecían sobre cualquier otro ordenamiento. Además de las obras mencionadas, también podían ser útiles los *Lexicones* de Kahl —profesor en Heidelberg—⁶⁴ y de Schard —profesor en Basilea—⁶⁵. Del primero se efectuaron varias reediciones, al apreciarse la amplitud de su objeto —derechos canónico, romano y feudal— y la exactitud de sus definiciones⁶⁶.

Como afirmaba Doujat, Polycarpe Sengeber fijó algunas reglas para el estudio de la Instituta⁶⁷. Este catedrático de la universidad de Angers sostenía que, inmediatamente después de la lección, el maestro debía aclarar los términos del texto explicado. Los alumnos, por su parte, habían de esforzarse por memorizar las definiciones —*definitionem, quae totius materiae summam semper exhibebit*—. A la primera lectura, siempre atenta y con un examen escrupuloso de las cuestiones más destacadas, seguiría una segun-

opera Petri Hallaei, París, 1685.

Doctor en derecho por la universidad de Caen, Halley fue nombrado en 1654 doctor regente de la universidad de París y profesor del *collège royal*. Véase M.-A. Lemasne-Desjobert, *La Faculté de Droit...*, p. 61; también J. F. von Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, 3 tomos, Graz, 1956, III, pp. 612-613.

⁶⁴ Johannes Kahl, *Calvinus* (†1614), *Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici, feudalis item, civilis criminalis, theoretici ac practici, et in schola et in foro usitatarum*, Fráncfort, 1600. Véase J. Fr. Michaud, *Biographie universelle...*, VI, p. 441.

⁶⁵ Simon Schard (1535-1573), *Lexicon iuridicum iuris romani et pontifici*, Basilea, 1582.

Este jurista alemán seguidor de las ideas de Lutero enseñó en la universidad de Basilea, siendo nombrado en 1566 asesor de la cámara imperial de Speyer. Sus intereses intelectuales se centraron en la historia del derecho alemán y el derecho canónico, materia a la que pertenece su *De iurisdictione, auctoritate et praerogativa imperiali ac potestate ecclesiastica, variorum authorum scripta*, Basilea, 1566. Véase R. Naz (dir.), *Dictionnaire de droit canonique...*, VII, pp. 884-885 y V. Piano Mortari, *Itinera juris...*, p. 233.

⁶⁶ J. Fr. Michaud, *Biographie universelle...*, VI, p. 441.

⁶⁷ Polycarpe Sengeber, *Institutionum imperialium synopsis perpetuis tabulis exhibita*, Rennes, 1619. Véase G. Meerman, *Novus thesaurus iuris civilis et canonici*, 7 vols., La Haya, 1751-1753, III, pp. 369-396 y *Conspec-*

da. Finalmente, un tercer repaso podría contar con el apoyo de alguno de los *Lexicones* citados, al objeto de resolver las dudas de mayor entidad.

Durante el segundo y tercer cursos, el catedrático efectuaría una lectura detallada de los cánones y de las leyes, mientras que los alumnos centrarían su atención en lo que aquél fuese dictando a la búsqueda de relaciones de semejanza o diferencia. En este estadio de la formación académica, importaba más que se advirtiesen las dudas que no su resolución. Era preferible que el futuro canonista supiese por qué vacilaba, conociese los motivos de su inquietud; en ello se reconocía en grado máximo el progreso del estudiante. A su vez, no había que sorprenderse si el catedrático no respondía de forma inmediata al interrogante que se le planteaba en el aula. Como afirma nuestro autor, también dudaban Scaevola, Ulpiano o Papiniano, y otro tanto les sucedía a Cujas⁶⁸, Maran⁶⁹ o Lacoste⁷⁰.

tus novi thesauri iuris civilis et canonici, La Haya, 1751, p. 75.

⁶⁸ En la orientación jurídica de Jacques Cujas (1522-1590) se pueden apreciar algunos de los rasgos que después hará suyos el propio Doujat: un buen conocimiento filológico e histórico de las fuentes jurídicas del pasado, sin por ello desatender la explicación lógica de su contenido. Así mismo, Cujas subrayó en *Recitationes in II et IV libros decretalium*, obra editada en Speyer, en 1594, la estrecha afinidad existente entre los derechos canónico y romano. Véase V. Piano Mortari, *Cinquecento giuridico francese. Lineamenti generali*, Napoli, 1990, pp. 358-365.

⁶⁹ La actividad jurídica de Guillaume Maran (1549-1621) se desarrolló en la universidad de Toulouse. En su afán de evidenciar la derivaciones políticas de la obra jurídica de François Hotman, escribió sus *Discours politiques de l'establissement et conservation des loix et de la justice contre les moqueries et cavillatios de l'Antitribonian déguisé et des sectateurs*, editados en 1621. En ellos, Maran exaltaba el valor del derecho romano, al que consideraba un firme soporte del catolicismo y del régimen monárquico. Véase V. Piano Mortari, *Cinquecento giuridico francese...*, pp. 389-390; así mismo H. Gilles, *Université de Toulouse & enseignement du droit, XIII ème - XVI ème siècles*, Toulouse-París, 1992, pp. 295-298 y 310-312.

⁷⁰ Discípulo de Cujas, Jean de Lacoste (1560-1638) fue catedrático de la universidad de Toulouse entre 1599 y 1630, año en que se retiró a Cahors. Sus *Institutionum, sive Elementorum... libri quatuor... ex editione Iacobi Cuiacii*, París 1659, vienen a ser unas notas explicativas a las principales dificultades que presenta la Instituta. También compuso unos *Commentaria in decretales*, París, 1676. Jean d'Avezan, discípulo suyo y profe-

Todos ellos, al deliberar con sus alumnos, tenían la costumbre de responder, no inmediatamente sino al cabo de unos días tras una adecuada meditación.

En cuanto a la consulta de obras jurídicas, convenía centrarse en las escritas por los mejores intérpretes. Ya había señalado Boëtius Epo que era inmenso el número de autores que sin ningún escrúpulo se plagiaban los unos a los otros⁷¹. Y hasta tal punto era así que podía afirmarse que quien había visto uno los había visto todos. La concisión y la claridad con las que el Ostiense había redactado la *Summa Aurea* recomendaban su lectura⁷². También cabía acudir a los comentarios redactados por el Panormitano⁷³ y Bohic⁷⁴, quienes habían seguido en su exégesis el orden de los títulos y capítulos de las decretales. Especialmente útil resultaba el Panormitano, quien no había olvidado referirse a «antiguos escritores», como Inocencio IV⁷⁵ o Giovanni d'Andrea⁷⁶. Así mismo, las decretales pontificias podían estudiarse a través de las obras de canonistas más recientes. Tal era el caso de Le Gauffre, vice-canciller de la universidad de Caen⁷⁷, y Ciron, canciller de la universidad de Toulouse⁷⁸; de

sor en Angers, publicó en 1637 un *Elogium Iani a Costa, iurisconsulti doctissimi et celeberrimi*. Sobre Lacoste, véase H. Gilles, *Université de Toulouse...*, pp. 278-279; así mismo L. G. Michaud, *Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire par ordre alphabetique de la vie publique et privée de tous les hommes qui sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes*, París, 1811-1853, XXIII, p. 61.

⁷¹ Boëtius Epo, *Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum Libri VI. De iure sacro vel principiorum iuris pontificii libri III*, 3 vols., Douai, 1588, libro segundo, números 86 ss.

⁷² Henricus de Segusio (†1271), cardenal de Ostia, *Summa aurea*, Turín, 1579.

⁷³ Niccolò Tudeschi, (1386-1445), obispo de Palermo, *Commentaria varia super decretales*, Perugia, 6 vols., 1509.

⁷⁴ Henri Bohic (1310-c.1350), *In quinque decretalium libros commentaria*, Venecia, 1576.

⁷⁵ Inocencio IV (1200-1254), *Apparatus super libros decretalium*, Venecia, 1481.

⁷⁶ Giovanni d'Andrea (1270-1348), *Liber sextus decretalium*, Mainz, 1465.

⁷⁷ Ambroise Le Gauffre (1568-1635), *Synopsis decretalium seu ad singulos antiquarum decretalium titulos methodica omnium utriusque iuris mutationum distinctio*, París, 1643.

Hauteserre⁷⁹, también catedrático en Toulouse y comentarista de las decretales de Inocencio III; de Fagnani⁸⁰ y del catedrático salmantino González Téllez⁸¹, comentaristas ambos de gran parte de la colección gregoriana. Además, podían consultarse los tratados de autores que se habían adentrado en otros ámbitos del derecho canónico, como Azpilcueta —quien obtuvo los grados de licenciado y doctor en cánones en Toulouse—⁸², Covarrubias —discípulo

Le Gauffre estuvo algún tiempo estudiando en Lovaina con el humanista belga Juste Lipse (1547-1606). De regreso a Francia, ingresó en el estado eclesiástico y obtuvo una cátedra de derecho canónico en la universidad de Caen. El obispo de Bayeux lo nombró vice-canciller de la universidad de Caen, vicario general de la diócesis y canónigo de la catedral. Fue diputado por Normandía en los Estados Generales de 1614. Las lecciones que dictó durante veinte años las puso en orden su sobrino Hubert-François, *maitre des comptes* de París, publicadas con el título de *Synopsis decretalium*. Véase J. Fr. Michaud, *Biographie universelle...*, XXIII, p. 609.

⁷⁸ Innocent Ciron (†1650), *Paratitla in quinque libros decretalium Gregorii IX*, Toulouse, 1645.

⁷⁹ Antoine Dadin de Hauteserre (1602-1682), *Innocentius III, pontifex maximus, seu Commentarius perpetuus in singulas decretales huiusce pontificis quae per libros V decretalium sparsae sunt*, París, 1666.

Hauteserre obtuvo en 1644 una cátedra en Toulouse. Se dedicó al derecho canónico y a la historia de Francia, de la que demostró poseer una vasta erudición, así como un buen conocimiento de los primeros siglos de la monarquía. Entre sus obras podemos citar: *De origine et statu feudorum pro moribus Galliae, liber singularis*, París, 1619; *De ducibus et comitibus provincialibus Galliae, libri tres*, Toulouse, 1643; *Rerum Aquitanicarum libri quinque*, Toulouse, 1648; *Dissertationum iuris canonici libri quatuor*, Toulouse, 1651; *Libri quintus et sextus*, Toulouse, 1654; y, en fin, *In libros clementinarum commentarii; accessere sex praelectiones habitae pro instaurandis scholis*, París, 1680.

⁸⁰ Prospero Fagnani (1588-1678), *Commentaria in quinque libros decretalium*, 7 vols., Roma, 1661. Este canonista asumió durante años la secretaría de diversas congregaciones de la curia romana. Su comentario a las decretales lo inició por encargo del papa Alejandro VII y contenía, tanto el derecho canónico antiguo, como las novedades jurídicas introducidas por las constituciones papales. Véase L. G. Michaud, *Biographie universelle...*, XIV, p. 98.

⁸¹ Manuel González Téllez (†1649), *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX*, 5 vols., Lyon, 1673.

⁸² De entre las obras de derecho canónico escritas en latín por Martín de Azpilcueta (1492-1586), podemos citar: *Tractatus de redditibus beneficio-*

de André Alciat—⁸³, Douaren⁸⁴, Choppin⁸⁵, Cujas o Florent⁸⁶. Por otro lado, no cabía obviar a los tratadistas de materia beneficial.

rum ecclesiasticorum, Roma, 1568; *Commentarius de spoliis clericorum*, Roma, 1572; y *Enchiridion sive Manuale confessoriorum et poenitentium*, Roma, 1573 —tal vez la más conocida y editada—. Sobre este autor, véase S. de Dios, «La doctrina sobre el poder del príncipe en Martín de Azpilcueta», en S. de Dios, J. Infante y E. Torijano (coords.), *El derecho y los juristas en Salamanca (siglos XVI-XX). En memoria de Francisco Tomás y Valiente*, Salamanca, 2004, 461-565.

⁸³ Diego de Covarrubias (1512-1577), *Opera omnia, multo quam prius emendatiora...*, 2 vols., Lyon, 1574.

⁸⁴ El conocimiento de los escritores de la antigüedad, el sentido de la historia, el gusto literario, la capacidad de crítica de las fuentes, el deseo de publicar nuevas ediciones para así restituirlas al texto auténtico y originario fueron algunos de los rasgos característicos de la obra de François Douaren (1509-1559). Así mismo, la insistencia en la necesidad de hacer más simple el estudio del derecho, de enseñar en primer lugar los principios de valor general y, en fin, de disponer los conocimientos de un modo lógico y ordenado. En *De sacris Ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri VIII... item pro libertate Ecclesiae Gallicae adversus Romanam aulam defensio Parisiensis curiae Ludovico XI, Gallorum regi*, editada en 1550, demostró su condición de escritor lógico y ordenado. Véase V. Piano Mortari, *Cinquecento giuridico francese...*, pp. 252-259.

⁸⁵ Después de haber ejercido durante algún tiempo en el parlamento de París, René Choppin (1537-1606) se retiró del foro y se dedicó a la redacción de sus obras. El latín fue la única lengua que utilizó en sus escritos, que fueron compilados en seis volúmenes y traducidos al francés por Jean Tournet en 1663. Dotado de un juicio sólido y de una enorme memoria, logró con su esfuerzo una vasta erudición y una doctrina profunda. No obstante, descuidó por completo su estilo, por lo que sus libros adolecían de unos giros afectados y de unos vocablos anticuados y difíciles de entender. Entre sus obras, podemos citar: *De privilegiis rusticorum libri III*, París, 1575; *De sacra politia forensi libri III*, París, 1577; *De legibus Andium municipalibus libri III*, París, 1581; *Tractatus de privilegiis quatuor clarissimorum iureconsultorum: Renati Choppini De privilegiis rusticorum, Horatii Lutii De privilegiis scholarium, And. Tiraquelli De privilegiis piae causae, Cornelii Benincasii De privilegiis paupertatis*, Colonia, 1582; *De dominio Franciae libri III*, París, 1588; *De civilibus parisiorum moribus ac institutis libri III*, París, 1596; *Monasticon seu De iure coenobitarum libri duo*, París, 1601. Véase J. Fr. Michaud, *Biographie universelle...*, VIII, p. 199.

⁸⁶ *Dissertationes De lege dioecessana, De exemptionibus religiosorum, De praescriptionibus, De interruptionibus praescriptionum, De antiquo statu*

Rebuffi, profesor en Montpellier, Toulouse, Cahors, Bourges y París, se halló entre los canonistas franceses comprometidos con la consecución de los fines políticos de la monarquía. A su modo de ver, no existían límites jurídicos al ejercicio de la soberanía regia, solamente ordenada mediante deberes de índole ético-política⁸⁷. Por su parte, Du Moulin, quien había sido abogado del parlamento de París y docente en Tubinga, descolló por su ardiente animadversión hacia el universalismo romano, tanto en su acepción religiosa como jurídica. La sumisión del clero a las leyes regias en el terreno de lo temporal no admitía discusión alguna⁸⁸. Antoine Bengi, catedrático en Bourges⁸⁹, había escrito un tratado sobre los beneficios eclesiásticos de cariz galicano⁹⁰. También Wamesius redactó unos *consilia* sobre esta cuestión⁹¹.

religiosorum in Gallia..., [s.l.], 1630; *Dissertationes selectarum iuris canonici libri II, quibus subiicitur commentarius ad titulum De vita et honestate clericorum*, París, 1632; *Disputatio de nuptiis consobrinarum prohibitis aut permissis...*, París, 1636.

⁸⁷ Pierre Rebuffi (1487-1557), *Responsa et consilia... quibus de variis materiis in iure incidentibus, praecipue vero de materia beneficali consultus, omnibus ex facto prudentissime respondit*, Lyon, 1587. Sobre este autor, véase V. Piano Mortari, *Cinquecento giuridico francese...*, p. 264; y H. A. Lloyd, «Constitutional thought in Sixteenth-Century France: the case of Pierre Rebuffi», *French History*, 8:3 (1994), 259-275.

⁸⁸ Charles du Moulin (1500-1566), *Omnia quae extant opera*, París, 5 vols., 1681.

El interés de Charles du Moulin por el derecho canónico se manifestó en su edición del *corpus iuris canonici*, impresa en Lyon en 1554, en la que se evidenciaba su cultura humanista. Concebía a la Iglesia Católica como la principal responsable de las alteraciones de los textos canónicos primitivos, de aquí su opción por la filología y la historia. Véase V. Piano Mortari, *Cinquecento giuridico francese...*, pp. 270-276.

⁸⁹ Antoine Bengi (1569-1616) sucedió en 1595 a Jacques Cujas en su cátedra de Bourges. Su hija contrajo matrimonio con François Pinsson, profesor en la misma universidad. Bengi inició la redacción de su *Tractatus de beneficiis*, que editó su nieto François Pinsson (1612-1691), abogado en el parlamento de París. Véase L. G. Michaud, *Biographie universelle...*, IV, p. 161.

⁹⁰ *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis ex definitione desumptus, ad usum fori gallici et libertatum ecclesiae gallicanae accommodatus*, París, 1654. Véase J. F. von Schulte, *Die Geschichte der Quellen...*, III, pp. 580-581 y 611-612.

Por último, Doujat recomendaba el comentario de Dupuy al libro de Pierre Pithou (1539-1596) *Les libertés de l'église gallicane*⁹². Editado en 1594 contra la Liga y en favor de Enrique IV, en este tratado se condensaban las principales ideas del galicanismo. El interés por la literatura antigua, el derecho romano y el derecho francés; el anhelo por una Francia libre de cualquier tutela papal; la consideración del monarca como símbolo de una nación que debía avanzar hacia la unificación política, administrativa y jurídica; la preocupación por la reconstrucción histórica de las instituciones de la monarquía francesa son rasgos que definieron el quehacer jurídico de Pithou⁹³.

5. *Las obligaciones de los catedráticos*

Sostenía Doujat que los catedráticos debían esforzarse por acaparar una vasta erudición, que podrían obtener de la historia y de las obras de los comentaristas. Sólo así el profesor hallaría un terreno firme sobre el que realizar sus *praelectiones* diarias y estimular la curiosidad de sus alumnos. Por otro lado, éstos no debían ser enseñados a través de epítomes, compendios o resúmenes, sino acudiendo a las propias fuentes jurídicas —los cánones, las decretales, las leyes—. Ya un siglo antes lo había escrito Boëtius Epo en el capítulo segundo de su *De iure sacro*. Éste era el mejor modo de discernir los preceptos verdaderos de los falsos y —lo que no era menos importante— los recibidos en el reino de los caídos en desuso. Así mismo, puesto que el estudio del *Corpus iuris* no podía ser completo —lo que hubiera sido deseable, si bien los tres años del plan de estudios no lo permitía— se imponían la síntesis, el orden y la didáctica. Sólo en aquellas cuestiones de mayor uso o de más intensa dificultad se añadiría una más cuidadosa y detenida interpretación. ¿Cómo había de ser ésta? El propio Doujat lo señala. Planteada una hipótesis, se concilian las antinomias y se refutan

⁹¹ Ioannes Wamesius (1524-1590), *Responsorum sive consiliorum de iure pontificio...*, 5 vols., Lovaina, 1641-1646. Véase J. F. von Schulte, *Die Geschichte der Quellen...*, III, p. 684.

⁹² Pierre Dupuy, Puteanus (1582-1651), *Commentaire sur le traité des libertés de l'église gallicane de maistre Pierre Pithou*, París, 1652.

⁹³ Véase V. Piano Mortari, *Cinquecento giuridico francese...*, pp. 376-379.

los contrarios. A su vez, se disciernen las cuestiones de que se trata principalmente y sus circunstancias. También se comparan las disposiciones del derecho común con las leyes y costumbres vigentes en Francia, al objeto de que el estudiante perciba la evolución histórica del derecho en uso. Formados de este modo, los alumnos aplicados podrían ir resolviendo las dificultades que sus maestros les planteasen.

* * *

Jean Doujat, en línea con los postulados del *mos gallicus* o humanismo jurídico, enriqueció su formación jurídica —romana y canónica— con su dedicación a la filología y a la historia. También los intereses políticos de la monarquía francesa fueron objeto de su quehacer intelectual, lo que le permitió formar parte de las principales instituciones culturales de Francia durante *le siècle de Louis XIV*.

En las *Praenotiones* comparecen algunas notas que merecen ser destacadas: el afán por la precisión y la claridad; la voluntad de ofrecer una visión de conjunto, compendiada, de toda la materia canónica; el uso de la crítica histórica en el tratamiento de cuestiones canónicas; la armonización de los derechos civil y canónico; la primacía del derecho francés; y, en fin, su condición de manual para uso escolar.

La preocupación por la enseñanza del derecho ha de enmarcarse en las coordenadas del tiempo histórico en que Doujat escribió las *Praenotiones*. La legitimación jurídico-política de carácter tradicional iba cediendo terreno en favor de otra fundada en la razón humana, de la misma manera que la ascensión de las monarquías europeas otorgaba primacía al derecho particular en detrimento del universalismo medieval. Una formación que, pese a la enormidad del *ius commune*, proporcionase un orden, una síntesis basada en la razón.

En la visión científica de Doujat, se puede entrever una cierta componente ecléctica. Y así, junto a los comentaristas de la edad clásica del derecho canónico, se recomienda el estudio de otros más modernos. Entre éstos, unos se habían destacado por su aproximación histórica a lo jurídico; otros —principalmente los centrados en la materia beneficial— por su adhesión a los criterios regios frente a Roma.

La reordenación —el orden de nuevo, aspecto clave en una época de *crisis de la conciencia*— de las instituciones francesas afectó a la formación universitaria. Se reforzaba la dimensión institucional de la enseñanza, en detrimento de la personal. La instrucción privada debía ceder su protagonismo a las aulas de la universidad.

Ramon Aznar i Garcia
Universidad Carlos III de Madrid

APÉNDICE

Jean Doujat.—*Praenotionum canonicarum libri quinque: quibus sacri iuris, atque universi studii ecclesiastici principia, & adminicula enucleantur.*/ Exarabat Ioannes Doujat... .—Venetiis: ex typographia Balleoniana, 1762.—XVI, 558 p.; 4°.—Marca tipográfica en portada.—Encuadernación en cartón.

PRAEFATIO AD LECTOREM

I. IN OPERE QUOVIS PRAEPARATIONE OPUS

Nec terrae femina committunt agricolae, nisi eius gremio ante mollito sulcis atque subacto; nec pictores tabulis suis vividos & mansuros colores imponunt, nisi praevio quodam pigmento prius imbutis, quo velut solo universa pictura sustineatur: nec ars omnino ulla reperitur, cuius opera vel minimum duratura diligenti praeparatione non indigeant. Sic sua iudiciis, sua itineribus praeparatoria sunt; aut omnibus, ut verius dicam, humanis actionibus, quarum nulla statim & sine cura perfici potest.

II. PRAESERTIM IN DISCIPLINIS

Hoc autem, cum in reliquis rebus, tum maxime in scientiis adipiscendis evidens est; quae cum nobis natura non insint, non sine magna cultura, nec nisi gradatim proveniunt: ideoque *praecognitis* quaeque suis, non secus ac fundamentis nituntur. Ut enim Aristoteles recte observat, atque inductione comprobat (In princip. analyt. cor. poster), *doctrina omnis, omnisque disciplina, quae intelligentia & meditatione constat, ex antecedente sit cognitione*. Est sane prior cognitio ad posteriorem velut gradus, donec ad culmen (si quod modo in humanis, ac praesertim in disciplinis culmen est) perveniatur.

III. IDEO PRAECOGNITA EARUM TRADENDA

Cum ergo ars nulla difficultatibus suis careat, danda est opera, ut ad superandos earum, ut ita dicam, labyrinthos, aliqua eis recti itineris certo cognoscendi, atque instituendi adiumenta, instar Ariadnaei staminis futura, comparentur. Itaque sicut in aedificiis fundamentum, sine quo nec parietes, nec conclavia stare, nec tecta possunt: ita in arte quavis pars praecipua est cognitio principiorum, quae & ipsa idcirco fundamenta dicuntur. Duo autem sunt principiorum genera: alterum dogmata & regulas cuiusque disciplinae, sive axiomata certum in ordinem redacta complectitur: alterum in

PRÓLOGO

I. LA TAREA PREVIA

Los agricultores no encargan tareas agrícolas a la mujer, a no ser que antes el interior de los surcos esté removido y suave. Los pintores no aplican a sus tablas colores ni vivos ni muy apagados a no ser que antes estén empapadas de pigmento, que por así decirlo sostenga las pinturas. No se concibe un arte cuyas obras duraderas no tengan necesidad como mínimo de una minuciosa preparación. De este modo, sus obras están mejor preparadas en los criterios, en los proyectos o, a decir verdad, en todas las actividades humanas, de las que nada puede concluirse en un momento y sin dedicación.

II. SOBRE TODO EN LOS ESTUDIOS

Esto es evidente, no sólo en los demás asuntos, sino sobre todo en el dominio de las ciencias, las que no tenemos por naturaleza, sino que se desarrollan con gran esfuerzo y poco a poco. Y por esto, Aristóteles, al referirse a las cuestiones previamente conocidas (en los *Analíticos segundos*), no se apoya sino en fundamentos como observa de modo correcto y demuestra inductivamente: «Toda enseñanza y todo aprendizaje por el pensamiento se producen a partir de un conocimiento preexistente»¹. Es, pues, conveniente ser llevado primero al conocimiento y en un estadio posterior hasta la cima (a condición de que el culmen sea en los asuntos de los hombres y sobre todo en las disciplinas).

III. DEBEN ENSEÑARSE POR ELLO SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS

Puesto que ningún arte carece de dificultades, a las obras les está permitido, a fin de superar sus laberintos y conocer y disponer de algunos auxilios para un camino ciertamente recto, oponer la importancia del hilo de Ariadna. Y de la misma manera que no se pueden alzar las paredes, las habitaciones o los techos sin el fundamento de los edificios, tratándose de un arte cualquiera, el conocimiento de los prin-

¹ Aristóteles, *Tratados de lógica...*, II, p. 313.

praecognitis consistit, id est in notionibus causarum ipsius artis. Hoc posterius in iure pontificio nondum quisquam plene ac perfecte tractavit.

IV. ID TENTARUNT IN IURE CANONICO VIRI DOCTI: SED MINUS PLENE

Nec me latet simile quid utraque in iurisprudencia, a nonnullis tentatum fuisse. Et quidem post alios, nostra & superiori aetate in iure ecclesiastico Boetius praesertim Epo (libris trib. de iure sacro), Antonius Augustinus Societatis Iesu (in censura de quibusdam veteribus canonum collectionibus), ac denique Franciscus Florens, Parisiensis simul & Aurelianensis Academiae decus, amicus quondam noster atque in antecessorio munere decessor (in canonicis dissertationibus & in limine tractatum ad 9 primos decretal. tit.), egregium eius instituti specimen ediderunt. Sed ut ad illustrandum hocce ius, praeclara multa, non sine summa sua laude hi viri eximii contulerint, quae & aliqua iam rerum sacrarum cognitione imbutis sufficiant: satis uberem nobis adhuc messem reliquerunt; suoque exemplo alios potius adhortari ad plenius quid proferendum, & in hoc stadio post se currentibus lampadem tradidisse videri possint, quam absoluto numeris omnibus opere, incipientium desideria prorsus explevisse.

V. HAEC SUSCIPiENDI HUIUS OPERIS CAUSA: & QUIS NOBIS IN EO SCOPUS PROPOSITUS

His ego causis iamdiu adductus, in animum induxi ut iuris canonici fundamenta, generaliaque principia ad examen revocanda, eiusque tironibus, paulo accuratius praemonstrandum ad eius penetralia iter susciperem. Neque enim doctis scribere, nec difficili arduarum quaestionum tractatione, gloriam hic aucupari animus fuit, (quae tenuis admodum ex eo sperari posset, quod laboris magis sit, quam aut exquisitae eruditionis, aut eximiae alicuius solertiae). Iuniorum profectui consultum ivi; & nondum gnaris, sacrorum studiorum viam aperire, aut laevigare decrevi. In id quippe maxime incumbendum professoribus semper censui, quod audi-

cipios, que son llamados por ello fundamentos, es un deber primordial. Existen dos clases de principios: uno expresa los dogmas y reglas de todo aprendizaje, o sea, axiomas reducidos a un cierto orden; otro consiste en introducciones, en nociones de las causas de un arte en concreto. Sobre esta segunda materia y en el ámbito del derecho pontificio, todavía nadie ha trabajado plena y perfectamente.

IV. HOMBRES DOCTOS LO INTENTARON EN EL DERECHO CANÓNICO, PERO DE MODO MENOS PLENO

Del mismo modo, no se me esconde que ha habido algún intento tratándose de la jurisprudencia. Entre otros, en nuestra época y los años previos, en el ámbito del derecho eclesiástico, sobre todo Boëtius Epo, de la Compañía de Jesús; Antonio Agustín (en la censura de unas antiguas colecciones de cánones); así como François Florent, gloria de la universidad de París y de la de Orleans, en el pasado nuestro amigo y predecesor en la cátedra (en disertaciones sobre los cánones y al comienzo del tratado sobre los 9 primeros títulos de las decretales)², pusieron de manifiesto de modo excelente su designio. Estos hombres eximios, buenos conocedores de los asuntos sacros, con el fin de ilustrar este derecho y así completar de alguna manera su comprensión, reunieron con la mayor fortuna muchas cosas excelentes. Nos dejaron una todavía abundante cosecha y con su ejemplo exhortaron a otros a avanzar más y mejor, como quien corre en un estadio dedicando todas sus fuerzas y entrega a otro el testigo, colmando enteramente sus deseos iniciales.

V. EL PORQUÉ DE ESTA OBRA Y EL OBJETIVO QUE ME HE PROPUESTO CON ELLA

Impelido por estas causas, hace tiempo que me decidí a examinar los fundamentos y los principios generales del derecho canónico, y

² F. Florent, *Dissertationes de lege dioeclesana, de exemptionibus religiosorum, de praescriptionibus, de interruptionibus praescriptionum, de antiquo statu religiosorum in Gallia...*, París, 1630; así como a *Tractatus IX in IX priores titulos libri I. Decretalium Gregorii IX, quibus praefixa est accurata dissertatio de methodo et auctoritate Gratiani et reliquorum post Gratianum collectorum decretalium*, París, 1641.

toribus quam utilissimum noverint: nihil autem visum mihi utilius, quam ut quod me ipsum, cum ad disciplinas huiusmodi animum appellerem, iuvisset promptum paratumque habere, id ipse aliis pararem: collectis nempe ac digestis iis quorum cognitio in toto artis decursu necessaria est: Certe quae nullo duce, nullo ordine, sed prout usus fert, magno & caeco, ut ita dicam, labore pervoluantis voluminibus ignotis, per mille errorum ambages saepenumero frustra quaeruntur; nec nisi per diuturni temporis iacturam sigillatim percipi solent: quis non maxime commodum esse videt, ea ex sexcentis diversi generis auctoribus sedulo conquisita, collecta, & certo ordine ac methodo digesta paucos intra menses perdiscere, & in promptu habere, quo identidem recurrere liceat, si quid eorum quae quis didicerat, exciderit? Non minus profecto de studiosis merentur similium auctores operum, quam de viatoribus, quibus per vasta sylvarum agendum iter est, ii quorum opera locorum, vel opacus horror excisis densiorum arborum ramis, in apertam vertitur lucem; vel sublatis senticetis, ac salebris, asperitas laevigatur; vel complanatis tumultis, rupibusque, pervia ex inviis fiunt; per quos denique additis ad trivium mercuriis, quo trames quisque ducat, indicatur.

VI. QUAE IN HOC OPERE CONTINEANTUR

Ut autem perspicuum cuique statim fiat, quid *praenotionum* titulo in hoc volumine intelligamus, percurrenda paucis tota eius materia est. In eo itaque historice & critice, brevitate solida, referuntur sequentia, & pleraque discutiuntur.

Primo omnium *utriusque foederis librorum*, ordo, nomina, auctores, tempora, rerum summa, auctoritas, & variae sacri operis versiones atque editiones.

asumí la tarea de mostrar a los principiantes los misterios del camino. Y así, no estuvo en mi ánimo, ni escribir para doctos, ni acechar la gloria con el difícil manejo de cuestiones arduas (bien poca se puede esperar del trabajo, de la erudición exquisita o del ingenio privilegiado). Ayudé e hice progresar la reflexión de los jóvenes aún legos y luché por abrir y por alisar la senda de los estudios sagrados. Siempre consideré que incumbía a los profesores en grado máximo que esto fuese conocido por los estudiantes como utilísimo. Nada de lo que he visto me parece más útil, para dirigir el ánimo hacia las disciplinas, que disponerme a ayudar a otros a que tengan esto mismo a punto. Ciertamente, el conocimiento de las colecciones y de sus partes es necesario para el ejercicio de un arte. Sin embargo, sin guía ni orden, sino como enseña la práctica, con un trabajo, por así decirlo, enorme e impreciso, se indagan a menudo inútilmente recorriendo de modo apresurado volúmenes desconocidos a través de un sinnúmero de circunlocuciones erróneas. Aquéllas no se suelen comprender sino por medio de la pérdida de mucho tiempo aisladamente. ¿Quién no ve de la máxima utilidad aprender bien, en pocos meses y ordenadamente, las colecciones y obras sistemáticas de diverso género de seiscientos autores, recogidas cuidadosamente, y tenerlas al alcance de la mano para que se puedan consultar siempre si quien las hubiese estudiado se hubiese olvidado de ellas? Los autores de semejantes obras merecen tanto de los ansiosos de progresos como el que se ha ido de su país de los caminantes que viajan por la inmensidad de los bosques. Gracias a ellos, podadas las ramas de los frondosos árboles, el tenebroso horror deviene en claridad y se alivia la dureza de los zarzales y de las escabrosidades; allanadas las colinas y los peñascos, éstos se hacen accesibles; y en fin, aumentados los mercurios³ en las encrucijadas, se indica adónde conduce cada senda.

VI. LAS MATERIAS QUE CONTIENE ESTA OBRA

Tan pronto como nos ha sido evidente, lo que conocemos en este volumen con el título de *praenotiones* se explica en pocas palabras.

³ *Mercurius-ii*: «Rollo o montón de piedras en los caminos, donde cada pasajero echaba la suya en honor de Mercurio», en V. Salvá, *Nuevo Valbuena o Diccionario latino-español, formado sobre el de don Manuel Valbuena, con muchos aumentos, correcciones y mejoras*, 4ª ed., Valencia, 1840, p. 509.

Secundo *conciliorum*, tum generalium, tum particularium, ex quibus a collectoribus desumpti sunt canones, anni, causae, numerus episcoporum & canonum, atque auctoritas.

Tertio *pontificiorum* decretorum ac decretalium, (quarum dubiae sigillatim discutuntur) fides ac vis.

Quarto *Sanctorum Patrum* graecorum, latinorumque opera, unde a collectoribus canonum decerptae sunt sententiae, & singulorum veritas aut falsitas expensa.

Quinto volumina *iuris romanii & francii*, aliaque opera indicata, quibus usi sunt collectores.

Sexto *collectiones* cuiusvis generis *canonum*, graecae & latinae, veteres ac recentiores, editae, non editae, exactius & fusius quam hactenus factum sit, examinatae.

Septimo commentatores & clari *interpretes* canonum, tum graeci, tum latini, & cuiusque opera.

Octavo *historiae, chronologiae, & geographiae ecclesiasticae* autores graeci ac latini.

Ultimo iuris canonici *finis & usus*, praeter alia, quae plenius ostendet sequens librorum & capitum index. ordinis rationem in clarum diagramma contractam, proxima dabit tabella.

In appendice, tum alia, tum *provinciarum ecclesiasticarum* notitia relata ad tempus Gregorii Magni, *patriarcarum* orientis series; monasticorum ac regularium *ordinum* & congregationum origo.

VII. QUI EIUSDEM OPERIS FRUCTUS

Ex his omnibus rei cuiusque initium & progressum, omnemque totius iuris canonici rationem atque concentum eximium perspicienti cuique, maxima lux toto disciplinae decursu orietur; & studentium tempori (cuius solius laudanda est parsimonia) mirum in modum consulatur: tum multis aliis de causis, tum eo in primis,

En él se refieren histórica y críticamente y con sólida brevedad, y se discuten la mayor parte de las consecuencias.

Primero, el orden, los nombres, los autores, los acontecimientos, la suma de cuestiones y la autoridad de los libros de una y otra alianza, así como las diversas versiones y ediciones de la obra sagrada.

Segundo, los cánones, las fechas, las causas de los concilios, tanto generales como particulares, seleccionados de entre aquéllos por los coleccionistas, así como la lista de obispos y la autoridad de los cánones.

Tercero, la veracidad y la vigencia de los decretos y de las decretales de los pontífices (cuyas dudas son resueltas una por una).

Cuarto, las obras de los santos padres griegos y latinos, donde los decretos de los cánones son recogidos, y la verdad o falsedad de cada uno de ellos es considerada por los coleccionistas.

Quinto, los volúmenes de derecho romano y francés, y otras obras publicadas usadas por los coleccionistas.

Sexto, las colecciones de cualquier tipo de cánones, griegas y latinas, antiguas y modernas, editadas e inéditas, examinadas de un modo más preciso y más amplio que el que se ha hecho hasta hoy.

Séptimo, los célebres comentadores e intérpretes de cánones, así griegos, como latinos, y sus obras.

Octavo, los autores griegos y latinos de historia, cronología y geografía eclesiásticas.

Por último, el objeto y la utilidad del derecho canónico, al que sigue un completo índice de los libros y capítulos. Inmediatamente, un cuadro da en una clara explicación abreviada un esquema del orden de la obra.

En el apéndice, entre otras cosas, la noticia de las provincias eclesiásticas narrada en tiempos de Gregorio Magno, la serie de los patriarcas de oriente, así como el origen de los órdenes de monasterios y de las congregaciones de regulares.

VII. EL FRUTO DE ESTA OBRA

La máxima luz de todo el decurso de la disciplina se alzará de todas estas cosas y para este asunto y para el que conoce el inicio, el progreso, toda la causa, así como la armonía perfecta de todo el derecho canónico. Para la época de los estudiantes (en la que sólo se alaba la moderación) será considerada maravillosamente. Todas

quod quae de eodem, exempli causa, concilio, pontifice, sive auctore alio canonis cuiusque, repetenda toties essent, quoties inter explicandam hanc vel illam iuris partem, in canonem, epistolam, sententiamve alicuius e patribus incideremus, aut eorum quomodocumque mentio fieret, ea omnia semel ac certo ordine absoluta erunt.

Caeterum si quid forte imprudenti mihi alicubi exciderit, quod aut catholicae fidei, aut debito S. Apostolicae Romanae Sedis honori, aliquatenus adversari, vel certis ac receptis ecclesiae regnive gallici iuribus, detrahare videatur: id ego nec dictum, ne scriptum volo.

estas cuestiones son concluidas de una vez y con un orden preciso, entre muchas otras causas, porque, por ejemplo, de un concilio, de un pontífice o del autor de algún canon se repiten y se explican esta o aquella parte del derecho, o de la misma manera se hace mención del canon, la epístola o la sentencia abordados por alguno de los padres del modo que sea.

Por lo demás, si por casualidad, en alguna parte me hubiese convertido en un ignorante, que parezca cercenar la obligación que debo a la fe católica o la reverencia a la Santa Sede Apostólica Romana, o hasta cierto punto me opusiese abierta o encubiertamente a los derechos de la iglesia del reino de Francia, que quede claro que eso no he querido decirlo ni escribirlo.

LIBER QUINTUS

CAPUT XXI

DE METHODO DISCENDI DOCENDIQUE IURIS CANONICI

I. ARS NULLA SINE APTO INGENIO AC SINE INDUSTRIA ACQUIRI POTEST

Non e quovis ligno fieri mercurium, nec cuiusvis esse Corinthum appellere, veteribus graecorum fertur adagiis. Haec cum ad uniuscuiusque disciplinae studiosos accommodari possint, quarum nulla est quae non propriam quandam ad perdiscenda exercendaque artis praecepta indolem desideret: in canonum praesertim ac legum scientia valere fatendum est. Frustra itaque tam necessariam Ecclesiae regnoque disciplinam appetierit infeliciter natus, ac genio destitutus: frustra praestanti naturae confidat ignavus atque alienus a studio, sine cuius, ut ita dicam, aculeis torpet natura; nec quantumcumque praeclara, exurgit nunquam ad grandia.

II. UTILIUS IN SCHOLIS QUAM DOMI ADDISCI IURISPRUDENTIAM

Ilud primum pro certo est habendum, quod in Grammaticas & Rhetorica probavit Quintilianus *lib. I. inst. Orat. c. 2.* has disciplinas in schola, quam domi melius tradi ac percipi; id in iurisprudentiae studio maxime obtinere. Quod agnoscet quisquis meminerit & eam in publico fori lumine esse exercendam, & nullam esse artem, quae voce magistra magis indigeat, aut cuius dogmata, exceptionibus & replicationibus involuta, accuratorem repetitionem, exercitationesque alias desiderent. Huiusmodi autem exercitamenta, ut mutuo plurium conflictu peraguntur, in umbra domestica frigidiora, longe aliter in scholarum luce per aemulationem incalescunt. His innutriti, quotidiano usu & familiari labore id facile consequuntur, ut sive ad adipiscendos per examina publica gradus academicos, sive ad causas etiam in foro, ubi opus fuerit, orandas longe paratiores accedant: nec laborent in exprimendis quae didicerint; aut, ut intra privatos penates institutis contingere quotidie videmus, pro recto fluidoque sermone, balbutiem reddant.

LIBRO QUINTO

CAPÍTULO XXI

SOBRE EL MÉTODO DE APRENDER Y ENSEÑAR DERECHO CANÓNICO

I. NO SE PUEDE ADQUIRIR NINGÚN ARTE SIN TALENTO NI TRABAJO

Cuentan los viejos proverbios de los griegos que no se alza un mercurio con madera, ni es posible para cualquiera llegar a Corinto⁴. Aunque estos adagios pudiesen ser aplicados a los estudiantes de cada disciplina, las que demandan la propia inclinación para aprender bien y para ejercitar los preceptos del arte, debe reconocerse que ésta prevalece principalmente en la ciencia de los cánones y de las leyes. De este modo, el desdichado y carente de ingenio en vano apetece una disciplina tan necesaria a la Iglesia como al reino; el ignorante y mal estudiante en vano confía en la naturaleza, puesto que, sin los estímulos de la disciplina, la naturaleza, por así decirlo, se enerva y por muy brillante que sea nunca se alza hasta lo más alto.

II. ES MÁS PROVECHOSO APRENDER LA JURISPRUDENCIA EN LAS AULAS QUE EN CASA

En primer lugar, tenemos por cierto, como demostró Quintiliano refiriéndose a las gramáticas y a la retórica, en el libro I, capítulo 2 de la *Institutio oratoria*, que se estudia y se comprende mejor en la escuela que en casa. Lo mismo sucede con el estudio de la jurisprudencia si se quiere obtener el éxito. Esto lo reconocerá cualquiera que recuerde que, para ejercerla con esplendor en el foro, no hay mejor arte que la sentencia del maestro, cuya repetición cuidada y demás ejercicios, con excepciones y réplicas, atenúan la máxima confusa. De este modo y a través de los ejercicios de muchos, los estudiantes son conducidos al conflicto de unos con otros, excitán-

⁴ Este proverbio hace referencia al carácter inexpugnable de la antigua Corinto, acrópolis situada estratégicamente en el istmo que separa los mares Mediterráneo y Egeo, y que dominaba el paso de la Grecia continental a la península del Peloponeso. Véase I. Errandorena (dir.), *Diccionario del mundo clásico*, 2 vols., Barcelona, 1954, I, p. 457.

III. DILUUNTUR ARGUMENTA QUAE CONTRA SCHOLASTICUM STUDIUM IACTARI SOLENT

Scio antiquam esse parentum querelam, in scholarum frequentia corrumpi saepenumero adolescentium mores; nec posse doctorem unum, quantumcumque idoneum, tot auditoribus perdocendis vacare: addunt etiam si maxime posset, non tamen eo silentio audiri, ut cunctis liceat speratum ex eius sermonibus fructum capere. Priora illa non seculi nostri, sed omnium temporum incommoda, & vidit, & petita ex illis argumenta solidioribus iamdiu rationibus refellit eximius ille eloquentiae magister, loco paulo ante laudato. Ostendit non minus domi a pedissequorum, aliorumve familiarium malis plerumque moribus, periculum corruptelae adolescentibus imminere. Quin & ab ipsis parentibus non raro teneram ad prava impelli naturam, dum exemplis, blanditiisve suis vitia, vel sua instillant, vel aliunde ingesta fovere non erubescunt: quae per domesticam indulgentiam depravati iuvenes in scholas afferunt potius, quam e scholis accipiunt. Suggestit & patrum locupletiorum iusto metui remedium, si probum & fidelem lateri filiorum suorum testem & quasi arbitrum adiunxerint; cuius affiduus comitatus, ut eleganter ait idem Quintilianus, etiam illos meliores faciat qui timebantur. Publico autem professori addi nihil prohibet domesticum studiorum adiutorem, qui hinc moribus invigilet, inde doctorum dictata exponat iterum, ac totius pensi scholastici rationem, ubi reddiderit, exigat: ne scilicet cognitio ulla necessaria intellectum discipuli fugiat, aut memoriam. Sed quibus huiusmodi deerunt adiumenta (si modo nec genius, nec attentio deficit) sufficiet procul dubio seduli doctoris officium. Vox enim e suggestu dicentis, ut ad omnes qui adsunt perfertur, ita per eam, velut per commune aliquod lumen,

dose por emulación, al calor de las lecciones, muy diversamente de lo que sucedería al abrigo de la languidez doméstica. Mediante estos ejercicios, logran fácilmente, por medio de la práctica diaria y del trabajo en casa, o alcanzar los grados académicos a través de los exámenes públicos, o defender causas en el foro, donde los más preparados consiguen hacer un buen trabajo. Y no vemos que les cueste, ni expresar lo que han aprendido, ni comprender en casa las enseñanzas, sino que día a día transforman su tartamudeo en un discurso bueno y fluido.

III. LOS ARGUMENTOS QUE SE SUELEN ADUCIR CONTRA EL ESTUDIO ESCOLÁSTICO SON REFUTADOS

Conozco el antiguo lamento de los padres de que a menudo las costumbres de los adolescentes son corrompidas por su asiduidad a las aulas; que un doctor, por muy digno que sea, no puede faltar a su deber docente; añaden que, aun cuando no pueda ser perfectamente oído a causa de este silencio, no obstante es lícito obtener de todas sus conversaciones el provecho esperado. Aquel eximio maestro de elocuencia, no de nuestro siglo, sino de todos los tiempos, otrora poco alabado en su país, advirtió con sólidas razones aquellos primeros inconvenientes, pretensiones y argumentos. Mostró cómo en casa, generalmente a causa de las malas costumbres, tanto de los lacayos como de otros sirvientes, a los adolescentes no les afecta menos el peligro de corrupción. No pocas veces he sido empujado hacia algo desordenado por aquellos parientes, quienes no se avergüenzan de fomentar y además inculcan con sus acciones y lisonjas los vicios escondidos, tanto suyos como de los demás. Vicios que, debido a la indulgencia doméstica, antes portan los jóvenes ya corrompidos a las escuelas que los hallan en ellas. La solución a este justo temor de los padres opulentos pasa por que contraten a un testigo de sus hijos, honrado y fiel, como si fuese un juez; cuyo continuo acompañamiento, según dice Quintiliano elegantemente, les haga mejores a través del temor. Efectivamente, nada impide agregar al profesor común un ayudante particular de estudios, que vigile el modo de vida de los jóvenes, explique por segunda vez las lecciones de los maestros, pida cuentas de toda la labor escolástica, y por supuesto no rehúse ningún conocimiento necesario para la inteligencia o la memoria del discípulo. No obstante, no necesitan auxi-

omnes simul erudiri & quasi illustrari possunt. Auditoris quoque unius interrogatio & responsio, non ipsi magis, quam caeteris prodest. disputationum etiam, quae per vices ita instituuntur, ut quibuslibet volentibus pateant, non intra solos respondentes atque arguentes stabit utilitas, ad cunctos auscultantes pertinet.

Verum plerique sunt, quibus horum nihil proficit, fateor. Sed ii scilicet, qui vagandi quam discendi studiosiores, scholam quam a se frequentari apud suos mentiuntur, nunquam aut raro admodum adeunt, & vix a limine salutant: vel si qui limen subeunt, scamna vexare contenti, ac semper aut nihil, aut aliud agentes, studii, quod nullum adhibuere, non alium referunt fructum, quam male per oscitantiam, aut imperitiam exceptas mutilorum commentariorum schedas: vel qui denique id tantum strenue agunt, ut nugaci loquacitate, aut stolido strepitu probent assiduitatem suam.

IV. NEC AUDITORUM STUDIOSORUM PROFECTUI ADMODUM OBEST PAUCORUM IN SCHOLIS PROTERVIA

Verum inter haec paucorum petulantium murmura, complures (quicumque nimirum non alienis criminationibus, sed vero pretio, propriaque experientia studia publica aestimantes, docentium sedulitatem attentione ac labore suo accurate sequuntur) non alio quam antecessorum in scholis ductu atque adiumento eam sibi peritiam infra praescripta tempora compararunt, & quotannis comparant, ut quotidie in publicis experimentis facile appareat (quicquid contra invidorum temeritas effutiat) eos ex limpidis legum & canonum fontibus, non ex faece ac rivulis hausta, in succum & sanguinem vertisse; nec psittacorum instar, aliena parum intellecta, sed sua ex proprio iecore responsa depromere.

lios de esta clase (a condición de que no falte la atención ni el genio) aquellos a quienes les baste la tarea del doctor diligente. Éste, al hablar desde un lugar elevado para que la voz llegue a los presentes, posibilita que a través de ella, como ocurre con la luz, todos puedan ser educados y en cierto modo iluminados. La pregunta y la respuesta a un oyente le resulta tan útil como a los demás. El provecho de las discusiones, establecidas de modo alternativo para que accedan todos aquellos que lo deseen, no afectará solamente a los que responden y a los que arguyen, sino que se extenderá a todos los que oyen con atención.

A decir verdad, a la mayoría ninguna de aquéllas les es de provecho. Pero, evidentemente, los que prefieren perder el tiempo antes que aprender, mienten a sus familiares diciéndoles que van normalmente a clase, cuando no acuden nunca o raras veces, limitándose a saludar desde la puerta. O si se acercan al aula, siempre ocupados en maltratar sus bancos de estudio, o no haciendo nada, no obtienen más resultado que la demostración de cuánto mal se deriva de los apuntes obtenidos de comentarios incompletos, bien por indolencia, bien por impericia. O en fin, quienes, para demostrar su asiduidad, actúan con locuacidad de tonto o con ruido necio.

IV. EN ABSOLUTO LA PRESENCIA EN LAS AULAS DE POCOS DISCÍPULOS ESTUDIOSOS ES UN OBSTÁCULO AL PROGRESO

Verdaderamente, en medio del descaro de unos pocos y de estos rumores, muchos (todos aquellos que en efecto valoren los estudios públicos, sin atender a las protestas de los demás, por su verdadero mérito y su propia experiencia, y sigan con atención y con su trabajo la aplicación de los profesores) adquirieron y adquieren todos los años esta erudición, en las circunstancias mencionadas, sin otro auxilio de los catedráticos que el obtenido en las aulas. De este modo, durante los ejercicios públicos, les es fácil (la ligereza de los envidiosos habla sin consideración contra cualquiera) encaminarse a la sustancia de las leyes y de los cánones, desde unas fuentes límpidas y no desde la suciedad bebida de los arroyos. Y pueden, a diferencia de los papagayos que comprenden poco lo ajeno, extraer de sí mismos sus propias respuestas.

V. E STATUTIS SCHOLAE PARISIENSIS PETI POSSUNT VERAE STUDII IURIDICI REGULAE

Vindicato a calumniis & falsis hominum opinionibus publico scholarum studio, ad rem propositam veniendum est. Quae iurisprudentiam discentis, quae docentis partes sint, non aliunde melius meo iudicio cognosci potest, quam ex scholae nostrae iuridicae legibus, quas Henrici magni regis auctoritate viri sapientissimi scripserunt. Sequentia sane illarum capita, velut ex Tripode pronunciata; praecepta mihi videntur, *Auditores sacrorum Ecclesiae canonum in primis catholicam & avitam religionem sincere amplectantur. Ad hoc studium nullus accedat, qui non in humanioribus primum artibus, & disciplinis philosophicis probe versatus sit, ac linguarum graecae & latinae cognitionem habeat. Prolyta a lectione & auditione Institutio-num & canonici & civili iuris studium exordiat, ac sedulam operam in eo colloget, ut utriusque iuris titulos memoriter teneat. Dictata doctorum fideliter excipiat: Doctorem in suggestu docentem non perturbet: veste deformi, militari chlamyde, aut varii coloris toga non utatur; sed honesta & gravi, pro status & ordinis ratione. A die admissionis in hoc totus incumbat, ut ordinarias & extraordinarias antecessorum lectiones audiat, & fideliter excipiat, disputationibusque publicis intersit.*

VI. QUANTUS EX HIS, SECUNDUM EDICTI REGII LEGES & TEMPORA OBSERVATIS, FRUCTUS EXPECTANDUS.

Si ergo iuris cupidus adolescens ingenio ac literis, ut par est, instructus, nec labori, nec tempori parcere velut, id intra praestitutum edicto regio triennium haud difficile assequetur, ut non modo quamplurima & maxime necessaria principia, totamque disciplinae nostrae rationem apprime teneat; sed etiamsi quid memoriam effugerit, sive quid in scholis satis percipere non licuerit, cognitis cuiusque rei sedibus atque interpretibus per seipsum perdiscere queat; & in vasto iurisprudentiae, ut ita dicam, pelago sine cortice natere: in quo sane maximum huiusce studii fructum versari norunt periti.

V. PUEDEN SER APROXIMADOS A LA VERDADERA REGLA DEL ESTUDIO JURÍDICO POR MEDIO DE LOS ESTATUTOS ESCOLÁSTICOS DE PARÍS

Sólo cuando el estudio público de los estudiantes se halla libre de las calumnias y de las falsas opiniones de los hombres, se alcanza el propósito marcado. Que no es otro que el aprendizaje y la enseñanza de la jurisprudencia y sus partes, que en mi opinión puede ser mejor conocida a partir de las leyes de nuestras escuelas jurídicas, y que redactaron hombres sabios por mandato del gran rey Enrique⁵. Verdaderamente, las conclusiones que se deducen de aquéllas me parecen, por así decirlo, como los mandatos pronunciados por Apolo desde su oráculo: «Que los estudiantes de sagrados cánones de la Iglesia se consagren sinceramente a la antigua religión católica. Que a este estudio no acceda quien antes no esté perfectamente versado en artes humanas y en disciplinas filosóficas, y tenga conocimientos de las lenguas griega y latina. Que se inicie el aprendizaje del derecho canónico y civil con la lectura y la audición de las instituciones, y se ponga en ello todo el afán, para que quien haya estudiado leyes durante cinco años se acuerde de los títulos de ambos derechos. Que reciba las palabras de los doctores con fidelidad, no moleste al catedrático durante su explicación, ni use ropa vulgar, capa militar o toga de varios colores, sino otra honesta y grave acorde con su estado y orden. Que desde el día de su admisión se consagre por entero a esto, oiga y reciba fielmente las lecciones de los catedráticos, tanto las ordinarias, como las extraordinarias, y en fin participe de las discusiones públicas».

VI. CUÁNTO FRUTO CABE ESPERAR DE LA OBSERVANCIA DE ESTAS COSAS, SEGÚN LAS LEYES Y PLAZOS DEL EDCITO REGIO

El adolescente, ansioso de talento y de cultura como conviene y enseñado a no malgastar ni el trabajo ni el tiempo, lograría fácilmente en el plazo de tres años establecido por el edicto regio apprehender los muchísimos, sobre todo los necesarios, principios del

⁵ Enrique IV se proclamó cabeza de la Universidad de París y la reformó con unos estatutos que se promulgaron el 18 de septiembre de 1600. El monarca quiso así que la universidad atendiese a los intereses del Estado. Véase M. Mousnier, *Parigi capitale...*, pp. 75-76.

VII. DE ANNO STUDII PRIMO

Inchoandum quidem a principiis utriusque iuris, quibus elementa scientiae in epitomen redacta continentur (institutiones ferme vocant) iaci enim fundamenta opus est, ut firmum imponi aedificium possit. Noscendus ab initio partium ac librorum, quibus constat universum iuris corpus, itemque distinctionum, causarum, quaestionum, ac titulorum seu rubricarum ordo, ordinisque ratio: Auctores canonum ac decretalium cognoscendi; assuescendum vocibus ac loquendi, scribendi, citandique formulis artis canonicae propriis; quae cuncta ex hoc nostro volumine, vel ex breviori iuris canonici Gallice scripta historia patebunt. Sed his adiicienda axiomata generalia, & materiarum principia sive regulae cum praecipuis exceptionibus: Aggredienda etiam aliquatenus nonnullorum, quae prima fonte sibi invicem adversari videntur, conciliatio.

Haec vero non aliis plene proficient, quam qui, uti iam dictum est, sedula & saepius repetita meditatione addiscent quotidianas praelectiones; quos de difficultatibus, quae subinde occurrent, doctorem suum publice, privatimve, consulere non pigebit; ac denique qui hebdomadarias repetitionum, prop[on]endorumque dubiorum exercitationes certatim obibunt. Nam qui laboris taedio, nimiae ingenii fiducia, vel spe alienae operae atque opis in tertium annum, aut etiam, in postremum trimestre, studia differunt sua: hi non perpetuo profuturam scientiae reperiunt margaritam (ut Innocentius III loquitur) sed levissimae & futilis ac mox evanescentis doctrinae, quasi adulterinorum lapillorum, furtiva nundinatione, seque suosque decipiunt; saepe etiam pro male quaesito per cruda, vel simulata potius studia honore, sibi iustissimae repulsae dedecus parant. Pauci quippe sunt qui Ciceronis exemplo se triduo iurisconsultos futuros profiteri possint: nec rudis tunc Cicero erat, cum haec iactaret; sed a Mucio Scaevola, praestantissimisque aliis sui seculi iurisconsultis iamdiu institutus.

derecho y todo el plan de nuestra disciplina. Además sería capaz de conseguir por sí mismo un buen conocimiento de todo ello, en los tribunales y a través de los comentadores conocidos, aunque le fallase la memoria o no le hubiese sido posible aprender suficientemente en las aulas. Los peritos que se han dedicado a ello saben perfectamente cuán provechoso es este estudio: es como nadar sin corcho en el inmenso piélago de la jurisprudencia.

VII. DEL PRIMER AÑO DE ESTUDIO

De la misma manera que para alzar un edificio sólido es necesario establecer los fundamentos, tratándose de uno y otro derecho debe hacerse partiendo de los principios, en los que se contienen resumidamente los elementos comprimidos de la ciencia (por lo común llamados instituciones). Para conocer desde el principio el orden de las partes y de los libros de que consta todo el *corpus iuris*, así como el motivo de su ordenación en distinciones, causas, *quaestiones* y títulos o rúbricas. Para conocer a los autores de cánones y de decretales. Para enseñar a hablar, escribir y citar con fórmulas y voces propias del arte canónico. Todas estas cosas juntas se ofrecen en este volumen nuestro, o sea, la más breve historia escrita de derecho canónico de Francia. También para enriquecer los principios generales con las excepciones particulares a la regla, así como para refutar de raíz los motivos de aquellos que parecen oponerse a que la conciliación sea el primer fundamento de uno y otro derecho.

En verdad, estos otros no avanzan tanto como quienes, como ya se ha dicho, enriquecen a menudo las *praelectiones* diarias con una reflexión diligente y dotada de autoridad; responden en seguida a las dificultades que su profesor les plantea en público y en privado; y en fin asisten con empeño a los ejercicios semanales de repeticiones y de dudas que se les proponen. Así, quienes posponen sus estudios al tercer año, o incluso al último trimestre, por aversión al trabajo o excesiva confianza en el propio ingenio o en la labor y ayuda de los demás, no hallan la perla que siempre es útil a la ciencia (como dijo Inocencio III). Antes bien, se engañan a sí mismos y a los suyos con una doctrina de poca importancia, vana y condenada a desaparecer pronto, como ocurre con el comercio clandestino de piedras preciosas falsas. O a menudo se procuran, a través de unos estudios inacabados o simulados, en vez de un no merecido honor,

Caeterum melius consulti discipuli, qui antecessores quotidiana diligentia subsequi, & per eos in iure proficere volent, hi, si me audient, primo studiorum anno, Institutionum quae praelegentur, textui, & scriptis quae ad eas enarrandas publice tradi mos est, paucorum admodum interpretum libros adiungent. Huiusmodi fuerint, hinc ad Iustiniani Elementa *Theophili* antecessoris Paraphrasis, Arnoldi *Vinni* breviores Notae, & methodi ac memoriae causa V. Cl. Claudii *Colombeti* Synoptica Institutionum Descriptio: inde ad Institutiones Iuris Canonici, per Lancelottum, alterumve eius generis scriptorem compositas, Notae forsitan nostrae, cum Cl. collegae Petri Hallaei Canonici Institutionibus. Exteri enim, quae gallici iuris morisve, & apud nos praeter ius commune usui sunt, praetermittunt.

His tamen aliisve similibus adiici omnino velim utriusque *Iuris Corpus*, quo quaerendis legibus & canonibus, quibus ad confirmandas identidem sententias suas doctores utuntur, insuescant ab ipso initio tirones. Usui quoque esse poterit *Lexicon* iuridicum Calvini aut Schardii. Qui plures addiderit autores, is laborem augendo, minuit profectum ; Sed nec nimis anxie sub initia insudandum dubiis quaestionibus agitandis, nisi si quae ex ipso contextu, quasi ad manum, occurrent. Hae quippe disputationes imbutum iam certis iuris principiis animum desiderant.

VIII. OBSERVANDA IN STUDIO A TIRONIBUS INSTITUENDO

Non pigebit specialiores aliquot, & ni fallor, perutiles studii recte & commode instituendi regulas, discipulis post Polycarpum *sengeberum*, eiusque verbis hoc loco subiicere.

la vergüenza de la justísima repulsa. Pues pocos son los futuros jurisconsultos que, siguiendo el ejemplo de Cicerón, pueden enseñarse en tres días⁶. Cicerón, al jactarse de ello, no era un ignorante, sino que ya por aquel entonces lo afirmaban Mucio Scaevola y otros eminentísimos jurisconsultos de la época.

Por lo demás, los discípulos aplicados que desean seguir mejor a sus maestros, con diligencia diaria, y pretenden hacer progresos en el estudio del derecho, si quieren creerme, que añadan al texto de las instituciones, que, como es costumbre, se comentan y se interpretan en público durante el primer año de estudios, los libros de muy pocos intérpretes. Éstos pueden ser, tratándose del derecho civil, la *Paráfrasis* a los elementos de Justiniano del maestro Teófilo; las notas breves de Vinnen; o, para ejercitar el método y la memoria, la *Descripción sinóptica de las instituciones* del preclaro Colombet. Y, tratándose del derecho canónico, las *instituciones de derecho canónico* compuestas por Lancellotti u otro escritor de esta clase. Quizá las *Notas a las instituciones canónicas* de nuestro preclaro colega Pierre Halley, porque los extranjeros se olvidan del derecho y de la costumbre de Francia que entre nosotros prevalecen al derecho común.

No obstante, quisiera que los principiantes se acostumbraen desde el comienzo a que el cuerpo del derecho común sea completado con todo aquello de que los doctores se sirven continuamente para confirmar sus opiniones, buscando entre estas u otras leyes y cánones semejantes. Podrá ser de utilidad el *Lexicon iuridicum* de Calvinus o el de Schard. Quien, acrecentando su trabajo, habrá añadido muchos autores, retrasa su avance, pues se esfuerza demasiado desde el principio en considerar cuestiones dudosas, excepto si se hacen evidentes a partir del propio contexto. Sin duda, estas controversias requieren ya de un espíritu imbuido de precisos fundamentos del derecho.

VIII. LO QUE EN SU ESTUDIO DEBEN OBSERVAR LOS PRINCIPIANTES

No lamentaré el esfuerzo de establecer justa y convenientemente algunas reglas útiles para los discípulos, después de que Polycarpe Sengeber las sometiese a juicio en esta cuestión.

⁶ Véase Cic., *Pro. Mur.*, 13, 28.

1. Perlegatur textus proxime praelectionibus illustrandus, idque in hunc finem ut videant ubi illis aqua haereat, notentque diligentius quae minus intellexerint: ita enim sciendi desiderium homini alias naturale, eo magis excitabunt, & intellectus eo avidius hauriet, rapietque in se desiderata antea, firmitusque memoria retinebit.

2. Definitionem, quae totius materiae summam semper exhibebit, (adde & ex ea divisiones) memoriae mandare non graventur: tunc enim reliquum vel semel lectum, quasi ad suos locos relatum, facillime memoriae haerebit.

3. Scripta non defunctorie perlegant, & loca laudata, bona fide inquirant; atque ita secunda vice Institutionum textum simul percurrant.

4. Tandem post lecta scripta, tertia vice textum ordine perlegant, exploraturi utrum iam scriptis adiuti sint, & ecquid forte dubii adhuc restet, vel obscuri, quod particulari informatione eximendum.

IX. DE SECUNDI AC TERTII ANNI STUDIO & GRADIBUS ACADEMICIS

Haec vero canonum legumque accurata lectio, & cum dictatis collatio, titulos ex corpore iuris secundo anno ab antecessoribus accipientium non minimum erit officium. Nec ultra huius anni secundi metas prorogandum primi gradus academici tempus, quem baccalaureatum vocant: tum quia ea mens, ea lex est edicti regii; tum quia etiamsi id nulla lege praeciperetur, baccalaureatus tamen simul & licentiatu gradibus rite consequendis, vix sufficere unius tertii anni spatium potest. Utrumque facile mereri poterunt, qui, uti iam diximus, in schola praelectionibus & exercitationibus assiduitate debita operam dederint; nec in iis quae publice audierint, domi deinde privatim recolendis cessaverint. Sic quae prius dura & prope insuperabilia videbantur, ea mediocri, sed continuo magis quam difficili labore quasi laevigata, nullo negotio comprehenduntur. Quod non eo pertinet, ut his studiose observatis difficultates omnes tollantur & evanescant: imo ita comparata sunt studia nostra, ut quo plus quisque diligentiae in his adhibet, eo magis difficultatibus plena esse pervideat; adeo ut in nullo haerere, cuncta obvia putare, certissi-

1. Inmediatamente después de las explicaciones, debe aclararse el texto que se ha leído, al objeto de que comprendan dónde se estanca el agua y señalen con más cuidado aquellas que menos hubiesen comprendido. De este modo, los conocimientos que antes la memoria obtendrá, llevará consigo y conservará, estimularán después el mayor, más intenso y firme deseo natural al hombre de conocer.

2. No se nieguen a memorizar la definición, que siempre mostrará el resumen de toda la materia (añádanse las divisiones que provienen de ella). Lo aprendido quedará fácilmente en la memoria, casi en sus precisos términos, ya en la primera lectura, ya en las demás.

3. No lean los escritos ligeramente, examinen de buena fe las cuestiones más destacadas y, al mismo tiempo, repasen por segunda vez el texto de las instituciones.

4. Finalmente, una vez leídos los escritos, lean por tercera vez el texto con orden. Y, para liberar de la duda o de la oscuridad con información particular lo que se resista con fuerza, vayan a examinar en seguida alguno de los dos escritos de ayuda.

IX. DEL ESTUDIO DEL SEGUNDO Y TERCER AÑO Y DE LOS GRADOS ACADÉMICOS

Durante el segundo año, la cuidadosa explicación de los cánones y de las leyes, y la comparación con los textos dictados por los catedráticos no será poca tarea para aprender los títulos del *corpus iuris*. Así no se prolonga la duración de este segundo año del primer grado académico, que llaman bachillerato. Además, puede bastar un periodo de apenas un tercer año para lograr al mismo tiempo el bachillerato y la licenciatura, bien porque ésta es la intención del edicto regio, bien porque, aunque no haya sido ordenado por ninguna ley, es conforme con las normas de los grados. El bachillerato y la licenciatura bien podrán corresponder a quienes, como ya dijimos, en la universidad, se habrán dedicado con la debida asiduidad al trabajo de las *praelectiones* y de los ejercicios, que habrán escuchado en público y, después, en casa, no habrán cesado de practicar privadamente. De este modo, las tareas que antes parecían difíciles y casi insuperables serán comprendidas sin dificultad y minuciosamente, más a través de un pequeño pero continuo esfuerzo, que mediante

num sit, aut indiligentis, aut hebetis indicium. In eo itaque maxime agnoscitur studentis progressus; si multum dubitet, sed cur dubitet norit, & dubitationum ac scrupulorum suorum causas reddere possit. Eximendis autem his difficultatibus, a magistris subsidia petenda erunt: sive ab antecessoribus, doctoribusque aliis, sive ab interpretum commentariis. Nec verendum ne professori taedium afferat frequens interrogatio. Existimare enim oportet amanti officium suum doctori, nihil esse iucundius, quam si a solerti discipulo difficultates novae proponantur, quas forte, ne ipse quidem magister animadverterit. Nullum quippe maius in auditore sedulitatis est argumentum. Sed nec ipsi auditori mirum aut turpe videri debet, si quando in respondendo iure haerentem viderit doctorem suum. Haerebant prisci etiam Scaevolae, Ulpiani, Papiniani. Haerebant Cuiacius, Maranus, Acosta: ideoque consulentibus aut interrogantibus auditoribus, etiam cum facillima proponerent, nunquam statim, sed post alterum tertiumve diem respondere soliti erant.

X. PAUCIS INTERPRETIBUS UTENDUM

Interpretibus autem non multis, sed selectis utendum etiam progredienti. Ut enim vere nimium observat Boetius Epo li. secundo de iure sacro, num. 86 & sequentibus, immenso interpretum numero, vel potius turba, laborat utraque legislatio, aliorum alios, nulla plagii religione, diripientum, & priora scripta plerumque sine delectur, saepe etiam ne mutatis quidem verbis, ac nec correctis falsis allegationibus, exscribentium: ita ut, qui unum aliquem è posterioribus viderit, omnes vidisse dici possit. Provectis ergo sufficient cum glossa, ex prioribus quidem interpretibus *Hostiensis* in summa, in qua tituli cuiusque materiam ad certa capita, certo ordine redigit; & cum *Boicho*, *Panormitanus*, qui positarum sub singulis titulis decretalium seu capitulorum ordinem in commentariis suis sequuntur. Licet enim Panormitanus, prae caeteris, in alienis lucubrationibus ad verbum describendis artifex maximus, ab Epone aliisque, fuisse dicatur: tamen hoc ipso utilior plerisque aliis erit Innocentii IV, Hostiensis, Ioannis Andreae aliisque veterum iis etiam quorum opera

una labor ardua. Advertidas las dificultades cuidadosamente, no conviene que en este tercer curso se supriman y disipen todas. En efecto, nuestros estudios están dispuestos de modo que cada uno se sirva de ellas y descubra cuán llenos de diligencia están. En esto es reconocido en grado máximo el progreso del estudiante; pues, aunque dude mucho, habrá conocido por qué duda y puede extraer las causas de sus vacilaciones e inquietudes. Pero, para librarse de estas dificultades, deberán buscar ayuda en los maestros, en los catedráticos u otros doctores, o en los comentarios de intérpretes, sin que la pregunta frecuente al profesor haga temer el fastidio. Téngase en cuenta que, para que un doctor estime su oficio, no hay nada más agradable que la proposición de nuevas dificultades por un discípulo ingenioso, a las que el mismo maestro no habrá prestado atención; no hay mayor prueba de aplicación en un discípulo, quien no debe considerar asombroso o vergonzoso si habrá visto a su doctor al responder en derecho quedarse quieto dudando. También dudaban los antiguos Scaevola, Ulpiano, Papiniano. Dudaban Cujas, Maran, Lacoste; porque, al deliberar y preguntar a sus discípulos, estaban acostumbrados a no responder al instante sino al segundo o tercer día.

X. DEBEN EMPLEARSE POCOS INTÉRPRETES

Para hacer progresos se deben emplear no muchos intérpretes sino los mejores. Como bien señala Boëtius Epo, en el libro segundo *De iure sacro*, números 86 y siguientes, una y otra legislación se esfuerzan por que del inmenso número, o mejor, confusión de intérpretes, que se roban los mejores escritos los unos a los otros, y que con frecuencia se copian sin ningún escrúpulo de plagio, sin ni siquiera discernir las metáforas, las alegaciones corregidas o falsas, pueda ser dicho que quien habrá visto uno cualquiera los habrá visto todos. Así pues, a los más avanzados les bastará con el comentario que el Ostiense hizo en su *Summa* desde los primeros intérpretes, en la que reduce la materia de este título a unas ciertas ideas fundamentales con un orden claro. También con el Panormitano o con Bohic, quienes siguen en sus comentarios a cada título de las decretales el orden de los capítulos. No hay inconveniente en que se diga, por Epo y otros, que el Panormitano sea el principal maestro en copiar palabra por palabra los trabajos de los demás. Por esto

interciderunt quae libuit excerptis atque in sua transtulit. Ex posteriorum autem numero Ambrosius *le Gaufre*, & *Cironius* in Paratitlis Decretalium, Antonius Dadinus *Altaserra*, *Fagnanus*, & Emanuel *Gonzales Telles*, in commentariis, ille ad Innocentii III hi ad omnes fere gregorianae collectionis decretales. His addi poterunt cum fructu qui per partes aut tractatus, sive sub aliis titulis ius canonicum exposuerunt & illustrarunt, Navarrus, Covarruvias, & praedicti Cuaiacius, Florens: Duarenus quoque, Choppinus & si qui eius generis alii. Adiungendi forum ingressis autores rei beneficiariae praecipui, Rebuffus, Molineus, & et cum Bengo Pinssonius: atque ex iis qui consilia sive consultationes ediderunt Wamesius. Nec omittendi apud nos qui de libertatibus Ecclesiae Gallicanae, post Petrum Pithaeum scripsit Petrus Puteanus, nec collectores senatusconsultorum quorum non pauca de rebus ecclesiasticis lata praeiudiciorum loco.

XI. DE OFFICIO ANTECESSORUM IN DOCENDO

Antecessoribus, in quibus doctrina requiritur, plura quoque & maiora eruditionis subsidia necessaria sunt, quae sibi ex memoratorum superioribus capitibus interpretum, aliorumque auctorum operibus adsciscere cuique licebit. Eorum quoque erga auditores officium ex iam dictis facile colligi potest. Id in recte ac diligenter implendo quotidianarum praelectionum munere, & in excitandis per cuncta scholasticarum exercitationum genera discipulis, maxime positum esse nemo non videt. Illud in primis observandum, quod in iam dictorum statutorum nostrorum appendice art. 14 caveatur: *Non liceat scholae doctoribus ordinariis docere, nisi ex praescripto legum scholae, non frustulatim, aut per epitomas, spicilegia quaedam minuta canonum fingere, & auditores eo astu vel inescare incautos, vel ludificare.* Neque enim iam per compendia (qua via ad scientiae culmen nunquam pervenitur) provectiores docendi sunt auditores; sed ad ipsos fontes deducendi, ipsos canones, decretales ipsas cum affinibus cuique legibus, accurate exponere oportet. Mihique valde probatur quod ait Boetius Epo lib. de iure sacro cap. secundo: sibi

mismo será más útil a otros muchos, puesto que apreció, seleccionó y trasladó a su trabajo lo que a unos y otros se les olvidó de Inocencio IV, del Ostiense, de Giovanni d'Andrea y de los antiguos escritores. Vienen después Ambroise Le Gauffre y Ciron en las *Paratitlas* de las decretales, así como Antoine Dadin de Hauteserre, Fagnani y Manuel González Téllez, en los comentarios, aquél a las decretales de Inocencio III, éstos a la mayoría de la colección gregoriana. Pueden ser añadidos quienes con provecho interpretaron y aclararon el derecho canónico, en otros títulos, bien por partes, bien a través de tratados: Azpilcueta, Covarrubias y los mencionados Cujas y Florent, también Douaren, Choppin y aquellos otros de su género. Deben añadirse los más destacados autores de materia beneficial, juristas en el foro: Rebuffi, Du Moulin, Bengi con Pinsson, así como Wamesius, quienes publicaron *consilia* y *consultationes* sobre esas cuestiones. No debe omitirse a Pierre Dupuy, quien entre nosotros después de Pierre Pithou, escribió sobre las libertades de la Iglesia de Francia. Tampoco a los recopiladores de senadoconsultos, cuyos ejemplos en este asunto de las cuestiones eclesiásticas no son pocos sino abundantes.

XI. ACERCA DEL DEBER DE LOS CATEDRÁTICOS

La sabiduría es buscada con afán por los maestros, en quienes son indispensables más y mayores refuerzos de erudición, que podrá obtenerse a partir de los capítulos más eminentes de los historiadores y de las obras de los intérpretes y de otros autores. De los que así mismo fácilmente puede ser deducido, por las razones ya apuntadas, el deber para con los alumnos. Todos lo ven completamente asentado para realizar correcta y diligentemente el deber de las *praelectiones* diarias y para estimular a los estudiantes por medio de todo género de ejercicios escolásticos. Debe observarse principalmente aquello que ya se previene en el artículo 14 del apéndice de nuestros mencionados estatutos: «No se permita enseñar en la universidad a los simples doctores, de no mediar orden expresa de las leyes de la universidad, ni educar a los alumnos por medio de epítomes, por decirlo así, insustanciales espigues de cánones, y seducir o engañar a los incautos con este ardid». Así pues, los alumnos más avanzados no deben ser enseñados por medio de compendios (por esta vía jamás se ha alcanzado la cima de la ciencia); sino con-

semper summam fuisse religionem pontificium ius nullum aliunde quam suis ex fontibus interpretari: quam religionem successoribus in hoc professionis genere suis atque adeo toti posteritati summe commendat. Sic sane vera a falsis, obsoleta a receptis distinguuntur. Et optandum quidem esset ut nihil intactum relinqueretur, totum Iuris Corpus a capite ad calcem, explicando percurri posset. Verum quia nec discipulorum impatientia, nec ultra modum festinantium parentum vota, id fieri permittunt ; & maximi regis providentia, ad privatorum utilitatem aut desideria sese accommodans, studiorum iuridicorum curriculum, quod nonnisi septem annis per pragmaticam sanctionem & concordata finiebatur, triennio posse absolvi concessit, licet addita iuris quoque gallici discendi necessitate: standum sapientissimi edicti legibus. Id vero cum fructu studentium & scholae salvis legibus non incommode ita fieri posse mihi visum est, si nullo praetermisso pensi annui titulo, materia cuiusque certo ordine secundum didacticae regulas summatim digestas traderetur, ac deinde capitum sive decretalium, quarum maximus usus, maxima-ve difficultas est, accurata interpretatio subiiceretur.

Notus est interpretationis huius modus. Proponitur apta hypothesis (quae in iure pontificio ex historia, tum ecclesiastica, tum medii aevi profana, peti uti plurimum potest) adducuntur dubitandi decidendique verae rationes: contraria refelluntur conciliatis per certa rerum momenta antinomiis; quam in rem solent praesertim loca & tempora distinguere, & ius vetus, vel commune cum posteriorum nostrisque saeculi constitutionibus, aut moribus ecclesiarum comparari, quo appareat quibus gradibus ad ea quae nunc apud quosque obtinent, deventum fuerit. Hac via edocti atque his subsidiis muniti, ubi antecessorum ductu ardua quaeque perceperint, in reliquiis intelligendis ope librorum quos paulo ante indicavimus, non difficile sibi ipsi sufficient. Videndi hac de re tota duo in utraque professione decessores mei Franciscus Florens, & Ioannes Dartis in orationibus seu praefationibus de optima docendi discendique iuris canonici ratione. Adiici poterunt orationes aut epistolae illustrium iurisconsultorum qui de methodo iuris civilis scripserunt, quae enim methodus in iure civili probatur, iuri etiam canonico magna ex parte conveniet. Hi sunt in primis Eguinarius Baro, Franciscus Balduinus, Franciscus Duarenus, Franciscus Othomannus, Matthaeus Vesembecius, Claudius Cantiuncula, Christophorus Hagendorphinus, Matthaeus Gribaldus, Nicolaus Everhardus, Ioannes Thomas Freigius, Iulius Pacius, & qui alii sub diversis titulis

ducidos a las mismas fuentes, a los mismos cánones, a las decretales mismas, junto con las leyes afines que conviene explicar detalladamente. Y creo que está muy probado lo que sostiene Boëtius Epo, en el capítulo segundo de su libro *De iure sacro*: haber sido para él un escrúpulo primordial no interpretar el derecho pontificio sino desde sus fuentes; escrúpulo que recomienda grandemente a sus sucesores en esta clase de oficio y aún más a toda la posteridad. De este modo, son discernidos perfectamente los verdaderos de los falsos, los olvidados de los recibidos. Pero incluso más: debiera haberse optado, para que nada quedase intacto, por haber leído todo el *corpus iuris*, explicándolo de principio a fin. Es cierto que ni la paciencia de los discípulos, ni los deseos de los parientes en exceso presurosos permiten que se haga esto. También la providencia del muy grande rey en provecho de los particulares, o bien sus deseos de ajustar la carrera de los estudios jurídicos, que estaba limitada por pragmática sanción y por concordatos en solamente siete años, concedió que pudiese terminarse en tres años, aunque con la necesidad añadida, para ser fiel a las normas del sapientísimo edicto, de estudiar también derecho francés. En verdad, he creído poder hacer esto cómodamente, en provecho de los estudiantes y sin violar las leyes; a saber: sin omitir ningún título que haya de ser tratado cada año, que la materia sea enseñada con cierto orden, de conformidad con las reglas de la didáctica, y luego se añada una cuidadosa interpretación de los capítulos o de las decretales de las que exista un gran uso o una gran dificultad.

La regla de esta interpretación es conocida. Se propone una hipótesis proporcionada (que, tratándose del derecho pontificio, puede obtenerse de la historia, ya eclesiástica ya profana de la Edad Media). Se ponen de manifiesto las verdaderas reglas de dudar y de resolver. Conciliadas las antinomias por medio del peso cierto de las cosas, se refutan los contrarios. En tal caso, se acostumbra a distinguir entre las cuestiones de que se trata principalmente y las circunstancias, y a comparar el derecho antiguo o común con nuestras disposiciones legales y costumbres de hoy en día o de la posteridad, a fin de que sea evidente hasta qué punto se habrá llegado gradualmente a las que ahora prevalecen entre nosotros. Instruidos de este modo y fortalecidos con estos auxilios, comprenderán cualquier dificultad bajo la dirección de los maestros, y les bastará para discernir fácilmente los restantes por medio de los libros que poco antes indicábamos. He aquí el motivo de analizar a mis dos predecesores en

eam materiam tractarunt: quorum opuscula a Nicolao Reusnero collecta Spirae prodierunt anno 1588 sub titulo Cynosurae iuris, addita sequenti anno appendice a Bernardo Copio.

una y otra profesión, François Florent y Jean d'Artis, en sus oraciones y prólogos acerca del correcto método de enseñar y de aprender derecho canónico. Podrán añadirse las oraciones o epístolas de los más ilustres jurisconsultos que han escrito sobre el método del derecho civil, pues como está demostrado éste concuerda en su mayor parte con el del derecho canónico. Éstos son, principalmente, Eguinaire Baron, François Baudouin, François Douaren, François Hotman, Matthaeus Wesenbeck (1531-1586), Claudius Cantiuncula, Christoph Hegendorf (1500-1540), Matteo Gribaldi (†1564), Nicolaus Everardi (1537-1586), Johann Thomas Freigius (1543-1583), Giulio Pace y aquellos otros que bajo diversos títulos trataron esta materia; cuyos opúsculos se publicaron reunidos en 1598 por Nikolaus Reusner bajo el título de *Cynosura iuris*, a los que se añadió, un año después, un apéndice de Bernhard Copius (1525-1581)⁷.

⁷ Nikolaus Reusner (1545-1602), *Cynosura iuris...*, Speyer, 1588-1589. Esta tercera parte a que se refiere el texto lleva por título *Appendix cynosurae iuris, continens miscellanea quaedam variorum auctorum... Accessit Bernardi Copii, ... Oratio de studio iuris*.

LA POLÉMICA DE LA CIENCIA ESPAÑOLA (1876-1877) ¿UN DEBATE IDEOLÓGICO ACERCA DE LAS DOS ESPAÑAS?*

Me van a permitir ustedes unos momentos iniciales dedicados a explicar el encabezamiento de esta lección inaugural del curso 2005-2006, que el Rector, prof. Gregorio Peces-Barba, colega y uno de mis maestros universitarios, ha tenido a bien encomendarme.

He considerado oportuno que su contenido sea una descripción, no exenta de algunas valoraciones, de una conocida polémica sobre la existencia o no de tradición científica y filosófica en España, acompañada de un conjunto de reflexiones sobre sus estímulos, obstáculos, comparaciones con otros países y alcance. En un marco universitario está plenamente justificada la elección de un tema de estas características. El que se trate de una cuestión desarrollada en el último cuarto del siglo XIX, y condicionada por otros presupuestos pertenecientes al ámbito de lo extracientífico, no es más que una manera de recordarnos la estrecha conexión entre producción científica y situación social. A pesar de la lejanía en el tiempo, algunas de las cuestiones que allí fueron manifestándose parece que se mantienen hoy.

Con esto último quiero decir que, muchas veces, la elección de un tema histórico puede ser un pretexto para hablar del presente. Y que sin olvidar la objetividad en la descripción de los hechos que acontecieron, su rememoración nos permite analizar críticamente la actualidad.

Como solamente soy un aficionado a la historia de las ideas y a las elaboraciones de filosofía de la historia, me puedo permitir algún lujo que nunca debería disfrutar un historiador profesional. Existen ciertas formalidades inevitables a la hora de dedicarnos a una disciplina, pero tampoco está mal salir, de vez en cuando, de los típi-

* Lección inaugural pronunciada en la apertura del curso académico 2005-2006 en la Universidad Carlos III de Madrid el día 5 de octubre de 2005.

cos dogmas y presupuestos indiscutibles para caer en los brazos de la heterodoxia, pero sin deslizarse hacia la frivolidad, el exhibicionismo o el anarquismo metodológico que tanto predicó P. Feyereabend.

Hablar de un acontecimiento histórico es hablar también del presente. Existe una razón muy clara al respecto y es la conexión entre el pasado y el presente, interdependencia que —según señaló, (en este caso un historiador de verdad) Marc Bloch— es «la justificación verdadera de la Historia»¹. Pero aunque la conexión siempre existe, la manera de establecerla y la selección de hechos para constituir la permiten la entrada de juicios de valor e ideologías. Y no digamos las conclusiones finales de nuestro trabajo. De ahí que la historia sea fácilmente manipulable por tirios y troyanos. Por supuesto que ni todo vale, ni todo vale igual y que ese control teórico, y también moral, es una de las principales tareas que competen a los historiadores serios y responsables.

Advertido de todos esos peligros y disculpándome ante los historiadores aquí presentes, deseo hacerles dos invitaciones en un mismo acto. La primera es a que valoren la objetividad de mi descripción de la polémica de la ciencia española. La segunda es a que me acompañen, no solamente en un recorrido histórico, sino a que utilicen esos datos como pretexto para analizar críticamente el presente de España.

Para la segunda invitación no intenten ser neutrales porque no lo van a conseguir. En un reciente libro de Manuel Cruz, cuyo título es «Las malas pasadas del pasado», leemos: «nunca como ahora tuvimos tanta necesidad del historiador. Entendido, eso sí, como el más afinado crítico del presente, como aquel que es capaz de percibirlo en todo su espesor... como quien mejor nos puede ayudar a defendernos del pasado»². Comparto el contenido de esta cita.

Otra explicación que ustedes tienen el derecho a exigirme versa acerca de la utilización del calificativo ideológico. Calificativo que en su uso cotidiano suele tener un sentido despectivo (ideológico sería igual a falso, engañoso o tramposo), pero que por lo que respecta al término «ideología» viene a tener el significado de teoría o

¹ Citado por Carole Fink en Marc Bloch. *Una vida para la historia*, Universitat de València, Valencia 2004, p. 143. Ver también p. 272.

² M. Cruz, *Las malas pasadas del pasado: identidad, responsabilidad, historia*, Anagrama, Barcelona 2005, p. 179.

conjunto de ideas (pocos son los que anclados en el paleopositivismo enfrentan ideología a ciencia). Me detendré un momento en esta cuestión.

Es muy frecuente el empleo del sustantivo ideología y del calificativo ideológico en el ámbito de la filosofía social y política, la historia o la sociología; también en el lenguaje político práctico. Desde su acuñación, la del término ideología, por Destutt de Tracy en 1796, su empleo ha recibido significados distintos que, haciendo alarde de cierto esquematismo, podríamos resumir en un uso o significado débil y un uso o significado fuerte. En su significado débil, leemos en el *Diccionario de Política* dirigido por N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino, equivaldría a «un conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tienen la función de guiar los comportamientos políticos colectivos. El significado fuerte tiene su origen en el concepto de ideología de Marx, entendido como falsa consecuencia de las relaciones de dominación entre las clases, y se diferencia claramente del primero porque mantiene en el propio centro, diversamente modificada, corregida o alterada por los distintos autores, la noción de falsedad: la ideología es una creencia falsa»³.

Aunque a algunos les sorprenda, viniendo la confesión de un liberal, pero con fuertes e irreprimibles tendencias socialdemócratas, creo que el sentido fuerte, de raíz marxista, es mucho más útil y profundo.

Marxistas o no, hemos de aceptar el hecho de que todo el pensamiento social y político posterior a Marx se ha realizado en relación con su obra, sea a favor o en contra. Que algunas de sus ideas hayan servido para que grupos de fanáticos sedientos de sangre hayan justificado en ellas sus fechorías no invalida la totalidad de su pensamiento ni la importancia de sus aportaciones. Y una de esas aportaciones es el tratamiento que hace del concepto de ideología, que, corregido y revisado hoy, puede ayudarnos en nuestras investigaciones. La conformación de las ideologías, su falseamiento, sus funciones sociales a pesar de tratarse de apariencias y falsas representaciones, sus usos explicativos y comprensivos de la realidad y el carácter determinado socialmente de todo conocimiento que, ade-

³ Mario Stoppino, voz «Ideología», *Diccionario de Política*, Siglo XXI editores, Madrid 1991, tomo 1, p. 755.

más, puede ser un conocimiento interesado, son puntos que no podemos pasar por alto. Al mismo tiempo, debemos deplorar que ni Marx ni el marxismo posterior tuvieran la valentía de plantearse si su propia «Teoría de la ideología podría en sí misma funcionar como ideología», según ha indicado, entre otros, J. Keane⁴. En caso contrario al ocurrido, creo que nos hubiéramos librado de muchas discusiones estériles y del sacrificio de muchas vidas humanas realizado al amparo de la cruel justificación de que la historia estaba de su lado.

Reivindicación, por tanto, de un concepto corregido de ideología heredero de Marx, que nos sirve para hacer una lectura crítica de todas las ideologías existentes, entendidas éstas «como sistemas de creencias y expresiones cargadas simbólicamente que presentan, interpretan y evalúan el mundo para dar forma, movilizar, dirigir, organizar y justificar ciertos modos o líneas de acción y anatemizar otros»⁵.

Pues bien, en las líneas anteriores está expuesta la metodología con la que deseo acercarme al análisis de la polémica de la ciencia española.

¿Por qué la polémica de la ciencia española se convirtió en un debate ideológico?

Mi idea es que la polémica sobre la ciencia española, además de ser un debate sobre el desarrollo o falta de desarrollo (y sus causas) de la ciencia en nuestro país (descripción que abordaré de manera resumida, más tarde) se convierte en un debate ideológico desde el momento en que aparecen en escena las posibilidades de falsear la realidad y de un conocimiento interesado que, tanto en un caso como en otro, y tanto en una como en otra postura de la polémica, se describen como lo verdadero.

No solamente en su época la polémica se ideologiza, descubriendo dos concepciones sobre España y su tradición histórica distintas y enfrentadas, sino que después de la Guerra Civil Menéndez Pelayo va a ser utilizado por los vencedores para «aplastar» las otras versiones ilustradas, liberales y progresistas que se veían como herederas de la otra parte de los polemistas, donde se escondían positivistas, neokantianos o krausistas e institucionistas.

⁴ Ver J. Keane, *Democracia y sociedad civil*, Alianza Editorial, Madrid 1992, p. 260.

⁵ D. Ketter, voz «Ideología», en *Enciclopedia del Pensamiento Político*, dirigida por David Miller, Alianza Editorial, Madrid 1989, p. 276.

A pesar de mi anterior invocación a C. Marx, no me atrevo a plantear esta cuestión como una versión literal del concepto marxista de ideología, en el sentido de una falsa conciencia que enmascara y envuelve intereses materiales de clase dominante con el velo de la referencia a nobles y grandilocuentes valores morales y políticos. Tengo muchas y serias dudas al respecto, que podrían resumirse con la idea de que no creo que los motivos reales que impulsan la conducta de los seres humanos, ni su vida en general, puedan reducirse a reproducciones de intereses de clase. Por supuesto que existen motivos reales y falsos o aparentes, pero todos conforman un conjunto variado y plural imposible de reconducir a un único factor. Además, aunque la mayor parte de ellos nos son conocidos, otros permanecen inconscientes o nos son desconocidos.

Mi propósito aquí no puede ser otra cosa que una hipótesis de trabajo sencilla y posiblemente llena de resquicios: detrás de una y otra postura en la polémica de 1876-1877 sobre la ciencia española se alberga mucho más que la descripción supuestamente neutral de una serie de datos, que se han convertido en beneficios para el historiador interesado, y que siempre podrán ser evaluados de diferente forma. Junto a esa descripción, se añaden, por parte de las dos posturas enfrentadas, otras motivaciones que son marginadas conscientemente o no se hacen explícitas. Ello hace que las dos posturas, cada una a su manera, estén falseando la realidad.

Sus posiciones mezclan conocimientos con intereses no totalmente confesados. Y aquí es donde se establece la conexión, visible, comprobable y no forzada, con una polémica anterior y posterior y probablemente también actual acerca de las dos Españas. En definitiva: la polémica de la ciencia española sirvió para reforzar esa indeseable distinción entre la España buena y la España mala, o mejor, la anti-España.

Alguna responsabilidad le corresponde a Marcelino Menéndez Pelayo en atizar la polémica de las dos Españas⁶. También a sus opositores positivistas, neokantianos y miembros de la Institución Libre de Enseñanza. Pasemos, pues, a la narración de la polémica.

La polémica de la ciencia española no es solamente una polémica sobre la existencia o no de cultura filosófica y científica en Espa-

⁶ Puede consultarse Santos Juliá, *Historia de las dos Españas*, Taurus, Madrid 2004, p. 52 ss.

ña, de sus aportaciones, del valor de esas contribuciones y de las razones de su mayor o menor desarrollo e implantación.

Es también una polémica sobre la libertad ideológica, sobre el impulso que representan para el desarrollo de la ciencia y la filosofía las libertades de pensamiento y expresión, es decir, sobre el papel que cumplen las estructuras y las instituciones políticas, jurídicas y sociales en el fomento de la razón y la libertad humana. Lo es además, por supuesto, acerca de la tolerancia, el pluralismo y sobre el obstáculo que para el normal desarrollo del pensamiento representan todos los despotismos, ya sean religiosos, ya políticos. Es una manera de recordar un hecho obvio: la interrelación ciencia-filosofía, por un lado, y sociedad-política por otro. Sin esquematismos simplificadores ni dependencias mecánicas, pero sin olvidar que la historia del pensamiento español es una parcela de la historia de España.

Asimismo en la polémica sobre la ciencia española aparecen muchos nombres importantes de la historia de las ideas en España. El hecho de que se rescataran del olvido, en aquella época, pero también en la actualidad, se debe a la tenacidad sobre todo de Don Marcelino Menéndez Pelayo, aunque también sus opositores en la polémica sacan a la luz, en algún momento, nombres de interés o hacen justicia a otros. Su móvil fue señalado por él al final de su vida, en 1912:

Donde no se conserva piadosamente la herencia del pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo menos la cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya, sin extinguir la parte más noble de su vida, y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil⁷.

A pesar de sus exageraciones y de una, con frecuencia, poco disimulada parcialidad en algunos juicios, nuestro agradecimiento a Menéndez Pelayo merece un lugar destacado. Sus profundos conocimientos, su patriotismo y la brillantez en sus exposiciones y controversias no pueden ponerse en tela de juicio. Hoy, cuando el pluralismo ideológico y de otros tipos, se considera una virtud de las sociedades abiertas y desarrolladas no debe sorprendernos que Don

⁷ Marcelino Menéndez Pelayo, *Ensayos de crítica filosófica*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1948, p. 354.

Marcelino tuviera unas convicciones muy arraigadas y las defendiera con todas sus armas teóricas. No tiene ningún sentido poner en duda la legitimidad del tradicionalismo del ilustre montañés, y menos aún intentar ridiculizar su postura. Que una personalidad fallecida en 1912 sea utilizada y manipulada por el bando vencedor en la Guerra Civil española es ya otro cantar. Y un asunto que merece un estudio objetivo y sereno. Que su actitud beligerante en relación con el krausismo y los krausistas españoles se manejara en los comienzos del nuevo Estado franquista para destruir todo vestigio de sus importantes aportaciones a la cultura española, en la que se ha denominado su Edad de Plata, no deja de ser otra utilización perversa.

Quizá hoy lo importante sea tanto analizar una polémica con fuerte impronta ideológica y sacar las oportunas conclusiones, como valorar la influencia histórica del pensamiento español en el universal, sobre todo el europeo y la recepción de éste en el nuestro. Hoy en España contamos con historiadores del pensamiento y con estudiosos e investigadores, de cuyas aportaciones podemos beneficiarnos para el buen conocimiento y para llegar a él con las armas metodológicas necesarias y adecuadas. Además nos hemos ido dando cuenta de lo importante que es acercarse a los personajes y acontecimientos históricos sin vendas ni prejuicios ideológicos.

Se puede considerar con certeza que el factor que va a dar lugar a la polémica de la ciencia española (si se quiere: la segunda polémica, para ser más precisos) es un párrafo de un artículo de Gumerindo de Azcárate en la *Revista de España*, que más tarde aparece en su *El Self Government y la Monarquía doctrinaria*. El texto dice así:

Según que, por ejemplo, el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar genialidad en este orden, y podrá hasta darse el caso *de que se ahogue CASI POR COMPLETO su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos*.

La famosa polémica, por tanto, aparece no solamente como una discusión sobre la existencia o no de tradición filosófica y científica en nuestra patria, y su importancia e influencia en el pensamiento universal, sino también como una discusión de contenidos claramente ideológicos, y por ello sumamente polémicos. Se trata de una lectura de la historia de España en los siglos XVI, XVII y XVIII, desde la perspectiva de la conexión, benéfica o perjudicial, entre sistemas políticos, libertad de la ciencia y desarrollo científico y filosófico.

La polémica, por tanto, va a dividir el panorama filosófico español entre un sector tradicionalista, cuya figura más importante será Marcelino Menéndez Pelayo, aunque si consideramos las intervenciones en la polémica de Alejandro Pidal y Mon y del P. Fonseca no representará el ilustre montañés la postura más cerrada, (incluso él es criticado por esos dos polemistas) y un sector más modernista o más abierto al pensamiento europeo, ejemplificado por los representantes de una de las escuelas positivistas de la época: los neokantismos y por los krausistas.

Es ese párrafo de Gumersindo de Azcárate el que provoca el inicio de la polémica de la ciencia española y el que cita Menéndez Pelayo al comienzo de su carta a Gumersindo Laverde (a quien se dirige con el triple tratamiento de profesor, amigo y paisano), que aparecerá como primer capítulo de su libro de 1876 *La ciencia española* (prologado por el propio Laverde), y que lleva por título «Indicaciones sobre la actividad intelectual en España en los tres últimos siglos» (con fecha de 14 de abril de 1876). Con este trabajo Don Marcelino llevará a cabo su programa de dar a luz interesantes listados de representantes del pensamiento español, iniciará una polémica de gran alcance teórico e ideológico y, de alguna manera, también dará rienda suelta a sus rencores anti-krausistas⁸ que, como se verá, amplía a positivistas, hegelianos y neokantianos.

Comienza Menéndez Pelayo⁹ este artículo exponiendo que ha leído «con asombro y mal humor» el párrafo anteriormente citado

⁸ La antipatía de Marcelino Menéndez Pelayo dirigida al krausismo parece que tienen su origen en el hecho del «choque» que éste tuvo con Nicolás Salmerón quien había anunciado que suspendería a todos los alumnos que no hubieran estudiado con él dos años. Menéndez Pelayo había comenzado sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, en 1871, donde fue alumno de M. Milá y Fontanals y de X. Llorens y Barba. En 1873 traslada su expediente a Madrid, pero debe hacer un nuevo traslado a Valladolid para evitar el cumplimiento de esa advertencia de Salmerón y así finalizar la carrera. Allí es discípulo, y se convierte en gran amigo, de Gumersindo Laverde.

⁹ Las citas se hacen por el Tomo LVIII de la edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, dirigidas por Rafael de Balbín Lucas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los tres volúmenes correspondientes a *La ciencia española* fueron preparados por Enrique Sánchez Reyes y aparecieron en Santander en 1953-1954.

de Gumersindo de Azcárate, «escritor docto, y en la escuela krausista sobremanera estimado», y comenta:

Sentencia más infundada ni más en contradicción con la verdad histórica, ni se ha escrito en lo que va del presente. Y no es que el ilustrado Sr. Azcárate sea el único sustentador de tan erróneas ideas, antes con dolor hemos de confesar que son hasta vulgares entre no pocos hombres de ciencia de nuestro país, más versados sin duda en libros extraños que en los propios. Achaque que es comunísimo en los prohombres del *armonismo* juzgar que la actividad intelectual fue nula en España hasta que su maestro Sanz del Río importó de Heidelberg la doctrina regeneradora, y así el mismo pontífice y *hierofante* de la escuela jactose de ello en repetidas ocasiones, no yéndole en zaga sus discípulos¹⁰.

A la vista de este texto y de otros que siguen no está de más recalcar, ya que son suficientemente conocidas y han sido bastante estudiadas, las turbias relaciones de un jovencísimo Menéndez Pelayo con los krausistas. En *La ciencia española* y sobre todo al final de la *Historia de los heterodoxos españoles* (1880) se puede comprobar esta actitud profundamente antipática hacia ellos.

Ni en ésta ni en otras polémicas de este tipo se pueden desconectar, aunque sí hay que saber analizar separadamente, los elementos personales, las luchas por el poder, los intereses de todo tipo, los nobles objetivos intelectuales, el sano y el ciego patriotismo y las discusiones ideológicas.

Creo que el error inicial de Gumersindo de Azcárate se encuentra en lo que tiene de exagerado, pero también desde los inicios de la polémica podemos intuir que la equivocación de Menéndez Pelayo se encuentra en no valorar en su verdadero alcance el papel negativo de sistemas políticos autoritarios y despóticos y culturas inquisitoriales para el libre desarrollo de la ciencia y la filosofía. Aunque nadie nos garantiza, por supuesto, que un régimen político de libertades cree espontáneamente, o mecánicamente, mejor y más cultura, ciencia o filosofía. En otro orden de cosas, y aquí las simpatías van dirigidas a D. Marcelino, me parece un sentimiento noble su dolor por «el lamentable olvido y abandono en que tenemos las glorias científicas nacionales, en especial las filosóficas». También es importante que Menén-

¹⁰ *La ciencia española*, cit., p. 29.

dez Pelayo enuncie tan tempranamente todo un proyecto cultural y educativo con el fin de evitar ese lamentable olvido y abandono.

Paso ahora a citar, resumidamente, la polémica particular de Menéndez Pelayo con los neokantianos españoles de la época.

En una de las recensiones que Manuel de la Revilla ¹¹ acostumbraba a hacer en la *Revista Contemporánea* ¹², en este caso corresponde al número 30 de mayo de 1876, tiene lugar otro de los datos iniciales de la polémica con Marcelino Menéndez Pelayo.

Se refiere aquí Manuel de la Revilla al discurso de recepción de Núñez de Arce en la Academia Española ¹³ y se le achaca haber utilizado un tono más propio del tribuno que del académico, más centrado en «el apasionado acento de las luchas políticas», a pesar de que nuestro autor no rechaza la exactitud de la tesis allí defendida.

Su opinión es expuesta de la manera siguiente:

Trató el señor Núñez de Arce de señalar las causas de la decadencia de nuestra literatura al terminar la dominación de la casa de Austria, y fijóse para ello en el despotismo político y en la intolerancia religiosa, que dieron breve y desastroso término a la prosperidad, grandeza y cultura de la nación española, para lo cual pintó con vivos colores todo lo que hay de horrible y nefando en aquella época siniestra. En sus términos generales la tesis es exacta; la intolerancia, aún más que el despotismo, acabó con nuestra cultura y hubo de precipitar, por ende, a nuestras letras en lasti-

¹¹ Manuel de Revilla fue catedrático de Literatura general de la Universidad Central. Murió en El Escorial a los treinta y cinco años. Era hijo de un conocido krausista, amigo de Sanz del Río, pero tras un breve paso por el krausismo se hace neokantiano y se convierte en una de las mentes más importantes de este movimiento filosófico en la España de la Restauración. Colaboró en la *Revista Contemporánea* de José del Perojo con una «revista crítica» quincenal.

¹² La *Revista Contemporánea* va a ser el principal vehículo de difusión del pensamiento neokantiano en España. Su primer número aparece, como periódico quincenal, el 15 de diciembre de 1875 y dura hasta 1879. Se considera como el mejor órgano de información de la cultura y la ciencia europea y española del momento.

¹³ El discurso de G. Núñez de Arce, con motivo de su ingreso en la Academia de la Lengua, leído el 21 de mayo de 1876, lleva por título «Causa de la precipitada decadencia y total ruina de la literatura nacional bajo los últimos reinados de la casa de Austria».

mosa decadencia; pero la sana crítica exigía un análisis más delicado y completo para explicar este hecho, a primera vista tan sencillo, y tan complejo en realidad¹⁴

La conexión, por tanto, entre intolerancia, despotismo político y decadencia de la cultura española está establecida con claridad. Sin embargo, la matización que hará Manuel de la Revilla a la tesis de Núñez de Arce es importante: «la decadencia científica y la literaria no fueron paralelas».

De la Revilla lanzará de inmediato el siguiente interrogante: ¿el contraste entre la riqueza literaria y la pobreza filosófica se debe «a defecto de nuestro espíritu nacional, más fecundo en místicos y soñadores que en pensadores reflexivos e independientes»? Y de inmediato, también enuncia su propia respuesta (objeto más tarde de los ataques de D. Marcelino): «no es posible dudar de que en tan triste resultado cabe no pequeña parte a nuestra feroz intolerancia religiosa... el país en que imperaban todos los despotismos, todas las intolerancias y todas las supersticiones, no podía dar vida al pensamiento científico, que no alienta sin la libertad».

También aporta una curiosa explicación psicológica que intentaría dar razones de por qué los inquisidores, de manera hábil, habían perseguido el pensamiento filosófico y religioso heterodoxo, mientras se habían mostrado benévolos «con las más atrevidas y licenciosas producciones literarias»:

La actividad intelectual del hombre necesita desahogo, y toda la máquina que la comprima ha de tener válvulas para darla salida; y nada mejor que dar libertad a la literatura para que el ingenio español gastara en inofensivos entretenimientos la fuerza que podía emplear en más peligrosas empresas»¹⁵.

La contestación de D. Marcelino no se hizo esperar mucho. Se publicó en el tomo 8.º, n.º 127, de la *Revista Europea*, correspondiente al 30 de julio de 1876, en forma de carta dirigida a su maestro Gumersindo Laverde y con el título «Mr. Masson, redivivo»¹⁶.

¹⁴ *La ciencia española*, cit., p. 86.

¹⁵ *La ciencia española*, cit., p. 89.

¹⁶ La contestación de Marcelino Menéndez Pelayo a Manuel de la Revilla lleva el título de «Mr. Masson, redivivo». Con ello D. Marcelino de-

Comienza refiriéndose a Manuel de la Revilla como «este caballero, eco póstumo de aquel Mr. Masson de la Enciclopedia» y a la *Revista Contemporánea* como una publicación que «profe-sa odio mortal a todo lo que tenga sabor de españolismo», agregando: «no me explico la razón de que en una revista (al parecer) en español y para españoles, sea extranjero todo: los artículos doctrinales, las novelas, las poesías y hasta los anuncios de la cubierta»¹⁷.

De estos ataques personales no se libra tampoco Núñez de Arce («eminente lírico»... «nombre caro a nuestras musas»... junto con Quintana «uno y otro se hacen insoportables cuando se acuerdan de que pertenecen a la incorregible y reacia estirpe *liberalesca* de comienzos del siglo presente»), al mismo tiempo que ensalza el discurso de contestación de Juan Valera. Lo que realmente ha irritado a D. Marcelino, «hasta considerar estos juicios de la Revilla y Núñez de Arce como un sangriento ataque a nuestra cultura», es que todos los males patrios se achachen a la intolerancia. Semejante explicación se convierte, son sus palabras, en «una nueva catilinaria contra la Inquisición y la gente de sotana». Si el crítico exkrausista de la Revilla señala que en la época citada «caímos en atraso» en lo que a ciencia se refiere, «sería porque hasta entonces estábamos adelantados» responde Menéndez Pelayo. Si de la Revilla afirma que no tenemos físicos, matemáticos y naturalistas que compitan con Copérnico, Galileo, Newton, Kepler, Pascal o Descartes, está dando como válido el supuesto de que «todo geométrico, físico y astrónomo que no llegue a la altura de los citados es un pigmeo indigno de memoria». En todo caso, «si no tuvimos Galileos, Keplers, ni Newtones, por otra razón sería, y no por los rigores inquisitoriales», añade¹⁸.

seaba apuntar que esta polémica sobre la ciencia española había tenido un precedente similar a finales del siglo XVIII, comenzada, en este caso, por un artículo de Masson de Morvilliers. Como han mantenido Ernesto y Enrique García Camarero, «la polémica se inicia con un artículo sobre 'España' aparecido en la sección de 'Geografía Moderna' de la *Enciclopedia Metódica* (1782), firmado por Masson de Morvilliers», (p. 9 de la Introducción a los Textos que componen el libro *La polémica de la ciencia española*, Alianza Editorial, Madrid 1970).

¹⁷ *La ciencia española*, cit., pp. 93 y 94.

¹⁸ *La ciencia española*, cit., pp. 96 y 97.

Menéndez Pelayo reivindica en su contestación la labor aportada a la historia de la ciencia por parte de los modestos cultivadores «que han abierto y allanado el camino a los genios», labor infatigable, no de «grandes hombres» sino de «hombres útiles». Reivindicación que sirve para marcar el objetivo a una de las ideas que dirigirá a su contrincante: «yo le aseguro al Sr. Revilla que gran trabajo había de costarle escribir la historia de ninguna ciencia sin tropezar una y muchas veces con los españoles, a pesar de la mala voluntad que muestra y el desprecio con que mira a cuanto haya salido de manos de sus compatriotas»¹⁹.

Achacar, por tanto, a la Inquisición la falta de desarrollo científico en España es dar por supuesta una carencia inexistente y una causa a dicha carencia también falsa, porque «este terrorífico nombre de Inquisición, coco de niños y espantajo de bobos, es para muchos la solución de todos los problemas».

En cuanto a la idea de Manuel de la Revilla de que aunque se busquen precursores de Bacon y Descartes, se elogie a Vives, Suárez, Pereira, Morcillo, Huarte y Oliva Sabuco, «forzoso será reconocer que, *salvo los que siguieron la corriente escolástica*, ninguno logró fundar escuela ni alcanzar legítima influencia, siendo, *por tanto*, un mito esa decantada filosofía española», D. Marcelino responderá aconsejando más lectura sosegada de historia de la filosofía española y de los defensores de la filosofía española contemporáneos de Laverde Ruiz y de él mismo, y, además, advertirá que no se cometa el error, fruto del desconocimiento de ella, de colocar en la misma línea a Luis Vives, Suárez y Fox Morcillo por un lado y a Huarte y Doña Oliva Sabuco de Nantes por otro. En definitiva, del conocimiento adecuado de todos estos asuntos se deriva que «puede afirmarse que hasta fines del siglo pasado nadie dudó de que España hubiese tenido en todas épocas filosofía y filósofos eminentes»²⁰.

También Menéndez Pelayo negará que sea cierto que «los españoles que filosofaron fuera del escolasticismo y de la mística no formaran escuela ni ejercieran influencia». Ahí están para demostrarlo Luis Vives y sus discípulos, el lulismo y el suarismo, definidos por él como «la gran triada de los sistemas peninsulares ortodoxos».

¹⁹ *La ciencia española*, cit., p. 100.

²⁰ *La ciencia española*, cit., p. 113.

En definitiva, negar el mérito de los filósofos españoles es fruto del sectarismo, la ignorancia y el desprecio al catolicismo y «al régimen de unidad religiosa y monárquica». También tienen que ver con esa actitud los krausistas, puesto que «La generación presente se formó en los cafés, en los clubs y en la cátedra de los krausistas; la generación siguiente, si algo ha de valer, debe formarse en la biblioteca: faltan estudios sólidos y macizos»²¹. Krausistas que son presentados como una secta filosófica prepotente, dominante e intolerante («Sin ir más lejos, ahí están los krausistas, de cuya tolerancia pueden decir muy buenas cosas los que alguna vez han asistido a sus aulas»). Las acusaciones del final de la carta van dirigidas al propio de la Revilla, de quien manifiesta: «El señor Revilla no es ya *krausista*, no es siquiera hegeliano, por más que tal se creyera en algún tiempo, ha renegado de esas sectas por *reaccionarias y atrasadas*; hoy no gusta de *espiritualismos e idealismos*, según nos informa en el mismo artículo a que contesto; hoy tiende con toda claridad al *materialismo positivista* en crudo, y rompe lanzas en pro de la teoría darwiniana»²².

En el marco de la *Revista Contemporánea*, y en el número correspondiente al 15 de agosto de 1876, aparece la contestación de Manuel de la Revilla, quien se ha sentido ofendido por «algunas graves e inexactas acusaciones que dirige a este periódico y a nuestra humilde persona», apuntando que «La furia del señor Menéndez únicamente puede explicarse teniendo en cuenta sus opiniones neocatólicas».

En primer lugar desea responder a «la injusta acusación... al decir que nuestro periódico profesa un odio mortal a todo lo que tiene sabor de españolismo y que en él es extranjero todo». Aquí de la Revilla insta a Menéndez Pelayo a que se tome el trabajo de leer los índices de la *Revista Contemporánea*, para así comprobar que los trabajos de «los escritores españoles aventajan en número a los extranjeros, con lo cual se excusará de decir chistes de mal gusto y banalizar acusaciones sin pruebas». En lo tocante a su persona, añade en su contestación:

Jamás hemos pertenecido a la escuela hegeliana, ni nadie lo ha pensado así; y nunca hemos hablado con desdén del catolicismo y

²¹ *La ciencia española*, cit., p. 120.

²² *La ciencia española*, cit., p. 122.

de los católicos, ni los hemos tratado como a parias o idiotas... lo que sucede es que el señor Menéndez confunde a los católicos con los neos, con los que consideran *cursi* y *doceañista* atacar la intolerancia y la Inquisición, como si fuera de muy buen tono defender instituciones bárbaras... Pero nos libramos muy bien de confundir a tales gentes con los católicos sinceros y de identificar la religión con los que abusan de ella y la convierten en instrumentos de despotismo²³.

Como es fácil colegir, el tono empleado por Manuel de la Revilla es mucho más moderado e imparcial que el que había utilizado su beligerante opositor.

Y posiblemente también haya que ponerse del lado, o más del lado, de Manuel de la Revilla en cuanto a sus tesis sobre la historia científica y filosófica de España. Recuérdesse que la polémica trata sobre si esa historia «ha alcanzado gran importancia en el mundo culto, y si entre nosotros ha habido una *verdadera filosofía española*».

Sobre el punto que se refiere al grado de importancia piensa de la Revilla que el propio Menéndez y Pelayo ha confesado que «no contamos con ningún científico de primer orden», a la vez que hace «un merecido elogio de los ingenios de segundo orden y los indudables servicios que prestan a las ciencias». Con lo cual no se estaría realmente negando «por completo» las tesis que provocaron la polémica.

En cuanto al asunto, igualmente polémico, de la existencia o no de una verdadera filosofía española, Manuel de la Revilla contestará a Menéndez Pelayo con estas palabras:

Cuando hemos dicho que la filosofía española es un mito, no hemos querido decir que no hay filósofos españoles, sino que no existe una creación filosófica española que haya formado una verdadera escuela original, de influencia en el pensamiento europeo, comparable con las producidas en otros países. Repetimos aquí nuestro anterior argumento: una cosa es que haya filósofos y otra que haya filosofía... no basta que haya filósofos, músicos o pintores en un país para que pueda decirse que hay en él una filosofía, una música y una pintura nacionales.

²³ *La ciencia española*, cit., pp. 191-193.

A lo que añade la siguiente pregunta que selecciono entre un variado número:

¿cree el señor Menéndez que los nombres de Vives, Fox Morcillo, Suárez, etc., pueden colocarse al lado de los Descartes, Kant o Hegel?, y «¿conoce el Sr. Menéndez vivistas o pereinistas fuera de España, como conoce hegelianos y kantianos en todos los países?»²⁴

Termina su contestación Manuel de la Revilla recalcando que Menéndez Pelayo no ha dado ninguna razón sólida a favor de su tesis y que es imposible hablar de la existencia de una filosofía española y de una historia científica nacional «que haya ejercido verdadera influencia en el pensamiento humano» o que haya tenido verdadera influencia.

A esta altura de la polémica podemos rescatar para nuestro análisis actual la idea de que la mayor parte de los argumentos de los dos contendientes ganan o pierden razón dependiendo del alcance con que interpretamos las expresiones «filosofía» o «ciencia española» de «verdadera influencia» o de «verdadera importancia» para el pensamiento humano.

Sin embargo, no creo que sea difícil mostrar nuestra simpatía por las frases finales de esta contestación de Manuel de la Revilla:

No negamos que esto sea doloroso para nuestro orgullo nacional; pero, aparte de que semejante falta está ampliamente compensada por nuestra gloriosa historia literaria y artística, el verdadero patriotismo no consiste en adular a la patria, sino en decirle verdades provechosas, por amargas que sean, y la ciencia seria, la ciencia *sólida* y *maciza* está obligada a decir toda la verdad y no a halagar el orgullo nacional²⁵.

En el número 135, tomo 8.º, de la *Revista Europea*, correspondiente al 24 de septiembre de 1876, aparece una nueva contestación de Menéndez Pelayo, también, como en el caso anterior en forma de carta a su antiguo catedrático de la Universidad de Valladolid Gumersindo Laverde Ruiz, a quien trata en el encabezamiento como «Mi distinguido paisano y amigo».

²⁴ *La ciencia española*, cit., pp. 193-196.

²⁵ *La ciencia española*, cit., pp. 197 y 198

La carta comienza con referencias personales, poco amistosas, dirigidas al adversario, anunciando de seguido que va a contestar a su artículo «(advuértase esto) —señala—, infinitamente más des-templado y furibundo que el mío», y que «está escrito en un tono autoritario y dictatorial verdaderamente delicioso». No creo que de la comparación entre la forma y contenido de los artículos de los dos polemistas se pueda sacar tan rápidamente una conclusión así.

Inmediatamente le sigue una confesión personal, de las que con cierta frecuencia le gustaba hacer a D. Marcelino y que sin duda hacen más interesante al personaje, ya produzca admiración tanto como si engendra rechazo. Es la siguiente:

Tengo por honra grandísima el que el señor de la Revilla me llame *neo-católico, inquisitorial, defensor de instituciones bárbaras* y otras lindezas. Soy *católico*, no nuevo ni viejo sino *católico* a machamartillo, como mis padres y abuelos, y como toda la España histórica, fértil en santos, héroes y sabios bastante más que la moderna. Soy *católico, apostólico romano* sin mutilaciones y subterfugios, sin hacer concesión alguna a la impiedad ni a la heterodoxia... Estimo cual blasón honrosísimo para nuestra patria el que no arraigase en ella la herejía durante el siglo XVI, y comprendo, y aplaudo, y hasta bendigo la *Inquisición* como fórmula de pensamiento de *unidad* que rige y gobierna la vida nacional a través de los siglos, como hija del espíritu genuino del pueblo español, y no opresora de él sino en contados individuos y ocasiones rarísimas. Niego esas supuestas persecuciones de la ciencia, esa anulación de la actividad intelectual, y todas esas atrocidades que rutinariamente y sin fundamento se repiten, y tengo por mal gusto y atrasadas de moda lucubraciones como la del señor de la Revilla... Creo que la verdadera civilización está dentro del catolicismo, y que no es enemigo de la patria el que sale mejor o peor a su defensa²⁶.

Siguen acusaciones de impío²⁷ dirigidas a Manuel de la Revilla y de empresa anti-católica, anti-nacional y anti-literaria a la *Revista Contemporánea*.

²⁶ *La ciencia española*, cit., pgs 200 y 201.

²⁷ Impiedad que relaciona con sus tendencias filosóficas: «Hoy pasa por *neo-kantiano* pero no niega sus tendencias al positivismo. Lo averiguado y cierto es que siempre ha militado en las filas de la impiedad, con una u otra bandera».

Además hace gala D. Marcelino de una meritoria erudición y de un conocimiento de la historia de las ideas en España realmente envidiable y asombrosa.

Y con acopio de numerosos datos, pretenderá demostrar la variedad de creaciones filosóficas españolas «que forman tradición y escuela e influyen en España y fuera de ella», para matizar que el principal problema de su adversario en la polémica es el desconocimiento y la falta de competencia en estos asuntos²⁸. Especial interés tiene en demostrar la importancia filosófica de tres creaciones españolas: el lulismo, el vivismo y el suarismo. A la influencia de Luis Vives se deberá, en su opinión, el desarrollo de la filosofía de Bacon, el cartesianismo y la filosofía de la escuela escocesa.

Unos meses más tarde entra en la polémica otro neokantiano, José del Perojo²⁹, con un artículo sobre «La ciencia española bajo

²⁸ Con el paso del tiempo Menéndez Pelayo cambió su animadversión hacia Manuel de la Revilla y la violencia de sus ataques personales dió paso a una actitud amistosa. Así se desprende de la «Advertencia preliminar» aparecida en la Tercera edición de «La ciencia española», en 1887, más concretamente de su último párrafo, que dice: «Yo peleaba por una idea; jamás he peleado contra una persona ni he ofendido a sabiendas a nadie. Y la mejor y última prueba que puedo alegar de esto, es que todos mis contradictores han sido amigos míos después de esta controversia, y lo fue muy íntimo, dejándome con su muerte imborrable recuerdo y amarguísimo duelo, aquel gran crítico Manuel de la Revilla, en cuyo generoso espíritu no quedó ni la más ligera sombra de rencor después de nuestro combate literario, sino afectos de simpatía, confirmados luego por el lazo estrechísimo con que liga a sus miembros la institución universitaria, haciéndolos, más bien que compañeros, hermanos». *La ciencia española*, cit., p. 6.

²⁹ José del Perojo es el introductor del neokantismo en España en el último cuarto de Siglo XIX. Este brote neokantiano viene de la mano de un grupo de positivistas españoles y es una de sus vertientes.

Había nacido en Santiago de Cuba, en 1852, aunque viaja a Santander, de donde su familia es oriunda, para hacer el bachillerato. De 1873 a 1875 estudia filosofía en Heidelberg junto al promotor, por aquella época, del neokantismo Kuno Fischer. A él le dedica su obra «Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania», que aparece en 1875, y que por decreto de 24 de marzo de 1877, se incluye en el Index librorum prohibitorum. ¡Una buena prueba de intolerancia religiosa que coincide con el momento más «acalorado» de la polémica sobre la ciencia española! ¡Él sí podía terciar en la polémica con conocimiento de causa!

la Inquisición», publicado en la *Revista Contemporánea*, el 15 de abril de 1877.

Su objetivo es responder a dos artículos publicados en la *Revista de España* por Alejandro Pidal y Mon, los días 17 y 24 de marzo de 1877 (y a los que nos referiremos más tarde), laudatorios y defensores de algunas ideas de Menéndez Pelayo, aunque también defensores de otras.

Queremos dejar demostrado —apunta al comienzo de su artículo— y de un modo concluyente y decisivo: 1.º Que no existe una escuela filosófica que propiamente pueda llamarse española.— 2.º Que la Inquisición paralizó todo el momento científico de nuestro pueblo³⁰.

La primera parte del artículo lo constituyen una serie de reflexiones sobre la naturaleza de la filosofía, de la filosofía moderna sobre todo, para centrarse posteriormente en la aportación de la filosofía crítica de Kant. La razón de que la creación filosófica española no sea comparable con la producida en otros países europeos desde la Edad Moderna, se debe a la Inquisición, pues «Hasta que la Inquisición alcanzó todo su poderío, vemos en España constantemente talentos de primer orden marchando a la cabeza de la civilización, no habiendo ciencia europea en que al lado de los nombres extranjeros más ilustres no se pueden colocar los nuestros, y en los más de los casos con extraordinaria superioridad por nuestra parte. Pero desde el acontecimiento que señalamos, según su poder aumenta, disminuyen nuestros nombres, efecto de la cruda guerra que a su nombre se hacía contra todo lo que era ciencia, investigación, libertad del pensamiento humano»³¹.

José del Perojo coincide con la tesis de Manuel de la Revilla, que apoya explícitamente, en que no hay una filosofía española comparable a lo que significa la filosofía alemana y francesa. El problema es, para él, que carecemos de tradición filosófica; no basta con citar una serie de nombres como han hecho G. Laverde, A. Pidal y Mon

En 1875 funda la *Revista Contemporánea*, órgano del movimiento neokantiano y del positivismo español. La *Revista* arruina a José del Perojo, que debe venderla a mediados de 1879 y marcha a París. Cuando regresa a España, en 1883, publicó una traducción de la *Crítica de la razón pura*.

³⁰ *La ciencia española*, cit., p. 328.

³¹ *La ciencia española*, cit., p. 336.

o Marcelino Menéndez Pelayo, lo que faltan son sistemas filosóficos desarrollados y, en esta cuestión, responder con referencias al lulismo, vivismo o suarismo no es correcto, apunta con rotundidad.

La parte final del artículo la dedica José del Perojo a la elaboración de «un bosquejo de la historia de las ciencias durante los períodos de que se trata en esta polémica» con la finalidad de demostrar la segunda de las tesis anunciadas, es decir, que «la Inquisición paralizó todo el movimiento científico de nuestro pueblo». Sus ejemplos se refieren a lo que se hizo en España antes de la Inquisición y después de la Inquisición (esta etapa se compara con el progreso científico de otros países europeos) en los ámbitos de la Astronomía, la Matemática, la Química, la Física y la Zoología.

Y ahora, también con la brevedad impuesta por las circunstancias, me voy a referir a la polémica entre Menéndez Pelayo y los neotomistas. Como se verá, la polémica adquiere un sesgo diferente.

Las dos nuevas personalidades que se incluyen en la polémica son Alejandro Pidal y Mon³² y el P. Joaquín Fonseca.

Pidal y Mon publica dos artículos, generalmente laudatorios aunque también críticos para Menéndez Pelayo, en la *Revista de España*, correspondientes al 17 y 24 de marzo de 1877. En el primero de ellos se refiere al neokantiano y antes krausista, Manuel de la Revilla, a quien dedica estas palabras: «joven de claro y agudo ingenio, de gran facundia y no vulgares conocimientos, aunque afeado todo por un sabor volteriano que ofende y por las tenebrosas enseñanzas de sus sibilíticos maestros». Aunque su verdadero afán es ridiculizar a los krausistas: «los demás aprendemos que los oráculos del krausismo en España son una casta de impíos, con cuya impiedad sólo compite su ignorancia, siendo ambas sólo superadas por el inaguantable barbarismo de su lenguaje»³³.

Y en el segundo artículo hace una rotunda confesión de tomismo, escribiendo:

Si alguna filosofía merece el nombre de filosofía en absoluto, el nombre de perennis philosophía que dijo Leibnitz, y el nombre de

³² Alejandro Pidal y Mon (1846-1913) fue escritor, filósofo y político. Promovió el movimiento conservador la «Unión Católica» y es un representante fiel del neotomismo. Ver el libro de Andrés Ollero Tassara, *Universidad y política. Tradición y Secularización en el Siglo XIX*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1972, p. 152 ss.

³³ *La ciencia española*, cit., pp. 278 y 279.

filosofía española en particular, no es otra que la grande y sublime filosofía *escolástica*, tal como la fijó la diestra inmortal del Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino.

Por tanto, la filosofía española por antonomasia y en exclusividad es la filosofía escolástica:

¿Hubo *filosofía española*? Sí, la hubo, mayor que en alguna otra parte, salvo Italia, patria de Santo Tomás. ¿Fue ésta la mayor manifestación de nuestro genio? Sí; que nunca alcanzó España gloria más grande que la que le dieron sus teólogos escolásticos en el siglo XVI³⁴.

En lo tocante a la valoración muy positiva que Menéndez Pelayo hará de la filosofía de Luis Vives a lo largo de esta polémica, Pidal y Mon mostrará su disconformidad: «...pero... ¡resucitar *su doctrina*!, ¡declararse *vivista* hoy!, ¡pretender que la *filosofía española* sea el *vivismo*!... Por los clavos de Cristo, que aún hay *tomistas* en España³⁵.

La españolidad de la filosofía tomista es defendida también, encarecidamente por el otro ejemplo elegido. Pero aquí el enfrentamiento con Menéndez Pelayo adquiere otro tono, que indudablemente habría de influir en la psicología de D. Marcelino y posiblemente también sirviera para ablandar el lado más intransigente de su postura, según nos consta en referencias suyas posteriores.

Así, la violencia de la polémica sube de tono cuando interviene en ella el padre dominico Joaquín Fonseca, quien representa la postura más integrista y de un catolicismo tan dogmático que el catolicismo a machamartillo de D. Marcelino le parece muy peligroso. Las dudas de Menéndez Pelayo sobre la filosofía tomista le han enfurecido profundamente, y frente a esta actitud defenderá que la filosofía tomista es la única filosofía verdadera y la única acorde con la tradición española, acusando a su interlocutor de representar un tipo de paganismo renacentista.

La génesis de esta particular polémica se encuentra en los comentarios que el P. Joaquín Fonseca, Regente de Estudios en el convento de los PP. Dominicos de Corias (Asturias) hace del discurso de ingreso de D. Marcelino en la Academia Española, sobre «La

³⁴ *La ciencia española*, cit., pp. 293 y 294.

³⁵ *La ciencia española*, cit., p. 297.

poesía mística en España», el 6 de marzo de 1881, en una nota, la número 33, de un panegírico en honor de Santo Tomás de Aquino. Cuando esos comentarios son publicados, el P. Fonseca envía un ejemplar a Menéndez Pelayo, junto con una carta fechada el 3 de octubre de 1881. El objetivo del fraile dominico es rectificar «algunas ideas emitidas en su discurso académico sobre la filosofía de Santo Tomás». D. Marcelino guardó silencio durante un año, hasta que esa nota 33 del Triduo o Ramillete dedicado a Santo Tomás de Aquino fue publicado en *El Siglo Futuro*.

Esta «nueva» polémica tiene un interés apreciable y, a pesar del tono utilizado, guarda un nivel filosófico digno de destacar.

En el texto de esa nota 33, titulada «Defensa de la filosofía cristiana» (y que fue publicada también por *La Ciencia Cristiana*, dirigida por Ortí y Lara), se refiere el P. Fonseca a Menéndez Pelayo como «niño portentoso», «genio precoz» y «niño gigante» acusándole de que «éste no ha debido estudiar a Santo Tomás en sus verdaderas fuentes» (p. 130)³⁶ y de que no tiene «una verdadera idea de la filosofía de Santo Tomás y habla de ella en varias partes de las obras con muy poca exactitud» (p. 139). La réplica de Menéndez Pelayo se titula «Contestación a un filósofo tomista» y en ella se muestra dolido, porque

habiendo en España tantísimo filosofante, racionalista, krausista, positivista y de otros géneros innumerables a quienes hubiera sido muy oportuno refutar, confundir y deshacer en obsequio al Angel de las Escuelas... lo único que se les haya ocurrido a esos hijos de Santo Domingo y hermanos de hábito de Santo Tomás haya sido clavar en el palo a un escritor conocidamente católico y jugarle a las cañas durante tres días seguidos (El Triduo), ni más ni menos que se tratase del enemigo más pernicioso que tiene la Filosofía católica en España (p. 145).

La réplica del P. Fonseca se titula «Contestación de un tomista a un filósofo del Renacimiento» y está fechada el 11 de septiembre de 1882. Insiste en ella acerca del desconocimiento, por parte de Menéndez Pelayo, de la filosofía de Sto. Tomás y acompaña los argumentos de su contestación con juicios y expresiones del tipo,

³⁶ Las páginas que se citan junto a los textos corresponden al Tomo 2 de *La ciencia española*.

referidos, obviamente, a Menéndez Pelayo: «detalles impertinentes», «abundamiento calumnioso» y «manso y quejumbroso literato», «estado lastimoso de perturbación y de trastorno», «erudito que aspira más a citar muchos autores que a estudiar concienzudamente sus doctrinas» o «dogmatismo científico». Finalmente, M. Menéndez Pelayo contesta con una «Réplica al R. P. Fonseca, de la orden de Predicadores» en el periódico *El Siglo Futuro*. Se nota que Menéndez Pelayo está muy afectado en lo que respecta al trato recibido de un fraile de la Orden de Predicadores contra su persona de intelectual católico, «por verdadero católico —señala— me tengo, y, con todo eso, no se me ha ocurrido nunca *reírme* de hombres tales como Hegel, Stuart Mill, Herbert Spencer, Bacon, Tyndall y tantos otros... Si los católicos damos en reírnos de la ciencia de los impíos, y no en refutarlos, los impíos se reirán de nosotros, y daremos trístima idea de nuestro estado intelectual» (p. 248).

Al mismo tiempo, dice que no comprende el exclusivismo filosófico del P.Fonseca y su inflexibilidad: «Carece el P. Fonseca de espíritu histórico, como todo el que se encierra en un dogmatismo cerrado» (p. 256). Y anuncia que ha dado la «última palabra, porque no es posible discutir con fanáticos de escuela llegados a la última exaltación y azuzados por la ira» (p. 273).

Da la firme impresión de que Marcelino Menéndez Pelayo se sintió realmente herido e incomprendido por la violenta contestación del P.Fonseca. Así, podemos derivarlo del siguiente texto:

¿A qué responde tan feroz y desmedida agresión? ... ¿Cree el Padre Fonseca que es lícito, edificante y cristiano, y muy propio de un religioso y de un teólogo, escribir doscientas páginas llamando a boca llena *embustero* y *calumniador* a un hombre, sólo porque ha hecho constar el hecho evidente y certísimo de que en un libro publicado por la Comunidad de Corias con el título de *Triduo* (así se lee en la anteportada), se dedica la mayor parte del volumen a morderle y maltratarle? (p. 244).

Además, D. Marcelino aprovecha para proclamar «las tradiciones de noble independencia de la filosofía cristiana de otras edades», guiado por las cuales se ha atrevido a «disentir del tomismo rígido (o lo que dicen algunos de sus intérpretes de la doctrina tomista)». Conmueve, sin duda, la autocalificación de fidelidad al espíritu de la escolástica y de español, en mayor medida que el P. Fonseca «y los que con él piensan», añade, y su reivindicación de la libertad que,

según el santanderino: «ha reinado siempre en las Escuelas cristianas, la que la Iglesia ha autorizado en todos los siglos» (pp. 244 y 245).

* * *

La polémica de la ciencia española, más propiamente la segunda polémica de la ciencia española, que aquí he ido resumiendo, no solamente es un hecho de nuestra historia patria que debe estimular a reflexionar sobre la conexión, unas veces fructífera, otras perjudicial, entre elementos ideológicos y teorías científicas, entre las libertades de pensamiento, creencias y convicciones y la libertad de la ciencia o entre sistemas políticos y dogmas religiosos y desarrollo de la ciencia. No solamente se trata, me permito reiterarlo, de un hecho histórico que sin duda juega a favor de la importancia del pensamiento libre y de las libertades políticas para el desarrollo social y científico de una nación. También fue una polémica que sacó a la luz muchos nombres importantes del pensamiento español, desconocidos o marginados, y desde una perspectiva contemporánea nos impulsa hoy a preguntarnos por el nivel de nuestros conocimientos, de nuestra enseñanza en todos los niveles, de los centros de investigación y de la calidad y cantidad de investigación científica de nuestras Universidades y de su profesorado. No es mi propósito aquí discutir sobre la importancia cívica e intelectual de la educación y de la investigación científica. Sin duda el conocimiento nos hace más libres y más humanos, nos sitúa más cerca de nuestra condición y dignidad, sabedores de nuestras grandezas y miserias. Hay que agradecer a estos ilustres polemistas de la ciencia española que nos den motivos para pensar mejor sobre nuestro presente. Nadie puede poner en tela de juicio el patriotismo y los profundos conocimientos de D. Marcelino Menéndez Pelayo, pero tampoco tenemos que dudar de la buena fe ni de la legitimidad de las posturas de sus oponentes, porque entre otras cosas nos enseñaron (y me estoy refiriendo a los neokantianos), que a partir de una crítica y autocritica de la aportación española al pensamiento universal se está en el buen camino para poner las bases, o seguir en la correcta senda, que fecunda el desenvolvimiento de la ciencia. Y el refuerzo de la vanidad nacional nunca podrá sustituir al verdadero conocimiento.

Por otro lado, superar la polémica de las dos Españas es impres-

cindible para una convivencia libre, democrática y en condiciones de igualdad. Aunque en otro tiempo de guerra civil Niceto Alcalá Zamora acuñó, en 1937, la idea de una tercera España, en la que indudablemente yo me hubiera situado en relación con aquel sangriento conflicto, opino que es un planteamiento al que se debe renunciar hoy. Lo que sí es estrictamente necesario es elevar el nivel de la democracia española, hoy por hoy bastante devaluada, enriquecer las discusiones políticas, mejorar los canales de participación y representación, estimular las virtudes cívicas con educación y con ejemplos de ciudadanía, rechazar de plano los gestos que solo ocultan rencor y revanchismo, evitar la mediocridad cultural y una educación desprestigiada, dar cauce al respeto y las buenas maneras y, por supuesto, gobernar de acuerdo al bien común y al interés general, nunca cautivos de los intereses privados y de la insolidaridad entre las regiones y nacionalidades que conforman ese proyecto común que es España.

Santos Juliá, en la última página de su libro *Historia de las dos Españas*, ha señalado: «Cuando se habla el lenguaje de la democracia resulta más que embarazoso, ridículo remontarse a los orígenes eternos de la nación, a la grandeza del pasado, a las guerras contra invasores y traidores; carece de sentido hablar de unidad de cultura, de identidades propias, de esencias católicas; los relatos de decadencia, muerte y resurrección, las disquisiciones sobre España como problema o España sin problema se convierten en curiosidades de tiempos pasados»³⁷. Convendría recordarle a nuestro insigne colega que aunque la consolidación de la democracia española exija buenas dosis de generosidad y sacrificios en pro de la convivencia, ningún sistema político puede apoyarse en la improvisación cultural y, menos aún, en legitimidades ficticias, interesadas y negadoras de la historia.

Y ya para finalizar: de la polémica sobre la ciencia española hemos de rescatar una serie de nombres que allí aparecieron y que forman parte de nuestra historia de las ideas. La valoración, por

³⁷ Santos Juliá, *Historia de las dos Españas*, cit., p. 462. Sobre algunos de los puntos tratados en este libro ver también Jordi Gracia, *La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España*, Anagrama, Barcelona 2004; y Pedro González Cuevas, *El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX. De la crisis de la Restauración al Estado de partidos (1898-2000)*, Tecnos, Madrid 2005.

ejemplo, que M. Menéndez Pelayo hizo de Raimundo Lulio, Luis Vives o Francisco Suárez es muy atinada y oportuna. También debemos tener en cuenta las cuestiones de fondo allí planteadas, las de las relaciones entre el desarrollo de la ciencia y la sociedad o la de la importancia del libre pensamiento para el progreso filosófico y cultural. Todos los añadidos ideológicos pueden dejarse al margen, pero sabiendo que estuvieron allí y sin olvidar que sólo el conocimiento de nuestro pasado histórico puede ayudarnos a defendernos de lo indeseable que en él reside. Pero no nos hagamos demasiadas ilusiones al respecto, pues la historia, como los recuerdos, las convicciones, los afectos y los viejos amores nunca nos van a dejar en paz.

Eusebio Fernández García
Universidad Carlos III de Madrid

A FORMAÇÃO DA CULTURA JURÍDICA NACIONAL E OS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL: UMA ANÁLISE PRELIMINAR (1854-1879)

Sumario: 1. Delineando o caminho: em busca da cultura jurídica brasileira.—2. As academias de direito brasileiras: fase de formação.—3. As academias de direito entre 1854 e 1879 e a formação da cultura jurídica nacional.

1. *Delineando o caminho: em busca da cultura jurídica brasileira*

O Brasil do século XIX, logo após seu momento de independência política (em 1822), coloca-se o desafio de construção de uma identidade nacional separada da herança portuguesa. No âmbito cultural, este desafio significa começar a construir a partir dos inícios, já que a metrópole portuguesa —ao contrário do caso das colonizações espanholas¹— nunca teve como projeto promover qualquer forma de cultura na sua colônia atlântica.

Havia, na época colonial, uma deliberada política de centralização na formação acadêmica dos quadros burocráticos (o que via de regra ocorria na Universidade de Coimbra), coibindo a formação de qualquer instituição superior no Brasil. Era estrategicamente importante para Portugal que as colônias não tivessem centros de formação superior, de modo a que toda a burocracia colonial deveria ter uma formação totalmente portuguesa. É simbólica, nesse sentido, diante de uma solicitação das câmaras municipais de Minas Gerais que propuseram criar um centro de formação de médicos às suas próprias custas, a resposta dada pelo Conselho Ultramarino português: «que um dos mais fortes vínculos que sustentavam a

¹ Segundo José Murilo de Carvalho («in» *Cidadania no Brasil: o longo caminho*. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2002, p. 23), no final do período colonial havia vinte e três Universidades instaladas na América espanhola e nenhuma no Brasil.

dependência de nossas colônias era a necessidade de vir estudar a Portugal; que este vínculo não se devia relaxar; ... [que] o precedente poderia talvez, com alguma conjuntura para o futuro, facilitar o estabelecimento de alguma aula de jurisprudência...até chegar o ponto de cortar o vínculo de dependência»². O estabelecimento de universidades no Brasil (e, como se vê, de modo particular a criação de faculdades de direito) era considerado uma ameaça ao domínio colonial.

De outro lado, do ponto de vista jurídico, o jovem país independente não teve outra escolha senão organizar-se a partir de todo o aparato legislativo da antiga metrópole, de modo que, em 20 de outubro de 1823, promulga-se uma lei que determina que continuassem em vigor as Ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções promulgadas pelos reis de Portugal até 25 de abril de 1821, «enquanto se não organizar um novo código ou não forem especialmente alteradas». Fica, deste modo, estabelecida uma relação de continuidade com a cultura jurídica portuguesa, incrementada pelo fato de que a quase totalidade dos quadros burocráticos da esfera jurídica era formada em Coimbra. Por isso, logo após a independência, e na senda da construção nacional, iniciam-se os debates para a criação dos cursos jurídicos no Brasil que, após controvérsias, são instituídos pela lei de 11 de agosto de 1827 e começam a funcionar logo no ano seguinte nas cidades de Olinda e São Paulo.

Desse modo, a análise da formação de uma cultura jurídica brasileira deve ter seu ponto de partida no momento da independência política, quando a vida jurídica do Brasil começa a ganhar autonomia com relação àquela de Portugal. E a criação das faculdades de direito —embora envoltas em dificuldades que serão adiante estudadas— constituem um capítulo importantíssimo no estabelecimento de contornos desta cultura.

Toma-se aqui o conceito de cultura jurídica como algo ao mesmo tempo bastante indefinido em seus contornos e em sua caracterização (sobretudo num momento em que ela está em formação e que não encontra aparatos institucionais privilegiados para circular;

² *Revista do Arquivo Público Mineiro*, vol. XV, p. 468, «apud» Américo Jacobina Lacombe, A cultura jurídica «in» Sergio Buarque de Holanda (org). *História geral da civilização brasileira*: tomo II - o Brasil monárquico (vol. 5), Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2004, 8.^a ed., p. 420.

como no caso do Brasil da primeira metade do século XIX), mas ao mesmo tempo como algo palpável e concreto. Muito embora o Brasil seja claramente herdeiro de uma tradição jurídica européia (e, em menor medida, no âmbito do direito público, também norte americana), o fato é que esta tradição é aqui trabalhada, burilada e adaptada às inúmeras particularidades e contradições vividas pelo jovem Estado, de modo a dar contornos não arbitrários e bastante típicos ao direito. O Brasil entra na época liberal como um país que recém conquistou sua independência política e que busca estruturar-se jurídica e politicamente num contexto de tensão. De um lado, estão presentes as sombras do velho mundo do antigo regime, que, no âmbito jurídico, pode-se perceber claramente na renitência da vigência das velhas Ordenações Filipinas e da legislação portuguesa colonial (sobretudo no direito privado); mas de outro lado, num convívio nada harmônico, percebe-se um conjunto de idéias novas, provenientes dos lugares em que ocorreram revoluções liberais, que tentam colocar o jovem Estado brasileiro entre as nações modernas (o que se pode perceber pelas legislações «modernizadoras», como o código criminal de 1830, a «lei de terras» de 1850³, por exemplo). Entre essa tensão, o Brasil e sua cultura jurídica devem se constituir num contexto político em que há um Estado oligárquico e autoritário, um contexto econômico baseado no latifúndio e na monocultura e um contexto social de exclusão e de prevalência de trabalho escravo (o que vai perdurar até 1888). Tudo isso, como se pode prever, dará uma peculiaridade à cultura jurídica brasileira (gestada e nascida na primeira metade do século XIX, a partir do legado português), que vai formar-se num processo em que deverá ler e experimentar o direito adaptando as tradições recebidas, relando e dando um novo significado à cultura herdada, inaugurando um modo próprio de lidar com o direito. A cultura jurídica brasileira, assim, será produto desta tensão que só pode ser percebida nesse palco histórico.

Para que se perceba essa «espessura» daquilo que aqui se denomina cultura jurídica, porém, é necessário afastar-se daquela idéia do direito como mera técnica vazia ou mero instrumento de repressão social. É necessário desvincular a essencialidade do direi-

³ Ricardo Marcelo Fonseca, «A “Lei de Terras” e o advento da propriedade moderna no Brasil», *Anuário Mexicano de Historia del Derecho*, Ciudad do México, XVII, (2005), p. 97/112.

to do aparato político (o Estado) que dele faz uso. É necessário compreender, com Grossi, que «o “jurídico” não é somente um mecanismo de organização da realidade, mas é pensado e construído em um nível menos empobrecedor; é aliás expressivo não da quotidianidade, mas de raízes profundas, sendo ligado aos valores essenciais de uma sociedade; é, enfim, essa mesma civilização pulsante de uma comunidade histórica»⁴. É, portanto, algo histórico, e, assim, pode ser compreendido.

Com base nisso, este estudo tem o propósito de analisar, de um modo preliminar e provisório, as relações entre a formação desta cultura jurídica brasileira, com suas tensões e contradições internas, e as faculdades de direito no Brasil. Na medida em que os cursos de Olinda (depois transferida para Recife) e de São Paulo foram os dois únicos pólos formadores de bacharéis em direito em todo o período imperial (1822-1889), o papel desempenhado por eles no estabelecimento de uma cultura jurídica brasileira com contornos próprios não pode ser desdenhado (como o faz parte dos estudos sobre este tema, como será visto a seguir).

Para enfrentar esta análise, opta-se por privilegiar o período que vai de 1854 (ano em que houve uma grande reforma nas duas faculdades, além de ter sido a data em que se operou a transferência da faculdade de Olinda para Recife) até 1879 (data em que entra em vigor a «reforma do ensino livre», que, de acordo com a maioria dos analistas, enfraqueceu e precarizou o ensino jurídico no Brasil⁵). Ademais, pode-se perceber que é só na segunda metade do século XIX que os lentes (como eram chamados os professores) das academias de direito serão majoritariamente brasileiros e com formação nas academias brasileiras, dentro de um contexto jurídico-político no qual o país já tinha trilhado caminhos próprios, diversos do da

⁴ Paolo Grossi, «*Pensiero giuridico: appunti per una voce enciclopedica*» «in» *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. XVII, (anno 1988), pp. 236/243

⁵ Joaquim Nabuco, nos debates parlamentares que antecederam a reforma, quase que profeticamente, assinalou que «as vossas faculdades livres serão um tremendo fiasco ou um tremendo perigo. As faculdades livres, se forem ensaiadas no Brasil, não minorariam o ensino superior. Fállo-iam cair ao nível a que chegou o ensino secundário...» «apud» Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo*, São Paulo: perspectiva, 1982, 2.^a ed., p. 88.

sua antiga metrópole, no que diz respeito à sua cultura jurídica. Neste período, de fato, as várias contradições próprias das vicissitudes brasileiras já tinham se encarnado nas discussões jurídicas nacionais, ensejando reflexões e soluções próprias do contexto brasileiro. Por fim, esse período entre estas duas reformas do ensino, como se verá, representa a consolidação de algo que nos primeiros anos de funcionamento das faculdades de direito brasileiras estava apenas num estágio inicial. Trata-se, enfim, de uma época em que há uma primeira fase de maturação das academias de direito no Brasil que vai fornecer, a nosso ver, as condições de possibilidade para a formação de uma cultura jurídica nacional.

2. *As academias de direito brasileiras: fase de formação*

O período inicial do funcionamento das Faculdades de direito no Brasil (de Olinda e de São Paulo), que se estende desde sua criação em 1828 até a reforma de 1854, é costumeiramente apontado como uma fase difícil e precária. Nas palavras de Venâncio Filho, as «dificuldades para o funcionamento dos cursos eram, porém, de toda ordem, tanto quanto às instalações materiais como quanto ao pessoal»⁶. Embora surgidas no calor do entusiasmo ligado ao contexto da independência política brasileira para criar uma *intelligentsia* brasileira apta a enfrentar os problemas da nação e moldar novas consciências, além de profissionalizar a política e impulsionar o nacionalismo, os relatos iniciais do funcionamento destas academias enfatizam sobretudo o desrespeito dos alunos e a falta de autoridade dos mestres, num contexto pouco afeito ao estudo e à reflexão⁷.

Em Pernambuco, este momento ficou marcado pela provisoriade da faculdade de Olinda. Tudo parecia ali ser transitório: tanto os alunos e professores (marcadamente faltosos e ausentes) quanto as instalações precárias. A faculdade foi instalada no Convento de São Bento (até 1852, pois desse ano até 1854 a faculdade transferiu-se para o chamado «Casarão do Hospício»). De todo modo, trata-se de

⁶ Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo...*, p. 37.

⁷ Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder: bacharelismo liberal na política brasileira*, Rio de Janeiro, Paz e terra, 1988, p. 78 e Lilia Moritz Schwarcz, *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930)*, São Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 141/142.

um período no qual os depoimentos testemunham uma carência da Faculdade olindense do ponto de vista material e intelectual⁸. Em São Paulo a situação não era diferente: havia problemas sérios de instalação, de modo que —a exemplo do que ocorreu em Olinda— não houve outra alternativa senão utilizar um velho convento (Convento de São Francisco), construído em 1684. Consta inclusive que os frades, que foram obrigados a deixar progressivamente o prédio com a instalação da faculdade, tiveram uma relação nada amistosa com os estudantes. Isso sem mencionar os sérios problemas de arregimentação do pessoal docente que, tal como na academia nordestina⁹, deixavam no ar uma certa impressão de provisoriidade. A tal ponto do diretor da casa, em 1831, aventar até mesmo a possibilidade de «fechar as aulas, com prejuízos irreparáveis à mocidade» em vista das reiteradas faltas de professores¹⁰.

A estrutura curricular adotada era prevista pela lei de 11 de agosto de 1827 e copiava a estrutura do curso de direito da Universidade de Coimbra. No primeiro ano estudavam-se as cadeiras de direito natural, público, análise da Constituição do Império, além de direito das gentes e diplomacia. No segundo ano havia a continuação das matérias do ano anterior, bem como o estudo de direito público eclesiástico. No terceiro ano estudava-se direito civil pátrio e direito pátrio criminal, com a teoria do processo criminal. Já no quarto ano havia a continuação do direito civil pátrio, além do direito mercantil e marítimo. Finalmente, no quinto ano estudavam-se «teoria e prática do processo adotado pelas leis do império», além de (e aqui houve uma significativa inovação) Economia Política¹¹.

Muito embora os Estatutos do Visconde de Cachoeira (elaborados para o funcionamento —nunca ultimado— de um curso no Rio de Janeiro, e que eram inclusive citados no art. 10.º da lei de 11 de agosto como subsídio necessário ao funcionamento dos cursos) apontassem para um ensino de amplitude teórica, que servisse não só para formar «sábios magistrados e peritos advogados», mas também «dignos deputados e senadores para ocuparem os lugares diplomáticos e mais empregos do Estado»¹², o fato é que já o currículo

⁸ Lilia Moritz Schwarcz, *O espetáculo das raças...*, p. 145/146.

⁹ Lilia Moritz Schwarcz, *O espetáculo das raças...*, p. 174.

¹⁰ Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo...*, p. 42.

¹¹ Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo...*, p. 28.

¹² Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo...*, p. 31.

implementado era de cunho fortemente tradicional. A presença do direito público eclesiástico na grade curricular, bem como o tom conservador que era dado à cadeira de Direito Natural, refletia uma ideologia mais ligada às raízes do antigo regime português do que aos ares liberalizantes presentes em grande parte da nova Constituição do Império brasileiro de 1824.

Ademais, a lei de 11 de agosto de 1827 havia excluído a cadeira de direito romano (que inicialmente compunha o projeto de lei original, em 1826) e, no último momento, igualmente excluía as disciplinas de «História das Legislações Antigas e da Legislação Nacional», «Instituições Canônicas» e «História da Igreja». Como se vê, e seguindo as palavras de Aloysio Ferraz Pereira, no momento da definição curricular, predominou o espírito prático dos legisladores que, conservaram apenas o essencial na formação dos juristas, políticos e administradores¹³.

Num escrito sobre a cultura jurídica brasileira, Clóvis Beviláqua, ele próprio um dos grandes nomes da Escola do Recife no fim do século XIX e início do século XX, além de autor de uma importante «História da faculdade de direito do Recife»¹⁴, dirá que os cursos jurídicos de São Paulo e Olinda, nesses primeiros anos, não passavam de «bisonhos arremedos de Coimbra», sendo a influência teórica portuguesa predominante (tanto no ensino quanto no foro) até a metade do século XIX¹⁵. Com toda essa situação, como se pode concluir facilmente, não houve propriamente um ambiente intelectual adequado para a formação de uma cultura jurídica nacional sólida e que pudesse afirmar com vigor uma tipicidade que a distinguísse da herança portuguesa. A cultura jurídica brasileira, na primeira metade do século XIX, ainda não tinha tido condições de sair de sua situação de um casulo.

Todavia, em meados do século a situação começa a tomar outros rumos. A década de 1850, inicialmente marcada principalmente pela

¹³ Aloysio Ferraz Pereira, O uso brasileiro do direito romano no século XIX: papel de Teixeira de Freitas «in» Sandro Schipani (a cura di), *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano*, Padova, CEDAM, s/d, pp. 84/85.

¹⁴ Clóvis Bevilacqua, *História da faculdade de direito do Recife*, Brasília, INL/Conselho Federal de Cultura, 1977, 2.^a ed..

¹⁵ «Apud» Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo...*, p. 53.

proibição do tráfico de escravos (lei de 4 de setembro de 1850), será aquela que, nas palavras de Venâncio Filho, no campo político, «após o período tempestuoso da regência, com a pacificação das províncias e o término da guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul, chegava o Império a uma fase de estabilidade, com o gabinete de conciliação do Marquês do Paraná. Não será portanto por mera coincidência que o início da segunda metade do século XIX passa a ser apontado como a consolidação e o apogeu do Império, correspondendo também a uma fase de grandes transformações jurídicas»¹⁶. É em tal contexto que advém o Decreto 1386, de 28 de abril de 1854, que dá novos estatutos aos cursos de direito e praticamente encerra a fase de transitoriedade que marcaram os anos iniciais das academias jurídicas. É esse novo contexto dos cursos jurídicos (que representa também um novo contexto da cultura jurídica brasileira), inaugurados com esse decreto, que será a seguir analisado.

3. *As academias de direito entre 1854 e 1879 e a formação da cultura jurídica nacional*

É certo que o decreto 1386, de 1854, assinado pelo ministro do Império Luís Pedreira de Couto Ferraz, que trouxe novos estatutos às faculdades de direito no Brasil, carrega importantes alterações no ensino do direito. Insere a cadeira de Direito Romano e de Direito Administrativo como permanentes. Estabelece novas regras disciplinares para os estudantes e minudencia o modo como os professores deveriam proceder às avaliações. O espírito geral da reforma vinha no sentido de dar maior rigidez ao ensino, superando a fase anterior de impasses e precariedade. Todavia, não foi somente o Decreto o responsável por novos tempos no ensino jurídico brasileiro. O próprio contexto político e econômico era diferente, já que havia no ar, mais do que nunca houvera antes, o desejo de inserir o Brasil numa modernidade política e jurídica. Já do ponto de vista da cultura, a partir da década de 1850 o estofo necessário para aflorar um pensamento jurídico brasileiro —separado da matriz portuguesa, que lhe fizera sobra até então— parecia estabelecido. Havia novas gerações de professores e de juristas que haviam

¹⁶ Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo...*, p. 64.

sido formados nas academias brasileiras, sendo que alguns deles já gozavam de amplo prestígio nacional. Ademais, já distante há quase trinta anos do processo de independência política, podia-se vislumbrar um arcabouço de leis (sem falar da própria Constituição de 1824), de comentários doutrinários a essas leis e decisões judiciais que constituíam um «sistema» eminentemente brasileiro, com tipicidades marcantes e diversas de qualquer outra experiência jurídica estrangeira, mesmo a portuguesa¹⁷. E foi também neste ano —mudança deveras importante— que a Faculdade de direito de Olinda se transfere definitivamente para o Recife.

Schwarcz anota que a mudança para Recife em 1854 assinalará uma guinada tanto geográfica quanto intelectual no ensino jurídico em Pernambuco. Aponta também que uma vez vencidos os impasses dos primeiros anos de fundação, a escola de direito de São Paulo constituiria um dos centros intelectuais do país¹⁸. E, com efeito, isso será progressivamente sentido e repetido ao longo do século XIX. Ruy Barbosa, que iniciara seus estudos em Recife e os terminara em São Paulo, em 1870, disse, em pronunciamento feito em 1909, que «o magistério de São Paulo exerceu sempre, de um grau mais alto, com influência muito mais poderosa, e muito mais larga amplitude, a sua missão nacional. (...) A São Paulo», continua Ruy, «lhe cabem os dois títulos no mesmo brasão: professa a liberdade e ensina a justiça»¹⁹.

Há, todavia, controvérsias acerca desse papel intelectual desempenhado pelas escolas de direito brasileiras desse período. Em seu

¹⁷ Há de se lembrar que nessa época Portugal passava por transformações liberais importantes que, na década seguinte (em 1867), iriam culminar com a promulgação de seu código civil, de clara inspiração liberal francesa. Já o Brasil —mais do que a antiga metrópole— ainda convivia com um ordenamento jurídico marcado pela tensão entre o antigo regime e a época liberal, de modo que, por exemplo, a experiência da codificação civil só ocorrerá no século XX (em 1916) que então sofrerá uma maior influência da codificação alemã. Sobre as vicissitudes do processo de codificação no Brasil, vide Ricardo Marcelo Fonseca, *Dal diritto coloniale alla codificazione: appunti sulla cultura giuridica brasiliana tra fine settecento e i primi novecento* «in» *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, Giuffrè editore, numero 33, (anno 2004), no prelo.

¹⁸ Lilia Moritz Schwarcz, *O espetáculo das raças...*, p. 146 e 174.

¹⁹ Rui Barbosa, Revista da faculdade de direito de São Paulo, p. 153, «apud» Spencer Vampré, *Memórias para a história da Academia de São Paulo* (vol. II), 2.^a ed. Brasília, INL/Conselho federal de Cultura, 1977, p. 163.

conhecido estudo sobre o bacharelismo liberal do século XIX na Academia de São Paulo, o sociólogo Sérgio Adorno insiste em que o «ambiente extra-ensino, independente da relação didática estabelecida entre corpo docente e corpo discente, foi efetivamente responsável pela formação profissional do bacharel»²⁰. Aduz ele ainda que «não se afigura comprovável que o ensino jurídico do império tenha sido eficaz a ponto de modificar o comportamento do corpo discente e lhe propiciar, através de um plano pedagógico definido, uma formação profissional»²¹. A partir da constatação de que a estrutura curricular nutriu-se de orientações filosóficas e idéias jurídicas contrastantes entre si, conclui o sociólogo da USP que, no final das contas, a Escola de direito paulista «produziu uma safra numericamente inexpressiva de jurisconsultos, em favor de um contingente quantitativamente expressivo de advogados, administradores, parlamentares, oradores, jornalistas e artistas»²². Para comprovar tais dados, traz tabelas nas quais a relação das funções desempenhadas (dentro e fora do Estado) pelos professores da faculdade paulista no Império denotam que poucos deles eram professores com dedicação exclusiva ao magistério. Ademais, tais tabelas também indicam que, salvo algumas exceções, a maioria dos professores de São Paulo teve produção acadêmica (livros, compêndios) extremamente reduzida ou, às vezes, até inexistentes.²³ Por tudo isso, fazendo uma avaliação geral do papel da Academia de São Paulo como formadora de juristas, aduz, em conclusão, que a estrutura curricular «teve pelo menos o efeito de propiciar a transmissão de uma ideologia particular ou promover treinamento específico para seus estudantes»²⁴, de modo que, no final das contas, o «ensino jurídico no império nunca existiu concretamente»²⁵.

Na medida em que o foco deste artigo é precisamente analisar as conexões entre a formação da cultura jurídica brasileira e as Faculdades de direito no império, parece relevante discutir algumas dessas observações, sobretudo as de Sergio Adorno. Nesse debate, a posição aqui defendida acerca das relações entre a formação da

²⁰ Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 92.

²¹ Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 93.

²² Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 96 e 102.

²³ Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 122/131.

²⁴ Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 143.

²⁵ Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 94.

cultura jurídica brasileira e o papel das Academias de direito no Império serão estabelecidas.

Em primeiro lugar, não parece acertado supor que os estudantes «ignoravam» a formação jurídica que dispunham nas faculdades de direito no Império (sobretudo a partir de 1854) ou que esta lhes fosse imprestável. Se é certo que havia uma série de precariedades (sobretudo iniciais) do ensino jurídico, bem como um grande auto-didatismo, além da presença importante das atividades de jornalismo entre os estudantes, isso não pode significar que não houvesse uma prevalente preocupação com as disciplinas cursadas, que, afinal, eram aquelas as que possibilitariam o passaporte para a vida profissional como advogados, juízes, etc. Percebe-se, é certo, uma formação bastante particular, onde as atividades extra-classe tinham um papel relevante e a idéia da formação política (intrínseca à convicção de que ali estava sendo formada a elite nacional) era conexa à formação jurídica. Ruy Barbosa, nesse sentido, já assinalava que na época de sua formação «o mundo acadêmico e o mundo político se penetravam mutuamente»²⁶. Mas, a partir destas peculiaridades, chegar-se à conclusão da inexistência da formação jurídica parece excessivo.

Sobretudo a partir da segunda metade do século os testemunhos são eloqüentes quanto à existência de alguns grandes mestres nas academias, que marcaram as gerações subseqüentes. Nomes como Tobias Barreto, Francisco Paula Batista²⁷, Aprígio Guimarães²⁸ no

²⁶ «Apud» Spencer Vampré, *Memórias para a história da Academia de São Paulo...*, p. 163.

²⁷ «Não foi, porém a política nem o jornalismo, em que se assinalou vantajosamente, nem a oratória, em que primou pela facilidade de expressão, e pelo vigor da dialética, nem outro qualquer gênero de atividade mental, que lhe deu celebridade. Fora as suas lições na Faculdade de Direito, e os dois compêndios, que publicou, para uso de seus alunos e do foro... Tão grande prestígio adquiriu o ensino de Paula Batista que a imaginação popular o envolveu numa auréola de lenda». Clóvis Bevilacqua, *História da faculdade de direito do Recife...*, p. 309.

²⁸ Autor de vasta obra jurídica, sobre ele testemunha Clóvis Bevilacqua o seguinte: «Como professor de direito, conquistou as mais largas simpatias entre os estudantes, que o idolatravam, porque Aprígio Guimarães foi um espírito profundamente liberal, tolerante e sensível, qualidades que o tornaram o guia dos moços. Seu vulto, iluminado por essa particular simpatia, (...) ficou gravada na memória dos que o conheceram». Clóvis Bevilacqua, *História da faculdade de direito do Recife...*, p. 330/331.

Recife e em Olinda e Duarte de Azevedo²⁹ e João Monteiro³⁰ em São Paulo, indubitavelmente foram responsáveis pela circulação de idéias jurídicas (embora não só) que marcaram a atuação das faculdades de direito em suas épocas. Não seria crível que estes (entre vários outros) professores das faculdades de direito —que, é de se lembrar, constituíam quase que as únicas instituições de ensino superior no Brasil da época e as únicas faculdades de direito— fossem absolutamente desprezados pelo corpo discente que estaria mais preocupado em atividades políticas e jornalísticas. Sobre tudo a partir do momento em que o predomínio da legislação e da doutrina brasileira começa a suplantir a portuguesa no ensino e na prática, não é razoável supor que os estudantes haurissem sua formação inteiramente de um autodidatismo que tenha como pressuposto um total vazio da parte dos mestres.

Não impressionam os dados que mostram que as faculdades de direito do império formavam mais advogados, administradores e políticos do que jurisconsultos. Afinal, os estudiosos que acabam, no futuro, por contribuir na construção da cultura (no nosso caso, a cultura jurídica) são sempre uma minoria absoluta entre os egressos das instituições de ensino - máxime num curso como o de direito, que atribua tantas outras possibilidades profissionais aos jovens bacharéis. Esta proporcionalidade na produção de personalidades

²⁹ Assim Spencer Vampré comentou o papel deste jurista na academia de São Paulo: «jurisconsulto acatadíssimo, deixou, no livro *Controvérsias jurídicas*, o melhor de suas elocubrações. Redigiu ainda um *Projeto de Código de Processo Civil para o Estado de São Paulo*, infelizmente não adotado. (...) Tipo perfeito de professor; reunia Duarte de Azevedo as qualidades melhores para o ensino: - a precisão, método, a clareza, a simplicidade expositiva, a profundidade de conceitos, a elegância da forma, e uma irradiante simpatia» «in» Spencer Vampré, *Memórias para a história da Academia de São Paulo...*, p. 124.

³⁰ Testemunho sobre João Monteiro: «Jurisconsulto, eloquentíssimo orador, - diz um seu biógrafo, - conhecendo a fundo as disciplinas, em que se especializou, primando pela cultura literária, e pelo gosto artístico, que lhe esmaltavam o alto merecimento profissional, inteligentíssimo, erudito mesmo (...). A *Teoria do processo Civil e Comercial*, indisputavelmente a melhor de suas obras, e uma das de maior utilidade e manuseio no foro, se ressentia mesmo de tal ou qual garridice literária (...). Em todo o caso, lente talentoso e erudito, e uma das maiores figuras da Academia em todos os tempos.» «in» Spencer Vampré, *Memórias para a história da Academia de São Paulo...*, pp. 298/299.

culturais parece sempre ter sido assim, como o é, aliás, até hoje. Por isso, a suposta «pouca quantidade» de juristas não deve levar à conclusão sobre as academias eram necessariamente precárias e culturalmente vazias.

Por outro lado, é de se lembrar que as faculdades de direito do império eram reguladas de perto pelo poder central. A sua estrutura curricular e o seu funcionamento partiam de regras do Estado (seja do parlamento ou do ministério do Império) e, por isso, as vicissitudes do ensino jurídico eram objeto de debates públicos, tanto na câmara quanto no senado. Aliás, o próprio fato do Estado promover (ou ao menor tentar promover) uma série de sucessivas reformas no ensino das faculdades de direito no Brasil no período aqui privilegiado (em 1854, 1865, 1871 e 1879) demonstram como o dia a dia da didática do ensino não era algo deixado de lado pela esfera pública de então. Ao contrário, a intenção de controle era bastante sensível. E tal controle não só compreendia a inserção de determinadas disciplinas (como ocorreu com o direito romano e o direito administrativo, em 1854), como dizia respeito inclusive aos próprios compêndios que deveriam ser utilizados pelos professores em suas aulas. Ficou bastante conhecido o episódio ocorrido em 1860, no qual a congregação da faculdade de direito do Recife, contrariando a determinação do Império que *determinara* a adoção do compêndio de Pedro Autran da Mata Albuquerque para a disciplina de Economia Política, decidira que ele somente deveria ser adotado se assim o entendesse o lente da cadeira. Diante disso, o Ministro do Império João de Almeida Pereira Filho censurou o ato da congregação, que não poderia expressar tal autonomia. Por meio do Aviso de 29 de dezembro de 1860, afirmou o ministro que «a adoção de compêndios não é direito exclusivo ou positivo, dos lentes; porque importaria isso privar o Governo de exercer interferência e inspeção, a respeito de uma matéria tão transcendente no ensino público, o que é inadmissível»³¹. Tal incidente, «como não poderia deixar de acontecer»³², resultou na efetiva adoção do referido compêndio. Dessa forma, num contexto como esse, não parece razoável a pressuposição de que «o ensino jurídico nunca existiu concretamente», como diz Adorno.

³¹ Spencer Vampré, *Memórias para a história da Academia de São Paulo...*, p. 81 e Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 152.

³² Spencer Vampré, *Memórias para a história da Academia de São Paulo...*, p. 81.

Ademais, é de se lembrar que os maiores juristas brasileiros do século XIX (citem-se como exemplos Teixeira de Freitas, da turma de 1864, Pimenta Bueno, da turma de 1833 e o já mencionado Ruy Barbosa, da turma de 1870) eram egressos das academias de direito brasileiras. O fato deles não terem jamais composto as fileiras docentes das faculdades de direito, por outro lado, não quer significar, por si só, que tivesse existido uma relação de estranheza entre as academias e esses doutrinadores ou que a doutrina ensinada nas faculdades ignorassem sua importante contribuição teórica (como sugere Adorno). Para ficar apenas num exemplo (pois conclusões mais abrangentes nesse sentido dependeriam de uma investigação específica), é de se notar a imensa repercussão acadêmica da célebre «consolidação das leis civis», de Teixeira de Freitas³³, tanto dentro da academia quanto nos foros.

É importante não perder de vista, repita-se, que no contexto do império as faculdades de direito de São Paulo e Recife eram as únicas instituições formadoras de bacharéis, sendo, queira-se ou não, e para o bem e para o mal, a catalisadora da cultura jurídica do período. Indicar uma série de deficiências das academias (quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista didático) não deve levar à conclusão automática no sentido de que havia uma precariedade absoluta (ou até mesmo uma inexistência) da formação jurídica. O recolhimento de detalhes pitorescos sobre o desrespeito dos alunos para com os professores ou sobre o anacronismo de certas aulas não pode levar à conclusão (como faz Adorno), de modo absoluto, que tudo o que se fazia, praticava e estudava nos cursos jurídicos era algo completamente alheio aos estudantes.

³³ Tal «Consolidação» foi um trabalho preparatório para um projeto de codificação que acabou não sendo terminado por Teixeira de Freitas. Mas o esforço de reunião e interpretação (a «Consolidação» é precedida de uma longa e célebre «Introdução») de toda a legislação civil vigente no império (que num contexto ainda não codificado, via-se num emaranhado de leis portuguesas, brasileiras, além das Ordenações Filipinas) acabou servindo de guia para toda a comunidade jurídica oitocentista, dentro e fora da academia. Teixeira de Freitas era considerado, com certa unanimidade, o maior jurista do império — e o fato dele não ser professor de uma das Academias não parece tê-lo colocado numa relação de estranheza ou exclusão das discussões acadêmicas.

As precariedades (que eram reais) do ensino jurídico do século XIX eram correspondentes às precariedades estruturais do próprio Estado e da vida intelectual brasileira do período. Não seria cabível esperar que a arcaica e inculta sociedade brasileira do século XIX produzisse cursos superiores que tivessem qualidades idênticas a algumas das universidades européias (ou mesmo a algumas latino americanas) e muito menos seria de se esperar que as faculdades do século XIX fossem iguais às do século XX. Os cursos de direito brasileiros desse período eram peixes dentro do aquário adequado, e as limitações por eles encontrados eram as limitações históricas da própria sociedade brasileira.

De qualquer modo, não se pode perder de vista a indubitável existência de circulação de valores e de sentidos, sempre ocorrida de modo tenso e ainda carente de uma verificação empírica profunda, entre academia e o Estado (que se dava por exemplo sob a forma de controle, como já visto antes), entre academia e a doutrina brasileira externa às faculdades (como no caso das obras de Teixeira de Freitas e Ruy Barbosa, mas não só), entre academia e outras instituições jurídicas culturais (como por exemplo o Instituto dos Advogados Brasileiros, fundado em 1843³⁴) e entre academia brasileira e o foro. É nessa tensão que se produzia esse «caldo» que pode ser definido como cultura jurídica brasileira do século XIX.

Um entre tantos exemplos possíveis a serem indicados foi a recepção no Brasil na segunda metade do século XIX das idéias do jurista alemão Fredrich Carl von Savigny. Venâncio Filho vai assinalar que nas faculdades de direito, «deixando de lado o praxismo dos primeiros anos, de influência tipicamente portuguesa, (...) pode-se destacar na segunda metade do século XIX (...) a influência de Savigny»³⁵, influência esta que foi bem mais sentida na Faculdade pernambucana, onde o movimento conhecido como «Escola do Recife» tinha tons claramente germanófilos³⁶. Paralelamente a este movimento presente nas academias, porém, percebe-se também a

³⁴ Sobre o papel do Instituto dos Advogados Brasileiros no cenário imperial, «O Instituto dos Advogados Brasileiros e a Cultura jurídica nacional» «in» Silvio Meira, *Direito vivo*, Goiânia, Ed. UFG, 1984, pp. 265/292.

³⁵ Alberto Venâncio Filho, *Das arcadas ao bacharelismo...*, p. 151.

³⁶ Mario Losano, *La scuola di Recife e l'influenza tedesca sul diritto brasiliano* «in» Giovanni Tarello (a cura di), *Materiali per la storia della cultura giuridica*, v. IV, Bolonha, Il mulino, 1974, pp. 321/412.

forte presença de Savigny na reflexão de Teixeira de Freitas, que na «Introdução» à sua «Consolidação das leis civis», vai chamá-lo de «profundo» e «sábio»³⁷. De fato, como esclarece Miguel Reale³⁸, embora se note um certo ecletismo teórico na produção de Teixeira de Freitas (onde o elemento inovador não pode ser desprezado), havia em seus escritos um casamento, embora sem um explícito tratamento filosófico unitário, de elementos da Escola Histórica e do direito natural. Apesar de certamente os autores franceses e de relevantes conceitos da Escola da Exegese não lhe serem desconhecidos³⁹, é a ciência jurídica alemã (que ele aduz ter «*alcançado os mais brilhantes triunfos*»⁴⁰) e de modo particular a Savigny que são rendidos os maiores tributos⁴¹. Isso, entre tantas outras evidências, mostram que não havia um muro inescalável a separar a produção das faculdades de direito no Brasil e a produção dos grandes juristas da época que não eram professores.

Ainda que devamos levar em conta o sábio conselho de Karl Marx no sentido de que «do mesmo modo que não se julga o indivíduo pela idéia que faz de si mesmo, tampouco se pode julgar uma tal época de transformação pela consciência que ela tem de si mesma»⁴², não são completamente desprezíveis as representações que a própria academia fazia de si mesma. Prestando atenção no conteúdo da «memoria historica academica de 1877», por exemplo, notamos o seguinte texto:

³⁷ Augusto Teixeira de Freitas, «Introdução», «in» Augusto Teixeira de Freitas, *Consolidação das leis Civis*, Rio de Janeiro, Typographia Universal de Laemmert, 1859, pp. CLVI e CXLII, respectivamente.

³⁸ Miguel Reale, «Humanismo e realismo jurídicos de Teixeira de Freitas», in Sandro Schipani (a cura di), *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano*, cit., pp. 41/44.

³⁹ Miguel Reale, «Humanismo e realismo jurídicos de Teixeira de Freitas...», p. 42.

⁴⁰ Augusto Teixeira de Freitas, «Introdução», in Augusto Teixeira de Freitas, *Consolidação das leis Civis...*, p. XXVII.

⁴¹ Opinião, também, de Clóvis Couto e Silva, «O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro», in Vera Maria Jacob de Fradera, *O Direito Privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997, p. 17.

⁴² Karl Marx, Prefácio de Contribuição á crítica da economia política, Trad. Florestan Fernandes in Karl Marx, *História* (org. Florestan Fernandes), São Paulo, Ática, 2.^a ed., 1984, p. 233.

Não ha muito tempo Warnkoenig, o illustrado professor da Faculdade de Liège... escreveu estas palavras dignas de constante recordação:

«O estado do ensino da jurisprudencia em um povo qualquer deve despertar tanto interesse como o de sua legislação. Considerando-se os fins desta, e os resultados de uma eschola esclarecida, onde os que se dedicam ao espinhoso encargo do magistrado, ou à tribuna judiciária vão beber a necessária instrução, pôde-se dizer, que a direcção do ensino e o estado da sciencia do direito tem sobre a felicidade de um povomais influência do que a própria legislação (...). No paiz, emfim, e que o ensino do direito é vicioso e retrogrado, a legislação não pôde florescer, nem aperfeiçoar-se; mais tarde ou mais cedo cahe em completa decadencia».

Quando se considera com attenção a organização e o estado de nossas Faculdades não se pôde deixar de reconhecerque as considerações do sábio professor se realizam de modo completo e satisfactorio entre nós.

Graças a essa organização, aos methodos seguidos no ensino, às sábias e profundas explicações dos illustrados Mestres, os moços que freqüentam as aulas da faculdade vão adquirindo annualmente aquella somma de conhecimentos, que tão necessaria é para mais tarde se tornarem perfeiros Legisladores, Homens de Estado, verdadeiros Juízes e bons Jurisconsultos⁴³.

É claro que, se de um lado, é necessários mitigar o conteúdo um tanto auto celebrativo deste tipo de documento, por outro eles não podem ser tomados como monumentos monoliticamente rígidos ao cinismo e à manipulação.

O fato é que um dos problemas da abordagem de Adorno parece ser precisamente o artificial isolamento que é feito entre a cultura jurídica e as academias de direito, com se entre elas não houvesse qualquer circulação de significados. E isso se dá, em grande parte, pelo fato do referido autor desde o início sentenciar que as academias eram demasiadamente precárias do ponto de vista teórico para serem responsáveis pela criação de uma cultura jurídica. Todavia isso é feito sem que qualquer avaliação da qualidade eminentemente jurídica (bem como o seu impacto sobre o campo jurí-

⁴³ Faculdade de Direito de São Paulo, *Memoria Historica Academica de 1877 redigida pelo Lente substituto Joaquim Augusto de Camargo*, São Paulo, s/ed, 1878, pp. 1/2

dico da época) da produção das academias fosse levada a efeito. O porte teórico dos trabalhos dos juristas, incluindo a avaliação do tipo de herança recebida pela cultura jurídica européia e a qualidade da sua «adaptação» pelos mestres brasileiros não é uma estratégia utilizada por Adorno antes que ele decretasse a inutilidade, em termos de produção jurídica, das Academias —o que, aliás, sequer poderia ser feito já que se trata de um trabalho de sociólogo e não um trabalho de jurista. O autor parece contentar-se em indicar como era pitoresco o apego de alguns mestres a formas antiquadas de jus-naturalismo e a doutrinas filosóficas de menor valor, deixando de lado o modo como aquelas concepções (que aos olhos do analista presente podem parecer longe de nosso mundo) tiveram um papel efetivo nas relações da época e, sobretudo, como essas idéias desempenharam uma função relevante em moldar a cultura jurídica naquele momento.

De qualquer modo, ainda que as conclusões de Adorno no sentido de que as Faculdades de direito do império não contribuíram para a formação da cultura jurídica nacional pretendesse lastrear-se numa análise da doutrina produzida por estas faculdades (o que não ocorreu), ainda assim seria problemática a ilação no sentido de que a produção intelectual das faculdades (mesmo que precária) não fosse o nicho privilegiado da cultura jurídica brasileira. É importante, nesse passo, não confundir a «melhor cultura jurídica», no sentido de um uso competente das reflexões dos juristas mais autorizados na Europa ou nos Estados Unidos (seja lá como isso puder ser avaliado), com a «cultura jurídica» entendida como o conjunto de significados (*standards* doutrinários, padrões de interpretação, marcos de autoridade doutrinária nacionais e estrangeiras, influências e usos particulares de concepções jusfilosóficas) que efetivamente circulavam na produção do direito desta época no Brasil. A «cultura jurídica brasileira», aqui, não pode ser aferida consoante critérios de «melhor» ou «pior», de «mais» ou «menos» refinamento intelectual, mas sim como o conjunto de padrões e significados que circulavam e prevaleciam nas instituições jurídicas brasileiras do Império (faculdades, institutos profissionais de advogados e magistrados, o foro, e, em alguns casos, no parlamento), e que atribuíam uma tipicidade ao direito brasileiro. A cultura jurídica brasileira é um fato histórico antropológico que se dá a partir dos elementos (humanos, doutrinários, sociais, econômicos, etc.) presentes na sociedade brasileira desta época e dentro de aparatos institucio-

nais localizáveis dentro das vicissitudes históricas brasileiras. Emprestando a terminologia de Michel Foucault, ela constitui uma configuração discursiva (cheia de mecanismos de controle, de seleção, de organização, como também de procedimentos de interdição e de estabelecimentos de privilégios) que só pode ser compreendida dentro de um tempo-espço determinado, e nunca a partir de uma referência meta-histórica, dotada de uma universalidade que invoca uma «soberania do significante» sobre as experiências concretas.⁴⁴ De todo modo, tal «configuração discursiva», bem como seu funcionamento, somente pode ser avaliada a partir de uma análise interna que compreenda seu significado e seus efeitos na sociedade. Se não se leva em conta a «espessura» do direito enquanto algo imanente à sociedade, como algo eminentemente histórico e que ocupa um lugar concreto na vida das pessoas —ao invés de ser considerado como um conjunto de sutilezas⁴⁵ ou de meros mecanismos de coerção colocados em ação pelo poder político— não se poderá entender também a «espessura» da cultura jurídica num contexto histórico dado. Não é demais lembrar as fortes palavras de Paolo Grossi, segundo o qual o «direito não é escrito numa paisagem física que aguarda ainda o inserir-se humano, mas é escrito na história, na grande ou na pequena, que, dos primórdios até hoje, os homens constantemente teceram com sua inteligência e seus sentimentos, com seus idealismos e seus interesses, com seus amores e seus ódios»⁴⁶.

Assim, eventuais carências teóricas, insuficiências conceituais ou mesmo paradoxos filosóficos na formação acadêmica dos juristas brasileiros desta época não podem ser apressadamente lidos como comprovação da inexistência de cultura jurídica nas academias de direito, mas, bem ao inverso, eventuais elementos importantes na compreensão de uma cultura jurídica dotada de espessu-

⁴⁴ Vide sobretudo Michel Foucault, *A ordem do discurso*, Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio, São Paulo, Loyola, 1996, mas também Michel Foucault, *A arqueologia do saber*, Trad. Luiz Felipe Baeta Neves, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 6.^a ed., 2000.

⁴⁵ Edward Thompsom, *Senhores e caçadores*, Rio de Janeiro, Paz e terra, 1987, pp. 365 e segs. e António Manuel Hespanha, *História das instituições: medieval e moderna*, Coimbra, Almedina, 1982, pp. 11/13.

⁴⁶ Paolo Grossi, *Prima lezione di diritto*, Roma/Bari, Laterza, 3.^a ed., 2004.

ra e especificidades próprias, e na qual a análise das academias, como fontes de geração, de circulação e de referência do saberes, ocupa um lugar central. Ou seja, todos esses dados devem necessariamente ser levados em conta como ingredientes importantes na compreensão do que se passava no período, e sem os quais não se pode bem compreender a receita integral deste prato complexo e exótico que é a cultura jurídica brasileira do século XIX.

Assim, dentro desse contexto, perde sentido a tentativa de Adorno em opor ou confrontar a «academia formal» com a «academia real»⁴⁷. Na verdade não havia uma dualidade de academias; as escolas de direito do Império (tanto em São Paulo como em Recife) tinham um só significado (ou conjunto de significados), que comportavam a um só tempo as suas fortes cargas simbólicas e também os efetivos conteúdos e discursos que elas colocavam em circulação, fossem eles efetivos ou anacrônicos, retrógrados ou modernizantes, monarquistas ou republicanos. O que se conclui, assim, é que, dentro de suas contradições (que refletiam as contradições do Brasil da época) as academias produziram efeitos concretos e determinados e, principalmente, foram geradores centrais da produção da cultura jurídica brasileira no século XIX.

Ricardo Marcelo Fonseca
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

⁴⁷ Sérgio Adorno, *Os aprendizes do poder...*, p. 91.

LA FACULTAD DE DERECHO EN LOS AÑOS SESENTA. CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS Y NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS

Sumario: 1. El llamado problema universitario.— 2. La asamblea de Barcelona.— 3. Definición de una nueva tipología para el profesorado.— 4. Nueva estructura de la facultad.— 5. Demanda de especialización profesional.— 6. La ley general de educación.

1. *El llamado problema universitario*

No por viejo deja de ser bastante exacto el símil: la Universidad es como la Renfe. La gente saca su billete, se sube, viaja, se queja si es preciso, maltrata si es necesario lo que le rodea, y cuando llega a su destino se baja. El viajero, el estudiante, desaparece, pero la Compañía, la Universidad sigue. Un ex Rector volvía a echar manos la otra noche de esta imagen al analizar la situación universitaria a la par que señalaba, con razón, como pocos se acordaban en sus pliegos de cargos de airear las virtudes que el «alma mater» posee.

Así comenzaba el epígrafe titulado «El llamado «problema universitario»» que podemos leer en unos folios mecanografiados conservados junto a otros muchos de la dirección general de enseñanza universitaria en una carpeta rotulada «Sevilla»¹. El anónimo autor continúa enunciando los problemas universitarios: «masificación del alumnado, carencia de profesorado, falta de locales, escasez de medios instrumentales, necesidad de nuevos estudios, pobreza de investigación, estructuración arcaica, absentismo de

¹ Archivo general de la administración (AGA), Educación (05), IDD 1.016, 20270. Los folios no están firmados, se titulan «La facultad de filosofía y letras y la problemática universitaria», y sabemos sólo —porque así se afirma— que su autor estaba al frente del gobierno y administración de órganos universitarios.

catedráticos, urgencia de agilizar los planes, situación de su profesorado adjunto, etc. etc. En una palabra la Universidad necesita que su presupuesto aumente y que se la dote de una nueva Ley de Ordenación Universitaria».

Estos folios no están fechados, pero las reflexiones debían hacerse en torno al año 1968. El problema universitario —se decía— era un problema social, que se extendía por todo occidente, de Lima a Roma, de Berkeley a Londres². En el fondo estaba «la confrontación o choque de dos grandes ideologías, el socialismo y el capitalismo [...] Como en todo choque se origina cierta confusión, y de este modo encontramos «hijos de papás» que se llaman «prochinos» viviendo como burgueses, sacerdotes que actúan en guerrillas cuya ideología no ha bendecido la Iglesia, habitaciones donde se habla de mejorar la Universidad empapeladas con frases de Mao y presididas por un retrato del «Che» Guevara, etc. etc.».

La aspiración a «la autodeterminación, la libertad para constituir sus propias asociaciones, la democratización de la enseñanza, el levantamiento de sanciones, etc. etc.» era general en el mundo estudiantil, pero en España se encontraba además con «un problema político indudable».

² Así, en AGA (05) IDD 1.016, 20270, se conserva —junto a otros papeles de la dirección general de universidades e investigación— un ejemplar del número 2 (1967) de la revista *Peñafort* cuyo consejo de redacción estaba formado por Pipo Clavero, Fernando Rubiales, Camilo Tejera y Rafael Senra. En la «Crónica de nuestros corresponsales en Bolonia», fechada el 16 de febrero de 1967 y firmada por Fernando Pérez Royo y Rafael Illescas Ortiz, se detallaban algunos aspectos de la huelga general de la universidad italiana.

³ No intento aquí recorrer los distintos aspectos del problema universitario, ni siquiera los exclusivos del ámbito de las facultades de derecho que es el campo de mis páginas. Sólo pretendo individualizar algunas cuestiones —en esencia la creación de los departamentos y la aparición de nuevos planes de estudios— que lejos de una valoración o visión de conjunto aporten, sin embargo, distintos puntos de vista para analizar una realidad en sí misma compleja. Fuente principal para esta incursión han sido distintos documentos de la dirección general de universidades e investigación conservados en el AGA y en el Archivo central de educación (ACE).

Un ejemplo de la respuesta que provocó el problema universitario lo encontramos en las páginas de *Cuadernos para el diálogo*, revista que prestó una atención especial a la universidad.

Una nueva ley «que defina la existencia o no existencia de las Universidades privadas, que separe la función administrativa de la de gobierno en los cargos, que imponga la representatividad de los mismos, que rompa el inmovilismo de la cátedra, que proporcione la debida autonomía de las Universidades, etc. aclararía mucho de este confuso mundo de problemas de la enseñanza superior».

Son reflexiones, éstas, que pueden servirnos para contextualizar el denominado problema universitario que se vivió en la España de los sesenta; problema que provocó una respuesta rica y variada³, que sólo en parte procedía del mundo político⁴.

Icono de todo este proceso fueron los sucesos acaecidos entre febrero y marzo de 1965 que terminaron con la supresión del SEU y la separación de sus cátedras a Aranguren, Tierno Galván y García Calvo⁵.

2. *La asamblea de Barcelona*

El llamado problema universitario incumbía también a las facultades de derecho. Eran doce, las diez heredadas del siglo XIX más las de Murcia y La Laguna creadas en el primer tercio del siglo XX. En ellas había masificación del alumnado, carencia de profesorado, falta de locales, escasez de medios, planes de estudios inadecuados,

⁴ Tres fueron los ministros que nos interesan: Manuel Lora Tamayo (11 junio 1962 a 16 abril 1968), José Luis Villar Palasí (16 abril 1968 a 11 junio 1973) y Julio Rodríguez Martínez (11 junio 1973 a 3 enero 1974).

⁵ Una nota manuscrita, sin fecha, escrita en torno a la celebración de los veinticinco años de paz puede ilustrarnos: «las organizaciones clandestinas estudiantiles procomunistas FUDE (Federación universitaria democrática española) y UNFADE (Unión de Facultades de Derecho) preparan maniobras de subversión de los estudiantes, principalmente en las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y Económicas, basadas en los siguientes pretextos: a) Recientes incidentes en la Facultad de Económicas de Madrid y sanciones académicas con motivo de los mismos.— b) Protesta contra las bases americanas y los proyectiles nucleares.— c) Ídem contra la exposición «Atoms at work» en Madrid.— d) Pedir la «sindicación libre» para los estudiantes, y la representatividad de los mandos nacionales y provinciales del SEU». Este ambiente conflictivo y los rumores sobre huelgas de alumnos para el curso 1965-1966 provocaron algunas consideraciones en el consejo de rectores. AGA (05) IDD 1.016, 20268.

carencia de investigación, estructuración arcaica, absentismo de catedráticos... Es decir, encontramos problemas análogos al resto de las facultades universitarias. Algunos de estos problemas habían sido ya denunciados por algunas facultades, como la de Barcelona⁶, otros fueron objeto de una reunión de delegaciones de facultades de derecho⁷.

Precisamente para hacer frente a todo ello, durante los días 4, 5 y 6 de mayo de 1964, se reunió en Barcelona una asamblea de profesores de facultades de derecho, como ya lo habían hecho los de otras facultades⁸. La de derecho tuvo una resonancia extrauniversitaria, sobre todo en la prensa, que fue denunciada por Manuel Alonso García quien había actuado como secretario de la asamblea⁹.

⁶ Nota de problemas y necesidades que la facultad de derecho de Barcelona eleva respetuosamente al señor ministro de educación nacional para su consideración. AGA (05) IDD 1.016, 20268.

⁷ Introducción y conclusiones de la primera reunión nacional de delegaciones de facultades de derecho. AGA (05) IDD 1.016, 20268. Convocada por la jefatura nacional del SEU y celebrada en el Colegio Mayor José Antonio en enero de 1963. En ella se plantearon los problemas profesionales de los estudiantes de derecho y, en concreto, el sistema de oposiciones a la administración pública del Estado. El análisis partía de la desproporción que existía entre los alumnos que terminaban la licenciatura y el número de plazas que se convocaban cada año; además, el sistema de oposición se veía como algo injusto.

⁸ Ya antes se habían celebrado las asambleas de las facultades de ciencias, filosofía y letras, y farmacia. Una crónica de la asamblea fue publicada por su secretario adjunto: Antonio Fernández Galiano, «La I Asamblea de profesores de facultades de derecho», *Revista de la facultad de derecho de la Universidad de Madrid*, 20 (1964), pp. 289-293.

⁹ AGA (05) IDD 1.016, 20268. Alonso denunció «la existencia de una campaña contra la institución universitaria, encaminada, sin duda, a desprestigiar su actuación y la de su personal docente». Como documentación adjuntaba once artículos publicados en mayo de 1964: 1. *Ya* (9 mayo 1964). Crónica sobre la I Asamblea de profesores de facultades de derecho firmada por Manuel Vigil Vázquez y titulada: «Exclusivismo»; 2. *Arriba* (5 mayo 1964). Artículo firmado por Juan de Alcalá y titulado «Dar que hablar. Derecho»; 3. *Arriba* (22 mayo 1964). Contestación de la facultad de derecho de Madrid al artículo ref. 2. Donde se reproduce lo acordado en reunión extraordinaria de la junta de la facultad de derecho de la Universidad de Madrid de fecha 21 mayo 1964. Se añade una «Puntualización» de Juan de Alcalá; 4. *Ya* (27 mayo 1964). Carta enviada por el secretario de

La idea de celebrar esta reunión venía gestándose en diversas facultades, pero fue la de Oviedo la que, en una junta de abril de 1963, se ocupó de la conveniencia de que todas las facultades trataran conjuntamente los problemas comunes que tenían planteados¹⁰. Beltrán de Heredia, entonces decano de Oviedo, expuso la idea a Prieto Castro, decano de Madrid, quien la acogió favorablemente. En una junta de la facultad de Madrid celebrada en septiembre de 1963, expuso el proyecto y se acordó la adhesión a la idea y la convocatoria en Madrid de una reunión de decanos. De todo lo cual se informó a la dirección general de enseñanza universitaria.

La reunión tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre, estando representadas las doce facultades. Fue presidida por Madruga, de Salamanca, como decano más antiguo. En esos días se debatió ampliamente acerca de los temas que la asamblea debía abordar y se acordaron trece ponencias:

Preliminar. Declaración sobre la importancia permanente de los estudios jurídico-sociales; 1. Plan de estudios; 2. Métodos de enseñanza; 3. Dotación de medios materiales; 4. Autonomía; 5. Relaciones de las facultades de derecho entre ellas y con otras instituciones docentes estatales; 6. Facultades de derecho del estado y facultades no estatales; 7. Organización de la cátedra; 8. Investigación y profesionalidad de los docentes; 9. Acceso del alumnado; 10. La proyección de la facultad en el encauzamiento de la vida profe-

la I Asamblea en contestación a la crónica ref. 1; 5. *Ya* (27 mayo 1964). Nota de la redacción con diez puntualizaciones de Manuel Vigil; 6. *Ya*. Nueva carta del secretario de la I Asamblea acerca de la nota ref. 5, sin publicar en el momento; 7. ABC (21 mayo 1964). Editorial; reproducido también por Solidaridad Nacional (22 mayo 1964); 8. Diario de Barcelona (22 mayo 1964). Editorial; 9. ABC (24 mayo 1964). Editorial; 10. La Vanguardia (31 mayo 1964). Artículo de Manuel Alonso García titulado: «En defensa de la universidad»; 11. Arriba (29 mayo 1964). Editorial: La universidad, problema de España. Reproducido por El Noticiero Universal (30 mayo 1964).

En general estos artículos criticaban a los catedráticos: sus privilegios, el sistema de oposiciones, la desconexión de la sociedad... Fernández-Galiano en su crónica defendió el buen hacer de la asamblea frente a este ataque: Íd., *La I Asamblea*, cit.

¹⁰ Mientras no diga lo contrario, estos datos proceden de Fernández Galiano, *La I Asamblea*, cit.

sional; 11. Asistencia de las facultades de derecho a las funciones normativas del Estado; 12. Misión de las facultades de derecho en relación con las instituciones y estudiantes de Iberoamérica y Filipinas y de otros países.

Cada facultad trabajaría los temas y se fijó una nueva reunión en Madrid, a finales de diciembre de 1963. Ésta se celebró en los días 21 y 22, en ella cada facultad dio cuenta de cómo había enfocado los asuntos, observándose coincidencias y discrepancias. En realidad, las ponencias fundamentales —los temas que verdaderamente preocupaban— eran cuatro: el plan de estudios, los métodos de enseñanza, la organización de la cátedra, y el acceso del alumnado a la facultad. Por ello se acordó que éstas fueran de nuevo redactadas por todas las facultades. Los demás temas se repartieron de manera que cada uno fuera redactado por dos facultades. Una vez concluidos se enviarían al resto de las facultades para que pudieran realizar sus enmiendas. En los días 9, 10 y 11 de marzo se celebró una nueva reunión en Madrid cuyo objetivo era lograr una redacción única de cada tema, a la luz de las ponencias y de las observaciones existentes.

La facultad de derecho de Madrid se encargó de publicar un folleto con el texto de las trece ponencias que se repartió entre los docentes de las doce facultades¹¹. Así mismo, se acordó que la asamblea se celebraría en Barcelona y que cada facultad estaría representada por seis profesores: cinco catedráticos y un adjunto¹².

Finalmente asistieron sesenta y siete profesores a la asamblea¹³. Fueron discutidos todos los temas y algunos —los califica-

¹¹ *Proyectos de ponencias para la I Asamblea de profesores de facultades de derecho. Barcelona, 4-6 mayo 1964*, Madrid 1964.

¹² Esta mayoría de catedráticos hacía que en ciertos círculos —incluso en documentos oficiales— se hablase de asamblea de catedráticos y no de profesores.

¹³ De Barcelona fueron: Manuel Albaladejo García, Manuel Alonso García, Manuel Díez de Velasco, José María Font Rius, Antonio Polo Díez, Fernando Giménez Artigues. De Granada fueron: Juan Antonio Carrillo Salcedo, Guillermo García Valdecasas, Antonio Mesa-Moles Segura, Manuel Morón Palomino, Francisco Murillo Ferrol, Bernardo Moreno Quesada. De La Laguna fueron: Justino Duque, José María Hernández-Rubio, Felipe González Vicén, José Ortego Costales, José Puente Egido, Antonio Pérez Voituriez. De Madrid fueron: Mariano Aguilar Navarro,

dos de importantes— fueron modificados. El debate sobre los planes de estudio fue tan prolongado que tuvo que designarse una comisión. Con posterioridad se publicaron las conclusiones de la asamblea¹⁴. Analicémoslas seguidamente.

En las conclusiones de la ponencia preliminar se reproducía el texto del proyecto: los valores fundamentales «del respeto a la dignidad humana, de la libertad de todos los ciudadanos y grupos sociales intermedios puestos al servicio del bien común y de la realización de la justicia, así en el plano de las relaciones privadas como en el de las públicas» debían presidir la formación del jurista.

La primera ponencia, la dedicada al plan de estudios, abordaba uno de los problemas centrales que —como ya hemos visto— ocupó a la asamblea. Comenzaba pidiendo la integración de los estudios jurídicos, políticos y económicos en una sola facultad; algo que ya se había planteado en la elaboración del decreto de 1944¹⁵ y que

Francisco Hernández Tejero, Alfonso García Gallo, Isidoro Martín Martínez, Antonio Fernández Galiano. De Murcia fueron: Marino Barbero Santos, Manuel Batlle Vázquez, Joaquín Cerdá Ruiz-Funes, Joaquín Garde Castillo, Antonio Martínez Bernal, Juan Barthe. De Oviedo fueron: José Aparici Díaz, Pablo Beltrán de Heredia, Manuel Iglesias Cubria, Aurelio Menéndez Menéndez, José Ortiz Díaz, José Pérez Montero. De Salamanca fueron: José Delgado Pinto, Diego Espín Casanovas, Pablo Fuenteseca Díaz, Esteban Madruga Jiménez, José Martínez Gijón, Juan Domínguez Berrueta. De Santiago fueron: Carlos Fernández Novoa, Manuel García Garrido, Antonio Gullón Ballesteros, Carlos Miguel y Alonso, Paulino Pedret Casado, Agustín Fernández Albor. De Sevilla fueron: Alfonso de Cosío Corral, Jaime García Añoberos, Faustino Gutiérrez Alviz, Manuel Olivencia Ruiz, Francisco Sánchez Apellániz, José Cabrera Bazán. De Valencia fueron: Efrén Borrajo Dacruz, José Cortés Grau, Manuel Gitrama González, Antonio Mostaza, José María Navarrete Urieta, Ismael Peydró Pastor. De Valladolid fueron: Juan Antonio Arias Bonet, Sebastián Martín Retortillo, José Antonio Rubio Sacristán, Ángel Torio López. De Zaragoza fueron: Luis García Arias, Agustín Vicente Gella, José Guallart y López de Goicoechea, José Orlandis Rovira, José Antonio Pastor Ridruejo.

¹⁴ *Conclusiones de la I Asamblea de profesores de facultades de derecho. Barcelona, 4, 5 y 6 de mayo de 1964, Barcelona 1964.*

¹⁵ Consejo nacional de educación, comisión permanente, sesión de 27 julio 1942. ACE 76796. Ese día comenzó a discutirse el decreto de reorganización de las facultades de derecho. En primer lugar se planteó si las facultades de derecho habían de organizarse en sección única o en dos sec-

había sido objeto de discusión en el marco de la Unesco, como veremos.

En segundo lugar se pedía la supresión de las asignaturas complementarias de formación política, religiosa y educación física¹⁶. Después entraba ya en el contenido del plan de estudio y aquí las diferencias «formales» entre el proyecto de la ponencia y lo aprobado en la asamblea eran notables. En el proyecto se rechazaba la idea de formar secciones dentro de los estudios jurídicos; aunque para favorecer cierta especialización se proponía la existencia de materias optativas junto a las comunes en los dos últimos cursos de la licenciatura. En la asamblea se optó sin embargo por la tesis de crear grupos de especialización en los dos últimos cursos.

Primer curso: Derecho romano.— Historia del derecho.— Derecho natural.— Derecho civil (parte general).— Ciencia política.

Segundo curso: Economía.— Derecho civil (obligaciones y contratos).— Derecho canónico.— Derecho penal.— Instituciones políticas y derecho constitucional.

Tercer curso: Derecho civil (derechos reales y derecho hipotecario).— Derecho administrativo I.— Derecho del trabajo.— Derecho internacional público.— Derecho mercantil I.

Cuarto curso (asignaturas comunes): Derecho civil (familia y sucesiones).— Derecho mercantil II.— Derecho administrativo II.— Derecho procesal I.

Quinto curso (asignaturas comunes): Derecho fiscal.— Derecho internacional privado.— Filosofía del derecho.— Derecho procesal II.

El derecho penal quedaba reducido a un único curso común; contra esta opinión mayoritaria se suscribieron numerosos votos particulares, veinticinco en concreto.

Para completar los cursos cuarto y quinto, las facultades debían organizar de dos a cuatro grupos de especialización en las siguientes

ciones: sección de derecho y sección de ciencias políticas. En la sesión el día 28 el ponente, Torres López, defendió la existencia de dos secciones.

¹⁶ Se trataba de una opinión generalizada, que fue estudiada por el consejo de rectores. AGA (05) IDD 1.016, 20268. En el proyecto de ponencias se decía que quizá el lugar de esas materias fueran los colegios mayores, en las conclusiones no se especificaba. Puede verse también la aportación de Pipó Clavero a este debate en *Peñafort*, 2 (1967).

tes ramas: forense, político-administrativa, económico-empresarial, histórica-filosófica. Los alumnos debían escoger dos asignaturas por curso del elenco de cada grupo¹⁷.

Bien mirado, poca diferencia había entre este sistema de especialidades y el unitario con optativas, pues —en definitiva— toda la especialización se reducía a cuatro optativas.

La asamblea apostaba por el mantenimiento del curso selectivo, la obligatoriedad del examen de licenciatura —cuyo cuestionario sería común a todas las facultades—, y no introducía novedades en el doctorado.

En cuanto a los métodos de enseñanza, rechazaba la exclusividad de la lección magistral para las clases teóricas. Entre los distintos sistemas posibles, optaba por combinar la explicación del profesor con lecturas dirigidas.

¹⁷ En las conclusiones de la asamblea, como apéndice a la ponencia primera, se señalaban las materias de especialización propuestas. Algunas cátedras, la de Derecho natural y filosofía del derecho y la de Derecho civil, no indicaron materias de especialización; las otras ofrecieron un abanico más o menos amplio: Derecho romano (derecho patrimonial romano, derecho público romano), Historia del derecho (historia del derecho privado, historia del derecho penal, historia de las instituciones mercantiles), Derecho político (sociología, ciencia política), Economía política y hacienda (historia económica, economía de la empresa, organizaciones económicas internacionales, teoría y política del desarrollo económico, derecho financiero local, derecho presupuestario, derecho penal tributario, derecho procesal tributario, administración financiera), Derecho penal (criminología, derecho penal del menor derechos penales especiales, historia del derecho penal), Derecho canónico (derecho procesal matrimonial, derecho concordatario), Derecho administrativo (derecho local, justicia administrativa, derecho administrativo económico, derecho de la organización administrativa, derecho urbanístico, derecho de las propiedades especiales, derecho agrario), Derecho internacional (organizaciones internacionales, derecho comparado, relaciones internacionales, derecho internacional marítimo y aéreo), Derecho del trabajo (política de seguridad social, conflictos individuales de trabajo, conflictos colectivos de trabajo, movimientos y doctrinas sindicales, derecho histórico del trabajo, filosofía del trabajo), Derecho procesal (derecho procesal especializado), Derecho mercantil (derecho de sociedades, derecho industrial, derecho cambiario, derecho de seguros, derecho bancario y bursátil, derecho concursal, derecho de la navegación, derecho económico).

Tampoco consideraba satisfactorio el sistema de clases prácticas vigente en las facultades de derecho: encontrar un sistema eficaz era uno de los problemas más importantes. Así, la asamblea estimaba que al margen de los ejercicios prácticos que cada catedrático organizase, debería concebirse un programa conjunto de prácticas en cada facultad. Cada cátedra debería además organizar un seminario.

En fin, la enseñanza libre era considerada como una contradicción: la propia universidad manifestaba con su existencia que no eran necesarias las clases teóricas y prácticas que impartía. Pero mientras no existieran horarios nocturnos y centros en todas las ciudades era una necesidad social¹⁸.

La tercera ponencia constituía un elenco de las necesidades económicas que tenían las facultades y de la programación de estos gastos. La cuarta versaba sobre autonomía: autonomía de gobierno, es decir, en la elección de los cargos (se pedía la elección de rectores y vicerrectores, así como mantener la de decano y vicedecano); autonomía docente, es decir, posibilidad de contratar profesores invitados, de organizar actos culturales, de crear cátedras de doctorado que reflejasen las particularidades locales o regionales (sobre los planes de estudio y la selección de los catedráticos se remitía a las otras ponencias); autonomía en la administración y gestión económica, donde se reclamaba rediseñar el sistema existente.

La quinta ponencia fijaba su atención en algunos aspectos de traslados de matrículas, incompatibilidades, etc. En la sexta se criticaba —con más fuerza en las conclusiones que en el proyecto— la existencia de facultades de derecho no estatales, lo que en el fondo era un rechazo a lo expuesto en el convenio de 5 de abril de 1962 entre el Estado español y la Santa sede¹⁹.

¹⁸ Se proponía por ello, a imitación de Francia, la existencia de centros adscritos en aquellas ciudades que no tenían universidad. Incluso se barajó el proyecto de una universidad nocturna. Más tarde, la creación de la Universidad nacional de educación a distancia venía a zanjar el problema.

¹⁹ Ya había sido criticada en una nota de la Universidad de Granada, la existencia de universidades libres que ese convenio permitía. AGA (05) IDD 1.016, 20268. Sobre esta polémica se ha entretenido M.^a Ángeles Sotés Elizalde, *Universidad franquista: debate sobre la libertad de enseñanza (1939-1962)*, Pamplona 2004, pp. 465 ss.

La ponencia séptima sobre organización de la cátedra recogía otro de esos temas importantes, y también en esta ocasión observamos notorias diferencias entre lo que se suscribía en el proyecto y lo que se concluyó en la asamblea. En ambos casos se partía del proyecto de reforma que manejaba el ministerio sobre las estructuras universitarias y el acceso al profesorado²⁰. En el proyecto de ponencia se decía que cada cátedra debería ser un departamento, compuesto por ayudante, adjunto, agregado y catedrático; en las conclusiones se rechazaba la creación de departamentos y se mantenía la cátedra, compuesta como hasta entonces por ayudante, adjunto y catedrático. En esta estructura se potenciaba la figura del adjunto, que pasaba a tener mayor remuneración y más competencias.

También la remuneración del catedrático era concebida como insuficiente, además de irregular y desproporcionada, tal y como se defendía en la octava ponencia. En ella se analizaba la dedicación del catedrático que debía ser plena pero no exclusiva, debía basarse en criterios positivos (tareas) y no negativos (prohibiciones); aunque se reconocía que la cátedra era incompatible con el bufete. Todo catedrático debía ser investigador y el gobierno no debía regatear medios para conseguir una intensa relación entre docencia e investigación.

El último tema importante de los tratados, el referido al acceso del alumnado a la facultad, al que se dedicó la ponencia novena, también sufrió cierto cambio en su paso por la asamblea. Tanto en el proyecto como en la conclusión se afirmaba que los alumnos debían comenzar la carrera de derecho provistos de una serie de conocimientos jurídicos. Para ello, en el proyecto se optaba por instaurar un curso preparatorio organizado dentro de la propia facultad; en las conclusiones se proponía la inclusión en el curso preuniversitario —el llamado Preu— de una asignatura específicamente jurídica.

El resto de las ponencias reclamaban un mayor protagonismo de la facultad en el proceso de ingreso en los cuerpos de funcionarios del Estado, una cierta asistencia a las funciones normativas del Estado y una mayor proyección cultural en América y Filipinas.

²⁰ Este proyecto lo analizaremos en el epígrafe siguiente.

3. *Definición de una nueva tipología para el profesorado*

El llamado problema universitario tenía que ver con la carencia de profesorado. Y se intentó atajar con la ley sobre estructura de las facultades universitarias y su profesorado (LEFUP) de 17 de julio de 1965, que creó una categoría intermedia entre el catedrático y el profesor adjunto denominada profesor agregado²¹.

La tramitación de la LEFUP fue larga debido a la novedad que suponía para la universidad española. Ya el consejo de rectores reunido el 28 de febrero de 1963 estudió un proyecto sobre reestructuración del profesorado en el que se proponía: la creación de la figura del profesor agregado o catedrático agregado; la reorganización de las facultades a través de la creación de departamentos, cuyo director sería el catedrático más antiguo (las otras cátedras se irían amortizando hasta que quedase sólo una por departamento); distintas modificaciones relativas a los profesores adjuntos y ayudantes, fundamentalmente centradas en el incremento del sueldo que permitiera su dedicación a tiempo completo²².

El proyecto de la LEFUP venía acompañado de un estudio económico²³. En la introducción de este estudio se afirmaba que el objetivo fundamental que perseguía el proyecto de ley era aumentar el número de profesores universitarios, no sólo para hacer frente al aumento de alumnos —se calculaba que éstos se duplicarían en diez años— sino también para mejorar la ratio alumno/profesor que ya era demasiado alta. Pero de poco servía aumentar el número de profesores si la dedicación de éstos resultaba exigua, por ello se proponía «la creación de un grado intermedio de profesorado (el Profesor agregado) al que se exigirá dedicación plena y exclusiva a la Universidad, encargándole de la enseñanza completa e investigación, correspondientes a por lo menos una materia de los planes de estudios vigentes».

²¹ Hasta ese momento y desde la ley de 1943 la estructura del profesorado estaba compuesta por ayudante, adjunto y catedrático. La función del adjunto consistía en suplir al catedrático durante sus ausencias y enfermedades. El ayudante tenía una función meramente auxiliar, no podía suplir al catedrático. Sin embargo, en la realidad muchos adjuntos estaban encargados de la explicación regular de uno o más cursos

²² AGA (05) IDD 1.016, 20268.

²³ AGA (05) IDD 1.016, 20270.

Por eso el estudio subrayaba que la pieza fundamental para el éxito de la ley era la remuneración que se fijase al profesor agregado, ya que éste debía recibir un sueldo proporcionado a esa dedicación completa y exclusiva.

El proyecto estaba precedido de numerosos estudios sobre el incremento del número de alumnos y la capacidad de absorción de la universidad. Así, en el curso 1965-1966 el número de catedráticos de las facultades de derecho era de 183, y los adjuntos eran 201²⁴; en las doce facultades de derecho existentes, a excepción de Madrid, sólo existía un grupo de alumnos en cada curso²⁵.

Los cerca de mil alumnos de primer curso de la facultad de Madrid se dividían en tres grupos, que a su vez se dividía en cinco grupos de clases prácticas. El decano de Madrid pidió que para el siguiente curso hubiera un grupo por cada cincuenta alumnos como se había aprobado en la asamblea²⁶. Además, para ese curso 1966-1967 se preveía incrementar los grupos en Valencia y Barcelona.

También encontramos un análisis sobre el número de asientos y aulas de las facultades de derecho en el curso 1962-1963²⁷, sobre la distribución de los alumnos de derecho en los distintos cursos de la licenciatura, sobre la procedencia geográfica de esos alumnos (si

²⁴ Número de catedráticos en la facultad de derecho (número de adjuntos): Barcelona 14 (19), Granada 13 (14), La Laguna 13 (12), Madrid 37 (40), Murcia 14 (14), Oviedo 13 (14), Salamanca 13 (17), Santiago 13 (14), Sevilla 14 (15), Valencia 14 (16), Valladolid 12 (13), Zaragoza 13 (13). Total catedráticos en la universidad española 994. Total adjuntos en la universidad española 1348 (por ley de 16 diciembre de 1964 se habían creado 200 plazas de profesores adjuntos). Total de ayudantes de clases prácticas en la universidad española 910. AGA (05) IDD 1.016, 20270.

²⁵ AGA (05) IDD 1.016, 20270.

²⁶ Realmente en las conclusiones de la asamblea no existe una afirmación exacta sobre ello. Seguramente se habló, pues en los proyectos de ponencias se decía que ese era el número máximo de alumnos por cada grupo de los centros adscritos. *Proyectos*, cit., p. 15.

²⁷ Número de asientos (número de aulas) en la facultad de derecho durante el curso 1962-1963: Barcelona 1463 (10), Granada 647 (5), La Laguna 480 (6), Murcia 318 (?), Oviedo 344 (4), Salamanca 849 (6), Santiago 625 (6), Sevilla 823 (6), Valencia 880 (6), Valladolid 689 (8), Zaragoza 846 (7), Madrid 5.328 (19). Total derecho 13.292 (83). Total universidad española 60.283 (481).

habían estudiado el bachillerato en la ciudad donde estaba la universidad, en una ciudad del distrito universitario o de fuera del distrito), sobre cuántos eran oficiales y cuántos libres²⁸, etc.

El proyecto pasó al consejo nacional de educación. La sección permanente, en sesión de 2 de diciembre de 1964, acordó —en conformidad con el informe conjunto de las secciones primera y segunda— proponer su aprobación con una serie de modificaciones²⁹. Se tuvieron en cuenta también otras observaciones³⁰.

Finalmente el consejo de ministros en su reunión de 5 de febrero de 1965 acordó enviar el proyecto de ley a las Cortes españolas³¹. El *Boletín oficial de las cortes* de 2 marzo 1965 publicó el proyecto de ley. El plazo de quince días para la presentación de enmiendas, dada la trascendencia de la reforma y a petición de distintos procuradores, se prorrogó hasta el 27 de marzo. En total se presentaron

²⁸ Según la ley que regulaba la enseñanza libre (ley de 16 julio 1949), éstos eran alumnos que hacían sus estudios fuera de las facultades y acudían a ellas para examinarse ante un tribunal. Por ello, los derechos adquiridos por la matrícula libre se reducían al acto del examen. Sin embargo, sucedía que muchos de estos estudiantes cursaban sus estudios con asistencia a las clases. Ante los problemas de masificación que existían, sobre todo en Madrid, por orden de 14 de julio de 1965 se reguló la asistencia de los alumnos libres a las clases teórico-prácticas de las facultades universitarias. En esencia, la norma establecía que para poder asistir a clase un alumno libre debía contar con la autorización del decano y éste la concedería teniendo en cuenta la capacidad de los locales.

²⁹ Expediente 25061, sobre proyecto de ley por el que se modifica la estructura de las facultades universitarias y las categorías y forma de acceso de su profesorado.

³⁰ En el expediente podemos encontrar otros tres documentos: unas «Observaciones al proyecto que formula el catedrático de Historia del derecho de la Universidad de Oviedo Dr. de La Concha» sin fecha; una comunicación de Efrén Borrajo Dacruz titulada «Revisión y actualización del plan de estudios en las facultades de derecho» y fechada en Valencia 1963; un número de *La documentazione italiana*, correspondiente al 18 de julio de 1964, que contenía el esquema de proyecto de ley italiana concerniente a los profesores agregados. AGA (05) IDD 1.016, 20270.

De las observaciones de La Concha se asumió, por ejemplo, que entre los miembros del departamento apareciera también el personal investigador.

³¹ Archivo congreso de los diputados (ACD), serie general, legajo 925, expediente 4.

cuarenta y cuatro enmiendas, tres de ellas a la totalidad³². Así, a la presentada a la totalidad del proyecto por Jorge Jordana de Pozas y Fuentes se adhirieron cuarenta y tres procuradores.

La ponencia designada para informar el proyecto estaba integrada por Agustín de Asís Garrote, Alfonso Ballcels Gorina, Antonio Calderón Quijano, Fernando Martín Sánchez Juliá y Antonio Tena Artigas. Tras examinarlo y estudiar las enmiendas presentadas al mismo emitió su informe, fechado el 5 de junio.

La ponencia defendía el proyecto del gobierno frente a las enmiendas a la totalidad. La reforma no intentaba, decía, solucionar todos los problemas que la universidad tenía planteados. Se centraba en uno que era considerado básico: el aumento de los docentes, la coordinación de sus trabajos y la dedicación. En este sentido, la creación de los departamentos y la del profesor agregado con dedicación plena se consideraban los mayores aciertos. Lo cual se completaba con la creación de mil plazas nuevas de profesores agregados, lo que significaba más que duplicar los docentes existentes.

La comisión de educación nacional de las cortes examinó el proyecto y el informe de la ponencia, y el 25 de junio elevó el preceptivo dictamen. Éste fue aprobado por el pleno el 15 de julio. Y el 17 de julio de 1965 fue firmada la ley.

* * *

La LEFUP diseñaba una nueva estructura del profesorado universitario. En el primer escalón encontramos al profesor ayudante de clases prácticas. Era un licenciado en posesión del título de grado, propuesto por el catedrático de la materia y nombrado —por un año, renovable— por el rector de la universidad.

³² No podemos considerar aquí el conjunto de las enmiendas, minuciosas y variadas. A la comisión de educación llegaron también distintos escritos, por ejemplo, los profesores adjuntos encargados de cátedra o curso y los ayudantes de clases prácticas del distrito universitario de Cataluña y Baleares reunidos en las primeras jornadas de estudio del profesorado no numerario de universidad y escuelas técnicas superiores bajo la presidencia del vicerrector de la Universidad de Barcelona acordaron pedir —mediante telegrama enviado al presidente de la comisión de educación de las Cortes— que se retirase el proyecto. ACD, serie general, 925-4.

En segundo lugar estaba el profesor adjunto, categoría a la que se accedía a través de concurso-oposición celebrado en la facultad interesada. El candidato debía haber sido al menos durante un año profesor ayudante de clases prácticas, y en su solicitud debía adjuntar un informe del catedrático bajo cuya dirección había actuado. El nombramiento se hacía por orden ministerial a propuesta del tribunal, por un periodo de cuatro años que podía ser prorrogado por otros cuatro, siempre que estuviese en posesión del título de doctor.

Los profesores adjuntos podían suplir a los catedráticos o profesores agregados en sus ausencias, y desempeñar bajo su dirección las enseñanzas prácticas. A requerimiento del decano podían encargarse de la enseñanza de cursos completos de su disciplina.

A la nueva categoría de profesor agregado se accedía a través de un concurso-oposición de ámbito nacional ante un tribunal designado por el ministerio y constituido por cinco miembros, de ellos al menos tres serían catedráticos de la disciplina. El candidato debía estar en posesión del título de doctor, acreditar una experiencia docente o investigadora de tres cursos completos como mínimo, y ser presentado por un catedrático. El nombramiento se hacía por orden ministerial a propuesta del tribunal del concurso-oposición.

Sus funciones eran similares a las de los catedráticos, excepto las directivas: desempeñaban tareas docentes, examinadoras y de investigación.

Los agregados debían vivir en la localidad donde radicaba la facultad a la que pertenecían. Tenían un régimen de plena dedicación a la universidad y de jornada completa de trabajo, incompatible con el ejercicio libre de la profesión.

Mediante concurso entre agregados de la disciplina se adquiría la condición de catedrático ordinario. El candidato debía acreditar cinco años como mínimo de servicio activo como profesor agregado, presentar un currículum y una memoria docente e investigadora. El candidato propuesto por el tribunal era nombrado por orden ministerial.

Finalmente, el rector de la universidad podía nombrar profesores extraordinarios a personas de reconocido prestigio y competencia. La designación se hacía por tiempo limitado³³ y mediante con-

³³ En el BOE de 21 julio 1965 se decía «ilimitado» (art. 17), pero se trataba de un error material o errata que se corrigió.

trato en el que se especificaba los servicios que debía prestar y la remuneración total a percibir.

4. *Nueva estructura de la facultad*

El llamado problema universitario tenía que ver con una estructuración arcaica de la institución. Al menos desde la reforma de Pidal de 1845, la estructura de las facultades universitarias giraba en torno a la cátedra³⁴; lo que resultaba demasiado limitado ante el desafío de la universidad de masas. La multiplicación de cátedras (con su numeración) para una misma disciplina provocaba disgregación y falta de coordinación; además, la importancia que cada vez más iba adquiriendo la investigación necesitaba de un soporte más complejo que el ofrecido por esta venerable estructura³⁵.

El departamento permitía integrar a todos los profesores de disciplinas afines, constituyendo así una unidad que coordinaba las enseñanzas; al mismo tiempo, se conseguía una mayor dotación de medios de trabajo y planes de investigación; es decir, aparecía como una sede docente e investigadora³⁶.

³⁴ Esta estructura se inspiraba en la universidad tradicional, pero con Pidal adquiría un significado nuevo. Mariano Peset, José Luis Peset, *La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*, Madrid 1974, pp. 491 ss.

³⁵ Desde comienzos de los años sesenta se observa ese interés creciente por la investigación; así, en 1962, se habla de la nueva política universitaria anunciada por el ministro en la que tiene importancia relevante la investigación, en ese año se estableció la comisión para el fomento de la investigación en las universidades con la misión de subvencionar planes de investigación, y en 1964 se decía que por vez primera en España la opinión pública estaba convencida de que la investigación científica y la formación cultural estaban en la base del progreso y del bienestar material de los pueblos. AGA (05) IDD 1.016, 20268.

³⁶ «Artículo 1.º Se crea una unidad estructural universitaria con el nombre de Departamento, que agrupará a las personas y los medios materiales destinados a la labor docente, formativa e investigadora en el campo de una determinada disciplina o disciplinas afines.— Las funciones primordiales de los departamentos serán las siguientes: a) Coordinar las enseñanzas de las disciplinas que lo integran. b) Proponer proyectos e investigaciones en equipo, sin merma de la libertad e iniciativa de trabajos

El personal de un departamento estaba integrado por: catedráticos ordinarios y extraordinarios; profesores agregados; profesores adjuntos; profesores extraordinarios; profesores ayudantes de clases prácticas; personal investigador; lectores de idiomas, jefes de laboratorio, clínicas, seminarios o bibliotecas; personal auxiliar y subalterno.

Sin embargo, una disposición transitoria de la ley —la primera— permitía a los catedráticos anteriores a ésta optar entre agrupar sus cátedras para constituir el departamento o permanecer en la situación que estuvieran sin adscribirse a ningún departamento. Se trataba de una situación transitoria que reconocía un derecho adquirido por el catedrático en cuestión y que no se aplicaría a las nuevas cátedras.

Al frente de cada departamento había un director, que debía ser catedrático. Cuando en un departamento concurrían varios catedráticos se procedía a la elección del director mediante votación personal de los catedráticos y agregados pertenecientes al mismo. El nombramiento era por tres años.

El director representaba al departamento ante las autoridades académicas y se encargaba de coordinar la docencia e investigación. Era responsable ante el decano del cumplimiento de las obligaciones del personal afecto a su departamento.

En lo referido a su composición, la ley remitía a los decretos ordenadores en departamentos de cada una de las facultades universitarias: el de derecho estaba fechado el 1 de junio de 1967. Para su redacción se creó una comisión de catedráticos de derecho y se envió un borrador a todos los catedráticos de esa facultad. El decreto planteaba una estructura de nueve departamentos:

1. Departamento de filosofía del derecho, que agrupaba Derecho natural, Filosofía del derecho y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho natural y filosofía del derecho».
2. Departamento de derecho romano e historia del derecho, que agrupaba Historia e instituciones de derecho romano,

personales por parte de los Profesores. c) Promover el desarrollo científico y docente de las cátedras implicadas, facilitando su labor y la consecución y distribución de medios. d) Servir de enlace entre las cátedras y las autoridades de la Facultad o Secciones».

- Historia del derecho español y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho romano» y las de «Historia del derecho español».
3. Departamento de derecho canónico, que agrupaba la disciplina de tal nombre y otras afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho canónico».
 4. Departamento de derecho político y derecho internacional, que agrupaba Derecho político, Derecho internacional público, Derecho internacional privado y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho político», «Derecho internacional público y privado» y «Estudios superiores de derecho internacional».
 5. Departamento de derecho administrativo y derecho del trabajo, que agrupaba las disciplinas de igual título y otras afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho administrativo» y «Derecho del trabajo».
 6. Departamento de derecho civil y derecho mercantil, que agrupaba Derecho civil (en su parte general, obligaciones y contratos, derechos reales e hipotecario y familia y sucesiones), Derecho mercantil y las disciplinas afines a una y otra. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho civil» y las de «Derecho mercantil».
 7. Departamento de derecho penal, que agrupaba la disciplina de tal nombre (en sus partes general y especial) y otras afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho penal».
 8. Departamento de derecho procesal, que agrupaba Derecho procesal y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Derecho procesal».
 9. Departamento de disciplinas económicas y financieras, que agrupaba Economía política, Hacienda pública, Derecho fiscal o Derecho financiero y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de «Economía política», «Economía política y hacienda pública» y «Hacienda pública y derecho fiscal».

El mismo decreto, sin embargo, permitía algunas modificaciones en esta estructura³⁷. Además, las facultades que desearan esta-

³⁷ La disciplina Derecho romano podía incorporarse al Departamento de derecho civil y mercantil, o formar uno nuevo con civil; el Departa-

blecer departamentos con estructura distinta a los dictaminados, podían solicitarlo con el visto bueno del rector.

Los decanos, de acuerdo con el rector, debían enviar al ministerio para su aprobación las propuestas formuladas por las juntas de facultad sobre la constitución de los departamentos. Y así, en respuesta a estas propuestas el ministerio dictó con celeridad las órdenes correspondientes³⁸.

¿Cómo se desarrolló la implantación de esta nueva estructura? En general puede afirmarse que los catedráticos eran contrarios a la nueva estructura universitaria como ya vimos en la asamblea desarrollada en Barcelona. Por ello en los departamentos unidisciplinarios con un único catedrático el proceso no fue conflictivo pues los cambios fueron meramente formales, pero cuando un departamento agrupaba a varias disciplinas afines —o había varios catedráticos de una materia— emergieron los problemas. La cátedra como estructura universitaria contaba con una larga existencia y el departamento aparecía como una novedad excesiva cuya implantación no iba a ser pacífica.

Las distintas facultades propusieron todas las combinaciones previstas por el ministerio, pero también otras que no lo estaban. En estos casos, el consejo nacional de educación luchó para que no se desvirtuase —al menos de momento— el espíritu de la norma. Prefería que las cátedras continuasen su existencia aisladas a admitir corruptelas que habrían dejado la reforma en papel mojado.

Las actas de constitución de los distintos departamentos reflejan una parte importante de la historia de nuestras facultades de derecho. En ellas observamos la desidia o el entusiasmo con el que se abordó la reforma, la dotación de los departamentos, la lenta implantación del derecho laboral... y lo distinta que seguía siendo la Universidad de Madrid. Incluso se aprovechó este proceso para

mento de derecho romano e historia del derecho podía unirse con el Departamento de derecho canónico; la disciplina de Derecho del trabajo podía incorporarse al Departamento de derecho civil y derecho mercantil; las disciplinas de Derecho administrativo y de Derecho político podían constituir un departamento; la disciplina de Derecho internacional privado podía incorporarse al Departamento de derecho civil y derecho mercantil.

³⁸ Se aprecia que se trataba de un asunto prioritario para el ministerio pues, en alguna ocasión la orden se dictó el mismo día de llegada de la solicitud.

reflexionar sobre la naturaleza científica del derecho romano, el protagonismo del derecho mercantil, el contenido del derecho político, las diferencias entre el derecho internacional privado y el público, la relación entre la hacienda pública y el derecho financiero... Resulta admirable el cuidado, la ilusión y la celeridad que algunos pusieron en esta reforma; pienso en concreto en Nicolás María López Calera y su departamento granadino. Sorprende, por el contrario, la pobreza de medios con que contaba la Universidad de La Laguna.

Analicemos ahora cómo se produjo este proceso en las distintas facultades de derecho³⁹.

*Universidad de Barcelona*⁴⁰

De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Barcelona, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 4 de enero de 1968 la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho, Derecho romano e historia del derecho, Derecho administrativo, Derecho procesal, Disciplinas económicas y financieras, Derecho internacional. Por orden de 2 de febrero de 1968 se dispuso la del Departamento de derecho mercantil.

Algunos catedráticos no quisieron incorporarse en la estructura departamental, en concreto, en el departamento número cuatro se adscribió la cátedra de derecho internacional público y privado pero no así la de derecho político; en el departamento número cinco se adscribió la cátedra de derecho administrativo pero no lo hizo la de derecho del trabajo; en el departamento número seis se adscribió la cátedra de derecho mercantil pero no las de derecho civil, ni la primera ni la segunda.

Además, la constitución de los departamentos aprobados se demoró bastante tiempo. El Departamento de derecho procesal se

³⁹ Sólo analizaré la constitución de los departamentos de las doce facultades de derecho que existían al comenzar los años sesenta. No distingo entre profesor adjunto y profesor adjunto interino o contratado, tampoco entre profesor ayudante de clases prácticas a cargo del ministerio o de la facultad.

⁴⁰ ACE 93415.

constituyó el 10 de septiembre de 1971⁴¹. El Departamento de filosofía del derecho se constituyó el 23 de noviembre de 1973⁴². El Departamento de derecho romano e historia del derecho se constituyó el 19 de octubre de 1974⁴³. No se conservan las actas de constitución de los otros cuatro.

Universidad de Granada ⁴⁴

De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Granada, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 26 de septiembre de 1967 la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho; Historia del derecho; Derecho canónico; Derecho político y derecho internacional; Derecho administrativo y derecho del trabajo; Derecho romano, civil y mercantil; Derecho penal; Derecho procesal; Disciplinas económicas y financieras.

De esta forma eran aprobados todos los departamentos conforme a lo dispuesto en el decreto de 1 junio 1967, el derecho romano se incorporó en el departamento seis tal y como estaba permitido.

⁴¹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Miguel Fenech Navarro), un profesor agregado (Manuel Peláez del Rosal), dos profesores adjuntos (Alfonso Pérez Gordo, José Luis Vázquez Sotelo), nueve profesores ayudantes y una auxiliar bibliotecaria. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁴² El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Jaime Brufau Prats), un profesor agregado (Manuel Fernández-Escalante), seis profesores adjuntos (Juan José Espinosa Ferreiro, Antonio Enrique Pérez Luño, Pedro Penalva Borrás, Carmelo Gómez Torres, José María Tous Ferrer, Terenciano Álvarez Pérez), siete profesores ayudantes y una auxiliar bibliotecaria. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁴³ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (José María Font Rius), un catedrático (Ángel Latorre Segura), cinco profesores adjuntos (Francisco Javier Teira Vilar, Ricardo Gallart Cases, José Enrique Rebés Solé, Ricardo Panero Gutiérrez, José Luis Gomáriz Verdú), cinco profesores ayudantes, una bibliotecaria y una auxiliar de seminario. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁴⁴ ACE 93415.

Éstos se constituyeron enseguida. El 10 de octubre de 1967 lo hicieron los departamentos de Filosofía del derecho⁴⁵, Historia del derecho⁴⁶, Derecho político y derecho internacional⁴⁷, Derecho administrativo y derecho del trabajo⁴⁸, Derecho romano, civil y mercantil⁴⁹, Derecho penal⁵⁰, Derecho procesal⁵¹, Disciplinas económicas y

⁴⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Nicolás María López Calera), dos profesores adjuntos (Andrés Ollero Tassara, Francisco Javier Valls García), dos profesores ayudantes.

En la cuidada acta de constitución de este departamento se detallaban los medios materiales con que contaba; por ejemplo, más de cien títulos de revistas (que eran vaciadas en un fichero), un seminario donde funcionaba la cátedra Francisco Suárez, que organizaba cursos de teología, publicaba estudios sobre clásicos españoles y editaba la revista *Anales de la cátedra Francisco Suárez*.

⁴⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Rafael Gibert), un profesor adjunto (José Moreno Casado), tres profesores ayudantes.

⁴⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Francisco Murillo Ferrol), un catedrático (Juan Antonio Carrillo Salcedo), cuatro profesores adjuntos (Antonio Marín López, José Cazorla Pérez, Elisa Pérez Vera, Manuel Ramírez Jiménez), seis profesores ayudantes. En el acta se subrayaba cómo ambas cátedras venían colaborando desde hacía tres años en un seminario conjunto de sociología política internacional.

⁴⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Antonio Mesa-Moles), dos profesores adjuntos (Eduardo Roca, Nicolás María López Díaz), seis profesores ayudantes. En el acta se subrayaba cómo desde la creación de los estudios de derecho del trabajo como cátedra independiente el titular de derecho administrativo se había encargado de ellos.

⁴⁹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Manuel de la Higuera Rojas), dos catedráticos (Miguel Motos Guirao, Antonio Gullón Ballesteros), tres profesores adjuntos (Bernardo Moreno Quesada, Fermín Camacho Evangelista, Roberto Rodríguez Jiménez), nueve profesores ayudantes.

⁵⁰ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José María Stampa Braun), dos profesores adjuntos (Horacio Oliva García, Tarsicio Herrero del Collado), cinco profesores ayudantes.

⁵¹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Tomás Muñoz Rojas), un profesor adjunto (Diego Artacho Castellano), dos profesores ayudantes.

financieras⁵². El Departamento de derecho canónico se constituyó el 6 de noviembre de 1967⁵³.

El 29 de diciembre de 1967 el rector —en virtud de la orden de 17 de noviembre de 1966— envió al ministerio una copia del reglamento de régimen interno de cada uno de los departamentos constituidos en la facultad de derecho, aprobados en junta de facultad y junta de gobierno.

La Laguna ⁵⁴

En junta de facultad celebrada el 21 de septiembre de 1967 se propuso al ministerio la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho, Derecho canónico, Derecho administrativo y derecho del trabajo, Disciplinas económicas y financieras, Derecho político, Historia del derecho, Derecho romano, Derecho internacional público y privado, Derecho mercantil.

Enviada por el rectorado la solicitud, el ministerio acusó recibo de ella indicando que en la propuesta figuraba la constitución de algunos departamentos no previstos en el decreto ordenador de la facultad. Por ello, antes de someter la propuesta al dictamen del consejo nacional de educación se pedía una justificación de los fundamentos de la petición.

El catedrático de derecho internacional, José Puente Egido, estimaba que una manifestación de la anticuada estructuración de las enseñanzas en el plan de estudios de las facultades de derecho españolas era la vinculación en una misma cátedra de dos disciplinas dispares: derecho internacional público y derecho internacional privado. En la mayor parte de los países europeos (Francia, Inglaterra, Alemania, etc.) se había impuesto la separación de ambas. Mientras en España subsistiera esta situación era necesario —pensaba— la independencia departamental para que no se abandonase el cultivo

⁵² El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Matías Cortés Domínguez), dos profesores adjuntos (Francisco Peregrín Puga, José Álvarez de Cienfuegos), dos profesores ayudantes.

⁵³ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José Luis Santos Díez), un profesor adjunto (Cándido Campos), tres profesores ayudantes.

⁵⁴ ACE 93415.

de ninguna de ellas. Cuando se hiciese el desdoblamiento de cátedras, la de derecho internacional privado debería conectarse con las disciplinas de derecho privado, y el derecho internacional público con las de derecho público.

El catedrático de derecho mercantil, José María Muñoz Martínez, manifestó que la única razón era que no habiéndose acogido las cátedras de derecho civil al sistema de departamentos, la cátedra de derecho mercantil no contaba con ninguna otra disciplina equiparada a efectos de constituir el departamento correspondiente.

El catedrático de derecho político, José María Hernández-Rubio Cisneros, justificaba extensamente su propuesta. Estimaba que la asignatura de derecho político abarcaba un cuerpo muy amplio de conocimientos, con evidente substantividad propia. En el plan de 1944 se desarrollaba en tres cuatrimestres: Teoría de la sociedad, Teoría de la organización política, Derecho constitucional. Al ampliar el plan de 1953 la asignatura, atendió justamente a la importancia y extensión creciente de la materia, especialmente en el conocimiento indispensable de sus supuestos extra-jurídicos.

Así, el derecho político era entendido como una parte de la ciencia política, la cual constituía la materia de enseñanza en las facultades de derecho españolas. Esta ciencia política, por su naturaleza, era digna de constituir de por sí un departamento especialmente dedicado a la enseñanza y a la investigación propia. Esta enseñanza e investigación abarcaba los siguientes argumentos:

- a) Introducción a la Ciencia Política.— Carácter y perspectiva de la Ciencia en general y de las Ciencias Sociales en la actualidad; problemas metódicos de las Ciencias Sociales y de la Ciencia Política; Antropología básica (Hombre, Sociedad e Historia; Conocimiento y actividad humanas; la doble dialéctica y el movimiento histórico-social; las estructuras social-históricas); Ciencias sociales, Ciencias Políticas y Ciencia Política; Política y Derecho.
- b) Infraestructura y superestructura.— Historia y tipología sociológica de las Instituciones y de las Doctrinas Políticas: Base económico-social y realidad político-jurídica, en las: 1. Sociedades primitivas.— 2. Sociedades teocrático-políticas de la Antigüedad Pre-Clásica.— 3. Sociedades políticas de la Antigüedad Clásica (Grecia y Roma).— 4. Sociedades Políti-

- cas del Occidente Cristiano Medieval.— 5. Sociedad y Estado en la Edad Moderna.— 6. Sociedad y Estado Contemporáneos.
- c) Dentro de esta «Sociedad y Estado Contemporáneos» se estudia: 1. La sociedad política actual (infraestructura económica; grupos sociales; grupos de presión; grupos y partidos políticos; poderes políticos; etc.).— 2. Las estructuras del Poder político en la actualidad.— 3. La Organización política en la actualidad (sistemas políticos contemporáneos: liberal-democrático; democráticos; totalitarios; democracias populares; etc.).— 4. Los sistemas políticos en las Constituciones actuales (Constitución francesa; sistema inglés; constitución norteamericana; constitución rusa; etc., etc.) Se estudia la historia y la sistemática de las constituciones más fundamentales.— 5. El sistema político español vigente, precedido de una historia constitucional española.

Estos informes pasaron al consejo nacional de educación. Su comisión permanente evacuó un dictamen —fechado el 19 de junio de 1968— en el que desestimaba la creación de un departamento de derecho mercantil y otro de derecho internacional público y privado. La comisión estimaba que el espíritu que presidía la constitución de los departamentos era

agrupar las disciplinas que, por su contenido, métodos de investigación, utilización de medios materiales, etc., pueden ser conjuntadas, sin mengua de su independencia científica, para una más eficiente actuación, tanto en orden a la investigación como a la docencia y aún a la organización administrativa.

Por ello consideraba que la creación de los departamentos propuestos desnaturalizaba este espíritu. Lo mismo mantuvo la comisión en el dictamen —fechado el 7 de septiembre de 1968— sobre la constitución del departamento de derecho político. El consejo prefería que esas cátedras permaneciesen de momento sin adscribirse a ningún departamento antes que desvirtuar el objetivo de la norma. Por otro lado al catedrático de derecho internacional se le recordaba que el decreto permitía separar las materias de derecho internacional público y privado, solicitando la incorporación de éste último al departamento de derecho privado y un profesor agregado para hacer factible la separación.

Por todo ello, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 8 de noviembre de 1967 la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho; Derecho canónico; Derecho administrativo y derecho del trabajo; Disciplinas económicas y financieras. Por orden de 12 de marzo de 1968 se crearon los de Derecho romano e historia del derecho; Derecho procesal. Por orden de 27 mayo 1968 se dispuso la constitución del de Derecho penal, y por orden de 9 enero 1971 la del de Derecho político y derecho internacional.

El 26 de abril de 1968 se procedió a la constitución de los departamentos de Filosofía del derecho⁵⁵, Derecho canónico⁵⁶, Derecho administrativo y derecho del trabajo⁵⁷, Disciplinas económicas y financieras⁵⁸, Derecho romano e historia del derecho⁵⁹, Derecho procesal⁶⁰. El 20 de julio de 1968 se constituyó el Departamento de derecho penal⁶¹.

⁵⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Felipe González Vicen) y un colaborador (*sic*). Estaba dotada una plaza de profesor adjunto pero se hallaba vacante.

⁵⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era un profesor adjunto (José Ricardo García Díaz) y un profesor ayudante. La cátedra estaba vacante, y al no haber agregado no podía haber director. Sobresale la pobreza de sus medios, sólo contaba con cuatrocientos volúmenes en su biblioteca.

⁵⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Alejandro Nieto), un profesor adjunto (Leopoldo de la Rosa Olivera), un profesor ayudante. Había dotada una plaza de profesor agregado pero estaba vacante.

⁵⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Eulogio Alonso-Villaverde), un profesor adjunto (Ramón de la Rosa Olivera), un profesor ayudante, y un colaborador.

⁵⁹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Juan Miguel González), un catedrático (Jesús Lalinde Abadía), dos profesores adjuntos (José M. Gómez Pérez, Basilio Fumero Dorta).

⁶⁰ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Manuel Morón Palomino), un profesor adjunto (Bernardo Cabrera Ramírez), un profesor ayudante. Los libros de su biblioteca eran sólo trescientos setenta y cuatro.

⁶¹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Manuel Cobo del Rosal), un profesor adjunto (Fernando de Lorenzo-Cáceres), un colaborador.

Universidad de Madrid ⁶²

En junta de facultad de 14 de junio de 1967 los catedráticos de derecho romano, haciendo uso de la opción prevista en el decreto, se pronunciaron en sentido de desglosarse del departamento previsto de derecho romano e historia del derecho. En junta de facultad de 20 de junio de 1967 se acordó por unanimidad —y en conformidad con el escrito presentado por los profesores afectos a las cátedras integradas— la constitución de los departamentos de Filosofía del derecho; Historia del derecho; Derecho canónico; Derecho penal; Derecho procesal; Disciplinas económicas y financieras.

Enseguida estos departamentos empezaron a constituirse. El 16 de junio de 1967 se constituyó el Departamento de derecho penal⁶³. El 19 de junio se constituyeron los departamentos de Filosofía del derecho⁶⁴, Derecho canónico⁶⁵, Derecho procesal⁶⁶, Disciplinas económicas y financieras⁶⁷. El 15 de julio se constituyó el de Historia del derecho⁶⁸.

⁶² ACE 93416.

⁶³ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Juan del Rosal Fernández), dos profesores adjuntos encargados de cátedra (Diego Mosquete Martín, José Cerezo Mir).

⁶⁴ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Joaquín Ruiz-Giménez), dos cátedras (Luis Legaz Lacambra, vacante), cuatro profesores agregados (vacantes), tres profesores adjuntos (Antonio Fernández-Galiano, Ángel Sánchez de la Torre, Elías Díaz García), dieciséis profesores ayudantes, dos auxiliares de biblioteca.

⁶⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Isidoro Martín Martínez), un profesor adjunto (Carlos Isidoro Martín Sánchez), cinco profesores ayudantes. Al departamento sólo se adscribía la primera cátedra.

⁶⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Leonardo Prieto-Castro), un profesor adjunto (Miguel Ibáñez y García de Velasco). El titular de la primera cátedra (Jaime Guasp) no se adhirió.

⁶⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Jesús Prados Arrarte), dos catedráticos (Mariano Sebastián Herrador, Fernando Sáenz de Bujanda), dos profesores extraordinarios (José Zubizarreta Gutierrez, Gonzalo Pérez de Armiñán), tres profesores adjuntos y veintitrés profesores ayudantes. El titular de la primera cátedra de Economía política, José María Naharro, hizo constar su decisión de no adherirse al departamento.

⁶⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Manuel Torres López), dos catedráticos (Alfonso Gar-

En el Departamento de derecho procesal, sólo se integró una de las cátedras; lo mismo sucedió en el Departamento de disciplinas económicas y financieras y en el de Derecho canónico.

Por orden de 21 de septiembre de 1967 el ministerio aprobó la constitución de estos departamentos. Más tarde, por decreto de 7 de marzo de 1968 se constituyeron los departamentos de Derecho romano; Derecho administrativo, derecho internacional y derecho político; y Derecho del trabajo. Estos departamentos no figuraban entre los que se definían en el decreto ordenador de las facultades de derecho, por ello —tal y como estaba previsto— se pidió dictamen al consejo nacional de educación, que informó favorablemente sobre la propuesta de la facultad. La creación de estos departamentos se justificaba, por un lado, por el elevado número de alumnos que cursaban estudios en esa facultad y, por otro, por razones de orden científico que aconsejaban —en la facultad de derecho de Madrid y sólo en ella— la constitución de departamentos con estructuras diferentes a las previstas en el decreto ordenador.

Por orden de 11 de junio de 1969 el ministerio dispuso la constitución del Departamento de derecho mercantil.

Ya vigente la LGE, por decreto de 3 de diciembre de 1970 se disolvió el Departamento de derecho político, administrativo e internacional y se crearon los departamentos de Derecho político, Derecho administrativo, Derecho internacional privado, y Derecho internacional público. En su exposición, el decreto indicaba que la experiencia había demostrado de inmediato que aquel departamento comprendía disciplinas dispares que hacían poco viable el trabajo conjunto y coordinado propio de un departamento. Incluso —continuaba justificando la exposición— las disciplinas de Derecho internacional público y Derecho internacional privado, a pesar de su denominación, resultaban tan distintas que era aconsejable su integración en departamentos independientes. Por ello la facultad había pedido la disolución de ese departamento. La solicitud fue informada positivamente por el rector y después por el consejo nacional de educación.

cía Gallo, Juan Manzano), tres plazas de profesor agregado (vacantes), cuatro profesores adjuntos (José Manuel Pérez Prendes, José Manuel Segura Morales, Gonzalo Martínez Díez, José Antonio Escudero López), trece profesores ayudantes, dos auxiliares de biblioteca y archivo.

Universidad de Murcia ⁶⁹

De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Murcia, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 2 de febrero de 1968 la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho; Historia del derecho; Derecho canónico; Derecho romano, civil y mercantil; Derecho procesal.

Estos departamentos habían sido propuestos por el rectorado con fecha 29 de enero de 1968. Junto a ellos aparecían dos más: Derecho administrativo y Derecho político. Como se trataban de departamentos de estructura diferente a los previstos en el decreto ordenador, el ministerio pidió dictamen al consejo nacional de educación. La comisión permanente del consejo nacional de educación desestimó en su dictamen su creación, pues iba en contra del espíritu del decreto⁷⁰.

Tras la aprobación de la LGE y del decreto de 26 julio 1973, el rector de la Universidad de Murcia —con el fin de completar la estructuración en departamentos de la facultad de derecho y oída la junta ordinaria de facultad de fecha 16 de octubre de 1973— propuso la creación de los siguientes departamentos: Derecho administrativo, Derecho político, Derecho del trabajo, Derecho internacional público y privado, Derecho penal, Disciplinas económicas y financieras. Pero no consta que fueran aprobados por el ministerio.

Universidad de Oviedo ⁷¹

En junta de facultad celebrada el 14 de julio de 1967 se propuso la creación de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho, Historia del derecho, Derecho canónico, Derecho político y derecho internacional, Derecho administrativo, Derecho romano y derecho civil, Derecho penal, Derecho procesal, Disciplinas económicas y financieras, Derecho mercantil y derecho del trabajo.

La junta acogió sendos escritos presentados por el titular de la cátedra de derecho mercantil, Aurelio Menéndez, y el encargado de

⁶⁹ ACE 93416. En este expediente no se conservan las actas de constitución de los departamentos.

⁷⁰ Expediente 33325. Dictamen de 25 abril 1968.

⁷¹ ACE 93416.

derecho del trabajo, José Manuel Almansa Pastor, en los que solicitaban la ulterior autorización del ministerio para que cada una de las asignaturas constituyeran su propio departamento: Derecho mercantil, derecho industrial y derecho de la navegación; Derecho del trabajo individual, colectivo y de la seguridad social. Las razones que aconsejaban el desglose de esas materias eran, en esencia, la complejidad y amplitud de las distintas disciplinas, la experiencia de los planes pilotos de Valencia y Sevilla, y el carácter interfacultativo de estos estudios (los mercantiles y laborales)⁷².

De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Oviedo, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 26 de septiembre de 1967 la constitución de los departamentos.

El 6 de diciembre de 1967 se constituyeron los departamentos de Filosofía del derecho⁷³, Derecho internacional y derecho político⁷⁴, Derecho administrativo⁷⁵, Derecho penal⁷⁶, Derecho procesal⁷⁷. El 7 de diciembre se constituyeron los departamentos de Historia del derecho⁷⁸, Derecho canónico⁷⁹, Disciplinas económicas y finan-

⁷² En 1979 la junta de facultad, en sesión de 18 de septiembre, volvió a pedir el desglose de este departamento.

⁷³ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director provisional (José Aparici Díaz), dos profesores adjuntos (Ramón Maciá Manso, Dionisio Llamazares Fernández), dos profesores ayudantes.

⁷⁴ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Luis Sela Sampil), tres profesores adjuntos (José Pérez Montero, Luis Sela Quintana, Francisco Ballesteros Villar), dos profesores ayudantes.

⁷⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Juan Luis de la Vallina Velarde), un profesor adjunto (Vicente de la Vallina Velarde), cinco profesores ayudantes.

⁷⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director accidental (José María Serrano), dos profesores adjuntos, uno de ellos encargado de la cátedra.

⁷⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José María Serrano), un profesor adjunto y un profesor ayudante.

⁷⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Ignacio de la Concha Martínez), un profesor adjunto (Carlos Prieto González).

⁷⁹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Alfonso Prieto Prieto), un profesor adjunto (Jesús Daza Martínez), un profesor ayudante.

cieras⁸⁰, Derecho mercantil y derecho del trabajo⁸¹. El 11 de marzo de 1968 se constituyó el de Derecho romano y derecho civil⁸².

Ya aprobada la LGE, en escrito de 2 noviembre 1973, el rectora-do a instancia de la facultad de derecho pidió la constitución de nuevos departamentos.

Universidad de Salamanca ⁸³

En junta de facultad de 16 noviembre 1967 se solicitó la consti-tución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho, His-toria del derecho, Derecho canónico, Derecho político y derecho administrativo, Derecho internacional, Derecho civil, Derecho mer-cantil y derecho del trabajo, Derecho penal, Derecho procesal, Dere-cho romano y derecho privado europeo, Economía política y hacien-da pública.

Tres de ellos no se adecuaban a lo dispuesto en el decreto orde-nador, bien por un desglose —caso de los de derecho civil y de dere-cho romano— o bien un simple cambio de denominación —caso de economía política y hacienda pública—. Por ello se pidió dictamen al consejo nacional de educación. La comisión permanente de este organismo manifestó que no procedía la constitución de los depar-tamentos⁸⁴.

⁸⁰ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Teodoro López-Cuesta de Egocheaga), dos profesores adjuntos (Mariano Abad Fernández, Manuel Casal Bravo), cuatro profesores ayu-dantes.

⁸¹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Aurelio Menéndez), un profesor encargado de cátedra (José Manuel Almansa Pastor), tres profesores adjuntos (Luis Carlón Sánchez, Juan Luis Iglesias Prada, Carlos Hidalgo Schuman), cuatro profesores ayudantes.

⁸² El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José Luis de los Mozos), un catedrático (José Aparici Díaz), dos profesores adjuntos (Alejandro de la Vallina Díaz, Gerardo Turiel de Cas-tro), un profesor ayudante. El titular de la segunda cátedra de derecho civil manifestó su deseo de no integrarse en departamento.

⁸³ ACE 93416.

⁸⁴ Expediente 32.902. Dictamen de 21 febrero 1968. El titular de la cátedra de derecho romano (Pablo Fuenteseca Díaz) proponía que el depar-tamento incluyese las siguientes materias: derecho privado romano, dere-

De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Salamanca, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 9 enero 1968 la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho; Historia del derecho; Derecho canónico; Derecho político y derecho administrativo; Derecho internacional; Derecho mercantil y derecho del trabajo; Derecho penal; Derecho procesal.

El 2 de abril de 1968 se constituyó el Departamento de historia del derecho⁸⁵. El 30 de abril se constituyó el Departamento de dere-

cho público romano e historia del derecho privado europeo (derecho común, derecho de pandectas, etc.). Se trataba de introducir una enseñanza análoga a lo que en Alemania se denominaba historia del derecho privado romano. El consejo no estimaba procedente la constitución de este departamento. Si se contempla el derecho romano «como un sistema histórico referido a un momento determinado de la Historia de Roma, puede agruparse con la Historia del Derecho, y si se entiende como precedente y matriz del Derecho Privado moderno encuentra su encaje junto a éste, considerado —en expresión de Bentham— como la parte más general y común de la jurisprudencia, que es exactamente lo que quiso decir Savigny cuando hablaba del «Derecho romano actual», que era sencillamente el Derecho privado vigente antes de la codificación y cuyo conocimiento es inexcusable e indispensable para los civilistas». Y añadía: «Los criterios puramente personales de los titulares de cada Cátedra no deben prevalecer frente a la necesidad de agrupación en los Departamentos, desde el punto de vista de la docencia orgánica y de la investigación». Además, un departamento unidisciplinar de derecho romano sólo podía tener justificación, por razones de oportunidad, en la Universidad de Madrid, «donde era necesario aunar la labor de tres Catedráticos numerarios y los múltiples Adjuntos y Ayudantes de la misma materia, pero no en otras Universidades, en donde el Catedrático es único y la materia fácilmente conectada con otras».

Razones semejantes le llevaban a desestimar la creación de un departamento unidisciplinar de derecho civil.

Por su parte, la catedrática de Economía política y hacienda pública pedía que el departamento se denominase como la cátedra, y no disciplinas económicas y financieras. El consejo contestaba que «precisamente se adoptó dicha denominación para dar una posible mayor amplitud al concepto restringido que se encierra, en opinión de autorizados publicistas, en la expresión «Economía Política y Hacienda Pública» y que no comprende el Derecho Fiscal o Derecho Financiero».

⁸⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Francisco Tomás y Valiente), un profesor adjunto (Benjamín

cho mercantil y derecho del trabajo⁸⁶. El 7 de mayo se constituyó el Departamento de derecho internacional⁸⁷. El 31 de mayo se constituyó el Departamento de derecho canónico⁸⁸.

Ya aprobada la LGE, la junta de profesores de la facultad en sesión de 5 julio 1972 acordó que los departamentos se constituyeran por disciplinas, lo que se propuso al rectorado⁸⁹. Éste, con cierta demora, los aprobó en junta de gobierno de 3 de diciembre de 1975.

Aunque no fueron aprobados por el ministerio, la facultad de derecho entendía que por la disposición final cuarta de la LGE quedaban derogados los decretos relativos a la constitución de departamentos, y que en consecuencia y a tenor de lo preceptuado en los artículos 64.1, 66.1 y 2 a, 69.1, 70.1 y 2, y 71.1 de la LGE en relación con el

González Alonso), una profesora ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁸⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Faustino F. Duque Domínguez), dos profesores adjuntos (Cándido Rodríguez Verástegui, Fernando Rodríguez Artigas), cuatro profesores ayudantes de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁸⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Vicente Ramírez de Arellano Marcos), dos adjuntos (Inocencio García Velasco, Jesús Oscar García Rodríguez), tres profesores ayudantes de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁸⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director propuesto (Lamberto de Echeverría y Martínez de Marigorta), un profesor adjunto (Luis Portero Sánchez) y tres profesores ayudantes de clases prácticas.

⁸⁹ La propuesta con el nombre del director se hizo en escrito fechado el 18 mayo 1973. Éstos eran: Derecho natural y filosofía del derecho (José Delgado Pinto), Historia del derecho (Francisco Tomás y Valiente), Derecho político (Juan Ferrando Badía), Derecho administrativo (Enrique Rivero Ysern), Derecho internacional (Vicente Ramírez de Arellano Marcos), Derecho mercantil (Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Derecho del trabajo (José Vida Soria), Derecho penal (Manuel Serrano Rodríguez), Derecho procesal (vacante), Economía política y hacienda pública (Gloria Begué Cantón), Derecho civil-Instituciones de derecho civil (Pablo Beltrán de Heredia de Onís), Derecho civil-Derecho civil español común y foral (José Luis de los Mozos y de los Mozos), Derecho romano (Alfredo Calonge Matellanes), Derecho canónico (Lamberto de Echeverría y Martínez de Marigorta), Derecho financiero y tributario (vacante).

artículo 13 de los Estatutos de la Universidad de Salamanca aprobados por decreto de 31 diciembre 1970 y orden de 26 abril 1974, los departamentos vigentes eran los propuestos en la junta de facultad.

*Universidad de Santiago*⁹⁰

De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Santiago, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 26 septiembre 1967 la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho, Historia del derecho, Derecho canónico, Derecho internacional, Derecho político y derecho administrativo, Derecho romano y derecho civil, Derecho penal, Derecho procesal, Disciplinas económicas y financieras, Derecho mercantil y derecho del trabajo.

La facultad hacía contar que se reservaba pedir cuando hubiese catedrático de derecho civil y administrativo el desdoblamiento de esos departamentos «supuesta la entidad científica y docentes de las asignaturas agrupadas».

El 2 de octubre de 1967 se constituyeron los de Derecho canónico⁹¹, Derecho político y derecho administrativo⁹², Derecho romano y derecho civil⁹³, Derecho procesal⁹⁴. El 3 de octubre se constituye-

⁹⁰ ACE 93416.

⁹¹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Paulino Pedret Casado), un profesor adjunto (José Ángel Fernández Arruty), un profesor ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹² El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José Antonio González Casanova), dos profesores adjuntos (José María de Frutos Isabel, José Caamaño Martínez), dos profesores ayudantes de clases prácticas. La cátedra de derecho administrativo estaba convocada a oposición. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹³ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Manuel García Garrido), tres profesores adjuntos (José Luis Murga Gener, Agustín Luna Serrano, José María Paz Sueiro), seis profesores ayudantes de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹⁴ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Manuel Serra Domínguez), un profesor adjunto (vacante), un

ron los de Derecho penal⁹⁵, Disciplinas económicas y financieras⁹⁶; el 4 de octubre el de Derecho internacional⁹⁷, el 6 de octubre el de Derecho mercantil y derecho del trabajo⁹⁸. El 1 de diciembre se constituyó el Departamento de filosofía del derecho⁹⁹ y el 15 de diciembre el de Historia del derecho¹⁰⁰.

Ya aprobada la LGE, a iniciativa de los titulares de las cátedras afectadas, y a petición de la junta de facultad de derecho en su sesión de 14 febrero 1973 y con aprobación de la junta de gobierno de la Universidad de Santiago de 20 marzo 1973, el rectorado solicitó al ministerio el desdoblamiento del Departamento de derecho político y administrativo. Como este departamento no estaba previsto en el decreto ordenador en departamentos de las facultades de derecho se pidió dictamen a la junta nacional de universidades (antes se pedía al consejo nacional de educación). Ésta lo analizó en sesión celebrada

profesor ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José Antonio Sainz Cantero), un profesor adjunto (Agustín Fernández Albor), dos profesores ayudantes de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Carlos G. Otero Díaz), dos profesores adjuntos (José Manuel Beiras Torrado, Daniel García Ramos), dos profesores ayudantes de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes), un profesor adjunto (Manuel Remuñán Ferro), un profesor ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Carlos Fernández Novoa), un profesor encargado de derecho del trabajo (Santiago Nogueira Romero), dos profesores adjuntos (Francisco Porto Mella, José Antonio Gómez Segade), dos profesores ayudantes de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

⁹⁹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Francisco Puy Muñoz), un profesor adjunto (Vladimiro Lamsdorff-Galagane Brown), una profesora ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹⁰⁰ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Alfonso Otero Varela), un profesor adjunto (Aquilino Iglesia Ferreirós). Se acompañaba una copia del reglamento de régimen interno.

por su comisión permanente el 11 de abril de 1973, y estimaba que era mejor esperar a la aprobación del nuevo plan de estudios de la facultad, lo que se comunicó a la Universidad de Santiago. Finalmente, el decreto de 7 junio 1973 declaraba extinguido el mencionado departamento y ordenaba la constitución de los dos propuestos.

En junta de 5 de marzo de 1975 la facultad de derecho solicitó el desglose de los departamentos de Derecho mercantil y derecho del trabajo, Derecho romano y derecho civil, y Disciplinas económicas y financieras. El rectorado, oída la junta de gobierno en su reunión de 22 de abril de 1975 elevó la petición al ministerio.

*Universidad de Sevilla*¹⁰¹

En junta de facultad celebrada el 19 de octubre de 1967 se acordó por unanimidad proponer al ministerio los siguientes departamentos: Filosofía del derecho, Historia del derecho, Derecho canónico, Derecho político y derecho internacional, Derecho administrativo, Derecho penal, Derecho procesal, Disciplinas económicas y financieras, Derecho mercantil y derecho del trabajo. Todos ellos estaban previstos en el decreto ordenador. La cátedra de derecho romano y las dos de derecho civil decidieron no integrarse en departamento.

Los doctores Olivencia y Rodríguez-Piñero, para facilitar la aplicación del decreto, propusieron la creación de un departamento de derecho mercantil y derecho del trabajo. Ambos profesores estimaban conveniente, al mismo tiempo, que sus respectivas disciplinas integrasen departamentos autónomos: Derecho mercantil, derecho industrial y derecho de la navegación; Derecho del trabajo, derecho sindical y derecho de la seguridad social. En esencia, fundamentaban su solicitud en las necesidades del plan de estudios sevillano, en una deseable ordenación interfacultativa de los estudios de derecho y ciencias económicas, y en las distintas materias que cada una de esas disciplinas englobaban en sí (que en la mayoría de los países tenían autonomía científica y docente)¹⁰².

De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Sevilla, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden

¹⁰¹ ACE 93416.

¹⁰² Casi diez años después se volvió a formular en 1976 esta petición.

de 24 de octubre de 1967 (el mismo día de entrada de la solicitud) la constitución de los departamentos.

En fin, el 6 de noviembre de 1967 se constituyeron los departamentos de Derecho mercantil y derecho del trabajo¹⁰³, Derecho administrativo¹⁰⁴, Derecho canónico¹⁰⁵, Derecho penal¹⁰⁶, Derecho político y derecho internacional¹⁰⁷, Disciplinas económicas y financieras¹⁰⁸, Derecho procesal¹⁰⁹, Filosofía del derecho¹¹⁰, Historia del derecho¹¹¹.

¹⁰³ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Manuel Olivencia Ruiz), un catedrático (Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer), tres profesores adjuntos (Guillermo J. Jiménez Sánchez, José Luis Ballester Almadana, José Cabrera Bazán), siete profesores ayudantes de clases prácticas.

¹⁰⁴ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Manuel Francisco Clavero Arévalo), dos profesores adjuntos (Enrique Rivero Ysern, Alfonso Pérez Moreno), ocho profesores ayudantes de clases prácticas.

¹⁰⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Alberto de la Hera Pérez de la Cuesta), un profesor adjunto (Carlos Seco Caro), dos profesores ayudantes de clases prácticas.

¹⁰⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José María Navarrete Urieta), un profesor adjunto (Lorenzo Polaino Ortega), tres profesores de clases prácticas.

¹⁰⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Ignacio María de Lojendio e Irure), un encargado de cátedra (José Joaquín Olivares d'Angelo), tres profesores adjuntos (Manuel Romero Gómez, José Manuel Peláez Marón, José Antonio Pérez Hevia), cuatro profesores ayudantes de clases prácticas.

¹⁰⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Jaime García Añoveros), dos profesores adjuntos (Francisco {J. Lasarte Álvarez, Vicente Romero Muñoz), seis profesores ayudantes de clases prácticas.

¹⁰⁹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario), dos profesores adjuntos (José Almagro Nosete, Julio García Casas), dos profesores ayudantes de clases prácticas.

¹¹⁰ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Francisco Elías de Tejada y Spínola), dos profesores interinos (Carlos López Nuñez, Manuel Fernández Escalante), dos profesores ayudantes de clases prácticas.

¹¹¹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José Martínez Gijón), un profesor adjunto (Joaquín Cuevas López), dos profesores ayudantes de clases prácticas.

Universidad de Valencia ¹¹²

El 10 de julio de 1967 se reunió la junta de facultad para cumplir el decreto ordenador en departamentos. En su opinión, la organización óptima estaría en la constitución de un departamento por cada disciplina científica, en el que la cátedra o cátedras correspondientes atenderían las labores docentes y de investigación exigidas para el buen desarrollo de dicha disciplina científica y de sus materias afines, mediante los cursos generales, cursos monográficos, seminarios, grupos de trabajo, etc. Esto se veía especialmente conveniente por el volumen de trabajo que previsiblemente ocasionarían las especializaciones en los cursos cuarto y quinto del nuevo plan de estudios, lo que requeriría además la dotación del mayor número de agregados posible.

Mientras esto no fuera posible, la facultad pedía la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho; Derecho romano e historia del derecho; Derecho canónico; Derecho político y derecho internacional; Derecho administrativo y derecho del trabajo; Derecho procesal; Disciplinas económicas y financieras. Los titulares de las cátedras que no se mencionan habían pedido un aplazamiento para reconsiderar el tema y elegir la fórmula que mejor pudiera convenir a su trabajo académico. De conformidad con la propuesta formulada por la Universidad de Valencia, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 9 de octubre de 1967 la constitución de los departamentos referidos.

Para completar el número de departamentos, la junta de facultad en su sesión de 10 de noviembre de 1967 pidió la constitución de los siguientes: Derecho civil, Derecho penal, Derecho mercantil industrial y de la navegación. En esa junta, Manuel Broseta Pont justificó su propuesta.

Opinaba el catedrático que el desarrollo económico experimentado en España en los últimos años había provocado una expansión considerable del ordenamiento jurídico comprendido bajo la denominación de derecho mercantil. Esto hacía necesario fomentar e intensificar la investigación y la enseñanza de sectores enteros de nuestro ordenamiento (derecho industrial, derecho de la competencia, derecho de la navegación, derecho de seguros, derecho con-

¹¹² ACE 93417.

cursal, derecho bancario, derecho de transportes, etc.) y exigía además contar con un creciente número de profesores que formen parte de un equipo docente e investigador abierto a la especialización, para resolver las exigencias jurídicas de la realidad económica de la sociedad que circundaba a la Universidad de Valencia.

A esto sumaba Broseta la experiencia de otros países (Francia, Alemania, Italia), la petición de otras universidades (Madrid, Oviedo, Sevilla), las características del plan de 1965 y de la licenciatura en ciencias económicas.

Sin embargo, la comisión permanente del consejo nacional de educación desestimó la constitución de un departamento de derecho civil y otro de derecho mercantil, industrial y de la navegación¹¹³. Compartía la opinión de Broseta sobre la importancia de la materia, pero mantenía que la creación de departamentos unidisciplinares iba en contra del espíritu de la reforma.

Poco después, por orden de 27 de noviembre de 1967 el ministerio dispuso según la propuesta formulada la constitución del Departamento de derecho penal. Y el 8 de enero de 1968 se constituyeron los departamentos de Filosofía del derecho¹¹⁴, Derecho romano e historia del derecho¹¹⁵, Derecho canónico¹¹⁶, Derecho político y derecho internacional¹¹⁷, Derecho administrativo y derecho

¹¹³ Expediente 33.191. Dictamen de 20 marzo 1968.

¹¹⁴ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José Corts Grau), dos profesores adjuntos (Ismael Peydro Pastor, Jesús Ballesteros Llompart). Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹¹⁵ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (José Santa Cruz Teijeiro), un catedrático (Juan García González), dos profesores adjuntos (Manuel Jordán Montañés, Mariano Peset Reig), dos profesores de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹¹⁶ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Antonio Mostaza Rodríguez), un profesor adjunto (Víctor Sebastián Iranzo), un profesor ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹¹⁷ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Adolfo Miaja de la Muela), un catedrático (Diego Sevilla Andrés), tres profesores adjuntos (Carmen Martí de Vesés Puig, Eloy Ruiloba Santana, Joaquín Tomás Villarroja), cuatro profesores de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

del trabajo¹¹⁸, Derecho procesal¹¹⁹, Disciplinas económicas y financieras¹²⁰, Derecho penal¹²¹.

Finalmente, en junta de facultad de 26 de marzo de 1969 se propuso la creación del Departamento de derecho civil y derecho mercantil, al que se adscribirían las dos cátedras de derecho civil y la de mercantil. Pasado el tiempo, y ya aprobada la LGE, por orden 9 enero 1971 se dispuso su constitución.

En virtud de la competencia conferida por el artículo 5 de los Estatutos provisionales de la Universidad de Valencia aprobados por decreto de 6 mayo 1971 y prorrogados en su vigencia por orden de 8 junio 1974, el rectorado dictó resolución de fecha 13 octubre 1972 por la que desglosó los departamentos que aglutinaban dos disciplinas, designando con posterioridad —por resolución de 13 noviembre 1973— a sus respectivos directores-catedráticos¹²². Pero este desglose no constaba en el ministerio...

¹¹⁸ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Juan Galvañ Escutia), el encargado de la cátedra de derecho del trabajo (Ignacio Albiol Montesinos), cuatro profesores adjuntos (Juan Pérez Burriel, Ignacio Albiol Montesinos, José María Dilla Gutiérrez, José Luis Martínez Morales), tres profesores de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹¹⁹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Víctor Fairén Guillén), dos profesores adjuntos (Francisco Vives Villamazares, Francisco Fuentes Carsí), dos profesores ayudantes de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹²⁰ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Fernando Vicente-Arche Domingo), dos profesores adjuntos (Simón Cano Denia, Fernando Cervera Torrejón), un profesor ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹²¹ El personal que quedaba integrado en el mismo era el catedrático y director (Juan Córdoba Roda), dos profesores adjuntos (Gonzalo Rodríguez Mourullo, José R. Casabó Ruiz), un profesor ayudante de clases prácticas. Se adjuntaba una copia del reglamento de régimen interno.

¹²² Derecho y relaciones internacionales (Adolfo Miaja de la Muela), Derecho civil (Manuel Gitrama González), Derecho político (Diego Sevilla Andrés), Derecho romano (Emilio Valiño del Río), Historia del derecho (Juan García González), Derecho administrativo (Juan Galvañ Escutia), Derecho del trabajo (José Manuel Almansa Pastor), Derecho mercantil (Manuel Broseta Pont). Valiño fue nombrado por resolución de 24 mayo 1974.

*Universidad de Valladolid*¹²³

La facultad dedicó sus juntas de 6 de julio y 4 de octubre de 1967 a estudiar la división en departamentos. De conformidad con su propuesta, el ministerio de educación y ciencia dispuso por orden de 31 de octubre de 1967 la constitución de los siguientes departamentos: Filosofía del derecho; Derecho romano, historia del derecho y derecho canónico; Derecho político y derecho administrativo; Derecho internacional; Derecho civil; Derecho mercantil y derecho del trabajo; Derecho penal; Derecho procesal; Disciplinas económicas y financieras.

Ya aprobada la LGE, considerando las transformaciones operadas en la facultad y especialmente el gran incremento experimentado por el número de alumnos, la facultad en junta de 13 de diciembre de 1972 estimó oportuno proceder a la creación escalonada de nuevos departamentos, facultando a los actuales para que elevasen las propuestas pertinentes a fin de establecer una nueva organización dentro de lo previsto en los Estatutos provisionales de la Universidad. En atención a ello, el rectorado solicitó con fecha 20 enero 1973 la creación del Departamento de derecho romano. Petición que volvió a efectuarse con fecha 26 marzo 1973.

La facultad volvió a pedir el 2 de julio de 1973 que la asignatura de Derecho romano formase un departamento independiente. El ministerio pasó la propuesta elevada por el rectorado de la Universidad de Valladolid a la junta nacional de universidades para que emitiera el dictamen pertinente.

La comisión permanente de la junta nacional de universidades acordó el 20 de junio de 1973 informar favorablemente sobre la creación del Departamento de derecho romano en la Universidad de Valladolid.

Como el ministerio no evacuaba su orden, el 5 de octubre de 1973 la facultad volvió a cursar su petición, añadiendo ahora que también Historia del derecho constituyese un departamento independiente, así como Derecho administrativo.

¹²³ ACE 93417. Las actas de constitución de los departamentos no se conservan en el expediente.

Universidad de Zaragoza ¹²⁴

No tenemos constancia de la creación de departamentos en la facultad de derecho de la Universidad de Zaragoza hasta 1979, cuando en relación a un complemento económico de los profesores directores de los mismos se desencadenó todo el proceso de su constitución.

La facultad, sin embargo, indicó que había solicitado la creación de los departamentos con fecha de 19 de septiembre de 1975, habiéndose remitido ésta al ministerio con el informe favorable de la junta de gobierno de la Universidad el 25 de septiembre de 1975.

En efecto, por acuerdo de la junta de 15 de septiembre de 1975 se solicitó la constitución de los departamentos de Filosofía del derecho, Derecho romano e historia del derecho, Derecho penal, Derecho procesal, Derecho civil, mercantil y del trabajo, Derecho público y ciencia política, Derecho internacional. Se adjuntaron los proyectos de reglamento y las memorias de los medios de que dispondrían, así como el nombre del director¹²⁵. Pero en el ministerio no figuraba nada...

Mientras, decían José Luis Murga Gener y Jesús Lalinde Abadía en escrito fechado el 6 de marzo de 1979, las cátedras de derecho romano e historia del derecho actuaban «como único Departamento, aunque no ha existido hasta el momento ninguna declaración oficial sobre su reconocimiento».

Sin embargo, entre la documentación conservada no sólo se encuentra la referida a 1975 sino también toda la originada tras el decreto de 1967. Sabemos gracias a ella que en sesión de 13 de febrero de 1968 la junta de facultad de la Universidad de Zaragoza acordó por unanimidad elevar al ministerio la propuesta de constitución de los departamentos de Derecho romano e historia del derecho, Derecho canónico, Derecho penal, Derecho civil (primera cátedra), Derecho civil y derecho del trabajo (segunda cátedra de civil), Derecho administrativo, Derecho internacional, Derecho procesal, Derecho mercantil.

El ministerio pidió al consejo nacional de educación dictamen sobre los departamentos no contemplados en el decreto ordenador.

¹²⁴ ACE 93417.

¹²⁵ Por orden, Juan José Gil Cremades, Jesús Lalinde Abadía, José Cerezo Mir, Vicente Herce Quemada, Luis Martín Ballester, Lorenzo Martín Retortillo, José Antonio Pastor Ridruejo.

La comisión permanente estimaba que la propuesta iba en contra del espíritu del decreto, por lo que concluía que no procedía constituir los departamentos de Derecho internacional, Derecho mercantil y Derecho civil¹²⁶.

5. *Demanda de especialización profesional*

El llamado problema universitario tenía que ver con los planes de estudios. Frente al plan vigente de 1953 —que era un plan unitario, articulado en cinco cursos anuales—, los profesores reunidos en Barcelona —lo hemos visto— propusieron la elaboración de uno nuevo compuesto de tres años comunes y dos de especialización en las siguientes ramas: forense, político-administrativa, económico-empresarial, histórica-filosófica.

Un año después de la celebración de la asamblea, las facultades de derecho de Sevilla y Valencia elevaron al ministerio la propuesta de iniciar, por vía de ensayo, en el curso académico 1965-1966, un nuevo plan de estudio¹²⁷. Para su elaboración habían tenido en cuenta las conclusiones de la asamblea apenas mencionada, las experiencias extranjeras y la necesidad de adaptar los estudios jurídicos a las necesidades sociales que demandaban de los juristas una cierta especialización. Veamos cómo se gestó el nuevo plan.

La junta de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla en sus sesiones celebradas los días 25 y 26 de mayo de 1965 acordó por unanimidad elevar al ministerio de educación nacional la reforma del plan de estudio¹²⁸.

¹²⁶ Expediente 33.692. Dictamen de 5 junio 1968.

¹²⁷ La propuesta de la Universidad de Sevilla lleva fecha de 7 de junio de 1965, la de Valencia de 14 de julio de 1965. Ambas en AGA (05) IDD 1.016, 20269.

¹²⁸ En AGA (05) IDD 1.016, 20269 aparece la certificación firmada por el secretario de la facultad, José Martínez Gijón, con la transcripción del plan de estudio. Sobre la elaboración del plan sevillano véase Antonio Merchán, «Cuatro lustros de estudios jurídicos hispalenses (Consideraciones sobre los planes de estudios ensayados o proyectados en la facultad de derecho de Sevilla, 1964-1983)», *Historia, instituciones, documentos*, 11 (1984), pp. 157-196.

En su justificación se indicaba que la sociedad y su complejidad jurídica demandaban, junto al mantenimiento de una formación general, un cierto grado de especialización. En el plan de estudio propuesto se lograba lo primero manteniendo todas las asignaturas básicas y formativas; lo segundo, determinando tres grupos de materias. El primero de los grupos versaba sobre derecho público, con él se pretendía «iniciar en la especialidad a quienes han de ingresar en los Cuerpos de funcionarios de la Administración pública, y a quienes han de ejercitar la abogacía libre en materias administrativas o tributarias». El segundo grupo de materias intensificaba los estudios jurídicos relacionados con la empresa, los problemas laborales, los temas fiscales y económicos. Se trataba «de iniciar en la especialización con este grupo a los muchos juristas que han de trabajar en empresas o en organizaciones sociales». El tercer grupo de materias intensificaba los estudios de las disciplinas de derecho privado, penal y procesal. Pretendía «iniciar la orientación profesional de aquellos que han de ejercer la abogacía tradicional, de quienes aspiren al ingreso en la carrera judicial y en las de Registro y Notariado».

El plan constaba de cinco cursos, tres comunes y dos de especialización por grupos de materias. Los comunes con cinco asignaturas cada uno, los de especialización con seis. En todos se intentaba no cargar al alumno limitando el número de horas de cada materia.

Este inicio de especialización intentaba también abordar el «grave problema» de las salidas profesionales de los alumnos de las facultades de derecho, y conectar la facultad con el ingreso en la administración pública.

En cuanto al contenido del plan propuesto, éste coincidía prácticamente con el que después aprobaría el ministerio: los años comunes son exactos, los de especialización sólo difieren en un pequeño cambio.

Se añadía finalmente un inciso didáctico: «Se procurará modificar en lo posible los métodos pedagógicos». Se trataba de intensificar el sistema de seminarios de investigación y clases prácticas. Así, en los cursos de especialización se organizarían dos seminarios anuales, uno práctico y otro teórico. En ellos intervendrían varios catedráticos, para que cada uno analizase la cuestión desde la perspectiva propia de su disciplina.

El rectorado de la Universidad de Sevilla informó favorablemente el proyecto y lo remitió al ministerio el 8 de junio de 1965. El

proyecto pasó al consejo nacional de educación. La sección primera estimaba muchos aspectos del plan propuesto por Sevilla, pero al mismo tiempo no veía oportuna su tramitación en un momento en que también estaba fraguándose la ley que modificaba las estructuras universitarias. La comisión permanente del consejo hizo suyo el informe de la sección primera pero entendía que no le correspondía determinar «la oportunidad o no del momento actual para la instauración de nuevos Planes de estudios»¹²⁹.

Casi simultáneamente, la facultad de derecho de la Universidad de Valencia tramitaba otro proyecto de «revisión y actualización del plan de estudios»¹²⁹. La junta de la facultad de derecho celebró los días 19 de junio y 7 de julio de 1965 dos sesiones para tratar de la revisión del plan. En la primera de ellas se adoptó por voto unánime de los asistentes «la necesidad de actualizar y readaptar el Plan de estudios actualmente vigente en las Facultades de Derecho». Tal reforma debía realizarse siguiendo las líneas generales establecidas en la asamblea de Barcelona y en el proyecto de reforma de Sevilla.

En la segunda sesión se aprobó el proyecto. Poco difería del sevillano, reproducía una misma justificación y opción pedagógica, y proponía una misma estructura: tres años comunes (idénticos a los de Sevilla) y dos de especialización. Éstos se estructuraban también en tres grupos, con la misma denominación. Sin embargo, su contenido variaba ligeramente: por un lado, junto a cursos anuales aparecían otros cuatrimestrales; por otro, el número de materias era menor, cinco frente a las seis de Sevilla.

Otra novedad era que el proyecto de Valencia hablaba ya de departamentos y de agregados, aunque la ley que regulaba a unos y otros aún no se había aprobado.

El decano de Valencia envió el 14 de julio al rectorado el proyecto para su tramitación. El rectorado lo informó favorablemente y lo envió al ministerio el 16 de julio.

Aunque la facultad de Valencia se remitía a la asamblea de Barcelona y al plan sevillano, lo cierto es que existía otro precedente. El 13 de diciembre de 1963, el catedrático de derecho del trabajo de la Universidad de Valencia —Efrén Borrajo Dacruz— había presenta-

¹²⁹ Expediente 26768, de 16 julio 1965.

¹³⁰ En AGA (05) IDD 1.016, 20269 aparece la certificación firmada por el secretario de la facultad, Manuel Broseta Pont, con la transcripción del plan de estudio.

do para su discusión en junta de facultad una comunicación sobre la revisión del plan de estudios¹³¹.

Borrajo partía de la idea de que el derecho es una ciencia social y que por tanto la formación que se tenía que dispensar en una facultad de derecho no podía ser sólo jurídica. Fundamentaba su afirmación en distintas fuentes: las conclusiones del coloquio sobre la enseñanza del derecho celebrado en 1952 en Cambridge, la reforma francesa de 1954, el temario de las pruebas de ingreso en los cuerpos técnicos de la administración, y el elevado número de convalidaciones que existían entre la facultad de ciencias políticas, económicas y comerciales y la facultad de derecho. Pero, al margen de otros conocimientos, su propuesta era deudora del informe elaborado por Eisenmann¹³².

¹³¹ Efrén Borrajo Dacruz, *Revisión y actualización del plan de estudios en las facultades de derecho (comunicación)*, Facultad de derecho, Valencia 1963. AGA (05) IDD 1.016, 20270.

En la sesión del día siguiente fue repetida como voto particular al que se adhirieron los catedráticos firmantes: Víctor Fairén Guillén, Juan García González, Adolfo Miaja de la Muela, José Navarrete Urieta, José Santa Cruz Teijeiro. La comunicación constaba de tres puntos: 1. Los términos de la cuestión.— 2. Esquemas indicativos del Plan de estudios revisado.— 3. Configuración de la cátedra universitaria de derecho.

¹³² Charles Eisenmann, *Las ciencias sociales en la enseñanza superior: derecho. Con un apéndice dedicado a España por Luis Jordana de Pozas*, Madrid 1958.

El Comité internacional de derecho comparado había encargado en 1951 a Niboyet, profesor de la facultad de derecho de París, la redacción de un informe general relativo a la enseñanza del derecho, encuadrado en la encuesta sobre la enseñanza de las ciencias sociales emprendida por la Unesco en 1950. Al morir Niboyet en 1952 fue sustituido por Eisenmann. La encuesta se efectuó en nueve países: Bélgica, Egipto, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Líbano, México y Suecia.

Los días 18 y 19 de julio de 1952 tuvo lugar en Cambridge un coloquio sobre la enseñanza del derecho, organizado por el Comité internacional de derecho comparado. En él se discutieron las cuestiones suscitadas por la encuesta y se manifestó una notable coincidencia de puntos de vista, a pesar de las distintas culturas jurídicas allí presentes.

Las conclusiones de este coloquio —en las que se afirmaba la necesidad de considerar la enseñanza del derecho dentro de las ciencias sociales y de incorporar por ello en el currículum del jurista algunas de estas materias— así como el proyecto de reforma de la enseñanza del derecho en Francia de 1954 aparecen —junto a unas notas de Jordana de Pozas— como apéndices del libro.

El primer asunto que había que dirimir, en opinión de Borrajo, era si la licenciatura en derecho debía organizarse como estudios comunes o cabían especializaciones. Así, frente a la uniformidad del plan de 1953 el autor mostraba la experiencia de las grandes universidades anglosajonas, donde se favorecía la intensidad en el estudio de ciertas materias a través de la existencia de diplomas de especialización y la división de materias entre obligatorias y opcionales.

También la experiencia francesa permitía al alumno elegir entre tres grandes secciones. En este caso existían asignaturas comunes a todos los alumnos y grupos de asignaturas que se organizaban en atención a las especialidades.

En opinión del catedrático valenciano, la especialización facilitaba la dedicación profesional del licenciado en derecho. Ésta permitía hablar al menos de tres secciones: derecho privado (ejercicio de la profesión), de la empresa (gestión y asesoramiento) y público (actividad político-administrativa). Además, la organización de cursos de especialización servía de estímulo para el profesor: evitaba repetir una y otra vez el mismo curso de introducción y permitía mostrar los frutos de su investigación de manera más satisfactoria.

¿Qué materias se estudiarían? El autor estimaba que el plan de 1953 respondía a «una sociedad nacional predominantemente agraria, cerrada en sus fronteras, con abogados que ejercían todo el Derecho en núcleos urbanos pequeños y distantes entre sí». No respondía a «una sociedad abierta, con un crecimiento masivo de las estructuras industriales y urbanas, con una práctica profesional en la que la división del trabajo es, a la vez, una realidad y una necesidad, en la que el «bufete» será colectivo, en la que el dictamen del especialista será la garantía de los intereses del cliente, etc.». Proponía por ello mantener las disciplinas jurídico-históricas (el universitario necesitaba una formación cultural que ordenara sus conocimientos) y aumentar las profesionales (para que efectivamente fuera útil a la sociedad de su momento).

Tras estas consideraciones, ofrecía dos esquemas de trabajo. El primero se trataba de una revisión mínima: mantenía el cuadro de disciplinas existente en el plan de 1953 pero variaba su distribución por cursos. En opinión de Borrajo estaba demostrado que el estudio de una misma materia en dos o más cursos, aunque de hecho no aumente el número de horas dedicadas a su enseñanza, resultaba más racional y profundo. Así, las asignaturas de Derecho roma-

no, Historia del derecho, Derecho canónico y Derecho del trabajo duplicaban sus cursos. Por ejemplo, la Historia del derecho pasaría a segundo curso para continuar el ciclo de estudios históricos (de Roma, general, a España, particular) con tres horas semanales, y en otro año un curso monográfico (posiblemente cuatrimestral). Se trataba de un planteamiento diametralmente opuesto al que años antes sustentaba la elaboración del plan de 1953¹³³.

Aparecía así otra novedad propuesta, la existencia junto a los cursos generales de la disciplina de cursos monográficos. En los primeros se trataba de desarrollar una explicación sucinta con la indicación al alumno de la bibliografía básica; en los segundos el tratamiento monográfico de algunos temas.

Por último, la parte general de Derecho civil se daría en primero. De esta forma el alumno entraría en contacto desde el principio con el derecho positivo.

El segundo esquema propuesto suponía una revisión general del plan vigente e introducía la novedad de las especializaciones. Estimaba Borrajo que el número de cursos comunes y de secciones de especialización era algo muy discutible, aunque le parecía oportuno un esquema de tres años comunes y dos de especialización. Las especializaciones serían como mínimo tres, de acuerdo con las salidas profesionales ya analizadas: estudios de derecho privado, estudios de derecho de la empresa, estudios de derecho público. También aquí junto a los cursos generales aparecerían los cursos monográficos.

Pero la reforma de las facultades de derecho no sólo era un problema de organización de las enseñanzas: aparecía íntimamente ligada a la estructura del profesorado. Esa estructura se identificaba con la cátedra y ésta a su vez con el catedrático numerario: los puestos de adjunto y de profesor ayudante carecían de base profesional pues habían sido concebidos como situaciones provisiona-

¹³³ A partir de 1950 se estudió la reforma del plan de estudios vigente, el de 1944. El ponente en el consejo nacional de educación fue Ruiz del Castillo quien afirmó: «Incluso convendría aún agrupar ciertas disciplinas que, en el cuadro formulado por la Comisión, aparecen distribuidas en dos cursos de clase alterna. Ninguna desventaja produciría su agrupación en un solo curso, con mayor número de lecciones, suprimiendo un examen y considerando así las asignaturas en su unidad, a no ser que su extensión, como acontece con el Derecho civil, obligue al desarrollo de varios cursos».

les, previas a la obtención de la cátedra y con una remuneración escasa.

Frente a esta estructura tan limitada, Borrajo —en sintonía con la propuesta del ministerio— proponía su redefinición, la cátedra de la nueva facultad de derecho tenía que ser una cátedra-equipo que integrase a un grupo numeroso de profesionales en unidad de acción.

En principio existiría una única cátedra por cada materia científica, así preveía la existencia de catorce cátedras en cada facultad, aunque Madrid y Barcelona por su tamaño podía tener alguna más¹³⁴. El titular de la cátedra sería el catedrático, organizaría la actividad docente (con programa propio) y dirigiría la investigación.

Al ser imposible que el catedrático pudiera atender todos los cursos adscritos a cada cátedra, habría que vincular una o varias agregaciones cuyo titular sería el profesor agregado. El profesor ayudante de clases prácticas mantendría su regulación y funciones. Además se podrían contratar profesores especiales especialistas en materias concretas.

La existencia de estas cátedras-equipo se completaría con la de los institutos de investigación. Borrajo prefería este binomio cátedra-instituto a la existencia de departamentos.

En definitiva, tanto los planes de Sevilla y Valencia como la ponencia de Barcelona bebían de la comunicación de Borrajo que a su vez copiaba el libro de Eisenmann, sobre todo lo referido a la reforma francesa¹³⁵.

¹³⁴ Las catorce cátedras era: Filosofía del derecho, Derecho romano, Derecho político y ciencia social, Derecho civil, Economía política, Historia del derecho, Derecho penal, Derecho internacional, Derecho canónico, Derecho administrativo, Derecho procesal, Derecho del trabajo, Derecho mercantil, Derecho fiscal.

¹³⁵ La reforma francesa de 1954 planteaba romper con la licenciatura única y uniforme que existía que se estimaba incompatible con la gran diversidad de los grupos de profesiones hacia las cuales se orientaban los licenciados en derecho. Para remediarlo instituía tras un periodo inicial común varios ciclos de estudios diferenciados, respondiendo a la distinción de tres grandes grupos de profesiones: las del sector judicial, las del sector administrativo y las del sector económico. Eisenmann, *Las ciencias sociales*, cit., pp. 136 ss.

En el consejo de rectores celebrado en Santiago el 27 de julio de 1965 el ministro expuso la conveniencia de aceptar provisionalmente y a título experimental los nuevos planes para la facultad de derecho propuestos por las facultades de Sevilla y Valencia. Tras una viva discusión se consideró conveniente que ambos planes se ensayen previo acuerdo entre los decanos de las dos facultades que permitiese su unificación y estableciese claramente la posible convalidación de asignaturas.

Así, el ministerio consideró oportuno acceder a las peticiones y armonizó sendas propuestas. Pensaba que la experiencia de este ensayo serviría para una futura reforma del plan de 1953. Y finalmente aprobó el plan por orden de 13 de agosto de 1965.

La licenciatura se articulaba en cinco cursos, de los cuales los tres primeros eran comunes.

Primer curso: Derecho romano.— Historia del derecho.— Derecho político (ciencia política y derecho de la constitución).— Derecho civil 1.º (parte general).— Derecho natural.

Segundo curso: Derecho canónico.— Derecho penal (parte general).— Economía política y financiera.— Derecho civil 2.º (obligaciones y contratos).— Derecho internacional público.

Tercer curso: Derecho civil 3.º (reales e hipotecario).— Derecho mercantil.— Derecho del trabajo (parte general y contratos de trabajo).— Derecho procesal (teoría general, organización y procesos ordinarios).— Derecho administrativo (parte general).

Los otros dos eran de especialización según distintos grupos: derecho público (grupo A), derecho de la empresa (grupo B) y derecho privado (grupo C).

Grupo A. Cuarto curso: Derecho civil (familia y sucesiones).— Derecho político (ideas y formas políticas).— Derecho administrativo (parte especial).— Derecho penal.— Derecho financiero (parte general).— Historia del derecho público.

Quinto curso: Filosofía del derecho.— Derecho financiero (sistema tributario español).— Derecho administrativo (parte especial).— Derecho del trabajo (seguridad social).— Derecho internacional.

Grupo B. Cuarto curso: Derecho civil (familia y sucesiones).— Derecho financiero (parte general).— Derecho mercantil.— Derecho penal.— Derecho del trabajo (derecho sindical).— Derecho procesal.

Quinto curso: Filosofía del derecho.— Derecho financiero (sistema tributario español).— Derecho administrativo (económico).— Derecho mercantil y derecho de la navegación.— Derecho del trabajo (seguridad social).

Grupo C. Cuarto curso: Derecho civil (familia y sucesiones).— Derecho mercantil.— Derecho procesal.— Derecho penal.— Historia del derecho privado.

Quinto curso: Filosofía del derecho.— Derecho financiero (sistema tributario español).— Derecho mercantil y derecho de la navegación.— Derecho internacional privado.— Derecho agrario.

Para los cursos cuarto y quinto el ministerio establecía las asignaturas mínimas, a ellas las facultades debían añadir otras; también tenían que indicar su duración (cuatrimestrales o anuales) y su carácter (obligatorias u opcionales), y, por último, debían fijar el número de horas semanales de cada materia¹³⁶.

Cada cátedra organizaría sus clases prácticas, y en los cursos de especialización éstas aglutinarían a varias cátedras. Primero continuaba siendo un curso selectivo, además para pasar a la especialización era preceptivo tener aprobadas todas las asignaturas previas.

Entre las asignaturas del nuevo plan destacaba la novedad del Derecho agrario: no se trataba de una casualidad. Desde el curso 1961-1962, la segunda cátedra de derecho civil de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla venía organizando cursos de derecho agrario integrados en el ciclo de cursos monográficos del doctorado¹³⁷. Estos cursos constituían un primer intento o ensayo dirigido a una futura consolidación institucional de estos estudios.

¹³⁶ Resolución de 11 enero 1968 por la que se aprueban los cursos cuarto y quinto del plan de estudio de la licenciatura de derecho en la Universidad de Valencia.

¹³⁷ En AGA (05) IDD 1.016, 20269 aparece la certificación firmada por el secretario accidental de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, con la transcripción del acuerdo de junta de facultad de 16 de mayo de 1963 sobre creación de una cátedra especial de derecho agrario.

En la asamblea de Barcelona sin embargo esta materia se incluía entre las propuestas por los administrativistas.

En junta de facultad de 16 de mayo de 1963 se discutió sobre ello. Se aludió a cómo René Savatier, J. W. Hedeman y otros juristas prestigiosos habían subrayado la necesidad de la enseñanza de esta disciplina en las facultades de derecho durante el primer congreso internacional de derecho agrario celebrado en Florencia en la primavera de 1954. Se transcribía el voto formulado en una reunión posterior a dicho congreso por figuras destacadas del mundo jurídico (Ascarelli, Pugliatti, Bolla):

Los estudiosos del Derecho agrario reunidos en Florencia para examinar los resultados científicos del primer Congreso Internacional de Derecho agrario, toman conciencia de la nueva realidad de los fenómenos jurídicos agrarios cual resulta de las investigaciones históricas, comparativistas, exegéticas y dogmáticas, y mientras reafirman la necesidad de un desarrollo más amplio de los estudios dirigidos a la constatación y profundización de toda la fenomenología social y jurídica del mundo rural, ponen de relieve la necesidad de traducir tales estudios en una difundida y orgánica enseñanza académica, y piden que gradualmente se introduzca la disciplina del Derecho agrario en todas las Facultades de jurisprudencia, especialmente en aquellas que por su situación ambiental deben ser más sensibles a los problemas agrarios.

Enclavada la Universidad de Sevilla en una zona predominantemente agrícola, la facultad de derecho propuso la creación de una cátedra especial dedicada al estudio, enseñanza e investigación del derecho propio de la agricultura, bajo la denominación de Pablo de Olavide¹³⁸. La cátedra, al margen de otras actividades, organizaría unos cursos monográficos con validez académica a efectos del doctorado.

Frente al nuevo plan de 1965, la facultad de derecho de la Universidad de Santiago optó por reformar el plan de 1953¹³⁹. De con-

¹³⁸ La certificación de esta propuesta se había entregado al ministro de información y turismo, Manuel Fraga, que a su vez entregó al subsecretario del ministerio de educación, Luis Legaz Lacambra.

¹³⁹ Decreto de 11 de agosto 1953. Artículo vigésimo. Las distintas Facultades a que se refiere el presente Decreto, podrán proponer al Ministerio de Educación Nacional aquellas modificaciones respecto a los planes que aquí se regulan, que estimen convenientes, a fin de adaptarlos a su propia orientación y peculiaridades docentes y científicas, sin perjuicio de las

formidad con la propuesta formulada por el decano y con el dictamen emitido por el consejo nacional de educación, el ministerio por orden de 10 diciembre 1966 aprobó un elenco de especialidades. Los alumnos, a partir del tercer curso, debían elegir al menos dos de las materias de especialización establecidas¹⁴⁰.

De distinta manera, se había abierto la vía de la especialización; otro asunto es la valoración de esta estrategia¹⁴¹.

6. *La ley general de educación*

El llamado problema universitario se solucionaría con una nueva ley de ordenación universitaria que sustituyese a la de 1943, y que finalmente fue la ley general de educación y financiamiento de la reforma educativa (LGE) de 4 de agosto de 1970. Vino precedida de un gran esfuerzo de estudio y asesoramiento que en parte cristalizó en el denominado libro blanco, publicado en febrero de 1969 como esquema para encauzar la consulta a la sociedad española¹⁴².

enseñanzas básicas.— De igual forma podrán proponer la creación de disciplinas de carácter complementario para la mejor formación o especialización de sus alumnos.— Quedan igualmente autorizadas las Facultades para proponer el carácter de intensidad de las labores didácticas dedicadas a cada enseñanza, su ordenación y acoplamiento por cursos, así como la determinación del horario semanal de las mismas.— Al hacer la propuesta, fijarán también el cuadro de incompatibilidades para su aprobación y conveniente publicidad.

¹⁴⁰ Derecho privado romano; Historia del derecho privado, penal y procesal; Disciplinas afines y temas especiales de filosofía del derecho; Criminología y ciencia penitenciaria; Organizaciones internacionales; Derecho comparado; Derecho industrial y de los bienes inmateriales; Derecho agrario y derecho foral gallego; Economía política; Economía financiera y derecho financiero; Relaciones entre Iglesia y Estado.

Para ello, en junta de 4 julio 1967 se acordó solicitar la dotación de once agregaciones.

¹⁴¹ Merchán considera que el plan de 1965 fracasó pues no consiguió su objetivo de dotar de una formación especializada a los licenciados. Íd., *Cuatro lustros*, cit., pp. 161 ss.

¹⁴² *La educación en España. Bases para una política educativa*, Madrid 1969.

Este libro se dividía en dos partes, la primera y más extensa era un análisis de la situación educativa en todos sus niveles —el capítulo quinto afrontaba el problema universitario—, la segunda recogía el avance de las líneas generales de la política educativa que el gobierno se proponía seguir. Líneas que ya se habían ido aplicando en las universidades de nueva creación¹⁴³.

Aunque había pasado poco tiempo desde la reforma de 1965, el libro blanco consideraba que debía mejorarse la situación de los profesores adjuntos y de los departamentos, pues éstos (excepto los de filosofía y ciencias) no habían terminado con la descoordinación que provocaba la autonomía de la cátedra. En cuanto a los planes de estudio se avanzaba en su conexión con las salidas profesionales.

La LGE se presentaba como una ruptura frente al esquema de la universidad decimonónica —centralizada y elitista— todavía vigente, olvidando así toda la retórica de la universidad nueva propia de la ley de 1943. Proclamaba la autonomía universitaria; cada universidad se regiría por un estatuto que sería elaborado por su junta de gobierno y aprobado por el gobierno¹⁴⁴. Sin embargo, el rector

¹⁴³ Decreto-ley de 6 de junio de 1968, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria. La norma avanzaba hacia un nuevo sistema de formación universitaria, pero estas reformas eran aplicadas sólo a los nuevos centros docentes que se creaban en virtud de la misma: las nuevas universidades de Madrid y Barcelona, la Universidad de Bilbao, y las facultades universitarias en Santander, San Sebastián y Badajoz.

En los planes de estudios aprobados para las respectivas facultades de derecho se observan también las líneas de la reforma: orden de 15 julio 1969 por la que se acuerda aprobar la propuesta de plan de estudios estructurado en dos ciclos, para la facultad de derecho de San Sebastián, de la Universidad de Valladolid; orden de 18 septiembre 1971 por la que se aprueba provisionalmente el plan de estudios de la facultad de derecho de la nueva Universidad Autónoma de Madrid; orden de 25 enero 1972 por la que se aprueba provisionalmente el plan de estudios del primer curso de la facultad de derecho de la nueva Universidad Autónoma de Barcelona.

Pero, a partir del curso 1972-1973 la facultad de derecho de San Sebastián aplicó el plan de 1953. Orden de 27 septiembre 1972 por la que se autoriza a la facultad de derecho de San Sebastián a aplicar el plan de estudio vigente en la facultad de derecho de Valladolid.

¹⁴⁴ Sobre la elaboración de los estatutos provisionales de la Universidad de Valencia véase Mariano Peset (coord.), *Bulas, constituciones y estatutos de la Universidad de Valencia*, vol. 1, Valencia 1999, pp. 45-49; para

—primera autoridad académica— y los decanos serían nombrados por el gobierno.

La ley redefinía la figura de los profesores adjuntos: para acceder a este cuerpo era requisito ser doctor; sus funciones consistían en desarrollar la investigación que se les encomendara, la docencia de los cursos que le fueran asignados y la suplencia por ausencia o vacante.

El departamento aparecía como una estructura básica¹⁴⁵. Así el artículo 70.1 afirmaba:

Los Departamentos son las unidades fundamentales de enseñanza e investigación en disciplinas afines que guarden entre sí relación científica. Cada Departamento tendrá la responsabilidad de las correspondientes enseñanzas en toda la Universidad y en él estarán agrupados todos los docentes de las mismas.

Los planes de estudios, decía el artículo 37.1 de la LGE, serían elaborados por las propias universidades de acuerdo con las directrices marcadas por el ministerio. Estos planes comprenderían un núcleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas. Previo dictamen de la junta nacional de universidades, el ministerio los refrendaría.

Los planes estarían organizados de manera cíclica. Al concluir el primer ciclo de estudios, se obtendría el título de diplomado. Quienes terminasen el segundo tendrían derecho al título de licenciado que habilitaba para el ejercicio profesional. En fin, la superación del tercer ciclo, daba derecho al título de doctor.

Con cierto retraso¹⁴⁶, por orden de 23 de septiembre de 1972 el

Sevilla, Antonio Merchán, *Documentos históricos de la Universidad de Sevilla*. 2. *Los estatutos de autonomía del siglo XX*, Sevilla 2005, pp. 51-68.

¹⁴⁵ Posteriormente se desarrollaron estas disposiciones. Decreto de 26 de julio de 1973 sobre reestructuración de los departamentos universitarios.

¹⁴⁶ Por decreto de 22 de agosto de 1970 se aprobó el calendario para la aplicación de la reforma educativa, en él se disponía que durante el curso académico 1972-1973 se implantaría el primer curso del ciclo primero de las facultades universitarias. Sin embargo, el ministerio no estableció a tiempo las directrices conforme a las cuales debían elaborarse los planes de estudio. Por ello, por decreto de 18 de agosto de 1972 se aplazó la implantación de los nuevos planes. En el retraso pesan las dificultades que aparecieron para implantar este aspecto de la reforma. En lo que atañe a

ministerio aprobó las directrices para la elaboración de los planes de estudios por parte de las universidades. De esta manera se trataba de armonizar la validez del título obtenido con la autonomía de la universidad que reconocía la LGE. Secundando lo dispuesto en la ley, establecía que los estudios se dividirían en tres ciclos: el primero agruparía las materias de contenido eminentemente formativo, el segundo las disciplinas de mayor contenido informativo y el tercero las materias de alta especialización.

Una resolución de la dirección general de universidades e investigación de 7 de julio de 1973 determinó las directrices que debían seguir los planes de estudios de las facultades de derecho. En ella se indicaba las materias obligatorias que luego las facultades al elaborar los planes debían transformar en disciplinas —indicando si eran cuatrimestrales o anuales así como su horario—, de manera que una materia podía dar lugar a varias disciplinas.

Se quería compaginar un mínimo de formación general con la necesidad de cierta especialización. Para ello el primer ciclo, de enseñanzas básicas y con tres años de duración, sería común para todos los alumnos y su primer curso podía tener carácter coordinado. Las materias obligatorias para este ciclo eran: Derecho administrativo, Derecho canónico, Derecho constitucional, Derecho financiero, Derecho internacional, Derecho mercantil, Derecho penal, Derecho procesal, Derecho romano, Derecho del trabajo, Fundamentos filosóficos del derecho, Historia del derecho, Instituciones del derecho civil, Introducción a la economía.

En el segundo ciclo se elegían tres secciones (derecho privado, derecho público y derecho de la empresa) ya experimentadas en los planes piloto de las universidades de Sevilla y Valencia. Al término del segundo ciclo, los alumnos obtendrían el título de licenciados en derecho, sección correspondiente, que capacitaba para el ejercicio profesional.

Las materias obligatorias para la sección de derecho privado eran: Derecho civil, Derecho internacional privado, Derecho mercantil, Derecho procesal, Filosofía del derecho. Para la sección de derecho público eran obligatorias: Derecho administrativo, Derecho

las facultades de derecho ilustrará el caso sevillano. Merchán, *Cuatro lustros*, cit., pp. 163 ss. Antes de dictar las directrices, el ministerio había elaborado un plan tipo para la licenciatura de derecho que dio a conocer en febrero de 1972. Merchán, *Cuatro lustros*, cit., pp. 185 ss.

financiero y hacienda pública, Derecho internacional público, Derecho penal, Derecho político, Derecho procesal, Derecho público eclesiástico. Para la sección de derecho de la empresa eran obligatorias: Derecho administrativo económico, Derecho civil, Derecho financiero y hacienda pública, Derecho mercantil, Derecho procesal, Derecho del trabajo. En cada sección debían cursarse además dos asignaturas de las restantes secciones.

Por orden de 27 de septiembre de 1973 se modificó con carácter experimental el calendario universitario, adecuando el año académico al año natural; así el curso comenzaría, ya con los nuevos planes, en enero de 1974. Y por resolución de la dirección general de universidades e investigación —vistas las distintas propuestas y oída la junta nacional de universidades— enseguida comenzaron a aprobarse los planes de estudios para el primer ciclo de las facultades de derecho¹⁴⁷.

¹⁴⁷ Distintas resoluciones de la dirección general de universidades e investigación fueron aprobando los nuevos planes: resolución de 10 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Barcelona, resolución de 10 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Granada, resolución de 11 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Murcia, resolución de 11 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Oviedo, resolución de 11 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Valencia, resolución de 11 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Zaragoza, resolución de 17 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, resolución de 20 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de La Laguna, resolución de 20 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Santiago, resolución de 20 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla, resolución de 25 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Navarra, resolución de 25 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Deusto, reso-

Al analizar los dieciocho planes aprobados hay que reconocer que, aunque se hicieron todo tipo de combinaciones, en general en este primer ciclo se siguió la estructura del plan de 1953, es decir, las asignaturas eran de carácter anual y en el primer curso estaban ausentes las materias de derecho positivo; quizás por el carácter más teórico de este periodo escaseaban las clases prácticas. Al transformar en disciplinas las materias obligatorias se había optado también por un criterio conservador, con frecuencia la única materia que se desdoblaba era el derecho civil.

Pero el proceso de implantación de la reforma se interrumpió enseguida. La comisión de decanos de las facultades de derecho pidió al ministerio la vuelta a los planes anteriores a la LGE; y el ministerio —en atención a la experiencia obtenida, al carácter unitario de los estudios jurídicos, a la mejor planificación de las facultades, y de acuerdo con la junta nacional de universidades— accedió a la referida petición¹⁴⁸.

En las facultades de Sevilla y Valencia se aplicaría el plan de 1965; en la UNED, la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Bar-

lución de 31 octubre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la UNED, resolución de 14 noviembre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, resolución de 24 noviembre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid, resolución de 30 noviembre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Extremadura, resolución de 30 noviembre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Salamanca, resolución de 1 diciembre 1973 por la que se aprueba el plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Valladolid.

El plan de estudio del primer ciclo de la facultad de derecho sevillana —aprobado por resolución de la dirección general de universidades e investigación de 25 octubre 1973— ha sido analizado y valorado por Antonio Merchán. Íd., *Cuatro lustros*, cit., pp. 169 ss.

¹⁴⁸ Resolución de la dirección general de universidades e investigación de 23 julio 1974 por la que se establece a partir del curso 1974-75 el plan de estudio aprobado por decreto de 11 agosto 1953 en todas las facultades de derecho a excepción de las de Sevilla y Valencia que impartirán el plan aprobado por orden ministerial de 13 agosto 1965.

celona el de 1953, como en el resto de las facultades de derecho¹⁴⁹. Subsistían así dos regímenes diferentes, uno de especialidades y otro unitario.

* * *

Tras la guerra civil (1936-1939) se fue construyendo cuidadosamente la denominada universidad nueva, concepción que quedó plasmada en la ley sobre la ordenación de la universidad española (LOUE) de 1943. Aunque esa ley estuvo vigente hasta 1970, lo cierto es que bastante antes empezó a ser cuestionada. La contestación tuvo su epicentro en los años sesenta y se identifica con lo que se llamó el problema universitario. Dicha cuestión evidenciaba una crisis de crecimiento, no sólo cuantitativa sino también cualitativa. Es decir, el fenómeno de masificación que comenzó a perfilarse en esos años supuso tanto el incremento del número de alumnos matriculados en las universidades como el cambio en las clases sociales que lo componía. El crecimiento económico como también la reforma del bachillerato que se operó en 1953 facilitaron el acceso a la universidad a partir de 1959. Así, la masificación precipitó el paso de una universidad elitista a una universidad de masas (de democratización de la universidad se hablaba). Esa inédita universidad —verdadera novedad en la España contemporánea— no encajaba bien en los esquemas y moldes de la LOUE, ley que a pesar de sus declaraciones seguía proponiendo una universidad elitista y centralizada. Este desfase entre la realidad social y la estructura legal provocó una crítica y distintos intentos de reforma que de entrada fueron parciales y después cristalizaron en la LGE.

Lo dicho hasta ahora sobre la universidad es aplicable a las facultades de derecho que continuaban reguladas, en lo esencial, por el decreto de ordenación de 1944. Frente al orden construido en los años de posguerra (ley sobre ordenación, decreto de ordenación) ahora comenzarán las reformas. Reformas que estaban presididas por una idea clara: la necesidad de profundizar en la idea de la autonomía universitaria.

¹⁴⁹ Pronto, sin embargo, la Autónoma de Madrid y la de Barcelona volvieron a sus planes de 1971 y 1972 respectivamente, además para estos planes se aprobaron las materias del segundo ciclo: orden de 8 febrero 1975 para Madrid y resolución de 29 mayo 1974 para Barcelona.

Un hito podemos situarlo en la asamblea de profesores de facultades de derecho celebrada en 1964. Allí se discutieron los graves problemas que pesaban sobre la facultad y para solucionarlos se propuso cambiar el plan de estudio vigente por otro articulado en especialidades, renovar los métodos de enseñanza dando más protagonismo al alumno, mejorar la formación previa de los que accedían a la facultad, pero se rehusó modificar la estructura de la cátedra.

El ministerio —cuyo titular era Lora Tamayo— actuó con celeridad a la hora de acometer las reformas. Aunque reconocía que la ley de 1943 debía ser sustituida, prefirió avanzar paso a paso, con cambios concretos que sirviesen además de experiencia para acometer la aprobación de una nueva ley de educación.

Comenzó precisamente con el asunto que la asamblea había intentado esquivar, la creación de una nueva estructura que sustituyese a la cátedra y que se denominó departamento en una ley aprobada en 1965. La resistencia estaba anunciada. En general, no existieron grandes problemas para constituir departamentos unidisciplinarios en los que sólo existía un catedrático. En esos casos realmente el cambio era sólo nominal. Pero cuando se trataba de agrupar disciplinas afines en las que existían varios catedráticos bajo la dirección de uno sólo las dificultades emergieron. Algunos de esos catedráticos permanecieron al margen de los nuevos departamentos, otros propusieron la creación de departamentos unidisciplinarios no previstos por el ministerio. Pero éste auxiliado por el consejo nacional de educación se mostró firme y no permitió que de momento se desvirtuase el espíritu de la norma.

En estos departamentos junto a los catedráticos apareció una nueva figura, los agregados. Este nuevo tipo de profesor —con dedicación plena y responsabilidad docente e investigadora— se creaba para mejorar una ratio profesor/alumno insuficiente; problema acrecentado por la masificación.

También en 1965 se aprobaron los nuevos planes de estudios para las facultades de Sevilla y Valencia. Planes novedosos pues a través de un sistema de especialidades ensayaban una mejor adecuación a las salidas profesionales que demandaba la sociedad.

Ya con Villar Palasí, la apreciada autonomía fue la seña de identidad de los nuevos centros que se crearon en virtud del decreto-ley de 1968 sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria. Estas nuevas facultades y universidades adoptaron un nuevo currí-

culum para la formación de sus alumnos. Con estos centros se quería acrecentar la experiencia sobre la reforma, pero también respondían a una creciente demanda; por ello se establecía una nueva universidad en Madrid —la ciudad más castigada por la masificación— y más tarde se creó una universidad a distancia.

Finalmente llegó la LGE, con el objetivo de consolidar las reformas puestas en marcha y dotarlas de mayor organicidad.

Jordana de Pozas en su apéndice al informe de Eisenmann afirmaba¹⁵⁰:

La organización y evolución de las Universidades españolas arranca de la Edad Media y tiene, por tanto, una tradición multi-secular que, en muchos aspectos, coincide con la de las grandes Universidades continentales e inglesas. En el siglo XIX, bajo la influencia francesa, las Universidades sufrieron una gran transformación. En las postrimerías de dicho siglo y en lo que va transcurrido del actual se dejaron sentir las influencias de otros países, principalmente de Alemania, y, en los últimos años, de los países anglosajones.

Aunque en un contexto paneuropeo, el denominado espacio europeo de enseñanza superior, en ello —es decir, en la influencia anglosajona— seguimos todavía.

Manuel Martínez Neira
Universidad Carlos III de Madrid

¹⁵⁰ Eisenmann, *Las ciencias sociales*, cit., p. 142.

LA UNIVERSIDAD FASCISTA Y LA UNIVERSIDAD FRANQUISTA EN PERSPECTIVA COMPARADA*

Sumario: 1. El punto de partida.—2. La reorganización de las estructuras universitarias en la reforma Gentile (1923) y en la «Ley de ordenación Universitaria» del franquismo (1943).—3. El profesorado: depuración y control ideológico.—4. Los estudiantes: entre el fascismo y el antifascismo.—5. Conclusiones.

1. *El punto de partida*

Antes de entrar en la comparación entre la universidad del fascismo en Italia y la de la España de la primera década del franquismo, parece conveniente situar las características que la universidad presentaba en ambos países antes de que fascistas y franquistas, respectivamente, acometiesen su reforma. En ambos países el ordenamiento universitario se remitía a leyes aprobadas muchas décadas atrás. La universidad italiana seguía rigiéndose a principios de los años veinte por la Ley Casati (1859), mientras que la española se atenía a la Ley Moyano (1857). La primera evidencia, pues, era el carácter obsoleto de la legislación universitaria, que correspondía a una época (inicios de la segunda mitad del siglo XIX) en que no sólo la universidad, sino la propia sociedad y la vida política, económica y cultural de Italia y España poco tenían que ver con la de los años de entreguerras del siglo XX. Tal evidencia había hecho que, en uno y otro país, el debate sobre una necesaria reforma universitaria se hubiese desarrollado desde, al menos, principios de siglo, sin que, sin embargo, se hubiesen desprendido del mismo cambios signifi-

* El presente artículo se publicó originariamente en catalán con el título «La universitat feixista i la universitat franquista en perspectiva comparada», en Giuliana di Febo y Carme Molinero (eds.), *Nou Estat, nova política, nou ordre social. Feixime i franquisme en una perspectiva comparada*, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer - CEFID (UAB), 2005. Agradezco a la Fundació Carles Pi i Sunyer y al Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la UAB, su generosidad al autorizar esta nueva publicación del texto.

cativos antes de la llegada de los fascistas al poder (en Italia) o de las reformas del primer bienio republicano (en España)¹.

La situación de la universidad en ambos países presentaba características muy semejantes: una estructura centralista (aunque quizás más acentuada en España), una organización muy burocratizada y escasamente —por no decir, nada— democrática, la no consideración como universidades de las escuelas superiores en las que se seguían estudios de carácter técnico (ingeniería, arquitectura...), una escasa financiación (que se traducía, en general, en una notable escasez de medios), un carácter elitista, apreciable tanto en el bajo número de estudiantes universitarios como en la procedencia social de los mismos, y, en fin, una actividad académica organizada en torno a las cátedras y sustentada sobre el trabajo mal pagado de un profesorado no funcionario y forzado a las penurias económicas y al pluriempleo, caracterizada por la enseñanza de tipo memorístico y anclada en métodos pedagógicos arcaicos. En realidad, la situación de la universidad era el reflejo de las carencias que tenían, en general, ambos sistemas educativos: bajísima inversión pública en educación, altas tasas de analfabetismo (en buena medida por la falta de escuelas, las bajas tasas de escolarización y el elevado absentismo en la enseñanza primaria), elitismo social de la enseñanza secundaria, a su vez controlada en gran parte por la Iglesia católica mediante una extensa red de centros privados —mucho más extensa que la de centros públicos—, etc.. Esa universidad respondía también a la idea de que la universidad debía formar fun-

¹ Para la universidad liberal en Italia puede verse, G. Luzzato, «L'università», en G. Cives (a cura di), *La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni*, Scandici (Florenia), 1990, pp. 161-170; y A. Aquarone, *L'Italia giolittiana*, Bolonia, 1988 (1.ª edición: 1981), pp. 556-560; y para España, B. Delgado Criado (coord.), *Historia de la Educación en España y América*, vol. 3: *La educación en la España contemporánea*, Madrid, 1994, pp. 495-504 y 796-803; E. Hernández Sandoica, «Cambios y resistencias al cambio en la universidad española (1875-1931)», en J.L. García Delgado (ed.), *España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio*, VII Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Madrid, 1991, pp. 3-22; y J.M. Pons i Altés, «Les universitats espanyoles al segle XIX: la implantació de les reformes liberals», a J. Busqueta Riu y J. Pemán Gavín, *Les universitats de la Corona d'Aragó, ahir i avui. Estudis històrics*, Barcelona, 2002, pp. 381-397

damentalmente profesionales liberales —médicos, abogados...— y los cuadros dirigentes de la vida política y económica del país, y, por tanto, debía ser fuertemente elitista en la selección social de sus alumnos (a lo que contribuía eficazmente la estructura de la enseñanza media), al tiempo que debía limitar severamente el número de los que accedían a la enseñanza superior².

Muchos de los elementos citados empezaron a ser cuestionados, como se ha dicho, desde finales del ochocientos, y la impugnación del modelo vigente alcanzó sus mayores cotas tras la Gran Guerra, especialmente por lo que hace al caso italiano. Finalizada la guerra mundial, la agitación estudiantil vino a sumarse al debate político en torno a la necesidad de la reforma educativa (en el que participaba buena parte de la elite intelectual italiana: Croce, Gentile, Mondolfo, Salvemini, etc.)³. Si el debate intelectual había versado especialmente sobre la reforma de la escuela media y la introducción del examen de Estado —como bases necesarias para la mejora de la enseñanza universitaria—, la movilización estudiantil tenía que ver con las reivindicaciones de los excombatientes (cursos y exámenes especiales para acabar la carrera) y los deseos de democratización de las estructuras y las enseñanzas universitarias⁴. La inestable situación política del *dopoguerra* impidió, sin embargo, cualquier

² Análisis de los sistemas educativos italiano y español a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX en T. Tomasi, *Idealismo e fascismo nella scuola italiana*, Florencia, 1969; E. de Fort, *Scuola e analfabetismo nell'Italia del '900*, Bolonia, 1995; G. Cives (a cura di), *La scuola italiana...*; M. de Puelles Benítez, *Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975)*, Barcelona, 1980; C.E. Núñez, *La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporánea*, Madrid, 1992; Delgado Criado (coord.), *Historia de la Educación...*; A. Escolano Benito, *La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y culturas pedagógicas*, Madrid, 2002; y A. Viñao, *Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX*, Madrid, 2004.

³ Puede seguirse el debate sobre la reforma educativa en S. Banchetti, *Scuola e maestri fra positivismo e idealismo*, Bolonia, 1988; Tomasi, *Idealismo e fascismo...*, pp. 4-39; M. Bellucci y M. Ciliberto, *La scuola e la pedagogia del fascismo*, Turín, 1978, pp. 9-26; y V. Clodomiro, *Croce Ministro e la riforma della Scuola*, Cosenza, 1973, pp. 19-28.

⁴ M.C. Giuntella, *Autonomia e nazionalizzazione dell'università. Il fascismo e l'inquadramento degli Atenei*, Roma, 1992, pp. 81-82.

reforma, y los proyectos de los distintos ministros de Instrucción Pública, de Croce a Anile, por citar a los más significativos, no se plasmaron en medidas concretas.

En España, las propuestas de reforma venían desde sectores diversos (institucionistas, regeneracionistas, *noucentistes*...) y se centraban, básicamente, en cuatro cuestiones: necesidad de más inversión pública, reorientación de la universidad hacia la actividad investigadora, cambios drásticos en la selección del profesorado y profunda renovación de los métodos de enseñanza⁵. Todo ello se resumía en la petición de autonomía universitaria; una autonomía que, entre otras cosas, debería permitir a las universidades mejorar su situación financiera, organizar mejor sus estudios y seleccionar mejor a su profesorado. La autonomía universitaria quedó, sin embargo, como el asunto pendiente de la universidad española; fracasó un primer proyecto (que no superó el trámite del Senado) de los ministros García Alix y Romanones (1900-1901), y se frustró en sus primeros pasos la reforma Silió (1919), al quedar aplazada su aplicación al poco de aprobarse, y no ser retomada nunca más⁶. La República no cambió sustancialmente las cosas (pese a algunas reformas parciales de notable importancia: representación de los alumnos en las juntas de facultad, claustros y junta de gobierno, nuevo reglamento para las oposiciones a cátedra, autonomía de la Universidad de Barcelona, nuevos e innovadores planes de estudio de las Facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona), fundamentalmente por la falta de tiempo, que no de proyecto (el elaborado por el ministro Fernando de los Ríos deca-

⁵ M. Baldó Lacomba, «Las universidades durante la República y el régimen de Franco (1931-1975)», en Busqueta Riu/Pemán Gavín, *Les universitats de la Corona d'Aragó...*, pp. 402-404. Como en Italia, también en el debate español participaron intelectuales y profesores de primera fila: Giner, Unamuno, Cossío, Altamira, Ramón y Cajal...

⁶ I. Varela, «A autonomía universitaria de César Silió (1919-1922)», *Grial*, tomo XXV, 97 (1987), pp. 330-332 (para la reforma García Alix-Romanones) y 332-334 (para la reforma Silió; el resto del artículo detalla la aplicación de esta reforma en la Universidad de Santiago). También, en Puelles Benítez, *Educación e ideología...*, pp. 254-256 (para la reforma Alix-Romanones) y 267-268 (para la reforma Silió); otro análisis de las principales características de la reforma Silió, en Baldó Lacomba, «Las universidades...», pp. 406-407.

yó al disolverse las Cortes en 1933, y en el breve lapso del Frente Popular antes de la guerra no pudo ser retomado)⁷. Así pues, al empezar la guerra civil, la universidad española estaba inmersa de pleno en los debates sobre las líneas de reforma que se debían acometer, pero seguía sujeta en lo fundamental a la vieja reglamentación decimonónica.

2. *La reorganización de las estructuras universitarias en la reforma Gentile (1923) y en la «Ley de Ordenación Universitaria» del franquismo (1943)*

Giovanni Gentile, primer ministro de Instrucción Pública de Mussolini, fue el impulsor de una profunda reforma del conjunto del sistema educativo italiano⁸. La «más fascista de las reformas», como la llamó Mussolini, cambió de arriba abajo las estructuras administrativas, la organización de las distintas etapas educativas, los contenidos de la enseñanza e incluso los métodos pedagógicos que debían emplearse⁹. Afectó también de lleno a la universidad: el decreto n.º 2.102, de 30 de septiembre de 1923, fue el instrumento de la reforma, y sus disposiciones se mantuvieron vigentes durante todo el *ventennio*, si bien algunos aspectos fueron retocados a lo

⁷ Véase, M. Pérez Galán, *La enseñanza en la Segunda República*, Madrid, 1988 [1977], pp. 48-49, 114-125 y 165-168.

⁸ La mejor biografía de Gentile es la de G. Turi, *Giovanni Gentile. Una biografia*, Florencia, 1995. Los planteamientos pedagógicos de Gentile y su aplicación en la reforma de 1923 en M. Ostenc, «L'idéalisme gentilien et la réforme scolaire italienne de 1923», *Revue Historique* 506 (1973), pp. 377-396; A. Negri, *Giovanni Gentile educatore. Scuola di Stato e autonomie scolastiche*, Roma, 1996; y H.A. Cavallera, *Riflessione e azione formativa. L'attualismo di Giovanni Gentile*, Roma, 1996.

⁹ Análisis de la reforma Gentile en J. Charnitzky, *Die Schulpolitik des faschistischen Regimes in Italien (1922-1943)*, Tubinga, 1994, pp. 73-154; M. Ostenc, *L'éducation en Italie pendant le fascisme*, París, 1980, pp. 43-125; Tomasi, *Idealismo e fascismo...*, pp. 41-60; Bellucci/Ciliberto, *La scuola...*, pp. 25-30; D. Bertoni Jovine, *La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri*, Roma, 1975, pp. 266-275 y 282-284. Los debates parlamentarios que precedieron a la aprobación de la reforma, en P. Genovesi, *La riforma Gentile tra educazione e politica. Le discussioni parlamentari*, Ferrara, 1996.

largo de esos veinte años para adaptarse a las necesidades de cada momento; pero lo sustancial pervivió.

En España, la reforma universitaria se demoró más. A diferencia de lo ocurrido con la enseñanza media, por ejemplo, hubo que esperar a la finalización de la guerra civil para que se acometiese en serio la construcción de una nueva universidad. Por otra parte, los primeros proyectos, fruto de sucesivas comisiones de trabajo, embarrancaron sin llegar a ser definitivamente aprobados por el gobierno. La razón de ello estaba en la escasamente soterrada pugna que sostenían Falange y la Iglesia católica para hacerse con el control de la enseñanza en general, y de la universidad en particular¹⁰. Por ello, la Ley de Ordenación Universitaria (LOU) no pudo ser aprobada hasta 1943 y fue el resultado de la correlación de fuerzas del momento en el seno de la coalición franquista. Fue, como se ha escrito, la «más azul» de las leyes educativas del franquismo, sin que eso signifique que la pugna se saldara con una derrota de la Iglesia¹¹.

La reforma Gentile no modificó el número de universidades existentes en Italia, pero procedió a clasificarlas en tres categorías. En la primera (A) se situaron las 10 universidades de mayor prestigio y tradición, a las que se les otorgaba plena financiación por parte del Estado y el derecho a mantener todas las facultades (derecho, filosofía, medicina y ciencias matemáticas y naturales). En la categoría B quedaban las demás universidades públicas, a cuya financiación a

¹⁰ En 1938 se creó una comisión, presidida por el catedrático Pío Zabala, con la misión de redactar un proyecto de reforma universitaria; el proyecto vio la luz en 1939, pero no fue más allá, según algunos, como Mariano Peset, porque seguramente había cosas más urgentes que atender en el mundo de la educación, aunque parece más razonable pensar que su abandono se debió a la oposición de Falange a un proyecto que la ignoraba y que recogía fundamentalmente las posiciones de la Iglesia; así lo plantea, por ejemplo, G. Cámara Villar en *Nacional-Catolicismo y Escuela. La Socialización Política del Franquismo (1936-1951)*, Jaén, 1984, pp. 215-216; para la opinión de Peset, véase M. Peset Reig, «La Ley de Ordenación Universitaria de 1943», en J.J. Carreras Ares y M.A. Ruiz Carnicer (coords.), *La universidad española bajo el régimen de Franco*, Zaragoza, 1991, p. 128. Un detallado análisis del proyecto en C. Rodríguez López, «Anhelos de reforma: Madrid ante el proceso de reforma universitaria en el primer franquismo (1939-1940)», *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija* 2 (1999), pp. 113-125.

¹¹ Baldó Lacomba, «Las universidades...», p. 451.

partir de ese momento el Estado contribuiría sólo parcialmente, viéndose obligadas, por tanto, a buscar patrocinadores entre las corporaciones públicas (administración local, por ejemplo) o las entidades privadas; estas universidades podrían tener tantas facultades como fuesen capaces de financiar. En el grupo C, finalmente, quedaban las llamadas «universidades libres», a cuya financiación no contribuía el Estado¹². La razón de esta clasificación hay que buscarla en el convencimiento de Gentile de que en Italia había un número excesivo de universidades, que estaban generando una cantidad exagerada de licenciados. Para eludir la impopularidad del cierre de alguna de ellas, Gentile optó por esta vía que, pensaba, llevaría a la asfixia financiera y la consiguiente desaparición de más de una¹³.

En España, el número de universidades no se vio modificado, como tampoco el de facultades. Se mantuvieron las doce universidades existentes antes de la guerra (algunas, como la de Murcia y la de La Laguna, de muy reciente creación), pero la opinión dominante era también que no era preciso aumentar el número de licenciados, por lo que no procedía la creación de ninguna nueva universidad. Las únicas novedades significativas fueron la conversión en facultades de las Escuelas de Veterinaria y la creación —pero sólo en Madrid— de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas¹⁴, en lo que, por lo demás, se seguía el ejemplo de Italia, donde, cuando Gentile ya no era ministro, también se habían creado varias facultades de Políticas con el objetivo de formar a los futuros cuadros del Partido Nacional Fascista (PNF) y del Estado. En ambos casos estamos, por tanto, ante el mantenimiento de la red universitaria preexistente, sin apenas modificaciones significativas.

Por lo que hace al gobierno de las universidades, los paralelismos son también evidentes. En Italia, antes de la reforma, rectores y decanos eran elegidos por los profesores. Tras la reforma, el rector era nombrado por el rey a propuesta del ministro de Instrucción Pública, mientras que los decanos eran nombrados por el

¹² L. Casali, «Alcune considerazioni sull'università in Italia negli anni del fascismo», *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija* 5 (2002), pp. 166-167.

¹³ Giuntella, *Autonomia e nazionalizzazione...*, p. 77.

¹⁴ A. Alted Vigil, «Bases político-ideológicas y jurídicas de la universidad franquista durante los ministerios de Sainz Rodríguez y primera época de Ibáñez Martín (1938-1945)», en Carreras Ares/Ruiz Carnicer (coords.), *La universidad española...*, pp. 111-112.

ministro a propuesta del rector. Se produjo, pues, una clara regresión democrática en este aspecto. En España no hubo tal. El rector siempre había sido nombrado por el ministro, y así siguió siendo en la nueva ordenación franquista; la novedad era la obligación de que el rector fuese un catedrático militante de Falange. Como en Italia, los decanos eran nombrados por el ministro a propuesta de los rectores (que presentaban una terna de candidatos, al efecto). El rector era considerado el «jefe de la universidad» y concentraba todo el poder en los órdenes académico, económico y disciplinario. Los decanos actuaban por delegación del rector en sus facultades, de las que igualmente eran considerados «jefes». El claustro, en ambos países, pasó a tener funciones meramente decorativas; en la LOU, por ejemplo, se especificaba que se reuniría con motivo de la celebración de actos institucionales solemnes, y no conservaba ni el carácter consultivo que había tenido en la universidad liberal (cuando, además, tenía derecho a nombrar un senador). También según la LOU, la Junta de Gobierno pasaba a ser un órgano meramente consultivo, al igual que el Consejo de Distrito Universitario. La composición de estos organismos, además, no era electiva sino de nombramiento gubernamental, y sus miembros quedaban bajo la autoridad del rector. En Italia, el *senato accademico*, máximo órgano colegiado de la universidad, pasó a estar formado por el rector, su antecesor en el cargo y los decanos, lo que lo convertía de hecho en un organismo nombrado por el ministro. Y por lo que hace al *Consiglio d'amministrazione*, su composición garantizaba igualmente el control gubernamental: de los cinco miembros, tres (uno de ellos el rector) eran nombrados directamente por el ministro¹⁵.

¹⁵ Para Italia, véase Charnitzky, *Die Schulpolitik...*, pp. 105-106; un amplio extracto del Real Decreto de 30 de septiembre de 1923, n.º 2.102, sobre reforma de la enseñanza superior; en Bellucci/Ciliberto, *La scuola...*, pp. 261-272. Para España, la «Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española» (B.O.E. del 31 de julio), capítulos VI (*Gobierno de las Universidades y de sus órganos y servicios*) y VII (*Órganos y representación corporativa de las Universidades y consultivos para su gobierno*). El texto completo de la ley en *Nacional-Catolicismo y Educación en la España de posguerra*, estudio preliminar y selección de textos de A. Mayordomo Pérez, tomo V de *Historia de la Educación en España*, Madrid, 1990, vol. II, pp. 607-665.

En ambos casos, pues, se asiste a un reforzamiento de la centralización y a una clara limitación de la ya de por sí escasa autonomía universitaria. El control del poder ejecutivo sobre el gobierno de la universidad es completo, y dentro de ella se fortalecen las relaciones jerárquicas y autoritarias, con la total desaparición del principio electivo (en el caso español, como se ha dicho, no había existido para elegir a los principales cargos universitarios, pero sí para establecer la representación de los estudiantes en el claustro y las juntas de facultad; esta mínima presencia de representación electiva fue, obviamente, liquidada por la LOU).

En el mismo sentido iban las cuestiones financieras; ya se vio cómo la nueva clasificación de las universidades establecida en la reforma Gentile buscaba la asfixia económica de alguna de ellas, y la remodelación del *Consiglio d'amministrazione* de cada universidad perseguía que la ejecución de los presupuestos de la misma estuviese estrechamente controlada por personas de la confianza del Ministerio, que presumiblemente orientarían el gasto según criterios centralizados. En el caso español, la situación era aún más negativa para la autonomía universitaria; de hecho, una de las tradicionales reivindicaciones de las universidades había sido incrementar no sólo la dotación económica que realizaba el Estado, sino muy especialmente adquirir el derecho a disponer de aquélla con amplia libertad, sin que las partidas fuesen siempre finalistas. Eso no se consiguió nunca, ni siquiera durante el período republicano. La reforma Silió, más que otorgar autonomía de gasto a las universidades, les había conferido la posibilidad de ampliar sus recursos con la búsqueda de nuevos ingresos, además de aumentar la partida que las universidades podían quedarse de las matrículas de sus propios alumnos. Esta mejora se mantuvo durante la dictadura de Primo de Rivera e incluso se aumentó ligeramente la autonomía de gestión de las universidades durante el gobierno Berenguer. La República se limitó a dejar las cosas como estaban, con retoques de carácter menor (con la única —pero muy importante— excepción de la universidad de Barcelona, cuyo nuevo régimen de autonomía le otorgaba plena libertad para gestionar los fondos librados por el Estado, así como los que pudiesen aportar la Generalitat y otras entidades de carácter público o privado). Con la LOU de 1943, se volvió al sistema vigente durante la anterior dictadura; además, se establecía que el presupuesto de la universidad fuese gestiona-

do por un administrador, cuyo nombramiento era competencia del ministro, a propuesta del rector ¹⁶.

Otro elemento clave en la estructura universitaria era el profesorado. Como se señaló anteriormente, tanto en Italia como en España la actividad académica en el seno de las facultades se organizaba en torno a las cátedras. De cada una de ellas, es decir, de cada catedrático, dependía un número variable de profesores con situaciones profesionales y laborales muy diversas. En el caso de Italia, la casuística era muy variada : *docentes libres*, encargados, agregados, ayudantes, asistentes; en casi todos los casos, su nombramiento correspondía a los decanos (normalmente, con la intervención del catedrático interesado), sin demasiado —o ningún— control de tipo académico, lo que generaba toda suerte de vínculos clientelares y de escándalos a ellos asociados; algún autor, como Luciano Casali, no ha dudado en considerar la situación del profesorado en la universidad liberal como caótica y fuera de control; por otra parte, la fuerza de los intereses locales, vale decir, de los catedráticos y decanos, hacía muy difícil la reforma de esta cuestión. El problema se agravaba por el hecho de que los propios catedráticos accedían a su cargo mediante oposición, pero con una decisiva intervención política: el ministro podía nombrar para la cátedra a cualquiera de los candidatos que hubiesen obtenido algún voto en el concurso correspondiente, sin que los tribunales pudiesen imponer entre ellos un orden de prelación; con ello, la decisión política prevalecía sobre la académica ¹⁷. En España, la situación era hasta cierto punto similar: también en torno a los catedráticos se articulaba el trabajo de profesores auxiliares, encargados de curso y ayudantes, todos ellos muy mal pagados y, en algunos casos, incluso sin remuneración económica. Como en Italia, su carrera académica dependía de su vinculación con el catedrático, y, además, de la influencia que éste tuviese sobre el decanato a la hora de dotar nuevas plazas. A la cátedra se accedía por oposición, y si bien no existía la discrecionalidad de designación ministerial que se ha señalado para Italia, el nombramiento de los

¹⁶ Ley de Ordenación Universitaria, capítulo XII (*Medios económicos para la función universitaria y presupuesto general de las Universidades*) [en *Nacional-Catolicismo y Educación...*, pp. 654-660]; las referencias al sistema de financiación de la universidad antes de la guerra civil, en Baldó Lombarda, «Las universidades...», pp. 407 y 411-412.

¹⁷ Casali, «Alcune considerazioni...», pp. 163-165.

tribunales de oposición era competencia del Ministro, con lo que era evidente que el gobierno podía incidir decisivamente sobre el resultado del concurso. La República, sin embargo, había introducido una importante modificación al limitar a dos los miembros del tribunal designados por el Ministerio, siendo los otros tres seleccionados por riguroso turno del escalafón de catedráticos¹⁸.

La reforma Gentile y la LOU introdujeron algunos cambios en el acceso a la cátedra, cambios que quizás fueron de mayor calado en el caso español. En Italia, las oposiciones a cátedra se centralizaron en Roma, y se realizaban ante una comisión designada por el ministro a propuesta del *Consiglio superiore della pubblica istruzione* (órgano que había dejado de ser electivo, y sobre el que el gobierno tenía un control absoluto). La superación de la prueba daba paso a un examen del *curriculum* docente y científico del candidato; una vez establecida la idoneidad del mismo, se adquiría la condición de catedrático extraordinario, y sólo tras tres años de ejercicio como tal se accedía definitivamente a la cátedra (*Ordinarius*). Así pues, se eliminaba la discrecionalidad en el nombramiento final, sin que por ello el ministro perdiese el control sobre el resultado de la oposición, y se disminuía considerablemente el margen de maniobra de las universidades para *hacer* sus propios catedráticos; un paso más, en definitiva, hacia la extrema centralización del sistema universitario que Gentile perseguía¹⁹. En España, la LOU mantuvo la estructura tradicional del profesorado (con algunos cambios de nombre —los auxiliares se convirtieron en adjuntos—, pero sin mejora alguna en cuanto a la estabilidad laboral o las retribuciones) y eliminó la reforma en el sistema de oposiciones introducida por Marcelino Domingo, volviéndose pues a las comisiones designadas íntegramente por el ministro y, así, al control gubernamental sobre los resultados de la oposición²⁰.

¹⁸ Un detallado análisis de la evolución de las distintas categorías del profesorado universitario desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como de los mecanismos de acceso a las mismas, en C. Rodríguez González, «El profesorado», en J.M. Palomares Ibáñez (coord.), *Historia de la Universidad de Valladolid*, Valladolid, 1989, vol. II (coordinado por C. Almuiña), *Edad Contemporánea (siglos XIX-XX)*, pp. 369-413.

¹⁹ Charnitzky, *Die Schulpolitik...*, p. 108; Casali, «Alcune considerazioni...», p. 168.

²⁰ Ley de Ordenación Universitaria, capítulo VIII (*El Profesorado universitario y sus obligaciones y derechos*) [en *Nacional-Catolicismo y Educa-*

3. *El profesorado: depuración y control ideológico*

Una de las preocupaciones compartidas por ambos regímenes fue el control ideológico del profesorado en todos los niveles de la enseñanza y, por supuesto, en la universidad. En esta cuestión, sin embargo, los puntos de partida eran tan diferentes que los resultados de las políticas seguidas difirieron notablemente. En realidad, difirieron incluso las políticas aplicadas, mucho más drásticas en el caso español como consecuencia de la guerra civil que vivió el país. En Italia, el hecho de que la reforma Gentile se llevase a cabo en un marco político aún parlamentario, en el seno de un gobierno de coalición entre fascistas y sectores liberales, y con los derechos constitucionales aún vigentes hizo que la presión política e ideológica sobre el profesorado se fuese produciendo de forma gradual y que no adquiriese rasgos verdaderamente preocupantes hasta el establecimiento de la dictadura en 1925. Incluso entonces, como se indicará después, las medidas que se tomaron tuvieron escasa repercusión desde el punto de vista de la permanencia o no de los profesores en sus cargos, aunque no así sobre la libertad de cátedra de la que aquéllos habían disfrutado hasta entonces. En España, por el contrario, ya durante la guerra civil, y de forma sistemática al finalizar ésta, se procedió a una purga político-ideológica de los docentes de todo el sistema educativo que diezmó los escalafones y que, junto con el exilio de muchos profesores, modificó de raíz la composición de la mayoría de los claustros universitarios²¹. Pero veámoslo con más detalle.

Entre las filas del PNF no faltaban las voces que, desde la misma llegada al poder, exigían una enérgica depuración política de la uni-

ción..., pp. 639-647]; una útil guía sobre las categorías del profesorado en la universidad franquista y las sucesivas modificaciones legislativas sobre la cuestión, en F. Martín Zúñiga, «Estructura del profesorado universitario en la legislación franquista (1939-1969)», en *La Universidad en el siglo XX (España e Iberoamérica)*, X Coloquio de Historia de la Educación (Murcia, 21-24 septiembre 1998), Murcia, 1998, pp. 564-573.

²¹ Puede verse una análisis comparativo de ambos procesos (y de la depuración nazi) en F. Morente Valero, «Políticas de control ideológico del profesorado universitario en los regímenes fascistas. Una aproximación», en *Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria*, Barcelona, 2004, vol. II, pp. 1493-1503.

versidad, a la que se veía como un nido de antifascistas. No obstante, tal purga no era posible por dos motivos; el ya señalado de la correlación de fuerzas entonces vigente en el gobierno y el Parlamento, y la imposibilidad material de encontrar el profesorado ideológicamente afín que hubiese podido sustituir a los, previsiblemente, cientos de profesores que hubiesen debido de ser depurados. Las primeras medidas de presión sobre el profesorado universitario no se produjeron hasta finales de 1925, esto es, con la dictadura ya establecida, cuando un decreto ley (de 24 de diciembre) permitió al gobierno remover de su cargo a cualquier funcionario (incluidos los docentes) que no ofreciese «per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio u fuori d'ufficio piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si ponessero in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo»²². Es decir, se abría la puerta a la posibilidad de separar del servicio por razones político-ideológicas a cualquier profesor funcionario. No hay datos fiables sobre los efectos que tuvo la aplicación de dicho decreto-ley en la universidad, aunque todo parece apuntar a que se usó en pocos casos y que sirvió fundamentalmente como un elemento de intimidación sobre el profesorado. Eso no excluye que algunos profesores fuesen víctimas de procesos penales por sus actividades políticas, y los casos de Gaetano Salvemini y Ernesto Rossi son quizás los más significativos²³. El efecto intimidatorio fue notable, especialmente cuando se producía en combinación con el *squadrismo* de los estudiantes fascistas. El resultado fue que algunos profesores (en número aún hoy no establecido) optaron por dejar sus puestos y, en casi todos los casos, abandonar el país; así, entre otros, el propio Salvemini, Silvio Trentin, Francesco Saverio Nitti, Arturo Labriola y Enrico Presutti²⁴.

La presión aumentó con la aprobación de otro real decreto ley (de 13 de enero de 1927) por el que se establecía que los profesores podían ser suspendidos en sus funciones por motivos políticos, e

²² Cit. en G. Boatti, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Turín, 2001, p. 21.

²³ Un análisis del caso Salvemini y Rossi en M. Ostenc, «Una tappa della fascistizzazione: la scuola e la politica dal 1925 al 1928», *Storia contemporanea* IV/3 (1973), pp. 481-484; también en Charnitzky, *Die Schulpolitik...*, pp. 260-262.

²⁴ Boatti, *Preferirei di no...*, pp. 21-22.

incluso se podía impedir que un profesor accediese a una plaza ganada en concurso aun teniendo todos los requisitos académicos para ello. Tampoco parece, sin embargo, que de esta disposición se derivasen demasiados casos de sanción²⁵. Pese a toda esta normativa, todavía a la altura de 1930, la remoción de un profesor por cuestiones ideológicas planteaba dificultades legales, y no se podía realizar de forma automática y mecánica²⁶. Ello exasperaba a los fascistas más radicales, que veían cómo la universidad seguía siendo, desde su punto de vista, refractaria al fascismo, por lo que a finales de los años veinte arreciaron las campañas exigiendo la depuración de su profesorado. Es en ese contexto que Gentile convenció a Mussolini de la necesidad de introducir un juramento de lealtad al régimen que, creía, iba a permitir avanzar en la fascistización de la universidad. Tras largas discusiones y diversos borradores, en 1931 el ministro de Educación Nacional²⁷, Giuseppe Belluzzo, firmó un decreto ley que obligaba a todos los profesores universitarios a prestar un juramento que incluía una declaración de lealtad al régimen fascista. Quienes rehusasen prestarlo serían separados de sus cargos docentes²⁸.

Sólo 12 profesores entre 1.213 (la cifra hace referencia sólo a los profesores numerarios) rehusaron jurar y perdieron por ello sus cátedras. La inmensa mayoría de los profesores prefirieron jurar por razones que iban desde la identificación ideológica con el régimen hasta la convicción de que sólo jurando y permaneciendo en el puesto se podía intentar salvar la universidad de su definitivo control por los fascistas (ésa fue la consigna, por ejemplo, del Partido Comunista, así como la del Vaticano). Entre una y otra posición, muchos juraron sencillamente para conservar su empleo y con él sus medios de subsistencia²⁹. Quienes no juraron se encontraron muy solos, y

²⁵ Charnitzky, *Die Schulpolitik...*, p. 257.

²⁶ Varios ejemplos de ello en Charnitzky, *Die Schulpolitik...*, p. 258.

²⁷ En 1929 el *Ministero della Pubblica Istruzione* pasó a llamarse *Ministero dell'Educazione Nazionale*, en un cambio que no era semánticamente inocente, y que, significativamente, coincide con el realizado por Franco al nombrar su primer gobierno en 1938.

²⁸ Una detallada reconstrucción de la génesis del juramento en H. Goetz, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Milán, 2000, pp. 1-10.

²⁹ Goetz, *Il giuramento rifiutato...*, pp. 13-41; Goetz hace un exhaustivo repaso a las diversas posiciones que se dieron entre los profesores, a la

años después, Gaetano de Sanctis, uno de los doce, habría de afirmar al referirse a quienes se dejaron doblegar: «Si coprirono di vergogna giurando»³⁰.

Así pues, no hubo en la universidad italiana una purga política de importantes proporciones, limitándose el régimen a mantener bajo vigilancia ideológica a los profesores en ejercicio, y a colocar a los afines en las plazas vacantes o de nueva creación. Mucha mayor importancia tuvo, sin embargo, la aplicación en la universidad de las *leyes raciales* de 1938³¹. Como consecuencia de ellas, al menos 300 profesores (de ellos, 96 catedráticos) fueron expulsados de la universidad, lo que representa aproximadamente la décima parte de los docentes en ejercicio por aquel entonces³². Esta depuración fue *racial*, no ideológica, como muestra el que entre los represaliados se contasen profesores de inequívoca adscripción al fascismo, pero cuya fe en el mismo no fue suficiente para contrarrestar su consideración legal como judíos. Así lo señalaba en sus memorias G. Levi della

intervención de Croce como consejero de muchos de ellos que acudieron a él en busca de orientación, a las maniobras del Vaticano, a las consignas del Partido Comunista...

³⁰ Cit. en Boatti, *Preferirei di no...*, p. 46.

³¹ En realidad, Real Decreto Ley de 5 de septiembre de 1938, n.º 1390, «per difesa della razza nella scuola fascista», por el que se prohibía la enseñanza en todos los centros educativos de cualquier orden y grado a los docentes judíos, y se excluía de dichos centros a los alumnos de *raza judía*, entendiéndose por tal a todos aquéllos que tuviesen ambos padres de *raza judía*, independientemente de la religión que practicasen; un real decreto posterior posibilitó la creación de escuelas e institutos exclusivamente para judíos, y con profesorado judío. Me he ocupado de los antecedentes y la aplicación de dicha legislación en F. Morente Valero, «*Libro e moschetto*». *Política educativa y política de juventud en la Italia fascista (1922-1943)*, Barcelona, 2001, pp. 178-189.

³² Hay constancia de la expulsión de la universidad de 96 catedráticos y 196 *liberi docenti*; cfr. G. Israel y P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bolonia, 1998, pp. 251-258; véase también, R. Finzi, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Roma, 1997. En un apéndice del libro (pp. 109-114), Finzi relaciona los 96 catedráticos expulsados. También señala que la purga pudo ser mucho más amplia, pues no se sabe el número de encargados de curso (*incaricati*) que fueron depurados; al respecto recuerda que en la universidad de Bolonia, la más exhaustivamente estudiada, los depurados llegaron al 20 % (p. 51).

Vida, uno de los doce que rehusaron jurar en 1931, quien se lamentaba de que, tras la aplicación de las leyes raciales, pasó a compartir la condición de víctima del fascismo con profesores que desde el primer momento habían dado un apoyo entusiástico al régimen³³.

En España las cosas fueron muy diferentes. Como se ha señalado más arriba, la guerra civil creó un escenario en el que la purga ideológica del profesorado se pudo llevar a cabo rápida y drásticamente. Desde los primeros meses de la contienda, ocho de las doce universidades españolas quedaron en la llamada *zona nacional*, y en ellas la depuración política empezó de inmediato, sin ni siquiera una normativa específica al respecto. Las evidentes arbitrariedades cometidas, incluso con profesores católicos y derechistas, llevaron a la necesidad de reglar el procedimiento, y así se creó una comisión depuradora específica para el profesorado universitario, se diseñó el procedimiento que se debía seguir en los expedientes personales de depuración, se establecieron las conductas que eran sancionables y las sanciones que se podían aplicar (y que iban desde la separación del servicio —la más grave— hasta la inhabilitación para desempeñar cargos directivos o de confianza —la más leve—, pasando por suspensiones temporales de empleo y sueldo, traslados de universidad o jubilaciones forzosas)³⁴. Con esta legislación se revisaron todos los casos en que ya se había realizado la depuración, y se abrieron expedientes a los profesores cuya conducta e ideas políticas aún no habían

³³ Levi della Vida escribió que «tra coloro che persero la cattedra per motivi «razziali» ve n'era più di uno che fin dalla prima ora e fino all'ultima avevano militato con entusiasmo e con convizione sotto l'insegna del littorio (...). Gino Arias, Giorgio Del Vecchio, Carlo Foà, Mario Attilio Levi, Tullio Terni, sono nomi eminenti nel campo degli studi, ma confesso che vedermi messo in un fascio con loro (il vocabolo qui è appropriato quanto mai) mi fa un certo disagio»; cit. en R. Simili, «Una comunità scientifica «discriminata, non perseguitata». Passo dopo passo», en D. Mirri e S. Arietti (a cura di): *La cattedra negata. Dal giuramento di fedeltà al fascismo alle leggi razziali nell'Università di Bologna*, Bologna, 2002, p. 54.

³⁴ La legislación depuradora se aplicó al conjunto de los docentes, independientemente del nivel de enseñanza al que pertenecían; un análisis del conjunto de dicha depuración en F. Morente Valero, *La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943)*, Valladolid, 1997, pp. 194-200; las peculiaridades de la legislación aplicada al profesorado universitario, en Morente Valero, «Políticas de control ideológico...», pp. 1494-1495.

sido examinadas, lo que incluyó, al terminar la guerra, a los profesores de las universidades de Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia, las únicas que estuvieron bajo control republicano hasta el final.

No existía hasta ahora ningún trabajo de conjunto sobre esta depuración universitaria, aunque sí algunos estudios completos sobre la purga política en alguna de las doce universidades españolas, y otros con datos sólo orientativos sobre las demás³⁵. A partir de todo el material disponible se puede estimar que, aproximadamente, un tercio de los catedráticos españoles perdieron su plaza (por la depuración o por haber marchado al exilio); entre ellos hay que contar a nueve que fueron ejecutados por los rebeldes durante la guerra, o tras consejos de guerra sumarísimos al finalizar la misma, y otros dos que murieron en prisión. El número de auxiliares y ayudantes represaliados es mucho más difícil de calcular pues en muchos casos el carácter temporal de sus contratos permitía prescindir de ellos sin que ni siquiera fuese preciso un expediente de depuración.

Las dos vías tan diferentes que siguieron fascistas y franquistas para depurar la universidad hizo que la ocupación de plazas docentes por profesorado inequívocamente adicto fuese aplastantemente superior en el caso español. Hay que pensar que, dada la dureza de la depuración franquista (téngase en cuenta que la mera militancia en un partido republicano podía significar la separación definitiva del servicio, como efectivamente ocurrió en muchos

³⁵ Para la visión de conjunto, véase J. Claret Miranda, *La repressió franquista a la universitat espanyola*, tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2004. Los estudios más completos sobre universidades concretas son los correspondientes a las de Barcelona [J. Claret Miranda, *La repressió franquista a la Universitat Catalana. La Universitat de Barcelona autònoma, de la Segona República al primer franquisme*, Vic, 2003], Sevilla [J.L. Rubio Mayoral, «El profesorado de la universidad de Sevilla. Aproximaciones al proceso de depuración política (1936-1939)», en M.N. Gómez García (ed.), *Universidad y poder. Problemas históricos*, Sevilla, 1993, pp. 57-113] y Valencia [M. Baldó i Lacomba, «Cambios de profesores en la Universidad de Valencia. Sanciones y depuraciones (1936-1939)», en *La II República una esperanza frustrada*, Actas del congreso Valencia Capital de la República (abril de 1986), Valencia, 1987, pp. 269-291 –especialmente, pp. 285-289-; y M. Peset y M.F. Mancebo, «Exilio y depuraciones», en M. Peset (coord.), *Historia de la Universidad de Valencia*, Valencia, 2000, vol. III, pp. 249-257].

casos³⁶), el profesorado que salió airoso de la misma y conservó su plaza era en su inmensa mayoría, desde el punto de vista ideológico, afín a los planteamientos del nuevo régimen, cuando no entusiasta de los mismos. Además, la gran cantidad de vacantes generada permitió en los años que siguieron al fin de la guerra colocar en las cátedras (y, por supuesto, en las plazas docentes de segundo nivel) a adictos sin tacha, garantizando así por mucho tiempo un profesorado universitario escasamente o nada crítico con el régimen³⁷.

A partir de aquí, plantearse la existencia o no de libertad de cátedra en la universidad española quizás no tenga demasiado sentido. Ciertamente, tal libertad no existía, entre otras cosas porque los altos responsables ministeriales no la consideraban ni un derecho del profesorado ni, evidentemente, algo especialmente deseable. Pero para la universidad de los años cuarenta y la primera mitad de los cincuenta la cuestión posiblemente no tenía mucha importancia, pues lo que realmente faltaba era un profesorado que hubiese podido hacer uso de esa inexistente libertad para hacer la crítica del orden de cosas existente. En la medida en que la inmensa mayoría del profesorado comulgaba con los principios ideológicos y las bases políticas del franquismo, la falta de libertad de cátedra era algo que afectaba a muy pocos docentes, por otro lado suficientemente intimidados por lo que había pasado como para plantearse actitudes desafiantes. Habrá que esperar hasta mediados de los años cincuenta para que las cosas empiecen a cambiar, entre otras razones, por los efectos de la inevitable renovación generacional.

También en este aspecto, la situación en Italia fue diferente. La inexistencia de una purga ideológica de gran calado impidió renovar rápidamente el profesorado, sustituyendo a los profesores antifascistas por otros adictos al régimen. A su vez, la opción tomada por la práctica totalidad del profesorado en el asunto del juramento de 1931 permitió que muchos profesores liberales, socialistas e incluso comunistas (éstos, en cualquier caso, mucho menos nume-

³⁶ Ejemplos de ello en los trabajos citados de Claret Miranda (sobre la Universidad de Barcelona) y Rubio Mayoral (sobre la de Sevilla)

³⁷ Según Alicia Alted, la inmensa mayoría de los 155 nuevos catedráticos nombrados entre 1939 y 1944 pertenecían a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la Acción Católica y el *Opus Dei* [Altred, «Bases...», p. 117]; y a ellos habría que añadir los aportados por Falange.

rosos) pudiesen mantener sus puestos docentes durante prácticamente todo el *ventennio* (ni que decir tiene que algo así era impensable durante, al menos, las dos primeras décadas del franquismo). Todo ello explica que dentro del PNF (y es especialmente revelador de ello la posición que mantuvo sistemáticamente la revista *Critica fascista*) nunca se dejara de ver la universidad como un reducto refractario al fascismo, posición que ha sido seguida, por cierto, por no pocos historiadores, que han venido considerando la universidad como uno de los enclaves en los que menos pudieron penetrar los fascistas. No es ésta, sin embargo, una opinión unánime. Autores como Casali, Finzi o Turi, entre otros, vienen sosteniendo que esa imagen de una universidad prácticamente ajena al fascismo no se compadece en absoluto con la realidad³⁸.

En cualquier caso, de lo que no puede haber duda es de la existencia de un sector del profesorado que no sólo no se identificaba con el régimen sino que le era hostil. Otra cosa es en qué medida esa hostilidad podía hacerse visible en el trabajo docente e investigador de dichos profesores. Verdaderamente, no parece que hubiese muchas posibilidades de ello. Hay un cierto consenso en que en la universidad italiana del *ventennio* hubo una relativa libertad de cátedra³⁹; los límites de dicha libertad se situaban en la crítica al gobierno, el régimen o la ideología fascista. Más allá de estas cuestiones —que no son menores, obviamente— el Estado no intervenía decisivamente sobre lo que los profesores enseñaban. Había orientaciones, por supuesto, que se traducían en programas oficiales que se debían seguir en las diferentes asignaturas, pero sin que ello acabase condicionando severamente los contenidos científicos que se transmitían a los alumnos. Es mucho más de lo que se puede decir de la universidad española de los años cuarenta.

³⁸ Casali cree que está aún por estudiar si la fascistización fue o no superficial, y en qué medida impregnó la docencia y la investigación; cfr. L. Casali, «L'Europa degli anni trenta: il tempo dell'intolleranza», en Mirri/Arieti (a cura di), *La cattedra negata...*, p. 22; véanse también, Finzi, *L'Università italiana...*, pp. 21-22 y 28 (sobre la aquiescencia de la mayor parte del profesorado a la legislación antisemita y su aplicación en la universidad), y G. Turi, «L'Università di Firenze e la persecuzione razziale», *Italia contemporanea*, 219 (2000), p. 241.

³⁹ Por ejemplo, N. Tranfaglia, *La prima guerra mondiale e il fascismo*, Turín, 1995, p. 439; Ostenc, *L'éducation en Italie...*, p. 300.

Así pues, ni en Italia ni en España se toleraba que los profesores pusiesen en cuestión el gobierno o el régimen, pero parece evidente que la mera presencia de profesores de inequívocas posiciones liberales o de izquierdas representaba en la universidad italiana una bocanada de aire fresco que en vano se buscará en la española. A ese ambiente de relativa tolerancia intelectual contribuyó sin duda el talante de dos figuras capitales de la cultura fascista, a su vez y significativamente, ministros de educación en momentos claves del *ventennio*: Giovanni Gentile y Giuseppe Bottai. Gentile fue el innegable dominador de la vida cultural oficial del régimen durante los años veinte y gran parte de los treinta. No cabe duda de su compromiso con el fascismo y con Mussolini (hasta el punto de seguir a éste en la experiencia de Saló, y de morir por ello a manos de la Resistencia), como no cabe dudar de su convicción de que la libertad de cátedra debía ser limitada por consideraciones políticas⁴⁰ (de hecho, como se señaló anteriormente, fue idea suya implantar un juramento de fidelidad al régimen fascista por parte del profesorado universitario). Y sin embargo, se debe en buena medida a Gentile el que la libertad de pensamiento no resultara absolutamente liquidada en la Italia fascista. Baste recordar su actitud abierta en la elaboración de la *Enciclopedia Italiana*, para la que contó con los mejores intelectuales de la época, independientemente de su adscripción ideológica, incluyendo a algunos de los que habían firmado en su momento el manifiesto de Croce (que cuestionaba la posibilidad de una cultura fascista), o, lo que aún resulta más significativo, a algunos de los que no habían prestado el juramento de 1931, todo lo cual le valió durísimos ataques por parte de determinados sectores del PNF⁴¹. Algo similar cabe decir de Bottai,

⁴⁰ Casali, «Alcune considerazioni...», pp. 174-175.

⁴¹ Sobre Gentile y la *Enciclopedia Italiana*, véase G. Turi, *Il mecenate, il filosofo e il gesuita. L'«Enciclopedia italiana», specchio della nazione*, Bologna, 2002. Un ejemplo de la actitud de Gentile como responsable de la *Enciclopedia*: el filósofo socialista Rodolfo Mondolfo, uno de los firmantes del manifiesto de Croce, colaboró en la *Enciclopedia* redactando las entradas sobre marxismo y movimiento obrero, sin que, según confesó él mismo, se le impusiese más limitación que la del espacio disponible; también se le encargó, y redactó con libertad, la entrada sobre Giordano Bruno, en torno al cual había polemizado en el pasado con el propio Gentile [cfr. Turi, *Il mecenate...*, pp. 158-167, y especialmente, la nota 59.]. La animadversión hacia Gentile

incesante animador de debates políticos y culturales, y convencido de que sólo el debate de ideas permitiría la continua renovación del fascismo. Como Gentile, Bottai no era un fascista *blando*; baste recordar sus posiciones en el debate sobre la cuestión racial, así como las medidas tomadas en los diferentes niveles de la enseñanza en aplicación de la nueva doctrina en esa materia, y que Bottai como ministro de Educación Nacional impulsó con mano firme. Pero eso no le impidió, por ejemplo, defender la realización de los *littoriali* con amplios márgenes para la discusión política e incluso la crítica al régimen (eso sí, siempre desde dentro del mismo), o aceptar la colaboración de escritores y artistas nada próximos al fascismo, e incluso abiertamente antifascistas, en su revista *Primato, lettere ed arti d'Italia*, y en unos momentos —los de la guerra mundial— en que precisamente se acentuó la dureza del régimen ⁴².

Cosas de ese tipo eran absolutamente inimaginables en la España de los años cuarenta y primeros cincuenta. Y no sólo por la mucha mayor homogeneidad ideológica del profesorado español como consecuencia ya señalada de las depuraciones y exilios, sino porque la actitud de las autoridades académicas (y gubernativas) hacia quienes mostrasen la menor señal de disenso era de absoluta intransigencia, y de consecuencias lamentablemente muy previsibles. Como ha explicado muy recientemente Jordi Gracia, no en vano hay que esperar prácticamente un quindenio para que comiencen a asomar tímidamente la cabeza quienes después de la guerra civil, y sin identificarse con los *principios fundamentales del Movimiento*, habían permanecido en una *resistencia silenciosa*, agazapados intelectual y casi físicamente en los pliegues más oscuros del mundo universitario y cultural español ⁴³.

dentro de las filas del PNF en A. Tarquini, «Gli antigentiliani nel fascismo degli anni Venti», *Storia contemporanea*, XXVII/1(1996), pp. 5-59.

⁴² La impugnación de la interpretación de Bottai como un fascista *amable*, en E. Gentile, «Bottai e il fascismo. Osservazioni per una biografia», *Storia contemporanea*, X/3 (1979), pp. 551-570; las concepciones de Bottai sobre la necesidad de una formación crítica de los jóvenes, siempre dentro del fascismo, en P. Nello, «Mussolini e Bottai: due modi diversi di concepire l'educazione fascista della gioventù», *Storia contemporanea*, VIII/2 (1977), pp. 335-366.

⁴³ J. Gracia, *La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España*, Barcelona, 2004. Como algunos críticos de la obra han señalado, tildar

4. *Los estudiantes: entre el fascismo y el antifascismo*

Al abordarse la reforma de la universidad, tanto en Italia como en España había una preocupación compartida por el creciente número de estudiantes universitarios. Como ya se ha indicado aquí, a Giovanni Gentile le obsesionaba la presunta masificación de la universidad, que podía conducir, en su opinión, a la pérdida de la excelencia y a un descenso irremediable de la calidad de la enseñanza y, consiguientemente, del nivel de preparación de los licenciados. De ahí que la reforma de la escuela media que planteó tuviese como objetivo prioritario endurecer el camino hacia la universidad y el mismo acceso a ésta. Fue una reforma claramente elitista, como lo fue la ley de bachillerato franquista (1938) impulsada por el ministro Pedro Sainz Rodríguez, cuyos planteamientos en esta cuestión (que no en otras) coincidían plenamente con los que había desarrollado Gentile quince años antes⁴⁴. En ambos casos se pretendía una estricta selección de los alumnos universitarios según criterios de clase, que no de capacidad intelectual (como defendían, desde posiciones políticas bien alejadas del fascismo, intelectuales y políticos como, por ejemplo, Gaetano Salvemini o Fernando de los Ríos, también partidarios de una universidad selectiva y con pocos alumnos)⁴⁵.

Gentile consiguió parcialmente su objetivo: el número de estudiantes universitarios descendió en los años siguientes a la aplicación de la reforma, y no se volvió a una cifra similar a la del curso

de «resistencia» la actitud de estos intelectuales de la inmediata postguerra quizás sea dar un tono demasiado épico a unas trayectorias que más bien cabría identificar con la simple lucha por la supervivencia intelectual y moral —que, ciertamente, dadas las circunstancias, no era poca cosa—.

⁴⁴ La reforma de la escuela media italiana en Morente Valero, «*Libro e moschetto*»..., pp. 60-62; la de la española, en Cámara Villar, *Nacional-Catolicismo*..., pp. 91-94.

⁴⁵ Las posiciones de Salvemini en L. Ambrosoli, «La scuola secondaria», en Cives (a cura di), *La scuola italiana*..., pp. 115-116; también en L. Ambrosoli, «Socialismo e istruzione nell'età giolittiana: orientamenti storiografici», en L. Rossi (a cura di), *Cultura, istruzione e socialismo nell'età giolittiana*, Milán, 1991, p. 22. Las de Fernando de los Ríos, en Baldó Lacomba, «Las universidades...», pp. 416-417.

1922-1923 hasta principios de los años treinta. A partir de entonces, la tendencia al alza se recuperó con fuerza, y en sólo diez años el número de estudiantes universitarios se había prácticamente doblado; y luego volvió a doblarse en el transcurso de sólo tres años más, hasta alcanzar en 1942-1943 una cifra casi cuatro veces superior a la que había al llegar Gentile al ministerio⁴⁶. En España, el número de estudiantes universitarios no descendió, pero su crecimiento fue muy lento no sólo durante la inmediata postguerra, sino mucho más allá, hasta comienzos de los años sesenta, es decir, casi un cuarto de siglo después del final de la guerra civil; al empezar la década de los sesenta, la población estudiantil sólo era el doble de la existente en el curso 1940-1941⁴⁷.

Hay en esta cuestión, pues, una coincidencia inicial entre ambos países, pero una divergencia clara en el transcurso del tiempo. Mientras en España la universidad se mantuvo durante esas más de dos décadas como un reducto socialmente elitista, al que accedían sólo los hijos de las clases sociales altas o medias-altas (con muy escasa presencia de alumnos de la clase media-baja y, aún menor, de la clase trabajadora), en Italia, a lo largo de los años treinta y, sobre todo, en los tres años finales del régimen, la universidad empezó a abrir sus puertas a sectores sociales cada vez más amplios (especialmente, de la clase media), por mucho que las clases más acomodadas continuasen aportando el mayor contingente de alumnos. Las razones del cambio de tendencia en Italia son diversas, pero cabe apuntar fundamentalmente dos: la presión del propio PNF, en cuyo seno el elitismo social que impuso Gentile con su reforma no fue mayoritariamente compartido, entre otras cosas porque afectaba negativamente a grupos que constituían parte esencial de la base social de apoyo del régimen; y las necesidades derivadas de una economía que se modernizaba e industrializaba, y que estaba necesitada de un número cada vez mayor de profesionales y técnicos; no es casual que el mayor crecimiento en el número de alumnos coincidiera

⁴⁶ Las cifras eran las siguientes: 46.561 alumnos en el curso 1922-1923; 40.399 en 1928-1929; 46.262 en 1930-1931; 85.535 en 1939-1940; y 168.323 en 1942-1943; cfr. Charnitzky, *Die Schulpolitik...*, p. 425, tabla 14.

⁴⁷ Había 37.286 estudiantes en el curso 1940-1941, y 76.458 en 1960-1961; cfr. *Datos y cifras de la enseñanza en España*, MEC 1974; cit. en M.E. Nicolás Marín, *Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962)*. (*Contribución al conocimiento de la ideología dominante*), Murcia, 1982, p. 209, tabla VII.

con la presencia de Bottai en el ministerio, con lo que ello implicaba de cambio de perspectiva sobre la función que debía de cumplir la universidad en la Italia de aquellos momentos⁴⁸. En España, ninguno de esos dos factores se dio con fuerza en el período que nos ocupa, y sólo el segundo empezó a ser considerado a partir de la segunda mitad de los cincuenta y, sobre todo, en los años sesenta, coincidiendo no por casualidad con el rápido crecimiento de la matrícula universitaria y la creación de nuevas universidades (hasta principios de los años sesenta se había mantenido inalterado el número de las existentes desde los años veinte).

Desde el punto de vista de las opciones políticas de los estudiantes universitarios, también la guerra civil constituye un elemento que establece notables diferencias entre la situación española y la italiana, al menos por lo que hace al punto de partida en ambos casos, aunque dichas diferencias se difuminan con el tiempo. Así, la reforma Gentile pudo tener una notable contestación por parte de los estudiantes universitarios, todavía encuadrados muchos de ellos en organizaciones sindicales socialistas, católicas, etc. Es cierto que tal oposición se reprimió duramente, empleando para ello, incluso, a las organizaciones de estudiantes fascistas, pero no es menos cierto que fueron capaces de provocar un cierto desorden en el mundo universitario en los primeros años del *ventennio*⁴⁹. Con la implantación de la dictadura todo ello acabó; la disidencia pasó a estar perseguida disciplinaria y penalmente, y las organizaciones estudiantiles fueron disueltas, quedando como única representación

⁴⁸ La preocupación de Bottai por que la enseñanza en todos sus niveles prestase más atención a las nuevas necesidades del mercado laboral aparece constantemente en sus escritos sobre temas educativos y guiará la elaboración de su más ambicioso proyecto como ministro de Educación Nacional, la *Carta della Scuola*; véase Morente Valero, «*Libro e moschetto*»..., pp. 162-178.

⁴⁹ Giuntella, *Autonomia e nazionalizzazione*..., p. 25; en esa movilización estudiantil participaron, incluso, algunos grupos de estudiantes fascistas; *Ibid.*, p. 75. No puede desligarse la oposición estudiantil a la reforma Gentile de la intensa agitación que se venía produciendo en las universidades italianas desde el final de la Gran Guerra; análisis de la misma en F. De Negri, «*Agitazioni e movimenti studenteschi nel primo dopoguerra in Italia*», en *Studi Storici* XVI/3 (1975), pp. 738-744; y en B. Wanrooij, «*The Rise and Fall of Italian Fascism as a Generational Revolt*», *Journal of Contemporary History*, 22 (1987), pp. 404-406.

posible la que ofrecían los *Gruppi Universitari Fascisti* (GUF)⁵⁰. Los GUF combinaban la actividad represora y *squadristica* (agresiones a estudiantes antifascistas, campañas contra determinados profesores...) con las de propaganda y adoctrinamiento ideológico, que se canalizaban a través de la edición de revistas y actividades de tipo cultural (teatro, sesiones de cine, conferencias, grupos de debate...). Desde finales de los años veinte, los GUF fueron adquiriendo también competencias para el desarrollo de actividades de tipo asistencial: gestión de comedores, bibliotecas, librerías, centros sociales, becas, asistencia sanitaria, etc.; fue este último ámbito de actuación el que permitió que la militancia en los GUF —que no era obligatoria— creciese rápidamente, hasta llegar a más de cuarenta y un mil miembros en 1930 (lo que representaba el 90% de todos los estudiantes universitarios)⁵¹.

Es difícil no ver en los GUF el modelo en que se iba a inspirar el Sindicato Español Universitario (SEU), especialmente después de la guerra civil. Aunque su creación se remonta a la etapa republicana, cuando su violento activismo lo convirtió en una de las puntas de lanza de la ofensiva falangista contra la República democrática, no será hasta terminada la contienda que el SEU alcance la hegemonía entre los estudiantes universitarios españoles. Como en Italia, a ello contribuyó la liquidación de todas las organizaciones republicanas y de izquierdas, así como la disolución de las católicas. Hasta 1943, la afiliación al SEU fue voluntaria, pero con la LOU devino obligatoria para todos los estudiantes. El SEU asumió funciones idénticas a las que cumplieron los GUF: de represión dentro de la universidad, de orden ideológico-propagandístico (utilizando los mismos medios antes mencionados: revistas, teatro, cine, foros

⁵⁰ Los orígenes de los GUF en M.C. Giuntella, «I Gruppi Universitari Fascisti nel primo decennio del regime», *Il movimento di liberazione in Italia: rassegna bimestrale di studi e documenti*, XXIV/107 (1972), pp. 4-12; y en L. La Rovere, «Fascist Groups in Italian Universities: An Organization at the Service of the Totalitarian State», *Journal of Contemporary History*, 34/3 (1999), 460-464.

⁵¹ El estudio más completo sobre los GUF es el de L. La Rovere, *Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943*, Turín, 2003; los datos sobre militancia en los GUF, en p. 139 (el porcentaje se calcula sobre la cifra de estudiantes universitarios que ofrece Charnitzky en *Die Schulpolitik...*, p. 425, tabla 14).

de debate...) y de carácter asistencial (becas, comedores, colegios mayores...) ⁵².

Las coincidencias entre GUF y SEU van más allá de las funciones que representaron ⁵³. En ambos casos, la organización estudiantil gozó de una fase de notable autonomía (coincidiendo con los momentos de mayor actividad *squadristica*), que dio paso rápidamente a su control por parte del partido. La importancia que se daba a la formación de los jóvenes universitarios (como cantera de dirigentes tanto del partido como del Estado), así como la prevención que se tenía ante las actitudes de crítica y rebeldía que *por naturaleza* podían esperarse de ellos hicieron que tanto en España como en Italia los dirigentes del partido optasen por mantener un control directo sobre las respectivas organizaciones. Hubo, sin embargo, una diferencia: mientras los GUF consiguieron mantenerse siempre como organización totalmente independiente, aunque sometida al control del partido a través del mismísimo secretario general del PNF, el SEU fue pronto integrado en una organización más amplia, la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, junto a las otras organizaciones juveniles del régimen. Los GUF pudieron resistirse a una operación similar (su integración en la *Giuventù Italiana del Littorio*), no así el SEU, pese a las protestas que aquella integración provocó por parte de dirigentes y militantes del sindicato universitario. No obstante, esta dependencia del Frente de Juventudes fue más teórica que real, manteniendo el SEU, dentro de la organización juvenil, una notable autonomía de actuación durante toda su existencia ⁵⁴.

⁵² El estudio de referencia sobre el SEU es el de M.A. Ruiz Carnicer, *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1945. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*, Madrid, 1996.

⁵³ Véase una comparación entre ambos (y con la organización de estudiantes nazis) en M.A. Ruiz Carnicer, «Juventud universitaria y fascismo. GUF, NSDStB y SEU. Un análisis comparativo», en Carreras Ares/Ruiz Carnicer (coords.), *La Universidad española...*, pp. 63-92.

⁵⁴ Tanto en Italia como en España se libró una dura batalla por el control de las organizaciones juveniles entre el Partido y las autoridades del Ministerio de Educación. A su vez, desde la dirección de las organizaciones juveniles (Frente de Juventudes y *Giuventù Italiana del Littorio*) se intentó controlar a las organizaciones de estudiantes universitarios, a lo que éstas se resistieron tanto como pudieron. Para el caso italiano, véase

En otros aspectos, la similitud entre GUF y SEU se acentúa. Ambas organizaciones fueron el reducto de las posiciones *puristas* dentro del fascismo y el falangismo, respectivamente. En ambos casos, sin embargo, la retórica revolucionaria acababa chocando con la realidad mucho más conservadora del régimen, lo que no dejaba de ser motivo de decepción de muchos jóvenes militantes y sinceramente creyentes en el mensaje fascista. Tanto en Italia como en España, las actividades culturales y las revistas editadas por las organizaciones universitarias gozaron de un margen de libertad que no se daba en otros ámbitos, y que permitía la expresión de posiciones muchas veces heterodoxas, y no pocas veces críticas con el régimen (siempre, eso sí, desde dentro de los límites de éste). Era esta característica de las organizaciones estudiantiles fascistas la que hizo que se acercasen a ellas muchos jóvenes con inquietudes políticas y culturales, que no encontraban, dicho sea de paso, otros cauces para canalizarlas. Quizás esta apertura intelectual se dio con mayor intensidad en el fascismo italiano, especialmente en las primeras ediciones de los *littoriali*, antes de que los sectores más conservadores del PNF consiguieran reconducirlos hacia actitudes más moderadas y ortodoxas ante el temor de que tanta espontaneidad y crítica intelectual acabase convirtiéndose en un arma no de renovación del régimen (como gente como Bottai o Alessandro Pavolini defendían), sino de ataque contra el mismo⁵⁵.

Morente Valero, «*Libro e moschetto*»..., pp. 108-109 y 134-142. La integración del SEU en el Frente de Juventudes, en Ruiz Carnicer, *El Sindicato Español Universitario*..., pp. 172-179.

⁵⁵ Para los *littoriali*, véase G. Lazzari, *I Littoriali della cultura e dell'arte. Intellettuali e potere durante il fascismo*, Nápoles, 1979; y U. Alfassio Grimaldi e M. Addis Saba, *Cultura a passo romano. Storia e strategia dei Littoriali della cultura e dell'arte*, Milán, 1983. Una visión más actualizada, en La Rovere, *Storia dei GUF*..., pp. 267-289. Un detallado análisis de la prensa de los GUF, en T. H. Koon, *Believe, Obey, Fight. Political Socialization of Youth in Fascist Italy, 1922-1943*, Chapel Hill y Londres, 1985, pp. 207-216. Para las actividades culturales y la prensa *seuista*, Ruiz Carnicer, *El Sindicato Español Universitario*..., pp. 445-466. La aparición de una incipiente disidencia ideológica aprovechando los relativos márgenes de crítica que ofrecían dichas actividades culturales y las revistas universitarias falangistas ha sido estudiada por J. Gracia en *Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962)*, Toulouse, 1996.

Tanto los GUF como el SEU experimentaron un proceso de creciente burocratización. En este caso, quizás fue el sindicato español el que lo sufrió en mayor medida y más rápidamente. Ello fue debido, sin duda, a que, a diferencia del GUF, que durante muchos años fue necesario para asegurar el control fascista de la universidad, el SEU se encontró con una universidad donde los adversarios políticos habían sido barridos y donde su función represora, por tanto, parecía menos indispensable. Por otra parte, la derrota del Eje en la Guerra Mundial hizo que el régimen procurase disimular aquellos aspectos que más claramente lo relacionaban con los perdedores de la guerra, con lo que las posibilidades de Falange —y del SEU— de imponer sus criterios sobre el funcionamiento de la universidad, obviamente, disminuyeron. En esas circunstancias, el SEU evolucionó cada vez más hacia una organización suministradora de servicios asistenciales, lo que facilitó su burocratización, que llegaría a ser casi esclerótica en los años que precedieron a su liquidación en 1965.

En qué medida las organizaciones estudiantiles fascistas cumplieron con las funciones que se les habían encomendado es algo que permite ser discutido, y que no tiene respuesta clara y fácil, a pesar de lo que se acostumbra afirmar. Si se mira desde la perspectiva de la prestación de servicios, no cabe duda de que, burocratizadas o no, ambas organizaciones fueron capaces de atraer a muchos estudiantes que de esa forma entraban en contacto, más o menos superficial, con el fascismo. Las actividades culturales (pero también, no hay que olvidarlas, las deportivas) que organizaban eran otra forma de aproximación entre los jóvenes y el fascismo, y en ocasiones tenían el suficiente interés (nada difícil dada la penuria de la oferta cultural general) como para que esos jóvenes pudiesen sentirse atraídos por la ideología que allí les convocaba. Otra cosa es que luego la realidad se encargase de mostrarles las limitaciones del régimen a la hora de llevar a la práctica lo que intelectualmente se les proponía. Pero en ese caso, el fracaso no sería tanto de los GUF o del SEU, cuanto del sistema político al que servían. Se ha afirmado que tanto los GUF como el SEU fracasaron en la socialización política de los jóvenes universitarios⁵⁶; pero seguramente ésa es una verdad a medias o,

⁵⁶ Así lo ve Ruiz Carnicer en relación con el SEU, y Koon en relación con los GUF, entre otros posibles ejemplos. En un trabajo clásico, Gino

dicho de otra manera, sólo es verdad si se presta atención exclusivamente a la elite política estudiantil y si se contempla la cuestión en el largo plazo. Parece claro que el grueso de los estudiantes más politizados se alejaron del franquismo luego de haber pasado, muchos de ellos, por las actividades del SEU⁵⁷, de la misma forma que muchos de los cuadros intelectuales y políticos de la República italiana se reclutaron entre los más brillantes participantes en los *littoriali*⁵⁸; ahora bien, esa forma de mirar las cosas se olvida de la masa; se olvida de un gran número de estudiantes universitarios que durante los años cuarenta y gran parte de los cincuenta pasaron por la universidad española sin dar muestras de especial inquietud política, participaron en mayor o menor grado en las actividades (o se beneficiaron de los servicios) del SEU, y tras licenciarse ingresaron en el mundo profesional con el absoluto convencimiento de que el régimen político en el que vivían no merecía contestación alguna. Quizás no se habían convertido en fervientes nacionalsindicalistas —y en ese sentido el SEU habría fracasado—, pero sí en modélicos franquistas —y entonces, la opinión sobre la eficacia del SEU quizás debería ser otra—. Creo que en buena medida puede afirmarse lo mismo de los GUF. Si fascismo y franquismo no se sostuvieron sólo por la represión, y si contaron con bases sólidas de apoyo social, y muy especialmente entre los sectores profesionales y técnicos, seguramente algo tuvieron que ver con ello la universidad y las organizaciones de estudiantes universitarios.

La otra función para la que estaban programados GUF y SEU era la de generar los futuros cuadros dirigentes del partido y del

Germani planteó ese fracaso en una perspectiva más amplia: la de la socialización de todos los jóvenes, y no sólo los universitarios: G. Germani, «Political Socialization of Youth in Fascists Regimes: Italy and Spain», en S.P. Huntington and C.H. Moore, *Authoritarian Politics in Modern Society. The Dynamics of Established One-Party Systems*, New York and London, 1970, pp. 339-379.

⁵⁷ J. Gracia, *Estado y cultura...*, *passim*.

⁵⁸ Charnitzky, *Die Schulpolitik...*, p. 310. También Albertina Vittoria ha señalado cómo fue la generación de jóvenes universitarios crecidos y educados en el fascismo la que nutrió buena parte de los cuadros de las organizaciones antifascistas y de la resistencia partisana; cfr. A. Vittoria, «L'Università italiana durante il regime fascista: controllo governativo e attività antifascista», en Carreras Ares/Ruiz Carnicer (coords.), *La universidad española...*, p. 60.

Estado. Sobre ello también se ha extendido la opinión de un fracaso sin paliativos de ambas organizaciones. Sin embargo, también esta cuestión merece mirarse con más detalle. Como ha explicado Luca La Rovere, a lo largo de los años treinta, el GUF aportó de forma creciente cuadros para puestos de responsabilidad en el seno del régimen (hacia 1941, casi el 8% de los militantes de la organización tenían algún cargo de relieve) y no fueron pocos los que ocuparon puestos de alta responsabilidad: desde secretarios provinciales del partido hasta miembros de la Cámara de las Corporaciones, e incluso miembros de la propia ejecutiva nacional del PNF. Es cierto que el relevo generacional no fue automático, y que dio lugar a un creciente conflicto interno dentro del partido y del régimen, pero, como señala La Rovere, sólo la guerra impidió que tal relevo llegase efectivamente a producirse de forma generalizada⁵⁹. Es cierto que no todo el mundo comparte esa opinión, y que autores como Tracy Koon relativizan la importancia de la aportación del GUF al personal político del fascismo, considerando que fue no sólo pequeña en cantidad, sino también muy tardía como para haber resultado efectiva⁶⁰.

Probablemente del SEU pueda afirmarse algo parecido a lo que señala La Rovere. No fueron pocos los futuros altos cargos del régimen que hicieron sus primeras armas políticas en el sindicato universitario. Ciertamente que no fue ni la única ni quizás la principal cantera de altos cargos franquistas, pero tampoco debe minusvalorarse su importancia, al menos en lo que tuvo de trampolín hacia una carrera más o menos brillante en el Movimiento y en la propia Administración. Lo que no debe ocultar que, como ha explicado Ruiz Carnicer, los jóvenes más inquietos políticamente pronto descubrieron que no era el SEU la vía más rápida ni más segura para lle-

⁵⁹ La Rovere, «Fascists Groups...», pp. 471-475.

⁶⁰ Koon, *Believe, Obey, Fight...*, pp. 192-193. La creencia en este fracaso a la hora de formar la nueva clase dirigente del régimen está ciertamente muy extendida; véase A. Vittoria, «Scuola e apparati educativi del fascismo», *Studi Storici*, 22/2 (1981), p. 461; también, E.R. Tannenbaum, *La experiencia fascista: Sociedad y cultura en Italia (1922-1945)*, Madrid, 1975, pp. 174-175, donde plantea cómo la lucha generacional que se dio entre jóvenes fascistas y viejos jerarcas se decantó del lado de éstos, impidiendo así la creación de una nueva clase dirigente; de la misma opinión es B. Wan-rooij: «The rise and fall...», pp. 409-413.

gar a lo más alto de la vida política del régimen⁶¹. En ese sentido, obviamente el SEU fracasó: no fueron sus cuadros quienes se convirtieron en los líderes *naturales* del régimen cuando teóricamente debía de haberse producido el relevo de las generaciones que hicieron la guerra. De hecho, la misma supresión del sindicato era la prueba más evidente de que para entonces ya no cumplía satisfactoriamente con ninguna de las funciones que inicialmente se le habían encomendado, y singularmente el encuadramiento y control de los propios estudiantes; pero eso ocurrió en una época bastante posterior a la que aquí se analiza.

5. Conclusiones

Si al inicio de estas páginas señalaba las notables coincidencias existentes entre la universidad liberal en España e Italia, parece claro a la vista de lo expuesto que esas coincidencias eran igualmente muchas entre las universidades reformadas por franquistas y fascistas, respectivamente. No hay total coincidencia entre ellas, pero sí puede afirmarse que sus elementos estructurantes eran muy parecidos, y en lo sustancial uno y otro modelo no diferían de manera importante.

Por lo que hace a las características de la organización universitaria, en ambos casos nos encontramos con unas estructuras fuertemente centralizadas, en las que el ministro tiene un poder de actuación sobre cada una de las universidades muy elevado; la autonomía universitaria es inexistente (lo que estaría en la tradición española, pero no tanto en la italiana); los rectores son los jefes de su universidad, pero su nombramiento por el ministro los coloca en una posición de clara subordinación política y con un margen de maniobra condicionado por las directrices del ministerio; el gobierno de las universidades es extremadamente jerárquico y autoritario: vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores de institutos de investigación, etc. son nombrados por el ministro a propuesta del rector, dependen de éste y actúan sólo por su delegación; desaparece cualquier órgano o cargo de carácter electivo; los órganos colegiados (juntas, claustros...) pasan a tener, en el mejor de los casos, funcio-

⁶¹ Ruiz Carnicer, *El Sindicato Español Universitario...*, pp. 500-501.

nes consultivas; las universidades siguieron teniendo, en general, escasa dotación económica, por lo que para la mayoría (y la excepción —relativa— serían las grandes universidades) las posibilidades de desarrollar ambiciosos programas de investigación eran inexistentes; de hecho, tanto en Italia como en España (pero más claramente en esta última) se pretendió establecer una clara división del trabajo entre docencia (reservada a las universidades) e investigación (en manos de institutos y centros de investigación, no siempre vinculados a la universidad)⁶²; ello respondía a una concepción de la universidad como fábrica de profesionales y cuadros de la administración, por lo que ni las escuelas técnicas superiores eran consideradas propiamente universidades ni las facultades de ciencias tuvieron una posición preeminente en el sistema universitario; al revés: la universidad se concebía sobre todo como el ámbito por excelencia de las humanidades, y era esa orientación humanística la que se consideraba fundamental en la formación de los futuros cuadros dirigentes del país (y en eso coincidían personajes como Gentile, Sainz Rodríguez o Ibáñez Martín, aunque no Bottai, quien intentó cambiar esos esquemas y potenciar los estudios científico-tecnológicos, aunque eso ocurrió muy al final del *ventennio*). Ambos sistemas universitarios se diseñaron con criterios extraordinariamente elitistas: se trataba de reducir —o al menos contener— el número de estudiantes y, aspecto no secundario, mantener el carácter clasista de la enseñanza superior; la tozuda realidad obligó a cambios en ese sentido, que se dejaron sentir mucho antes en Italia que en España. Finalmente, en ambos sistemas la universidad siguió siendo fundamentalmente de carácter público. En Italia, sin embargo, hubo universidades privadas desde el primer momento (de hecho, algunas ya existían antes de la reforma Gentile), mientras que en España no será hasta principios de los años sesenta que se crearán oficialmente las primeras universidades privadas; antes habían existido centros de estudios universitarios privados (mayo-

⁶² De ahí la importancia que tuvieron el *Consiglio nazionale di ricerca* (CNR) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); véanse, R. Maiocchi, *Gli scienziati del Duce. Il ruolo dei ricercatori e del CNR nella politica autarchica del fascismo*, Roma, 2003; y G. Pasamar Alzuria, «Oligarquías y clientelas en el mundo de la investigación científica: el Consejo Superior en la universidad de posguerra», en Carreras Ares/Ruiz Carnicer (coords.), *La universidad española...*, pp. 305-339.

ritariamente en manos de la Iglesia), pero sus estudiantes debían examinarse en las universidades públicas. En este aspecto concreto, la Iglesia alcanzó antes sus objetivos en Italia que en España; durante todo el *ventennio* funcionó la *Università Cattolica del Sacro Cuore* (en Milán), creada, financiada y controlada completamente por la Iglesia católica. En España, la Iglesia obtuvo importantes concesiones en la LOU, entre otras la de crear sus propias universidades, pero ese derecho no lo pudo ejercer hasta casi veinte años después⁶³.

Por lo que hace al profesorado, hay también notables coincidencias en la forma en que se estructuró la carrera docente. Como se vio, los catedráticos siguieron siendo en ambos países el eje de la actividad académica, y a su alrededor se situaban profesores de diferentes niveles y categorías, generalmente en situaciones laborales y salariales bastante precarias, y que dependían de *su* catedrático para progresar en su carrera profesional. El acceso a la cátedra se realizaba mediante oposición, ante tribunales controlados de manera efectiva por el ministro (más claramente en España, donde nombraba a todos los miembros del tribunal, mientras que en Italia era el *Consiglio superiore della pubblica istruzione* quien hacía la propuesta; en todo caso, hay que recordar que ese *Consiglio* estaba a su vez controlado por el ministro). Por si quedaban dudas de quién manejaba los hilos de los concursos, éstos se celebraban en Madrid y Roma, en otro ejemplo más de la centralización del sistema a la que antes hacía referencia.

Pero es en la cuestión del profesorado donde se da una diferencia importante en la actuación de fascistas y franquistas. En ambos casos se buscó establecer un control ideológico riguroso de los docentes, y así se hizo. Pero, como decía, con una diferencia sustancial: mientras las autoridades franquistas tenían que controlar a profesores ideológicamente afines pues la depuración que se había

⁶³ Frecuentemente se ha resaltado la importante cuota que obtuvo la Iglesia católica en el mundo educativo español como un elemento diferenciador del franquismo respecto de los regímenes fascistas coetáneos. Ciertamente esa cuota fue mayor que la que obtuvo en Italia, pero sin que las diferencias sean en modo alguno sustanciales; buena prueba de ello es la satisfacción con que el Vaticano contempló la práctica totalidad de la legislación educativa italiana; para una discusión de estas cuestiones, véase Morente Valero, «*Libro e moschetto*»..., 110-116, 178 y 196-199.

llevado a cabo había expulsado de la universidad cualquier elemento de disidencia, en Italia el grueso del profesorado de la universidad liberal se mantuvo en su puesto hasta las leyes raciales de 1938, y luego la depuración que se produjo afectó a profesores de prácticamente todo el espectro ideológico. Sin que se deba derivar de lo anterior que en la universidad italiana se respirase un ambiente de libertad —lo que, obviamente, no era el caso—, sí que cabe señalar ese aspecto en el sentido que indica cómo el franquismo pudo *ocupar* la universidad de una manera mucho más efectiva que el fascismo. Una buena prueba de que los propios fascistas italianos eran conscientes de esa situación fue la opción de crear facultades de Ciencia Política (la primera, y principal de todas, en Perugia) como una forma de contar con centros universitarios inequívocamente fascistas, tanto desde el punto de vista del profesorado que los integraba como de las doctrinas que en ellos se impartían⁶⁴. Sin duda, la creación en la Universidad de Madrid de una Facultad de Ciencias Políticas y Económicas cabe situarla en esa línea de actuación inaugurada por los fascistas italianos. En cualquier caso, el empobrecimiento intelectual que supuso tanto la depuración franquista como la purga *racial* italiana (que se producía, no se olvide, después de la pérdida por razones ideológicas de pocos pero reputadísimos profesores) fue de proporciones colosales (aunque, sin duda, mayores en el caso español).

Las coincidencias entre ambos sistemas se reproducen en las cuestiones relativas a los estudiantes. Como en el caso del profesorado, también en España los estudiantes universitarios de la postguerra tenían una mayor homogeneidad ideológica que los de la Italia de, al menos, los años veinte, y el SEU pudo asentarse en la universidad con mayor facilidad y rapidez que los GUF. Pero a medio plazo, la situación en ambos países tendió a hacerse muy similar, tanto en las funciones que cumplían las organizaciones de estudiantes fascistas como en la práctica desaparición de grupos de oposición significativos. En ese sentido, la represión y el control ideológico que ejercían tanto el SEU como los GUF se mostraron realmente eficaces, al menos hasta que las circunstancias empezaron a cambiar como consecuencia de la Guerra Mundial (en Italia)

⁶⁴ Giuntella, *Autonomia e nazionalizzazione...*, cap. III: «La Facoltà fascista di Scienze Politiche di Perugia e la formazione della classe dirigente fascista», pp. 89-107.

o la llegada de nuevas generaciones universitarias en España para las que la guerra civil empezaba a ser un episodio que sólo habían conocido de oídas. Probablemente sea en el campo de las organizaciones estudiantiles donde el mimetismo del franquismo en relación con el fascismo italiano fue mayor. Los GUF vendrían a ser una especie de *hermano mayor* del SEU, y en ese sentido compartieron éxitos y fracasos. Fueron reservas espirituales del fascismo y el nacionalsindicalismo más *puro*, cantera de cuadros para la administración y el partido, expendedores de servicios asistenciales para los estudiantes, animadores de debates intelectuales y, hasta cierto punto, lugares donde se organizaban actividades culturales en las que, sin cuestionar el régimen, podían desarrollarse planteamientos críticos y heterodoxos (probablemente en esta cuestión los *littoriali* fueron más lejos que las actividades organizadas por el SEU). Fracasaron, sin embargo, en su empeño de producir la nueva generación dirigente del régimen (aunque en el caso italiano puede quedar la duda de si no fue una cuestión de falta de tiempo) o en crear una elite universitaria de convencidos fascistas, aunque, como se indicó más arriba, quizás el fracaso deba ser relativizado si lo que se contempla es la creación de una elite académica, profesional y técnica que se sentía muy cómoda con los parámetros del régimen fascista o del régimen franquista.

Francisco Morente Valero
Universitat Autònoma de Barcelona

LOS ESTUDIANTES CATÓLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (1875-1936)

Sumario: 1.—Las primeras manifestaciones. 2.—El centro escolar y mercantil. 3.—La juventud católica española. 4.—La confederación nacional de estudiantes católicos.

Los grupos de pensamiento liberal y progresista han sido en ocasiones, de un modo reduccionista, identificados con la totalidad del alumnado, tal vez porque sus expresiones de inconformismo respondan más claramente a la rebeldía que se presupone en la juventud. Estos grupos, que protagonizaron destacados episodios históricos de pugna contra los poderes oficiales y de defensa de las libertades y los valores de la modernidad, por el carácter visible de sus manifestaciones, han sido los más atendidos, concentrando la atención de los historiadores y estudiosos, especialmente en esos momentos de rebeldía contra la dictadura, la imposición y la censura¹.

Quizás fueran estos estudiantes progresistas los más numerosos en las aulas, pero es difícil responder a esta cuestión numérica. Sin embargo, desde luego, no fueron los únicos. Hubo un sector del alumnado, de número, poder y voluntad más que considerable, que representó y defendió las ideas y las concepciones opuestas. Sin negar diferencias internas entre ellos, ni concederles el monopolio de la fe religiosa que también practicaron muchos otros, nos referimos a este grupo como el de los estudiantes católicos, un término que en ocasiones ellos mismos se asignaron. Sus actividades y comportamien-

¹ Especialmente la FUE valenciana ha sido estudiada por M.^a Fernanda Mancebo en *La universidad de Valencia. De la monarquía a la República*, Valencia, 1994, y en *La universidad de Valencia en guerra. La FUE (1936-39)*, Valencia, 1988. Momentos anteriores han sido estudiados por Daniel Comas Caraballo en *Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia (1900-1922)*, Madrid, 2001.

tos han podido ser revelados fundamentalmente a través del rastreo en la prensa y la comparación de los nombres que en ella salen con los de los expedientes de graduados de la universidad de Valencia.

1. *Las primeras manifestaciones*

La presencia de estos estudiantes católicos, partidarios de la tradición, el conservadurismo y el clericalismo, está presente ya de antiguo en la universidad, aunque en un principio sólo se hace visible en episodios esporádicos. Los encontramos ya en 1878 en los enfrentamientos entre los estudiantes de la atenística Sociedad del Estudio del Derecho, asociación escolar para la ampliación y práctica de las materias aprendidas en la facultad de leyes. En ella las diferencias sobre los límites de la libertad de expresión y sobre la elección de los temas a tratar provocaron sonoros disturbios que acabaron llevando a su disolución.

Pero por lo general los primeros años de la Restauración son escasos en manifestaciones ideológicas, cortadas por el autoritarismo de los gobiernos canovistas. Es a partir de la década de los noventa, tras el proceso de liberalización política cuando culmina con el sufragio universal masculino de 1890, cuando se evidencia la recuperación de un arco de diversidades ideológicas.

De este renacer de la pugna ideológica participarán también los universitarios valencianos, y en él se sitúa un nuevo conflicto escolar que evidencia la existencia de este alumnado conservador. Se dio a raíz de la censura eclesiástica a las obras del catedrático de historia natural de la universidad de Barcelona Odón de Buen, en 1895. Fueron tanto el *Tratado elemental de Geología* como el *Tratado elemental de Zoología* las obras de este darwinista que incluyó en el *Índice* el obispo Català. El prelado barcelonés pidió al gobierno, acudiendo a los compromisos del concordato de 1851 y viejos artículos de la ley Moyano, no solamente que quitase la declaración como obra de texto, sino que eximiese a los alumnos de asistir a sus explicaciones, que no le dejaran participar en tribunal alguno y que se le apartase de su cátedra.

Ante este suceso, los estudiantes valencianos se dividieron entre los defensores de la libertad de cátedra y los detractores de estas enseñanzas darwinistas que atacaban los dogmas de la fe. Un grupo de alumnos de la facultad de medicina dirigió un telegrama de adhe-

sión a Odón de Buen, apoyándole —decían— en nombre de los estudiantes de la universidad de Valencia². Ante ello los católicos reaccionaron, reclamando para sí la representación de la mayoría de los universitarios, enviando por telegrama al ministro su apoyo «contra las manifestaciones de los fanáticos librepensadores de Barcelona» y a los estudiantes católicos de Barcelona su ayuda contra los que «insultando a la religión, a la autoridad y a la verdadera ciencia, dan muestras de fanatismo librepensador».

Por entonces se venía recuperando el espectro de agrupaciones políticas de diversa índole que la llegada del autoritario gobierno canovista había disuelto, y los estudiantes no estuvieron ausentes de esta reconstrucción. De hecho varios de los nombres que destacaron en la lucha contra las enseñanzas de Odón de Buen los encontramos ocupando destacados puestos en las secciones juveniles de estas agrupaciones, especialmente Vicente Calatayud Gil, alicantino de Aspe, alumno de derecho y de filosofía y letras y destacado miembro de la Juventud Carlista³.

Pero por lo general la diferencia entre la existencia de un sector de estudiantes católicos y su articulación en formas organizadas, más o menos estables, se debió a algún apoyo externo. El interés de grupos católicos y de la propia jerarquía eclesiástica en extender su influencia sobre el alumnado universitario, que reunía a los que serían grupos directores en el futuro, puso a disposición del alumnado católico una serie de medios con los que nunca hubiesen soñado los estudiantes liberales, y sustituyó muchas veces la falta de iniciativa de los escolares.

El primero de estos impulsos vino de la mano de las directrices reevangelizadoras de León XIII. El obispo de Roma impulsó durante su pontificado la recuperación de los intereses de la iglesia y de la unidad de los católicos, propiciando la generación de un movimiento neocatólico en España. Su manifestación política vino con la creación de la Unión Católica liderada por Alejandro Pidal y Mon en 1881. La social con la aparición de sociedades católicas como la Academia Científico Literaria de la Juventud Católica⁴, conocida simplemente como la Academia de la Juventud Católica.

² «Valencia», *Las Provincias*, 11 de octubre de 1895, p. 2.

³ «Valencia», *Las Provincias*, 9 y 27 de noviembre de 1897, p. 2.

⁴ *Reglamento de la Academia Científico-literaria de la Juventud Católica de Valencia*, Valencia, 1880.

Esta sociedad, nacida ahora por segunda vez, pues ya había existido brevemente durante el Sexenio, vino a constituirse en Valencia como el paladín del catolicismo en las clases medias, en oposición directa al Ateneo Científico, del que se habían segregado sus miembros por considerar que «en sus sesiones públicas, especialmente en las de la sección de ciencias morales y políticas, se hablaba de todo lo divino y lo humano con marcadísima tendencia revolucionaria»⁵.

A través de la participación en la Academia de la Juventud Católica de destacados profesores de derecho de la universidad, como los hermanos José María y Vicente Gadea Orozco, José Llopis, y Rafael Rodríguez de Cepeda, este centro atrajo a sus salones al sector católico del alumnado. Socios académicos estudiantes de la universidad de Valencia fueron nombres como Antonio Martínez Torrejón, Alfonso Sandoval Bassecourt, Miguel María Cavanillas Armendáriz, Enrique Reig Casanova, Tomás Escalante Tancredi o Vicente Ruiz Caruana y Manuel Oller Celda. Todos estos ejemplos son de estudiantes de leyes, ya que la facultad de derecho aportó la inmensa mayoría del contingente universitario que hemos podido identificar en la Academia. Parece confirmarse así el carácter más tradicionalista con el que se ha identificado a los escolares de leyes, mientras que el progresismo estaría más difundido entre los de medicina.

Sin embargo, pese a algunos intentos fallidos de crear en la Academia actividades para escolares, como un ateneo de alumnos de leyes, una casa-pensión, o una efímera facultad libre asimilada de filosofía y letras⁶, la Academia no era propiamente una socie-

⁵ Teodoro Llorente Falcó, *Memorias de un setentón*, Valencia, 2001, vol. I, p. 86.

⁶ Aprovechando el decreto de libertad de enseñanza que el ministro católico Pidal aprobaba en agosto de 1885, la Academia abría una facultad libre asimilada de filosofía y letras, que llegaba a abrir el periodo de matrícula y a celebrar su apertura el 21 de noviembre. En ella se ofrecían tanto las asignaturas del preparatorio de derecho como la licenciatura de filosofía y letras. Contaba con un plantel de doctores dirigidos por Francisco Caballero Infante, que fuera, y será de nuevo más tarde, secretario de la universidad de Valencia. Sin embargo fue breve la actividad de esta facultad. Monteros Ríos derogó los decretos de creación de centros asimilados, que consideraba como privilegiados y contrarios a la constitución del estado, a principios de febrero del siguiente año.

dad para jóvenes estudiantes. De hecho ni siquiera confiaba en ellos. En ella los escolares estaban siempre sometidos al estricto control de los socios mayores⁷ y a la censura de los representantes de la autoridad eclesiástica, que actuaban como custodios de la ortodoxia en sus reuniones. Por esto nunca cuajó la Academia de la Juventud Católica como centro de reunión de los escolares católicos.

Algo hemos de esperar todavía para ver la aparición de formas de reunión de los estudiantes católicos donde los jóvenes contasen con más protagonismo. Fue a partir de la declaración de Santo Tomás de Aquino como patrón de los estudiantes, en 1883, cuando se comenzaron a organizar las Juntas de Santo Tomás. Eran reuniones de estudiantes que se encargaban de organizar las conmemoraciones del día de este santo, que se celebró por primera vez en Valencia en 1890.

Entre los que pasaron por la primera de estas juntas encontramos nombres como los de Juan Laguarda, más tarde obispo de Barcelona, o Manuel Simó⁸. Después destacaron Pablo Meléndez González⁹ o Vicente Calatayud Gil y Pedro Chiarri Torrente, por ser señalados activistas del tradicionalismo en la ciudad de Valencia. Todos fueron nombres destacados de la comisión de estudiantes que se había enfrentado a los universitarios liberales que defendían a Odón de Buen. Además tanto Vicente Calatayud como Pedro Chiarri fueron importantes miembros del movimiento carlista y presidentes de la agrupación de estudiantes carlistas que se creó en noviembre de 1897 en la sede del Círculo Tradicionalista, con la compañía de otros universitarios como José Simó y Francisco Galán¹⁰. Ésta fue la primera agrupación política exclusivamente de estudiantes que conocemos.

Entre los profesores asiduos a esta celebración de Santo Tomás se encontraban los líderes del catolicismo universitario Rodríguez de Cepeda y los hermanos Gadea, quienes encabezaron en Valencia

⁷ El término «juventud» incluía en los reglamentos de la Academia a socios desde los 15 a los 50 años.

⁸ «La labor de la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia», *Las Provincias*, 10 de marzo de 1933, pp. 13-14.

⁹ «Valencia», *Las Provincias*, 25 de abril de 1896, p. 1.

¹⁰ «Noticias», *El Pueblo*, 25 de noviembre de 1897, p. 2; «Los estudiantes carlistas», *El Pueblo*, 27 de noviembre de 1897, p. 2.

la Congregación de San Luis Gonzaga ¹¹, cuyos miembros escolares eran conocidos en toda España como *los luises*.

Se evidencian de este modo claramente las vinculaciones entre la sociedad de Santo Tomás de Aquino y los sectores más tradicionalistas de la vida política de Valencia. Del mismo modo estaba esta agrupación bastante relacionada con la Academia Científico-Literaria de la Juventud Católica, en cuyos locales celebraron varios de los actos que por el día del patrón organizaban.

La importancia de los actos del día del patrón de los estudiantes como punto de confluencia y conexión entre los escolares católicos no fue exclusiva de la ciudad de Valencia, sino que también en otros distritos universitarios se constituyeron como momentos de reunión del alumnado conservador y creyente. Justamente por ser la más extendida de las concentraciones de escolares católicos, fue elegida esta festividad por el padre Ayala para exponerles, en Madrid, su idea de una Confederación de Estudiantes Católicos de España, en 1920.

2. *El Centro Escolar y Mercantil*

Sin embargo las Juntas de Santo Tomás no evolucionaron hacia formas permanentes de reunión y no llenaron la vacante en la organización de los estudiantes católicos. Algunos estudiantes conservadores continuaron con una activa militancia política, como fueron los casos de Fernando Cuesta Orduña y José Cruz Navarro, militantes de la Juventud Conservadora. Pero eran casos particulares, sin que existiera una organización ya propia de estudiantes católicos.

No surgió la solución a este vacío de los propios escolares. Por el contrario los jóvenes venían organizando asociaciones de estudiantes que pretendían reunirlos a todos por encima de las diferencias ideológicas. No significaba que reinase la concordia y la unidad entre los escolares, pues estas organizaciones, tanto la Unión Escolar como la Federación Nacional Escolar, ya vivieron en sus reuniones y asambleas notables diferencias entre las concepciones de los estudiantes católicos y los liberales.

Nuevamente fue necesario un impulso externo, y los jesuitas, pioneros en el catolicismo de la adopción de medios modernos de

¹¹ Juvenal, «Los Luisitos», *El Pueblo*, 6 de diciembre de 1898, p. 1.

movilización y encuadramiento, vinieron a intentar cubrir ese puesto. De la mano del religioso José Conejos nacía el *Centro Escolar y Mercantil*¹², que fue denominado por sus contrarios, en referencia a su fundador, como *la conejera*. El Centro no se creaba de la nada, sino que surgía dentro de una agrupación católica, la Congregación de la Purificación y la Inmaculada. Altamente elitista en su concepción, estaba en los objetivos de la Congregación dirigirse y reunir, como ella misma declaraba, «a las clases directoras», y efectivamente a sus actividades acudían destacados políticos, nobles, catedráticos, etc., sus esposas e hijos. Para estos congregantes se venían organizando conferencias cuaresmales, conferencias para señoras, retiros espirituales, etc., y con el Centro Escolar y Mercantil venía a crearse una sección en la Congregación destinada a la juventud. No fue, por tanto, una creación simplemente escolar, sino en gran medida otro intento desde el catolicismo de conquistar al alumnado valenciano y mantener la influencia de los jesuitas sobre los escolares del colegio de San José cuando abandonaban este colegio para ingresar en la universidad.

En tiempos en los que el auge anticlerical vivía momentos especialmente destacados en la ciudad de Valencia, con su nacimiento el Centro pretendía constituirse como

[...] el sitio de honesto esparcimiento donde se reúne la juventud sin peligro de ver atacadas sus creencias ni contaminadas sus limpias costumbres; donde se trabaja para robustecer las inteligencias, donde se aprende a luchar por la Iglesia de Jesucristo y por la Patria hasta vencer o morir¹³.

De tal modo, estaba en su finalidad formar

[...] lozana y vigorosa una juventud que será en Valencia la valla ante la que se estrellen las olas revolucionarias, y ojalá un día pudiese ser un dique para España entera.

Con este lenguaje de cruzada, de beligerancia, el Centro debía ser

[...] el crisol donde se funden y fomentan todas las grandes instituciones cristianas y el yunque donde se forjan mártires.

¹² *Labor Social del Centro Escolar y Mercantil*, Valencia, ca. 1914.

¹³ *Labor Social...* p. 25.

«Atacar», «mártires», «revolucionarias» o «morir» eran algunos de los expresivos términos con los que se define la labor que debía tener el Centro. No se pretendía simplemente dotar a los estudiantes de lugares de ocio y medios para mejorar su espíritu, sino que era una obra de evangelización y activismo católico, con espíritu cruzado y contrarrevolucionario.

Aunque su constitución se fecha en 1912, nos consta que ya en 1909 la Congregación inició las actividades para escolares, con su academia de derecho. Junto con los legistas funcionaron las academias de bachilleres, de bellas artes, de taquigrafía, de comercio, de medicina y de filosofía y letras. Seguían ampliándose las actividades del Centro con secciones de fotografía, cinegética, y de fútbol, siendo la primera organización de estudiantes que incluía la práctica deportiva. Con mayor o menor éxito aún se sumarán las secciones de industria, la ciclista, la de gimnasia y esgrima, la de deportes acuáticos, laboratorio de economía social, declamación... y una de las más destacadas academias, la Academia Valencianista, fundada en enero de 1912, que fue la primera reunión de estudiantes valencianistas.

Para todas ellas contaron los estudiantes con unos medios que nunca hubieran soñado las otras sociedades escolares. Los jesuitas pusieron para su servicio amplios locales en la calle Libreros 2 —palacio nobiliario que hoy acoge la bolsa de Valencia— vecina a la vieja universidad, donde dispusieron de biblioteca, laboratorios, clínicas médicas, salas de reunión y de ocio, y acceso a publicar en la revista *Oro de Ley*. No pocos debieron pasar por *la conejera* atraídos por estas instalaciones para el estudio y el divertimento.

Para lograr un mayor éxito en su labor educativa, frente al decepcionante fracaso de la Academia de la Juventud Católica, el Centro decidió sustituir el dirigismo que había caracterizado a aquella por un mayor protagonismo escolar. Se decidieron por un espíritu autodidacta que se reflejase en una notoria autonomía de los jóvenes y de las academias y secciones¹⁴.

En *la conejera* los católicos encontraron el lugar para su encuentro, entraron en contacto y establecieron relaciones. Aparte continuaron con su militancia en varias agrupaciones políticas. En octu-

¹⁴ José Núñez Moreno, «El Centro Escolar y Mercantil», *Oro de Ley*, 4 (1919), pp. 87-88.

bre de 1912 los estudiantes conservadores en vez de participar en la Juventud Conservadora como venía haciéndose, optaron por fundar su propia Juventud Escolar Conservadora¹⁵. También una Juventud Escolar Jaimista se creaba en 1922 en el seno de la Juventud Jaimista, y un Grupo Escolar Legitimista participaba en la fundación de *Germania Valenciana*¹⁶ en 1915 y volverá a aparecer en 1919 en la creación de un frente de estudiantes nacionalistas. Igualmente conocemos la existencia de una Agrupación Escolar Tradicionalista¹⁷ y de las Juventudes Antonianas¹⁸.

3. *La Juventud Católica Española*

La conejera había servido de centro de reunión de los estudiantes católicos de Valencia. Al igual que el Centro Escolar y Mercantil en Valencia, en toda España también existía una serie de organizaciones que pretendían reunir a los jóvenes católicos, ya fuesen las congregaciones marianas como *los luises*, las asociaciones de antiguos alumnos como las de los Salesianos, o las Juventudes Antonianas. Creadas y dirigidas generalmente por religiosos y sacerdotes, eran independientes entre sí, y correspondían a iniciativas separadas y autónomas. Pero estos centros, creaciones particulares y de carácter local, iban a perder su protagonismo frente a los movimientos de reorganización católica que se iban a realizar en el ámbito nacional, encabezados por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

Pioneros en España en la modernización de las formas del catolicismo, los propagandistas aspiraban a introducirlo en la nueva forma de hacer política, la política de masas, que obligaba a reorganizar las estructuras en busca del apoyo de millones de personas. La asunción por la derecha española de esta nueva forma de hacer política dio lugar a una reacción conservadora, especialmente visible en el periodo de entreguerras, dentro de la cual los grupos cató-

¹⁵ «Círculos y Sociedades», *Las Provincias*, 23 de diciembre de 1912, p. 2.

¹⁶ «La asamblea de juventudes valencianas», *Las Provincias*, 11 de mayo de 1915, p. 1.

¹⁷ «Valencia», *Las Provincias*, 7 de noviembre de 1912, p. 2.

¹⁸ «Sociedades», *Las Provincias*, 19 de noviembre de 1917, p. 2.

licos y conservadores crearon nuevas formas de propaganda y de organización ¹⁹.

En esta nueva ofensiva católica, los centros dependientes de congregaciones locales quedaban superados por la idea de lograr la organización de los jóvenes católicos de toda España en una moderna agrupación que los encuadrara y movilizara en defensa de la religión y los valores conservadores, una gran entidad, organizada y jerarquizada, que recogiera a estos jóvenes creyentes dentro del movimiento más amplio de la Acción Católica. De esta pretensión nacería la Juventud Católica Española en 1923.

Fueron bastantes los miembros de estas organizaciones católicas locales que se sumaron a la nueva sociedad nacional, con hombres como el valenciano Luis Campos Górriz ²⁰. Sin embargo, eliminando los casos personales, la relación entre estas agrupaciones —especialmente las congregaciones marianas, entre ellas el Centro Escolar y Mercantil— y el proyecto de la Juventud Católica Española no fueron fáciles, pese a que compartiesen su origen jesuita. De hecho las resistencias de las congregaciones marianas y otras asociaciones juveniles católicas, junto al éxito de la Confederación Española de Estudiantes Católicos sobre los universitarios, influyeron en el retraso con el que nació la Juventud Católica Española en comparación con sus homónimas de otros países.

Por un lado las congregaciones marianas reunían en conjunto un volumen considerable de jóvenes creyentes, por lo que la Juventud Católica las necesitaba para consolidarse. Por otro desde estas congregaciones, sus creadores y directores recelaban de la Juventud Católica Española porque sentían que amenazaba su existencia, y entre ellos el mismo José Conejos. Ésta era la contradicción que se vivía en estas congregaciones, en las que sus dirigentes, por temor a ser absorbidos, rechazaban a la Juventud Católica Española en la

¹⁹ Jesús Ignacio Bueno Madurga, «La reacción conservadora en la España de entreguerras (1917-1936): el caso zaragozano», *Historia social*, 34 (1999), pp. 135-156.

²⁰ Fue Prefecto de la Congregación de la Inmaculada y de San Luis Gonzaga de Valencia, y presidente de la Federación Regional de Estudiantes Católicos. Alcanzaría la secretaría de la Juventud Católica de España, la secretaría general de la Asociación Católica de Propagandistas y del CEU. Murió fusilado en el cementerio de Paterna y fue beatificado por el Papa Juan Pablo II.

que, por otro lado, militaban algunos de sus más destacados miembros.

Sin embargo, más que la Juventud Católica, fue la creación de las asociaciones de escolares católicas la que privó al Centro Escolar y Mercantil de muchas de sus actividades con los estudiantes. Ante la aparición de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, las academias del centro cada vez fueron más escasas y discontinuas, o tomaron una independencia de facto, como fue el caso de la Academia Valencianista. Ésta fue su mutilada vida hasta su desaparición. Los días 10, 11 y 12 de mayo de 1931, en la quema de iglesias y conventos por toda España, fueron asaltados e incendiados numerosos edificios en Valencia, y entre ellos la residencia y el seminario de los jesuitas y el Centro Escolar y Mercantil²¹. Las congregaciones se consideraron comprendidas entre las instituciones que se disolvían en el decreto de 23 de enero de 1932, y se cerraba el declive comenzado por la creación de la Federación Regional de Estudiantes Católicos.

4. *La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos*

Con la llegada de Maura a la jefatura del gobierno, en abril de 1919, se elevó a César Silió a la cartera de instrucción pública. El ministro retomó el objetivo de sacar adelante la tan debatida autonomía universitaria²². En ella Silió guardaba para los estudiantes un reconocimiento oficial y un lugar en el gobierno de las universidades autónomas, incluyendo la participación en la elección de cargos docentes. Así lo recogió también la nueva redacción de los estatutos de la universidad de Valencia²³. Pero en el diseño de la reforma esta participación escolar debía realizarse a través de la organización de los estudiantes en asociaciones. Quien no se organizase quedaría sin voz.

Desde el catolicismo no se pensaba dejar pasar esta oportunidad de entrar en la universidad. Aunque la iglesia había rechazado las

²¹ «Información local», *Las Provincias*, 13 de mayo de 1931, p. 5.

²² La autonomía ha sido detalladamente estudiada para la universidad de Valencia por Daniel Comas Caraballo, *Autonomía...*

²³ «Estatutos de 1921», en Mariano Peset (coord.) *Bulas, constituciones y estatutos de la Universidad de Valencia*, Valencia, 1999, vol. II, pp. 144-184.

libertades en la enseñanza cuando la controlaba, se volvió defensora de éstas cuando el Estado la expulsó de la educación superior pues los proyectos de autonomía universitaria le proporcionan posibles vías de intervención en los centros de los que había sido expulsada. De este modo una de las más destacadas consecuencias de las reformas de Silió en el alumnado fue la aparición de una sociedad que reunía a los estudiantes católicos y que lo hacía a nivel nacional.

La iniciativa de crear una agrupación nacional de estudiantes católicos, de nuevo, no surgió espontáneamente en el alumnado, sino que los primeros impulsos vivieron, otra vez, desde la Asociación Nacional de Propagandistas, a resultas de la propuesta de su fundador, el jesuita Ángel Ayala. La situación creada por Silió fue rápidamente vista por los propagandistas como una oportunidad de encuadrar a los estudiantes en su política. Esta vez no estaban dispuestos a que otros agentes menores y locales protagonizaran la organización de los estudiantes católicos, y mucho menos a que estos escolares fuesen por libre o mezclados con los liberales, como amenazaba la recuperación del asociacionismo escolar de carácter neutro.

Publicado el decreto de Silió en mayo, en septiembre de ese mismo año la asamblea general de los propagandistas decidió dar los pasos para concretar el proyecto de Ayala. Trasladó su propuesta a los estudiantes aprovechando la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, en marzo de 1920, y la publicó en el diario católico *El Debate*.

Desde allí se inició la labor de propagar la idea. El trabajo de difusión fue dejando un rastro de asociaciones de estudiantes católicos tanto en los centros de enseñanza media como en ciudades universitarias²⁴. Sobre la base de las asociaciones se fue extendiendo el movimiento. La *asociación* reunía en cada ciudad a los estudiantes de una misma carrera bajo la dirección de una junta por ellos elegida. Las distintas asociaciones de una zona geográfica se organizaban en *federación*, gobernada por una *junta federal* y un *consejo* que estaba formado por profesores y personalidades destacadas, y un *consiliario* que ejercía la dirección espiritual y la vigilancia moral y doctrinal.

El gobierno nacional correspondía a la *confederación*, que reunía y coordinaba a las federaciones y era su representante ante los

²⁴ «Al margen de los hechos», *Oro de ley*, 5 (1920), p. 205.

poderes públicos. La confederación la dirigía una *junta suprema* elegida anualmente en *asamblea general*, asesorada por un *comité* de antiguos alumnos y un *consejo confederal* que integraba a personalidades destacadas.

Por su parte las mujeres iban segregadas en una paralela confederación femenina, la Federación Nacional Católica Femenina de Estudiantes.

Las cifras son muy ilustrativas²⁵. A fines del curso 20-21 ya había 15 federaciones, con 32 asociaciones que reunían en torno a 3.500 socios. En el siguiente curso llegaron a ser 22 federaciones, con 69 asociaciones, con 14.000 asociados. Para 1923 entre las ciudades universitarias sólo Murcia no había creado su federación, mientras que en Oviedo y Santiago se habían disuelto, en la primera por la oposición de profesorado y en la segunda por falta de implicación de los estudiantes.

Las federaciones se dotaban de *casas del estudiante*, con bibliotecas, y organizaban actividades de formación religiosa, ateneos, certámenes y conferencias. Algunas editaron revistas, como *Liber-tas* en Valencia y hubo además en ámbito nacional un *Boletín de la Confederación de Estudiantes Católicos de España*²⁶.

Las relaciones de esta agrupación con la Juventud Católica tampoco fueron fáciles. En la III Asamblea de la Confederación Española de Estudiantes Católicos, celebrada justamente en Valencia en 1924, la Confederación había dado la bienvenida a la naciente Juventud Católica, dedicándoles uno de sus temas a discutir, «Colaboración de los estudiantes católicos en la organización y vida de la Juventud Católica», del que se encargó el presidente de los estudiantes católicos, Fernando Martín Sánchez. De dicha ponencia se aprobaron las conclusiones que aconsejaban a los estudiantes católicos apuntarse a las juventudes en sus centros parroquiales, y especialmente a aquéllos que acababan sus estudios, pero no se planteó ningún tipo de relación orgánica entre ambas sociedades, y mucho menos ningún tipo de jerarquía. Cada una recorrió un camino propio.

²⁵ Donato Barba Prieto, «La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos: orígenes, primeros pasos y consolidación (1920-1923)», *Espacio, tiempo y forma, serie V, hª contemporánea*, 12 (1999), pp. 117-131.

²⁶ Chiaki Watanabe, *Confesionalidad católica y militancia política: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la Juventud Católica Española 1923-1936*, Madrid, 2003, p. 21.

A partir de entonces Juventud Católica y Estudiantes Católicos funcionaron independientemente, aunque compartieron muchos de sus socios, como el nombrado Luis Campos Górriz, quien, además de pertenecer al CEM, fue presidente de los estudiantes católicos valencianos y ocupó cargos destacadísimos entre los propagandistas, alcanzando en 1935 la secretaría nacional. Como desde las congregaciones marianas, desde la Confederación Española de Estudiantes Católicos se temía la intromisión de la Juventud Católica.

El estudiante de derecho Juan Zugasti Sáenz, becario del colegio mayor Beato Juan de Ribera²⁷, fue el iniciador de la actividad de difusión en Valencia. Así, a lo largo del curso 1919-20, fueron surgiendo las diversas asociaciones. Los primeros fueron los de estudiantes de derecho, ya en diciembre de 1919²⁸.

Estas asociaciones se reunieron en marzo en una Federación de Estudiantes Valencianos, y en su inauguración ya tomó protagonismo Federico Salmón Amorín, de la facultad de derecho, antiguo alumno de los jesuitas y asiduo a los salones del Centro Escolar y Mercantil²⁹. La facultad de medicina se negó a participar inicialmente³⁰.

Continuaron con una reunión de estudiantes de diferentes centros en una asamblea en la que se pretendía fijar las aspiraciones escolares, pero que fue motivo de controversia, especialmente desde el Centro Escolar y Mercantil, tanto sobre la necesidad de la misma como en la legitimidad de los que en ella hablaban³¹. Tal vez al Centro Escolar y Mercantil, que llevaba años siendo el punto de reunión de los estudiantes católicos, le hubiese gustado jugar un papel más

²⁷ Creado en 1913 en la localidad de Burjasot, en el palacio que fuera de este beato, hoy santo, era el Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera una fundación que becaba a los jóvenes católicos. Por el pasaron algunos de los más destacados estudiantes conservadores de Valencia, con nombres como Pedro Laín Entralgo, Vicente Benlloch Montesinos, después catedrático de medicina de Valencia, Marco Merenciano, Juan López Ibor, Rafael Calvo Serer o José Corts Grau, más tarde rector de esta universidad. A través de su director espiritual, el sacerdote Antonio Rodilla Zanón, entraron muchos de estos estudiantes en contacto con Acción Española, y más tarde con el Opus Dei para quien imprimió la primera edición de *Camino*.

²⁸ «Valencia», *Las Provincias*, 3 de diciembre de 1919, p. 2.

²⁹ «Valencia», *Las Provincias*, 5 y 6 de marzo de 1920, p. 2.

³⁰ «Valencia», *Las Provincias*, 7 de marzo de 1920, p. 2.

³¹ «La Federación Valenciana de Estudiantes», *Oro de ley*, 5 (1920), p. 169.

destacado en el movimiento asociativo que se venía desarrollando con la presencia de miembros de sus academias pero aparte de él. Pese a ello acabó apoyando a la Federación.

Otra cuestión empañaba la brillante inauguración de la Federación: la ausencia de los médicos. La labor de Zugasti y de Salomón Amorín no encontró eco en las aulas de la facultad de medicina, y no pudo crearse una asociación en aquel centro. Cuando se fundó en 1903 la Unión Escolar habían sido los estudiantes de derecho los más reacios a participar en aquella sociedad donde dominaban los progresistas. Ahora eran los estudiantes de medicina quienes rechazaban el proyecto de los católicos, siendo su ausencia especialmente visible en los actos fundacionales.

Se evidencia que la creación de las asociaciones católicas no se hizo sin el rechazo de parte del alumnado. Aún eran muchos los que apostaban por el viejo asociacionismo neutro, y algunos de ellos acusaban a los promotores del asociacionismo católico de romper y dividir la comunidad escolar y de ser causantes de una fractura antinatural que separaba a los estudiantes. El portavoz de estas posiciones fue Luis Donderis Tatay, quien denunciaba cómo la división había caído sobre la asociación de estudiantes que, juntos, estaban poniendo en marcha y que la creación de las asociaciones confesionales no era fruto de diferencias entre los estudiantes valencianos, sino de las directrices que emanaron desde Madrid para constituir el movimiento católico escolar:

[...] fue preciso que una indicación venida de Madrid quebrase los lazos que a todos nos unían; ya no era posible desde entonces convivir con nosotros; ya resultábamos incapaces de hacer algo nosotros; sólo los que fueran confesionales católicos, sólo los que tuvieran la indiscreción, indiscreción magna de señalar diferencias entre nosotros, que sólo somos, y es nuestra mayor gloria, dentro de aquella casa, estudiantes por dicha nuestra, sólo ellos regenerarían nuestra Universidad. [...] Una indicación venida de fuera bastó para quebrar amistades, romper lazos, suscitar rencores latentes, cuanto menos.

Pero la postura de los católicos era totalmente la contraria, justificándose en que las diferencias no podían ser negadas³²:

³² Julio Colomer Vidal, «Asociación de Estudiantes Confesional Católica», *Las Provincias*, 19 de noviembre de 1920, p. 2.

[...] una Asociación *neutra*, tal cual se entiende esta palabra, no puede existir, porque siendo hombres los que las forman con opiniones distintas, con ideales diversos, por fuerza, estos ideales y aquellas opiniones se habrían de exteriorizar en cualquiera discusión que afectare a la vida exterior de la entidad, porque un sector de ella, apreciando una orientación distinta a la deseada por el otro, produciría la escisión, y al imponerse la voluntad de la mayoría, desde este mismo instante perdería la Asociación su carácter *neutro*.

Se imponía finalmente la división, y con ello, como apuntaba el catedrático testigo de esta discordia José Deleito y Piñuela, se evidenciaba que «no es posible lograr en pleno siglo XX la unidad ideológica entre los que tienen *la funesta manía de pensar*»³³.

Los católicos y los *neutros* entraron así en un conflicto que se materializó también en una pugna por representar a los estudiantes en la universidad. Los *neutros* intentaban bloquear la instalación de las asociaciones católicas en la universidad aludiendo que no eran académicos sus fines ni escolar la condición que los unía. El conflicto se trasladó así al rector y de éste al claustro universitario, que resolvió ambiguamente³⁴: que todas las asociaciones que buscasen fines universitarios eran válidas, aunque le devolvía al rector la competencia de determinar cuándo se cumplían estas condiciones.

El enfrentamiento que se vivía en Valencia entre los estudiantes católicos y los liberales por la representación de la comunidad estudiantil no era más que un episodio de la pugna que se vivía a nivel nacional y que se manifestó también con motivo del Congreso de la Confederación Internacional de Estudiantes que se iba a celebrar en Praga, donde los católicos, pese a contar con el reconocimiento del gobierno español, no lograron ser aceptados como representantes de los estudiantes frente a la Unión Nacional de Estudiantes de España³⁵. Salmón Amorín estaba entre los legados católicos.

³³ José Deleito y Piñuela, «La vida de la Universidad de Valencia desde 1919 a 1924», *Anales de la Universidad de Valencia*, 4 (1923-24), p. 388

³⁴ «Valencia», *Las Provincias*, 25 de noviembre de 1920, p. 2.

³⁵ M.^a Dolores Ramos, «El informe del Congreso Internacional de Estudiantes de Praga o la huella de la Institución Libre de Enseñanza en Victoria Kent (1921)», *Arenal*, 5 n.º 2 (julio-diciembre 1998), pp. 413-431.

No pudo la confederación de escolares por lo tanto sumarse a la Confederación Internacional de Estudiantes, pero sí que lo hizo a la organización internacional de estudiantes católicos con sede en Friburgo ³⁶.

* * *

Con el advenimiento de la dictadura conservadora los estudiantes católicos disfrutaron de un predominio general, y mayor en Valencia donde no tuvieron asociaciones con las que competir. Esta situación les proporcionó una representación mucho mayor que el alumnado que reunían. Sus actividades y celebraciones hallaron toda la colaboración de los rectores y de muchos de sus catedráticos, celebrándose sin problema en los recintos universitarios y organizando sus congresos nacionales y regionales.

Aparte de en esta asociación, los estudiantes continuaron desarrollando su activismo ideológico en agrupaciones políticas. La llegada de la dictadura corresponde a una notable disminución de las juventudes de partido en la que veníamos localizando a algunos estudiantes, consecuencia lógica del recorte de libertades, pero la caída de Miguel Primo de Rivera dio paso a una recuperación de las noticias sobre agrupaciones de jóvenes correligionarios de varias ideologías.

Hubo estudiantes en la constitución de la Juventud de la Derecha Regional Valenciana, como Ramón Tarazona Puchades, Carlos Fabregat Soler o Alberto Meléndez Boscá, elegido vicesecretario de la primera junta en diciembre de 1930 ³⁷, que había sido miembro de la directiva de los estudiantes católicos en 1924. Como éste, otros de los miembros de la Derecha Regional Valenciana habían pasado por la Federación Regional de Estudiantes Católicos. Así fue el caso también de Diego Sevilla, Juan Bosch Marín, Luis Lucia hijo ³⁸, Joaquín Maldonado Almenar ³⁹ y Luis Campos Górriz, amigo personal de Luis Lucia Lucia.

³⁶ «Telegramas y telefonemas», *Las Provincias*, 15 de mayo de 1923, p. 6.

³⁷ «Juventud de la Derecha Regional Valenciana», *Las Provincias*, 9 de diciembre de 1930, p. 2.

³⁸ Rafael Valls, *La Derecha Regional Valenciana (1930-1936)*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992.

³⁹ Javier Paniagua, José A. Piqueras. (dirs.). *Diccionari...*, pp. 334-335.

Estudiantes hubo también entre un grupo de jóvenes que se organizó en marzo de 1930 en defensa del monarca Alfonso XIII, y que, encabezado por A. Larrea Sanz, el día 12 de noviembre publicaba un llamamiento a la juventud valenciana en apoyo del monarca. Entre los firmantes del manifiesto se encontraba Rafael de Balbín de Luca, alumno de derecho, socio además de la Federación Regional de Estudiantes Católicos y del Centro Escolar y Mercantil. Con él, entre los jóvenes alfonsinos también firmaban Gonzalo Rodríguez Gay, de la facultad de medicina y también afiliado a la sociedad de estudiantes católicos, y Vicente Trénor de Arróspide, de la de filosofía y letras ⁴⁰.

El resultado de este llamamiento fue la creación de la Juventud Monárquica Valenciana, presidida por el estudiante de derecho Rafael Luis Gómez y Carrasco, contando en la junta con Adolfo Rincón de Arellano García, activo estudiante católico y uno de los estudiantes tradicionalistas que habían propuesto recuperar la capa española entre los estudiantes como paso para recuperar el modelo universitario de la vieja Salamanca y de Alcalá, y el alumno de filosofía Claudio Miralles de Imperial Gómez, miembro además de la Academia Valencianista del Centro Escolar y Mercantil y redactor de su revista *Cultura Valenciana* ⁴¹.

Por entonces los estudiantes liberales empezaban a organizarse en la Federación Universitaria Escolar (FUE). La unión de estos escolares no gustó sin duda a sus compañeros católicos, pues amenazaba su monopolio. Los enfrentamientos de la Federación Universitaria Escolar con los católicos no dejaron de crecer desde este momento y las peleas, bastante más allá de luchas verbales, se convirtieron en una visible manifestación de las diferencias y del enfrentamiento existente entre los dos principales grupos ideológicos presentes en el alumnado.

Llegó entonces la caída de la dictadura y de la monarquía, en cuya consecución los estudiantes de la FUE habían jugado un papel notablemente destacado. Su belicosidad había puesto en serias dificultades al régimen, organizando manifestaciones y disturbios contra el dictador, y a ellos se debía en parte la llegada de la República. Por ello, cuando llegó el nuevo sistema político fueron

⁴⁰ «A la juventud valenciana», *Las Provincias*, 12 de marzo de 1930, p. 3.

⁴¹ «Juventud Monárquica Valenciana», *Las Provincias*, 15 de marzo de 1930, p. 5.

recompensados con la oficialidad como representante de los estudiantes.

Mientras, sus compañeros católicos verían empeorar notablemente las ventajosas condiciones de las que habían disfrutado en los años anteriores, y la Agrupación Escolar Tradicionalista no encontraba eco en la universidad⁴². Algunos debieron de dudar incluso de la continuidad de la asociaciones de estudiantes católicos, pues para el siguiente curso, la Federación Regional de Estudiantes Católicos consideró necesario hacer público en la prensa que iba a continuar con sus actividades, llamando a los estudiantes católicos a volver a reunirse en la asociación y celebrando por su cuenta el inicio del curso con una misa en la catedral, expulsadas las ceremonias religiosas de los actos oficiales de la universidad⁴³.

Pero tras meses de tranquilidad por la proclamación republicana y las vacaciones, la dualidad entre la Federación Regional de Estudiantes Católicos y la FUE se iba a manifestar de nuevo. Los actos oficiales de apertura iban a estar presididos por el ministro de instrucción pública Marcelino Domingo, y a ser retransmitidos por radio a España e Hispanoamérica. Cuando el rector Mariano Gómez comenzó a hablar, un grupo de estudiantes desplegó un cartel que decía: «Los estudiantes comunistas piden la socialización de la enseñanza». El cartel fue arrebatado por otros estudiantes, y roto a pedazos, mientras los estudiantes católicos daban vivas a la Inmaculada. Se reemprendían así los enfrentamientos físicos.

El artículo 24 de la constitución, que prohibía la enseñanza por parte de las órdenes religiosas, aumentó el enojo de los estudiantes católicos, que el 19 de octubre lo hicieron público colocando un cartel en la universidad que rezaba: «La inmensa mayoría de los estudiantes de la Universidad protestan enérgicamente contra el monopolio de la enseñanza y acuerdan [en] señal de protesta declarar la huelga por 24 horas». Advirtiéndolo los contrarios la presencia del cartel, lo arrancaron violentamente en medio de la pelea entre estudiantes⁴⁴.

⁴² «Agrupación Escolar Tradicionalista», *Las Provincias*, 22 de enero de 1931, p. 2.

⁴³ «Información local» *Las Provincias*, 11 de octubre de 1931, p. 3; «La apertura de curso de nuestra Universidad, fue presidida por el ministro de Instrucción pública», *Las Provincias*, 13 de octubre de 1931, p. 3-4.

⁴⁴ «Información local», *Las Provincias*, 20 de octubre de 1931, p. 2.

Seguía así la pugna, en la que la asociación de católicos mostró su decisión de seguir trabajando contra el monopolio de la representación estudiantil que ahora disfrutaba la FUE y que había sido confirmada en la orden del 28 de septiembre ⁴⁵ que regulaba la representación escolar en claustros generales y juntas de gobierno. Se lanzaron a la huelga y llegaron a asaltar los locales de la FUE y liberar por la fuerza la imagen de la Purísima de los velos que la mantenían oculta en el paraninfo. Organizaron además una recogida de firmas entre el alumnado, que evidenciaría que el apoyo a los católicos era porcentualmente notable entre el alumnado de las facultades de ciencias y filosofía, algo menor entre los de derecho, y mucho más reducido entre los de medicina ⁴⁶.

Pero la situación cambió notablemente con la mudanza del gobierno. Con la llegada de la derecha al ejecutivo, por fin las quejas de los católicos tenían unos destinatarios que eran receptivos. La intensidad de las relaciones entre las asociaciones de estudiantes católicos y los nuevos gobiernos se evidencia del modo más claro posible con hechos como que Federico Salmón Amorín ⁴⁷, el que fuera en su edad universitaria el más destacado de los escolares católicos valencianos, fue nada menos que designado ministro, primero de la cartera de trabajo, previsión y sanidad en el gobierno de Alejandro Lerroux, y la de justicia, trabajo y sanidad, después, en el presidido por Joaquín Chapapietra y Torregrosa.

Como Salmón Amorín, otros estudiantes de la Federación Regional de Estudiantes Católicos de Valencia habían continuado su activismo más allá de la universidad. Ya hemos visto cómo no pocos de ellos militaron en la Derecha Regional Valenciana, sumándoseles también J. Costa Serrano, Francisco Calatayud, Manuel Attard,

⁴⁵ Orden de 28 de septiembre de 1931, *Colección legislativa de instrucción pública. Año 1931*, Madrid, 1932, pp. 570-571.

⁴⁶ David Jato Miranda, *La rebelión de los estudiantes...*, p. 110.

⁴⁷ Tras su destacada actividad en la federación de los estudiantes católicos, ya licenciado en derecho, este natural de Burriana había logrado la cátedra de derecho público en la universidad de Murcia. Allí continuó su compromiso político desde la dirección del periódico *La Verdad*, y organizó el partido de Acción Popular, obteniendo un escaño por Murcia en 1933. Luego alcanzó la secretaría de la C.E.D.A. Fue fusilado en 1936. Javier Paniagua, José A. Piqueras (dirs.), *Diccionario...*, p. 496.

Pedro Ruiz Tomás o Manuel de Torres⁴⁸. Ahora esta formación formaba parte de la Confederación Regional de Derechas Autónomas, y su creador y dirigente, Luis Lucia Lucia era también elevado a ministro en estos gobiernos, primero de comunicaciones con Lerroux, y de comunicaciones y obras públicas con Chapapietra.

Como consecuencia de estas afinidades y relaciones Filiberto Villalobos, desde la cartera de instrucción pública, atacaba los privilegios de la FUE. El ministro, en el decreto de 26 de octubre de 1934 y la orden de 9 de noviembre⁴⁹, ordenó la supresión de su representación en los claustros⁵⁰, prohibió la celebración de reuniones que no tuvieran una finalidad exclusivamente científica y cerró sus locales situados en los centros de enseñanza.

Casos como los vistos en la Derecha Regional Valenciana, o el de Carlos Fabra de Andrés, miembro de la Derecha Regional Agrícola de Castellón⁵¹, muestran cómo entre los estudiantes continuaban encontrando eco las concepciones conservadoras y católicas. Pero por entonces las ideologías falangistas iban atrayendo a algunos de los estudiantes. Éstos se organizaban en el Sindicato Español Universitario, uno de cuyos principales objetivos era oponerse a la FUE. Coincidían así en el enemigo común con los estudiantes católicos, a quienes aspiraban a arrastrar en su belicosidad, como manifestaba Julio Ruiz de Alda, que incluía entre las consignas a los estudiantes falangistas la de⁵²

Hacer que las Asociaciones Católicas de Estudiantes luchen; no hay que dejarlos tranquilos, pues no se puede consentir que en estos momentos de ansiedad pueda haber neutrales. Los amorfos tienen que ser dirigidos y mandados por los que combaten.

⁴⁸ Rafael Valls, *La Derecha...*, p. 133.

⁴⁹ Orden de 9 de noviembre de 1934. Centros de enseñanza; clausura de los locales de las asociaciones. *Colección legislativa de Instrucción Pública...* 1934, p. 729.

⁵⁰ Orden de 23 de octubre de 1934. Representación escolar en claustros; anulación. *Colección legislativa de Instrucción Pública...* 1934, p. 657-658.

⁵¹ Además había sido en 1932 fundador de la Juventud Católica de Castellón. Miembro de la saga política castellonense de los Fabra, ocupó varios cargos políticos en el franquismo, entre ellos la alcaldía de Castellón, y la presidencia de la diputación.

⁵² David Jato Miranda, *La rebelión...*, pp. 174-176.

Para lograrlo, los falangistas aprovecharon los enfrentamientos en Barcelona entre estudiantes separatistas y españoles que estallaron en enero de 1936 en torno a la cuestión de la autonomía⁵³. La *Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya*, heredera catalana de la FUE, había repartido una panfleto, en catalán, en el que pedía la reposición del patronato universitario catalán⁵⁴. Pronto el SEU intentó ponerse a la cabeza de la defensa de España, anunciando una huelga general «en defensa de la tradicional universidad española» contra los estudiantes catalanes. En Madrid pronto desembocó en enfrentamientos físicos y armados⁵⁵. Los disturbios también llegaron a Valencia, el día 20 de enero, cuando se colgó un cartel contra el separatismo⁵⁶.

La defensa de la hispanidad y la oposición a la FUE situó en el mismo frente a los católicos, los carlistas de la Agrupación Escolar Tradicionalista, y los falangistas, que aprobaron en asamblea participar en la huelga, pero la directiva de la Federación Regional de Estudiantes Católicos se desmarcaba de la radicalización de la actuación de los falangistas, condenando públicamente los medios violentos de algunos huelguistas del SEU⁵⁷.

Se entraba así en el año 1936. El Frente Popular se imponía en las elecciones y llegaba el alzamiento militar.

Germán Perales Birlanga
Universidad de Valencia

⁵³ «Información nacional», *Las Provincias*, 10 de enero de 1936, p. 2.

⁵⁴ David Jato Miranda, *La rebelión...*, pp. 268-277.

⁵⁵ «Inquietudes universitarias», *Las Provincias*, 18 de enero de 1936.

⁵⁶ «Información local» y «Disturbios escolares», *Las Provincias*, 21 de enero de 1936, pp. 2 y 6.

⁵⁷ «El conflicto escolar», *Las Provincias*, 25 de enero de 1936, p. 14; «La protesta de los estudiantes» y «El conflicto estudiantil», *Las Provincias*, 24 de enero de 1936, pp. 2 y 10.

DE LA HISTORIA A LA MEMORIA

A PROPÓSITO DE UNA RECIENTE OBRA DE HISTORIA UNIVERSITARIA ¹

Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal es el título de la miscelánea que aquí nos interesa ². Recoge trabajos presentados en el séptimo congreso de historia de las universidades hispánicas, publicados en la colección de monografías del Instituto Antonio de Nebrija (Universidad Carlos III de Madrid): una y otra circunstancia representan la encomiable continuidad con que ese Instituto cultiva, a beneficio colectivo, la historia de la educación superior en España. El colega Manuel A. Bermejo, últimamente ocupado por la suerte de alguna disciplina jurídica (me refiero al Derecho Procesal) actúa como responsable de la presente edición ³.

Bermejo reconoce con honestidad (p. 11) que el encuentro y el mismo Instituto son productos del «fertilísimo magisterio de Mariano Peset», un apreciado historiador del derecho y de la ciencia activo en la Universidad de Valencia, quien ahora deja la cátedra. A los hermanos José L. y Mariano Peset, en efecto, corresponde todo el mérito de haber «descubierto» la universidad liberal como campo dispuesto a la elaboración historiográfica; el segundo ha emprendi-

¹ Proyecto de investigación SEJ 204-01919JURI (Biodroit), Ministerio español de Educación y Ciencia.

² Autores Varios, *Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal* (ed. Manuel Á. Bermejo). VII Congreso internacional sobre historia de las universidades hispánicas. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad (= Biblioteca, 13), 2004. 750 pp. («Índice» de contribuciones en pp. 7-9).

³ ¿Debemos culpar entonces al amigo Bermejo de la lamentable falta de índices? ¿Cuándo nos acostumbraremos a rematar como se debe un libro científico? Y entiendo que la práctica contraria a los índices (¡uno onomástico, al menos!), seguida generalmente entre nosotros, constituye en sí un elocuente testimonio —por desgracia, negativo— acerca de la tradición universitaria española.

do además una ingente obra personal que permite, varias décadas después de sus primeras aportaciones, avanzar por el camino desbrozado. Cuantos hemos tenido ocasión de frecuentarlo conocemos lo mucho debido a Mariano Peset y la utilidad de sus estudios sobre los más variados aspectos de la historia universitaria de España. Labor pionera, donde ha sido inevitable que prime la descripción sobre la interpretación —nunca se echa de menos, desde luego, el cruce de los avatares institucionales con la historia política— pero ahora, a la vista del libro que comentamos, se comprueba que los métodos expeditivos del maestro se transmiten sin más a sus seguidores. Tal vez haya llegado el momento de seguir la senda del maestro con un cuestionario de investigación algo más complejo.

Al margen de críticas conviene destacar que el coloquio científico del que trae causa el libro (celebrado en noviembre de 2000) presenta, en conjunto, resultados sobresalientes. No es poca la utilidad del libro desde el punto de vista bibliográfico⁴; tampoco me resulta menor su valor como panorámica que da cuenta de variadas disciplinas, con estupendas síntesis para la Medicina o la Economía. Ahora bien, para quienes pensamos que la *historia* del Derecho debe ser una especialidad muerta y enterrada, una dignísima dedicación intelectual que, con todo, no encuentra justificación como materia de curso obligatorio salvo que sea convertida en *memoria* de saberes y prácticas jurídicas, la publicación de una miscelánea que reserva a la facultad de Derecho una presencia central, encierra múltiples enseñanzas que siempre saludaremos con calor.

Por fortuna, el caso del Derecho no es un protagonismo exclusivo: tenemos aquí las mencionadas Medicina (José M. López Piñero) y Economía (Pedro Fraile), la Filosofía (Antonio Jiménez), la Literatura (Jean-Louis Guereña), la Historia de la Filosofía (Laureano Robles), la Matemática (Livia Giacardi, Clara Silvia Roero), la Historia (Ilaria Porciani y Mauro Moretti), las carreras industriales (José Manuel Cano). Y adelante que, en mi opinión, los propósitos

⁴ Sin duda lo más preciso se debe a Laureano Robles, «Manuales de «Historia de la Filosofía» en España (s. XIX)», 601-628; cf. también, Antonio Jiménez García, «La enseñanza de la Filosofía en la universidad decimonónica (asignaturas y textos oficiales)», 301-327. Pero la mejor combinación entre acopio de manuales y seguimiento del desarrollo académico de la disciplina se encontrará en Jean-Louis Guereña, «Los manuales de literatura en la facultad de Filosofía (1846-1867)», 477-497.

del congreso (analizar los manuales de formación para universitarios) se han cumplido mejor en relación con varias de esas especialidades (me resulta excelente la aportación de López Piñero) que no respecto del Derecho: nuestros colegas juristas han aportado intervenciones a veces demasiado largas (Gallego Anabitarte), otras, demasiado desenfocadas (López y Gómez-Salvago) o bien específicas y reiterativas⁵ y por tanto incapaces de ofrecer una imagen de conjunto. Tampoco la consiente un par de ponencias o comunicaciones de asunto general (las bibliotecas universitarias, por Genaro L. García López)⁶, sin duda aprovechables (manuales jurídicos declarados «útiles», por Manuel Martínez Neira). Tal vez se quiso y no se pudo contar con contribuciones sobre Farmacia y Ciencias, dos de las facultades tradicionales (a pesar de Bermejo, p. 15); tampoco hubiera parecido superfluo ocuparse de la Veterinaria a título de ejemplo de enseñanza profesional (más los estudios mercantiles, la maestría de obras, la náutica), pero, sobre todo, cubrir el caso excéntrico de la Teología hubiera revestido una importancia particular: el análisis de su declinante presencia en las universidades del Estado habría deparado páginas del mayor interés para comprender los logros y los límites del programa educativo liberal.

Si dejamos aparte la Teología, cuya exclusión en el congreso más parece fruto de una larga historia que simple y explicable olvido, en los casos últimamente citados el entusiasmo y la planificación de los convocantes ha chocado sin duda con las posibilidades y el arrojo de los convocados, lo que se traduce en la presencia algo excén-

⁵ Aparecen tres aportaciones sobre el derecho natural y de gentes, pero ¿por qué no vemos nada sobre —v. gr.— el derecho penal?

⁶ Aparte algún desliz («bibliotecas departamentales», p. 432; en la página siguiente se califica a Adolfo G. Posada, forzando demasiado sus atribuciones primeras como catedrático, de «insigne administrativista»), la introducción de este trabajo es superflua, en tanto el resto deja abierta una futura, deseable investigación sobre la materia, con recurso a fuentes aún por explotar (no fueron excepcionales las estadísticas de libros y lectores en las memorias anuales de los secretarios generales; tampoco faltó la edición de catálogos impresos, más el río de documentos sobre libros que hoy conservan los archivos universitarios). Además, la biblioteca, la biblioteconomía y la bibliografía científica son argumentos que preocuparon en su día, con la producción consiguiente de textos (por ejemplo, del «administrativista» Posada) que no han sido ahora leídos.

trica —según la orientación general del encuentro— de trabajos de corte y de nación diversos. Tampoco ha sido un acierto limitar la presencia de colegas extranjeros a Italia, México y Argentina, por más que ciertos campos del saber (así, la Historia o la Matemática), decisivos como pocos —esta vez, en positivo— para configurar el radio de actividades de la universidad liberal, sólo sean abordados al hilo de tales intervenciones⁷. Un diseño ideal hubiera llevado a disponer de informes territoriales, siempre generales, que permitieran por comparación y contraste dar respuesta a muchos interrogantes. Determinar qué significa un libro de texto en la universidad de Humboldt, por ejemplo, serviría para encarar mejor la práctica española en materia de manuales. Tampoco hubiera resultado superfluo puntualizar la fortuna americana de algunos «grandes» textos nacionales, o perseguir la traducción de libros formativos (otra vez hay que destacar la excelente intervención de López Piñero en relación a la Medicina) como plataforma adecuada para desencadenar procesos de «recepción» científica en España.

La aportación de mayor enjundia, por páginas y contenidos, es el estudio sobre las disciplinas de derecho público de Alfredo Gallego; tantas páginas (83-234), que han podido con facilidad replicarse a modo de libro independiente⁸. El despliegue de datos y capítulos —demasiado farragosa, en mi opinión, la estructura sistemática adoptada⁹— contrasta con la simplicidad de las tesis de fondo, a

⁷ Entre sí muy diversas: la síntesis de Mauro Moretti e Ilaria Porciani (593-600) cubre sobradamente las expectativas, e incluye una guía bibliográfica que permite conocer los avatares de la disciplina histórica en la universidad italiana. Frente a esta aproximación general, para Matemáticas contamos con trabajos excesivamente especializados relativos a Turín, centrados en ciertas fuentes y figuras relevantes (Corrado Segre, 449-476).

⁸ Alfredo Gallego Anabitarte, *Formación y enseñanza del derecho público en España (1769-2000)*. *Un ensayo crítico*, Madrid, Marcial Pons, 2002, 388 pp. El cotejo sumario de libro y ponencia arroja la identidad sustancial de los contenidos, con una notable diferencia, a favor del primero, en el número y texto de las notas. Por lo demás, las previas aportaciones de este autor sobre la asignatura del Derecho Político, inevitablemente presentes ahora, son bien conocidas: cf. ponencia, p. 83-84, n. 1.

⁹ Hay siete grandes epígrafes numerados, correspondientes a los capítulos del libro; por abajo aparecen apartados identificados con las minúsculas del alfabeto (latino), que se subdividen a veces en párrafos numerados sin mención de subepígrafe. Pero algún epígrafe/capítulo («3. Intento

saber: (i) en España se carece hasta hoy de una Teoría del Derecho Público; (ii) tuvo en ello mucho que ver el no tan viejo Derecho Político, amalgama indigesta de saberes sociales reacios a cualquier construcción dogmática; (iii) la razón se encuentra en la inexistencia de un Estado dotado de medios y desarrollo (p. 99: «apenas había Estado»; cf. p. 111: «Estado enteco»), de manera que (iv) nadie se ocupó seriamente de construir su teoría jurídica¹⁰. Así llevado del empeño por explicar un hueco, la ausencia de teoría estatal, en vez de ocuparse de un hallazgo, el derecho político... ¿a la española?, el autor atribuye a la inestabilidad política nacional la culpa por una ciencia deficiente.

Desde luego, ni España fue Alemania ni los Oliván, Gómez de la Serna y Posada tuvieron mucho en común con Gerber, Otto Mayer o Paul Laband. Me pregunto, sin embargo, si forzosamente tenían que tenerlo. Observo en las páginas de Gallego —tan meritorias y meticulosas al poner en pie el complicado panorama de planes

de explicar la ausencia de un saber jurídico estatal unitario, Teoría jurídica del Estado, en España. Crisis de Estado y planes de estudios», p. 97) adopta una división superior con mayúsculas y subepígrafes, dentro de los que se abren los identificados con la minúscula (sin perjuicio de la eventual fragmentación inferior según párrafos numerados); con cierta frecuencia los capítulos son «excursos complejos» (cf. pp. 106 ss.; también pp. 159 ss., donde la carta de Cádiz, 1812, cierra una exposición abierta en 1841 con Ortiz de Zúñiga, contra el método cronológico que parecía seguirse) que, además de arrastrar una misma cuestión por varios nudos de la obra, interrumpen el curso natural de la lectura. Sin duda el caso más llamativo en este sentido tiene que ver con la detenida crítica (pp. 87-97) a la controvertida sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000, sobre negociación de determinadas subidas salariales para los funcionarios, todo un «paradigma de la ausencia de un análisis jurídico estatal».

¹⁰ Gallego menciona expresamente, como explicación del contenido doble y pobre del derecho público en España (un «Derecho Político» teórico-político filosófico más un «Derecho Administrativo» legalista), la determinación del legislador universitario, autor de planes de estudio que consagraron esa postración (p. 104). Que la justificación tiene algo de espejismo es reconocido de inmediato por nuestro autor (pues «los planes de estudio... serían un reflejo de esa crisis de Estado y sociedad que he señalado como fundamento del Derecho público español», p. 105), de manera que seguimos en la órbita de las tesis destacadas en texto.

y asignaturas iuspublicísticas— juicios demasiado rápidos¹¹, comparaciones algo aventuradas¹², en fin, afirmaciones carentes de base bibliográfica¹³... y parece fácil construir sobre esa base un claro reproche global. Sobre todo, veo aquí un encomiable, aunque fallido, intento de hacer obra histórica sin mucho recurso a la historiografía; crítica de fondo, que merece un comentario más reposado.

En efecto. El lamento por la ausencia de una ciencia publicística española frente al poderoso caso alemán desconoce que la cultura del siglo XIX engendró dos modelos diferentes de jurisprudencia, si se quiere: dos *tipos ideales* de «jurista perfecto» presentes con

¹¹ Así, las diputaciones provinciales gaditanas serían «prepotentes», en tanto la milicia nacional una fuente de «desorden» (p. 99); el orden llegaría con Narváez (*ibíd.*). Me parece claro que Gallego comparte a estas alturas con el vetusto *Espadón* granadino una determinada valoración de la Constitución gaditana, a lo que nada hay que objetar, si no fuera porque la *ideología* del segundo se presenta como *historiografía* en el caso del primero.

¹² Me pregunto si es útil enfrentar a Vicente Santamaría de Paredes y Maurice Hauriou, como propone Gallego en p. 101. Y llegado el momento de comparar, sin duda encerraría enseñanzas para España el próximo caso italiano, además rigurosamente reconstruido: Pietro Costa, *Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986. También, Mauricio Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento*, I-II, *ibid.* 2001.

¹³ «Ningún comentario mereció la Constitución de 1845», anuncia con rotundidad Gallego en aquella página desafortunada (p. 99). El alarmante anuncio olvida momentáneamente la obra de Juan Miguel de los Ríos, «Doctor y catedrático de término de jurisprudencia en las universidades de Madrid y Salamanca», *Derecho político general, español y europeo*, I-III, Madrid, Imprenta de Ignacio Boix, calle de Carretas n.º 8, 1845-1846, a vueltas con la carta de 1837 mas abierta también a la novedad constitucional de 1845, sobrevénida a este autor (cf. tomo III, pp. 47 ss.); en el mismo caso, Antolín Esperón, *Derecho político constitucional de España*, por... Doctor en jurisprudencia, Abogado del Ilustre Colegio de esta Corte. Catedrático de Instituto de Segunda Enseñanza, Madrid, Imprenta de D. José M. Alonso, 1854, que me resulta, exactamente, una exégesis de la constitución de 1845. Son títulos que Gallego conoce perfectamente (cf. p. 192, n. 89, para De los Ríos; p. 194, n. 90, para Esperón), por lo que sólo cabe especular sobre el alcance que, en su opinión, encerraría la expresión «comentario» aplicada a la carta moderada.

diversa incidencia en cualquier parte de Europa ¹⁴. Por una parte encontramos la que cabría denominar *posibilidad savignyana* de ejercer como jurista. Según esta primera orientación, el Derecho sería aquel saber científico —por ende *universal*— que, gracias a las revistas y a un programa de inexorable ejecución (lo que dio en llamarse el «método jurídico»), presupone la existencia de una comunidad intelectual jerarquizada según el principio de autoridad, dotada de ritos profesionales y, al menos en principio, territorialmente ilimitada ¹⁵.

Por otra parte tenemos a especialistas de la pasta de Javier de Burgos o, aún mejor —pues con él no dejaremos el terreno de los textos docentes de derecho político— de Joaquín Francisco Pacheco: un gran letrado y político conservador, conocido por sus brillantes discursos y autor de obras impresas... que, en rigor, jamás fueron escritas ¹⁶. Pacheco es una muestra del que pudiéramos llamar *modelo oratorio o forense* de entender el Derecho, un conoci-

¹⁴ Cf. Carlos Petit, *Discurso sobre el discurso. Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España liberal*, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000; últimamente, «Der Jurist als Redner. Das Bild des Juristen im Spanien des 19. Jahrhunderts», en Reiner Schulze (Hrg.), *Rechtssymbolik und Wertevermittlung*, Berlin, Duncker & Humblot, 2004, 141-148.

¹⁵ Cf. el paso siguiente de la *Pandektenvorlesung* de Savigny (curso 1824-1825), en versión de Cristina Vano (vid. «*Il nostro autentico Gaio*». *Strategie della Scuola Storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000, pp. 26-27): «il diritto consuetudinario, così come esistette allora a Roma, non può più comparire presso di noi.... Nei tempi più recenti, in luogo di un diritto consuetudinario è subentrata l'opinione dei giuristi; la comunicazione delle teorie giuridiche è qui il legame comune, e si forma qui sul piano scientifico un nuovo specifico organo del diritto consuetudinario... Una nuova teoria, che venga riconosciuta come vera altrettanto generalmente della precedente, otterrà certamente anche vigenza, e un diritto non abrogabile in questo modo non può formarsi».

¹⁶ Me refiero a sus conocidas *Lecciones* de derecho penal (1839-1840) y de derecho político (1844-1845) pronunciadas en el Ateneo madrileño, transcritas y publicadas posteriormente. La mejor biografía del autor se debe a Francisco Tomás y Valiente en su estudio preliminar a las citadas *Lecciones de derecho político*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, vii-lv.

miento ahora más cercano a la tradicional *civilis sapientia* que a la emergente *Rechtswissenschaft*. El palacio de justicia y la tribuna parlamentaria serían sus ámbitos naturales; para los juristas de este modelo la cátedra y los libros resultaban, como mucho, actividad secundaria, dependiente de prestaciones profesionales que eran ante todo orales, formalizadas gracias a una pujante literatura¹⁷. Dentro de tal contexto, el afán periodístico del abogado liberal —un auténtico *hombre público* que concedía con su elocuencia valor y calor al texto muerto de las leyes— respondió a la cercanía existente entre la reposada actividad forense y el trabajo frenético del diarista: pues los periódicos eran el ágora donde resonaba el verbo de los nuevos tribunales. Así se explica la vocación jurídica (con «crónica de tribunales» y «crónica parlamentaria», más los comentarios respectivos) de la prensa dicha «política», nunca demasiado apartada de las revistas y obras especializadas.

Ahora bien, sería equivocado reprochar a los Pacheco y compañía (una cohorte de notables nombres europeos: los Berryer, Favre, Dupin... en Francia; los Mancini, Amore, Brofferio... en Italia; los Cortina, Pérez Hernández, Aparisi... en España) sus cortos logros científicos o la exigüidad de su producción jurídica, cuando estos grandes oradores, desinteresados por la posible naturaleza científica del Derecho en la que tanto insistían sus colegas germánicos, simplemente estuvieron al servicio de la causa colectiva y de la defensa de concretos patrocinados¹⁸. Las perplejidades del citado Savigny,

¹⁷ Limitándome al caso español, Fernando Corradi, *Lecciones sobre oratoria...* (1843), Madrid, Eduardo Mengíbar, ²1882; Fernando de León y Olarieta, *Consideraciones filosóficas sobre la elocuencia forense...* Valencia, Impta. de El Valenciano, 1862; Joaquín María López, *Lecciones de elocuencia en general, de elocuencia forense, de elocuencia parlamentaria y de improvisación*, I-II, Madrid, Impta. que fue de la Sociedad de Operarios, ahora de D. M. Gabeirós, 1849-1850; Emilio Reus Bahamonde, *La oratoria. Estudio crítico...* Madrid, Medina, ca. 1880; Pedro Sainz de Andino, *Elementos de elocuencia forense* (1827), Madrid, Impta. de la Sociedad de Operarios del mismo Atret, ⁴1847; Ramón Sauri y Lleopart, *Elocuencia forense*, Barcelona, Herederos Vda. de Pla, 1847; Enrique Ucelay, *Estudios críticos de oratoria forense. El foro y su elocuencia en Francia...* Madrid, Impta. de la Revista de Legislación, 1880; del mismo, *Estudios sobre el foro moderno...* Madrid, Vda. de J.M. Pérez, 1883.

¹⁸ Tampoco es diferente el panorama visible al otro lado del Atlántico, cuando menos para la primera mitad del siglo XIX: cf. Robert A. Fer-

sorprendido con las cosas que vio en las aulas napolitanas, nos ofrecen una muestra de ciertas incomprensiones pasadas... que aún las-tran el esfuerzo de los historiadores¹⁹.

De compartirse la anterior interpretación, además de tratar como se merecen a determinados autores usados por Gallego²⁰, concluiremos que la teoría del derecho estatal fue uno de los muchos productos «naturales» del citado modelo *científico*, faltando en consecuencia allí donde cuajó y se mantuvo un entendimiento *forense* de la profesión. Ciertamente es que el *mito de la universidad alemana*²¹, en tanto eficaz propaganda de un sistema formativo adornado de coherencia inapelable, triunfó por toda Europa a fines del Ochocientos²²,

gusson, *Law and Letters in American Culture*, Cambridge (Mass.) —London, Harvard University Press, 1984.

¹⁹ Cf. Aldo Mazzacane, «Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento», en A. Mazzacane e Cristina Vano (curs.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, Jovene, 1994, 77-113, en especial pp. 87 ss.

²⁰ Sin ir más lejos, llama la atención su admiración (negativa), expresada mediante signos de tal naturaleza, sobre la condición de «poeta dramaturgo» de Félix Enciso Castrillón, traductor español (1838) de Louis Antoine Macarel (cf. p. 154). Mas ¿recuerda Gallego que el mismísimo Javier de Burgos, fundador del derecho administrativo, en su día fue conocido ante todo como traductor de Horacio en metro castellano? ¿Y no publicó una versión de la epístola *Ad Pisones* el ministro y magistrado José Castro y Orozco, famoso marqués de Gerona? ¿Tan pronto hemos olvidado los prólogos eruditos del codificador Manuel Alonso Martínez a textos de Virgilio? Los ejemplos podrían multiplicarse (uno más: sobre el mencionado Pacheco, cf. Antonio Serrano, «Lectura romántica de la constitución de Inglaterra», en Andrea Romano (cur.), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800*, Milano, Giuffrè, 1998, 325-374). Y es que la poesía, en especial la latina, fue lectura profesional del jurista: fuente de modelos oratorios, disciplina del pensamiento y escuela de apropiación de textos... Lo que explicaría, además, la insistencia con que los planes de estudio liberales exigían cursos de latín y literatura a los estudiantes de Derecho.

²¹ Cf. Claudio Bonvecchio (ed.), *El mito de la universidad* (1980), trad. María E. Aguirre Lora, México, Siglo XXI — UNAM, 1991.

²² Para el caso de la educación jurídica española, entre otros muchos ejemplos que compone y al tiempo ofrece toda una nueva generación de catedráticos, cf. Manuel Torres Campos, «Fin y organización de las universidades,» en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* 103 (1903),

generando entonces procesos de «recepción» de doctrinas y nuevos modos de hacer universitario: en nuestro caso, sólo a partir de los años Ochenta de ese siglo tuvieron las universidades atribuida «la investigación científica, sin oponer obstáculos, bajo ningún concepto, al libre, entero y tranquilo desarrollo del estudio» (circular del ministro Albareda, 3 de marzo, 1881)²³, pero todo indica que, antes de tales fechas, el jurista-orador careció de competidores como protagonista de la tradición no-dogmática que daba sentido en España al denostado derecho político.

Y sin embargo, la vigencia del mismo modelo forense en Francia e Italia nos llevaría a indagar las razones de la rápida conversión de, por ejemplo, un Vittorio Emanuele Orlando al alemán «método jurídico», mientras que en España, desde una similar situación cultural, la germanización se retrasó —cuando menos— hasta la generación siguiente²⁴. Acaso la respuesta pase por recorrer, de una

252-264, memoria presentada ante la asamblea universitaria reunida con motivo del cuarto centenario de la Universidad de Valencia, p. 263: «entre los sistemas de organización universitaria, debe darse la preferencia al alemán, por ser éste el sistema que guarda una relación más estrecha con el fin de la universidad.»

²³ Con esa nueva concepción que albergaba objetivos también nuevos, las medidas legales de Instrucción Pública declinaron por fin el adjetivo *científico* y los añosos *discursos* de grado cedieron el paso a nuestras modernas *tesis*: «Las tesis doctorales en todas las facultades serán de libre elección por el candidato, y versarán sobre puntos de investigación científica» (real decreto de 22 de noviembre, 1883, art. 11); «los ejercicios del grado de doctor en la Facultad de Derecho consistirán en la presentación de un discurso escrito ó impreso sobre una tesis jurídica de libre elección por el graduando, quien leerá su trabajo ante un Tribunal compuesto por cinco Jueces, y contestará las observaciones que á continuación se le dirijan por aquellos» (r.d. de 16 de enero, 1884, art. 10); «el Doctorado se dirige á formar hombres capaces de fecundar por sí mismos y de hacer progresar, ya en la elevada tarea del Magisterio, ya en sus producciones literarias, la ciencia á que se dedican» (r.d. de 14 de agosto, 1884, exposición).

²⁴ Por supuesto, el fenómeno no tuvo idéntico *tempo* en todas las ramas del saber: cf. pp. 343 ss. (López Piñero) sobre la germanización de la Medicina a partir del Sexenio, con la figura señera de Rafael Ariza, formado en el Berlín de Virchow y llamado a ejercer enseñanzas de Histología en la Escuela libre de Medicina de Sevilla, creación del notable médico —también constituyente de 1869— Federico Rubio.

parte, los derroteros profesionales de los universitarios pensionados por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907) y, de otra, por determinar los efectos de la súbita italianización sufrida por el jurista académico español —con el posible derivado de una inclinación intelectual y una biblioteca de referencia poco favorables a Alemania²⁵.

Sea como se quiera, el flujo de nacionales formados en la lectura de los grandes publicistas alemanes siguió un curso ascendente a lo largo del primer tercio del siglo XX, para producir frutos apreciables y conocidos bajo la experiencia intensa de la Segunda República. Por eso me resulta llamativo que Gallego, a despecho de su generosa cronología, nada nos diga ahora sobre aquella *Revista de Derecho Público* (1932-1936) que abandonó por unos años la terminología perturbadora, o que silencie su opinión en relación a la obra dogmática y al credo constitucional de los tres catedráticos del momento republicano: Eduardo Lloréns, Francisco Ayala, Nicolás Pérez Serrano — más colegas kelsenianos procedentes del campo de la filosofía jurídica (Luis Legaz y Lacambra). Paradójicamente, el desinterés de Gallego por aquel momento constituyente²⁶ —con su inevitable, a veces excelente, doctrina jurídica— impide a los lectores penetrar en un ámbito que parece en principio muy favorable para el contraste de las tesis de partida.

Sin llegar nunca a olvidarlas Gallego lanza y acaricia repetidamente otra tesis que merece diferente comentario, pues afecta a los

²⁵ Cf. Carlos Petit, «Qualcosa che somiglia all'ammirazione —Ecos de la Civilística italiana en España», a publicarse en el *Anuario de Derecho Civil*.

²⁶ Sólo localizo fugaces alusiones (p. 222, n. 107; p. 232) que, en puridad, diluyen bajo la sombra deformante de la Restauración toda la experiencia de la II República. Y sin embargo, la República, por obra de Fernando de los Ríos (catedrático de Político, como es sabido) en su paso por el ministerio de Instrucción Pública, gestó una ley universitaria con importantes novedades para el caso del derecho público que, aunque como tal fracasada, inspiró el plan de la Universidad Autónoma de Barcelona: cf. Antonio Molero Pintado, *La reforma educativa de la Segunda República Española. Primer bienio*, Madrid, Santillana, 1977, pp. 370 ss., pp. 452 ss. con las bases del plan de Derecho; también Albert Ribas i Massana, *La Universitat Autònoma de Barcelona (1933-1939)*, Barcelona, Ed. 62, 1976, sin conocer las obvias dependencias de la organización docente de aquella primera *Autònoma* respecto del proyecto de Fernando de los Ríos.

orígenes intelectuales de su propia disciplina. Me refiero a la conexión genética entre la *policía* y la *administración*, un argumento de peso que nuestro autor expresa como sigue: «lo administrativo de hoy era antes el gobierno político y económico que estaba atribuido a determinadas personas públicas y a sus miembros. La Ciencia de la policía en España era el gobierno político y económico del siglo XVIII, que en la primera mitad del siglo XIX se llamará Administración» (p. 119, con el énfasis derivado del empleo de cursivas). A este punto se dedica todo un «excurso» (pp. 106 ss.), que no agota las posibles referencias (cf. también pp. 145-148; p. 172; pp. 174-175; p. 181). Gallego tampoco disimula la sorpresa: «quien esto escribe no podía imaginarse —pese a haber dedicado mucho tiempo, con anterioridad, al estudio de estas cuestiones— la gran cantidad de relaciones, conexiones y matices que existían entre la Policía, la Economía, el gobierno político y económico, y el Derecho público administrativo» (p. 113; cf. p. 181, de nuevo con expresión de una «sorpresa, incluso para el autor del presente estudio»). Y con encomiable honestidad, una vez repuesto del susto causado por su descubrimiento, se repasan los textos de la ciencia de policía (pp. 113-148), mejor: los tratados sobre el gobierno político y económico²⁷ que son, al fin y a la postre, el antecedente directo de los «fundadores» posteriores: los Burgos, Oliván, Posada Herrera y demás compañía. «En España se pasó del Gobierno político y económico a la Administración» (p. 148), proclama en efecto Gallego, lo que debemos entender —creo— antes como comunidad de fondo de ideas y estrategias políticas (cf. pp. 159 ss.) que no como una simple evolución de la terminología²⁸.

El impecable enfoque adoptado no excluye que nos sirva aquí como un oportuno ejemplo de aquel laborioso cultivo de la historia sin uso adecuado de la historiografía al que antes hice alusión. Gallego maneja una lista de fuentes y una bibliografía secundaria

²⁷ Tal sería la versión castiza de aquel término (cf. por ejemplo p. 121), que, como los materiales del propio congreso nos indican, no faltó, por otra parte, en la España ilustrada (cf. p. 550: «orden y Policía» bajo la dominación romana, en el lenguaje de Joseph Olmeda, 1777).

²⁸ Cf. p. 163, donde Gallego cruza sagazmente la Instrucción para los subdelegados de Fomento de Javier de Burgos (1833) con las Instrucciones para corregidores de 1749 y 1788. En el mismo sentido, justamente subrayando continuidades, también p. 182.

tan largas como, en lo sustancial, lacunosas: pues faltan los títulos que mejor comulgarían con su propia orientación. Si el recentísimo, sugerente manual de António M. Hespanha no estaba aún disponible en razón de la fecha²⁹, hubiera bastado consultar la *Storia del diritto amministrativo* de los colegas Luca Mannori y Bernardo Sordi (2001), donde el paso de la ciencia de policía al derecho administrativo es un nervio principal de la exposición³⁰. Incluso en lo tocante a sus capítulos españoles —en este caso gracias a páginas, no muy modernas ni tampoco muy ocultas, de Benjamín González Alonso— la obra de Mannori y Sordi contiene informaciones que, como mínimo, hubiesen disipado las sorpresas insistentes de Gallego³¹.

No pretendo cruzar ahora reproches acerca de preferencias bibliográficas, sino reparar en el caso extraordinario —quiere decirse, raro y excelente— de un reputado experto en derecho administrativo empeñado en conocer la tradición de la disciplina, para reflexionar, en primer lugar, sobre el espacio profesional que toca al jurista historiador en medio de sus colegas de facultad, al tiempo que se trata también, en segundo lugar, de llevar hasta sus últimas consecuencias las conexiones intelectuales (del *gobierno civil y económico* a la *administración*) que han sido tan felizmente establecidas.

Si comenzamos por lo último, la relación proclamada entre la ciencia de la policía y el derecho administrativo pasa necesariamente por identificar la matriz institucional del Estado *policial*, a beneficio de la mejor comprensión de la posterior lógica *administrativa*. El citado Mannori, en un trabajo de merecida fortuna³², ha

²⁹ António M. Hespanha, *Guiando a mão invisível, Direitos, Estado e Lei no liberalismo monárquico português*, Coimbra, Almedina, 2004, desde su mismo prólogo (pp. 6-7; cf. también pp. 52 ss.).

³⁰ Merece la pena recordar otro título rotundo: Bernardo Sordi, «Della scienza di polizia al diritto amministrativo. Spunti per l'interpretazione di due itinerari paralleli: Francia e Prusia», en Aldo Mazzacane (ed.), *Il linguaggio delle istituzioni*, Napoli, Cuen, 2001, 35-57.

³¹ L. Mannori — B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001; cf. p. 144, n. 80, con cita de Benjamín González Alonso, «Las raíces ilustradas del ideario administrativo del moderantismo español», en AA.VV., *De la Ilustración al liberalismo*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, 159-196.

³² Me refiero al largo ensayo «Per una «preistoria» della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età

divulgado la clave principal: más allá de la clásica *iurisprudencia* —esto es, al margen de la reflexión tradicional en torno al «gobierno civil y político» que preconizó la quietud del soberano y su intervención justiciera *ex post* cuando alguna emergencia o desvío alteraba el orden natural de las cosas— el nuevo «gobierno activo» asumido por el príncipe ilustrado y sus comisarios encontró su mejor modelo en las facultades domésticas (*oikonomía* en su exacto sentido) correspondientes al *paterfamilias*. En efecto, al *pater* tocaba cuidar por el bienestar de la casa mediante la ejecución de un amplio catálogo de actividades tendentes al acopio de los bienes materiales necesarios para satisfacer las necesidades de sus habitantes, pero le correspondía también ejercer amplias funciones de mando y dirección —el ejercicio de la potestad económica— sin estrépito de juicio ni mezcla de intervenciones jurisdiccionales. Llegados al siglo XVIII, los discursos paralelos de la *justicia* y de la *economía* confluyeron por fin bajo la forma del gobierno doble, civil o político y doméstico o económico, propio de la Ilustración: nunca como entonces estuvo justificada la figura de un monarca *padre y señor* de vasallos.

No nos interesa avanzar mucho más en esta historia apasionante³³. Es suficiente recordar que la matriz doméstica de la Administración en el Estado liberal, a través de la vía dicha «sorprendente» de la *ciencia de policía*, trasvasó al joven derecho administrativo principios y modos de actuar característicos de la vieja potestad

del tardo diritto comune», en *Quaderni fiorentini* 19 (1990), 323-504, en particular pp. 415 ss. Igualmente, con toda rotundidad desde su mismo título, Daniela Frigo, «*Disciplina rei familiariae*: a *Economia* como modelo administrativo de *Ancien Régime*», en *Penélope. Fazer e desfazer a história* 6 (1991), 47-62.

³³ Que encontraría en la política de Carlos III un ejemplo muy cercano: del interés por la reforma urbanística de Madrid, ejerciendo las competencias paternas del diseño y cura de la casa familiar, a la producción agrícola (la famosa ley Agraria), las actividades industriales (reales compañías y fábricas) o el fomento de la población (nuevas poblaciones de Andalucía, misiones en California). Cf. Carlos Petit, «Signos financieros y cosas mercantiles, o los descubiertos de la Ilustración cambiaria», en Vito Piergiovanni (ed.), *The Growth of the Bank as Institution and the Development of Money Business Law*, Berlin, Duncker & Humblot, 1993, 225-310, con atención preferente a las actividades comerciales del rey/padre banquero (fundación del Banco «nacional» de San Carlos).

paterna —sin olvidar por supuesto la identidad de los últimos fines (cf. p. 174: «el telos de la Ciencia de la Policía del siglo XVIII es el mismo que el de la Administración en el siglo XIX: la prosperidad y la felicidad del Reino y de los hombres») que habían de alcanzarse con tales medios y modos: un «orden y mando» del *pater* transformado en el terrible *solve et repete* o en la presunción de legalidad de los actos administrativos, sin olvidar que la vieja separación de *jurisdictio* y *potestas oeconomica* estaría situada tras la difícil relación de los administradores con los jueces.

Si se acepta el recorrido propuesto —coherente además con la posición «continuista», a mi entender muy acertada, que desde hace años defiende Gallego³⁴— podemos abordar la segunda cuestión antes lanzada, referida a la posición del historiador del Derecho en el seno de una facultad jurídica «ideal» donde sus colegas, expertos en la ciencia del derecho positivo, tuvieran sin embargo la curiosidad de conocer los hitos principales de su propio saber o disciplina. Ya he anunciado mi profunda convicción. A salvo el mejor parecer de otros colegas de especialidad³⁵, tengo para mí que la razón mejor que hoy justifica la presencia de la historia jurídica en los estudios universitarios se encuentra en el cultivo y desarrollo de la llamada

³⁴ Y es que el siglo de la Administración y del derecho administrativo no tan sólo fue «moderno»: cf. en general, aun sin el necesario capítulo jurídico, Arno J. Mayer, *The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War*, New York, Pantheon Books, 1981 (existe trad. española: Madrid, Alianza, 1984). Sobre esta resistente y excelente interpretación, ahora Gabriella Santoncini, «La persistenza dell'Antico regime nella *Old Europe* di Arno J. Mayer», en *Giornale di Storia Costituzionale* 7 (2004), 33-47.

³⁵ Hace poco ha tenido lugar en Suiza, gracias a los esfuerzos de Michele Luminati, un encuentro de iushistoriadores europeos para abordar la cuestión de las llamadas disciplinas fundamentales en facultades de Derecho sacudidas por continuas novedades (cf. *Alter Wein in neuen Schläuchen? — Juristische Grundlagenfächer und europäische Studienreformen*, Luzern, 16-18 de octubre, 2004). Ha sido siempre un argumento recurrente, del sur al norte de Europa: Paolo Grossi (cur.), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive. Atti del incontro di studio Firenze 6-7 novembre*, Milano, Giuffrè, 1993; Pio Caroni — Gerhard Dilcher (hrsg.), *Norm und Tradition. Welche Geschichtlichkeit für die Rechtsgeschichte?*, Köln etc., Böhlau, 1998; Kjöleke Mødeer (ed.), *Rätthistoria i förändring. Olinska stiftelsen 50 År*; Lund (Suecia), Olin Stifelsen, 2002.

memoria del jurista, expresión comprometida que entiendo, provisionalmente, como la *tradición «disciplinar»* del Derecho y de los que socialmente se identifican como sus expertos. Se trataría, entonces, de trazar la genealogía de los saberes jurídicos, comenzando por la ardua cuestión de su división en grandes ramas distintas, dotadas de ritos (tesis, oposiciones, escuelas) y «arquetipos» profesionales (programas, grandes textos, doctrinas, maestros...) pacíficamente aceptados por quienes los cultivan; en este sentido, no sería el Derecho —presente o pasado— el principal objeto de observación, sino todo aquello que, a propósito del Derecho, han podido decir y escribir personas insertas en ciertas instituciones (tribunales, universidades, parlamentos) encargadas de la producción de textos reputados jurídicos: en otros términos, habría que averiguar qué hace que tengamos por especializados (escritos, discursos, personas) a los que, cumplidos ciertos requisitos, así se consideran. Son ejercicios de «observación de segundo grado»³⁶, y ahora comprendo lo que tenía en la cabeza Marc Bloch cuando afirmó que «l'histoire du droit... pourrait bien n'avoir d'existence séparée que comme l'histoire des juristes»³⁷. En el fondo, la de las Universidades —que tan bien cultiva el Instituto Antonio de Nebrija— y el asunto del encuentro situado en el origen de este libro son dos excelentes muestras del propósito descrito.

³⁶ Es la propuesta general de Antonio Serrano, «La rata en el laberinto o la Historia como observatorio jurídico», en *Anuario de Historia del Derecho Español* 62 (1992), 675-713.

³⁷ Cf. *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien* (1944), Paris, Armand Colin, 1974, p. 125. Merece la pena la reproducción del párrafo completo, con énfasis donde más nos toca: «Pourtant, il y a bien, dans la notion du fait juridique comme distincte des autres, quelque chose d'exact. C'est qu'au moins dans beaucoup de sociétés, l'application et, dans une large mesure, l'élaboration même des règles de droit ont été l'oeuvre propre d'un group d'hommes relativement spécialisé et, dans ce rôle (que ses membres pouvaient, cela va de soi, combiner avec d'autres fonctions sociales), suffisamment autonome pour posséder ses traditions propres et, souvent, jusqu'à la pratique d'une méthode de raisonnement particulière. L'histoire du droit, en somme, pourrait bien n'avoir d'existence séparée que comme l'histoire des juristes: ce qui n'est pas, pour une branche d'une science des hommes, une si mauvaise façon d'exister. Entendue en ce sens, elle jette sur des phénomènes très divers, mais soumis à une action humaine commune, des lueurs, dans leur champ nécessairement limité, très révélatrices

A mitad de camino entre la sociología de las profesiones y cuerpos, la historia del pensamiento jurídico y la más convencional historia del derecho, la *memoria jurídica* aquí propuesta dispone de resultados que avalan su interés³⁸. Cuenta también con los expertos más sensibles a su propia *memoria*: escritos como el de Gallego prueban la fertilidad de un terreno abierto a la más estrecha colaboración. Ahora bien, el trabajo en común comienza con el intercambio fluido de informaciones, hallazgos, puntos de vista; en otras palabras, exige el establecimiento de un lugar de encuentro que permita cruzar los objetivos del jurista dogmático —el colega que quiere conocer, así en este caso, las razones de la falta de desarrollo de una teoría general del derecho público en España— y del jurista historiador volcado en la reconstrucción de una disciplina: este debe aportarle las lecturas que circulan por los circuitos de su menos accesible campo o la experiencia —suya propia— de la labor en archivos donde se custodiaria el *dossier* de una cátedra, el programa de lecciones de un opositor o el dictamen del Consejo de Instrucción dando el visto bueno a una permuta de plazas.

No faltan precedentes —por fortuna productivos todavía— de tales plataformas para el encuentro: auténticas palestras intelectuales donde se sigue a rajatabla la consigna del «diálogo entre juristas» de toda ciencia, especialidad y condición³⁹. Contemplado desde

ces».

³⁸ De nuevo es justo reconocer la obra de Pietro Costa (cf. de este autor, «Saperi, discipline, disciplinamento: verso una «nuova» storia della cultura giuridica?», en *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Macerata* 2 [1989: *Storia del diritto e teoria politica*], 993-1027) y de Maurizio Fioravanti sobre el derecho público en Italia y, en general, las muchas y excelentes aportaciones de la escuela de 'pensiero giuridico' de Paolo Grossi (Mario Sbriccoli para el derecho penal, los citados Mannori y Sordi para el derecho administrativo, Paolo Cappellini y Giovanni Cazzetta para el derecho civil, Stefano Mannoni para el derecho internacional...) Yo he hecho cuanto he podido con la Comparatística: cf. «Lambert en la *Tour Eiffel* o el derecho comparado de la *belle époque*», en Antonio Padoa — Schioppa (ed.), *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, Istituto Lombardo, 2001, 53-98.

³⁹ Cf. Clara Álvarez/Pablo F. Albaladejo (eds.), *Stile fiorentino. Venticinco años de los «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno»*, Madrid, UAM Ediciones, 2000. Sin equiparación posible al órgano festejado, aunque con el potencial derivado de una buena intención, recuerdo también la *Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science*

la perspectiva española convendría adoptar el utilísimo precedente pero, aun en su defecto, la ausencia de comunicación entre «dogmáticos» e «historiadores» tan visible en el ensayo de Gallego acaso se supere mediante el expediente de intercambiar unos y otros sus cauces habituales de publicación. Si hay que recuperar la *memoria* del Derecho, entonces el historiador podría acudir al órgano periódico del dogmático y presentar desde allí los resultados de su esfuerzo, de la misma manera que el colega versado en una materia positiva se asomaría a la revista histórica para reclamar de unos nuevos lectores la atención merecida. Al fin y al cabo, las revistas siempre han funcionado como un apreciable instrumento que hace posible la comunicación y la crítica exigida por el método de la ciencia.

Por desgracia, la diligencia de los unos en publicar no satisface sin más el deber profesional de los otros de leer. Algo de ello hay en la segunda gran ponencia del libro comentado, relativa al Derecho Civil (y Mercantil), de Ángel López y su discípula Cecilia Gómez-Salvago.

No encuentro en ella ninguna tesis ni argumento *ad probandum* equivalente a los lanzados por Gallego. Se parte aquí de «el par funcional constitución-código como eje conductor de la enseñanza del derecho» (y todavía: «como manifestación normativa de la ideología liberal», p. 236), aunque enseguida se advierte de «las paradojas de su diacronía». A salvo la denunciada diferencia de ritmos —tal vez hubiera debido entonces de imponer cautelas— el crítico no vería inconvenientes en operar con tal «eje conductor», siempre y cuando se detuvieran los autores en analizar los conceptos que dicen «vertebradores». Mas no lo hacen en ninguna parte⁴⁰, limitándose en la ponencia a trazar una suerte de *vulgata* sobre la codificación civil que se superpone a, y prácticamente desplaza, la consideración de los planes de estudio universitarios; filtra además el acceso a los manuales: es drástica la reducción de títulos considerados (nada vemos aquí sobre Modesto Falcón o Domingo de Morató) —aun-

juridique (en publicación desde 1984, con otro, cercano título).

⁴⁰ De operar con la perspectiva comparada que el asunto reclama no veo fácil engarzar sin más codificación con constitución (pensemos en el código prusiano; y podrían invocarse otros ejemplos), entendida la segunda, según veo implícitamente en la ponencia, en su sentido puramente formal. Tal vez convenga no confundir las respectivas historias, ni acompañarlas; la autonomía historiográfica de ambas es la mejor manera —falsa

que la recensión de los *Elementos...* de Gómez de la Serna y Montalbán, en sus varias ediciones, se encuentre entre lo mejor de la ponencia (cf. pp. 264 ss., pp. 273 ss.)⁴¹. Por eso, si el lector de estas páginas solicitase una valoración preliminar, debo confesarle que el intento no ha prosperado.

Tras una introducción dispensable (me resulta comprometido entrar tan de pasada en el concepto y alcance de lo *liberal*) López y Gómez-Salvago proceden de la mano de Federico de Castro⁴²: según se recordará, este eximio civilista dejó inacabado un sólido tratado, abierto con una recreación histórica⁴³ que marca todavía la *memoria* profesional de la especialidad. Al menos ha marcado a nuestros autores, que siguen a De Castro con fidelidad inquebrantable —añadidas unas pocas referencias bibliográficas (los Tomás y Valiente, Peset, Clavero, Martínez Neira), por otra parte no siempre actualizadas⁴⁴. Así se arrastran las limitaciones del original⁴⁵ aumentadas con errores o *errata* de propia cosecha⁴⁶.

paradoja— de cruzar carta política y código civil cuando se requiera.

⁴¹ Pero podría destacarse, pues interesa para la comprensión, si no de la materia civilística, al menos de los planes universitarios y del grado de especialización de los autores liberales, el maridaje didáctico, tan «benthamista», del derecho civil y del derecho penal producido en los *Elementos*. En esa misma línea, la labor infatigable de Pedro Gómez de la Serna en la producción de manuales de casi todas las materias serviría, en hipótesis, para mejor apreciar méritos y fracasos en el tratamiento didáctico del derecho civil.

⁴² Desde el comienzo (p. 237, n. 3) al final (p. 262, n. 59), limitándome sólo a citas expresas; pero se toma y sigue todo el planteamiento.

⁴³ Cf. *Derecho Civil de España*, I (1949), rep. facs. Madrid, Civitas, 1984, pp. 176 ss. sobre «La codificación del derecho civil».

⁴⁴ Tal vez el caso más llamativo se observa en relación a Mariano Peset, de quien se citan trabajos sobre la enseñanza del derecho pero se omite su conocido ensayo sobre el proyecto de Código de 1821, materia abordada por los autores: cf. p. 252. Con todo, es caso generalizado (así, de Tomás y Valiente vale el *Manual* pero no la miscelánea —mucho más pertinente— sobre *Constituciones y Códigos*, etc.).

⁴⁵ En contra de lo que afirman los autores (p. 256), el guipuzcoano Pablo Gorosábel no produjo ningún «primer» proyecto de código civil (¿no sería además *segundo*, tras el verdadero, incompleto proyecto de 1821, que aquí fugazmente se cita?); lo afirmaba De Castro, I, p. 189, n. 5 (y ya antes José M.^a Antequera, *La Codificación moderna en España*, Madrid 1886,

Tomemos un ejemplo cualquiera. Ya que manuales y planes se aluden, y a veces describen, al hilo de la transformación normativa⁴⁷, el lector esperarí­a una consideración del originalí­sim­o pro-

p. 46: se tocaba por entonces el código con la punta de los dedos y probablemente convení­a improvisar la cadena de sus precedentes); la obra de Gorosábel era, en realidad, una sintética exposición del derecho vigente — continuamente invocado en el aparato de notas— enunciada mediante artículos ordenados según la ley napoleónica. Exactamente lo que anunciaba el título: una *Redacción del Código civil de España, esparcido en los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta nación. Escrita bajo el método de los códigos modernos*, Tolosa, Vda. de la Lama, 1832. Abrió paso a otra obra que los civilistas parecen desconocer: Pablo de Gorosábel, *Examen de los principios del derecho civil español*, I-III, Tolosa, Juan Ignacio de Mendizábal, 1834; este segundo título prueba, por si no bastara la *Redacción*, la ausencia en Gorosábel de empeño codificadorio.

⁴⁶ Una nueva recurrencia de Gorosábel en la ponencia de López—Gómez Salvago (p. 259) presenta la citada *Redacción* como *Instituciones de Derecho Civil español redactadas en forma de Código*, título que no corresponde a la primera edición mencionada (1832) ni tampoco a la segunda (*Código civil de España. Redactado con las disposiciones vigentes de los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de este reino publicadas hasta el año de 1845 inclusive...* Tolosa, Vda. de Mendizábal, 1846). Se cuentan más ejemplos: cf. p. 247 sobre los «aragoneses» Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel (cf. De Castro I, p. 172, quien correctamente menciona al «letrado aragonés» Asso y al «castellano» De Manuel; más precisamente, Miguel de Manuel y Rodríguez [1741-1798] fue andaluz, natural de Sanlúcar de Barrameda). En el capítulo de erratas se cuenta también Velanga por Verlanga (p. 254, n. 39) y *Foral* por *Penal* en título recurrente de Gómez de la Serna y Montalbán (p. 277), error infeliz por el contexto de aparición; finalmente, los *Estudios* de Benito Gutiérrez se dicen edición publicada «al final de la década de 1850, viendo la luz en 1875-1878 la última» (p. 260), pero más adelante (p. 281) se da la fecha (correcta) de 1862 para el primer tomo de esa obra. No se trata ahora de hacer una investigación bibliográfica, pero es suficiente consultar los catálogos *on-line* de la Biblioteca Nacional para dar con una «tercera» edición (o ¿quinta?) de Madrid, Vda. e Hijas de A. Peñuelas, datada en 1877-1889; la primera edición es de 1862-1874 (Madrid, Impta. de F. Sánchez; es la reproducida en Valladolid, Lex Nova, 1988).

⁴⁷ Por eso no extrañará que la información sobre planes de estudio sea algo imprecisa, a través de los trabajos de Mariano Peset. La fuente es irreprochable, pero creo que el cometido de los autores obligaba a considerar la cuestión más de cerca. En efecto, desde mediados del siglo XIX la asignatura de Derecho Civil nunca tuvo la posición nuclear —visible en los

yecto de código de 1821 —un intento que quiso ser, a mi entender bastante más que «una cierta modernización legislativa» (cf. pp. 252-253, con extensa cita de De Castro)— en relación a la fracasada reforma de los estudios diseñada en el Trienio: aun con la precariedad de esos tiempos y de nuestras fuentes, no es difícil encontrar *manuales* que compartieron doctrina con aquel insólito texto⁴⁸. El proyecto en cuestión nos demuestra además que fue posible otra forma de codificar; una codificación radicalmente *diversa* —por ende, una diferente concepción del mismo derecho civil— en relación al poderoso modelo francés. Por su compromiso constitucional, por el ámbito material de una regulación positiva interesada también en la administración y sus oficiales, en fin, por influjos utilitaristas e indiscutible protagonismo parlamentario el código soñado por las Cortes del Trienio quiso pero no llegó a ser el desarrollo natural de la carta gaditana⁴⁹.

cuatro años y en las cátedras dotadas— que hoy día aún conocemos: desde mediados de siglo, existieron dos cursos de nombre oscilante, los mismos que para el Derecho Político y Administrativo, el Penal y los Procedimientos. Paradójicamente, la entrada en vigor del Código jugó contra su enseñanza, al ser suprimida (en 1900) la cátedra de «Instituciones de Derecho Privado de los pueblos antiguos y modernos» dotada para el doctorado en la facultad de Madrid. Sólo muy avanzado el siglo XX lograron los civilistas la consideración de materia de docencia práctica para el Civil y, sobre todo, un tercer curso «de conjunto» (Plan de 1928), luego aumentado con despliegue de contenidos en la inmediata postguerra (plan de 1944). Cf. Carlos Petit, «El Código inexistente, ii. Por una arqueología de la Civilística española», en *Anuario de Derecho Civil* 49 (1996), 1415-1450.

⁴⁸ Proyecto de 1821 (ed. Juan Fco. Lasso Gaite, *Crónica de la codificación española*, IV-ii, Madrid, Ministerio de Justicia, ca. 1982), art. 42 («Es propiedad: 1.º, el derecho de aprovecharse y disponer libremente del producto del trabajo personal...»), en relación a Ramón Salas, *Lecciones de derecho público constitucional* (1821), ed. J.L. Bermejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, lección xi, p. 81 («la propiedad consiste en la facultad... de disponer de nuestro trabajo ó del producto de nuestro trabajo»). Por lo demás, entiendo perturbadora la simultánea referencia en la ponencia a la obra de Juan Sala y al proyecto de 1821 (cf. p. 251), pues, siendo dos mundos por cultura jurídica, un lector apresurado aplicaría al segundo doctrinas tomadas del primero.

⁴⁹ «El Código civil», proclama el discurso preliminar del proyecto (ed. Lasso Gaite cit. p. 16), «no es otra cosa que el desenvolvimiento de los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16 y 17 de la Constitución». En toda su rotunda

Si el fruto tardío de la codificación española fue *napoleónico*, estrictamente *privado* y obra de una *comisión del gobierno* mal avenida con el parlamento tendremos otra suerte de encaje del *código* en la *constitución*, desde luego⁵⁰, pero aquí conviene resaltar que tal fruto fue, además, el precipitado de una larga historia —iniciada en la segunda etapa absolutista de Fernando VII— que tuvo en el proyecto de código civil de 1836 su documento principal: aunque López y Gómez-Salvago enfatizan el famoso intento de 1851 (cf. p. 258, donde ese texto se introduce como «lo que debió representar el cambio... fundamental en nuestra historia jurídica»; cf. también p. pp. 260, 276), el *afrancesamiento* de la empresa codificadora comenzó mucho antes — para no alterarse en lo sucesivo⁵¹.

Publicado el proyecto del '36 por Lasso Gaité hacia 1982 no pudo tenerse en cuenta, claro está, por De Castro, autor antes de esa fecha; pero la excusa temporal no aprovechará a nuestros ponentes. Y me parece una carencia de difícil justificación, cuando la historia de la Civilística española se ha mezclado —sin necesidad alguna, creo yo— con la historia de la legislación civil en España. En efecto, la década de los Treinta conoció la transformación «liberal» del Estado, también en la materia universitaria que nos interesa; es tentador pensar que la nueva regulación de enseñanzas propuesta en 1836 (Duque de Rivas), sobre todo: las soluciones estables del plan de 1845 (Pidal) filtraron en los estudios —a despecho de la situación caótica de un ordenamiento en gran medida por codificar— aquel

simplicidad, nunca volverá a decirse por España una cosa semejante.

⁵⁰ Una constitución de poderes estatales que no trata jurídicamente de la *sociedad*, cuya regulación se deja al código civil: es la receta del llamado Estado liberal de Derecho, sobre lo que cabe consultar la útil exposición de Maurizio Fioravanti, «Lo Stato di diritto come forma di Stato. Notazioni perliminare sulla tradizione europeo-continentale» (1995), ahora en *La scienza del diritto pubblico* cit. II, 855-869, con expresas referencias a la codificación.

⁵¹ Cf. Bartolomé Clavero, «Ley del código: transplantes y rechazos constitucionales por España y por América», en *Quaderni fiorentini* 23 (1994), 81-194, pp. 96 ss., pp. 104 ss. Por dar a cada uno lo suyo, fue mérito de J. Michael Scholz, en sus contribuciones al *Handbuch* de Helmut Coing, destacar la importancia del desconocido texto de 1836, obra de comisión regia (real decreto de 29 de enero, 1834) formada por José Ayuso,

horizonte de cultura jurídica anclado en el precedente francés que las comisiones técnicas y las obras civilísticas publicadas⁵² nos testimonian. Observadas las transformaciones del derecho español desde el mundo universitario que nos toca de cerca, la fragmentación de asignaturas y la especialización lenta de las cátedras impuso un orden de saberes que dio forma nueva a los viejos contenidos⁵³; además, aún antes de algunas leyes modernizadoras (justamente enfatizan los autores la ley hipotecaria de 1861: pp. 262 ss., 278 ss.), la jurisprudencia de casación —otro invento de los años Treinta— se encargaría del resto⁵⁴.

Sería muy interesante tomarse en serio la estrategia de López y Gómez-Salvago y leer de una vez por todas los proyectos frustrados y las grandes leyes... con la mirada puesta en planes y textos universitarios. Desde esa perspectiva —la más adecuada para una historia de disciplinas que utilizaría el análisis de discursos como herramienta principal— no habría grandes diferencias entre un texto «codificado» bajo la especie de *manual* y otro formalmente enunciado como *ley*: figuras recurrentes y ubicuas, y así el mencionado Pedro Gómez de la Serna, vendrían a legitimar con su compleja biografía un acercamiento de tal género. Mas los ponentes arriman manuales y leyes —según simples coincidencias de cronología— desde la base de la *sub-ordenación* de los primeros respecto

Eugenio de Tapia y Tomás M.^a Vizmanos.

⁵² A los escritos de Gorosábel habría que añadir algún otro «código» que tampoco es proyecto (José M.^a Fernández de la Hoz, *Código civil, redactado con arreglo a la legislación vigente*, Madrid, Eusebio Aguado, 1843) y la exitosa traducción (a cargo de F. Verlanga Huerta y J. Muñoz Miranda: 1843, 1845, 1847, 1852) de las *Concordancias* de Antoine de Saint-Joseph.

⁵³ Así, faltando código y aún proyecto (me refiero al decisivo proyecto de 1851) las disposiciones del plan de 1845 estableciendo —por ejemplo— en el quinto año de Jurisprudencia las enseñanzas de «Códigos civiles españoles», «Código de comercio», «Materia criminal» y «Derecho político y administrativo» (art. 18, real decreto de 17 de septiembre) contribuían sin duda a delimitar «civilmente» los contenidos «universales» de los *códigos españoles* en discutido vigor.

⁵⁴ Es muy interesante comprobar el peso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la enseñanza cotidiana del derecho civil, según compruebo en Fernando de León y Olarieta, *Metodología de la ciencia del derecho, seguida del programa de Ampliación de Derecho civil y Códigos españoles, y de unos apuntes bibliográficos sobre esta asignatura*, Valencia,

de las segundas, esto es: con la pacífica aceptación de la *sub-ordinación* de la doctrina a la pura legalidad.

Yo creo que esas tácitas preferencias, ese «sentido común» civilístico cuya vigencia para el siglo XIX sería precisamente el mejor objeto de un estudio «mnemográfico», lastra una página importante sobre los dos mayores tratados del período considerado. Me refiero a los *Códigos o Estudios* de Benito Gutiérrez, un manual de «Ampliación de derecho civil» publicado entre 1862-1874 (cf. p. 260, pp. 281 ss.), y a los *Estudios de Derecho Civil* de Felipe Sánchez Román⁵⁵, nacidos en 1879 al servicio de la misma asignatura y granados en edición madrileña de 1889-1899.

La obra de Benito Gutiérrez, ahora leída con concurso del amigo Martínez Neira, recibe los mayores aplausos: destacaría, nos dicen López y Gómez-Salvago, por su «originalidad expositiva», favorable juicio inicial que sin duda tiene que ver con otro elogio deslizado inmediatamente: la aplaudida originalidad resultaría «acorde con la del Código Civil» (p. 282). Se alaba especialmente el *título preliminar* que abre el tratado, un meritorio preámbulo que, con esos antecedentes, sólo puede significar más aplausos ante una versión «doctrinal» del sistema de fuentes, típicamente francés («un contenido muy moderno y cercano al del Código Civil», *ibíd.*). Los libros y capítulos siguientes, desplegados en siete corpóseos volúmenes, «se ajustan, demuestran la cercanía con el contenido expositivo del índice de materias de nuestro Código Civil, y, sobre todo, reflejan cómo se trata de una obra concebida con un espíritu muy avanzado y

Imp. de J. Domenech, 2.^a ed. (1.º de setiembre de) 1877.

⁵⁵ De nuevo los ponentes se acreditan sin mucho escrúpulo bibliográfico: fechan los *Estudios* «en sucesivos tomos entre 1899 y 1911», citando (p. 283, n. 101) «la segunda edición reformada, corregida y aumentada» de 1911 (tomo segundo: Parte general), más, en realidad, ya hay una edición segunda —reformada— de 1889, con el título definitivo (*Estudios de derecho civil, según los principios, los precedentes y cuerpos legales del antiguo derecho de Castilla, las leyes civiles generales, las especialidades de las legislaciones forales, la jurisprudencia del Tribunal supremo de justicia y el Código Civil, é historia general de la legislación española*). La edición primera (1879), correspondiente a los años granadinos del civilista, tenía un título más sintético (*Estudios de ampliación del Derecho Civil y Códigos españoles*, Granada, Impta. de Sabatel). Tratándose de obra de numerosos tomos y divisiones sistemáticas determinar la datación —en correspon-

moderno, con una prosa clara, muy apta para servir de texto a la enseñanza universitaria» (p. 283).

Si dejamos aparte los aciertos de estilo («una prosa muy clara»), resulta evidente que la grandeza del tratado de Gutiérrez, su proclamada «modernidad» que llegaría incluso a convertirse en «espíritu avanzado», se debe a la «cercanía» de la obra con el Código civil. La ley codificada sirve entonces de *regla* (*h.e.* metro, medida) para observar los manuales, tanto más «modernos» cuanto más «acordes» con el contenido y la disposición sistemática del Código futuro. De ese modo, más antiguo el libro de Gutiérrez que el Código aún por venir, sólo cabe valorar la aportación doctrinal del profesor madrileño (por cierto, seminarista y guardia civil en su juventud) como un logro, expresémoslo una vez más, moderno y avanzado.

Llegado a este punto el lector de López y Gómez-Salvago comprueba que, a pesar de cubrir un arco temporal muy dilatado, nuestros ponentes han contenido la *memoria* de la disciplina en las lindes trazadas por el Código vigente. De la obra de Juan Sala a Benito Gutiérrez, de la pregunta por lo *liberal* a un Código esquivo que ganó un poco más de vida gracias a la obra (¿benemérita?) de un civilista de la Guardia Civil, se ha olvidado por el camino que, a las alturas de los años 1870 —con otro marco constitucional y otro, fracasado intento de «constitucionalizar» el derecho privado⁵⁶, con una «cuestión social» que provocó las primeras leyes laborales, en fin: con nuevos códigos que desbordaron el modelo francés en su mayor

dencia con las diferencias de contenido— exige un esfuerzo específico.

⁵⁶ Cf. Lasso Gaité, *Crónica* cit. pp. 497 ss., con el «Proyecto de ley del libro primero del Código civil, presentado a las Cortes el 19 de mayo de 1869 por el ministro Antonio Romero Ortiz». Destaca en particular la regulación, simplemente estatal, del matrimonio (indisoluble: art. 115), así como la apertura del sistema de fuentes a los principios de Derecho natural cuando «las cuestiones sobre derechos u obligaciones no pudieran ser resueltas ni por el texto de la ley, ni por su espíritu, ni por casos análogos», esto es, una eventual controversia sobre libertades que los jueces decidirían «conforme a las circunstancias del caso» (art. 9); por su relevancia para entender el alcance del iusnaturalismo del sistema de fuentes, cf. Lasso, p. 498, donde Romero Ortiz vinculaba «la plenitud de los derechos naturales» precisamente a «la libertad religiosa». Y es que esta regulación cobra sentido si consideramos la vocación del poder judicial en la carta de 1869 y la declaración abierta (esto es, a la americana) de los derechos funda-

respeto a los derechos ⁵⁷— el proyecto de 1851 y su consagración definitiva como ley en 1888-1889 son prueba de una errática tarea que (re)lanzó a finales de siglo un texto completamente arraigado en sus lejanos comienzos ⁵⁸.

Si expresamos lo anterior mediante un circunloquio que los lectores —siempre generosos— sabrán disculparme, los *Estudios* de Gutiérrez acaso fueron «modernos» por adelantar lo que terminó siendo ley civil en vigor, pero el problema se desplazaría entonces a discutir sobre la dudosa modernidad de un Código que nos ha servido para calificar retrospectivamente a la doctrina. La inevitable discusión fue abordada por el otro tratado que reseñan los ponentes, los *Estudios...* de Felipe Sánchez Román. Nos las habemos con el libro de un buen jurista, crítico del nuevo Código (aunque no de los más formidables) ⁵⁹ por escrúpulos de legalidad, oportunidad y técnica; un universitario cultivado que ha leído a los italianos del momento y que conoce muy bien el *systema iuris* de la Pandectística ⁶⁰. Por eso me resulta demasiado severa la opinión de los ponentes: el tratado de Sánchez Román sería «propio» en su planteamiento de la etapa anterior... de difícil acceso al alumno, escrita con una prosa arcaica» (cf. p. 283). Yo no sé resistir la tentación de pensar que Sánchez Román les parece «antiguo» a nuestros queridos colegas de Sevilla por las mismas razones —aunque exactamente

mentales allí mencionados.

⁵⁷ Así, el primer Código civil portugués (1867), abierto con un título «da capacidade civil» que define derechos — sin nada equivalente a un *titre préliminaire*, pero también estamos ante un texto sensible (cf. arts. 32 ss.) a la regulación «Das pessoas moraes», otro clamoroso hueco del *Code*. Una ley civil cercana y diferente, en suma, atentamente leída por la doctrina de inspiración krausista (cf. por ejemplo, vigente el código propio, Rafael M.^a de Labra, *La legislación portuguesa contemporánea. Estudios de legislación comparada*, Madrid, Imp. de T. Minuesa, 1890). Más abajo se insiste sobre esta cuestión.

⁵⁸ Considérese la limitada unificación territorial del ordenamiento privado; un asunto en absoluto menor, que hubiera llevado a rastrear en los manuales el tratamiento (dónde, cómo, cuánto) del llamado derecho foral, otra ausencia en las páginas que comentamos.

⁵⁹ He tenido ocasión reciente de leer a uno de ellos: Carlos Petit, «El catedrático y la biblioteca. Visigotismo y profesión universitaria en la obra de Rafael de Ureña», vii-clxxiv, en R. U., *Legislación gótico-hispana*, ed. Carlos Petit, Pamplona, Urgoiti, 2003, especialmente pp. lxxviii ss.

invertidas— que hacían de Gutiérrez un civilista «moderno»⁶¹; en una palabra, por razones derivadas del propio Código civil. El desapego a esa ley que demostró Sánchez Román le condenaría entonces a la irrelevancia —o, cuando menos, a la dudosa condición de un antecedente «de difícil acceso»— a la hora de trazar las líneas maestras del «Derecho Civil» enseñado en España. Al fin y a la postre —proclaman con cierto alivio los ponentes— «el autor no [fue] el civilista en sentido estricto, surgido sólo como tal a raíz de la publicación del Código Civil» (p. 283). Y es que, a los ojos de López y Gómez-Salvago, Sánchez Román ante todo fue una especie de historiador del derecho⁶².

¡Menos mal que los *Estudios de Derecho Civil* no fueron obra de un auténtico civilista! Se diría que la *historia* jurídica narrada en un curso para la asignatura de «Ampliación» dificulta ahora el ejercicio de la *memoria* sobre la común disciplina por parte de dos expertos que se muestran insensibles a las novedades sistemáticas que aportó Sánchez Román y ante el cuadro de referencias doctrinales —incomparablemente más rico y moderno que en el caso vetusto de Gutiérrez— exhibido en su «arcaico» manual. Sistema y fuentes secundarias hoy en día tan asumidas que corremos el riesgo de banalizarlas.

Seguramente un buen instrumento para la reconstrucción «mnemográfica», útil contra esa especie de perniciosos olvidos, pueden ser los comentarios que merecieron en su día aquellos viejos tratados: por vía de hipótesis, cuanto resultase —o no— un logro novedoso quedaría registrado bajo la pluma de los críticos contemporáneos. En el caso de Sánchez Román la versión primera de 1879 —responsable del «arcaísmo» que pasaría a ediciones posteriores

⁶⁰ Son dos cuestiones capitales, sobre las que insisto más abajo.

⁶¹ «Comparada con la obra de Benito Gutiérrez, ésta result[a] mucho más arcaica y antigua, aun siendo posterior en el tiempo», insisten los ponentes todavía, p. 284.

⁶² Hubiera sido pertinente mencionar, dentro de esta línea de pensamiento, que el catedrático granadino de «Ampliación...» se trasladó a Madrid (15 de enero, 1884) para ocupar la primera plaza dotada en la Universidad Central de la materia novísima «Historia General del Derecho Español». Pero la profesión iushistórica duró bien poco, pues una real orden de 24 de noviembre del siguiente año lo instalaba en la cátedra de «Derecho Civil Español, Común y Foral». Cf. Petit cit. *supra* (n. 47),

(cf. p. 284)— mereció la atención de un conocido universitario, siempre atento al movimiento de la bibliografía jurídica. Se trata de Manuel Torres Campos, cuya reseña de la obra en cuestión encierra además el mérito de atender a los anteriores *Códigos o Estudios* de Benito Gutiérrez, utilizados —como ahora en la ponencia— de elemento de comparación⁶³.

La opinión de Torres sobre Sánchez Román no fue demasiado favorable («falta realmente sobre nuestro Derecho civil un estudio serio y fundamental»), tratándose de un texto precipitado y sin proporción, pero los juicios más duros se vertían a propósito del manual de Gutiérrez: sus difundidos *Códigos o Estudios*, antes que modernos y dotados de buena sistemática, parecían «un acopio de materiales confusamente presentados, de los cuales puede prescindirse en gran parte». De todas formas, si el tratamiento de los «códigos» históricos por parte de Sánchez Román merecía ulterior censura⁶⁴, el reproche principal formulado a este autor tenía que ver con aquella cultura de los derechos que quiso y no pudo cuajar con Cádiz y que realizó un nuevo intento durante el Sexenio: a pesar de su extensión, la primera entrega publicada del novísimo tratado decía poco sobre el concepto de derecho civil y absolutamente nada sobre «el nuevo sentido que le atribuye el Código civil portugués», esto es, una dimensión diferente para la disciplina civilística fundada en «la consignación de los derechos individuales en la legislación civil, modificando su concepto... hecho de verdadera trascendencia que no debe pasar desapercibido para quien de liberal se precie» (p. 371). Y claro está, desde bases semejantes el libro de Gutiérrez

p. 1436.

⁶³ Cf. *Revista de los Tribunales. Periódico de legislación, doctrina y jurisprudencia*, segunda época, 2 (1879), 370-374.

⁶⁴ Pues, aparte defectos ocasionales (p. 372), la amplitud de la parte histórica sería más adecuada para los textos de la materia «Historia y elementos del Derecho civil» que no en cursos de «Ampliación». Observaciones explicables, ya que Torres Campos estaba por entonces muy ocupado con la enseñanza del Derecho: cf. «La reforma de los estudios jurídicos», en *Revista de los Tribunales* cit. segunda época, 1 (1878), 457-470, 521-536; *ibid.* 3 (1880), 186-208; *ibid.* 4-5 (1881-1882), 197-209. También, en el tomo doble últimamente citado, del mismo Torres, «La nueva reforma de la Facultad de Derecho», 92-94, 135-145, 182-192, 193-197, donde insistía una vez más en la ecuación *libertades educativas — ciencia jurídica — reforma*

(«acopio de materiales confusamente presentados»), lo mismo que el de Sánchez Román parecían dos textos muy antiguos, sin la menor apertura hacia un iusnaturalismo constitucional que, triunfando en la doctrina, habría llegado a voltear el sistema legal de fuentes.

Ahora bien, el nuevo libro no dejaba de presentar, siempre en relación a Gutiérrez, ventajas apreciables — precisamente aquéllas que otros testimonios posteriores saludaron de forma más positiva⁶⁵. Si «el primer tomo de la obra... que revela dotes estimables, no puede satisfacernos» (Torres Campos, p. 374), por lo menos «en cuestión de plan, comprendemos perfectamente y aplaudimos que siga el sistema de los escritores germánicos... separándose del anti-científico orden de las instituciones romanas...». Y así, cuando el crítico concluía que «formado nuestro derecho civil de cuerpos legales distintos, ninguno de los cuales lo sigue [*h.e.* el plan institucional], no hay ni siquiera razón histórica para apoyar su adopción» (p. 372), apreciamos una crítica final a la obra de Gutiérrez en aquel punto de «modernidad» que tanto ha gustado a López y a su discípula Cecilia Gómez-Salvago.

Nos encontramos con un argumento mayor, pues por ahí sería posible recrear la cultura circulante en las facultades de Derecho que vivieron la entrada en vigor del Código. Los lectores de formación o afición jurídicas sin duda recuerdan que los debates en torno al método científico de exposición de conceptos e institutos privativísticos —el nervio mismo de los manuales— fueron animadísimos a fines de siglo. Recordarán también que tales debates se referían a los dos grandes modelos apenas mencionados: el llamado sistema de Gayo (*personas-res-acciones*), aceptado por el *Code* napoleónico y seguido por el legislador español desde 1836 (más una cierta «civilística»: los Gorosábel, Fernández de la Hoz, García Goyena, Herretero....), y el dicho sistema de Pandectas, elaborado por la escuela dogmática alemana (*parte general*: personas, cosas, derechos; *parte especial*: propiedad y otros derechos reales, obligaciones y contratos, familia, sucesiones), convertido en derecho positivo con el *Bürgerliches Gesetzbuch* del potente *Reich*. Conviene precisar aún, a beneficio de aquellos otros lectores que se aproximen por vez pri-

universitaria (singularmente, del doctorado).

⁶⁵ Cf. por ejemplo Cirilo Palomo y Montalvo, *Plan y programa de Derecho Civil Español, Común y Foral*, Madrid, Impta. de la sucesora de M.

mera a estas materias, que las discusiones en torno al *sistema* no eran inútiles juegos de salón, pues si, contempladas desde el terreno de la doctrina, la recepción del «sistema alemán» introducía un clamoroso divorcio con respecto a la economía interna de los *Estudios* de Gutiérrez o del Código nacional a punto de llegar, provocando entonces en su contra toda clase de críticas y censuras, de otro lado debatir sobre el *sistema* del derecho civil significaba, en realidad, abrir un interrogante sobre el quehacer profesional del jurista, con desprecio de los socorridos comentarios al texto legal: un género jurídico humildísimo («método exegético»), carente de aspiraciones científicas (carentes, en una palabra, de «método sistemático»). La autonomía intelectual del experto en relación a la letra del código propio estaba efectivamente en el centro de las reflexiones en torno al *sistema*: difícilmente encontraremos otro momento histórico en que la civilística haya asumido con mayor entusiasmo una perspectiva analítica *de iure condendo*.

Un momento culminante para la discusión española y la imposición de los textos de consumo universitario se alcanzó con la aparición en 1885 de la obra Enrico Cimbali, *La nuova fase del Diritto civile nei rapporti economici e sociali, con proposte di riforma della legislazione civile vigente*⁶⁶. Manifiesto de publicación muy oportuna, difundido en España con aplauso de nuestro «anticuado» Sánchez Román⁶⁷, sus objeciones a la codificación individualista cayó como fruta madura en la España que discutía las bases para la redacción del Código. El libro de Cimbali llamó de inmediato la atención de un ilustre civilista madrileño, Augusto Comas y Arqués (1834-1900),

Minuesa de los Ríos, 1903, pp. 10 ss.

⁶⁶ Sobre Cimbali (vástago de una familia de catedráticos de Derecho, bien conocidos todos en España) es muy útil cuanto escribe B. Busacca en el *Dizionario biografico degli italiani*, XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981, 556-558. Cf. p. 557, con la precisión del momento de la obra que nos interesa: «pubblicata a Torino nel novembre 1884». También, Adolfo di Majo, «Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico», en *Quaderni fiorentini* 3-4 (1974-1975), 383-429.

⁶⁷ Cf. Enrico Cimbali, *La nueva fase del Derecho civil en las relaciones económicas y sociales*, trad. de la segunda edición italiana [1889] por Francisco Esteban García, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893. La versión estaba prologada por Felipe Sánchez Román, maestro del traductor, con un ensayo que de inmediato se tradujo y publicó repetidamente (1893,

quien, miembro del Senado a elección de la Universidad de Valencia, acababa de adoptar una posición demoledora en los debates parlamentarios sobre las recordadas bases del Código civil. Apoyado en sus lecturas profesionales, en el espíritu de la época y en un ligerísimo examen del proyecto gubernamental, Comas presentó una redacción alternativa, sin éxito parlamentario mas con notable resonancia cultural. Publicada junto a sus discursos en la cámara, prologada por otro académico y civilista de renombre, el antiguo rector republicano de Valencia Eduardo Pérez Pujol, desarrollada más tarde con una ambiciosa propuesta muy influyente en los ambientes universitarios (me refiero a la inacabada, en parte póstuma obra *La revisión del Código civil español*, I-VI, 1895-1902), la enmienda-libro de Comas fue de obligada consulta para sus colegas españoles y consagró entre nuestros privatistas la fortuna del malogrado colega de Catania⁶⁸.

Comas y su generación conjuraron, con el libro de Cimbali a la mano, las insatisfacciones y las esperanzas provocadas por un Código tardío. Una obra como digo muy oportuna, cuyo simple título resultaba seductor⁶⁹. Si el momento actual del derecho privado

1916) en Italia.

⁶⁸ Augusto Comas, *Proyecto de Código civil. Enmienda presentada en el Senado... Con un prólogo del Excmo. Sr. D. Eduardo Pérez Pujol*, Madrid, Ricardo Fé, 1885. Sobre todo esto, Petit cit. (n. 47), pp. 1426 ss.

⁶⁹ Acerca de la oportunidad de Cimbali y la sensibilidad española a sus principales argumentos basta tener en cuenta el programa oficial de los dos congresos jurídicos nacionales de 1886 (Madrid) y 1888 (Barcelona): cuestiones de sistema (así, Madrid, tema 1º: «Estructura más apropiada para un Código civil español») y fuentes (Barcelona, tema 1º: «¿Qué condiciones debe reunir la jurisprudencia para disfrutar de la autoridad de la doctrina legal?»), pero también de sujetos no individuales (Madrid, tema 9º: «Personas sociales bajo el punto de vista del Derecho civil.- Su nacimiento y registro.- Su capacidad jurídica.- Formas varias de personas sociales y modo de regularlas») y de «nuova fase» (Madrid, tema 10º: «Modificaciones que reclaman en el Derecho civil las nuevas condiciones de la vida económica»). Son informaciones que obtengo del mencionado Felipe Sánchez Román, *Estudios de Derecho civil...* Madrid, Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 21889-1910, I, p. 545; *vid.* también la nota de G. Vadalà-Papale publicada al frente de la edición de *Opere Complete di Enrico Cimbali, I: La nuova fase...* Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1907, pp. xviii-xix, con mención de los congresos españoles y sus

—en sus manifestaciones tanto legislativas como doctrinales— constituía una *fase* era debido en primer lugar a la toma de conciencia del jurista ante las rápidas transformaciones de la sociedad circundante, pero también al triunfo de un difuso evolucionismo que otorgaba espesor histórico al turbulento *fin de siècle* y así permitía identificar unos antecedentes (paleo-liberales) y unos consecuentes (socializantes)⁷⁰. La *novedad* de la *fase* moderna respondía además a una cuestión social que —como poco— había enseñado a los expertos que el *derecho civil*, lejos de ser producto de una cualquiera razón especulativa, mantenía con el «medio» unas estrechas *relaciones económicas y sociales*⁷¹). Y finalmente, la conciencia de la novedad histórica y la conexión de las instituciones jurídicas con la economía y la sociedad desembocaban naturalmente en un arsenal de *propuestas de reforma de la legislación civil vigente*, lo que podía ser obvio —pero desde luego no era poco.

No era poco, contemplado sobre todo desde la perspectiva española. Dentro del coro de voces que clamaron por la reforma legislativa —explicable perfectamente por el divorcio abierto entre el «sistema de la ciencia» y el «sistema del código», por expresarlo en los términos de Cimbali— en unos finales de siglo donde sólo parecía discutirse de leyes en términos *de iure condendo*, las voces que se alzaban en España ofrecen un diminuto, mas significativo *Sonderfall*. Aquí, lo mismo que en Italia o Francia, terminó por regir un Código de convencional estructura «gayana», cuando en las aulas se había optado —en la estela de Sánchez Román— por la sistemática *científica* de los pandectistas⁷²; mas el caso español era aún peor que

argumentos «cimbalianos».

⁷⁰ En este sentido, tuvo importancia otra traducción del italiano, presentada ante el público español en una perfecta convergencia del motivo evolucionista con la crítica feroz al Código: cf. Pedro Cogliolo, *Estudios acerca de la evolución del Derecho privado*. Con un prólogo y notas de Rafael de Ureña y Smenjaud, Catedrático numerario de Literatura y Bibliografía jurídicas en la Universidad Central. Madrid, Hijos de Reus, 1898.

⁷¹ Y por aquí entra la compleja problemática de la ciencia jurídica en el seno de las ciencias sociales. Por recoger otro título de época, me limitaré a mencionar la interesante, pronto fracasada, *Revista de Derecho y Sociología*, 1895, una empresa de Adolfo G. Posada y su colega penalista Pedro G. Dorado Montero.

⁷² Desde luego, no todos los civilistas del momento estuvieron de

el otros vecinos latinos, pues la vetusta opción del legislador nacional, realizada de espaldas al Parlamento y sin buscar mínimamente la complicidad de las clases profesionales, coincidía en el tiempo con el primer proyecto del *BGB*, lo que agravó los contrastes⁷³. La enemiga doctrinal al Código neonato no se reducía a diferencias vivísimas en torno al *sistema* («es una cuestión desfavorablemente juzgada con rara unanimidad, que apenas ha encontrado tímidas excusas para disculparlo... refleja la opinión científica y legislativa más anticuada, errónea e imperfecta», predicaba siempre Sánchez Román⁷⁴); la fracasada unificación territorial, el legalismo inconcluso en las fuentes, la subsistencia bajo ley autónoma de la disciplina de la propiedad inmobiliaria, las secretas componendas del Gobierno con la Santa Iglesia Católica a propósito del matrimonio... sobre todo, la falta de respeto a las mejores tradiciones autóctonas se esgrimieron contra las soluciones legales de un Código que sólo muchos años más tarde logró encontrar defensores⁷⁵.

Lejos de mi ánimo entender que ha de merecer más crédito un lector de ayer que otros lectores de hoy. Pero cada época tiene su lec-

acuerdo: cf. Lorenzo de Prada y Fernández, *Principios generales del Derecho o Introducción al estudio del Derecho civil español...* Valladolid, Vda. de Cuesta e Hijos, 1894, pp. 40 ss. con sus críticas expresas a Sánchez Román por apartarse del sistema de Gayo. Una voz perfectamente aislada y aun contraria, en su rabiosa posición católica, al fenómeno mismo de la codificación (cf. p. 340).

⁷³ Cf. Bienvenido Oliver y Estaller, *Breve sumario del proyecto de Código civil de Alemania y del proyecto de ley para su planteamiento*. Trabajo publicado en la Revista de Derecho Internacional, Madrid, J. Góngora y Álvarez, 1889. Oliver, conocido historiador del derecho y reputado hipotecarista, destacaba el sabio proceder del codificador alemán al hacer circular el *Erster Entwurf* y comprometer de tal modo a juristas prácticos y teóricos en la suerte de la ley futura.

⁷⁴ Sánchez Román cit. (n. 67), I, p. 575; el Código se contrapondría así «a la poderosa corriente científica innovadora en cuanto al sentido de la evolución y nueva organización y ensanche de las instituciones civiles que ofrecen en sus trabajos los más ilustres jurisconsultos y civilistas contemporáneos», lo que se precisaba en p. 576 mediante una larga nota (n. 5) con varios alemanes (Schaeffle, Schmoller, Brentano...), un belga (Laveleye) y una legión de italianos (Cimbali, Punzi, Todaro, Mancini, Pisanelli, Lampertico).

⁷⁵ Antonio Hernández Gil, «En defensa del Código civil», en *Revista*

tura, y no estimo la menos interesante aquélla inmediata al momento de publicación. Ante juicios tan sustanciosos como los recién examinados, el «mnemógrafo» de disciplinas jurídicas aventura que el análisis de los manuales se desarrolla al menos en dos niveles, ambos igualmente útiles a la hora de reconstruir una «genealogía». Por una parte tenemos los textos que siguen con vida, nuevos y viejos; por otra, libros completamente olvidados aunque se encuentren al alcance de la mano. La tarea del historiador dispuesto a seguir el rumbo que aquí se propone consistiría en proceder a una atenta y general lectura que permita poner en pie elementos empíricos imprescindibles para diseñar la tradición que interesa (por ejemplo, la novedad hispana del sistema adoptado por Sánchez Román), pero también debe entretenerse en ponderar las razones que explicarían ciertas exclusiones (las preferencias manifestadas a favor de Gutiérrez o el completo olvido en que ha caído Comas, por seguir con ejemplos que nos han salido al paso). En el supuesto que nos ocupa, este nivel segundo se reduciría a determinar los pasos que convirtieron la asignatura «Derecho Civil» en una nueva, diferente materia de «Derecho del Código civil».

El poco entusiasmo de López y Gómez-Salvago con Felipe Sánchez Román tiene bastante que ver con la cuestión anterior. También se relaciona con ella, ahora en positivo, la presencia algo sorprendente de los *Comentarios al Código civil español* de José M.^a Manresa en una ponencia centrada en los manuales de derecho privado⁷⁶. Honestamente reconocen los autores que esa obra «no ilustra respecto a la enseñanza universitaria del Derecho privado», mas sería un título de «gran influencia posterior, si bien no como instrumento pedagógico» (p. 284), lo que justificaría finalmente su tratamiento. Al respecto, el crítico actual se siente inclinado a pensar que el uso continuado de los *Comentarios* de Manresa por los civilistas españoles desde mediados del siglo XX ha terminado por otorgarles la estatura de «clásico», quiere decirse, de texto de referencia —vendría a ser una especie de «manual»— que nos informa sobre la vieja doctrina del Código al momento de arrancar cualquier inves-

de *Derecho Privado* 32 (1948), 776-783.

⁷⁶ *Comentarios al Código civil español*, por D. José Manresa y Navarro... Con la colaboración de varios Jurisconsultos y una Introducción del Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas, I-XII, Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1890-1907. Los autores citan un tomo I, en tercera edición

tigación: se diría que la tardía «defensa» de esa ley terminó por ser muy efectiva y que una exégesis del Código triunfante (dejemos ahora al margen el verdadero contenido del Manresa) tuvo todas las posibilidades para triunfar, a su vez. Entiendo que así ha sido ahora con López y Gómez-Salvago, quienes aplican a los *Comentarios*, de modo significativo, algunos elogios reservados poco antes a Gutiérrez: la glosa «de cada uno de los preceptos se hace con una prosa muy clara, desde una situación concreta.... hasta ir delineando el régimen jurídico de las instituciones, resultando una obra final que se aproxima formalmente mucho más a lo realizado por Benito Gutiérrez que a Sánchez Román» (pp. 284-285).

Sin perjuicio de apreciar la ambigüedad del elogio —no me parece lo mejor, a favor de un *tratado*, entender que es una suerte de *comentario*, ni viceversa— volvemos a encontrar la tensión entre los dichos *sistema de la ciencia* y *sistema de la ley*: este último inevitable, por supuesto, en casos como Manresa. De todas formas, el «mnemógrafo» tiene la obligación de precisar que los afamados *Comentarios*... fueron empresa editorial de complicada gestación, no debiendo olvidarse que se trataba, según advertencia expresa del título, de un aparato exegetico elaborado «con la colaboración de varios Jurisconsultos». Y es que José M.^a Manresa y Navarro, privilegiado censor de la prensa jurídica desde la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*⁷⁷, actuó como editor de una obra plural, compuesta por expertos de variada condición, especialidad jurídica y formación intelectual — aunque, todos los conocidos hasta ahora, enemigos en grado variable del Código neonato. Así el aragonés Joaquín Costa, autor de los comentarios sobre el consejo de

(1907).

⁷⁷ Dispongo de un interesante documento epistolar de Julián Martínez, gerente de la *Revista*, a Pedro Dorado Montero, a propósito de la traducción de Francesco S. Nitti, *Socialismo cattolico* (1891), Madrid, 14 de octubre, 1892: «el Sr. Manresa [director] no cree prudente llevar á cabo la publicación... podría ocasionar graves quebrantos á esta casa» (en Archivo Universitario de Salamanca, *Fondo Dorado Montero*, V 1 [43]). En general, *vid.* carta datada en Madrid, 31 de mayo, 1903, «el Sr. Manresa es bastante tolerante; la única prohibición que pone es que se ataque a la religión y a las instituciones, cosa muy natural... pues V. comprenderá que una denuncia del Fiscal ó una excomunión de un Obispo pueden dar al traste con el crédito de una empresa levantada durante cincuenta años. Mientras

familia, pero también Rafael Altamira en lo relativo a la tutela, Adolfo G. Posada sobre el derecho de propiedad y Rafael de Ureña, junto a su discípulo y amigo Niceto Alcalá Zamora, con la teoría general de las obligaciones⁷⁸. Queda así abierta la puerta para otras atribuciones (sin perjuicio del espacio concedido a las intervenciones editoriales de Manresa⁷⁹) que sólo una lectura a fondo y el hallazgo de nuevas fuentes pondrá de relieve⁸⁰; en cualquier caso, me resulta probado que la aplaudida unidad de estilo, la sumisión del exégeta a su ley y la aceptación de la disciplina codificada no son unos rasgos que hayamos de dar por supuestos... al menos en relación a la primera edición de los *Comentarios*. Como saben los usuarios del Manresa, la exégesis de los artículos se pierde entre informaciones de derecho extranjero: probablemente esta visión comparada se quiso condena de la regulación local⁸¹.

no mejoren los tiempos, hay que tener prudencia» (*ibid.* V 2 [40]).

⁷⁸ Sobre la participación de Costa y Altamira, *vid.* las cartas cruzadas entre estos personajes (24 de julio y 17 de agosto, 1891) que edita G.J.G. Cheyne, *El renacimiento ideal: epistolario de Joaquín Costa y Rafael Altamira (1888-1911)*, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1992, pp. 41-44; sobre los comentarios escritos por Posada, *vid.* de este autor, *Fragmentos de mis memorias*, ed. Emilio Alarcos, Oviedo, Universidad, 1988, p. 274 («me puse en relación con Manresa, un viejecito simpático en extremo... e hice los comentarios a buena parte del Libro Segundo: *De la propiedad*»); finalmente, sobre Ureña y Alcalá Zamora (coautores de los arts. 1088 a 1314) *vid.* Petit cit. (n. 59), p. clxvii.

⁷⁹ Así Costa, en la carta *supra* cit. de 17 de agosto: «el asunto Julián Martínez, ya sabe V. que se arregló; si se acuerda cuando lo vea, deseo que le recuerde, pues es tan olvidadizo, que le he encarecido mucho no me pierdan el original de *Comentarios*... pues quiero recogerlo para que me sirva en consultas, etc.; tal como está, además de tal como lo deje el Sr. Manresa» (Cheyne, p.44).

⁸⁰ Localizo dos referencias en el epistolario de Pedro Dorado Montero (Archivo Universitario de Salamanca, *Fondo Dorado Montero*, Julián Martínez a Pedro Dorado, Madrid, 12 de diciembre, 1890, V 1 [2]; *id.* 8 de febrero, 1891, V 1 [4]) que permiten pensar en la colaboración de Dorado y de Jerónimo Vida en el Manresa.

⁸¹ Cf. por ejemplo el arranque de los comentarios de Ureña y Alcalá Zamora —en José M.^a Manresa, *Comentarios al Código civil español... VII (arts. 1088-1314). Teoría general de Obligaciones y Contratos*, Madrid, Impta. de la Revista de Legislación, 1901— con mención explícita de la *Nueva fase* de Cimbali (p. 6) y, desde allí, censuras al anticuado régimen del Cód-

La anécdota del Manresa —obra merecedora de estudio singular, a partir de la autoría coral que ya queda demostrada— nos vale como nueva muestra de la colaboración que los expertos en derecho positivo deben esperar de los historiadores si les interesa la «genealogía» de su actividad intelectual. Sirve además para comprobar con otro recorrido las cortapisas que pesan sobre aquéllos, pues el uso escolástico del Manresa o la consulta ritual de Gutiérrez y Sánchez Román se encontrarían viciados por convenciones que son, en cuanto tales, un objeto adecuadísimo para la investigación «genealógica». Algo de todo ello veo aún en el apéndice de «Derecho Mercantil» que remata la ponencia de López y Gómez-Salvago: una clásica materia de desarrollo legislativo y doctrinal perfectamente autónomo, sin embargo asumida por dos civilistas como expertos en (cualquier especie de) derecho privado. Y es que el relato «mercantil» ha sido, en mi opinión, demasiado improvisado⁸².

La capacidad de atracción de las dos ponencias mayores no puede sustraernos de considerar, con una brevedad que anuncia el fin de estas rápidas notas, otros trabajos sobre Derecho presentados al coloquio. Sin los casos del Penal ni el Procesal (sin duda, dos de las disciplinas más representativas), con poco Derecho Mercantil y faltando por completo la Historia del Derecho, el Romano o el Canónico, los lectores de *Manuales y textos de enseñanza...* cuentan, al

go, disuelto a continuación entre informaciones de legislación extranjera.

⁸² Los autores se limitan a leer un manual de época, convirtiendo en fuente secundaria o de informaciones históricas una fuente primaria, un objeto de la investigación historiográfica. En realidad, la tarea parecía en parte más simple —no faltó la modernización «liberal» del régimen jurídico del comercio desde la primera hora— y en parte más complicada: la encuesta centrada en los libros de texto tendría que haber dado cuenta de los muchos producidos desde fines de los años 1820 (Tapia, Martí de Eixalá, González Huebra, Blanco Costans, Estasén, Benito y Endara... incluido Álvarez del Manzano: el único manual ahora considerado) y de las perplejidades de una doctrina que defendía la naturaleza —diversa y autónoma— del derecho mercantil (con una propia teoría de las fuentes y un horizonte de universalidad) frente a un derecho civil (legal y local) cuya codificación tardía, entre otras importantes consecuencias, dejó el terreno de las obligaciones a una legislación comercial forzosamente invasora. Por otra parte, el comercio como fenómeno social y económico y la consiguiente formación de quienes habían de protagonizarlo generó una literatura no solamente jurídica, así con problemas de delimitación y contenidos que

menos, con varias contribuciones sobre Derecho Natural (y de Gentes). Acaso por tratarse de materia perteneciente al código genético de la experiencia liberal (lo que sobradamente justificaría una atención repetida), acaso por existir una previa, discreta pero útil historiografía, los libros de aquella especialidad han interesado a Antonio Álvarez de Morales (Universidad Autónoma de Madrid), Salvador Rus Rufino (Universidad de León) y Pablo Gutiérrez Vega (Universidad de Sevilla).

En realidad, la única aportación coherente con el objetivo y el tiempo previstos en el plan general del congreso se debe al segundo de los mencionados —mas ahí acaba, o casi, el interés de las páginas suscritas por nuestro colega leonés. Dejo fuera de las críticas ciertos errores, no menos perturbadores por ser producto de acarreo⁸³, pues lo más discutible de esta intervención ha sido marginar por completo la corriente krausista— una opción que entiendo incompatible con la intención de esbozar «la enseñanza del derecho natural en el último tercio del siglo XIX». En efecto, Salvador Rus se ha limitado ahora a considerar cuatro manuales neotomistas (los de Brañas, Rodríguez de Cepeda, González de Castejón y Mendizábal) que arrojan una imagen demasiado sesgada de los fermentos intelectuales presentes en la Restauración: sin Giner y los suyos —sólo mencionados a contraluz (p. 669, n. 31; p. 673)— resulta inevitable concluir que circulaba en España «un tomismo de segunda fila, de manual, que contribuyó a desprestigiar la asignatura» (p. 679). ¿Tan sólo había eso? ¿Y no tendría que ver con el lamentado desprestigio el apoderamiento de las cátedras en cuestión por los sectores más feroces del franquismo? Si la respuesta a esta última pregunta excede del momento histórico que interesa a Salvador Rus⁸⁴, en lo que hace a la primera hubiera resultado conveniente mencionar siquiera la existencia de un tomismo «de primera fila» representado por

aún esperan investigador.

⁸³ Por ejemplo, la n. 19 de p. 661 presenta al citado Altamira, reputado historiador del Derecho, como titular de la cátedra de Procedimientos Judiciales de Oviedo (1897); no disculpa que se trate de falta traslaticia (ex Juan José Gil Cremades, *El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo*, Barcelona, Ariel, 1969, p. 190).

⁸⁴ Cf. Eusebio Fernández García, «La política desde una asignatura: el derecho natural», en Adela Mora (ed.), *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, Madrid, Universidad Carlos III — Dyc-

autores difundidísimos, y así los ultraortodoxos italianos Giuseppe Prisco y Luigi Taparelli D'Azeglio que fueron moneda corriente entre los opositores a cátedras de toda rama o especialidad jurídica: bastaría consultar cualquier documento producido por las viejas oposiciones para encontrar citas de esos dos nombres casi mágicos, realmente ubicuos⁸⁵. Por otra parte, argumentar (entiendo que así lo hace Rus, cuando menos de modo implícito) que Francisco Giner de los Ríos fue titular de «Filosofía del Derecho», que no de «(Elementos de) Derecho Natural», para omitir la consulta de sus obras, parece un recurso muy forzado, contrario al estudio de textos que tuvieron una amplia circulación⁸⁶. La descendencia intelectual de Giner ocupó plazas de otras materias, según es sabido y nos advierte el autor, pero tal comprobación conduciría en buena lógica a reconstruir la base filosófica de la práctica académica (¿qué sabemos realmente de los cursos de Derecho Político de Adolfo Posada, de las lecciones penalísticas de Pedro Dorado Montero, del temario de Derecho Mercantil de Lorenzo Benito?) e incluso a contestar, mediante un sano ejercicio de *memoria*, las barreras que hoy separan las llamadas «áreas de conocimiento»⁸⁷.

Las otras dos «comunicaciones» de Derecho Natural tienen en común la cronología preliberal de la materia y la relevancia otorgada a un concreto texto: el clásico manual de Heineccio para Álvarez de Morales y el Vattel, en versión castellana de José Olmeda, en el caso de Gutiérrez Vega. El primero —otro auténtico pionero de los

kinson (= Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija, 10), 2004, 181-213.

⁸⁵ Del primero, sobre todo, Cardenal José Prisco, *Filosofía del derecho fundada en la ética* (1872), tr. J. B. de Hinojosa, prólogo de Juan M. Ortí y Lara, Madrid 1879 (3.^a ed. 1891); del segundo, Luis Taparelli, *Curso elemental de derecho natural para uso de las escuelas* (1845), tr. Gabino Tejado, Madrid, Manuel Tello, 1871 (I-II, 1887).

⁸⁶ Los menciona Salvador Rus, para conjurar su estudio: cf. p. 669, n. 31.

⁸⁷ «Puede decirse que entre nosotros casi todos los juristas, conscia o inconsciente, aceptan en filosofía del derecho las doctrinas krausistas», particularmente desde la traducción del *Curso de Derecho Natural* de Ahrens, «preciosa obra» que «ha sido uno de los principales elementos educadores de la juventud española... verdadero oráculo para resolver, en el terreno de los principios, todas las cuestiones jurídicas» (cf. Rafael de Ureña, «Prólogo», p. 11, en Pedro Cogliolo, *Estudios acerca de la evolución*

estudios sobre la universidad liberal— utiliza aportaciones anteriores sobre la historia de la docencia del Derecho Natural, destacando aquí, con alguna rapidez, el retorno permanente de Heinecio. Por desgracia, el censo de ediciones y el control de las adaptaciones castellanas, al objeto de apreciar la recurrencia de un libro famoso en contextos culturales y políticos muy diversos, ha escapado de los objetivos presentes del autor.

Algo de ello pretende, por el contrario, el valiente trabajo de Pablo Gutiérrez. Sus páginas sobre «Vattel *larva detracta*» quisieran ser crónica de la complicada difusión española de un título famoso, con intención de cultivar la utilísima pesquisa bibliográfica. Mas el empeño valiente casi nada produce. No sólo el descuido en las citas o la afectación excesiva revelan un desaliño incompatible con esta suerte de trabajos⁸⁸; para admiración de su lector, el cotejo de la versión castellana (1771) «plagiada» por Joseph Olmeda y León (1740-1805) con el original (1758) de Emmerich Vattel se realiza a partir de ¡una moderna traducción al inglés, fechada en 1916! (cf. pp. 551 ss.), sin que las razones historiográficas alegadas («la edición de que nos serviremos, traducción al inglés de la primera edición... cuenta con ciertas ventajas comparativa[s] respecto a otras: las de ofrecer dos estudios preliminares», p. 540, n. 3) sean suficientes para justificar el desprecio al texto auténtico⁸⁹.

del derecho privado. Cit. [n. 70]).

⁸⁸ Por ejemplo, *menesterosidad* e *intelectualidad* usados en una misma cláusula (p. 538); *ora... ora* (pp. 540, 542); *conflictual* por conflictiva (p. 547); *contrastación* por cotejo (p. 557, n. 30); *espúreos* por espurios (p. 565)... Pero allá cada autor con sus problemas — quien esto escribe incluido, desde luego. En lo que hace a los usos poco rigurosos en las citas, es suficiente recoger el caso de Alejandro Herrero y Rubio, quien aparece como responsable de una *Historia del Derecho de Gentes* (p. 548, n. 12) que también resulta *Nociones de Historia del Derecho de gentes* (p. 547, n. 14), para terminar convertida (p. 566, n. 46; p. 568) en *Nociones de Historia del Derecho de gentes y de las Relaciones Internacionales*: puede parecer una minucia, pero se trata de una obra de título y número de páginas oscilantes, según ediciones.

⁸⁹ Para más *intri* Gutiérrez confiesa haber consultado «el original en francés» (¿la primera edición londinense de *Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle*... 1758?) a efectos de un cotejo con la versión de Olmeda y la traducción, incompleta e inédita, del Vattel a cargo del bibliotecario

Y el mismo escrúpulo bibliográfico puede alegarse en relación con otro déficit del voluntarioso trabajo. Pablo Gutiérrez consulta, como procede, los índices inquisitoriales en busca de la posición de Vattel ante los mil ojos de la ortodoxia hispana (pp. 544 ss.). Conoce además la vigencia de un procedimiento de censura literaria en manos de la Corona, previo a la concesión de la gracia de imprenta (cf. p. 545). Pero nuestro joven bibliógrafo no ha acudido a los archivos que conservan noticia de la policía ilustrada del libro, en general, y del Vattel — Olmeda muy en particular⁹⁰. De haberlo hecho sabría que, frente a cuanto fue bastante habitual, la obtención de la licencia de impresión se consiguió con celeridad⁹¹. Conocería también que los censores, dos oscuros abogados madrileños, pusieron el dedo en la llaga al manifestarse contra un título excesivo («por más que el Autor se esfuerze... no puede llamarse *elementos del derecho publico español* una obra en que estan omitidos los principales asuntos que interesan a esta Monarquía, y que constituyen su derecho publico»), alegando precisamente la obra de «el famoso suizo Batel... el original de donde a copiado [Olmeda] sus elementos», pues «[¿]cómo... avia de tratar Dn. Joseph Olmeda de los asuntos principales del derecho publico de España no siendo este el instituto del Autor á quien casi enteramente sigue?». La interesante censura no consiguió, ni lo quiso, paralizar la publicación de Olmeda

salmantino Joseph Ortiz de la Peña (pp. 556 ss.).

⁹⁰ Trabaja estas noticias de manera sistemática Esteban Conde Naranjo; cf. *Medioevo ilustrado. La edición erudita del Ordenamiento de Alcalá (1774)*, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1998 (vid. pp. 86 ss. sobre la nación sanluqueña —entre otros jugosos datos biográficos— de Miguel de Manuel, según arriba indiqué). Y sobre todo, del mismo, *El Argos de la Monarquía. Policía del libro en la España ilustrada (1750-1834)*, Ann Arbor, Michigan (U.S.A.), ProQuest Digital Dissertations, 2003 (<http://wwwlib.umi.com/dissertations>). A Conde agradezco copia del expediente (Archivo Histórico Nacional, Madrid, Consejos, leg. 5532, II-57) que uso seguidamente.

⁹¹ En efecto, consta que la solicitud de Olmeda y León («deseando dar al Publico una obra, que ha trabajado intitulada *elementos del Derecho Público español...*») data de 26 de julio de 1770. Consta además que cuatro días después el Consejo la pasó a censura del Colegio de Abogados madrileño, que acusa recibo de encargo y original a primeros de agosto. El 18 de enero de 1771 se eleva al Consejo la censura, firmada por Joachim Fuertes Piquer y Francisco Merita a 15 de diciembre y aprobada por las autoridades

(y es que había «alguna utilidad en la aplicacion de este Autor... puede seguirse algun provecho de la eleccion de trasladar á nuestro idioma los principios de la [obra] de Vatel... mucho más quando no tenemos cuerpo alguno completo metodico de esta especie de escritos») aunque sí logró alterar un título engañoso («porque el publico és acreedor á no padecer por nuestra parte la más leue equivocación») ⁹² mas sin llegarse a la deseable aclaración de la autoría ⁹³. En todo caso, la censura hubiera aportado a Gutiérrez un cumplido testimonio de la circulación del Vattel en España... incluso entre los ambientes más refractarios a la nueva cultura jurídica de la Europa ilustrada ⁹⁴.

Llegado a este punto, el crítico observa con pesar que su lectura ha sido acaso muy dura. Centrado en los capítulos dedicados al Derecho de esta magna obra colectiva, el reproche por la incuria bibliográfica, el análisis histórico sesgado por usos de presente, la unilateralidad en la selección del objeto o la indiferencia ante el archivo se acumulan, página tras página, en una cadena de lamentaciones. No le sirve finalmente de consuelo entender, como aquellos censores madrileños, que *Manuales y textos de enseñanza en la universidad liberal* «no contiene cosa alguna contra nuestros dogmas, leies, Regalías y buenas costumbres», ni afirmar que de su

des colegiales el 17 de enero. Sigue concesión, a 6 de febrero.

⁹² En su instancia de 26 de julio Olmeda titulaba *Elementos del Derecho Público español deducido[s] de las Leyes, constumbres, y principales Yntereses de la Nacion*; los censores proponían *Elementos de derecho público, ilustrados ó exornados con algunas noticias históricas y leies del español* «ú otro equivalente»; la licencia del Consejo autorizó la impresión «quitándole el Título que tiene y poniendole el siguiente: *Elementos del derecho publico, ylustrados con algunas noticias historicas, y leyes del Español*. Sin que en el expediente obren papeles de una posible transacción, finalmente fue publicado el libro como *Elementos del derecho público de la paz y de la guerra, ilustrados con noticias históricas, leyes y doctrinas del derecho español*.

⁹³ «Será tambien mui conveniente que el Autor en su introduccion á continuacion de la nota 2 p. 2.^a en que hace expresion de los Autores estrangeros, que han tratado de esa materia diga, que se ha propuesto seguir en lo principal de su obra al Vatel, que es el ultimo que cita». La cláusula en cuestión, inalterada a pesar de las razones de la censura, en Gutiérrez, p. 548.

⁹⁴ Sobre el Colegio de Madrid y la tensión abogado —erudito *vid.* Este-

publicación «puede seguirse algún provecho... mucho más quando no tenemos cuerpo alguno... de esta especie de escritos». Por fortuna, en el capítulo de los aciertos —un capítulo más nutrido de lo que estas notas darían a entender— queda algún dogma malparado, alguna buena costumbre subvertida por la investigación que rompe la rutina. El provecho, en conclusión, es mucho, y no sólo por la escasez de empeños semejantes. Gracias a la labor infatigable de Mariano Peset y los suyos, gracias al poderoso instrumento del Instituto Antonio de Nebrija con su revista y su biblioteca, tenemos por fin «cuerpo... de esta especie de escritos», y todas las garantías de incrementarlos en el futuro.

Carlos Petit
Universidad de Huelva

EL PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL (1923-1931)

No puede olvidarse lo que puede significar una cautela prudente y el escarmentar en cabeza ajena, porque los nobles intentos del Sr. Silió, acaso se frustraron por haber ido más lejos de lo que las posibilidades, la vida efectiva de la Universidad de su tiempo requería, y yo he guardado el sentido de la medida al acometer la reforma.

E. Callejo de la Cuesta ¹

Sumario: 1. Tras el fracaso de la reforma Silió.—2. El nuevo régimen y la facultad de derecho. El directorio militar.—3. El plan de estudios de derecho en el directorio civil: el plan Callejo.—4. La aplicación del plan de estudios de Callejo en Madrid.—5. La facultad bajo la dictadura.—6. El estatuto general de la enseñanza universitaria: la reforma Tormo.—7. La reforma de 1930 en la facultad de derecho de Madrid.—8. El profesorado de al licenciatura.—9. La formación en la práctica del derecho.—10. Algunas consideraciones finales.—Apéndice.

1. *Tras el fracaso de la reforma Silió*

A lo largo del primer tercio del siglo XX, se sucedieron los intentos de reforma de la universidad española. El modelo de la autonomía universitaria, atractivo en sí mismo, ha encontrado como principal obstáculo los esfuerzos del Estado por ejercer un control más o menos intenso de la enseñanza superior. Superar una universidad burocratizada, mejorar la preparación profesional de nuestros licenciados y promover la investigación científica, son algunos de los postulados defendidos en las sucesivas reformas.

El ministro César Silió ensayó a partir de 1919 una reforma global de la universidad española, pero su proyecto fue tan ambicioso

¹ Discurso del ministro de Instrucción Pública Callejo, en la Asamblea Nacional, el 17 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones*, n.º 16, p. 620.

como irreal². Además, el momento no fue el más propicio para su aplicación y la sociedad española quizás no estaba preparada para estas novedades³. Por real decreto de 31 de julio de 1922 del nuevo ministro y catedrático de Derecho de la Central, Montejo y Rica, se restablecieron los planes y la legalidad existentes antes del decreto de 21 de mayo de 1919, lo que para las facultades de Derecho supuso la vuelta al plan de 1900.

Sin embargo, la novedad y ambiciosas pretensiones de la reforma Silió, así como el proceso de elaboración de los nuevos estatutos de las universidades dejaron huella, y quedaron abiertas expectativas de autonomía universitaria. Tras la llegada de Primo de Rivera, pronto aparecieron voces que pedían rescatar la política reformista de Silió. Pero esta vez se optó por un camino distinto: las

² Sobre la reforma Silió ha escrito M. Peset y M.^a F. Mancebo, «Un intento de autonomía universitaria: el fracaso de la Reforma Silió de 1919», *Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, vol. VI, Madrid 1990, 505-557; y su aplicación a la Universidad de Valencia, M.^a F. Mancebo, *La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)*, Valencia, 1994; D. Comas Caraballo, *Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia (1900-1922)*, Madrid, 2001.

³ Pedro Sáinz Rodríguez analizaba así el fracaso de la reforma Silió: La reforma fracasó «porque los universitarios españoles no estaban preparados para esa autonomía, y no estaban preparados, porque no tenían el apego a ese concepto administrativo de la universidad que creo es el ideal del Sr. Romero. Cada Catedrático se creía un funcionario, se iba a la Cátedra como a una oficina y la Universidad no era un centro de investigación, sino una oficina burocrática, donde se despachaban títulos como pudieran despacharse en un estanco. El esfuerzo del Sr. Silió traía, como consecuencia necesaria, la muerte de muchas Universidades; era, sencillamente, lanzar a un barco que había estado anclado en un puerto al amparo del Estado, a la tormenta de la vida y decirle a la Universidad: si sabes vivir, vive, y si no, muere. Claro, las Universidades se ponían en competencia unas con otras, tenían que admitir la competencia de organismos no oficiales, tenían que superarse, tenían que trabajar: había Universidad que no podía resistir esa prueba y hubiera perecido. De todas las iniciativas del Sr. Silió, la mejor de aquella reforma era la posibilidad de que muriesen la mitad de las Universidades españolas, porque hubiesen muerto, naturalmente, sin necesidad de que un Gobierno enérgico las matara, que es la necesidad que hoy se siente». Discurso ante la Asamblea Nacional, 15 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones*, n.º 14, p. 527.

medidas parciales y escalonadas. Varias de esas reformas principales fueron dirigidas a los planes de estudio de las distintas facultades. Y el fruto fueron planes nuevos y sucesivas reformas de las reformas en apenas unos pocos años.

En las siguientes páginas vamos a estudiar el plan de estudios de Derecho en la Universidad Central entre 1923 y 1931. Estos años son los que discurren entre el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera a la proclamación de la II República. Periodo en el que analizaremos los distintos cambios del plan de estudios, lo que supone de un lado revisar su proceso de elaboración y las características fundamentales del modelo aprobado. Pero muy importante es también comprobar su aplicación efectiva en la Facultad de Derecho de Madrid. Para ello contamos con una fuente privilegiada: las actas de la Junta de Facultad de este periodo, donde hay frecuentes referencias a las reformas de los planes y a su aplicación práctica en Madrid⁴.

La Facultad de Derecho de Madrid era, con Medicina, la que contaba con más alumnos. Entre sus profesores se encontraban no sólo grandes maestros de la universidad española sino también políticos influyentes, tanto con la Dictadura como durante la República. La política universitaria del Gobierno se apoyó siempre mucho en la Universidad Central. Y dentro de esta política, los planes de estudio serán un eje principal para las distintas reformas que van a emprender los sucesivos ministros de Instrucción Pública.

2. *El nuevo Régimen y la Facultad de Derecho. El Directorio militar*

Tras la asunción del poder político por el general Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, el nuevo Gobierno se propuso mejorar la instrucción pública de los españoles como un objetivo prioritario de Estado⁵. Para extender la educación básica a amplios

⁴ Libro de Actas de Junta de Facultad de Derecho de la Universidad Central, 22 noviembre 1923-8 mayo 1934. Este documento se conserva en la secretaría de la facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

⁵ El segundo Marqués de Estella asumía el poder en una España con cierto retraso cultural en relación con las principales potencias europeas. Algunos datos estadísticos nos dan una idea aproximada de esta realidad: en

estratos de la sociedad, se empezaría por la educación primaria y secundaria, para seguidamente llegar a la universidad⁶. Inicialmente se barajó la posibilidad de disminuir el número de las universidades o de sus facultades, visto el reducido número de alumnos que algunas tenían y el alto gasto que suponía para unas arcas públicas mermaidadas. Con este fin se hicieron consultas y estudios. Finalmente, se desistió de esta idea y el resultado fue un esfuerzo considerable en todos los ámbitos de la enseñanza⁷, incluyendo a las universidades⁸. Fruto de ello fue un gran aumento de la población universitaria.

El crecimiento en el número de universitarios se percibió particularmente en la carrera de Derecho⁹, frente al estancamiento que

1920 el 52,35 por ciento de los españoles no sabía leer ni escribir; y el presupuesto de Instrucción Pública estaba entre los cuatro más bajos de Europa y se mantenía por entonces en niveles parecidos a los años de la Restauración. También el crecimiento de la población universitaria era mínimo: en el periodo 1914-1922, los estudiantes universitarios habían aumentado en total sólo un 8 por ciento (un promedio de 1 por ciento anual).

⁶ En el periodo 1920-1929 los gastos del Estado en la educación de los españoles ascendieron un 58 por ciento y en ese periodo se construyeron 8.000 nuevas escuelas. De esta manera se logró que en 1930 la tasa nacional de analfabetismo hubiera bajado al 33 por ciento. Durante los años de la Dictadura, el número de alumnos en la enseñanza secundaria aumentó en un 50 por ciento.

⁷ Sólo en el periodo 1922-1925, el número de alumnos matriculados en las doce universidades españolas creció un 7 por ciento anual. Pero en los años siguientes el promedio de crecimiento llegó a un 20 por ciento anual. De esta manera, la población universitaria en 1923 era de 27.000 alumnos y en el curso 1929-1930 llegó a casi 60.000. Y el gasto público en las universidades ascendía ya en 1928 a 10,5 millones de pesetas.

⁸ Otro relevante botón de muestra de esa política universitaria preferente de Primo de Rivera será la creación de la Ciudad Universitaria de Madrid, cuyos primeros proyectos de trazado se hicieron en 1926-1927 y cuyas obras comenzaron en junio de 1929. Esta Ciudad Universitaria contaría desde el principio con el apoyo y patronazgo del rey Alfonso XIII.

⁹ Entre todas las carreras universitarias ofrecidas a los españoles, la de Derecho en el curso 1922-1923 tenía 6.211 alumnos en todas las facultades de España. Y al comenzar el curso 1929-1930 eran ya 12.882 alumnos en total, es decir, más del doble. De ellos, 3.628 estudiaban en Madrid. Otras carreras como Ciencias o Filosofía y Letras habían perdido alumnos en ese mismo periodo. E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria*, Alianza Editorial, Madrid 2005, 83-94.

se observa en la población estudiantil de otras facultades como Filosofía y Letras, Ciencias o Farmacia¹⁰. Incluso no faltaron tampoco en esa época noticias ocasionales de masificación en las aulas de Derecho de la Central¹¹.

La Facultad de Derecho de Madrid recibió con normalidad la llegada del nuevo régimen¹². En aquellos primeros meses los asuntos que se estudian por la Facultad parecen ser los ordinarios, sin que aparezcan tampoco incidentes de relieve o cuestiones políticas con repercusión en la Facultad. Son, por tanto, las cuestiones académicas las que priman en el primer curso de la Facultad bajo la Dictadura.

El Directorio militar continuó pronto la política de reformas en la universidad, aunque a partir de ese momento fueron parciales y escalonadas¹³. La primera importante fue el real decreto-ley de 9 de junio de 1924, que definía a las universidades y facultades como corporaciones de interés público, con personalidad jurídica para adqui-

¹⁰ Entre todas aquellas universidades, la más grande en cuanto a número de alumnos era la Central de Madrid: en 1923, contaba con 1.311 estudiantes oficiales de Derecho, que suponían alrededor del 27 por ciento de todos los estudiantes oficiales de Derecho en España. La Facultad de Medicina contaba con 6.780 alumnos oficiales y la de Filosofía y Letras con 1.084. Al concluir el periodo que analizamos, en el año 1930 la Facultad de Derecho contaba con 3.628 alumnos oficiales; la de Medicina con 9.372, y la de Letras con 974. Y las cifras nos dicen que este aumento se percibió muy especialmente en la Universidad Central, que contaba entonces con más de un 30 por ciento de los alumnos universitarios de toda España. *Memorias-estadísticas de la Universidad de Madrid*, cursos 1922-1923 y 1930-1931, y E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera*, cit., 83-94.

¹¹ El profesor Posada se quejaba en 1929 que tenía matriculados 297 alumnos en su cátedra y que, como no había espacio físico para ellos, se había visto obligado a dividir la cátedra en dos secciones y dejar una en manos del auxiliar Nicolás Pérez Serrano. *Acta de la Junta de Facultad*, 7 noviembre 1929, ff. 155 ss.

¹² Pero ya desde la primera acta que conservamos, de la sesión del 22 de noviembre de 1923, hay varias referencias al «General ponente de Instrucción Pública en el Directorio Militar» relativo a una denuncia formulada sobre pretendidas irregularidades en las Juntas de Facultad. *Actas de la Junta de Facultad*, 22 noviembre 1923.

¹³ Discurso de Tormo ante la Asamblea Nacional del 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones*, n.º 13, p. 480.

rir, poseer y administrar bienes. Con esta disposición se concedía personalidad jurídica a las universidades y a las facultades, «con lo que la Universidad pasaba de ser una cosa a ser una persona, haciendo posible con esa nueva capacidad jurídica que pudiera recibir donaciones para destinarlas a un fin determinado dentro de la vida universitaria, que pudiese administrar sus bienes, que pudiera, en suma, desenvolverse con una amplitud antes totalmente imposible y desconocida»¹⁴. Este fue un primer paso interesante en la reforma universitaria de la Dictadura.

El regreso a la legislación anterior a la reforma Silió se unió a un mayor control de la vida universitaria por parte del nuevo Gobierno. Sin embargo, seguía latente en la Facultad el anhelo por la autonomía perdida, frente al uniformismo oficial. La Facultad deseaba poder organizar sus propias enseñanzas:

El Sr. Flores de Lemus expone su criterio apoyado por el Sr. Gascón de que lo importante es que se nos autorice para distribuir las cátedras conforme a las necesidades de la enseñanza y que se nos amplíe la libertad en el régimen interior¹⁵.

Sólo vamos a reseñar aquí lo acaecido en otra Junta de Facultad celebrada un año después, el 25 de septiembre de 1925. En aquella ocasión hubo un interesante debate sobre la propuesta de introducción de una nueva asignatura obligatoria en el periodo de Licenciatura denominada Legislación del Trabajo, a instancia del alumno Manuel Raventós Moguer¹⁶. Remitida la propuesta a informe de la Facultad, «se acordó, después de intervenir los Sres. Decano, Posada, Flores y Díez Canseco, que formulen una ponencia previa

¹⁴ Extracto del discurso del ministro Callejo de la Cuesta ante la Asamblea Nacional, el 14 de febrero de 1928 (*Diario de Sesiones*, n.º 13, p. 476). Continuaba Callejo de esta manera: «Maravillaba a los extranjeros pensar cómo era completamente imposible hacer una donación a cualquier universidad o Facultad del Reino, por cuanto inmediatamente hubiera entrado en el acervo común de los fondos de la Real Hacienda y no se habría jamás logrado el propósito y el designio del donante de que su donación sirviese para un fin determinado dentro de la vida universitaria».

¹⁵ *Actas de la Junta de Facultad*, 9 marzo 1925, f. 45.

¹⁶ Manuel Raventós Moguer unos años después, en la Junta de 1 de marzo de 1929, fue nombrado ayudante de clases prácticas de Derecho civil primer curso. *Actas de la Junta de Facultad*, 1 marzo 1929, f. 139.

los Sres. Olariaga y Gascón, desvaneciendo algunos escrúpulos suscitados por éste y relativos a la reciente creación de una Escuela Social en el ministerio de Trabajo, Comercio e Industria¹⁷».

La reseña de las actas es por tanto tan escueta¹⁸, que no sabemos exactamente por qué Gascón y Marín se opone a la creación de una asignatura de Legislación del Trabajo, pero sí que su oposición va ligada a la enseñanza que ya se hace de esta materia en las recientemente creadas Escuelas Sociales del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Sobre la ponencia de estudio encargada a Olariaga y al mismo Gascón no aparecen noticias en las actas de los años siguientes y no se volverá a plantear el asunto de la creación de una asignatura de Derecho del Trabajo hasta después de la Guerra civil.

3. *El plan de estudios de Derecho en el Directorio civil: el Plan Callejo*

Por otro real decreto de 5 de diciembre de 1925, Primo de Rivera disuelve el Directorio militar y comienza el Directorio civil, con el restablecimiento de los cargos de Presidente del Consejo y ministros de la Corona. Tras dos años de aparente estabilidad, en esta nueva etapa el General se plantea la institucionalización del nuevo régimen. Mediante el Directorio civil se busca «la transformación

¹⁷ Como ha sido estudiado recientemente por el profesor Miguel Rodríguez-Piñero, las Escuelas Sociales, instituciones públicas de enseñanza integradas en la Administración laboral, nacieron con una clara vocación de educación obrera y de formación de técnicos para la administración laboral. La primera de las Escuelas Sociales fue creada por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a iniciativa de la sección de Cultura y Acción Social del Instituto de Reformas Sociales, mediante el real decreto-ley de 17 de agosto de 1925. Si bien en esta Escuela Social y en las que más tarde la siguieron, se encuentra el origen del estudio y la docencia del Derecho del Trabajo como disciplina académica, sin embargo en septiembre de 1925 era tan sólo una idea tan novedosa como desconocida, al menos en el plan de la licenciatura de Derecho, ya que sí existía una asignatura en el plan de estudios del doctorado de Madrid sobre Derecho del Trabajo: por real decreto de 7 de marzo de 1916, la cátedra de Legislación comparada de la Facultad de Derecho de la Central se transformó en otra de Política Social y Legislación comparada del Trabajo.

¹⁸ *Actas de la Junta de Facultad*, 25 septiembre 1925, ff. 48 ss.

económica y la preparación de leyes mediante las cuales, pasado un tiempo prudencial, se haya restablecido una normalidad legal, que guíe y rija la futura vida política de España»¹⁹. Con el nuevo Gobierno llega como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Eduardo Callejo de la Cuesta. Desde un primer momento, el ministerio del que es titular resuelve continuar las reformas escalonadas en la universidad.

Mediante un importante real decreto-ley de 25 de agosto de 1926 buscó sentar las bases del patrimonio universitario²⁰. El objetivo era dotar a las universidades de medios económicos y de recursos para poder atender sus fines culturales²¹. Más adelante Callejo llegó a señalar que con este decreto y el anterior de 9 de junio de 1924, se había comenzado realmente la reforma universitaria de la Dictadura²², que consistió esencialmente en una serie de medidas parciales y sucesivas: la personalidad jurídica de universidades y facultades; el patrimonio universitario; y un tercer jalón, el más importante de todos, que fue la reforma de los planes de estudio. Esta última reforma es la que se conoció como el plan Callejo. Quedaba pendiente en la mente de este ministro un cuarto escalón: la reforma del profesorado universitario, proyecto que llegó a comenzar pero que no se concluyó²³.

¹⁹ Real decreto de 5 de diciembre de 1925.

²⁰ Sobre este real decreto-ley habló Callejo ante la Asamblea Nacional en estos términos: «También es de trascendencia [...] el Decreto-ley de 25 de agosto de 1926, con que se echaba el cimiento del patrimonio universitario, porque venía a procurar dotar a las Universidades de medios económico y de recursos que les permitieran atender a sus fines culturales. Con ello se buscaba también intensificar el momento educacional, no sólo el puramente instructivo de los alumnos universitarios, sin aquél de convivencia, con la residencia de los mismos en los Colegios mayores, de tan gloriosa tradición en nuestra Patria» (*Diarios de Sesiones de la Asamblea Nacional*, del 14 de febrero de 1928, n.º 13, p. 476).

²¹ Entre otras novedades, este real decreto abrió las puertas a los colegios mayores. Y del mismo año, aunque con un sentido distinto, también tiene interés el real decreto de 12 de marzo de 1926, completado por el decreto de 25 de agosto, que establecían la edad para el ingreso en la Facultad en los dieciséis años.

²² Vid. exposición de motivos del real decreto-ley de 19 de mayo de 1928.

²³ «De manera que sin haber olvidado, sin tener nunca alejado de la memoria ni del pensamiento la necesidad de esta reforma del Profesorado

Acometidos los reales decretos-ley de 1924 y 1926, el siguiente paso era, por tanto, la reforma de los planes de estudio. Para ello, el ministerio de Instrucción Pública, en diciembre de 1926, dirigió una circular a todas las facultades solicitando su parecer sobre las diversas cuestiones y problemas que lastraban la enseñanza universitaria, para lo que envió un detallado cuestionario. Igualmente solicitó consulta al Consejo de Instrucción Pública.

Como respuesta al cuestionario oficial²⁴, facultades y universidades remitieron unos informes. En algunos se habían añadido algunos puntos no incluidos en la consulta oficial. También el Consejo de Instrucción Pública dio un informe propio: primero de la sección y de la comisión permanente y después del consejo pleno, que concedió a esta cuestión unas sesiones plenarias y emitió un magnífico y muy detallado informe final²⁵.

La reforma en la Facultad de Derecho

La noticia de una futura reforma de los planes de estudio fue a partir de este momento un tema recurrido en los debates de la Junta de Facultad. El Ministerio daba muestras de desear abordar pronto esta cuestión. A la vista de esta iniciativa, la Facultad de Derecho solicitó un informe interno para realizar una propuesta sobre las líneas maestras para una reforma del plan vigente. Para ello creó una comisión de la que eran miembros ponentes Gascón y Marín y Díez Canseco. Se acordó que este informe fuera presentado y estudiado en la Junta del 13 de enero de 1927. Sin embargo, la premura de tiempo obligó a demorar el trabajo²⁶, que fue finalmente fue estudiado en la del 17 de febrero.

universitario que, además, en breve, ha de realizarse, porque no sólo se está elaborando en la sección 10.^a un proyecto relativo a esto, sino que, en todo caso, y por si no fuera completo, yo, desde ahora, aseguro que completaría ese proyecto con la iniciativa ministerial; aparte de eso, digo, la preferencia, por estas causas, la he dado a los estudios universitarios» (Discurso del ministro Callejo, *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, del día 14 de febrero de 1928, n.º 13, 476).

²⁴ Discurso de Callejo pronunciado ante la Asamblea Nacional, el 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones* n.º 13, p. 477.

²⁵ Discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional, el 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones* n.º 13, p. 477.

²⁶ *Actas de la Junta de Facultad*, 13 de enero de 1927, f. 76.

En su breve informe, el portavoz Gascón y Marín defendió la autonomía de la Facultad para designar ella misma el orden de distribución de enseñanzas y en consecuencia se opuso a que el orden de prelación de asignaturas fuera materia que quedase en manos del Ministerio, como recogía la propuesta oficial. He aquí la escueta crónica recogida en las actas de aquella Junta²⁷:

El Sr. Gascón, como ponente en el asunto de la reorganización de los planes vigentes, expuso a la Facultad las bases de su ponencia.

Sobre el orden de prelación de asignaturas, el Sr. Gascón impugnó el sistema, a su juicio vicioso, en que se inspira el cuestionario oficial, pues no debe tratarse de materia detalladamente legislada, sino, preferentemente, de atribuir a las facultades competencia para fijar instrucciones sobre este punto.

El Sr. Gascón, sin oponer en lo esencial criterio distinto, estima que se debiera contestar al Ministerio de Instrucción Pública congruentemente con su petición, sin perjuicio de anteponer como cuestión de principio la norma a que responden las observaciones del Sr. Castillejo.

Intervinieron en la discusión del asunto los Sres. Castillejo, Flores de Lemus, Fernández Prida y, en definitiva se aprobó la fórmula según la cual la Facultad entiende que debe otorgársele la atribución de designar ella misma el orden de distribución de enseñanza en vista de la máxima eficacia y demás condiciones que puedan ofrecerse a su consideración; y que de no aceptarse este criterio, no debe introducirse modificación de detalle ninguno en el régimen actual mientras se mantenga el mismo sistema de organización de estudios²⁸.

La Facultad no ocultaba su preocupación por la reglamentación y control de las enseñanzas por parte del ministerio²⁹, así como por las limitaciones que este corsé oficial implicaban en la función docente. Una ficha impresa adherida a las actas de la Junta, no sabemos si inocentemente, relata con minucioso detalle cómo había reglado el ministerio el orden de prelación en los exámenes y, por tanto, las enseñanzas de la carrera de Derecho:

²⁷ *Actas de la Junta de Facultad*, 17 feb 1925, ff. 76 ss.

²⁸ *Actas de la Junta de Facultad*, 17 febrero 1925, ff. 76 ss.

²⁹ *Actas de la Junta de Facultad*, 9 marzo 1925.

ORDEN DE PRELACIÓN EN LOS EXÁMENES

El examen y aprobación de la «Lengua y Literatura españolas», «Lógica fundamental» e «Historia de España» precederá necesariamente al de todas las demás asignaturas.

El examen y aprobación de «Elementos de Derecho natural» y el de «Instituciones de Derecho romano» precederá al de las varias ramas del Derecho español; el de «Economía política» al de «Elementos de Hacienda pública»; el de «Historia general del Derecho español» al de «Derecho civil» (primer curso); los de dos cursos de «Derecho civil» al de «Derecho mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América»; el de «Derecho político español comparado con el extranjero» al de «Derecho administrativo» y al «Derecho internacional público»; el de «Instituciones de Derecho canónico», el de «Derecho político español comparado con el extranjero», el de «Derecho civil» (primer curso), el de «Derecho administrativo» y el de «Derecho penal», precederán al de «Procedimientos judiciales», éste al de «Práctica forense», y el de «Derecho internacional público» al de «Derecho internacional privado», y todas las del periodo de la Licenciatura, a las del periodo del Doctorado.

Ni condicionalmente se pueden hacer exámenes de asignaturas incompatibles, considerándose nulos y sin valor ni efecto alguno académicos todos los que se hagan sin guardar el orden de prelación anterior.

Por lo tanto, los alumnos cuidarán de no entregar la papeleta de examen de una asignatura antes de haber aprobado la que, según el plan de estudios vigente, debe preceder, para evitarse los perjuicios consiguientes.

El día 1.º de octubre de cada año caducan todos los derechos que conceden las matrículas del curso que acaba en el día anterior³⁰.

Sabemos que desde el ministerio continuaron las consultas, de las que las actas de la Junta de Facultad no nos dan pistas mucho más concretas. Se congregaba un deseo de introducir en la universidad un cierto espíritu de autonomía con el deseo del Estado de no perder el control de la universidad.

³⁰ *Actas de la Junta de Facultad*, 16 junio 1926.

El proyecto de ley de bases

En noviembre de 1927, Callejo presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de bases para la reforma de los estudios universitarios, cuyo informe fue hecho público el 17 de enero de 1928, y su discusión en la Asamblea Consultiva tuvo lugar entre el 14 y el 17 de febrero. En esencia, las bases de aquel proyecto defendían una amplísima libertad pedagógica frente a la excesiva uniformidad de las universidades. Como señalaba el mismo Callejo en la defensa de su proyecto, no se buscaba establecer modelos obligatorios sino que por el contrario se quería autorizar a las facultades para que crearan distintos tipos de enseñanzas, con plena libertad y responsabilidad en cada una por los resultados obtenidos. Entre las distintas opciones posibles, Callejo decidía, como hemos visto, dar prioridad a la reforma de los planes de estudio, cuya importancia destacaba:

En cualquier centro docente, lo que lo define son las enseñanzas: lo que se enseña y cómo se enseña, es lo que da fisonomía, lo que imprime carácter, lo que señala el sello peculiar de cualquier centro docente y mucho más de la Universidad³¹.

En el proyecto se proponía que cada plan de estudios tuviera un mínimo de enseñanza obligatoria común, impuesta por el Estado. Con ello se garantizaba que para la obtención de cada título oficial todo alumno poseyera unos conocimientos mínimos y comunes. Al mismo tiempo se permitía que en torno a ese esqueleto, cada Facultad pudiera añadir otras materias complementarias que supusieran una ampliación de los estudios oficiales o cierta especialización. La reforma también buscaba fomentar la investigación en nuestras universidades³² y ofrecer a los alumnos enseñanzas que les preparasen para el ejercicio profesional³³.

³¹ Discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional, el 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones* n.º 13, p. 476.

³² Discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional, el 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones* n.º 13, 477-478.

³³ Para esto Callejo propone crear una escuela de funcionarios dentro de algunas de las facultades de Derecho —observando aquellas normas que el Estado considere necesarias para el ingreso de sus funcionarios—; y una escuela de periodistas «Aunque no me toca a mí discurrir si es o no con-

Por otro lado, Callejo introducía otras novedades en su proyecto: estudio de dos idiomas modernos; exigencia de un mínimo de escolaridad para la enseñanza libre; prevención de la utilización del traslado de matrículas para eludir profesores más exigentes; y que hubiera pruebas de curso de una u otra manera y una reválida en la licenciatura³⁴.

El dictamen de la sección décima

Elaborado el proyecto de ley de bases de la reforma de los estudios universitarios, éste fue estudiado por la sección décima de la Cámara, quien emitió el correspondiente dictamen, que fue aprobado con un voto particular del vocal Elías Tormo.

El dictamen de la sección décima³⁵ no tiene desperdicio. De hecho y como señala la exposición de motivos del real decreto-ley de 19 de mayo de 1928, este dictamen fue seguido por el Gobierno en casi su totalidad en la elaboración del real decreto-ley. En lo relativo a la articulación de las enseñanzas, la sección décima manifestaba en el preámbulo de su escrito lo siguiente:

En las enseñanzas universitarias debieran comprenderse cursos básicos, indispensables para el ejercicio de la profesión facultativa y otras especiales, completadas ambas con cursos monográficos de carácter especulativo.

En la organización de los primeros daría la norma el Estado, pero en los demás se dejaría a las Facultades una cierta libertad de organización, con arreglo a los estudios personales de sus profesores. Los estudios del Doctorado hubieran de ser fundamentalmen-

veniente que venga a tener formación técnica el periodista; lo que prueba que no estoy equivocado porque lo acepte la Sección, es que si se llega a instaurar esta Escuela de periodistas, no puede ser ajena a la Universidad, sino que en la Universidad tendrá su asiento y de la Universidad se reclutará el profesorado que haya de formar en adelante a los periodistas» (Discurso de Calleja de la Cuesta en la Asamblea Nacional, 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones* n.º 13, f. 478).

³⁴ Discurso de Calleja de la Cuesta en la Asamblea Nacional, 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones* n.º 13, f. 478.

³⁵ La Comisión estaba formada por Tormo, Terradas, Cabrera, Bermejo y Díez Canseco.

te especulativos, concediendo la posibilidad de cursarlos a los que acreditaran preparación suficiente, cualquiera que fuere su procedencia.

Ha sido preocupación de los que suscriben, la conveniencia de dividir los cursos en semestres académicos, para dar mayor continuidad y rendimiento a las enseñanzas, cuya duración, para llegar a obtener el título de licenciado, no debiera ser excesiva. Sin embargo, parece más acertado dejar, por ahora, otorgado el derecho a las Facultades, para establecer dicha división en los casos en que se estime provechosa.

Convendría que las Facultades organizaran grupos de asignaturas aplicadas a profesiones definidas, y otorgaran los certificados de aptitud correspondientes ³⁶.

Veamos aquí los puntos más relevantes de este dictamen en lo relativo al plan de estudios, cotejados con el texto final del real decreto-ley de 19 de mayo:

a) Sobre la articulación de las enseñanzas: distinguía la creación de cursos básicos, indispensables para el ejercicio de la profesión facultativa, y cursos especiales y monográficos de carácter especulativo. Los primeros serían reglamentados por el Estado y en los otros dejaría «a las Facultades cierta libertad de organización». Proponía dividir los cursos en semestres académicos, para dar mayor continuidad y rendimiento a las enseñanzas, pero dejaba este punto al arbitrio de las facultades.

b) Sobre la base primera: le correspondía al ministerio fijar las clases de títulos de licenciado y doctor; el mínimo de enseñanzas para cada uno, teniendo en cuenta las propuestas de las facultades y el informe del Consejo de Instrucción Pública; el mínimo de escolaridad; y qué universidades estaban capacitadas para otorgar cada título. Más adelante señalaba:

En cada Universidad, cada una de las Facultades acordará el plan de sus estudios, agregando al mínimo prefijado por el Estado las enseñanzas que crea oportunas y posibles, dadas las condiciones de la región académica, la instalación de su centro, la dotación de sus medios para la enseñanza y el profesorado disponible. En este caso, como en cualquier otro en que una Facultad haga uso de

³⁶ Dictamen de la sección 10.^a de la Asamblea Nacional, *Diario de Sesiones*, apéndice 5.º al núm. 13, p. 2.

las atribuciones que esta disposición le otorga, se entenderá que sus acuerdos de carácter orgánico no serán firmes sin la aprobación del claustro universitario³⁷.

Todos estos puntos fueron aceptados por el ministerio. En cuanto a la aprobación de los planes de estudio definitivos por los claustros, el real decreto-ley exigía además la aprobación del contenido de estos planes por el ministerio³⁸.

c) Limitaba a una o dos las asignaturas que cada Facultad podía proponer dentro de los cursos A) para la Licenciatura.

d) Sobre la base cuarta: el dictamen proponía que las facultades Derecho de Madrid y de Barcelona presentasen en el plazo de seis meses al Gobierno un proyecto de Escuela de funcionarios, y que el Gobierno designará la facultad o facultades que se encargarían de organizar estas escuelas. En el real decreto-ley curiosamente se aumentaba este plazo a siete meses y no se le llamaba Escuela de funcionarios sino cursos profesionales para funcionarios administrativos. También se proponía en el dictamen la novedad de poder organizar una Escuela de periodistas³⁹. Esta idea no prosperó ni pasó al real decreto-ley. También se indicaba aquí que todos los alumnos debían conocer y ser capaces de traducir dos idiomas: los estudios podrán realizarse en el Instituto de Idiomas de la universidad. El decreto-ley de 19 de mayo estableció el conocimiento de dos lenguas vivas o de una muerta y un idioma moderno, y que los estudios de idiomas pudieran realizarse o, al menos, probarse, en el instituto de idiomas modernos de la universidad (artículo 8).

e) Sobre la base quinta: el dictamen proponía que cada Facultad determinara la extensión de cada una de las enseñanzas, los cursos y periodos de curso en que habían de ser dadas, el orden de prelación y las incompatibilidades, junto con otras reglas adicionales que permitían el control por el ministerio. Así, por ejemplo, cualquier modificación de las enseñanzas mínimas correspondía direc-

³⁷ *Diario de Sesiones de la Audiencia Nacional*, apéndice 5 al núm. 13, p. 3.

³⁸ Artículo 7 del real decreto-ley de 19 de mayo de 1928.

³⁹ «Las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de Madrid presentarán al Ministerio de Instrucción Pública, en el plazo de un año, un proyecto de Escuela de Periodistas».

tamente al ministerio, previo informe de todas las facultades interesadas y del Consejo de Instrucción Pública. En el real decreto-ley se eliminaba finalmente esta discrecionalidad y se dejaba la regulación del orden de prelación y las incompatibilidades de las enseñanzas de carácter obligatorio a una reunión cada cinco años de todos los decanos de cada Facultad o sección, convocada por el ministerio. Lo acordado finalmente debía ser aprobado por el ministerio. Todo esto suponía nuevas trabas o limitaciones de la autonomía de cada Facultad.

f) Sobre las bases siguientes, el dictamen precisaba algunas otras reglas relativas a la organización de las enseñanzas y muchas de ellas también fueron incorporadas al texto definitivo: regulaba aspectos como las memorias de cátedra, los exámenes, el mínimo de escolaridad y la ordenación del doctorado.

g) En el anexo IV se presentaba un listado con las disciplinas fundamentales para el título de licenciado en Derecho. El texto del dictamen coincidía textualmente con el incluido en el artículo 5 del decreto-ley de 19 de mayo, con dos pequeñas modificaciones: el dictamen proponía el nombre de la materia de «Procedimientos», pero en la ley se denominó «Derecho procesal»; además, el real decreto-ley incluía la exigencia de estudiar a lo largo de la carrera un curso complementario de Lógica y Teoría del conocimiento de la sección de Filosofía, y otro a su elección, correspondiente a Letras o Historia, curso que no aparecía en el dictamen de la sección décima. Y finalmente el dictamen fijaba el mínimo de escolaridad en cinco años, lo que sí se mantuvo en el real decreto-ley⁴⁰.

El voto particular del catedrático Elías Tormo

El catedrático de Historia del Arte de la Universidad Central, Elías Tormo, no quiso suscribir el dictamen de la sección décima, de la que formaba parte, y presentó un voto particular. En él señalaba en primer lugar que antes que una reforma legal eran necesarios hábitos y experiencia: «La reforma universitaria había de ser ante todo una reforma de los métodos, contenido y manera de las

⁴⁰ Artículo 17. *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, apéndice 5.º al núm. 13, sesión plenaria del 14 de febrero de 1928, 1-10.

enseñanzas». Tormo es partidario de comenzar primero por lo que él llama una reforma pedagógica universitaria

en algunas de las Facultades de la enciclopedia pura, Ciencias y Filosofía y Letras, las que no tienen a su cargo profesiones libres, como las otras Facultades, Escuelas de Abogados, Médicos ni Farmacéuticos. Y en manera alguna sería oportuno complicar el ensayo con otros que en otra parte pudieran experimentarse, los de finalidad todavía más pragmática y práctica, como los de preparación profesional, la escuela de funcionarios y la escuela de periodistas.

Proponía coger la universidad de Madrid como experimento, por contar con personal ya definitivamente fijo en ella por su carácter de universidad término. Además, consideraba que Madrid contaba con mayores facilidades para el reclutamiento de personal de jóvenes auxiliares a quienes formar adecuadamente en los nuevos métodos.

Tras señalar Tormo que doctrinalmente discrepaba de la ponencia y dictamen de la sección décima en cuanto a la organización del trabajo universitario, se explayaba sobre la ordenación de las enseñanzas. Defendía en este capítulo la máxima libertad de la Facultad, pero con algunas condiciones:

Aun en Facultades formadoras de profesionales es discutible el orden lógico del plan, que tantas Universidades, las más doctas del mundo, no imponen. Al fin es, con extremada frecuencia, el orden pedagógico (o sea, el que va de lo sencillo a lo complejo) distinto y aún contradictorio con el orden sistemático y lógico. En la de Derecho no sería paradoja, aunque lo pareciera, una inversión verdadera, caminando retrógrado, pues es más simplista el procedimiento que el Derecho sustantivo, más al alcance de toda inteligencia el Derecho civil patrio que el romano o que su propia historia vernácula, los estudios formadores de verdaderos jurisconsultos, y la Filosofía del Derecho (Derecho natural) exige todavía, para muchos filósofos, más alteza de pensamiento y adiestramiento en el mismo que el Derecho positivo, es decir, todo en el orden propio actual, sólo que precisamente todo al revés⁴¹.

⁴¹ *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, apéndice 5 al núm. 13, sesión plenaria del 14 de febrero de 1928, 11-13.

Concluía Tormo su voto particular proponiendo que se ensayase como experimento la libertad pedagógica en alguna Facultad, como la de Filosofía y Letras. Y que se redujese al mínimo las estructuras básicas y «la consiguiente ponderación y compensatorio acrecentamiento en las especializadas, monográficas o especulativas». También consideraba conveniente el aplazamiento o supresión de los exámenes: sólo al final del curso, con un examen para lograr el grado⁴².

En definitiva, Tormo era partidario de dar mayor autonomía a las facultades y más flexibilidad a la organización de las enseñanzas. Aunque en esta ocasión sus opiniones no llegaron a prosperar, sí tuvieron peso más adelante, ya que apenas dos años después fue el nuevo ministro de Instrucción Pública y el artífice de la conocida como reforma Tormo.

Los debates en la Asamblea Nacional

El siguiente paso fue el debate sobre el proyecto de ley de bases en la Asamblea nacional, debate que tuvo lugar a partir del 14 de febrero de 1928. Comenzaron con la lectura del dictamen de la sección décima y del voto particular de Tormo y se prolongaron hasta el día 17⁴³.

En su informe inicial, el ministro Callejo comenzó destacando la urgencia de llevar a cabo una reforma de los estudios universitarios. Seguidamente señaló que

la Universidad española adolece de un grave mal, cual es el molde rígido y uniforme en que se mueve, convirtiéndola, en realidad, más que en un vivero de ciencia, en una pura oficina burocrática, en que apenas cabe la iniciativa del profesor, en que cuenta éste siempre con obstáculos para poder lograr las aspiraciones docentes y en que ese molde inflexible y rígido impide cualquier innovación salvadora⁴⁴.

⁴² *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, apéndice 5 al núm. 13, sesión plenaria del 14 de febrero de 1928, p. 13.

⁴³ Todo el debate se realizó por el procedimiento de urgencia, aunque la materia en sí no tenía esa necesidad de tramitación urgente. *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, sesión plenaria del 14 de febrero de 1928, n.º 13, 454-455.

⁴⁴ *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, sesión del 14 de febrero de 1928, n.º 13, 474-475.

El ministro señaló otros males de nuestra universidad: el bajo rendimiento del profesorado —«por las trabas y estorbos que halla la realización de su labor docente»—, la baja preparación del alumnado y el alto fracaso universitario. Consideraba también Callejo que no procedía presentar un proyecto de reforma completo y complejo de grandes propósitos, que probablemente estaría ya condenado desde su nacimiento a la esterilidad y a la ineficacia. Por el contrario, era conveniente abordar parcialmente algún problema concreto: las enseñanzas. Callejo decidió que era preferible dar preferencia a la reforma pedagógica de los estudios universitarios por dos consideraciones:

la primera, porque la variación de los modos de ingreso en el profesorado, la necesidad de cambiar los métodos de reclutamiento del profesorado universitario había de ser, forzosamente, labor muy lenta, porque todos comprenderéis que era obligado el respeto a los actuales profesores; es decir, que no podíamos, de un plumazo, dejar sin cátedras a los que actualmente las desempeñan, para traer, por los procedimientos nuevos más depurados, más modernos y, seguramente, más progresivos y mejores, a aquellos que hubieran de llegar al profesorado después de todas esas pruebas y con todos esos tamices que para lo sucesivo se establezcan. Y, además, porque en cualquier centro docente, lo que lo define son las enseñanzas: lo que se enseña y cómo se enseña, es lo que da fisonomía, lo que imprime carácter, lo que señala el sello peculiar de cualquier centro docente y mucho más de la Universidad, aparte de que la función de aquello que hayan de hacer los profesores, viene, en cierto modo, inexcusablemente, a determinar las aptitudes y condiciones que se exijan a los funcionarios.

Por un lado, el ministro no estaba de acuerdo con Tormo en que la reforma no se extendiera a todas las universidades. Por otro lado, consideraba que la autonomía universitaria se convertía en una utopía si las universidades existentes no tenían bibliotecas. Y que antes de conceder libertad a las universidades era conveniente que hubiera un periodo previo de experimentación⁴⁵.

Las universidades debían estar preparadas para esa mal llamada autonomía —porque para Tormo nunca existía la libertad abso-

⁴⁵ Discurso de Tormo ante la Asamblea Nacional del 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones*, n.º 13, 480-481.

luta de decidir— y, muy particularmente, debían estarlo sus profesores. Proponía que se comenzase la reforma en algunas universidades en que sus docentes estuvieran debidamente formados —en parte, en el extranjero— y que fueran conocedores de la vida universitaria en esos países ⁴⁶.

Sobre los planes de estudio, rechaza Callejo la enseñanza de planes muy completos y la existencia de exámenes frecuentes, y considera que la universidad debe ir más por la senda de la enseñanza puntual sobre temas importantes y de la investigación.

El 15 de febrero continuaron los debates en la Asamblea consultiva. Participaron sucesivamente Romero Martínez, Terradas, De Buen, Cabrera, Sáinz Rodríguez, González Oliveros, Simonena e Ibáñez, a los que contestó en nombre de la comisión el profesor Cabrera. Cada uno de ellos fue exponiendo su visión de la universidad y de la reforma que se acometía. Y en los días siguientes 16 y 17 fueron debatidas una por una las enmiendas a cada una de las bases. Tras diversas intervenciones en defensa de las distintas enmiendas, éstas pasaron a ser informadas por la sección décima. Y el dictamen final, retocado por la sección, fue finalmente estudiado y aprobado por el Gobierno y publicado en la Gaceta de Madrid.

El real decreto-ley de 19 de mayo de 1928

Por el real decreto-ley de 19 de mayo de 1928 se aprobó el texto definitivo de la nueva reforma de los planes de estudios, reforma que afirma querer asumir parcialmente los principios de Silió. El objetivo era otorgar mayor libertad pedagógica a las facultades, siempre con la indispensable inspección y dependencia de poder central. Sus autores hacían hincapié en el carácter realista de la reforma, que evitaría caer en un proyecto como el de Silió, tan ambicioso como utópico e irrealizable. El plan pretendía ensanchar el área docente de las facultades para que, además de las enseñanzas obligatorias

⁴⁶ «El que no haya hecho la vida de la Universidad relativamente libre de otros países, con extrema dificultad podrá establecer y acomodar a un régimen de esa especie la vida de la Facultad española que obtenga esas libertades» (Discurso de Tormo ante la Asamblea Nacional del 14 de febrero de 1928, *Diario de Sesiones*, n.º 13 p. 481).

de los planes de estudio, pudieran establecer otras que creyeran «posibles y convenientes, como extensión y complemento para ampliar o especializar los conocimientos peculiares de aquellas fundamentales disciplinas»⁴⁷. La reforma incluía la posibilidad de introducir cursos de prácticas profesionales e introducía una variedad y diferenciación interesante entre las diversas facultades, en orden a intentar implicarlas más en la consecución de sus objetivos docentes y científicos y a incentivar a cada una a conseguir un alto nivel de prestigio y calidad científica. Todo ello suponía de paso un canto a las excelencias de la autonomía universitaria. El Estado se comprometía también a dotar de mayores medios a las universidades para la elaboración de laboratorios y seminarios, dando participación a las universidades en el importe de las matrículas⁴⁸.

De esta manera, la filosofía de reforma Callejo en lo referente a los planes de estudio, es la misma que la de la reforma Silió: se buscaba dotar a las universidades de la necesaria autonomía pedagógica. El estado establecía un elenco de materias obligatorias —un mínimo de enseñanza— y las facultades podían añadir otras asignaturas con el carácter de obligatorias, aunque con la limitación de sólo una o dos más, y con la necesaria aprobación de las asignaturas propuestas por el ministerio⁴⁹.

El real decreto-ley incluía en el plan de estudios algunas novedades interesantes. De un lado, se extendía el doctorado a todas las facultades —antes, como sabemos, sólo a la Universidad de Madrid se atribuía la colación del grado de doctor—, siempre que se esta-

⁴⁷ «Atento a otorgar a las facultades la necesaria libertad pedagógica que permite a sus profesores dar el debido rendimiento, las autoriza el proyecto a ensanchar su área docente para que, además de las materias impuestas con carácter obligatorio por el Estado en los planes de estudio respectivos, que se han renovado conforme a los adelantos científicos y constituyen un mínimo de enseñanza, puedan establecer aquellas otras que crean posibles y convenientes como extensión y complemento para ampliar o especializar los conocimientos peculiares de aquellas fundamentales disciplinas» (exposición de motivos del real decreto de 19 de mayo de 1928, *Gaceta de Madrid* de 21 de mayo).

⁴⁸ Exposición de motivos del real decreto de 19 de mayo de 1928.

⁴⁹ En la reforma del ministro Callejo se deja al libre arbitrio de las universidades el establecimiento de estas asignaturas obligatorias propias de la universidad, según las posibilidades de cada una. Este es un nuevo signo del realismo con el que se afronta esta reforma.

blecieran los correspondientes cursos de investigación científica que constituyen este grado.

Por otro lado, aparte de la reválida final para la licenciatura y de un *numerus clausus* de alumnos para cada Facultad, se volvía a incluir el estudio obligatorio de dos lenguas modernas, o una viva y otra muerta, y el establecimiento de un mínimo de escolaridad en la duración de los estudios. También se permitía a las facultades la posibilidad de ofrecer títulos no oficiales y que los alumnos pudieran conformar su propio *currículum*. Finalmente, la concesión de una mayor libertad a las Juntas de Facultad en la dirección pedagógica de las enseñanzas quedaba condicionada «con la indispensable inspección y la necesaria dependencia del poder central; pues sería funesto, después de tantos años de centralista uniformidad y completa sumisión al ministerio, el dejarlo todo al arbitrio de las Universidades, que han de hacer el aprendizaje de su libertad para ejercerla provechosamente»⁵⁰. Por tanto, nuevamente el ministerio permanecía como garante del recto ejercicio de la autonomía universitaria en lo referente a los planes de estudio de las facultades.

El artículo 5 del real decreto-ley refería el elenco de disciplinas fundamentales necesarias para el título de licenciado en Derecho, que eran comunes y obligatorias para todas las facultades. El enunciado de algunas de ellas incluía un breve *descriptorium* que perfilaba su contenido. Eran las catorce siguientes: Derecho romano; Historia y Dogmática de sus instituciones como introducción a la ciencia técnica del Derecho; Economía política; Hacienda pública; Historia del Derecho español; Derecho civil (comprensivo de un curso de conjunto de sus instituciones, necesario a efectos de las incompatibilidades de los cursos siguientes que exigen un estudio previo y de una aplicación en un mínimo de dos años; Derecho político; Derecho administrativo; Derecho penal; Derecho canónico (comprendiendo en la competencia del catedrático la Historia de la Iglesia a los efectos del curso del Doctorado); Derecho mercantil; Derecho procesal; Derecho internacional público; Derecho internacional privado; Filosofía del Derecho (con esta denominación o la de Derecho natural, según prefiera la Facultad).

⁵⁰ Exposición de motivos del real decreto-ley de reforma universitaria de 19 de mayo de 1928 (*Gaceta de Madrid* de 21 de mayo).

Además, el citado artículo exigía la superación de un curso preparatorio especial que se estudiaría a lo largo de la carrera, sin agruparlo en un año y que había de tener obligatoriamente el siguiente contenido: «un curso de Lógica y Teoría del Conocimiento, de la sección de Filosofía; otro a su elección, correspondiente a Letras o Historia que exista en la Universidad».

Sobre estos cursos preparatorios aparecen quejas en distintas fuentes. En su intervención en la Asamblea Nacional, el diputado Romero Martínez criticaba aquel mismo año la reimplantación de este curso, aunque fuera un avance el que ya no fuera previo sino como un grupo de asignaturas complementarias. Consideraba que se hacía por carecer de alumnos la Facultad de Letras y no por convenir a los alumnos de Derecho⁵¹.

El elenco de materias fundamentales aprobado por el decreto-ley en la práctica era casi un auténtico plan de estudios, al cual cada Facultad podía añadir opcionalmente en el ejercicio de su autonomía una o dos asignaturas propias⁵². Por tanto, la designación de estas asignaturas requería un debate y estudios previos en la Facultad correspondiente, que asegurase la viabilidad y el realismo de las mismas.

El artículo siguiente exigía además, «para incluir como obligatorias tales enseñanzas en el plan de estudios de una Facultad [...], el informe favorable del Claustro universitario respectivo y la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes»⁵³. Esto

⁵¹ Consideraba este diputado que esta medida era sólo un subsidio que la Facultad de Derecho debía prestar a la de Filosofía y Letras, y que los alumnos de Derecho estaban estudiando tres asignaturas más para que las de Filosofía y Letras tuvieran más alumnos: de hecho, las asignaturas que se cursaban habían ido variando en las últimas décadas (Historia de España, Historia Universal, Lógica, Metafísica o Literatura Latina): para Romero Martínez se veía que lo importante no eran tanto las materias que se estudiaban, como que la Facultad de Derecho prestase matrículas a la de Filosofía y Letras, para que ésta saliese adelante (discurso de Romero Martínez, *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, sesión del 15 de febrero de 1928, n.º 14, p. 518).

⁵² Esta posibilidad estaba regulada en el artículo 6, que autorizaba a añadir en el plan de estudios de la licenciatura una o dos asignaturas, con una serie de condiciones: «que crea oportunas y posibles, dadas: las condiciones del distrito académico, la instalación de su centro, la dotación de sus medios para la enseñanza y el profesorado disponible».

⁵³ Real decreto-ley de 19 de mayo de 1928, artículo 7.

último suponía en la práctica nuevamente someter a control público la decisión de la Facultad, tanto por la propia universidad como por la autoridad gubernativa competente, e implicaba así una limitación a la autonomía universitaria que en la ley Silió no existía.

Se añadía el conocimiento «de dos lenguas vivas o de una lengua muerta y de un idioma moderno a elección del alumno». Con esta particularidad, lo que se buscó —y se logró— era animar a muchos estudiantes a optar por el latín —lo que en la práctica así ocurrió— y que se fomentara de forma indirecta el estudio de las Humanidades. Además, con esto también se buscaba que los que superasen la licenciatura acabasen en condiciones de manejar y consultar bibliografía extranjera del campo científico de su profesión.

El artículo 8 del real decreto-ley de 1928 establecía unas condiciones adicionales para certificar el conocimiento de estas lenguas: debía acreditarse antes del examen de reválida de la licenciatura; con la extensión suficiente para traducir a libro abierto un texto referente a materias propias de su Facultad; y los estudios podían realizarse, y en todo caso deberían probarse, en el instituto de idiomas modernos de la universidad respectiva⁵⁴.

Los siguientes artículos explicaban las tres clases de cursos que organizarían las facultades:

Artículo 9. Además de los estudios obligatorios antes determinados, podrá establecer y organizar cada Facultad otros puramente voluntarios, ya de carácter profesional o de investigación científica.

Artículo 10. La totalidad de las enseñanzas obligatorias o voluntarias profesadas en cada Facultad se clasificará atendiendo a su finalidad, forma y contenido, en tres grupos: A) Cursos elementales, teóricos o prácticos, de una disciplina en su conjunto, en los cuales se aspire a proveer al alumno de aquellos conocimientos indispensables para el ejercicio de una profesión o que tienen carácter básico para sus estudios. B) Cursos teóricos o prácticos en los

⁵⁴ Real decreto ley de 19 de mayo de 1928, artículo 8. Para favorecer que la exigencia del aprendizaje de idiomas para los universitarios fuera posible, previamente se había aprobado un real decreto ley en 1927, que autorizaba a las universidades el establecimiento de institutos de idiomas. Este decreto estaba complementado por una real orden de 15 de julio de 1927, por la que se crearon cátedras de lengua y literatura extranjeras en la Universidad de Madrid.

cuales se desarrolle una especialidad comprendida en algunas de las disciplinas fundamentales o conexas con ella y que tienen una finalidad principalmente profesional. C) Cursos en los que se persigue la formación intelectual más completa a los efectos de la investigación o especulación científicas.

Artículo 11. Los cursos A), correspondientes a los títulos de Licenciado que la universidad puede otorgar en cada una de sus Facultades o secciones, se referirán a las asignaturas obligatorias, tanto por figurar en el plan mínimo de enseñanzas, cuanto por haberlas establecido con tal carácter las respectivas Facultades conforme al artículo 6.

Artículo 12. La organización de los cursos B) y C) corresponden libremente a cada Facultad, en atención al personal docente a ella adscrito y material de que pueda disponer, para cuyo fin podrá aceptar los recursos de todo género que se le ofrezcan con garantía de seriedad.

El real decreto-ley incluía algunas disposiciones más. Sobre el orden de prelación y las incompatibilidades de las enseñanzas de carácter obligatorio no hacía una regulación exhaustiva, sino que lo dejaba al arbitrio de las facultades, tal y como la Facultad de Derecho de la Universidad Central había solicitado. La norma disponía específicamente que cada cinco años se debían reunir los decanos de todas las facultades o secciones, convocados por el ministerio, para establecer este orden de prelación y las distintas incompatibilidades. En todo caso, todo debería ser aprobado por el ministerio⁵⁵. Como vemos, de un lado son los representantes de las facultades los que organizaban el orden de prelación y las incompatibilidades de las asignaturas, pero siempre el ministerio se reservaba la última palabra y su aprobación.

El artículo 17, tras establecer que cada Facultad haría la distribución de las asignaturas o materias que hubieran de cursarse para obtener la licenciatura, señalaba que los estudios en la carrera de Derecho durarían cinco años de forma obligatoria, hasta el punto de que «no podrá solicitarse el examen de reválida sin que haya transcurrido el tiempo prefijado desde que el alumno comenzase los estudios en la Facultad»⁵⁶. El ministerio fijaba unilateralmente la duración mínima de la carrera de Derecho en toda España.

⁵⁵ Real decreto-ley de 19 de mayo de 1928, artículo 16.

⁵⁶ Real decreto-ley de 19 de mayo de 1928, artículo 17.

Más adelante, el artículo 54 explicaba que el examen de reválida se compondría de dos partes: una primera parte práctica y una segunda parte de carácter teórico. La ley no permitía realizar esta última sin la previa aprobación de la primera⁵⁷.

El real decreto-ley incluía otras normas interesantes. Por un lado, los cursos de la clase A) (estudios de licenciatura) se debían sujetar a programas aprobados por la Facultad y la organización de la enseñanza la hacía cada catedrático (artículo 19); las facultades podían organizar planes de estudios que se orientasen hacia la preparación para profesiones concretas y que se nutrirán de los cursos A) y B) (artículo 20), en los cuales es deber moral de la universidad el estudio de problemas de interés nacional y especialmente de la región en que se halle enclavada y la preparación del personal director de las actividades económicas vitales de la misma (artículo 24).

En el artículo 25 se menciona expresamente a Madrid: las facultades de Derecho de Madrid y de Barcelona —y las que se considerasen con vocación y medios para ello— debían en el plazo de siete meses al Gobierno un proyecto de cursos profesionales para funcionarios administrativos, y el Gobierno designaría a las facultades que habrían de organizar estos cursos. Como vemos, se da por hecho que aquellas facultades estaban capacitadas para organizar estos cursos y se dejaba al arbitrio de las demás facultades de Derecho la posibilidad de organizarlos.

Los artículos siguientes complementan esta normativa sobre estos cursos, en especial sobre los llamados cursos C), más orientados hacia el doctorado⁵⁸.

Las universidades de distrito que no tenían doctorado manifestaron prontamente al ministerio —previo acuerdo de sus respectivos claustros— su adhesión a lo previsto en el real decreto-ley de 19 de mayo: adición al plan mínimo de enseñanzas de cada Facultad de las asignaturas autorizadas en el artículo 6 del citado decreto-ley,

⁵⁷ Real decreto ley de 19 de mayo de 1928, artículo 54.

⁵⁸ Los de la clase C) tendrán carácter monográfico y en ellos se tenderá a estudiar de un modo completo el estado actual de un problema científico (artículo 26). Y el profesor encargado de estos grupos dispondrá de amplia libertad para organizarlos y dará cuenta de la labor realizada al final de cada periodo en una memoria (artículo 27). Las facultades y las escuelas especiales civiles, militares o navales organizarán de común acuerdo estudios e investigaciones.

organización de los cursos B) y C), conforme al artículo 9 y concordantes, derechos de matrícula de estos cursos, fijación de derechos de prácticas en asignaturas obligatorias de los cursos A) y peticiones sobre establecimientos de doctorados.

El ministerio, por su parte, aprobó las propuestas de cada una de las facultades de estas universidades, salvo en lo referente a la concesión de la colación del grado de doctor a algunas de ellas, hasta que no hubiesen acreditado la existencia efectiva y resultado de los cursos B) y C) y lo solicitasen oportunamente⁵⁹.

4. *La aplicación del plan de estudios de Callejo en Madrid*

¿Qué lectura hizo la Facultad de Derecho de Madrid? La nueva ley de reforma universitaria fue inmediatamente estudiada en la Junta de la Facultad de Derecho. En sus actas encontramos la primera referencia sobre el tema el día 29 de mayo de aquel año, a los diez días de la aprobación del decreto-ley.

El Decano designó para la ponencia de la comisión mixta para dictaminar sobre el decreto de reforma universitaria del 19 de mayo de los corrientes, a los Sres. Gascón y Marín y Garrigues⁶⁰.

Esta comisión elaboró un dictamen sobre la reforma que fue presentado en la siguiente Junta de Facultad. Aunque no ha llegado hasta nosotros el contenido de este informe, sabemos que la Junta del día 21 de junio lo estudió y lo rechazó por unanimidad:

Puesto a debate el informe de la Ponencia nombrada para el estudio de la reforma universitaria, establecida en Decreto de 19 de mayo de 1928, se acuerda por unanimidad no aceptarlo⁶¹.

Por distintas referencias, sabemos que la nueva ley no gustaba a la Junta. No había salido tal y como la Facultad había propuesto y había algunas correcciones —en especial, la pérdida de discrecionalidad para organizar sus propias enseñanzas— que se consideraban inadmisibles.

⁵⁹ Real orden de 7 de noviembre de 1928.

⁶⁰ *Acta Junta de la Facultad*, 29 mayo 1928, f. 114.

⁶¹ *Acta Junta de la Facultad*, 21 junio 1928, f. 115.

Sólo nueve días después volvió a ser convocada nuevamente la Junta y en ella, entre otros asuntos⁶², se habló del orden de precedencias de algunas de las asignaturas de la carrera y, en ejercicio de la reconocida facultad conferida por la autonomía docente, se hizo una propuesta:

La Junta de Facultad indicó a su Decano la conveniencia de mantener como régimen de organización de estudios en la Facultad de Derecho la siguiente fórmula: La asignatura de Instituciones civiles y la de Derecho romano precederán a todas las demás disciplinas de derecho positivo. La de procedimientos a la de práctica forense⁶³.

Sin embargo, inmediatamente entró en vigor el real decreto-ley de 19 de mayo y automáticamente se puso en marcha el mecanismo en él establecido para la propuesta de distribución en grupos de las asignaturas del plan de estudios de la Facultad de Derecho, para el curso 1928-1929. La reunión de los Decanos de Derecho tuvo lugar en la primera semana de julio del mismo año, tras la correspondiente convocatoria por el ministerio por real orden de 23 de junio, y allí se configuró el plan de estudios general de la licenciatura de Derecho en todas las facultades jurídicas de España⁶⁴. El acuerdo salvaba el derecho de las facultades a añadir una o dos asignaturas propias:

sin perjuicio de que las Facultades que han propuesto otras asignaturas como adición al cuadro de disciplinas fundamentales de cada Facultad o sección establecido en el artículo 5.º del real decreto citado, reproduzcan su propuesta en momento oportuno y con sujeción a las condiciones que se determinan en los artículos 6.º y 7.º de dicho real decreto; debiendo estarse, asimismo, en cuanto a la organización de las enseñanzas de lenguas e idiomas modernos, a lo que se determina en el artículo 9.º del mismo real decreto, en relación con el de 18 de febrero de 1927⁶⁵.

⁶² En aquella Junta los profesores dieron a conocer a la Junta las materias que se proponían explicar en el doctorado en el curso próximo. *Acta de Junta de Facultad*, 30 junio 1928, f. 116.

⁶³ *Acta de Junta de la Facultad*, 30 junio 1928, f. 116.

⁶⁴ Este plan que fue aprobado por real orden de 1 de agosto de 1928.

⁶⁵ Real orden de 1 de agosto de 1928.

El acuerdo de los decanos de Derecho establecía también «un estricto régimen de incompatibilidades entre las asignaturas de un año y del siguiente, de manera que los alumnos no podrían examinarse de las asignaturas de uno sin haber aprobado todas las del preferente». También se autorizaba «que si alguno hubiere quedado suspendido o no examinado en una o dos asignaturas, podrá matricularse de ellas incorporándolas a las del año posterior y que se redacten los programas de Lógica de acuerdo con las Facultades de Derecho»⁶⁶.

De esta manera, el plan de estudios de Derecho de partida —común a todas las facultades de Derecho de España— quedó configurado en diecisiete asignaturas, distribuidas en cinco cursos:

Primer curso: Derecho romano (clase diaria), Derecho natural (diaria), Historia del Derecho (diaria).— Segundo curso: Derecho político (diaria), Derecho civil, curso de conjunto (alterna), Derecho canónico (diaria), Economía (alterna).— Tercer curso: Derecho administrativo (diaria), Derecho penal (diaria), Derecho civil, primer curso (diaria).— Cuarto curso: Derecho civil, segundo curso: familia y sucesiones (diaria), Derecho internacional público (alterna), Hacienda (alterna).— Quinto curso: Derecho internacional privado (alterna), Filosofía del Derecho (alterna), Derecho procesal (alterna), Derecho mercantil (diaria).

Como complemento, los alumnos debían estudiar a lo largo de la carrera un curso de lógica y teoría del conocimiento de la sección de Filosofía; otro a su elección de los existentes en Letras y en Historia; y debían acreditar antes del examen de reválida de la licenciatura el conocimiento de dos lenguas vivas o de una lengua muerta y de un idioma moderno.

El proyecto del cuadro de estudios para el curso 1929-1930, debía estar elaborado y publicarse el mes de junio de 1929, según prevenía la disposición transitoria cuarta del real decreto-ley de 19 de mayo de 1928. Eso significaba que había un año por delante para estudiar detenidamente el plan que debía regir en cada Facultad el próximo curso. Por ello, ese mismo verano se había reunido la Junta de decanos que iba a hacer la propuesta inicial del cuadro de enseñanzas.

⁶⁶ Real orden de 1 de agosto de 1928.

Sin embargo, la reacción de la Junta de Facultad de Madrid, de 10 de julio de 1928, fue tan escueta como expresiva:

El decano dio cuenta a la Facultad de Derecho del cuadro de enseñanzas formado por los Sres. decanos de las distintas universidades. Sin opción, la Facultad, no obstante el principio legal de autonomía universitaria, se abstiene de ninguna manifestación sobre aquel tema⁶⁷.

Como vemos, los catedráticos aceptaron a regañadientes una fórmula que, aunque aprobada por una junta de decanos de Derecho, parecía que le venía impuesta, frente a la proclamación oficial de la autonomía de la universidad. Y que suponía además una corrección de un reciente acuerdo de la Facultad. La Junta de profesores emite por tanto una queja al serle impuesta una determinada organización de sus enseñanzas, lo contrario que predicaban las pomposas declaraciones que hacía la exposición de motivos del real decreto-ley de 19 de mayo de 1928: «otorgar a las Facultades la necesaria libertad pedagógica o mayor libertad en la dirección pedagógica de las enseñanzas que se otorga a las Facultades». Recordemos además que en las Juntas de 13 de enero y 17 de febrero de 1927 la Facultad había pedido que esta potestad quedara en manos de las facultades, precisamente para garantizar su autonomía docente.

El profesorado de Derecho acata una vez más la normativa oficial y a renglón seguido se dispone a adaptar las enseñanzas al nuevo plan diseñado. Al incrementar las asignaturas de Derecho civil de dos a tres, y haber solamente dos catedráticos, se nombra a Jerónimo González para que con los dos catedráticos de Derecho civil se distribuyan los tres cursos de esta asignatura. Aprueba también nombrar un tercer profesor para explicar estas asignaturas. Y acuerda organizar un curso sobre Instituciones civiles y otro especial de dos lecciones semanales de Derecho inmobiliario, a cargo del mencionado don Jerónimo González⁶⁸.

Se dejó pasar el verano y el 20 de septiembre, en una nueva Junta de Facultad, se retomó el tema de los planes de estudio y de la aplicación de la reforma Callejo. En esta ocasión la Junta respondía a una real orden de 29 de agosto de 1928, en los siguientes términos:

⁶⁷ *Acta de Junta de Facultad*, 10 julio 1928, f. 117.

⁶⁸ *Acta de Junta de Facultad*, 10 julio 1928, f. 117.

Enterada la Junta de la orden telegráfica de la Dirección General de Enseñanza Superior y Secundaria, fecha 29 de agosto, respecto a la vigencia de los planes de estudios y otros asuntos relacionados con las enseñanzas del próximo curso, la Junta acordó comunicar a la Superioridad lo siguiente: «Consignado el Real Decreto de 19 de mayo último en su artículo 5.º la libertad de los alumnos para elegir en qué curso de la carrera han de estudiar la asignatura de Lógica y otra potestativa de Letras o Historia que, sin agruparlas en un año, han de aprobar para la Licenciatura en Derecho, la Facultad estima que debe mantenerse dicha amplitud de elección, sin imponer obligatoriamente el momento en que tales disciplinas hayan de cursarse. Asimismo, y fijada con carácter forzoso la aprobación de la asignatura de Lógica, la Facultad se abstiene de formular propuesta respecto a la otra que haya de estudiarse dado el número de materias que figuran ya como obligatorias en el plan de estudios y sin perjuicio de aquéllas en que voluntariamente se matricule cada alumno»⁶⁹.

Por tanto, la Facultad se quejaba nuevamente de otra imposición oficial que constriñe la escasas facultades de elección que la ley garantiza al alumnado⁷⁰ y también considera excesivo el número de materias obligatorias fijado por la ley. La Facultad desea que el alumno conserve esa mínima participación en el diseño de su propio currículo y así lo comunica al ministerio.

En las semanas siguientes la Junta continuó estudiando el decreto-ley de 19 de mayo. Así lo relata el acta de la mañana del 2 de octubre de 1928:

[...] Se acordó, por último, que se cite a nueva Junta en término de diez días para resolver sobre los cursos A y C del Decreto de 19 de mayo de 1928⁷¹.

⁶⁹ *Acta de la Junta de Facultad*, 20 septiembre 1928, ff. 118 ss.

⁷⁰ La Facultad reaccionó y defendió frente a la Dirección General de Enseñanza Superior y Secundaria lo establecido en el artículo 5 del real decreto-ley de 13 de mayo: «Los alumnos de Derecho están obligados a estudiar en el transcurso de su carrera, sin agruparlos en un año, un curso de Lógica y Teoría del conocimiento, de la sección de Filosofía, y otro, a su elección, correspondiente a Letras o Historia que exista en su Universidad».

⁷¹ *Acta de la Junta de Facultad*, 2 octubre 1928, f. 121.

En los meses siguientes la Junta tuvo especialmente en la cabeza la organización de los cursos profesionales y el estudio de propuestas oficiales para los exámenes de fin de curso. Y desde el 1 de marzo en tres meses no se reunió la Junta de Facultad, al ser suspendidas por la autoridad gubernativa todas las autoridades académicas de la universidad.

En la Junta del 1 de julio de 1929, la última antes de las vacaciones, la Facultad estudió los disturbios habidos en la universidad en los últimos meses, que incluyeron el cierre de la universidad, y recordó que había alumnos sometidos a medidas gubernativas de privación de libertad⁷². Seguidamente se sometió a discusión y aprobación el cuadro de enseñanzas para el curso siguiente, y fue presentada y aprobada la relación definitiva de cursos especiales⁷³.

Primer grupo (plan vigente): Instituciones de Derecho romano (diaria), Elementos de Derecho natural (conceptos fundamentales) (diaria), Historia general del Derecho español (diaria).

Segundo grupo: Economía política (martes, jueves y sábados), Derecho político español (diaria), Instituciones de Derecho canónico (diaria), Derecho civil (curso de conjunto) (lunes, miércoles y viernes).

⁷² A partir de marzo de 1929 hubo graves sucesos universitarios que afectaron seriamente a la Universidad de Madrid. A causa de una huelga estudiantil desde el 7 de marzo, todas las autoridades académicas de la Universidad fueron suspendidas y sustituidas por un Comisaría Regia de la que formaban parte, entre otros, los catedráticos de Derecho de la Central De Diego y Díez Canseco. Los decanos pidieron que fueran restituidas en sus funciones las autoridades académicas y que se dejase en libertad a un alumno detenido llamado Sbert. Después de momentos de cierta tensión, la rectificación del Gobierno tuvo lugar en mayo siguiente, y la universidad fue reabierta a continuación. Los también catedráticos de Derecho Sánchez Román y Jiménez de Asúa decidieron seguidamente renunciar a sus cátedras como protesta por la intervención gubernamental. *Acta de Junta de Facultad*, 1 julio 1929, ff. 139 ss.

⁷³ «Finalmente se somete a discusión de la Junta el proyecto del cuadro de estudios para el curso 1929 a 1930, que ha de publicarse el mes de junio según previene la cuarta disposición transitoria del Real Decreto-ley de 19 de mayo de 1928. La Junta de Facultad acuerda aprobar dicho proyecto como también el de los siguientes cursos especiales que se proponen desarrollar durante el curso académico próximo los Profesores [...]». *Acta de Junta de Facultad*, 1 julio 1929, f. 149.

Tercer grupo: Derecho penal (diaria), Derecho civil español común y foral (primer curso) (diaria), Derecho administrativo (diaria).

Cuarto grupo: Derecho civil español, común y foral (segundo curso) (diaria), Procedimientos judiciales (lunes, miércoles y viernes), Derecho internacional público (martes, jueves y sábados), Elementos de Hacienda pública (martes, jueves y sábados).

Quinto grupo: Derecho mercantil de España y de las principales Naciones de Europa y América (diaria), Práctica forense y redacción de instrumentos públicos (lunes, miércoles y viernes), Derecho internacional privado (martes, jueves y sábados).

En la Junta de Facultad de 26 de septiembre de 1929 se vieron varios asuntos relacionados con la enseñanza⁷⁴. En primer lugar, se declaró que la Facultad de Derecho no intervenía en la designación de los profesores del curso preparatorio, cuyas asignaturas dependían completamente de la Facultad de Filosofía y Letras.

En segundo lugar, la Junta resuelve afirmativamente algunas consultas sobre cuestiones prácticas de aplicación del plan de estudios planteadas por el Negociado de la Facultad⁷⁵.

1.º Pregunta el Negociado si por el plan moderno y por enseñanza libre puede llevarse solamente un grupo de asignaturas de conformidad con la Real orden de 1 de agosto de 1928 (Gaceta del 3) y en el caso de quedar pendiente una asignatura de un grupo, ésta y las del siguiente (ver el n.º 2)

2.º Si en los derechos académicos de los alumnos oficiales debe descontarse el 15% como en los derechos de matrícula con los que son dos hermanos, al modo como sucede con los alumnos de enseñanza no oficial que pagan todos estos derechos de una vez.

3.º Si debe entenderse que el Real decreto de 8 de julio de 1922 referentes a las quintas, vigente para los alumnos sometidos al plan antiguo, alcanza también a los del plan moderno, aun no haciendo mención de dicho real decreto el de 19 de mayo de 1928 (Gaceta del 21). La Junta de Facultad, después de estudiar esta consulta del Negociado, acuerda contestar afirmativamente a las tres preguntas en una contenidas⁷⁶.

⁷⁴ *Acta de la Junta de Facultad*, 26 septiembre 1929, ff. 152 ss.

⁷⁵ *Acta de la Junta de Facultad*, 26 septiembre 1929, ff. 152 ss.

⁷⁶ *Acta de la Junta de Facultad*, 26 septiembre 1929, ff. 152 ss.

Y en la Junta del 7 de noviembre se continúa estudiando la aplicación práctica del plan de estudios:

De conformidad con lo que dispone la real orden de 17 de agosto de 1929, la Junta de Facultad acuerda hacer su propuesta sobre el acoplamiento del profesorado a los nuevos planes de estudio, en la forma siguiente:

1.º) La enseñanza del Derecho civil (curso en conjunto) se acumula según lo dispuesto en la RO de 13 de julio de 1929 (Gaceta del 16), únicamente a la cátedra de D. Felipe Clemente de Diego, por estar vacante, en la actualidad, la otra cátedra de Derecho civil, correspondiendo además al Sr. De Diego comenzar el turno a que se refiere la real orden de 13 de julio de 1929, en su carácter de catedrático más antiguo.

2.º) Estando vacante la cátedra de Procedimientos Judiciales y Práctica forense, se encargará de la cátedra de Derecho procesal, en que se refunden ambas, el catedrático que en su día sea nombrado.

3.º) El catedrático de Derecho natural de esta Facultad don Fernando Pérez Bueno, pasará a serlo de Derecho natural (conceptos fundamentales) y de Filosofía del Derecho, ambas enseñanzas con clase alterna⁷⁷.

5. *La Facultad bajo la Dictadura*

Primeras protestas

Para poder entender bien las reformas gubernamentales y la actitud de la Facultad de Derecho, no está mal hacer un pequeño parón y contemplar el panorama político español en el periodo 1928-1930. A partir de aquel año, la universidad se convierte en campo de oposición a la Dictadura. El deficiente tratamiento de la cuestión universitaria por Primo de Rivera —mundo sobre el que tenía una gran ignorancia— y las nuevas ideas políticas sublevan a profesores y alumnos. Pronto se pasaría de las reivindicaciones académicas a una auténtica oposición política.

Ya en la primavera-verano de 1925 habían tenido lugar las primeras protestas organizadas contra la Dictadura y el primer inci-

⁷⁷ *Acta de la Junta de Facultad*, 7 noviembre 1929, ff. 155 ss.

dente serio durante un acto celebrado en la Escuela especial de ingenieros agrónomos de Madrid, al que acudió el Rey para clausurar el curso académico. Otros incidentes le siguieron, como el que ocurrió durante la inauguración del monumento a Ramón y Cajal en el Retiro, en abril de 1926; la dimisión del rector, vicerrector y secretario general de la Universidad de Madrid en 1927 por la celebración en el campus de una asamblea de estudiantes católicos con la presencia del Rey; o el intento fallido de nombrar al monarca doctor *honoris causa* por su patronazgo del campus de la Ciudad Universitaria, ante el rechazo manifiesto de una minoría cualificada. Aunque en el año 1929 los tumultos en la universidad alcanzarán un inusitado relieve, la cuestión universitaria se venía ya gestando desde 1926⁷⁸.

A partir de 1928 se fue tensando la cuerda entre el Gobierno y la universidad. En marzo de 1928 Jiménez de Asúa fue suspendido de empleo y medio sueldo cuando dio una conferencia sobre control de natalidad en la Universidad de Murcia. Tampoco faltaron en los siguientes meses algunas protestas contra la ley Callejo y, particularmente, contra el art. 53, que preveía que los centros privados de enseñanza superior los exámenes fueran realizados por dos profesores del centro y por un catedrático de universidad, lo que suponía un reconocimiento de las universidades católicas, lo que para la mentalidad de la izquierda, suponía un atentado contra su concepto de universidad pública. Y pronto se desató ese anticlericalismo que tantos problemas habría de dar durante la II República. El siguiente paso en las protestas fue pedir el fin de la Monarquía.

Un Comisariado regio para la Universidad Central

Pero fue 1929 el año del enfrentamiento más radical entre universitarios y Gobierno. A partir del 8 de marzo de aquel año se da un choque frontal, con frecuentes manifestaciones y algarabías. El día 9 Primo de Rivera destituyó a las autoridades académicas de la universidad —rector y decanos— y los sustituyó por una Comisaría

⁷⁸ E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera*, cit., pp. 89-90. Y C. Seco Serrano y J. Tusell, «Del plano inclinado hacia la Dictadura al final de la Monarquía (1922-1931)», en *La España de Alfonso XIII. El Estado y la política Historia de España Menéndez Pidal*, tomo 38-2, Madrid, 1995, p. 569.

regia, de la que formaban parte, entre otros, los catedráticos de la Facultad de Derecho de la Central, De Diego y Díez Canseco. El que se vinculara a la Monarquía con estas sanciones no hizo sino dañar innecesariamente la imagen de un Rey que unos meses antes estuvo muy cerca de ser nombrado doctor *honoris causa* por todas las universidades españolas.

Las actas de Derecho destacan cómo el decano de Derecho se dedicó en aquellos días sobre todo de liquidar las cuentas pendientes (prácticas, material etc.) para dejar allanado el camino a las nuevas autoridades nombradas por el Gobierno. Y la Junta no se reunió entre el 1 de marzo y el 1 de julio. El 8 de marzo se declaró una huelga de estudiantes y al día siguiente tuvieron que intervenir la Guardia de Seguridad, la Guardia Civil y la Policía, que tomaron al asalto los centros mientras los estudiantes organizaban disturbios por las calles de Madrid, con un cariz cada vez más republicano. Primo de Rivera subió el tono y ordenó dos días más tarde, el 11 de marzo, la ocupación militar de la Facultad de Derecho y de las demás facultades y la pérdida de matrícula de todos los huelguistas que no asistieran a clase. La respuesta fue la formación de barricadas en las principales calles de Madrid. Finalmente y por un real decreto de 16 de marzo quedaba clausurada la Universidad Central hasta el 1 de octubre de 1930 y sus alumnos debían examinarse en otras universidades fuera de Madrid.

El decano de Derecho pudo hablar aquellos días con el ministro de Instrucción Pública, durante un acto en el que estaban presentes todos los decanos de la Universidad de Madrid. El consejo personal del decano de Derecho fue que se debía restituir en sus funciones a las autoridades académicas y levantar las sanciones impuestas con motivo de los sucesos originados en la huelga estudiantil, así como poner en libertad al alumno Sbert.

La decisión de destituir a las autoridades académicas y cerrar la universidad fue tomada personalmente por Primo de Rivera, como señaló el propio ministro del ramo: «tal era el parecer de la universidad, pero el del Gobierno y especialmente el de su presidente distaba mucho con coincidir con tal apreciación del problema»⁷⁹.

La protesta se extendió a otras universidades españolas y a finales de marzo de 1929 hubo más de un centenar de profesores uni-

⁷⁹ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, f. 140.

versitarios que se solidarizaron con la posición estudiantil, entre ellos los catedráticos de la Central Sánchez Román, Jiménez de Asúa, Castillejo y Fernando de los Ríos, quienes abandonaron voluntariamente a sus cátedras en señal de protesta, renuncia que les fue aceptada mediante carta en el verano de 1929. Incluso el mismo director de la Real Academia Española, Ramón Menéndez Pidal, remitió a Primo de Rivera una carta muy moderada en apoyo de los estudiantes, carta que fue publicada por toda la prensa escrita. La Universidad de Madrid terminó abriéndose el 27 de abril y dos días después las otras universidades españolas. Pero continuaron los incidentes y la Universidad de Barcelona y otras universidades como la de Oviedo, fueron clausuradas hasta el 1.º de octubre de 1930, lo que provocó las protestas de intelectuales como Ortega y Gasset —que abandonó su cátedra—, Sáinz Rodríguez —que abandonó su escaño en la Asamblea— y Azorín.

Lo cierto es que el Primo de Rivera decidió rectificar y terminó cediendo y por una real orden de 19 de mayo de 1929 decretó la reapertura de la universidad y permitió reanudar las clases en los centros suspendidos. Cesaron las Comisarías regias y las autoridades académicas se reintegraron en sus cargos. También se regularon las matrículas y los exámenes de las universidades cerradas. Finalmente se autorizó que los exámenes se realizaran bajo la normativa anterior a la reforma de 1928, lo que en la práctica supuso una victoria para el movimiento estudiantil⁸⁰.

Las renunciaciones de Sánchez Román y de Jiménez de Asúa

La vuelta a la normalidad en la Facultad de Derecho coincidió con las mencionadas renunciaciones a sus cátedras de los profesores Sánchez Román y Jiménez de Asúa. El decano de Derecho se entrevistó con el ministro de Instrucción Pública y se interesó por la suerte de sus dos compañeros e informó seguidamente a la Junta de Facultad:

En este punto el Sr. Decano manifiesta a la Junta que el Ministro nada le ha dicho respecto de la suerte que puedan correr tales renunciaciones, pero el Decano entiende interpretar el sentir de la Facul-

⁸⁰ E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera*, cit., 91-93.

tad al decir que considerará siempre presentes a nuestros compañeros los Sres. Sánchez Román y Asúa y que ni aún de hecho se les ha dejado de considerar como pertenecientes a esta Facultad, como lo prueba la circunstancia de haber sido formalmente citados a la Junta ⁸¹.

A continuación, en aquella misma Junta de Facultad, pidió la palabra el profesor Adolfo Posada. En su disertación, Posada manifestó que después de los hechos acaecidos, no se podía considerar aquella convocatoria como una Junta ordinaria y consideró que era preciso que la Facultad dijera algo que pudiera servir de exculpación a la universidad en tan lamentables acontecimientos. Para Posada, el cese de dos profesores distinguidos de la Facultad era algo tan grave que no bastaba con una simple lamentación. Por el contrario, consideraba que era «inexcusable expresar el deseo de la Facultad de que esas dimisiones no tengan efecto, así como las de todos aquellos profesores que, por sentimiento de dignidad, se han creído también en el deber de declinar la cátedra. Finalmente tampoco puede la Facultad pasar en silencio la situación de algunos escolares que, por motivo de los pasados sucesos, siguen sometidos a medidas puramente gubernativas de privación de libertad» ⁸².

Por todo ello, Adolfo Posada solicitaba de la Junta de Facultad que se pronunciase respecto a tres puntos:

1.º Lamentar los sucesos producidos por la huelga estudiantil iniciada el siete de marzo pasado, en los cuales no ha tenido culpa alguna la universidad;

2.º Hacer constar el deseo de la Facultad de que no sea admitida la renuncia de los compañeros que por causa de esos mismos acontecimientos se creyeron obligados a dimitir de sus cátedras,

3.º Realizar cerca de las autoridades una gestión a favor de los escolares que continúen sujetos a detención gubernativa ⁸³.

El siguiente en solicitar la palabra fue Gascón y Marín quien, tras adherirse a lo manifestado por Posada señaló que le había dolido «el no haber tenido contacto ninguno con el Decano y con los demás compañeros de la Facultad en los pasados sucesos universitarios, los cua-

⁸¹ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, ff. 140-141.

⁸² *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, ff. 140-141.

⁸³ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, ff. 141-142.

les reclamaban, a su juicio, una completa inteligencia entre los Catedráticos para proceder de acuerdo. Dice también que habiendo sido la Universidad objeto de censuras y reproches desde las esferas oficiales del poder, tiene que manifestar que no se considera aludido por esas apreciaciones y termina expresando su convencimiento de que los sucesos universitarios no habrían tenido lugar si el Gobierno procediendo de distinto modo de como procedió, hubiese dejado actuar cerca de los alumnos a los profesores y autoridades universitarias»⁸⁴.

En aquella Junta también hablaron Olariaga⁸⁵ —que intervino como mediador en el conflicto—; De Diego⁸⁶ —que había sido comisario regio—; Mendizabal, Fernández Prida y Montero⁸⁷; Díez Can-

⁸⁴ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, f. 142.

⁸⁵ «El Sr. Olariaga se adhiere a las manifestaciones de los Sres. Posada y Gascón y cree necesario aclarar que por sus relaciones con uno de los ministros del actual Gobierno se encontró en situación de intervenir como mediador en el conflicto originado por la huelga estudiantil. De otro lado su calidad de asambleísta hizo que se creyese obligado, al igual que otros profesores, a intentar una conciliación decorosa, de transigencia entre las actitudes extremas. Estima el Sr. Olariaga, finalmente, que a más de la gestión propuesta por el Sr. Posada, debe realizarse otra directamente encaminada a comunicar a los compañeros de esta Facultad que renunciaron sus cátedras el sentimiento del claustro por tal renuncia y su deseo de que se incorporen lo más pronto posible a sus tareas docentes. El Sr. decano contestando a este último extremo, manifiesta que estas gestiones se han hecho ya y concretamente señala las realizadas cerca del profesor Sánchez Román por el Sr. vicerrector y por el profesor de esta Facultad Sr. Flores de Lemus». *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, ff. 142-143.

⁸⁶ «El Sr. De Diego manifiesta su coincidencia con las opiniones anteriormente expuestas, y lamenta, como los demás compañeros que han intervenido, los acontecimientos que motivaron el cierre de la universidad. Agrega que aceptó el cargo de comisario como catedrático de la Facultad de Derecho, únicamente por amor a la universidad y por el solo fin de dulcificar en lo posible la situación y evitar mayores perjuicios a la causa universitaria, aun a sabiendas de que este proceder suyo había de provocar censuras en quienes no compartieron su convencimiento y apreciación del problema». *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, f. 143.

⁸⁷ «Los Sres. Mendizábal, Fernández Prida y Montero declaran que están conformes con todo lo que se ha dicho en esta Junta de Facultad en cuanto signifique compañerismo y armonía. El Sr. Fernández Prida se adhiere especialmente a la propuesta del Sr. Posada». *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, ff. 143-144.

seco⁸⁸ —que explicó también por qué aceptó ser nombrado comisario regio— y, finalmente, el vicesecretario Garrigues.

Esta última intervención fue la más extensa de todas. El ya catedrático Joaquín Garrigues, tras adherirse a la propuesta de Posada, manifestó su deseo de una pronta reincorporación de Asúa y Sánchez Román. Solicitó que en la propuesta de petición de la Facultad se incluyese «también no sólo a los catedráticos que han renunciado su cátedra, sino también a aquéllos otros Profesores que sin haber renunciado al cargo han sido sometidos a expediente por su comportamiento durante el conflicto universitario»⁸⁹. Seguidamente señaló al Gobierno como responsable de los hechos por la forma en que había dirigido la crisis: pidió que se distinguiesen dos aspectos: el ruego a los compañeros para que se reincorporasen al seno de la universidad y

frente al Gobierno la firme expresión de convencimiento de la Facultad de Derecho de que no puede prescindir en sus tareas de la colaboración de Profesores tan eminentes como estos dos que las renunciaron, y no ciertamente por capricho o por abandono de sus deberes sino por creerse dignamente incompatibles con la apreciación que el Gobierno ha hecho del conflicto universitario. Unido a estas afirmaciones debe ir la de la exculpación de la Universidad apuntada por el Sr. Posada y también, a juicio del que suscribe, una réplica categórica a las concretas acusaciones contempladas en la nota facilitada a la prensa diaria por el presidente del Consejo de Ministros, el día 18 de abril pasado⁹⁰.

La Facultad remitió a Sánchez Román y Jiménez de Asúa el 12 de julio una nota deseándoles un pronto reintegro a la Facultad. Aquéllos contestaron agradecidos con sendas notas fechadas el 19 y el 22

⁸⁸ «El Sr. Díez Canseco manifiesta su deseo de dar una explicación ante la Junta por el hecho de haber aceptado el formar parte de la Comisaría Regia de la Universidad Central. Él entiende que funcionando la universidad no puede haber Comisaría de ninguna clase pero aceptó el cargo para defender los intereses de la universidad, a sabiendas de antemano de que algunos de sus compañeros habían de censurarle. Hace esta declaración por creerla necesaria, pero sin pedir que se le conteste». *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, f. 144.

⁸⁹ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, f. 144.

⁹⁰ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, ff. 144-145.

de julio respectivamente. Sin embargo, y como sabemos, por dos reales órdenes del ministerio de Instrucción Pública de 22 de julio se admitió la renuncia de sus cátedras a Sánchez Román y a Jiménez de Asúa. El decano, en señal de sentimiento de la Facultad, propuso que se levantase la sesión, el 1 de julio de 1929. Intervino Posada para sugerir que los profesores más próximos y vinculados al Gobierno —Yanguas, De Diego, Canseco, Flores de Lemus y Olariaga— hicieran alguna gestión para conseguir el reingreso de Asúa y Sánchez Román.

En la Junta del 7 de noviembre de aquel año todavía esta cuestión no estaba resuelta y las negociaciones con el Gobierno para el regreso de ambos profesores no habían dado sus frutos. Garrigues hizo entonces una propuesta a la Junta para incorporar de facto a Asúa y a Sánchez Román a las enseñanzas de la Facultad. Para ello propuso utilizar el artículo 13 del real decreto-ley de 13 de mayo de 1928, que permitía contratar para los cursos especiales de la Facultad a profesores de reconocido prestigio. Esta propuesta fue tomada en consideración por la Facultad.

Una última gestión a favor de Jiménez de Asúa y Sánchez Román fue realizada por el decano de la Facultad de Derecho de Granada, Guillermo García Valdecasas: una carta suya y otra de aquella universidad fueron elevadas al ministro, para que se dejasen sin efecto las reales órdenes de 22 de julio de 1929 por las que habían cesado en sus cargos estos profesores, junto con otros (Ortega y Gasset, De los Ríos y el mismo García Valdecasas). Estos escritos fueron leídos en la Junta de Facultad⁹¹.

Finalmente, ese resolvió el problema. En la Junta de 28 de febrero de 1930, el decano informaba a la Facultad su satisfacción por haberse reincorporado a sus cátedras Sánchez Román y Jiménez de Asúa. Tras un corto debate, Sánchez Román se reintegró también en su cargo de secretario de la Facultad, que había quedado voluntariamente vacante en su ausencia⁹².

La suspensión del decano Ureña

La agitación en las aulas continuó durante el segundo trimestre del curso 1929-1930. A comienzos de 1930 fue disuelta la FUE y el

⁹¹ *Actas de la Junta de Facultad*, 11 diciembre 1929, f. 163.

⁹² *Actas de la Junta de Facultad*, 28 febrero 1930, ff. 168-170.

22 de enero estalló un paro general universitario a escala nacional y de claro matiz republicano, que fue apoyado por los sindicatos.

El 17 de marzo de 1930, Adolfo Posada dio cuenta a la Facultad que el decano Rafael Ureña había recibido una carta del ministro de Instrucción Pública solicitando su dimisión. Surgió un debate entre los profesores, coincidiendo todos en que el decano debía continuar en su puesto. A propuesta del secretario Sánchez-Román, se aprobó por unanimidad elevar a la Superioridad el siguiente escrito de queja y solidaridad con su decano:

La Facultad de Derecho de la Universidad Central, reunida a la fecha de hoy en Junta expresamente convocada para tratar del asunto planteado en relación a su decanato, cuya dimisión ha sido interesada oficiosamente por V.E. cerca de su titular don Rafael de Ureña, sustituido en la presidencia de esta Junta por el profesor más antiguo don Adolfo Posada; y habiendo ésta deliberado muy detenidamente sobre tan delicado particular, acuerda dirigirse a la Superioridad, por el conducto debido, con la siguiente exposición:

La Facultad aprueba, ante todo, rotundamente la conducta de su decano, al haber antepuesto a cualquier decisión suya personal, la competencia —moral, al menos— de su Junta para conocer de la rogada dimisión de un cargo al que fue elevado por elección unánime de este claustro de profesores. Y por esta sola circunstancia, que no parece ocioso recordar a la autoridad de V.E. quedaría ya justificada la preferencia con que la Facultad puede mirar a su decano actual en comparación a cualquier otro compañero que para ese mismo cargo viniese instituido por diferente método de designación cual lo sería el que actualmente impera según la disciplina administrativa vigente.

Pero a mayor razón se destaca también la nota favorable de que nuestro actual decano don Rafael de Ureña, en el prolongado ejercicio de su cargo, ha merecido siempre la plena satisfacción de la Facultad. Jamás ha promovido con su actuación disgusto ni diferencia de ninguna especie entre sus compañeros, sin duda porque el trato prudente y ponderado de su presidencia ha gravitado sobre el centro de un pensamiento ecuaníme y honesto en el que ha sido posible trabar cierto enlace de justicia para las cruzadas opiniones en que se separan los miembros de esta corporación. Tampoco se ha hallado nunca el decanato de esta facultad en pugna con la masa escolar que le rinde respetuoso acatamiento. Durante muchos (años) que nuestro decano ha venido ejerciendo su función no ha recogido ninguna hostilidad estudiantil, a diferencia de lo acaecido en otras facultades de esta misma universidad. Y si en este orden

de experiencias se hubieran de recordar sucesos recientes de agitación y rebeldía estudiantil, justo sería recordar también el carácter general del movimiento aludido, que por su misma extensión hubo de extralimitar la competencia disciplinaria del decanato hasta arraigarla en otras jerarquías superiores, la más señalada de ellas el propio Rectorado en cuyo ejercicio la autoridad de V.E. ha sabido experimentar con fortuna.

Y en otro orden de motivos, la gestión del actual decano en punto a administración y economía de la Facultad, supera ciertamente a cuantos elogios pudieran estamparse.

Por último, no quiere esta Facultad comentar los prestigios profesoraes que enaltecen a su decano por cuanto ello pudiera representar enaltecimiento de sí misma. Pero quizás no deba atribuirse a otra distinta explicación el hecho de que esta autoridad académica haya podido superar hasta ahora con plena dignidad de su función los trances difíciles por que recientemente ha pasado la universidad procediendo en ellos con serenidad y energía, sin merecer en ninguna de tan graves ocasiones el requerimiento de dimisión que hoy le ha sido formulado.

Ninguna designación, por lo tanto, es lícito esperar que iguale en favorables condiciones al decanato actual. La facultad emplazada en esta convicción no puede allanarse al trámite de una dimisión voluntaria y así lo hace saber a su Decano para que se abstenga de presentarla. Si la autoridad de V.E. a pesar de todo, considerase imprescindible la sustitución del decano de esta Facultad, sus profesores lamentarían profundamente la destitución de tan digno y respetable compañero, que ha sido mantenido en su puesto bajo el amparo prestigioso de su designación electiva durante todos los Gobiernos de legalidad y de ilegalidad que en España se sucedieron desde hace más de veinte años⁹³.

La Junta de Facultad se movilizó y una delegación formada por los profesores González Posada, Flores de Lemus y Gascón y Marín fue a visitar al ministro de Instrucción Pública para entregarle el acuerdo unánime de la Junta de Profesores solicitando la continuación de Ureña como decano⁹⁴. Rafael Ureña presidiría la Junta del 9 de abril, pero poco después fallecería⁹⁵. Le sustituirá en el decanato Gascón y Marín.

⁹³ *Actas de la Junta de Facultad*, 17 marzo 1930, ff. 173-177.

⁹⁴ *Actas de la Junta de Facultad*, 9 abril 1930, f. 177.

⁹⁵ *Actas de la Junta de Facultad*, 23 mayo 1930, f. 189.

Finalmente en la Junta de 23 de mayo de 1930 se habló de la celebración de los exámenes finales y el peligro a que hubiera alborotos ⁹⁶.

Protestas estudiantiles contra la reforma universitaria

En este marco de tensión entre el Gobierno de Primo de Rivera y la Universidad, ésta en buena parte ya daba la espalda al dictador, acaudillada entre otros por Sáinz Rodríguez en la Asamblea Nacional, y por catedráticos como Unamuno, Marañón, Jiménez de Asúa, Ortega o Fernando de los Ríos. Las críticas se concentraron en parte a partir de 1928 en la obra del ministro de Instrucción Pública Callejo. Los intelectuales y los escritores fueron poco a poco cerrando filas frente a Primo de Rivera y contra la Monarquía en que el General se escudaba.

En esta última etapa de la Dictadura, las crónicas de las protestas estudiantiles nos mencionan con frecuencia la reforma Callejo y las reformas de septiembre de 1930. Ésta última generó muchas complicaciones a las facultades para su inmediata aplicación, y exigió frecuentes rectificaciones y precisiones por parte del ministerio.

En la Junta de Facultad del 30 de octubre de 1930, el decano González Posada daba cuenta de los disturbios ocurridos en el día anterior con motivo de la protesta escolar contra el plan Callejo. Al día siguiente la Asociación de Estudiantes Católicos presentó una instancia en el decanato por este motivo, junto con una copia de la protesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo contra los decretos de reforma universitaria aparecidos en la Gaceta del día 29 de septiembre y la imposibilidad de aplicarlos al curso que ya estaba inaugurado. La Junta resolvió elevar una nota con todo ello a las autoridades académicas ⁹⁷.

La universidad tuvo un papel importante en la caída de Primo de Rivera. De hecho, el Dictador renunció a su cargo tan sólo seis días después ⁹⁸. Y la lucha contra la Dictadura se terminó convir-

⁹⁶ *Actas de la Junta de Facultad*, 23 mayo 1930, ff. 191-193.

⁹⁷ *Actas de la Junta de Facultad*, 30 octubre 1930, ff. 212-213.

⁹⁸ E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera*, cit., p. 93. Como señalan C. Seco Serrano y J. Tusell, el movimiento estudiantil tuvo un papel de especial «importancia en lo que respecta a la difusión ante la opinión

tiendo en una lucha contra la Monarquía y por la República. La convulsión general que se percibe en toda España tendrá un campo de experimentación en la universidad. Hasta unos días antes de la caída de la Monarquía, las mismas actas de la Junta de Facultad nos reflejan el ambiente de protestas y enfrentamientos que había en las calles de Madrid, y también en las aulas de la Facultad. Así aparece reflejado en las del 28 de marzo de 1931:

El Sr. Jiménez de Asúa hace uso de la palabra para pedir que conste en acta su protesta por el atropello de que han sido víctimas estudiantes, profesores, clínicas, etc, en los pasados sucesos.

Los profesores don Galo Sánchez y don Joaquín Garrigues manifiestan que están de acuerdo con la protesta y que en este sentido han firmado un documento suscrito por varios profesores de la universidad.

El Secretario que suscribe se adhirió también a la protesta del Sr. Jiménez de Asúa y de sus compañeros don Galo Sánchez y don Joaquín Garrigues.

El Sr. Prada manifiesta que entiende suficiente en este asunto el acuerdo formado en la Junta de Gobierno de la universidad. Y no teniendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión ⁹⁹.

6. *El estatuto general de la enseñanza universitaria: la reforma* *Tomo*

Acabamos de describir el contexto político de los últimos años de la Dictadura. Seguidamente vamos analizar los avatares del plan de Derecho en Madrid, durante los gobiernos provisionales de Berenguer y de Aznar, hasta la caída de la Monarquía y la llegada de la República.

Después de la dimisión de Primo de Rivera y de su Gobierno, entre los que se encontraba Callejo de la Cuesta, asume el gobierno provisional el Jefe de la Casa Militar del Rey, general Berenguer. Este

pública de la protesta en contra del régimen», ya que «los estudiantes trasladaron la inquietud de los medios universitarios al resto de la sociedad mediante sus manifestaciones callejeras». C. Seco Serrano y J. Tusell, «Del plano inclinado hacia la Dictadura al final de la Monarquía (1922-1931)», en *La España de Alfonso XIII. El Estado y la política*, cit., p. 569.

⁹⁹ *Actas de la Junta de Facultad*, 30 marzo 1931, f. 230.

prestigioso militar configuró un gobierno de carácter palatino, que se vio desbordado desde el principio por los acontecimientos. El nuevo ministro de Instrucción Pública fue el duque de Alba que, al cabo de unos meses y una vez superados los amenazantes problemas de orden público en la universidad, pasó a ejercer la cartera de ministro de Estado y fue sustituido por el catedrático e historiador del arte, Elías Tormo y Monzó.

En un tiempo record, Tormo resolvió preparar una nueva reforma universitaria. Consideraba que el cuerpo de doctrina resultante de las consultas a todas las universidades y tras los serios trabajos de expertos y de los miembros del Consejo de Instrucción Pública y de la sección de educación y enseñanza de la Asamblea Nacional no había sido bien aprovechado. Para Tormo, la ley resultante interpretó aquella doctrina «con parsimonia, en unos puntos demasiado meticulosa, en otros con exceso de confianza en la virtualidad de un texto legal»¹⁰⁰.

Tras dos años de vigencia de esta reforma de Callejo de la Cuesta, Tormo consideró que convenía replantear algunos de sus puntos. No se trataba de anular lo hecho ni de realizar tampoco un cambio radical, sino sólo de revisar las ideas fundamentales, y de establecer algunas garantías para la correcta implantación de algunas de las novedades. Y se buscaría, primero acabando con los planes rígidos, con sus incompatibilidades y marcha obligada de las asignaturas, curso por curso, lo que para el ministro no era propio del régimen universitario; y lo segundo, procurando garantías en la creación de cátedras de cursos de especialidad y de investigación, entre otras posibles medidas¹⁰¹.

El llamado estatuto general de la enseñanza universitaria distinguía nuevamente entre cursos A, B y C, que correspondían con bastante exactitud a la definición que había dado el real decreto de Callejo en 1928:

Los cursos A son cursos de conjunto, elementales, teóricos o prácticos, de una disciplina, en los cuales se aspira a proveer al

¹⁰⁰ Exposición de motivos del real decreto de 25 de septiembre de 1930, por el que se aprueba el Estatuto General de la Enseñanza Universitaria.

¹⁰¹ Exposición de motivos del real decreto de 25 de septiembre de 1930.

alumno de aquellos conocimientos indispensables para el ejercicio de una profesión, o que tienen carácter básico para otros estudios. Los cursos B, de especialidad profesional, teóricos o prácticos, en los cuales se desarrolle una especialidad comprendida en algunas de las disciplinas fundamentales o conexas con ella, y que tienen una finalidad principalmente profesional. Cursos C, de investigación, en los que se persigue la formación intelectual más completa a los efectos de la investigación o especulación científica¹⁰².

Nuevamente el Estado regula el mínimo de enseñanzas comunes a todas las facultades de Derecho de España (art. 6) y cada Facultad puede organizar planes de estudio orientados a la preparación de profesiones concretas y determinar los contenidos y duración de estos planes, sirviéndose de los cursos de conjunto y de especialidad profesional de los tipos A y B¹⁰³. Como en el plan Callejo, nuevamente aparece la exigencia de dos idiomas, pero en este caso no es una lengua viva y otra muerta, ni dos idiomas vivos elegidos libremente por el alumno, sino dos idiomas específicos escogidos entre una doble opción (alemán/inglés y francés/italiano)¹⁰⁴.

En cuanto a la ordenación de las enseñanzas dentro de la Facultad, se deja un mayor margen de autonomía a cada Facultad. Sobre los cursos de conjunto del tipo A se exigía la comunicación al minis-

¹⁰² Artículo 5 del real decreto-ley de 25 de septiembre de 1930. Los llamados cursos A correspondían a los distintos títulos de licenciado que podía otorgar la universidad. Estaban formados por el conjunto de disciplinas que se recogían en el mínimo de enseñanzas y otras que libremente la universidad considerase oportuno añadir (artículo 6). Por el contrario, «la organización de los cursos de especialidad profesional del tipo B, y de investigación del tipo C, corresponde libremente a cada Facultad, en atención al personal docente a ella oficialmente adscrito y al material de que pueda disponer, pudiendo aceptar los recursos materiales de todo género que se le ofrezcan con garantías de seriedad» (artículo 7 del real decreto de 25 de septiembre de 1930).

¹⁰³ *Boletín de la Universidad de Madrid*, tomo I, año I, octubre de 1929, 566-567. También se especificaba que las universidades tendrán obligación moral de contribuir al estudio de problemas de interés nacional y, particularmente, de la región en que esté situada la universidad, así como la «como la preparación del personal director de las actividades económicas vitales de la misma» (Artículo 12 del real decreto-ley de 25 de septiembre de 1930).

¹⁰⁴ *Boletín de la Universidad de Madrid*, 1 (octubre de 1929), 566-567.

terio de Instrucción Pública cuatro meses antes de la fecha en que debían aplicarse¹⁰⁵. La solicitud de autorización previa se referirá también a la división en periodos de aquellos cursos de conjunto del tipo A y la determinación del contenido de los mismos¹⁰⁶.

Con fecha 24 de septiembre se aprobaron, también mediante real decreto, las reglas para fijar los estudios obligatorios para obtener el grado de licenciado en una Facultad universitaria¹⁰⁷.

Llama la atención la premura de tiempos. Se aprobó la reforma universitaria a finales de septiembre y se pretendía que entrara en vigor para ese mismo curso, a partir de octubre¹⁰⁸. Lógicamente esto debía generar muchos imprevistos, por lo que se preveían algunas reglas de acomodo para los alumnos de cursos superiores que debían cursar sus estudios siguiendo planes de estudios antiguos. Los alumnos que ingresasen en una Facultad con posterioridad al curso 1929-1930, quedaban sometidos al plan nuevo. Pero a aquellos alumnos que ya hubieran comenzado su carrera, no les afectarían las nuevas modificaciones de planes. La ley siempre dejaba libertad

¹⁰⁵ «El ministerio, oído el Consejo de Instrucción Pública, podrá oponer en el plazo de dos meses su veto por insuficiencia en el desarrollo de cualquiera de las disciplinas establecidas en el mismo».

¹⁰⁶ «Artículo 15. La división en periodos de los cursos de conjunto del tipo A, y la determinación del contenido de los mismos, serán comunicadas al ministerio de Instrucción Pública cuatro meses antes de la fecha en que hayan de aplicarse.»

¹⁰⁷ Real decreto de 25 de septiembre de 1930, «Artículo 1. Para los alumnos ingresados en los estudios de una Facultad en el curso de 1930-31 y posteriores, los estudios obligatorios de las respectivas licenciaturas serán los determinados en los artículos siguientes».

¹⁰⁸ En el artículo 2 se mandaba que «las Juntas de Facultad y las de gobierno de las universidades se reunirán urgentemente para acordar, respecto a los alumnos de primer año, el cuadro de las enseñanzas que obedezca a las exigencias precisas, en consideración al mínimo de los estudios obligatorios, para en su día completar los de cada licenciatura». Por este año —que será de ensayo de la reforma— no regirán, en consecuencia, los plazos establecidos en el estatuto general de la enseñanza universitaria sobre planes, programas y publicidad. Los profesores dirán a los alumnos los acuerdos adoptados y señalarán las materias de sus inscripciones, a determinar estatutariamente siempre en el mes de octubre. Estas inscripciones completarán la matrícula global que se acordó y se realiza en el mes de septiembre» *Boletín de la Universidad de Madrid*, 1 (octubre de 1929), 575-576.

a la Facultad para resolver los problemas de adaptación que lógicamente se darían en la aplicación del nuevo plan. «En todo caso, de no poderse seguir en algún punto el plan bajo el cual comenzaron los estudios, establecerá la Facultad el acomodo propio del cambio, sin poder recargar al alumno las exigencias vigentes al comienzo de su carrera»¹⁰⁹.

El decreto fijaba también un listado de disciplinas fundamentales para el título de Licenciado: Derecho romano, Economía política, Hacienda pública, Historia del Derecho español, Derecho civil, Derecho político, Derecho administrativo, Derecho penal, Derecho canónico, Derecho mercantil, Derecho de procedimientos, Derecho internacional público, Derecho internacional privado y Filosofía del Derecho¹¹⁰.

Si comparamos las disciplinas fundamentales recogidas en este real decreto de 1930, con aquella relación aprobada por real orden de 1 de agosto de 1928, comprobamos las siguientes novedades: desaparecía la materia básica de Derecho natural, que ahora pasa a formar parte de la Filosofía del Derecho, y el Derecho procesal pasaba a denominarse Derecho de procedimientos. Además, en este elenco de disciplinas fundamentales no se especificaba el número de asignaturas que debía tener cada disciplina fundamental, como sí se hacía en la real orden de 1 de agosto de 1928.

Por otro lado, el real decreto modificaba el mínimo de escolaridad, que sería, como máximo, de cuatro años y un semestre; y de cuatro años sólo cuando ingresasen los alumnos en la Facultad con el examen de madurez para el grado de bachiller, cumplidos los diez y siete años.

El artículo 12 del real decreto también añadía otras reglas adicionales:

1. Las enseñanzas de Economía política, Hacienda Pública, Historia del Derecho español, Derecho político, Derecho administrativo, Derecho canónico, Derecho internacional público y Filosofía del Derecho podrán ser consideradas como del tipo BA, de especialidad profesional, con cursillo elemental y preliminar sólo obligatorio. En la de Derecho canónico será igualmente obligatorio el cursillo de Derecho matrimonial.
2. La Facultad podrá pro-

¹⁰⁹ Real decreto de 25 de septiembre de 1930, artículo 54.

¹¹⁰ Real decreto de 25 de septiembre de 1930, artículo 12.

poner la creación de la Sección de Derecho Público y Ciencias Sociales, en la que serán plenamente obligatorias dichas enseñanzas y solamente obligatorios, en cambio, los cursillos elementales y preliminares de las de Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho de procedimientos, Derecho internacional privado y Derecho romano¹¹¹.

7. *La reforma de 1930 en la Facultad de Derecho de Madrid*

El día 2 de octubre de 1930 se reunió la Junta de Facultad y, entre otros temas, se trató del nuevo estatuto de reforma universitaria, que la Junta estudió siguiendo lo establecido en el artículo 2 del real decreto de 25 de septiembre:

La Facultad examinó el Decreto de 25 de septiembre último sobre Estatuto general de la Enseñanza Universitaria, así como el de la misma fecha determinando el cuadro de estudios obligatorios para los alumnos ingresados en el curso 1930-1931.

El Sr. Decano puso a discusión diferentes puntos de la reforma y, en definitiva, sometió a la Junta el acuerdo que ésta adoptó en los siguientes términos:

La Facultad, ratificando decisiones anteriores, ha acordado considerar como disciplinas fundamentales para la obtención del grado de licenciado en Derecho todas las señaladas en el artículo 12 del Real decreto de 25 de septiembre último, con el carácter consignado en el párrafo 1.º del mismo.

Cursos A: Derecho romano, Economía política, Hacienda pública, Historia del Derecho español, Derecho civil, Derecho político, Derecho administrativo, Derecho penal, Derecho canónico, Derecho mercantil, Derecho de procedimientos, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional privado, Filosofía del Derecho y con el mismo carácter la asignatura de Derecho natural.

En consecuencia, las enseñanzas del primer curso serán las mismas que figuran en el cuadro de ellas ya publicado (Derecho romano, Historia general del Derecho español y Derecho natural), recomendando a los alumnos correspondientes verifiquen lo antes posible la inscripción de la matrícula global a las asignaturas que hayan de cursar en el presente curso académico¹¹².

¹¹¹ *Boletín de la Universidad de Madrid*, 1 (octubre de 1929), 579-580.

¹¹² *Actas de la Junta de Facultad*, 2 octubre 1930, ff. 205-206.

Como vemos, la Facultad se dio por informada y acató la nueva reforma y sus representantes añadieron al elenco de disciplinas básicas la asignatura de Derecho natural en el primer curso, con lo que el plan de estudios vigente no varió en sus líneas generales.

Si comparamos el plan de estudios vigente al comienzo del curso 1930-1931, con el que regía en los dos cursos anteriores, comprobamos que las asignaturas son exactamente las mismas que regían el año anterior, con el ligero cambio de denominación de Elementos de Derecho romano y Elementos de Derecho natural por Derecho romano y Derecho natural respectivamente. También comprobamos que no sólo es idéntico el plan de estudios, sino también los horarios de clase: se imparte en todas las asignaturas el mismo número de horas y exactamente los mismos días que en los cursos anteriores.

Sin embargo, el decreto de 1930 introduce reformas en otros campos. De un lado, ya no se habla de la exigencia de un curso de Lógica y Teoría del conocimiento y otro de Letras o Historia, que, como sabemos, eran obligatorios en el plan de 1928¹¹³. Por otro lado, se mantiene la exigencia de idiomas¹¹⁴. En el real decreto-ley de 19 de mayo de 1928 se indicaba que era preceptivo el estudio obligado de dos lenguas, y en la regulación de 1930 se detallaban, como hemos visto, las lenguas entre las que se podía optar.

En la misma Junta del día 2 de octubre, tras aprobarse los programas presentados por todos los profesores de la Facultad, el profesor Flores de Lemus planteó una preocupación que se derivaba de lo dispuesto en el artículo 12 del citado real decreto de 25 de septiembre:

A propuesta del Sr. Flores de Lemus, la Facultad acordó llamar la atención del Ministerio sobre los problemas que suscita la autorización concedida en el párrafo 3.º del artículo 12. Abierta la posibilidad de que las facultades consideren como del grupo B, A de especialidad profesional con cursillo elemental y preliminar sólo obligatorio, las enseñanzas de Economía política, Hacienda Pública, Historia del Derecho español, Derecho político, Derecho administrativo, Derecho canónico, Derecho Internacional Público y Filosofía del Derecho, resulta indudable que las facultades

¹¹³ Artículo 5 del real decreto-ley de 19 de mayo de 1928.

¹¹⁴ Real decreto de 25 de septiembre de 1930, artículo 13.

pueden en ejercicio de esa autorización disminuir excesivamente el estudio de tales disciplinas en los escolares, haciéndose posible incluso que se establezca una competencia desleal entre las facultades de poco alumnado, al rebajar enormemente la enseñanza exigible a los escolares sobre aquellas importantes disciplinas ¹¹⁵.

El párrafo cuestionado del decreto de 25 de septiembre venía a equiparar unas asignaturas que eran cursos de conjunto y materias obligatorias para la licenciatura de Derecho, con unos cursos de especialidad profesional. El dejar al arbitrio de las facultades esta posibilidad, podía ser una puerta abierta para a la larga llegar a la devaluación de estas asignaturas, ya que el artículo 7 del real decreto de 25 de septiembre señalaba que la organización de estos cursos correspondía libremente a cada Facultad y la competencia entre las facultades para atraer al alumnado podía llevar a rebajar los niveles de exigencia.

El citado artículo abría otra puerta a la discrecionalidad de las facultades, que no mencionó el profesor Flores de Lemus, y que también podía afectar al contenido de algunas asignaturas. El párrafo 4.º decía lo siguiente: «La Facultad podrá proponer la creación de la sección de Derecho público y ciencias sociales, en la que serán plenamente obligatorias dichas enseñanzas y solamente obligatorios, en cambio, los cursillos elementales y preliminares de las de Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho de procedimientos, Derecho internacional privado y Derecho romano».

Evidentemente, la rápida sucesión de planes o de reformas llevó consigo cierto desbarajuste en las facultades y, quizás particularmente, en la de Derecho, debido a su volumen de alumnos. Comprobamos así que en el curso 1930-1931, los estudiantes de Derecho podían estar sujetos a tres planes distintos: los de cuarto y de quinto, al plan anterior al real decreto-ley de 1928; los de segundo y tercero, a este real decreto-ley de 1928, conocido como plan Callejo; y los de primer curso, al nuevo régimen establecido por el real decreto de 24 de septiembre de 1930.

El descontento generado entre los alumnos que quedaban sometidos al plan Callejo derivó en protestas estudiantiles y en multitud de peticiones para que su aplicación fuera anulada, debido a su

¹¹⁵ *Actas de la Junta de Facultad*, 2 octubre 1930, ff. 203-208.

mayor exigencia ¹¹⁶. Y el descontento también fue generado por la confusión que se introducía en los estudios y por las dificultades de aplicación de este plan en un curso ya comenzado.

Con este motivo se dictó seguidamente el real decreto de 5 de septiembre de 1930, que en su artículo 54 dejaba un amplio margen a las facultades para solventar las situaciones en las que existiese la imposibilidad de seguir en algún punto aquel plan, para los alumnos que comenzaron la carrera con él: «Los alumnos que ingresen por primera vez en la universidad, con posterioridad al curso 1929-1930, seguirán los planes de estudio que las facultades establezcan para el cumplimiento de este decreto. En adelante, toda modificación que las facultades introduzcan en dichos planes no será aplicable en principio a los alumnos que con anterioridad hayan comenzado su carrera. En todo caso, de no poderse seguir en algún punto el plan bajo el cual comenzaron los estudios, establecerá la Facultad el acomodo propio del cambio, sin poder recargar al alumno las exigencias vigentes al comienzo de su carrera».

El real decreto de 5 de septiembre de 1930 quedó complementado con la real orden de 3 de noviembre del mismo año, que autorizaba a las facultades y Junta de Gobierno de las universidades a adoptar ciertas medidas respecto a los alumnos de segundo y tercer curso del plan de 1928, con el fin de acordar el acomodamiento de sus planes y liberalizar algunos puntos de aquel plan. Les permitía así conceder en cualquier momento la matrícula o el cambio de matrícula que sea indicado, sin sujeción a las precedencias, incompatibilidades y escalonamientos de materias del régimen de 1928, y en cambio, con la amplitud, libertad y autonomía del régimen de 1930» ¹¹⁷.

¹¹⁶ Por ejemplo: «dan cuenta a la Junta de los disturbios ocurridos en el día de ayer con motivo de la protesta escolar contra el plan Callejo y de la instancia presentada en el día de hoy por la Asociación de Estudiantes Católicos con el mismo motivo, así como de una copia remitida a esta Facultad de la protesta formulada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo contra los decretos de la reforma universitaria aparecidos en la Gaceta del día 29 de septiembre y la imposibilidad de adaptarlos al curso ya inaugurado». *Actas de la Junta de Facultad*, 30 octubre 1930, ff. 212-213.

¹¹⁷ Real orden de 3 de noviembre de 1930.

Las medidas consistían, básicamente, en disminuir los años de escolaridad, resolver sobre pruebas o exámenes de reválida, y la exigencia del conocimiento de lenguas vivas¹¹⁸.

Sobre la cuestión de los años de escolaridad, autorizaba un aminoramiento de los años de previa escolaridad, menor en el régimen de 1930 que en el de 1928¹¹⁹.

Y en cuanto a los exámenes de reválida, se autorizaba que fuera sin cuestionario y sin carácter memorístico, sino con la amplitud de criterio y facilidades del nuevo régimen de 1930¹²⁰. Y finalmente se dispuso que «las facultades y Juntas de gobierno estudien y acuerden el modo de las pruebas y exigencias en el conocimiento de las lenguas vivas, proponiendo un criterio transitorio y un modo gradual de ir cumpliendo en las universidades las exigencias correspondientes para los medios instrumentales de cultura que son las lenguas»¹²¹.

En la Junta de Facultad también se estudió el 11 de diciembre la cuestión de la adaptación del plan de estudios de 1928 al nuevo decreto de 25 de septiembre de 1930. Aunque las asignaturas seguían siendo sustancialmente las mismas, sin embargo, existían otras reglas colaterales que exigían determinadas medidas de adaptación de los dos planes para unificar la situación de los alumnos regidos por un plan y por otro. Así lo reflejan las actas:

El Sr. decano planteó también a la Junta la cuestión del acoplamiento del plan de estudios de 1928 al decreto de 1930. Que a éste se fijara un *mínimum* de cuatro años para la Facultad de Derecho. Que con respecto de las asignaturas de Lógica y Teoría del Conocimiento e Historia, que aparecen como obligatorios en el plan de 1928, no estaban con tal carácter en el decreto de 1930, el cual sólo exigía el estudio de idiomas, creía conveniente que se propusiera unificar la situación de los alumnos regidos por un plan y por

¹¹⁸ Real orden de 3 de noviembre de 1930.

¹¹⁹ Real orden de 3 de noviembre de 1930, artículo 2: «Que para los mismos puedan acordar las facultades y Juntas de gobierno, con la debida comunicación a la Superioridad y razonadamente, y en relación con la organización del cuadro de enseñanzas, un aminoramiento de los años de previa escolaridad, que era mayor o máxima en el régimen de 1928, y ya no lo es tanto en el de 1930».

¹²⁰ Real orden de 3 de noviembre de 1930, artículo 3.

¹²¹ Real orden de 3 de noviembre de 1930, artículo 4.

otro; y, por tanto, declarar no obligatorias las asignaturas de libre elección fuera de la Facultad de Derecho, y en cuanto a los idiomas, que se fijara en el tablón de edictos la condición de aptitud a acreditar mediante certificado de la Escuela Oficial de Idiomas o por examen consistente en traducir a libro abierto. Y, finalmente, que la cuestión de la reválida quede aplazada.

La Junta así lo acuerda, unificando los planes de 1928 y de 1930, conforme a lo exigido por éste¹²².

La confusión creada y las sucesivas rectificaciones de la reforma dieron pábulo a protestas estudiantiles y también a notas y quejas de los órganos de gobierno de las universidades y facultades. De esta manera, una vez caída la Monarquía, una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno republicano fue una nueva reforma: se derogan todos los planes de estudio vigentes y se restablece la legalidad anterior a la Dictadura¹²³, es decir, el plan de estudios existente antes de la reforma Silió.

8. *El profesorado de la Licenciatura*

Ya hemos repasado las líneas maestras de los planes de estudios jurídicos vigentes en Madrid de este periodo. Seguidamente vamos a fijarnos en algo tan fundamental para la aplicación de los planes de estudio como eran los profesores de la Facultad. Una exigencia importante del nuevo plan de estudios era adaptar el profesorado existente a las nuevas exigencias docentes y de ello se encargaba la Junta de Facultad a medida que se aprobaban los planes o las reformas en asignaturas. Vamos por tanto a recordar quiénes fueron los titulares de las Cátedras a lo largo de este periodo.

Una fuente asequible para conocer este dato son los *Anuarios de la Facultad de Derecho* y, en algún caso, los *Libros del Estudiante*. Estas publicaciones anuales estaban al alcance de alumnos y profesores. Algunas de ellas eran tan completas que incluso incorporaban un listado de las publicaciones de cada uno de los docentes. Otra fuente valiosa, aunque más dispersa, son las propias actas de la Junta de Facultad, en cuyo margen aparece sistemáticamente la

¹²² *Actas de la Junta de Facultad*, 11 diciembre 1930, f. 216.

¹²³ Decreto de 13 de mayo de 1931.

relación de profesores que asistieron a dicha Junta. Este último dato no es siempre fiable, ya que algún profesor, formando parte del plantel de catedráticos, no asistió durante varios años a ninguna Junta.

Si repasamos estas fuentes, comprobamos una vez más la gran continuidad en las asignaturas; en lo referente a los catedráticos que las impartieron, también hubo en ellos una gran continuidad. A ello contribuía el carácter de la Universidad Central como universidad término. Las muy escasas variaciones se produjeron por jubilación (por ejemplo, Posada), por fallecimiento (por ejemplo, Díaz Canseco) y, en algún caso, por motivos políticos (por ejemplo, Yanguas Messía). En apéndice ofrezco una relación de los profesores y de las asignaturas que impartían en los estudios de la Licenciatura de Derecho en los cursos desde 1922-23 hasta el 1930-31

Como balance, comprobamos que en estos nueve cursos hubo un total de veintidós Catedráticos en los cursos de la licenciatura de Derecho¹²⁴ Algunos como Román Riaza —que sustituye a Díez Canseco— pasarían del doctorado a la licenciatura. Otros impartieron sus enseñanzas en dos asignaturas: Yanguas en los dos Derechos internacionales, Becaña, en las asignaturas de Derecho procesal, o De Diego en las de Derecho civil. Todos ellos fueron grandes maestros y sus opiniones sentaron cátedra en sus especialidades. Y fueron ellos los primeros que debieron adaptarse a las novedades de cada nuevo plan para aplicarlo en la Facultad.

9. *La formación en la práctica del Derecho*

En toda la universidad española en este periodo era muy significativo el elevado número de alumnos con matrícula libre o no oficial. Este fenómeno se percibía muy particularmente en la Facultad de Derecho de Madrid, donde el número de alumnos libres había aumentado considerablemente en el periodo 1923-1930¹²⁵ y superaba ampliamente al de alumnos oficiales. El que tantos alumnos optasen por formarse al margen del cauce escolar ordinario, para

¹²⁴ No incluimos aquí los que hubo en el doctorado.

¹²⁵ En 1923 había en la Facultad de Madrid 5.733 los alumnos libres de Derecho, cifra que había ascendido en 1930 a 7.729 alumnos.

muchos significaba un fracaso de la enseñanza universitaria¹²⁶. La Junta de Facultad de Derecho de Madrid manifestó en diversas ocasiones su preocupación por esta realidad, ya que era creciente el número de sus alumnos que elegía no asistir al régimen ordinario de clases¹²⁷. Así reflejan las actas de la Junta de Facultad de Madrid del 28 de mayo de 1824 una moción en este sentido de Jiménez de Asúa:

El Sr. [Jiménez de] Asúa da lectura a una moción que dirige a la Junta de Facultad. En ella destaca la fuerte depresión de la matrícula oficial y el crecimiento enorme de la enseñanza libre, que venía oscilando, en años anteriores, en derredor del millar, y que en este curso se ha elevado a mil setecientos. El Sr. Asúa hace presente que debido a la benevolencia con que la Universidad trata al alumno libre, resulta que el estudiante oficial que hizo todo el curso junto a sus Profesores, pasa por más difíciles pruebas que los matriculados no oficiales. Por ello propone el Sr. Asúa que se use del debido y justo rigor en los exámenes y que se autorice para su cátedra un ejercicio práctico. Finalmente el Sr. Asúa ruega a sus compañeros que resuelvan si puede exigirse a los estudiantes de matrícula libre todo el programa oficial o sólo las lecciones explicadas [...] ¹²⁸

¹²⁶ Quizá puedan ser diversos los motivos de este elevado número de matrículas no oficiales: la realidad de que muchos estudiantes debían compatibilizar el trabajo con el estudio; el bajo nivel intelectual del alumnado; la búsqueda de un aprobado y un título; o el escaso interés real por aprender de muchos de los alumnos. Esto también implicaba un cierto menoscabo del prestigio de la enseñanza oficial y podía reflejar un menor interés del profesorado. Y todo ello repercutiría en la calidad de las enseñanzas.

¹²⁷ Por ejemplo, este asunto fue estudiado en las Juntas de Facultad del 26 de mayo de 1924, de 28 de mayo de 1924 o en la de 1 de marzo de 1929.

¹²⁸ *Acta de Junta de Facultad*, 28 mayo 1924, f. 23. Continúa esta acta: «Pide la palabra el Sr. Flores de Lemus para decir que el ejercicio práctico propuesto por el Sr. Asúa lo viene él exigiendo en los exámenes desde que se encargó de la cátedra y que estima que se halla expresamente consignado en las disposiciones vigentes.

En vista de lo dicho por el Sr. Flores de Lemus, se leen los preceptos legales y, sobre todo, el real decreto de veintiocho de mayo de mil novecientos catorce y después de oír las observaciones hechas por los Sres. Posada, De Diego, Gascón, Fernández Prida, Flores de Lemus, Ureña, Montejo y Canseco, se acuerda que los exámenes de alumnos no oficiales serán

Esto significaba, entre otras cosas, que muchos alumnos no consideraban imprescindible asistir a clase para adquirir una mínima formación jurídica. La formación teórica que se recibía en las lecciones en clase se podía suplir con el estudio de unos manuales o de unos apuntes de clase pasados de mano en mano. Una de las deficiencias que parece acusaba la enseñanza del Derecho tradicional era precisamente su carácter teórico y memorístico, carente de una adecuada formación práctica. En distintos foros se acusaba a la Facultad de Derecho de formar licenciados que no conocían la práctica jurídica. Las reformas de Callejo y de Tormo plantean claramente intentar suplir esta carencia, favoreciendo la enseñanza práctica del Derecho y la formación para el ejercicio de las profesiones jurídicas.

Las asignaturas prácticas

Desde décadas se había intentado dar una formación más práctica con la declaración de algunas asignaturas de la carrera como asignaturas prácticas. Este título llevaba aneja una cantidad adicional —derechos de prácticas— que debía ser abonada junto con los derechos de la matrícula de esa asignatura. Esa cantidad se destinaba a sufragar los gastos extraordinarios de material junto con los sueldos adicionales que suponía contar con uno o varios ayudantes de clases prácticas. Fomentar las asignaturas prácticas era un medio de promover el estudio de la práctica del Derecho, aun-

como se ordene en las disposiciones vigentes. El examen será en un solo acto y constará de estos ejercicios:

1.º Preguntas hechas libremente por el catedrático sobre puntos de la asignatura.

2.º Ejercicio práctico.

3.º Responder el alumno a una lección del Programa elegida por él de entre tres sacadas a suerte. [...]

Sobre la cuestión planteada por el Sr. Asúa, referente a la exigencia del programa íntegro o sólo de las lecciones empleadas, la Junta se pronuncia por este último criterio, pero haciendo constar que para el curso próximo, todos los profesores deberán presentar antes del 1.º de octubre los cuestionarios de sus respectivas materias, que han de servir, en toda su extensión, para los exámenes de los alumnos no oficiales».

que en su declaración intervenían otras consideraciones o intereses (prestigio para la asignatura, más carga docente, posibilidad de contar con un ayudante propio, etc.). Cada año la Junta aprobaba una relación de las asignaturas que serían consideradas prácticas para el año siguiente.

La organización de las clases prácticas implicaba para la Facultad la previsión de contar con unas aulas apropiadas para este tipo de enseñanza; contar igualmente con unas bibliotecas bien dotadas; habilitar unos horarios específicos para las clases prácticas, al margen del horario oficial marcado para las asignaturas de la Licenciatura; y, finalmente, buscar el medio de retribución extraordinaria para todos los gastos personales y materiales que este complemento de la enseñanza oficial exigía.

Como sabemos, dentro del plan de creación de una nueva Ciudad Universitaria se encontraba también el proyecto de una nueva Facultad de Derecho. En la Junta de Facultad del 11 de diciembre de 1928, Gascón y Marín hizo constar que había examinado los planos del proyecto de nueva Facultad de Derecho y señala que «encuentra no apropiada la distribución hecha toda vez que sobran locales para clases orales, salones, etc., mientras las imprescindibles para trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.»¹²⁹ Por ello se ofreció a los miembros de la Junta una copia de los planos para que cada uno pudiera hacer en esta línea las observaciones que considerase pertinentes, lo que así se hizo¹³⁰. Por tanto, en el diseño de los planos del actual edificio central de la Facultad de Derecho intervino varias veces aquella Junta de Facultad para mejorar las posibilidades docentes de sus instalaciones.

¿Cuáles eran las asignaturas prácticas en la Facultad de Derecho de la Central y qué profesores las impartían? Hay que señalar previamente que no sólo las asignaturas de la Licenciatura podían ser declaradas como prácticas. De hecho, como hemos visto, había algunas asignaturas del doctorado que también lo eran. Y por otro lado,

¹²⁹ *Actas de la Junta de Facultad*, 11 diciembre 1928, f. 127.

¹³⁰ En la siguiente Junta se confirmó la disposición de la Junta constructora para facilitar una copia de los planos de la Facultad para la revisión de la distribución de los locales por parte del profesorado (*Actas de la Junta de Facultad*, 16 enero 1929, f. 128). Estos planos estaban ya a disposición de los profesores en la Junta del 7 de abril de 1931 (*Actas de la Junta de Facultad*, 7 abril 1931, ff. 235-236).

era posible que algunas asignaturas tuvieran varios profesores de clases prácticas. Además, solamente las asignaturas prácticas tenían asignado un auxiliar exclusivo y las que no lo eran, tenían un auxiliar compartido ¹³¹.

He aquí una relación de asignaturas prácticas y sus profesores, de octubre de 1930: Elementos de Derecho natural (Guillermo López Durán); Historia del Derecho (Antonio Serra Piñar); Economía política (José Ignacio Aldama); Derecho político (Gaspar Bayón y Chacón, Vicente Herrero Ayllón, Antonio Llano Díaz de Quijano, Francisco Ayala García Duarte, Juan Lladó y Sánchez Blanco, María Palancar Moreno, Rafael Gamonal Michelena); Derecho canónico (Miguel Hernández Ascó, Francisco Sánchez Miranda, Isidro Arce-negui Carmona, Juan González Úbeda); Procedimientos (Antonio Vidal y Moya); Derecho procesal (Ricardo García Rendueles); Derecho internacional público (Luis Soler y Puchol); Derecho mercantil (Jesús Rubio, María Palancar Moreno, Vicente Herrero Ayllón); Derecho penal¹³² (José Rodríguez Muñoz, Emilio González López, Esteban Mirasol); Estudios superiores de Derecho penal y Antropología criminal (Alfonso Querejazu, Jerónimo Mallo); Historia de las instituciones civiles y políticas de América (Santiago Magariños).

Aparte de estas asignaturas, también solían ser prácticas algunas más: Derecho civil (parte general), Derecho administrativo y Derecho internacional privado y Filosofía del Derecho. Así, en el curso 1930-1931 la mayoría de las asignaturas eran prácticas y sólo quedaban como teóricas de licenciatura las siguientes: Derecho natural, Derecho romano, Economía política, Derecho civil 1.º y 2.º curso y Hacienda pública ¹³³.

¹³¹ Las asignaturas de la carrera de Derecho estaban agrupadas en bloques o grupos de asignaturas de cara a su atención docente. Así, por ejemplo, un grupo lo formaban las de Derecho penal y Antropología criminal; otro lo forman Derecho romano y Derecho canónico. Y también había grupos en las asignaturas de doctorado: por ejemplo, el formado por las de Derecho político, Derecho municipal e Instituciones civiles y políticas de América. *Actas de la Junta de Facultad*, 25 noviembre 1924, ff. 32 ss.

¹³² Dato de enero de 1929. *Actas de la Junta de Facultad*, 16 enero 1929, f. 129.

¹³³ Eran asignaturas teóricas de doctorado las siguientes: Política social y legislación comparada del Trabajo, Filosofía del Derecho, Derecho municipal, Estudios superiores de Derecho político y Estudios superiores de Derecho privado.

El Derecho internacional y las asignaturas prácticas

En la primera Junta de la que conservamos actas durante la Dictadura, la del 25 de noviembre de 1924, se había planteado una cuestión relativa a las tres asignaturas de Derecho internacional del plan de estudios¹³⁴. El catedrático Fernández Prida preguntó en aquella ocasión por qué el grupo de asignaturas de *Derecho internacional público y privado* (de licenciatura) e *Historia del Derecho internacional* (de doctorado) carecían de auxiliar temporal que pudiera en cualquier momento desempeñar estas cátedras. Le contestó en su momento Gascón y Marín que estas asignaturas no estaban declaradas asignaturas prácticas y por tanto no precisaban de una especial dotación docente. Como ya se ha señalado, solamente las asignaturas prácticas tenían asignado un auxiliar exclusivo y las que no lo eran, tenían un auxiliar compartido. La Facultad estudió la cuestión y resolvió encontrar una solución en el acuerdo de que las dos asignaturas de Derecho internacional de la licenciatura, fueran declaradas como asignaturas prácticas, con todos los derechos docentes y económicos que ello implicaba.

La propuesta por parte del decanato de Derecho de la Universidad Central dio lugar a un interesante dictamen de la comisión permanente del Consejo de Instrucción Pública, con fecha 13 de enero de 1926, sobre la declaración de asignaturas prácticas a algunas de la carrera de Derecho y el carácter práctico que conlleva el Derecho. En dicho informe¹³⁵ se indicaba que el Derecho por naturaleza ofrece un doble aspecto teórico y práctico del que participan tanto el Derecho internacional público como el privado¹³⁶. La enseñanza del

¹³⁴ *Actas de la Junta de Facultad*, 25 noviembre 1924, ff. 32 ss.

¹³⁵ *Colección legislativa de Instrucción Pública*, año 1926, ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 14-16. El texto de este informe aparece publicado íntegramente en el Anexo I.

¹³⁶ «[...] En el informe que este Consejo emitió en ocasión de un caso análogo al presente, aunque referente a la asignatura de Derecho civil, de la Universidad de Sevilla, se dijo que el Derecho por naturaleza ofrecía un doble aspecto teórico y práctico, pues así como idea era objeto de la inteligencia, como fin era regla y disciplina de la voluntad que había de observarse en los actos de la vida social. Llamado a regir las relaciones de los individuos, aquel doble carácter tenía que reconocerse en los órdenes todos del Derecho, tanto público como privado, y, por tanto, también el Derecho internacional en las

Derecho debe participar también de ese doble aspecto para lograr la formación del jurista. Aunque la declaración de asignatura práctica parecía lógica y debería solicitarse por todas las universidades¹³⁷, sin

dos manifestaciones que integran su contenido y componen la denominación de esta asignatura en nuestras facultades de Derecho.

La enseñanza jurídica, por otra parte, no se concibe ni se realiza en ninguna parte sin atender a ese doble aspecto que el Derecho ofrece en consideración, porque es el único procedimiento que conduce más derecha y perfectamente que otro cualquiera a la formación del jurista, supremo ideal de las facultades de Derecho».

«No basta con la comprensión y reflexión, por hondas que sean, de los principios jurídicos. Es menester que los alumnos se acostumbren, o por lo menos en ello se inicien y orienten, a extraer la inagotable fecundidad de aquellas reglas y fórmulas que frente a los casos y relaciones sociales concretos, dan la solución justa o la ordenación adecuada de los mismos» (real orden de 14 de enero de 1926).

¹³⁷ «La consecuencia que emana de las consideraciones que anteceden es que la declaración solicitada debiera dictarse con carácter general para todos los estudios de derecho internacional de las universidades del Reino.

Mas pesa mucho sobre este consejo la consideración que ya se hizo en el dictamen recordado al principio de este informe.

La eficacia de los métodos depende, no sólo de su intrínseca virtualidad, sino del acierto en su publicación, y ésta, a su vez, no solamente de la habilidad técnica del que la practica, sino de los métodos y condiciones que están fuera del operante, como material científico, bibliotecas y laboratorios, número de alumnos, etcétera, etc., y en su consecuencia, aun supuesta la aptitud de los llamados a la aplicación del método, ya el Consejo la reconoce con justicia en todos los catedráticos; el defecto de cualquiera de estas otras circunstancias podría hacer peligrar los beneficios de la declaración, imponiendo un sacrificio estéril o poco recompensado a los padres de familia con el pago de los derechos de prácticas. Como esas condiciones externas que contribuyen a formar el medio más o menos favorable a la acertada y fecunda aplicación del método son muy variados de universidad a universidad, y por nadie son mejor conocidas que por los catedráticos mismos, al celo de éstos se encomiendan y aun recomienda en los casos aboadados que motiva la declaración de prácticas para sus asignaturas.

El poder público, que ahora se abstiene de hacer la declaración con carácter general por la razón apuntada, tomará la decisión correspondiente en vista de la instancia o petición que en cada caso se eleve.

Procede pues, a juicio de la mayoría de la comisión, que la Superioridad otorgue la declaración solicitada por la Universidad de Madrid» (real orden de 14 de enero de 1926).

embargo, la efectividad de esta declaración dependía de las capacidades y posibilidades reales docentes —material científico, bibliotecas y laboratorios, número de alumnos y profesorado, etc.— de cada una de aquéllas, de ahí que debiera solicitarse y estudiarse particularizadamente cada caso concreto, sobre todo cuando se exige el pago especial de unos derechos de prácticas¹³⁸. Y concretamente para el caso de la Universidad de Madrid, el ministerio accede a la petición de la Facultad de Derecho, de acuerdo con lo dictaminado por el Consejo de Instrucción Pública y declara prácticas las asignaturas de Derecho internacional público y Derecho internacional privado¹³⁹.

La necesidad de dotar a la enseñanza del Derecho de un carácter práctico será una demanda del profesorado universitario. Habrá un incremento de las llamadas asignaturas prácticas, lo que suponía contar con algunos derechos económicos adicionales, unas mayores posibilidades docentes y un prestigio añadido para la asignatura. Especialmente tras el decreto Callejo se va a tratar esta cuestión con cierta frecuencia en las Juntas de Facultad y se van a poner en marcha los cursos profesionales contemplados en la reforma.

*Los cursos especiales en la Facultad de Derecho*¹⁴⁰

En su intervención en la Asamblea Nacional el 14 de febrero de 1928, el ministro Callejo defendió el ya estudiado proyecto de ley de bases de reforma universitaria. Entre sus palabras Callejo destacó que con la reforma «también se busca que haya enseñanzas de carácter marcadamente profesional en que se prepare a los alumnos para todas esas actividades de carácter social que se han de acometer dentro del ejercicio profesional»¹⁴¹.

¹³⁸ *Actas de la Junta de Facultad*, 25 septiembre, ff. 48 ss. En ella se aprueba el nombramiento de Joaquín Fernández y García Mendoza para ayudante de clases prácticas de esta asignatura.

¹³⁹ Real orden de 14 de enero de 1926.

¹⁴⁰ Vamos a estudiar en este apartado solamente los cursos profesionales. Dejamos los cursos monográficos de investigación (C) para un trabajo aparte.

¹⁴¹ *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, 14 febrero 1928, n.º 13, 477-479.

El proyecto de Callejo quedó recogido en el articulado del real decreto-ley de 19 de mayo cuando establecía, junto a los cursos obligatorios básicos A), el establecimiento de unos cursos especiales B) y C) en las facultades (arts. 9 y ss.). Particularmente el artículo 10 b) desarrolla las características de los cursos B), que serán «cursos teóricos o prácticos en los cuales se desarrolle una especialidad comprendida en alguna de las disciplinas fundamentales o conexas con ella y que tienen una finalidad principalmente profesional»¹⁴².

Lo establecido en la ley significaba que, aparte de dotar las enseñanzas de la licenciatura en Derecho de una orientación profesional, las facultades de Derecho podían organizar cursos complementarios para mejorar la formación de sus alumnos y prepararles mejor a ellos y a determinados colectivos para el mundo profesional. Estos cursos eran organizados libremente por cada Facultad, según sus deseos y posibilidades, y estaban al margen de la licenciatura. Podían ser impartidos por catedráticos, por auxiliares y también por otras personas ajenas a la Facultad, siempre que fueran de reconocida competencia científica o de acreditada pericia profesional (art.13), con autorización del ministerio para el caso de más de un curso en el caso de aquéllos últimos (art. 14).

El art. 20 establecía también que «las facultades podrán organizar planes de estudios que se orienten hacia profesiones concretas, para las cuales no basten o sean excesivos los conocimientos exigidos para el título de licenciado. Estos planes, cuya duración y extensión fijará libremente cada Facultad, se nutrirán con cursos de las clases A) y B), sirviendo para tal fin los mismos de ambas clases que se hayan seguido para la licenciatura y añadiendo las enseñanzas complementarias que se estimen precisas». En artículos siguientes se daba algunas indicaciones adicionales sobre estos cursos¹⁴³.

Una escuela de funcionarios y una escuela de periodistas

El artículo 25 del real decreto-ley de 19 de mayo mandaba que las facultades de Derecho de Madrid y de Barcelona y aquellas otras que se consideren con vocación y medios para ello, presenten en el

¹⁴² Artículo 10 b) del real decreto-ley de 19 de mayo.

¹⁴³ Artículos 21-25 del real decreto-ley de 19 de mayo de 1928.

plazo de siete meses al Gobierno un proyecto de cursos profesionales para funcionarios administrativos.

El ministro Callejo quería que la universidad preparase un ejército de funcionarios al servicio de la Administración. Ya en su discurso en defensa del proyecto de ley de bases, Callejo se refirió a la formación profesional en las facultades de Derecho. Tras lamentar que en muchas oposiciones jurídicas quedaran plazas desiertas, «porque no se les enseñó lo que luego se les exige y salieron de las universidades con unas cuantas ideas inconexas que no les basta para ganar una plaza en oposición», el ministro defiende una enseñanza más práctica y profesional.

En el mismo discurso y poco más adelante, propone Callejo la creación en la Facultad de Derecho de dos escuelas profesionales:

una es la escuela de funcionarios, porque no cabe duda que dentro de la Facultad de Derecho en alguna de ellas puede instaurarse, puede esbozarse la iniciación de esos estudios, observando aquellas normas que el Estado considere necesarias para el ingreso de sus funcionarios; y otra también, que acaso pueda aparecer un poco dispar con el proyecto, pero que [...] he creído deber traer y la sección 10.^a ha admitido, es la escuela de periodistas. Aunque no me toca discutir si es o no conveniente que venga a tener formación técnica el periodista; lo que prueba que no estoy equivocado porque lo acepte la sección, es que si se llega a instaurar esta escuela de periodistas, no puede ser ajena a la universidad, sino que en la universidad tendrá su asiento y de la universidad se reclutará el profesorado que haya de formar en adelante a los periodistas ¹⁴⁴.

En el dictamen del proyecto de ley de bases, el apartado correspondiente a la base 4.^a, el n.º III señalaba que «las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de Madrid presentarán al ministerio de Instrucción Pública, en el plazo de un año, un proyecto de Escuela de periodistas». Por tanto, en la mente del legislador eran estas dos facultades las que debían de encargarse de elaborar un primer proyecto inicial. Pero como hemos comprobado, de lo previsto en el dictamen de la sección décima y en la misma voluntad del ministro, sólo prosperó finalmente en la ley la idea de hacer unos cursos profesionales para funcionarios administrativos, ampliando el plazo

¹⁴⁴ *Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional*, 14 de febrero de 1928, n.º 13, p. 478.

legal para presentar el proyecto de seis a siete meses (art. 25). El Gobierno se reservaba también —señala este mismo artículo— la Facultad o facultades que han de tener a su cargo la organización y desempeño de tales cursos.

Los cursos profesionales para funcionarios en la Facultad de Derecho

A finales del siglo XIX regía en España un sistema de reclutamiento de funcionarios públicos común a otros países europeos y que consistía en que la Administración se nutría directamente de la universidad. A principios del siglo XX se modificó este método que había resultado eficaz y la Administración empezó a reclutar sus empleados de gente formada fuera de la universidad. En unas reformas de 1918 se volvió al régimen europeo y se estableció el ingreso directamente en la Administración pública como jefe de administración. Sin embargo, esta normativa no tuvo continuidad y en la década de los veinte era habitual el paso de los empleados administrativos a los cuerpos técnicos de la Administración. Ante el problema de reclutar cuadros preparados para el servicio del Estado y para mejorar la preparación del funcionariado, el ministerio llevaba tiempo estudiando fórmulas para formar cuadros para funcionarios administrativos. A través de la dirección general de enseñanza superior, llegó a consultar a la Facultad de Derecho la posibilidad de introducir en la universidad algo parecido a academias preparatorias para oposiciones del Estado. En su momento la Facultad se opuso de forma tajante a cualquier forma de academia en su seno.

Esta cuestión fue sometida al Consejo de Instrucción Pública y en aquella ocasión Díez Canseco indicó que aquellos proyectos eran completamente rechazables, pero en cambio la formación de los funcionarios de la Administración sí era una labor que podía tener acogida dentro de los fines de la universidad¹⁴⁵. Inicialmente no faltaron profesores que se opusieran a la posibilidad de formar en la Facultad una escuela de funcionarios. Un detractor claro fue Flores de Lemus¹⁴⁶.

¹⁴⁵ *Actas de la Junta de Facultad*, 16 febrero 1929, ff. 129-131.

¹⁴⁶ Otros profesores, como Gascón y Marín, pensaban que «la Universidad puede plantear cursos de índole científica sobre ciertas especiali-

En la Junta de Facultad del 3 de febrero de 1926, este profesor había informado haber sido nombrado miembro del patronato del Instituto de Estudios Locales «Escuela de Funcionariado». La Facultad en aquella ocasión acordó pedir a Gascón y Marín que hiciera las gestiones necesarias para atraer dichos estudios a la Facultad de Derecho¹⁴⁷, lo que demuestra el interés de la Junta por comenzar esta formación específica para funcionarios. Este antiguo deseo fue impulsado por lo establecido en la ley del 19 de mayo de 1928 sobre los cursos especiales en la Facultad de Derecho y la creación en varias universidades de unos cursos para funcionarios.

En aplicación de lo previsto en aquel real decreto-ley, en la Junta del 10 de julio de ese mismo año algunos profesores se ofrecieron para organizar los primeros cursos especiales: uno de instituciones civiles¹⁴⁸ y otro de Derecho inmobiliario, a cargo del profesor Jerónimo González, quien presentó un completo programa antes de septiembre¹⁴⁹.

Para organizar lo mandado en el real decreto-ley de 19 de mayo sobre los cursos B) y C), al cumplirse los seis meses de su vigencia, en la Junta de Facultad de 7 de noviembre el decano invitó a los profesores a hacer una propuesta de planes sobre estos cursos¹⁵⁰. Por turno fueron interviniendo distintos profesores haciendo sus propuestas. El primero en hablar fue el secretario de la Facultad, Sánchez Román, quien ratificó su informe favorable respecto al curso de Derecho del profesor Jerónimo González, cuyo comienzo estaba pendiente de su total restablecimiento.

Gascón y Marín seguidamente propuso a la Junta que «antes de decidir sobre la concreta implantación de algunos de estos cursos,

dades de la Administración, estimulada a este fin por otros ensayos que ella hizo». Cita el ejemplo expreso del curso de Derecho inmobiliario organizado por Jerónimo González. *Actas de la Junta de Facultad*, 16 febrero 1929, ff. 131-132.

¹⁴⁷ *Actas de la Junta de Facultad*, 3 febrero 1926, f. 56.

¹⁴⁸ «Acordó la Facultad organizar el curso de Instituciones civiles, dirigiéndose al Patronato para que establezca la dotación precisa de un profesor, a quien se encomiende esta enseñanza». *Actas de Junta de Facultad*, 10 julio 1928, f. 117.

¹⁴⁹ Un problema en la vista impidió a este profesor comenzar según lo previsto, por lo que la Junta de Facultad le autorizó para empezar el curso en cuanto se lo permitiera su salud. *Actas de Junta de Facultad*, 10 julio 1928, f. 117 y 20 septiembre 1928, ff. 123-124.

que no rehuía pues estaba dispuesto a dar un curso sobre lo contencioso-administrativo, era indispensable, sin embargo, dirigir a la Junta de gobierno de la universidad la consulta de cómo debían de ser abiertos estos cursos, condiciones de matrícula y retribución al profesor encargado; pues era su parecer contrario a que dichos cursos pudieran retribuirse con el importe recaudado de la matrícula correspondiente; manifestaciones que hacía a título general, pues su intención íntima era, sin duda, la de desempeñar gratuitamente el servicio, si los compañeros de Facultad, en su día, no rechazasen el precedente como perjudicial desde el punto de vista objetivo»¹⁵¹.

Hubo algunas propuestas más: Joaquín Garrigues se ofreció para dar un curso de Derecho de sociedades; Sánchez Román propuso que se invitase al catedrático excedente de Derecho mercantil Antonio Sacristán, para que diera un curso sobre un tema de Derecho privado; y también propuso a sus compañeros organizar otro curso sobre materias de Derecho privado que podría ser dado por los profesores Garrigues, Sacristán, De Diego y el mismo Sánchez Román. Finalmente la Facultad resolvió dejar en suspenso toda la programación de los cursos especiales hasta que se resolviese la consulta por Gascón y Marín a la Junta de gobierno de la universidad¹⁵².

Dos meses después, una real orden ministerial de 28 de enero de 1929 recordaba a las Universidades de Madrid y de Barcelona expresamente y, en general, a las demás universidades, los «cursos profesionales para funcionarios administrativos»¹⁵³. En esa real orden se pedía a las universidades interesadas que remitieran al ministerio el proyecto de dichos cursos, para su examen y aprobación para su inmediato comienzo¹⁵⁴, de lo que se dio cuenta en la Junta del 16 de

¹⁵⁰ «Por último, en orden a los cursos B y C del Decreto de 19 de mayo de 1928, el Decano invitó a los profesores a hacer una propuesta de sus respectivos planes». *Actas de la Junta de Facultad*, 7 noviembre 1928, ff. 121 ss.

¹⁵¹ *Actas de la Junta de Facultad*, 7 noviembre 1928, f. 124.

¹⁵² *Actas de la Junta de Facultad*, 7 noviembre 1928, ff. 123-125.

¹⁵³ Díez Canseco señala en la Junta «la disparidad existente, a su juicio, entre lo dispuesto en el decreto-ley sobre la creación de una escuela de funcionarios y lo indicado por la indicada real orden sobre organización de cursos profesionales para funcionarios». *Actas de la Junta de Facultad*, 16 febrero 1929, f. 131.

¹⁵⁴ *Actas de la Junta de Facultad*, 16 febrero 1929, f. 130.

febrero de 1929¹⁵⁵. En ésta hubo un interesante debate sobre la cuestión en el que participaron varios de los catedráticos de la Facultad. Gascón y Marín considerando las distintas experiencias de los cursos realizados y con la ayuda de Adolfo Posada, dio lectura a unas bases que había redactado. Intervino a continuación el romanista Castillejo, que expresó su temor a dar pie con tal escrito a que el ministerio organizase los cursos, designando cuatro o cinco cátedras nuevas, «que a su vez sería ocasión de pedir para otros tantos titulares expectantes; y que por lo tanto sería preferible que la Facultad revisando los elementos personales con que hoy cuenta, se limitara a decir al ministerio lo que pudiera hacer con el cuadro actual de sus profesores y demás personal preparado»¹⁵⁶. Se observa nuevamente un recelo al intervencionismo del ministerio. En una intervención final de Adolfo Posada, duda, junto a Flores de Lemus, sobre la conveniencia de organizar estos cursos.

En vista de los resquemores de muchos de los profesores, se encomienda finalmente a Gascón y Marín que, «atento al espíritu que había informado la discusión, traiga la redacción ultimada de la respuesta al ministerio»¹⁵⁷. Y fue el mismo Gascón quien en la siguiente Junta presentó un interesante informe sobre estos cursos, que recoge muy bien la opinión de la Facultad y sus inquietudes:

Ha prestado la Facultad de Derecho de la Universidad Central toda la merecida atención a lo preceptuado en el artículo 25 del decreto-ley de 19 de mayo último acerca de la organización de cursos profesionales para funcionarios administrativos y cree no debe omitir al dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superioridad, ciertas consideraciones que justifican la forma en que se cumple el encargo recibido.

En primer término ha tenido presente que el decreto-ley con independencia de los cursos teóricos o prácticos a que se refiere la letra b) del artículo 10, a organizar con finalidad principalmente profesional, demanda un proyecto de cursos profesionales para funcionarios administrativos estableciendo una singularidad orgánica para tales estudios diferenciados de los sujetos a la norma general del artículo 10, e igualmente ha tenido en cuenta que los cursos profesionales pueden encaminarse ya a una preparación de índole

¹⁵⁵ *Actas de la Junta de Facultad*, 16 febrero 1929, ff. 130-131.

¹⁵⁶ *Actas de la Junta de Facultad*, 16 febrero 1929, ff. 131-132.

¹⁵⁷ *Actas de la Junta de Facultad*, 16 febrero 1929, ff. 132-133.

técnica de aspirantes a ingreso en la carrera administrativa general, ya a enseñanzas de orden profesional para quienes tienen adquirida la condición de funcionarios, ya en otro orden de ideas limitarse a enseñanzas de carácter adecuado a las funciones administrativas de la carrera general o a las específicas de cuerpos especiales técnicos o facultativos que intervienen en la aplicación de materias propias del orden científico de nuestra Facultad.

Diversa habrá de ser la organización de tales cursos según que se atienda a una u otra finalidad y no cabe ocultar que dada la práctica seguida por nuestra Administración, el gran número de casos en que el ingreso se verifica por la escala auxiliar pasando a la técnica mediante sencillo examen, sin exigencia de una adecuada formación universitaria, la preparación para tal ingreso no corresponde al orden de función docente que a la universidad está asignada.

Más aunque el ingreso se verifique como fue previsto en la ley de 1918, como posible por categorías superiores que requieren una formación científica de cierta intensidad, la Facultad de Derecho opina que subsistiendo los actuales sistemas de oposiciones-exámenes con cuestionarios concretos, su misión no debe ser en modo alguno la de una preparación para tales exámenes sino en todo caso la más fundamental de proporcionar enseñanzas que faciliten tanto al que aspire a ingresar como al ya ingresado aquella técnica científica jurídico-administrativa esencial al desempeño del cargo público.

Más que la creación de una escuela preparatoria del tipo análogo a las academias de preparación existentes se ha estimado que la función docente debe encaminarse a la especialización universitaria en cierto orden de conocimientos, organizándose cursos de índole científica correspondientes a los conocimientos que en el desempeño de su misión han de aplicar los funcionarios administrativos, todo ello dentro del orden de función docente que a la universidad corresponde y modificables conforme a los medios que en cuanto a personal y recursos económicos disponga la Facultad cada curso ¹⁵⁸.

La siguiente noticia es de la Junta de Facultad del 1 de julio de 1929, en que fue aprobado el proyecto de cuadro de estudios para el curso 1929-1930, ya que debía publicarse en el mes de junio según establecía la cuarta disposición transitoria del real decreto-ley de 19

¹⁵⁸ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 marzo 1929, ff. 137-139.

de mayo de 1928. La Junta de Facultad aprobó este proyecto y también el de los cursos especiales que se proponía desarrollar en el próximo año académico: La transmisión de las obligaciones a título singular *inter vivos* (De Diego); La materia contencioso-administrativa (Gascón y Marín); El derecho de quiebras (Garrigues); La Historia de la Iglesia, especialmente española, durante los tres primeros siglos (Montero); La letra de cambio (Sacristán). La Junta solicitó al Decano que reglamentase, según su criterio, la retribución por concepto de matrículas para estos cursos especiales y su distribución entre los profesores ¹⁵⁹.

En los siguientes meses hubo nuevas propuestas de cursos especiales ¹⁶⁰. Este es el caso del curso «Problemas actuales de la doctrina del Derecho y Principios de Derecho Corporativo», que presentó el profesor auxiliar Francisco Rivera Pastor. La Junta, previo dictamen de los profesores Mendizábal, De Diego y Pérez de Buen, aceptó por unanimidad admitir la propuesta de este curso ¹⁶¹. Estos importantes seminarios y cursos en la Facultad de Derecho con el tiempo serán el germen de la formación de una Facultad de Ciencias Políticas.

Más adelante, en la reunión de la Facultad de 12 de enero de 1931 el decano informó haber iniciado, de acuerdo con Adolfo Posada, la organización de estos cursos especiales de estudios administrativos. En el proyecto presentado por el decano, se incluían los siguientes: Derecho privado (Ramos); Derecho público (Pérez Serrano); Régimen jurídico-administrativo (Cuevas); Estatuto de los funcionarios (Azcoiti); Haciendas locales (Feijoo).

El decano propuso que comenzasen en noviembre y se extendiesen hasta finales de abril, y que la retribución de cada uno fuera 2.000 pesetas, aunque podría ser aumentable hasta 3.000 pesetas si se obtenía la ayuda correspondiente del Ayuntamiento de Madrid. En el proyecto del decano, la matrícula global para cada alumno sería de 5 pesetas ¹⁶².

¹⁵⁹ *Actas de la Junta de Facultad*, 1 julio 1929, f. 149.

¹⁶⁰ Sobre la organización de estos cursos especiales en la Facultad de Derecho durante la II República, se puede consultar mi artículo «El plan republicano en la Facultad de Derecho de Madrid (1931-1934)», en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, 7 (2004), 197-233.

¹⁶¹ *Actas de la Junta de Facultad*, 7 noviembre y 11 diciembre 1929, ff. 161-163.

¹⁶² *Actas de la Junta de Facultad*, 12 enero 1931, ff. 218-221.

10. *Algunas consideraciones finales*

A lo largo de estas páginas hemos repasado los avatares del plan de estudios de Derecho en Madrid desde el establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera hasta la II República. Hemos seguido la evolución del plan de estudios al hilo de las dos principales reformas del periodo: la de Callejo bajo Primo de Rivera y la de Tormo bajo el general Berenguer. Y comprobamos que desde 1922 hasta 1931, en apenas nueve años, han estado vigentes seis planes distintos de Derecho: el de Silió, el anterior a Silió, el de Callejo, el de Tormo y nuevamente el anterior a Silió, a lo que añadimos el nuevo plan provisional de la República de septiembre de 1931. La aprobación de un plan no implicaba contar con un modelo claro de organización de estudios, sino que su aplicación práctica suponía frecuentes rectificaciones y acomodaciones específicas a posteriori.

La elaboración de un plan de estudios exige una amplia reflexión y consulta, y también un importante consenso de todos los elementos que conforman la universidad. Igualmente la aplicación de un plan exige previsión y una lenta adaptación. La universidad es una pesada maquinaria, como un buque de gran tonelaje, donde confluyen multitud de intereses, siempre difíciles de conciliar y de armonizar. En este periodo en que las reformas se suceden con vertiginosa rapidez, la consecuencia es una reacción instintiva de protección dentro de la Facultad: conservar el esquema con el que se está funcionando; proteger a sus profesores, mantener las asignaturas que se imparten y la suficiente docencia, lograr que los cambios legislativos alteren lo mínimo posible la armonía y la paz académica. Esto es lo que reflejan las actas de la Junta de Facultad de Derecho. Lógicamente, la implantación de un plan nuevo no se puede improvisar y su eficacia exige años de sedimentación, aparte de su aplicación gradual desde el primer curso. Contar con un plan nuevo no significaba que ese plan fuera aplicable a corto plazo. Ya hemos señalado que no eran infrecuentes las rectificaciones oficiales y también la necesidad de que la propia Facultad arbitrara medidas extraordinarias para poder resolver los inevitables conflictos. Con frecuencia, las mismas autoridades del ministerio delegaban en la Facultad una amplia potestad de adoptar las medidas que se considerasen oportunas.

Por el contrario, la rápida sucesión de los planes muchas veces hacía que cuando todavía no se había empezado a aplicar un plan,

ya había sido derogado y sustituido por otro, de tal manera que en este periodo nunca dio tiempo a implantar un plan en todos los cursos de la licenciatura. La falta de continuidad en los ministros de Instrucción Pública fue también un serio inconveniente: tanto para la previsión de las reformas como para la aplicación realista del plan, por muchos años que haya llevado su elaboración y por muy acertadas que sean sus previsiones.

La Facultad intentó amortiguar el envite legal y los vaivenes de las reformas, protegiendo la continuidad: continuidad de disciplinas, continuidad de profesores, continuidad de organización de la docencia. Unas veces participando en comisiones de trabajo, consejos de enseñanza o en asambleas; otras veces directamente a través de un trato fluido con el ministerio, mediante notas y representaciones. La Junta aprovechó los distintos resortes legales para mantener el mismo esquema de asignaturas con mínimos cambios. En ocasiones tuvo que acudir a las previsiones legales que autorizan a la Facultad a elegir una o dos asignaturas obligatorias propias. Pero siempre se mantiene un esquema de enseñanzas parecido. Los cambios, de ordinario, afectaban a cuestiones menores: las características del llamado curso preparatorio, la exigencia o no de idiomas, los nombres de algunas asignaturas. Sólo excepcionalmente se crea alguna asignatura nueva. Pero los profesores, horas y días de clase son habitualmente los mismos. Queda por estudiar si los contenidos de cada asignatura variaban o evolucionaban significativamente.

De un lado, esto nos demuestra que la sustitución de las leyes no cambia necesariamente la realidad, o que la aprobación de una ley no implica una efectiva aplicación práctica inmediata o una aplicación real. Es lógico además que, si una Facultad tiene un plantel de profesores, expertos en unas determinadas enseñanzas, que no sea fácil crear o eliminar de repente materias nuevas, o modificar estilos que llevan inercia de décadas de funcionamiento.

Los alumnos eran las principales víctimas de estas constantes reformas o de las imprevisiones que ocasionaba la adaptación a los nuevos planes. En alguna ocasión nos encontramos con tres planes vigentes en la Facultad en un mismo curso académico. A ello añadimos las cambiantes normas de aplicación de estos planes. Con frecuencia, estos problemas de adaptación de los planes fue motivo de queja entre los estudiantes. Y, naturalmente, los alumnos sujetos a un plan se resistían a la aplicación de otro en aquellos puntos que parecían ser más exigentes.

Los distintos planes que se suceden en este periodo tienen ciertamente muchos puntos comunes: se proclama la autonomía universitaria; se favorece el estudio de los idiomas; se establece un núcleo de materias comunes para todas las facultades y la posibilidad de añadir alguna asignatura obligatoria de Facultad; se promueve y se favorecen las asignaturas prácticas y la preparación para el ejercicio profesional; y se busca hacer de la Facultad de Derecho un instrumento para la preparación de funcionarios cualificados.

La inestabilidad política también influyó considerablemente en la universitaria y en la aplicación de los planes. La politización de la sociedad encontró en la universidad un especial campo de cultivo, quizás porque hay pocos sitios que se muevan tanto en el mundo de las ideas y, por tanto, también de las ideologías. La frecuente politización de la enseñanza, el control gubernamental de las aulas, responden a que su control significa poder y es una manera de influir y forjar una determinada sociedad. Y quizás nadie como Primo de Rivera supo lo que suponía tener en frente a estudiantes, a profesores y a intelectuales. Tras los cantos de autonomía de Silió, el control oficial supo a encorsetamiento de las facultades y una contradicción de una política universitaria partidaria de la autonomía.

Es evidente que la universidad es un mundo complejo en el que concurren muchos intereses, y en el que influyen muchos factores externos, porque la universidad debe ser extremadamente sensible a la realidad social. Si la reforma de Silió fue atrevida, pero algo ingenua e idealista, la suspensión de la reforma dejaba las cosas como estaban, o sea, no muy bien, y la Dictadura intentó introducir a la de 1928, con un tono como el de la de Silió, pero más práctico y quizás, atenuado. La reforma de 1928 no funcionó y la de 1930, en una situación nacional al borde del colapso, tampoco resolvió nada, hasta el punto de que cuando llega la República se adopta un plan rígido y centralista, eso sí, provisional, que contrasta con los postulados autonomistas y reformadores de la II República. Pero siempre se comprueba cómo la reforma de los planes de estudio es una de las puntas de lanza de los proyectos que intentan mejorar la Universidad.

La Facultad de Derecho de Madrid contaba en este periodo con conocidos y prestigiosos maestros. Su tradicional cercanía al Gobierno central le permitió influir considerablemente y, en concreto, en la configuración de los planes de estudio de Derecho de toda España. Hay un evidente trato fluido y son frecuentes las con-

sultas escritas, las entrevistas y el correo de notas sobre cualquier aspecto de la enseñanza superior.

El periodo que hemos estudiado es un momento de crecimiento de nuestra carrera de Derecho en cuanto a sus contenidos: aumentan las asignaturas de Derecho civil o de Derecho procesal, se defiende el Derecho natural y no prospera la introducción de una asignatura de derecho del Trabajo. También se favorecen las clases prácticas y los cursos especiales y profesionales, y se sientan las bases para una reforma profunda del doctorado, donde ya hay conatos de acabar con el monopolio de la Universidad Central para extenderlo a todas las universidades.

José María Puyol Montero
Universidad Complutense de Madrid

APÉNDICE ¹⁶³

<i>Asignatura</i>	1922/23	1923/24	1924/25	1925/26	1926/27	1927/28	1928/29	1929/30	1930/31
Derecho romano	Castillejo	Castillejo	Castillejo	Castillejo	Castillejo	Castillejo	Castillejo	Castillejo	Castillejo
Derecho natural	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno	Pérez y Bueno
Historia G. del Derecho	Díez Canseco	Díez Canseco	Díez Canseco	Díez Canseco	Díez Canseco	Díez Canseco	Díez Canseco	Riaza	Galo Sánchez
Economía Política	Flores de Lemus	Flores de Lemus	Flores de Lemus	Flores de Lemus	Flores de Lemus	Flores de Lemus	Flores de Lemus	Flores de Lemus	Flores de Lemus
Derecho político	González Posada	González Posada	González Posada	González Posada	González Posada	González Posada	González Posada	González Posada	Pérez Serrano
Derecho canónico	Cueva Palacio	Cueva Palacio	Cueva Palacio	Cueva Palacio	Cueva Palacio	Cueva Palacio	Cueva Palacio	Montero Gutiérrez	Montero Gutiérrez
Derecho civil (curso de conjunto)								De Diego	De Diego
Derecho penal	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa	Jiménez Asúa
Derecho civil Primer curso	Sánchez Román	Sánchez Román	Sánchez Román	Sánchez Román	Sánchez Román	Sánchez Román	Sánchez Román	Sánchez Román	Sánchez Román
Derecho administrat.	Gascón y Marín	Gascón y Marín	Gascón y Marín	Gascón y Marín	Gascón y Marín	Gascón y Marín	Gascón y Marín	Gascón y Marín	Gascón y Marín
Derecho civil Segundo curso	De Diego	De Diego	De Diego	De Diego	De Diego	De Diego	De Diego	De Diego	De Diego
Procedimientos judiciales. Práctica forense	Montejo y Rica	Montejo y Rica	Montejo y Rica	Montejo y Rica	Montejo y Rica	Montejo y Rica	Beceña	Beceña	Beceña

Derecho internacional público y privado	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	Yanguas Messía	De Luna García
Hacienda pública	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara
Derecho mercantil	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Olózaga Benito y Endara	Garrigues Endara
Práctica forense ¹⁶⁴											Beceña
Derecho internacional privado ¹⁶⁵											Fernández Prida

¹⁶³ Fuente: *Anuario de la Universidad de Madrid*, cursos 1922-1923, 1924-1925, 1927-1928, 1929-1930 y 1932-1933.

¹⁶⁴ Por separación de las asignaturas de Procedimientos judiciales y Práctica forense y redacción de instrumentos públicos.

¹⁶⁵ Por separación de las asignaturas de Derecho internacional en público y privado.

LOS ESTUDIOS Y LOS ESTUDIANTES DE JURISPRUDENCIA Y TEOLOGÍA TRAS LA UNIFICACIÓN DE LAS FACULTADES DE LEYES Y CÁNONES

Sumario: 1.—Planteamiento. 2.—Adaptaciones para los legistas. 2.1. Real orden de 17 de octubre de 1842. 2.2. Exámenes y grados. 2.3. Academias. 2.4. El fin de la reválida. 3.—Adaptaciones para los canonistas. 3.1. Graduados. 3.2. Estudiantes. 4.—Teología. 4.1. Simultaneidades. 5.—Catedráticos. 6.—Consideraciones finales.

1. *Planteamiento*

El 15 de julio de 1842, el regente del Reino, Baldomero Espartero, ordenaba al Gobierno y a la Dirección General de Estudios la unificación de los estudios de Leyes y Cánones, con efectos para el siguiente curso académico. El decreto de 1 de octubre de 1842, conocido como de *reunión* o *refundación*, fusionaba ambas facultades en una sola, bajo el nombre de Facultad de Jurisprudencia, culminando así un largo proceso de acercamiento de Cánones a Leyes que se había ido gestando a lo largo de los planes de estudios anteriores¹.

Los motivos para la referida reunión son de sobra conocidos. En la orden de 15 de julio, el duque de la Victoria se escudaba en la conveniencia de poner fin a la interinidad del *Arreglo Provisional*

¹ Véase la orden y el decreto en *Colección Legislativa*, parte segunda, tomo III, 1842, pp. 292-293 y 418-454, respectivamente. Pueden verse también en *Colección de órdenes generales y especiales relativas a los diferentes ramos de la Instrucción Pública Secundaria y Superior desde 1.º de enero de 1834 hasta fin de junio de 1847*, 2 vols., Madrid, 1847, II, pp. 8-11 y 11-14. Véase un estudio del plan Espartero en M. Peset Reig, «Universidades y enseñanza del Derecho durante las regencias de Isabel II (1833-1843)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 39 (1969), pp. 481-544, en concreto, pp. 527 ss.

de Manuel José Quintana, de 1836, y en la necesidad de reducir gastos superfluos, suprimiendo cátedras innecesarias, para acometer una reforma esperada desde tiempo atrás por amplios espectros sociales y académicos². En el mismo sentido, la orden calificaba a las cátedras de Cánones como «apenas concurridas hoy», cosa del todo cierta y que podemos comprobar con un simple repaso a los libros de matrículas de cualquier universidad. En el caso de la universidad de Madrid, por ejemplo, el número de matriculados en el año académico de 1841-1842, para los dos cursos propios de Cánones previstos en el *Arreglo Provisional* de 1836, se reducía a 23, mientras que en Leyes había matriculados un total de 311 estudiantes —entre sexto, séptimo y octavo—³. Para la universidad de Valencia y en los mismos cursos, los estudiantes de Cánones eran 16 y los de Leyes 287⁴. Para Barcelona, hablamos de 11 y 135 respectivamente⁵.

Otro motivo esgrimido para justificar la reunión de las dos facultades, en este caso en el decreto, era «embarazar [...] con circunspección y con prudencia el excesivo concurso de la juventud que tal menoscabo causa a los verdaderos intereses de muchas familias con notorios perjuicios para la sociedad». Para hacer frente a la tan argüida demasía de abogados, el nuevo plan exigía un curso más para la obtención de la licenciatura, grado que en adelante fue nece-

² Véase C. Tormo Camallonga, «L'advocacia durant la vigència del pla d'estudis de 1824», *Aulas y Saberes. VI Congreso Internacional de Historia de las universidades hispánicas*, 2 vols., Valencia, 2003, II, pp. 511-520; Íd., «Implantación de los estudios de Jurisprudencia en el Arreglo Provisional de 1836: el caso de la Universidad de Valencia», *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad*, 6 (2003), 221-254.

³ Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante, AHUCM), *Jurisprudencia*, D-514, caja 5, *Libro de matrícula de cursantes de 1841 a 1842*.

⁴ Archivo de la Universidad de Valencia (en adelante AUV), *Libros de Matrícula*, 435.

⁵ A. Palomeque Torres, *Los estudios universitarios en Cataluña bajo la reacción absolutista y el triunfo liberal hasta la reforma de Pidal (1824-1845)*, Barcelona, 1974, p. 567. Véase también Biblioteca Universidad de Barcelona (en adelante, BUB), *Sección Reserva, Universidad de Cervera*, cajas 211 y 212. En esta universidad, en la primera matrícula que se redactó de Cánones para el curso 1842-1843, con anterioridad a la recepción del decreto de reunión, sólo aparece inscrito un alumno (en sexto).

sario, sin excepciones, para el ejercicio profesional. Se trataba de un motivo que, de una forma u otra, había estado presente en todos los planes de estudio desde las reformas ilustradas de finales del siglo anterior.

Aun así, es decir, contando con motivos evidentes desde la economía académica para la unificación de ambas facultades, el duque de la Victoria pretendía dejar bien de manifiesto el espíritu progresista de la medida, cuando escribe que la reforma venía guiada por «el espíritu liberal de la época». Sentimiento que queda pretendidamente en evidencia cuando arremete contra los defensores de la tradicional separación, argumentando que se trata simplemente del «afán de ciertas clases de la sociedad española en levantar una barrera privilegiada entre las cosas eclesiásticas y las civiles». A modo de justificación añadía: «como si el jurisconsulto no tuviera que conocer a fondo todas las partes de nuestra legislación, o como si el abogado necesitase duplicar su carrera académica para presentarse a defender con buena esperanza las causas de sus clientes en uno o en otro tribunal.»

La mayoría de los políticos del siglo XIX se había formado en las facultades de Derecho. El hombre liberal tenía una fe ciega en los nuevos tiempos, en la legislación nacida de las nuevas cortes, en los códigos y en las constituciones. La administración y los sucesivos gobiernos estarán formados, mayoritariamente, por legistas. Y, por lo mismo, los nuevos tiempos también requerían de unos nuevos estudios jurídicos, que ya venían introduciéndose, a trancas y barrancas, en los planes universitarios desde las reales órdenes del marqués de Caballero de 1802⁶.

A estas alturas del siglo, y bajo el gobierno progresista de Espartero, tan sólo restaba acabar con la paridad secular —aunque desde tiempo atrás fuera una equiparación meramente formal o académica— entre Leyes y Cánones. Se trataba de actualizar la universidad a los nuevos aires liberales. Aunque por su contenido la unificación de ambas facultades pareciera un simple retoque formal, su matiz

⁶ M. Peset Reig, «La recepción de las órdenes del marqués de Caballero de 1802 en la Universidad de Valencia. Exceso de abogados y reforma en los planes de estudio de Leyes», *Saitabi*, 19 (1969), 119-148; o C. Tormo Camallonga, «Vigencia y aplicación del plan Blasco en Valencia», *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad*, 2 (1999), 185-216.

propagandístico conllevaba una gran trascendencia. Y todo ello en el bien entendido de que, con la reestructuración de la administración de justicia que se estaba llevando a cabo, la jurisdicción eclesiástica iba perdiendo paulatinamente peso y competencias. Por todo ello, con la simple inclusión de algunas asignaturas de Derecho canónico y eclesiástico en una carrera eminentemente civilista sería más que suficiente. De manera que, más que de *reunión* teórica de facultades, debemos hablar *de facto* de la supresión o absorción de Cánones por Leyes bajo el único nombre de *Jurisprudencia*⁷.

En este sentido, los liberales consideraban que los Cánones no podían ni debían formar una carrera propia y autónoma, sino que debían configurarse como unos simples estudios auxiliares tanto para teólogos como para legistas. Pero las diferentes concepciones que los progresistas y los moderados tenían de la Iglesia y de su presencia en el ámbito civil, también se evidenciarán en el distinto tratamiento que unos y otros concedieron a la reforma de los estudios de Cánones y Teología. Lo veremos claramente en la orientación de las disposiciones que a la caída de Espartero en el verano de 1843 dictó el gobierno provisional.

Pero volviendo a las pretensiones de los progresistas, y tal vez para evitar problemas innecesarios, la orden de 15 de julio de 1842 dejaba presentes sus «consideraciones con que hayan de quedar para lo sucesivo los actuales graduados y los profesores de la ciencia canónica, respetando los derechos académicos por ellos adquiridos, o sustituyéndolos con otros equivalentes.» Máxime si consideramos que la reforma se lleva a cabo por decreto y no por ley de Cortes. Se trata de una cosa habitual en la primera mitad del XIX, lo que hacía que los planes de estudios y las reformas se sucedieran una tras otra, sin apenas tiempo para su completa aplicación. Como las constituciones, parece que cada cambio de gobierno requiriera una modificación de los estudios universitarios, especialmente en estas materias.

Atendiendo al mandato de la orden de 15 de julio, se dicta el decreto de 1 de octubre, *Refundiendo las facultades de Leyes y Cánones en una sola, que tomará el nombre de Facultad de Jurisprudencia*. El mismo día se dictaba también la orden de *Instrucciones para la*

⁷ M. y J. L. Peset Reig, *La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*, Madrid, 1974, pp. 679 y ss.

ejecución del nuevo arreglo de estudios para la carrera de Jurisprudencia, en donde se detallaba someramente el contenido de las asignaturas del nuevo plan⁸. Ante los problemas y contratiempos que van apareciendo, en los días y meses siguientes verá la luz una larga lista de disposiciones complementarias que intentarán aclarar y concretar estas instrucciones. Vaya por delante, como conclusión anticipada —y para que al lector no le extrañe tanta acumulación normativa—, que todas las disposiciones que se tomaron sobre adaptaciones tuvieron que ser posteriormente revisadas y matizadas y, lo más destacable, ampliadas sobremanera en sus concesiones.

La mayoría de todas estas normas girarán, fundamentalmente, en torno a uno de estos tres cometidos: por una parte, las compensaciones de cursos a los graduados en Cánones; por otra parte, la nueva situación en que quedaban los teólogos, como consecuencia de las reformas operadas en Cánones; y, por otra, las adaptaciones de curso para los estudiantes de Leyes. Trataremos este último punto en primer lugar y a él le dedicaremos la mayor parte del presente trabajo, tanto por la abundancia y complejidad de sus normas, como por su mayor repercusión práctica. Téngase en cuenta que los legistas superaban con creces a los canonistas y teólogos juntos, sin perder de vista que el decreto de *reunión* declaraba vigentes las disposiciones anteriores en cuanto no se opusieran a las nuevas, con especial mención a los planes de estudios de los ministros Francisco Tadeo Calomarde, de 1824, y José Manuel Quintana, de 1836⁹. De hecho, todavía nos encontramos con algún estudiante residual que solicita conmutaciones de cursos anteriores a 1836, según lo previsto en las normas del *Arreglo Provisional*¹⁰. Para terminar, y de manera mucho más breve, hablaremos de la acomodación de los

⁸ Véase esta última orden en *Colección de órdenes...*, II, pp. 14-20.

⁹ Prueba de esta vigencia es, por ejemplo, la orden de 22 de febrero de 1844 (*Colección de órdenes...*, II, pp. 65-66), que suspendía temporalmente el artículo 305 del plan de estudios de 1824 (*Decretos del rey nuestro señor don Fernando VII*, IX, pp. 230 y ss). Según este artículo, cada dos años se debía sacar a concurso un grado de doctor en Jurisprudencia para adjudicarlo al licenciado más sobresaliente. Puesto que con el plan Espartero el grado de licenciatura se obtenía tras octavo, y no séptimo, y para el doctorado se requerían dos cursos, y no uno, se retrasaba la concesión de este grado hasta el fin del curso 1844-1845.

¹⁰ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 636,67.

catedráticos, especialmente de Cánones, a la nueva distribución de asignaturas, así como de otras cuestiones varias que se plantearon de forma paralela con ocasión del nuevo plan.

A lo largo de las siguientes páginas efectuaremos, pues, un repaso a la legislación que para la facultad de Jurisprudencia y los estudiantes de Teología se dictó durante estos años, hasta la publicación del plan de estudios de Pedro José Pidal de 1845¹¹. Al mismo tiempo estudiaremos su efectiva aplicación en algunas universidades. En concreto, nos centraremos en las de Madrid, Valencia y Barcelona, a la luz de la información que proporcionan sus archivos históricos. Respecto a unos asuntos, podremos realizar un estudio comparativo sobre cada universidad; respecto a otros, nos limitaremos a analizarlos sólo para la universidad de la que poseemos los datos en cuestión.

El seguimiento de la carrera de los alumnos es fundamental en este estudio, pues lo considero clave para entender la verdadera aplicación de la normativa sobre la adaptación de los estudiantes, a éste y a cualquier otro nuevo plan de estudios que pretenda implantarse. No obstante, y por motivos que no alcanzamos a entender —la mayoría de ellos creo que estrictamente personales—, nos vamos a encontrar con numerosos escolares cuyos estudios han seguido una evolución particular y diferente a la del resto. Tales individualidades no deben impedirnos la visión de conjunto.

Pero antes que nada veamos de manera esquemática como quedaba el plan de estudios en el decreto de *reunión* frente al *Arreglo* de Quintana.

PLAN QUINTANA

Leyes

- 1.º Derecho natural y de gentes. Principios de legislación universal
- 2.º Elementos e historia de Derecho romano
- 3.º Elementos de Derecho romano. Principios de Derecho público general
- 4.º y 5.º Elementos del Derecho público y del civil y criminal de España. Instituciones canónicas. Derecho público eclesiástico

Grado de Bachiller

¹¹ *Colección Legislativa...*, XXXV, pp. 215-246.

- 6.º Partidas y Novísima Recopilación. Economía política
- 7.º Práctica forense. Elocuencia forense. Jurisprudencia mercantil

Grados de Licenciado y Doctor

- 8.º Práctica forense. Derecho político

Cánones

- 1.º-5.º Ídem Leyes
- 6.º Instituciones canónicas. Historia eclesiástica.

Grado de Bachiller

- 7.º Disciplina general y nacional. Elocuencia. Práctica de juicios eclesiásticos.

Grado de Licenciado y Doctor

PLAN ESPARTERO

Jurisprudencia

- 1.º Prolegómenos del Derecho. Elementos de historia y de Derecho romano
- 2.º Elementos de historia y de Derecho civil y mercantil de España
- 3.º Elementos de Derecho penal, de procedimientos y de Derecho administrativo
- 4.º Elementos de historia y de Derecho canónico

Grado de Bachiller

- 5.º Códigos civiles españoles, de comercio y criminal
- 6.º Historia y disciplina eclesiástica general y especial de España. Colecciones canónicas
- 7.º Derecho político constitucional con aplicación a España. Economía política
- 8.º Academia teórico-práctica de jurisprudencia

Grado de Licenciado

- 9.º Derecho natural y de gentes, tratados y relaciones diplomáticas de España
- 10.º Principios generales de legislación, legislación universal comparada, codificación

Grado de Doctor

Como vemos, las diferencias no son muchas ni de fondo. Por mucho que se pretendiera ofrecer un nuevo plan de estudios más

actualizado, en los escasos años transcurridos desde el *Arreglo Provisional* de 1836 la ciencia jurídica no había avanzado tanto, ni se había aprobado en España legislación de consideración que mereciese la aparición de nuevas asignaturas.

Más que nada, nos encontramos ante una reestructuración de cursos y contenidos, en la que se observa, en general, una mejor agrupación de las asignaturas, distinguiendo entre las de Derecho público y las de Derecho privado. Se observa también una incipiente autonomía, así como el arranque, de los derechos procesal y administrativo. Y, como reflejo del momento político, destaca el curso de Derecho constitucional, para el que expresamente se señalaban las materias, tan apreciadas por los progresistas, como ayuntamientos y diputaciones, imprenta, elecciones y poder judicial¹². También destaca, en otro orden de cosas, el significativo cambio de la terminología por una más netamente liberal. El nuevo plan ya no habla de *Partidas* y *Novísima Recopilación*, sino de *Códigos*, aunque el contenido fuera el mismo; lo que evidencia el conocido aprecio que los progresistas mostraban por la técnica codificadora, aunque a estas alturas tan sólo estuviera vigente el Código de Comercio. Incluso, se quieren estudiar los fundamentos comparados de la codificación como fenómeno internacional y en su conexión con el Derecho constitucional. Destaca, cómo no, la reducción del Derecho romano; de dos a un año y, ya sabemos, la incorporación de los estudios canonistas y eclesiásticos. Respecto al grado de doctor, se exigen por primera vez unos estudios específicos y posteriores al de licenciado. Se trata de los cursos noveno y décimo, que incluían materias más contemporáneas y muy del gusto de los liberales, como el Derecho natural o el internacional.

Finalmente, es significativo el incremento en el estudio de la Historia. Podemos decir, incluso, que en el plan Espartero la Historia del derecho adquiere carácter de disciplina académica autónoma, al margen de que se siga explicando como parte introductoria de otras asignaturas. Aunque la cátedra de Historia general del derecho español aparece por primera vez en nuestro país en el plan de estudios

¹² M. Martínez Neira, «Relevancia del Derecho administrativo francés en la educación jurídica española», *Forum historiae iuris. Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte*, Artikel vom 27, Mai 2005. Observamos una posible coincidencia o solapamiento de materias entre los derechos administrativo y constitucional.

de Germán Gamazo de 1883 —en 1866 ya existía en la universidad de Madrid para los estudios de doctorado—¹³, el plan de 1842 trata a esta asignatura por primera vez como materia diferenciada de las demás con las que compartía curso, en este caso segundo, y que eran las asignaturas de Derecho civil y de Derecho mercantil de España.

Historia del derecho aparece junto con estas dos asignaturas, y no otras, porque nos encontramos ante materias «íntimamente enlazadas entre sí», por su contenido, orígenes y formación¹⁴. Ensamblar Historia con los Procedimientos o con Administrativo, por ejemplo, resultaría, sin duda, más arduo. Por otra parte, la orden de *Instrucciones* de 1 de octubre hablaba de que no había «necesidad de separar el derecho civil del de comercio», con lo que era obvio que las lecciones de Historia del derecho español podían y debían recibir un tratamiento unitario, a la vez que diferenciado, respecto a aquellas dos materias. Es más, a pesar de lo que parece disponer la orden, los programas de enseñanzas también recogen Civil y Mercantil como asignaturas autónomas.

Detengámonos un poco en Historia del derecho, al ser una de las disciplinas académicas más recientes —amén de la vinculación del que escribe con esta materia—. Aunque sólo se le dedicaba el primer mes del curso, los programas que los profesores presentan nos muestran un temario completo, desde la época de los romanos hasta los tiempos contemporáneos. Es el caso, por ejemplo, del presentado en octubre de 1843 en la universidad de Madrid por el catedrático Carlos María Coronado. Una lectura actual, y dada la desproporción del temario con respecto al tiempo que se le dedicaba, nos obliga a pensar que, más que una realidad factible, resultaba una mera declaración de intenciones, cuyo contenido, eso sí, resultaría la base sobre la que, más adelante, se pudiera construir un programa para una asignatura anual.

Después de pasar por encima, por la premura del tiempo, el estudio de la Hispania romana, el programa se detenía en la legislación y las costumbres godas, así como en los concilios toledanos y, espe-

¹³ M. Martínez Neira, «Los orígenes de la historia del derecho en la universidad española», *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad*, 3 (2000), 71-164.

¹⁴ AHUCM, *Jurisprudencia*, D-510, caja 1, *Programas*, «Programa de enseñanza del Doctor D. C. M. Coronado, catedrático de 2º año de Jurisprudencia de esta universidad», sin núm.

cialmente, en el primitivo código español: el Fuero Juzgo. Obviando el Derecho de los sarracenos, continuaba con la Reconquista, los fueros municipales y el Fuero Viejo de Castilla. Y como remedio para terminar con la anarquía de nuestra legislación —según Coronado—, se presentaba y estudiaba la obra del rey Sabio, prestando un muy detenido estudio al código de las Partidas. Para mejor comprenderlas se estudiaba también el Ordenamiento de Alcalá. Se seguía con el reinado y la legislación de los Reyes Católicos, especialmente el Ordenamiento de Alonso Díaz de Montalvo y las Leyes de Toro, para concluir con el estudio de la Nueva y la Novísima Recopilación.

Al programa se le adjuntaba su propia bibliografía, que también resultaba completa. Se recomendaban las obras de Mariana, Semper, Manresa Sánchez, Burriel, Asso y de Manuel, los discursos que preceden a los cuerpos legales, y la reseña hecha en el Boletín de Jurisprudencia por Pérez Hernández y en las instituciones jurídicas por Seijas Lozano.

En cuanto al método de enseñanza de este segundo curso, me parece interesante transcribir los planes del profesor:

La cátedra será diaria; la primera media hora de ella se destinará a pasar lista y hacer que los alumnos reciten de memoria la conferencia que en el día anterior se les señale; a ésta seguirá la explicación, procurando, si es posible, recaiga sobre la materia que en aquél día se haya estudiado, y el último cuarto de hora o un día en cada semana, se destinará exclusivamente para el ejercicio de preguntas sobre las materias estudiadas y explicadas. En el estudio del derecho mercantil se procurará que los cursantes tomen nota de las explicaciones y se destinará mayor tiempo al índice de ejercicios de preguntas.

2. *Adaptaciones para los legistas*

Por primera vez, las adaptaciones de los escolares de Leyes a los nuevos cursos vendrán ya previstas desde la misma norma que fijaba el contenido del plan de estudios. El artículo 9 del decreto de *reunificación* fijaba las reglas generales que serían desarrolladas por una instrucción posterior de 17 de octubre. Hasta ahora, las normas en que se habían publicado los planes de estudios no contenían precisiones sobre adaptaciones, de manera que las dudas y problemas

que se originaban en su implantación —siempre numerosas— se iban resolviendo, de manera individualizada, según se iban planteando con el tiempo. También era habitual la aparición de alguna disposición posterior que unificaba criterios y generalizaba soluciones. El *Arreglo Provisional* de 1836 ya supuso un notable avance a través de las directrices fijadas por la Dirección General de Estudios¹⁵. El plan Espartero es un paso más en este sentido, lo que tampoco quiere decir, como ya hemos dicho, que las conmutaciones, dispensas y adaptaciones iniciales no tuvieran que reinterpretarse y matizarse —incluso ampliarse— posteriormente. Así fue, y todo indica que en mayor medida de lo esperado en un principio. Algo que tampoco debe sorprendernos.

El punto de partida de toda la normativa para la acomodación de los estudiantes en los nuevos cursos era, según el decreto de 1 de octubre, la salvaguarda de estos dos principios básicos:

- a) La necesidad de cursar ocho años para el ejercicio de la abogacía, con la importante excepción para los que ya fueran bachilleres, que podrían licenciarse y abogar con sólo siete.
- b) Los diez años para el doctorado, con la excepción de los ya licenciados, que podrían obtenerlo, según las disposiciones anteriores, en el término de un año desde la fecha.

2.1. Real orden de 17 de octubre de 1842

Las instrucciones que fijaban las adaptaciones en Jurisprudencia se dictaron con celeridad, por la importante orden de 17 de octubre, teniendo en cuenta que el nuevo plan se iba a aplicar ya en el curso entrante. Pero la orden de 6 de septiembre señalaba para la matrícula todo el mes de octubre, «sin prórroga alguna, mandando terminantemente que no se dé curso a solicitud después por ninguna razón ni motivo, debiendo remitirse las listas de matriculados a los ocho días de concluido el término»¹⁶.

¹⁵ C. Tormo Camallonga, «Implantación de los estudios...», pp. 225 y ss.

¹⁶ *Colección Legislativa*, pp. 472-474 y *Colección de órdenes...*, II, pp. 22-25. AUV, *Libro de Claustros*, 1842, claustro de 28 de octubre. La orden de 6 de septiembre se recibe en el claustro de Valencia del 12 de octubre, y en el de Barcelona del día siguiente. Para el claustro de Barcelona véase BUB, *Reserva*, *Cervera*, caja 329, núm. 2047,41.

Con este cruce de fechas podemos entender el distinto proceder de las diferentes universidades. Mientras que la de Barcelona, después de tener redactadas las listas de matrículas según el *Arreglo Provisional* las tuvo que rehacer para acomodarse a las directrices de la orden de 17 de octubre, la de Valencia no actuó así, sino que las dio por válidas, para efectuar la distribución de estudiantes en el momento de redactar las listas de examinados. Y si las diferencias entre las listas de matriculados y las de examinados son mínimas en los primeros cursos, en los últimos no podemos decir lo mismo. Es más, en el curso siguiente, 1843-1844, las listas de matriculados en Valencia se confeccionarán de nuevo partiendo de la lista de matrículas del año anterior, por lo que sus diferencias con las listas de examinados diferirán todavía más. Por su parte, la complejidad de Madrid radica en el hecho de que no conocemos las listas definitivas y oficiales, sino sólo sus borradores previos, en donde se recogen los alumnos no alfabéticamente sino por orden de inscripción. Las numerosas tachaduras y las confusas anotaciones al margen nos dificultan todavía más su interpretación.

Las instrucciones de la orden eran en total diez, básicas y sencillas, y a efectos de los legistas las refundiremos en cinco, según el curso en que hubiese estado matriculado el estudiante en el año académico 1841-1842.

a) *Los tres primeros cursos*

Los estudiantes que hubieran ganado primero se matricularían en segundo, con la obligación de asistir como oyentes, con certificado de asiduidad, a las clases de Derecho romano del nuevo primero. Los que hubieran ganado segundo, pasarían a tercero, debiendo asistir como oyentes a las clases de Derecho civil de segundo. Y los que hubieran ganado tercero pasarían a cuarto, asistiendo igualmente como oyentes a las clases de tercero.

Se liberaba a los estudiantes oyentes de la clase de la tarde, bajo la excusa de que, estando reducidas «a repasar las lecciones anteriores, les basta a aquéllos aprovechar la explicación de la mañana». Esto, junto a lo temprano del tiempo en que se expedían las certificaciones de asistencia a estos cursos, me permite sugerir la mayor transigencia en su concesión.

Dado que el grado de bachiller se concedería ahora tras el cuarto curso, y no el quinto, y que los estudiantes de cuarto llegarían a este examen faltos de Derecho civil y mercantil, para suplir esta deficiencia debían presentar certificación de haber estudiado previamente con un doctor en Leyes las asignaturas del segundo curso actual. En caso contrario, se examinarían tras cursar quinto. Se quería que todo bachiller contase con al menos dos años de Derecho español positivo.

Estas primeras instrucciones fueron aplicadas, literalmente y sin ningún tipo de modificación ni contratiempo, en las tres universidades que estudiamos. Sin embargo, las siguientes instrucciones ya tendrán una aplicación que diferirá de lo inicialmente previsto, y que en ocasiones no será la misma para cada universidad ¹⁷.

b) *Cuarto curso*

Los estudiantes que hubieran ganado cuarto —decía la orden— se graduarían de bachiller y pasarían a quinto ¹⁸.

La redacción de este punto es tan clara y escueta como equívoca. Después de haber cursado cuarto en el año 1841-1842, algunos estudiantes se matricularon, efectivamente, en quinto, pero sin haberse graduado previamente de bachiller. La explicación pasa por considerar que esta norma es de 17 de octubre, y había estudiantes que no habían podido, o simplemente no habían querido presentarse al grado de bachiller a claustro pleno, ya que con el *Arreglo*

¹⁷ A lo largo de todo este estudio, los datos sobre las matrículas y grados de los estudiantes de la universidad de Valencia han sido consultados en AUV, *Matrículas 1841, 1842 y 1843*, libros 435, 436 y 437, respectivamente; *Grados 1804-1842*, caja 445, e *Índice de Grados 1843-1880*, A-2/1-5 y A-2/1-6, para las letras A-L y M-Z, respectivamente. Para la universidad de Barcelona, BUB, *Reserva, Cervera*, cajas 211 y 212; y para la Complutense de Madrid, AHUCN, *Jurisprudencia*, D-514, caja 5 y D-515, caja 6.

¹⁸ En virtud de lo dispuesto en el nuevo reglamento de exámenes, de 23 de mayo de 1843, por orden de 23 de diciembre de 1844, los reprobados para el grado de bachiller se matriculaban de quinto curso a la espera del resultado del segundo examen, que tendría lugar al menos tres meses después del primero. De no aprobar en esta segunda prueba tampoco podrían aprobar el quinto curso; *Colección de órdenes...*, II, p. 73.

Provisional el grado de bachiller regular se obtenía tras el quinto curso.

Entiendo que el grado de bachiller al que se tenían que presentar los que se sujetasen a esta disposición tenía que ser el regular, pues para el bachiller a claustro pleno la orden ya le dedicaba otro apartado en concreto, mucho más ventajoso y que veremos a continuación. Así, algunos de los escolares que habían cursado cuarto se matricularon primeramente en quinto y en los primeros meses del curso se graduaron de bachiller regular. Con ese curso y dos más, se licenciaron con siete¹⁹. Aunque esto no estaba previsto, opinamos que se permitió por equiparación a los que a la entrada en vigor del nuevo plan de estudios ya eran bachilleres, o estaban en condiciones de serlo, por tener los cinco cursos requeridos hasta entonces.

Lo cierto es que esta disposición cuarta afectó a pocos estudiantes, pues hemos podido comprobar que la mayoría de los que habían cursado cuarto en 1841-1842, prefirieron examinarse de bachilleres a claustro pleno, para así acogerse a otro supuesto, que explicamos después, en el que se ahorraban otro año más —dos en total— para licenciarse con sólo seis años²⁰.

c) *Quinto curso o bachiller regular*

Para los que hubieran ganado quinto —se hubiesen graduado ya de bachiller regular o todavía no—, la orden de 17 de octubre prescribía que se matricularan en séptimo, debiendo asistir como oyen-

¹⁹ Casos en Valencia, por ejemplo, de Francisco Pérez Castillo (bachiller el 14-12-1842 y licenciado el 12-9-1845), Vicente Llopis Leismoníes (13-1-1843 y 6-3-1845, respectivamente), o Luis Catalá Soriano (20-4-43 y 20-12-1845).

²⁰ En el caso de Madrid, y según cifras de matriculados, hablamos de unos treinta y dos estudiantes de quinto que en principio debían graduarse de bachiller regular, frente a otros ochenta y tres que ya se habían graduado o pretendían hacerlo a claustro pleno. Para Valencia hablamos de dieciséis y setenta y uno, respectivamente. Y para Barcelona, de dieciséis y treinta y dos. Más tarde se dicta la orden de 8 de abril de 1843, que obligaba a los que todavía no se habían graduado a claustro regular a hacerlo antes del inicio del curso siguiente, bajo pena de no admitirles en nueva matrícula. *Colección de órdenes...*, II, 42-43.

tes a sexto. Al año siguiente cursarían octavo y ya podrían licenciarse, con siete años, quedando salvaguardado así el derecho de los bachilleres, recogido en el decreto de 1 de octubre, a licenciarse en siete años.

Dos cuestiones debemos considerar. En primer lugar, que el derecho a licenciarse con siete años sólo se atribuía por el decreto de *reunión* a «los graduados de bachiller antes de la publicación del presente decreto», mientras que la orden de 17 de octubre lo hacía extensible a todos los que hubiesen superado quinto, estuviesen ya graduados o todavía no²¹. Una norma posterior de rango inferior contradice, o al menos extendía considerablemente, lo previsto en otra norma anterior y de rango superior²². La segunda consideración, como veremos a lo largo de estas páginas, es que la legislación posterior ampliaba todavía más la posibilidad de licenciarse con siete años naturales y aun con seis, y ello aunque a 1 de octubre no se contase con el grado de bachiller, ni siquiera con la posibilidad de obtenerlo.

d) *Bachiller a claustro pleno*

El artículo 3 del decreto de *reunión* decía: «No habrá más que un grado de bachiller en la facultad de Jurisprudencia». El artículo 10 del decreto de *Instrucciones* del mismo día preveía un nuevo reglamento para los grados, que se publicaría por orden de 23 de mayo de 1843, y en donde tampoco se recogía el bachiller a claustro pleno. La orden de 26 de noviembre, en su apartado segundo, también decía que no convenía «mantener para ninguno de los casos presentes el abolido grado a claustro pleno». Vemos, pues, la determinación por acabar con este tipo de graduación, regulado por última vez en el artículo 155 del plan de estudios Calomarde —el *Arreglo Provisional* nada había dispuesto al respecto—, y para cuya presentación se exigía, como condición indispensable, el certificado de ido-

²¹ Véase en Valencia Francisco Ferrer (bachiller el 15-6-1842 y licenciado el 29-11-1844), Ramón Gilabert (8-6-1842 y 23-9-1844), o José Ferer (18-11-1842 y 2-11-1844).

²² Es uno de tantos casos que evidencian la todavía débil teoría contemporánea sobre la jerarquía de fuentes, o bien la flaqueza en su aplicación, aun dentro del mismo gobierno.

neidad expedido por el catedrático o catedráticos de cuarto, lo que venía a ser la calificación de sobresaliente²³.

Con el nuevo plan de Espartero, una cosa serán las intenciones iniciales y otra muy diferente la realidad que terminó por imponerse, pues éste es uno de los puntos en el que nos encontramos con más rectificaciones en la legislación y en la práctica de las universidades.

Hasta ahora, y después de obtener este grado, al estudiante sólo le quedaba superar sus años quinto y sexto naturales o solares, es decir, los cursos académicos sexto y séptimo —véase en el cuadro I el reducido número de estudiantes de quinto en el curso 1841-1842—²⁴. Con la nueva legislación, pronto se vio que la pretensión de terminar con el grado de bachiller a claustro pleno no podía romper las expectativas de los estudiantes que tenían previsto acogerse a esta posibilidad —ahorrarse un año, con sus gastos, en la mayoría de las ocasiones—. Al menos, así lo entendían las universidades, dado que en las últimas décadas este examen había experimentado una creciente aceptación entre el alumnado, opción que en algunos momentos se convertía, incluso, en mayoritaria²⁵. En este sentido, algunas de estas universidades decidieron actuar por su cuenta.

El claustro de Valencia de 12 de octubre decidió que, a falta de disposición en contrario de la Dirección General de Estudios, y a la espera de que el Gobierno resolviese desde cuándo se debía aplicar la reforma, se continuaran concediendo a quien lo solicitara los grados de bachiller a claustro pleno y regular, con el sistema que regía hasta entonces y al menos por lo que quedaba de mes²⁶. Y así se

²³ C. Tormo Camallonga, «Implantación de los estudios...», pp. 232-233. Véase títulos XIII y XIV del plan Calomarde. Con este plan de estudios los exámenes ya eran anuales, excepto en el curso anterior al de la obtención del grado de bachiller regular. Sobre el certificado de idoneidad véase AHUCM, *Jurisprudencia*, D-516, caja 7, oficio de 28 de julio de 1840.

²⁴ Véase en Barcelona José Blanch Masip, Andrés Comas Romaguera o Agustín Codina.

²⁵ C. Tormo Camallonga, *El Colegio de Abogados de Valencia. Entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo*, Valencia, 2004, p. 245.

²⁶ Parece ser que en estos días la universidad de Valencia dicta algún edicto ordenando la graduación de todos los alumnos de cuarto en el término de 20 días. Así se hace constar en las peticiones de algunos estudiantes; AUV, *Documentos y Borradores de Claustros*, caja 477, véase solicitudes de José María Marín Buendía, José Mercé, José Cortado o

hizo, y no sólo para lo que quedaba de mes, sino durante todo lo que restaba de año e incluso principios del siguiente. De la misma manera, el claustro de Madrid prorrogó la posibilidad de graduarse a claustro pleno en favor de los que incoaran su expediente a lo largo del mes de noviembre. No obstante, la Dirección rechazó esta prórroga unilateral²⁷.

Al margen de las decisiones que cada universidad adoptara, es precisamente para salvaguardar las expectativas de los estudiantes, para lo que la orden de 17 de octubre dedicaba al bachiller a claustro pleno un apartado en concreto, en donde se le trataba como una excepción al número de cursos previstos —siete u ocho— para licenciarse. Los que lo hubieran recibido o estuvieran en condiciones de recibirlo con los cuatro cursos previstos hasta estos momentos conservarían el derecho de licenciarse con sólo seis años. De manera que después de haber estudiado cuarto en el año 1841-1842 pasarían a séptimo, y después a octavo, con la obligación de asistir como oyentes durante el curso séptimo a las clases de quinto, licenciándose a continuación²⁸. Como ya dijimos, no creemos que se exigiera con rigurosidad la asistencia como oyentes a este quinto curso,

Bartolomé Escolano. El 23 de diciembre de 1842 la Dirección desestima, por pasado el término, la petición de Pascual Nebot García de que se le admitiera a nuevo examen de cuarto, a fin de obtener la nota de sobresaliente y poder aspirar así al grado de bachiller a claustro pleno; AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo de 1842, núm. 142/488.

²⁷ En el caso de Valencia se otorgaron unos 18 bachilleres a claustro pleno en virtud de la autorización del Claustro. En Madrid sólo nos constan 5. Para Valencia véase AUV, *Libro de Claustros*, caja 3, legajo de 1842. La orden de 17 de octubre fue recibida en el claustro de la universidad de Valencia el día 28 del mismo mes. Para Madrid, AHUCN, *Jurisprudencia*, D-512, caja 3, *Libro de Actos de Posesiones...* fol. 127 y ss.

²⁸ Casos en Valencia de Columbo Adrián Verchere (bachiller a claustro pleno el 15-6-1842 y licenciado el 11-9-1844), José Bañuls (6-7-1842 y 23-9-1844), o Tomás Ausina (29-11-1842 y 3-9-1845). Caso especial es el de José Marín Buendía: cursó quinto en 1841-42, con la idea de presentarse al grado regular por premio (AUV, *Documentos y Borradores de Claustros*, caja 477, documento de 10 de noviembre de 1842), lo que con el nuevo plan le daba la posibilidad de licenciarse con siete años. No sabemos por qué motivo se graduó gratis pero a claustro pleno, el 28 de enero de 1843, lo que le daba derecho a licenciarse con sólo seis cursos. Sin embargo, lo hizo con siete (5-11-1844).

ni tampoco a los demás. De hecho, ya en el mes de marzo, mucho antes de terminar el curso académico, contamos con certificados de asistencia librados por los catedráticos responsables²⁹.

La cuestión es que en Madrid y Barcelona las matrículas de séptimo del curso 1842-1843 distribuyen los estudiantes en tres listas, según su procedencia: la de los «graduados de bachiller a claustro pleno o habilitados para él»; la de los «bachilleres a claustro regular después del último curso o que tienen ganado el quinto»; y la de los «cursantes que al año anterior ganaron sexto.» En la universidad de Valencia, que ya hemos dicho que se conformó con las listas confeccionadas antes de la recepción del nuevo plan, tenemos que acudir a las actas de las notas para distinguir estas tres listas³⁰.

Una orden de 30 de marzo de 1843 dará un nuevo giro a la situación. Se abría de nuevo la posibilidad de obtener el bachiller a claustro pleno, sólo que en favor, exclusivamente, de los que lo hubiesen solicitado durante el anterior mes de noviembre³¹. Es decir, que rectificaba el criterio de la Dirección y daba por válida, y ampliaba al resto de universidades, la decisión de la universidad de Madrid que, por otra parte, sólo podía afectar a los que en el curso anterior habían estudiado cuarto. Mientras tanto, este baile de disposiciones ya había tenido sus particulares y singulares efectos³².

²⁹ Véase certificado a favor de Lorenzo Aguirre, expedido el 12 de marzo; AHUCM, *Jurisprudencia*, D-510, caja 1.

³⁰ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 212, núm. 341,2. En Valencia véanse las *Advertencias*, en donde se explican los motivos de los cambios realizados en las matrículas; AUV, caja 547.

³¹ *Colección de órdenes...*, II, pp. 41-42.

³² Caso del estudiante Lorenzo Aguirre. Cursante de cuarto en 1841-1842, no pudo presentarse al bachiller a claustro pleno antes de las vacaciones por motivos de enfermedad. Más tarde, el permiso concedido por la universidad de Madrid se vio truncado ante la negativa reiterada de la Dirección. Recurrido el caso ante el Gobierno, éste resuelve, precisamente, con la orden de 30 de marzo, solo que a estas alturas el solicitante «ignorando esta real orden» cometió la *imprudencia* de graduarse de bachiller regular el 7 de abril (con las oportunas cédulas de asistencia a los cursos quinto y séptimo —véase, además, lo pronto que se libran estas cédulas—). Y es el beneficiarse de las ventajas en favor de los graduados a claustro pleno lo que le mueve a solicitar la conmutación de grados previo pago de la diferencia de depósitos, a lo que el gobierno accede, obligándole a simular el curso octavo —otra vez y sorprendentemente—, con el quinto. Es

Al margen de casos individuales, lo más importante es que el propósito de la orden de 30 de marzo de terminar definitivamente con este grado tampoco resultó tan efectivo e inmediato como pretendía. En el caso de la universidad de Valencia, el último bachiller en Jurisprudencia a claustro pleno fue Vicente Ellul Rosell, graduado el 30 de noviembre de 1845; en Madrid fue Martín Sánchez Romo, graduado el 19 de diciembre de ese mismo año. En ambos casos, ya vigente el plan de estudios Pidal. Es más, en la concesión de estos últimos grados ya se aplicaban las formalidades contempladas en el reglamento de 22 de octubre de 1845 para la aplicación del nuevo plan de estudios³³.

La explicación a estas fechas tan tardías hay que buscarla en la orden del gobierno provisional de 5 de octubre de 1843 y en la del Ministerio de la Gobernación de 6 de octubre de 1845³⁴. La primera orden, que modificaba la anterior de marzo, tenía por norte causar «el menor daño posible a los intereses creados, o a los derechos y esperanzas que hubiesen podido adquirirse por la legislación que anteriormente rigiera». O lo que es lo mismo, extendía la posibilidad de graduarse a claustro pleno, con cuatro cursos, a todos aquellos que habían iniciado sus estudios antes del 1 de octubre de 1842. Ni qué decir tiene que esta oportunidad fue muy bien aprovechada por los escolares. Más tarde, como veremos a continuación, se les liberó de cursar sexto, con lo que todos estos podrían licenciarse igualmente con sólo seis años. Después de cursar cuarto se matriculaban en séptimo, y aunque no se hubieran graduado previamente de bachiller a claustro pleno, puesto que bastaba la intención de hacerlo. Después, se matriculaban de octavo y se licenciaban³⁵.

decir, seis cursos solares y ocho académicos, de ellos el quinto dos veces. AHUCM, *Jurisprudencia*, D-510, caja 1, expediente sin número.

³³ Al menos así se hace constar en el libro de grados de Madrid; AHUCM, *Jurisprudencia*, D-512, caja 3, *Libro de Actos de Posesiones*, fol. 140. *Colección Legislativa...*, XXXV, p. 463.

³⁴ *Colección de órdenes...*, II, p. 62, y AUV, *Órdenes*, caja 143, legajo de 1844.

³⁵ BUB, *Reserva*, *Cervera*, caja 212, núm. 1057; véase Triburcio Balmaseda (cuarto en el curso 1842-1843, séptimo en 1843-1844 y octavo en 1844-1845, con bachiller a claustro pleno el 11 de febrero de 1844 y licencia el 11 de octubre de 1845), José Clos (con los mismos cursos que el estudiante anterior; el bachiller el 1 de febrero de 1844 y la licencia el 4 de octubre de 1845), o Francisco Monsent (con los mismos cursos, el bachiller el 30 de enero de

Por la orden de 6 de octubre de 1845, vigente ya el plan de estudios Pidal, se disponía que todos los alumnos de Teología, Jurisprudencia y Medicina que según el *Arreglo Provisional* y disposiciones posteriores tuvieran derecho a recibir el bachiller a claustro pleno, lo recibieran durante ese mes de noviembre en la universidad donde intentaran continuar su carrera. A este efecto se les matricularía condicionalmente en el año que les correspondiese estudiar, supuesta la aprobación del grado. Se trataba de los últimos estudiantes con derecho al bachiller a claustro pleno.

Eso sí, para no agraviar comparativamente a los que ya se habían examinado y obtenido el bachiller regular de acuerdo con el plan de Espartero, la orden de 5 de octubre de 1843 les permitía estudiar en el año entrante los cursos quinto y sexto naturales juntos, que eran los cursos quinto y séptimo del plan de estudios, abonando la diferencia de gastos en grados. Evidentemente, la práctica totalidad de los alumnos se acogió a esta posibilidad, sin que el presumible sobreesfuerzo hiciera mella en las calificaciones finales. De manera que en el curso 1844-1845 estudiaron octavo y a continuación se licenciaron, con sólo seis años naturales, tanto en Barcelona como en Madrid y Valencia³⁶. Es una más de las complacencias en la transición de planes.

1844 y la licencia el 12 de septiembre de 1845). Para la Universidad de Valencia sólo nos llama la atención el caso de Ignacio Bono, que obtuvo la licenciatura en el mes de marzo, antes de terminar el séptimo curso. Se trata de una práctica, la de examinarse con anterioridad a la finalización del curso escolar, muy habitual en tiempos pasados, pero no en estos momentos.

³⁶ Véase para Valencia Joaquín Ferrándiz (bachiller regular con cuatro cursos el 14 de junio de 1843, y licenciado con seis el 15 de septiembre de 1845), José Ayza (9-6-1843 y 18-9-1845, lo mismo y respectivamente), o Pedro Acacio (20-6-1843 y 9-9-1845). En este punto las listas de matrículas y exámenes da lugar a confusiones, especialmente las de Valencia, que para quinto distingue dos listas: los que estudian sólo este curso y los que «asisten simultáneamente al 7º». A continuación, sin embargo, se examinan de los dos cursos, tanto unos como otros; AUV, *Derecho*, caja 547. Los borradores de Madrid, por contra, son bastante evidentes en este punto. Hay algún estudiante, como el valenciano Heliodoro Martínez, que en vez de aparecer en 1844-1845 en el curso octavo aparece en noveno. La explicación es que, por no poder acceder a las compensaciones previstas para los estudiantes de Teología, que lo había sido, se le permite presentarse al examen extraordinario de octavo, después de haber superado el curso séptimo; AUV, *Órdenes*, caja 143, expediente sin número de 29 de junio de 1844.

Esta orden de 5 octubre, en la línea ya acostumbrada de respeto máximo a los derechos adquiridos, no deja de contradecirse abiertamente con otras normas anteriores. Especialmente con la regla segunda de la orden de 26 de noviembre de 1842, que después analizaremos más detalladamente. En ésta se negaba cualquier supuesto derecho adquirido a los estudiantes que en el momento de la publicación del decreto de *reunión* no hubiesen llegado al curso que daba derecho a la graduación de bachiller. Vemos aquí, en cualquier caso, la stampa del nuevo giro conservador del gobierno provisional, con una política todavía más permisiva y complaciente que la de Espartero.

No obstante, esta mayor complacencia del gobierno conservador —que podremos observar en otras normas que irán apareciendo a lo largo de estas páginas— no siempre será tal, a la vista de disposiciones como la orden de 25 de julio de 1844. En ella, Pidal desestima la instancia que habían presentado algunos estudiantes de Madrid que, después de sacar notable en el examen de cuarto, pretendían examinarse de nuevo para poder obtener el sobresaliente que les permitiera presentarse al grado de bachiller a claustro pleno. Desestimación que se produce a pesar de que la instancia contaba con el respaldo del rector, que le había recordado al ministro la respuesta favorable que la Dirección General de Estudios siempre había tenido en casos semejantes³⁷. Me inclino a pensar que el nuevo gobierno conservador era más benevolente en cuanto a las disposiciones generales que dictaba, pero no así en cuanto a las excepciones, que no solía aceptar de tan buen grado.

e) *Dispensa del sexto curso*

Los estudiantes que hubieran ganado sexto con el *Arreglo Provisional* pasarían a séptimo, pero liberados de la Economía política que ya habían estudiado; no así de Derecho constitucional, al que tenían que dedicar cuatro meses. Durante los diez meses que duraba este curso —los otros cursos duraban ocho— debían asistir, además, a la Academia Teóricopráctica de Jurisprudencia del octavo curso, lo que les habilitaba para recibirse de licenciado con siete

³⁷ AHUCN, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias...*, legajo sin número.

años, como en el plan de estudios anterior. Puesto que a partir de ahora se podría abogar con sólo la licenciatura, sin necesidad de pasantía alguna, con esta disposición se buscaba que ningún abogado pudiera actuar en el foro sin un mínimo de conocimientos sobre la práctica forense.

En los borradores de matrículas de Madrid del curso 1842-1843 consta una lista de 73 matriculados en la Academia Teóricopráctica de octavo, con una nota adjunta que decía así:

Ninguno de estos matriculados en 8.º año de Jurisprudencia (de 7.º de 1841 a 42) resulta estarlo útilmente, como que ninguno satisfizo los derechos de matrícula, en razón a no necesitarle por haber sido autorizados por la real orden de 26 de noviembre de 1842 para recibirse de abogados en las universidades por mitad de los derechos marcados a los demás: cuya gracia disfrutaron³⁸.

Como más adelante veremos, no eran pocos los estudiantes que con el *Arreglo Provisional* se decantaban por alargar un año más su vida universitaria, a pesar de que este octavo año no era preceptivo para ejercer, pues sólo debían cursarlo los que optaban por no presentarse al grado de licenciatura³⁹.

Pero lo más destacable sobre el nuevo curso sexto es su dispensa durante todos los años en que estuvo vigente el plan de estudios. Hay que situar esta cuestión en la misma línea benevolente vista hasta ahora. Por la orden de 17 de octubre ningún estudiante quedaba adscrito a sexto en el curso 1842-1843. Por el contrario, tanto

³⁸ AHUCM, *Jurisprudencia*, D-515, caja 6.

³⁹ Tan sólo cabe añadir la orden de 1 de julio de 1843, que ante la solicitud de los estudiantes de este curso, «en consideración a los graves perjuicios que se les irrogan de permanecer separados de sus familias por más tiempo», les liberaba de la asistencia a la Academia durante los meses de julio y agosto. BUB, *Reserva*, *Cervera*, caja 78, núm. 637,58. En mayo del curso siguiente los estudiantes de octavo de Madrid vuelven con la misma petición alegando, además del anterior motivo, que «no pueden aspirar al grado ni verificar sus exámenes hasta ya entrado el curso siguiente, con lo cual aumentan sus gastos». A pesar de que la proposición contaba con el apoyo del rector, nos encontramos con una nueva negativa del ministro de la Gobernación Pedro José Pidal. AHUCM, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias, usos y prácticas de la Universidad. 1836 al 1845*, legajo sin número.

los estudiantes que habían cursado sexto, como los bachilleres regulares de quinto, y los bachilleres a claustro pleno de cuarto, quedaban adscritos a séptimo, lo que iba a convertirlo en un curso especialmente concurrido durante ese año. Insistimos en que el sexto curso quedaba dedicado a Derecho canónico y eclesiástico, mientras que el séptimo a Derecho constitucional. Y las preferencias de los liberales eran bien evidentes.

Por otra parte, la orden de 26 de noviembre de 1842 negaba a los estudiantes de segundo, tercero y cuarto, el supuesto derecho alegado para terminar la carrera con siete años, y no ocho, «porque si tal se considerase podrían asimismo alegarlo cuantos en la actualidad hayan dado principio a sus estudios en una escuela de primeras letras»⁴⁰. Parece que, siguiendo la práctica instaurada con el *Arreglo Provisional*, para la consideración de derechos adquiridos debía mediar un grado, en este caso el de bachiller. No obstante e inmediatamente a continuación, el regente manifestaba que consideraba oportuno desagraviar de alguna manera u «otorgar alguna gracia a los que ya tuviesen comenzados sus estudios superiores en aquella fecha». Y, sorprendentemente, esta gracia no era más que la de terminar, efectivamente, con los siete años. Es como si el regente quisiera mostrar de manera palmaria su benignidad. Y el camino era liberarles del sexto curso, de Derecho eclesiástico y canónico, en el buen entendimiento de que su ausencia la suplirían con la «aplicación» que, se entendía, mostrarían en el estudio de los Elementos de historia y de derecho canónico de cuarto. La orden esgrimía, además, una razón mucho más práctica, como era el hecho de que la supresión del bachiller a claustro pleno les privaba de la posibilidad de ahorrarse un año, lo que debía compensárseles de alguna forma. Además, ya hemos visto que, con la posterior orden de 5 de octubre de 1843 sí que podrán recibirse a claustro pleno, por lo que a partir de ahora se van a poder ahorrar otro año más.

Nos situamos ante un compendio de buenas intenciones para con los estudiantes que, en algún momento, parecen dictadas sin una previa reflexión sobre sus consecuencias prácticas. O le podemos dar otra lectura. Es posible que, de alguna manera, se esté pensando en una reducción en la duración de una carrera que desde bien pronto se cree excesiva, y que tampoco se haría de esperar. Al

⁴⁰ *Colección de órdenes...*, II, pp. 27-31.

menos es lo que se entrevé de alguna manifestación, como la del claustro de Madrid, que pocos meses después de felicitar al Gobierno por la *reunión* y modernización de los estudios de Jurisprudencia —lo que no deja de ser habitual en todos los cambios de planes y en todas las universidades—, aprueba una proposición para redactar y enviar al mismo gobierno una exposición, «solicitando las reformas que estime convenientes en los reglamentos de organización de la carrera de Jurisprudencia y exámenes para los grados de la misma»⁴¹.

Las concesiones del Regente todavía llegan más lejos, cuando por orden de 5 de mayo de 1843 ampliaba la dispensa del sexto curso a los estudiantes de quinto. El origen de esta orden hay que buscarlo en las instancias presentadas por algunos estudiantes valencianos, que en el momento de la aprobación del nuevo plan de estudios ya tenían aprobado cuarto y que, por por el motivo que fuera, no se habían examinado del grado de bachiller a claustro pleno. Teniendo en cuenta que tanto los estudiantes de cursos inferiores como los de cursos superiores, así como los que habían obtenido el bachiller a claustro pleno, se veían liberados de un año, resultaba que los que en el año 1842-43 estaban cursando quinto eran los únicos a los que no se les eximía de ningún curso, bajo ningún concepto. Ello, lógicamente, se interpretaba como un agravio comparativo. Además, y como decían los estudiantes valencianos, ellos ya tenían «alguna noción de Derecho canónico, y con más motivo pueden perfeccionarlo privadamente que los de 2.º, 3.º y 4.º a quienes se dispensa»⁴². El Regente no pudo negarse a la justicia de esta petición, y entendió que también ellos merecían este beneficio.

En definitiva, que en ninguno de los años en que estuvo vigente el plan de estudios de Espartero se abre la matrícula del curso sexto. La absorción de la facultad de Cánones por Leyes estaba conllevan-

⁴¹ Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante, BHMV), *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, junta de 30 de agosto de 1843, fol. 145.

⁴² AUV, *Comunicaciones*, caja 170, hoja sin número del legajo de 1843, y *Correspondencia al rector*, caja 21, legajo sin número de 1843. Véase también *Libro de Claustros*, caja 3, legajos de 1842 y 1843, claustros de 16 de noviembre y 30 de mayo, respectivamente, e instancias en *Documentos y Borradores*, caja de 1843.

do en la práctica consecuencias más perjudiciales para los canonistas que las inicialmente previstas, ya que los estudios de Cánones quedaban reducidos de momento a un sólo curso. Por consiguiente, la orden de 2 de septiembre de 1843, a la par que reservaba el sueldo a los catedráticos propietarios o interinos de esta asignatura, les designaba mientras tanto para la cátedra vacante que tuviera mayor analogía con su carrera literaria. Los sustitutos, por innecesarios, cesaban en su cargo ⁴³.

* * *

Recapitulando, podemos decir que la máxima a cumplir en el decreto de 1 de octubre y en la orden de 17 del mismo mes era el respeto a los derechos adquiridos en cuanto al número de cursos. Máxima que beneficiaba solamente a los estudiantes que con el *Arreglo Provisional* de Quintana ya habían cursado quinto o se habían graduado de bachilleres a claustro pleno, pero no a los escolares de cursos inferiores. Al menos así estaba previsto en un primer momento. Pero la inmediata orden de 26 de noviembre así como otras posteriores ampliaron estos derechos y los extendieron, también de manera generosa, a los estudiantes de los primeros cursos.

Creo que las modificaciones y ampliaciones que las normas posteriores operan sobre el decreto de *reunión* de 1 de octubre y la orden de 17 del mismo mes, responden a la celeridad con que se pretende llevar a cabo la transición hacia el nuevo plan de estudios. Se trata, en mi opinión, de aprovechar el momento propicio para unir ambas facultades. Y es para evitar inconvenientes de última hora, que se cede ante los problemas que se plantean, decantándose por la vía más sencilla. Para sortear posibles contratiempos o la oposición de los estudiantes, se opta por la solución más rápida y segura; la de las complacencias que, por supuestos agravios comparativos, se retroalimentarán. Esta es la política llevada a cabo por el duque de la Victoria y, por los mismos motivos, el gobierno provisional no podía cambiar de estrategia. Lo que provoca una cascada de instrucciones aclaratorias y modificatorias de una rapidez inusitada en la legislación universitaria ⁴⁴.

⁴³ *Colección de órdenes...*, II, p. 60.

⁴⁴ En este sentido, la orden de 26 de noviembre de 1842 es bien expresa cuando dice lo siguiente: «algunas de las dudas que se le han expues-

La orden de 17 de octubre creía en la claridad y sencillez de las adaptaciones que contenía, hasta el punto de recoger en el apartado décimo, que «S.A. se ha servido disponer que estos mismos principios se observen en cualesquiera dudas o dificultades que puedan ofrecerse en algún caso muy especial y extraordinario». Además, serían los claustros de Jurisprudencia los que, en su caso, resolverían las posibles dudas o dificultades que pudieran presentarse —siempre menores—, «dando cuenta el rector en este caso a la Dirección General de Estudios de la resolución que se hubiese adoptado». Es decir, que ya no iba a ser la Dirección General de Estudios la encargada de resolver las dudas, sino cada universidad, cosa, no obstante, en la que tuvo que insistirse⁴⁵. Pero vemos que esta inicial confianza no se correspondió del todo con la realidad. Así lo atestiguan los diferentes casos individuales que se plantearon, con las correspondientes disposiciones gubernamentales que tuvieron que dictarse. No sabemos hasta qué punto la delegación a favor de los rectores y universidades devino efectiva en la práctica, pues los libros de claustros son muy parcos en manifestaciones. Al margen de cuestiones puntuales, será el regente y después el gobierno provisional, los que efectivamente continuarán dirigiendo los pasos de la universidad.

Aunque sea a título meramente indicativo, en el cuadro siguiente aparecen las matrículas de Jurisprudencia de estos años en las universidades de Valencia, Barcelona y Madrid. Previamente, realizaré unas aclaraciones: en primer lugar, que las cifras de 1841-1842 incluyen las escasas matrículas de Cánones para los cursos sexto y

to provienen únicamente de no haberse entendido por los reclamantes con la necesaria exactitud varias disposiciones del indicado decreto, y que las dificultades o inconvenientes acerca de los cuales se reclama tienen una solución sencilla, por cuyo medio no sólo alcanzan los alumnos los beneficios de la nueva organización de esta carrera, sino que conservan toda la expedición y comodidad en sus estudios que puede consentir la transición de un orden de cosas a otro diferente».

⁴⁵ Véase el apartado primero de la orden de 26 de noviembre de 1842, que insiste en que los estudiantes deben plantear sus dudas ante el rector, el cual, en su caso, la elevaría a la Dirección General de Estudios, «decidiéndolas esta corporación por sí, o consultando con el Gobierno. Sin este requisito, de que sólo se dispensará en caso de queja contra los Rectores, no se dará curso en el Gobierno a ninguna instancia ni solicitud».

séptimo; en segundo, que las cifras de los cursos siguientes para Valencia son las extraídas de las listas de examinados y no de las matrículas, por ser éstas menos fiables, como ya hemos comentado; en tercer lugar, que debemos reconocer que las cifras de Madrid no pueden tan exactas como nos gustaría, por cuanto no hemos encontrado las listas oficiales y los borradores que sirvieron de base plantean algunas dudas de difícil resolución. A pesar de todo, estamos seguros de que las cifras que ofrecemos se aproximan bastante a la realidad⁴⁶. Finalmente, no podemos equiparar matrículas con estudiantes, pues con las simultaneidades autorizadas en distintos momentos, era habitual que un alumno estuviera matriculado en dos cursos al mismo tiempo, especialmente si hablamos de quinto, sexto y séptimo.

⁴⁶ En el caso de Madrid, el borrador de matrículas de 1842 a 1843 contenía la siguiente advertencia: «Por las variaciones que la enseñanza ha sufrido desde 1º de octubre de 1842, cuando esta matrícula contaba ya en cada clase algunos alumnos que o se retiraron sin pagar los derechos o pasaron a otras facultades o años según les correspondió por la nueva distribución de asignaturas, en cada una solamente se entienden matriculados los que al margen de su apellido no llevan la advertencia = no vale = traslado = Pasó a otro año =, y no pudiendo por tan repetidas indispensables enmiendas formalizarse la cuenta de los verdaderos matriculados útiles en cada año, esta matrícula no es oficial, y sí únicamente la que en cuadro de 40 folios se coordina por orden alfabético de apellidos». Aunque los borradores de las matrículas de los siguientes cursos ya no contenían esta advertencia, en ellos se realizan las mismas inscripciones, por lo que las dificultades siguen siendo las mismas. Por lo tanto, las cifras que para Madrid manejamos son las que el secretario apunta como «útiles» al final de cada una de los borradores.

	1841-1842	1842-1843	1843-1844	1844-1845
	<i>V - M - B*</i>	<i>V - M - B</i>	<i>V - M - B</i>	<i>V - M - B</i>
1.º	124 - 88 - 53	105 - 84 - 46	134 - 81 - 44	113 - 87 - 67
2.º	110 - 73 - 51	113 - 83 - 66	107 - 84 - 35	117 - 86 - 47
3.º	97 - 108 - 38	103 - 85 - 62	107 - 77 - 53	87 - 97 - 34
4.º	103 - 82 - 44	98 - 104 - 46	106 - 86 - 52	97 - 89 - 53
5.º	46 - 35 - 18	16 - 32 - 16	80 - 83 - 20	18 - 46 - 24
6.º	135 - 145 - 82			
7.º	79 - 129 - 40	231 - 296 - 139	98 - 109 - 41	81 - 125 - 43
8.º	89 - 60 - 24	117 - 133 - 48	85 - 135 - 29	
9.º			9 - 3 - 0	11 - 33 - 5
10.º				8 - 5 - 0

* V: Valencia; M: Madrid; B: Barcelona

2.2. Exámenes y grados

La orden de 23 de mayo de 1843 regulaba tanto los exámenes anuales como los ejercicios para los grados de bachiller, licenciado y doctor en Jurisprudencia⁴⁷. En lo no dispuesto en esta orden se seguiría aplicando el plan de estudios de Calomarde de 1824 y disposiciones posteriores, en especial el reglamento de exámenes de 20 de mayo de 1837⁴⁸. Entre los grados en el XVIII, como pruebas casi exclusivas de control de conocimientos aprendidos y su próxima y

⁴⁷ «Habiéndose [...] acordado por el rector interino Dr. D. Eusebio M.^a del Valle, que desde el primer grado de cada clase que desde el 1.º del mes de la fecha en que da principio el curso de 1842 a 1843 se confiera, se extienda su acta expresando la nueva facultad»; AHUCM, *Jurisprudencia*, D-512, caja 3, *Libro de Actos de Posesiones de Cátedras y de grados desde 22 de diciembre de 1836 hasta 1845*, fol. 163.

⁴⁸ *Colección de órdenes...*, I, pp. 24-28, y II, pp. 48-54. El *Arreglo Provisional* no introdujo modificaciones destacables en la colación de grados. Por orden de 9 de octubre de 1845 se fijaba el 1 de noviembre como último día en el que otorgar los grados según este sistema; *Colección de órdenes...*, I, p. 159.

definitiva desaparición, el *Arreglo Provisional* y el plan Espartero suponen un equilibrio intermedio⁴⁹.

2.2.1. Exámenes anuales

Los exámenes ordinarios se celebrarían al finalizar las clases, y las notas serían *reprobado* o *aprobado*⁵⁰. En este último caso, y continuando con la práctica introducida en el reglamento de 1837, el estudiante sería calificado como simplemente *aprobado*, *notablemente aprovechado* o *sobresaliente*. Caso de ser reprobado, el estudiante podría presentarse a los exámenes extraordinarios de septiembre, en que ya sólo podría ser calificado de *reprobado* o *aprobado*. A pesar de lo que dice la orden, los extraordinarios se celebraban también en octubre e incluso noviembre, y en ellos también se podía obtener la calificación de notable y sobresaliente; así lo he podido comprobar en Valencia y, especialmente, en Barcelona. Tanto los ordinarios como los extraordinarios eran orales, de preguntas sueltas, con una duración de un cuarto y media hora, respectivamente. Aunque nada dice la legislación al respecto, era habitual que el suspendido en junio y, sobre todo, el no presentado por motivos de salud, solicitara permiso al rector para presentarse al examen extraordinario, aportándose en este último caso certificado médico⁵¹. De no aprobar el examen extraordinario, el alumno repetía curso, y de resultar de nuevo reprobado era expulsado de la carrera.

Por lo avanzado del curso, el reglamento de 23 de mayo de 1843 no pudo aplicarse a los exámenes ordinarios de ese año en Valencia, pero sí a los extraordinarios, y viendo lo que se entendían como agravios comparativos respecto a los estudiantes y examinadores de

⁴⁹ Mariano Peset Reig, «Universidades y enseñanza del Derecho...», pp. 534 y ss., y Carlos Tormo Camallonga, «Implantación de los estudios de Jurisprudencia...», pp. 240 y ss.

⁵⁰ A consulta de varias universidades, los ocho meses que duraba el curso principiaban el 1 de octubre, y los exámenes ordinarios empezaban, al menos en 1843, el 10 de junio; BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 637,51.

⁵¹ Esta solicitud se solía presentar el día antes de la celebración del examen; AUV, caja 547.

las otras facultades, el claustro remite un escrito al ministro de la Gobernación. En él solicitaba la extensión de los beneficios del reglamento a las otras facultades. Entre otras cosas, entendía que los exámenes del resto de facultades eran más largos y complejos, por ser escritos y orales, cosa que también obligaba a un mayor esfuerzo de censura por parte de los profesores examinadores que, además, eran sólo tres y no cinco. De manera que las propinas que recibían no recompensaban su mayor esfuerzo. En la misma línea, nos resultan ilustrativas las siguientes palabras:

El rector que suscribe, lejos de esquivar la ejecución del reglamento al fin del presente curso en que se plantea por primera vez, desearía solo que se hiciese extensivo a las demás facultades para que la enseñanza y su examen fuere uniforme en un mismo establecimiento. Los ejercicios por escrito casi es imposible se verifiquen con imparcialidad en las clases numerosas. ¿Dónde y cómo se comunican 250 alumnos o más, según los hay en esta escuela?⁵²

Mientras tanto, en Madrid se discute si los doctores presentes en el acto del examen tenían derecho al reparto de la parte destinada a los examinadores que no habían asistido⁵³.

⁵² AUV; *Comunicaciones*, caja 170, documento sin número de 26 de febrero de 1844. El escrito también planteaba otras cuestiones. Los exámenes extraordinarios de Jurisprudencia debían celebrarse en septiembre, y no en octubre como en los otros estudios, lo que obligaba a sus estudiantes a salir de sus residencias familiares un mes antes, teniendo que permanecer y perder en la ciudad más de un mes hasta el inicio de las clases del curso siguiente. Por ello se solicitaba que se trasladaran a octubre, coincidiendo con las fechas de matrícula. Es más, insinuaba un adelantamiento generalizado de todas las actividades para evitar los calores del verano. También se decía que en el reglamento de exámenes los doctores examinadores debían ser elegidos por el claustro, cuando, para evitar cualquier interés particular, lo óptimo sería que fueran designados por turno de antigüedad entre los que aspirasen a este cargo.

⁵³ Por 28 votos contra 5, el claustro rechazó esta posibilidad, resolviendo que dichos derechos se destinaran a la compra de libros para la biblioteca, u otros objetos de utilidad del establecimiento a juicio de la Junta de Hacienda. Y en este sentido, la Dirección General de Estudios ya había resuelto que sólo tenían derecho a tomar parte en los exámenes de fin de curso como catedráticos aquéllos que habían enseñado al menos las

Lo que me interesa ahora es dejar constancia de los resultados de los exámenes en las tres universidades, distinguiendo entre exámenes ordinarios y extraordinarios. Veámoslo en el siguiente cuadro⁵⁴:

tres cuartas partes del curso. BHMV, *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, junta de 30 de agosto de 1843. Sobre el oficio de la Dirección, de 3 de junio de 1842, véase AHUCM, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias...*, documento sin número.

⁵⁴ He elegido 1843-1844 por ser el curso del que más noticias he podido conseguir de las tres universidades. Aun así, los datos de este curso vienen referidos a los nueve primeros años para Valencia y Madrid, y a los ocho primeros para Barcelona. El curso décimo para Valencia y Madrid pertenece a la lista de examinados del año 1844-1845, así como los cursos noveno y décimo de Barcelona. Para Valencia véase AUV, *Pruebas de curso de la Facultad de Derecho*, caja 547; para Madrid, AHUCM, *Jurisprudencia*, D-513, caja 4; y para Barcelona BUB, *Fondo Reserva, Archivo Histórico, Subfondo Superior*, legajo 25/3/3/2. Una cosa es la lista en la que aparecen las notas, tal y como viene reflejado en el texto, y otra es la lista que previamente a los exámenes ordinarios remitía cada año el catedrático al secretario de la universidad, en la que le hacía saber quiénes aprobaban el curso, para poder presentarse al examen, y quiénes no lo aprobaban, suponemos que por faltas de asistencia o por no haber pagado la totalidad de la matrícula. Es habitual encontrar alguna diferencia entre ambas listas, y entre éstas y las matrículas. Las causas pueden ser varias: el fallecimiento de algún estudiante —suele haber varios al año—, los traslados de matrículas de unas universidades a otras, el haber asistido sólo como oyente, el haber estado alistado en las milicias, etc. Hay casos, incluso, de simples equivocaciones numéricas de los secretarios. Otra cosa sería la equívoca interpretación de las casillas en blanco, que también da lugar a confusiones; por lo general, entiendo que se corresponden igualmente con los que no pudieron examinarse por cualquier motivo, o prefirieron hacerlo después del verano para obtener mejor calificación.

CURSO 1843-1844							
		<i>Valencia</i>		<i>Barcelona</i>		<i>Madrid</i>	
<i>Curso</i>		<i>Ord.</i>	<i>Extra.</i>	<i>Ord.</i>	<i>Extra</i>	<i>Ord.</i>	<i>Extra.</i>
1.º	Fallecido u otro						
	Pierde curso		1				10
	En blanco	1	11				
	No presentado	23					
	Reprobado		2				
	Aprobado	84	12	10		30	
	Notable	19	3	17		26	
	Sobresaliente		4		16		14
2.º	Fallecido u otro			1			
	Pierde curso		13		1		8
	En blanco	1		2			2
	No presentado	20					
	Reprobado						6
	Aprobado	42	15	10	2	20	8
	Notable	27	3	11		36	
	Sobresaliente		4		10		19
3.º	Fallecido u otro	1		2		4	
	Pierde curso		1				2
	En blanco	2	6	9		7	
	No presentado	24					
	Reprobado	6				7	1
	Aprobado	45	21	4	4	43	12
	Notable	24		21	3	15	1
	Sobresaliente		8	1	17	1	11
4.º	Fallecido u otro						
	Pierde curso		6		1		
	En blanco	12	5			15	
	No presentado						
	Reprobado						
	Aprobado	6	2	7	1	5	2
	Notable	22		14		32	4
	Sobresaliente	60	5	27	1	34	2
5.º	Fallecido u otro				1		
	Pierde curso		9		2		8
	En blanco	1	1			5	
	No presentado	11					
	Reprobado				1	8	1
	Aprobado	16	8	4	1	21	12
	Notable	31	2	5	1	26	
	Sobresaliente		12		5	17	1

7.º	Fallecido u otro					
	Pierde curso	4		8		7
	En blanco	5			16	
	No presentado	16				
	Reprobado					
	Aprobado	37	6		11	4
	Notable	27	5	17	60	7
	Sobresaliente		14	13	1	18
						1
8.º	Fallecido u otro	2				
	Pierde curso		2		4	4
	En blanco	31				21
	No presentado					
	Reprobado					
	Aprobado	49	21	6	48	1
	Notable	27	5	28	1	35
	Sobresaliente		7		9	23
						6
9.º	Fallecido u otro					
	Pierde curso					1
	En blanco	1				
	No presentado					
	Reprobado					
	Aprobado					
	Notable		3			
	Sobresaliente		5		4	1
						2
	Fallecido u otro					
	Pierde curso					
	En blanco				1	
10.º	No presentado					
	Reprobado					
	Aprobados			3		
	Notables	8			2	
	Sobresaliente					2

Sobre estas notas podemos realizar algunos comentarios, extensibles al resto de años en que estuvo vigente este plan de estudios.

Por una parte, y cualesquiera que fueran los motivos, la conocida como *mortalidad* académica es bajísima. Es mucho menor que en los siglos anteriores o en las primeras décadas del mismo. Cuanto menos, podemos decir que los que abandonaban los estudios—entendemos que, fundamentalmente, por motivos económicos—no lo hacían durante el transcurso del año escolar, pues entre los

matriculados son pocos los que pierden el curso por faltas de asistencia.

Por otra parte, llama la atención el reducidísimo número de no presentados y reprobados, en la misma línea que en tiempos anteriores. Contrariamente, destaca el elevado —en algunos casos elevadísimo— número de sobresalientes⁵⁵. El alto número de estas calificaciones en el curso cuarto es posible que se deba a la benignidad de los profesores, considerando que se requería la nota máxima para presentarse a un grado de bachiller, a claustro pleno, al que ya le quedaban pocas promociones. A simple vista, y aunque no creemos que tenga mayor importancia, parece que las calificaciones son algo más bajas en Madrid, siendo las de Barcelona las que parecen más benignas.

Respecto a los cursos noveno y décimo, necesarios para obtener el grado de doctor, como título voluntario y con efectos meramente académicos, el gobierno designaría en su momento las universidades en que se hubieran de cursar a partir del curso 1843-1844. La orden de 2 de septiembre de 1843 autorizaba para impartir noveno a las de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Santiago, Valladolid, Zaragoza —por orden de 15 de octubre se añadió Salamanca—, a cargo de catedráticos sustitutos, provistas según lo marcado en la orden de 31 de agosto de 1841, es decir, nombrados por la Dirección. La orden hacía la interesante referencia de que en este noveno curso no se debía permitir que «los alumnos pierdan de vista la práctica de los Tribunales, tan necesaria para el ejercicio del abogado». La orden de 8 de junio de 1844 creaba la cátedra de décimo para el curso siguiente.

Aunque la universidad de Barcelona se retrasó un año en la docencia de estos dos cursos, de manera que no impartió décimo en 1844-1845, sí concedió tres aprobados al finalizar este año académico. La explicación nos la ofrece la real orden de 6 de octubre de 1845. Esta norma, una vez publicado el nuevo plan de estudios de 17 de septiembre, permitía a los estudiantes de noveno examinarse también de décimo, para poder doctorarse según lo previsto

⁵⁵ Para Valencia véase M. Baldó Lacomba, *Profesores y estudiantes en la época romántica. La Universidad de Valencia en la crisis del Antiguo Régimen (1786-1843)*, Valencia, 1984. Sobre estudiantes en el XIX, M. Baldó, M. F. Mancebo, E. Sánchez y Y. Blasco, «Los estudiantes liberales», *Historia de la Universidad de Valencia*, 3 vols., Valencia, 2000, III, pp. 87-102.

en la orden de 23 de mayo de 1843, y no tener que esperar a que se publicara el reglamento que desarrollara los exámenes del nuevo plan. En concreto, los tres estudiantes que aprobaron décimo en Barcelona se examinaron el 23 de noviembre, poco después de haberse examinado de noveno, de ordinario, el 1 de septiembre. Posiblemente por no haber asistido a las clases, ya que no se había abierto la matrícula, es por lo que la nota de décimo en los tres casos se quedó en un aprobado. Además, el plan de 1845 exigía sólo ocho años para el doctorado y no diez como hasta ahora, de lo que interpreto que los examinadores resultarían especialmente indulgentes⁵⁶.

2.2.2. Grados

Tanto el grado de bachiller, como los de licenciado y doctor, se concedían después de superar el examen al que se presentaba el solicitante tras acreditar que estaba en posesión de los cursos y depósitos exigidos. De todo ello se dejaba constancia en un expediente personal que al efecto se abría, y en el que llama la atención especialmente la rapidez con que se ventilaban los distintos trámites⁵⁷.

El único problema que se podía plantear en la tramitación de estos y otros expedientes, era la acreditación por parte del estudiante que venía de otra universidad de los cursos y grados con que contaba. Igualmente le resultaba difícil a la universidad demostrarlo ante el Ministerio de la Gobernación. Especialmente complicado resultaba acreditar los tres cursos de Filosofía previos a Jurisprudencia cuando el estudiante provenía de algún seminario. Este problema se agudiza cuando la circular de 6 de noviembre de 1843 exigía a las universidades que, en todos los títulos de licenciado que expidiese, hiciese constar la época y el establecimiento en que se habían obtenido todos y cada uno de los cursos y grados previos.

Hasta entonces, la práctica de las universidades se limitaba a asegurarse de que el estudiante estaba en posesión del grado y del curso previo a aquél en que quería matricularse, pero de ninguna

⁵⁶ *Colección de órdenes...*, II, p. 74.

⁵⁷ Como ejemplo, las licenciaturas de Santiago Alcaraz o Antonio Alcalá en Madrid; AHUCM, *Jurisprudencia*, D-516, caja 7, expedientes sin número de ambos estudiantes.

manera controlaba cada uno de los años cursados para obtener aquel grado, o para llegar a aquel curso. Máxime si, como contestaba la universidad de Madrid, no estaba en sus posibilidades el exigir a los estudiantes la presentación de las certificaciones oportunas, por el mayor coste económico que suponía para el alumno.

El problema parece resolverse cuando, por orden de 1 de julio de 1844, se obliga a las universidades a librar al interesado que lo solicitase la certificación de los cursos que hubiese estudiado en el centro. En su defecto, sería la universidad en la que se pretendiera incorporar el grado la que de oficio solicitaría la certificación; en ambos casos sin coste alguno⁵⁸.

2.2.3. Grado de bachiller

Con la entrada en vigor del plan de Espartero, y a la espera de una nueva reglamentación, seguirá vigente el doble sistema anterior de obtención del bachiller: regular y a claustro pleno. Recordemos que la universidad de Valencia había acordado expresamente seguir confiriendo este último grado. El decreto de *reunión* no le debió resultar suficientemente explícito cuando decía que «No habrá más que un grado de Bachiller en la Facultad de jurisprudencia». Pero la orden de 26 de noviembre no dejaba lugar a dudas cuando alegaba como uno los motivos para relevar del curso sexto a los estudiantes de segundo, tercero y cuarto, «el de no convenir mantener para ninguno de los casos presentes el abolido grado a claustro pleno».

Con el nuevo reglamento de 23 de mayo de 1843, el examen de bachiller variaba sustancialmente. Ya no era una disertación sobre una proposición que 24 horas antes había tocado en suerte, como en el plan Calomarde, sino un examen de hora y media de preguntas sueltas sobre todas las materias que comprendían los estudios considerados elementales. La nota era, simplemente, de aprobado o reprobado, y estos reprobados tenían la posibilidad de presentarse nuevamente después de tres meses sin perder el depósito, excepto la parte correspondiente a las propinas de los catedráticos. La

⁵⁸ AHUCM, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias...*, documentos sin número.

prueba se realizaría ante un catedrático de los estudios superiores o de los de ampliación, que presidiría el ejercicio, otros dos catedráticos de estudios elementales y dos doctores.

Aunque la normativa ya no hablaba de listas de preguntas, en la práctica parece que todavía funcionaban. Al menos en la universidad de Barcelona, pues en claustro de 6 de agosto de 1845 se decide rectificar estos cuadernos de cuestiones, «que sirven para sortear los puntos sobre que han de disertar los graduandos en los exámenes de grados, muy en especial los que han de verificarlo a claustro pleno, respecto de que desde que se formaron dichos cuadernos han variado algunas de las asignaturas que se enseñaban»⁵⁹.

Hasta ahora, que se exigieran cuatro o cinco cursos para la obtención del grado de bachiller, no quería decir que éste se tuviera que obtener inmediatamente después de estos cursos de manera perentoria. El estudiante podía hacerlo así o esperar los años que considerase oportuno⁶⁰. Las órdenes de 30 de marzo y 8 de abril de 1843 intentan poner coto a esta amplitud de términos, fijando un breve período de tiempo para obtener el grado, sin el cual no cabía admitir la matrícula en el siguiente curso. En este sentido hay que interpretar la exposición que el claustro de Barcelona presenta ante la Dirección General de Estudios, en octubre de 1844, ante el caso planteado por algunos estudiantes. Puesto que el reglamento de exámenes concedía a los estudiantes reprobados una segunda oportunidad, una vez pasados tres meses, el claustro preguntaba si a estos estudiantes reprobados en la convocatoria extraordinaria, pero por primera vez, se les podía matricular y podían cursar quinto mientras se preparaban para la segunda convocatoria. A la espera de respuesta, que no conocemos, el claustro decide matricularlos. Resulta significativa la pregunta en cuanto evidencia el escasísimo número de reprobados, lo que deja de manifiesto que todavía no se había hecho visible esta laguna del reglamento⁶¹.

⁵⁹ BUB, *Reserva, Cervera*, caja 329, núm. 2.047,66.

⁶⁰ En abril de 1842, el regente remitía orden a las audiencias del reino para que permitieran presentarse a la reválida de abogado a todo aquél que hubiera obtenido el grado de bachiller en Leyes una vez concluidos los cursos de práctica; BUB, *Reserva, Cervera*, caja 78, núm. 636,13.

⁶¹ *Colección de órdenes...*, II, pp. 41-43, y BUB, *Reserva, Cervera*, Claus-tros, caja 329, núm. 2047,63, claustro de 31 de octubre de 1844.

Ya sabemos que ante el comprensible descontento de muchos estudiantes por la desaparición del grado de bachiller a claustro pleno y las numerosas peticiones en pro de su restitución, el gobierno provisional se muestra generoso⁶². La orden de 5 de octubre de 1843 permitía presentarse a este grado a todos los que a 1 de octubre de 1842 ya tuviesen empezada la carrera. El examen sería el mismo que se realizaba hasta la orden del 23 de mayo, pero siempre tras cursar el cuarto año⁶³. La cuestión es que fueron muchas las solicitudes que se presentaron y aceptaron para presentarse a este grado, incluso una vez publicado el plan de estudios Pidal⁶⁴. En Madrid ya hemos visto que el último bachiller a claustro pleno data de diciembre de 1845.

2.2.4. Grados de licenciatura y doctorado

Analizaremos ambos grados al mismo tiempo ya que solían tratarse de manera conjunta, tanto en las leyes como en la práctica. Los dos cursos tras los ocho de licenciatura retrasaban la concesión del grado de doctor hasta el fin del curso 1844-1845⁶⁵. Pero ya hemos visto que, a pesar de lo dispuesto en el plan de estudios, ningún estudiante se vio en la necesidad de completar los ocho años para la obtención de la licenciatura, ni los diez para el doctorado.

Para empezar, el decreto de 1 de octubre permitía a los ya bachilleres licenciarse aún con siete años, y si eran a claustro pleno con seis. También hemos visto que este bachiller a claustro pleno continuaba otorgándose, de forma excepcional pero profusamente, que

⁶² Véase petición, desestimada, presentada a finales de 1843 por los estudiantes valencianos de primero y segundo; AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo de 1843, 142/253.

⁶³ «Teniendo en consideración que cuando se dictó la real orden de 23 de mayo de este año no estaba vigente la facultad de recibir el grado de Bachiller a Claustro Pleno», según decía el Ministerio de la Gobernación el 12 diciembre de 1843, «se ha dignado declarar que los exámenes que han de celebrarse para el mencionado grado son los que estaban en práctica antes de publicarse la citada orden de 23 de mayo último»; BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 637,84.

⁶⁴ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 79, núm. 644,66.

⁶⁵ Orden de 22 de febrero de 1844; *Colección de órdenes...*, II, pp. 65-66.

a muchos estudiantes se les dispensaba el curso sexto, y que a otros se les permitía simultanear los cursos quinto y séptimo. Realmente, podemos decir que lo habitual en estos años era licenciarse con sólo seis años solares —que en muchas ocasiones conllevaba siete cursos académicos—⁶⁶. Incluso, con los mismos seis años, algunos estudiantes podían obtener el doctorado. Pero veámoslo con un poco más de detalle, acercándonos a la complejidad del momento.

En la universidad de Valencia, la primera duda que se plantea sobre adaptaciones es con ocasión, precisamente, del examen a grado de doctor. A solicitud de José Almiñana Cañizares, licenciado el 2 de noviembre de 1842, el claustro de 16 del mismo mes trató sobre si para poder examinarse de doctor dentro del año previsto en el decreto de 1 de octubre, se tenía que haber obtenido el grado de licenciado necesariamente antes de esta fecha, o si era suficiente con tener los siete años exigidos en el *Arreglo Provisional*⁶⁷.

Realmente, los grandes olvidados por la orden de 17 de octubre habían sido los que, habiendo cursado hasta séptimo, todavía no se habían licenciado. El decreto parecía dejar las cosas bien sentadas cuando en el artículo 9 hablaba de que, «los actuales licenciados en Leyes podrán recibir el grado de Doctor con arreglo a las disposiciones anteriores dentro del término de un año». No era suficiente, pues, tener los siete cursos, sino que se requería contar con la licenciatura. No obstante, «para no lastimar derechos adquiridos ni dar más latitud a la ley que la que en sí tiene»⁶⁸, el claustro de la universidad de Valencia decide consultar a la superioridad. La respuesta no se hace esperar.

Por la orden de 26 de noviembre de 1842, el regente del Reino modifica, corrige y amplía los criterios del decreto respecto, entre otros, a este supuesto. En concreto, el apartado primero decía que «Los estudiantes que habiendo ganado antes de la publicación del decreto de 1.º de Octubre los cursos necesarios para graduarse de

⁶⁶ Hablamos de los que se acogieron a la orden de 5 de octubre de 1843; estos estudiantes obtuvieron el bachiller en 1843 con cuatro años, al curso siguiente estudiaron quinto y séptimo simultáneamente, y en el curso 1844-1845 octavo, licenciándose al finalizar el curso.

⁶⁷ Véase la solicitud en AUV, *Documentos y Borradores de Claustros*, caja 477, documento de 14 de noviembre de 1842, y *Comunicaciones*, caja 170, año 1842, documento sin número.

⁶⁸ AUV, *Libro de Claustros*, caja 3, legajo de 1842.

Licenciados o de Bachilleres, no lo hubiesen verificado aún por cualquiera causa y razón que sea, se considerarán para los efectos de la nueva organización de su carrera como si hubiesen recibido sus respectivos grados». Esta disposición no hacía más que extender por analogía, a la licenciatura y al doctorado, el trato que la orden de 17 de octubre había otorgado al bachiller⁶⁹.

Otra cosa será el tipo de examen a que se tenían que someter. Con la publicación del reglamento de exámenes de 23 de mayo de 1843, la universidad de Valencia dudará sobre el examen vigente para la licenciatura y, especialmente, para el doctorado⁷⁰. A instancia de cuatro estudiantes licenciados, el claustro de Jurisprudencia discute sobre si cabía establecer alguna distinción entre los que

⁶⁹ Por ejemplo, los estudiantes en Valencia de séptimo en el curso 1841-1842, Antonio Boronat (licenciado el 25-11-42), Peregrín Arrué (30-11-1842), o Luis Alarcón (22-12-1842). Y en virtud de todas estas normas y aclaraciones, José Almiñana se doctoró el 21 de diciembre de ese mismo año, con sólo 7 años de estudios. La universidad de Madrid no parece que se plantee esta duda, ni ninguna otra. Al menos en las actas de claustros no consta ninguna discusión sobre ningún problema que se pudiera plantear con la aplicación del plan de Espartero, más allá de las cuestiones meramente protocolarias sobre el color de las borlas, capitotes, pompones y macetas de los nuevos graduados, así como el título que debía conferirse a los nuevos grados. También es cierto que era al rector al que le incumbía la resolución de los conflictos que se pudieran originar de la interpretación de las órdenes superiores, cosa que el claustro tenía muy presente. También es posible que en Madrid fueran más cautos. De hecho, tras la orden de 26 de noviembre se suceden en cascada los estudiantes que se licencian —muchos de ellos con seis años—, y doctoran con pocos días de diferencia. El primero de ellos, en concreto, se licencia el 23 de noviembre y se doctora el 4 de diciembre de 1842. BHMV, *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, juntas de 17 y 26 de octubre de 1842 y de 16 de junio de 1843. AHUCM, *Jurisprudencia*, D512, caja 3, *Libro de Actos de Posesiones...*, fol. 163.

⁷⁰ Creemos que la duda está fuera de lugar, ya que el artículo 10 de la orden de instrucciones de 1 de octubre era claro cuando decía que el reglamento comenzaría a regir «desde que termine el curso inmediato». Respecto al examen de licenciatura, en el claustro general de la universidad de Valencia de 10 de octubre de 1844, se decide «que en la urna de asuntos controvertibles para los ejercicios prácticos en las licenciaturas de jurisprudencia sean cincuenta los que se incluyan»; AUV, *Libros de Claustros*, Cuadernos de actas de claustros en limpio del año 1844, caja 3.

habían solicitado el examen de doctor con anterioridad al 23 de mayo, y los que lo solicitaran en adelante⁷¹. El resultado de la votación fue a favor de la sujeción de estos últimos al nuevo reglamento, por 11 votos frente a 7⁷². Pero el claustro general del día siguiente, por 27 votos frente a 12 abstenciones, vota en contra de lo propuesto en el claustro particular, por coherencia con lo resuelto para los grados de bachiller y licenciado. Pensamos que se trataba de una cuestión esencialmente económica en la medida en que el nuevo sistema aumentaba los emolumentos de los examinadores, de ahí el sentido de la votación en el claustro de Jurisprudencia.

La cuestión es que hasta el 1 de octubre de 1843 podrían examinarse y presentarse peticiones para doctorarse según el sistema del *Arreglo Provisional* y su reglamento de grados, aunque ya estuviera vigente la nueva normativa de exámenes. La universidad de Valencia realiza así una interpretación laxa del artículo 9 del decreto de *reunión*, pues considera que para presentarse al grado de doctor según el sistema antiguo, simplemente era suficiente con que en el término de ese año se presentara la mera solicitud de examen⁷³.

Y en la misma línea benevolente de las disposiciones reinterpretadoras del decreto de *reunión*, la decisión de la universidad de Valencia se verá confirmada y ampliada más tarde por el gobierno provisional. Por orden de 16 de agosto de 1843, y a instancia del estudiante Julián Pastor, se extendía la posibilidad de doctorarse según el sistema anterior, y sin nuevos estudios, a todos los que durante ese año 1842-1843 habían estudiado séptimo. Para ello el estudiante debía aprobar el examen de licenciatura con la totalidad del depósito —eso sí, pues no todo iban a ser complacencias—, y debía obtener el de doctor dentro del término del año marcado por el decreto de *reunión*⁷⁴.

⁷¹ AUV, *Libros de Claustros*, caja 3, legajo de 1843.

⁷² El resultado del claustro particular fue en segunda vuelta, pues en la primera no se obtuvo mayoría absoluta, ya que siete claustrales votaron a favor del plan nuevo, seis a favor del antiguo, y cinco se abstuvieron; AUV, *Libro de claustros*, caja 3, legajo de 1843.

⁷³ AUV, *Libros de Claustros*, caja 3, legajo de 1843, claustro de 31 de mayo. Aun así, todas las solicitudes se presentan y todos los grados se otorgan dentro del año; en concreto, los últimos se otorgan el 29 de septiembre de 1843.

⁷⁴ *Colección de órdenes...*, II, pp. 58-59. BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 637,55.

Respecto al grado de doctor que podemos llamar regular, es decir, tras superar los cursos noveno y décimo, la política del nuevo gobierno es más titubeante. La orden de 22 de febrero de 1844 venía a confirmar que, al margen de lo que se hubiese dictaminado en disposiciones anteriores, no se podía conceder en adelante ningún grado de doctor antes de cursar estos dos nuevos cursos, cosa que retrasaba los primeros grados hasta, al menos, el final del curso 1844-1845. En mayo de ese mismo año, y ante una petición de los estudiantes de octavo y del rector de la Complutense, el Consejo de Instrucción Pública se reafirma en la negativa⁷⁵. Pero todo era cuestión de intentarlo, debieron pensar algunos estudiantes, después de tantas correcciones y marchas atrás. Así es que, a propósito de la petición de Matías Román Carbonell, la orden de 28 de julio de 1844 rectificaba y prescribía todo lo contrario. O sea, que se declaraba inaplicable cualquier modificación que afectase al grado de doctor para todos los escolares que hubiesen iniciado los estudios antes del 1 de octubre de 1842⁷⁶.

No obstante, lo que observamos en la práctica es la escasa concesión de este título. Durante la vigencia del plan de Espartero en Valencia sólo se concedieron 16, y todos ellos dentro del año posterior al decreto de *reunión*, por lo tanto, con los siete años de la licenciatura ganados en el curso 1841-1842 o en el 1842-1843. Después no se concedió ninguno más hasta los cuatro que se otorgaron en 1846, ya bajo la vigencia del plan Pidal⁷⁷. Lo mismo sucedió en Madrid, con 46 grados en el mismo período. Parece que con la falta

⁷⁵ AHUCM, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias...*, legajo sin número.

⁷⁶ *Colección de órdenes...*, II, pp. 65-66 y 69-70. AUV, *Órdenes*, caja 143, legajo de 1844, documento sin número.

⁷⁷ Cada uno de estos cuatro doctorados responden a situaciones distintas. José Royo, graduado de bachiller a claustro pleno, estudió séptimo el curso 1842-1843, después octavo, con la licenciatura, y noveno en 1844-1845, doctorándose el 24 de mayo de 1846. Suponemos que se valió de la orden de 6 de octubre de 1845, que le permitía examinarse de décimo, aunque no hubiese asistido a clase, para no tener que sujetarse al nuevo reglamento de exámenes que en su momento se publicara en aplicación del nuevo plan Pidal. Así es que estudió siete cursos, uno por año, y después se examinó de décimo. Más especial todavía es el caso de Eliodoro Martínez. Doctor el 28 de junio de 1846, había ganado cuarto en 1842-1843, quinto y séptimo en el curso siguiente, en virtud de la orden de 5 de octubre de 1843, y noveno en el curso 1844-1845. Por lo tanto, ganó siete cur-

de perspectivas, la confusión, e incluso las expectativas de un nuevo cambio, los alumnos desistieron de cualquier intento.

Cuestión muy importante son los depósitos, especialmente para el grado de licenciatura. Suprimidas la mayoría de las antiguas rentas —municipales o eclesiásticas casi todas ellas—, el mantenimiento de la universidad dependerá en gran parte de las matrículas y de los depósitos de grados. Muy en línea con su doctrina abstencionista, los liberales sostenían que, más allá de la primaria, la enseñanza debía ser sufragada por quienes la disfrutaban, especialmente la universitaria. En tiempos de desamortización y guerras internas otras eran las prioridades⁷⁸.

Tal como veremos más adelante con mayor detenimiento, la orden de 26 de noviembre de 1842 concedía ciertas rebajas económicas, a modo de compensación, a los que en el curso anterior había estudiado séptimo y octavo, y que con el decreto de *reunión* se veían en la necesidad de licenciarse, a pesar de que no era ésta su intención. El claustro general de Valencia de 16 de diciembre de 1842 discute una petición de los estudiantes de sexto y séptimo para licenciarse con las mismas condiciones económicas. El rector opinaba sobre la justicia de la petición, especialmente si se atendía a las gracias que estaban obteniendo los cursantes de segundo, tercero y cuarto curso. Pero también dejaba de manifiesto la cortedad de los salarios de los examinadores que, además, «no podían dedicarse a otra clase de trabajo productivo». El asunto se trató como una cuestión meramente económica, como en verdad lo era; de aceptarse la petición, los abonos de los graduandos se reducirían a 1.500 reales vellón, es decir, que las propinas experimentarían una notable merma, quedando reducidas a 500 reales. El claustro era del

sos en seis años, y después se examinó de décimo. Filiberto García estudió sexto en 1841-1842, séptimo y noveno en los dos años siguientes, décimo en 1844-1845, y se doctoró por sobresaliente el 25 de mayo de 1846. El que se retrasara hasta un año después de terminar los estudios se debió, probablemente, a que el doctorado por sobresaliente sólo se concedía cada dos años. Y, finalmente, Jacinto Rosell se doctoró el 29 de marzo de 1846 desde la conmutación de sus grados de bachiller y licenciado en Cánones por los respectivos de Jurisprudencia, no sin antes examinarse de quinto en el año 1843-1844, y de séptimo en el curso siguiente.

⁷⁸ M. Baldó Lacomba, *Profesores y estudiantes en la época romántica...*, pp. 67 ss.

parecer que, de aceptar el gobierno la propuesta, debería indemnizarles de alguna forma. Así es que, preocupado tanto por los perjuicios en los fondos de la Universidad como por sus propios emolumentos, acordó remitir las exposiciones a la Dirección General de Estudios sin apoyarlas, proponiéndole que esta consideración se incluyera en el futuro reglamento de grados⁷⁹. La cuestión es que, después de nuevas peticiones de los estudiantes, no parece que se rebajaran los depósitos, pues por orden de 9 de julio de 1843 se concedía facultad al rector, y a la junta de hacienda de cada universidad, para rebajar los gastos en un tercio a aquellos estudiantes pobres que hubieran obtenido una nota de sobresaliente en la carrera, y en la inteligencia de que no podrían optar al doctorado⁸⁰.

Tras el pronunciamiento militar que derroca a Espartero, los cursantes de séptimo de Valencia insisten ante la Junta Provincial de Salvación, que el día 22 de julio accede a la petición de graduarse de licenciatura por la mitad de los depósitos, es decir, 1.500 reales vellón, pero según el nuevo reglamento de exámenes⁸¹. El oficio de la Junta decía lo siguiente:

Al acordar la Junta esta medida ha tomado en cuenta las consideraciones que contiene el informe del Claustro de esa Universidad de 14 del actual; pues prescindiendo del valor que puedan tener cuando no sirvieron de óbice a la concesión de mayor gracia por el Gobierno a los cursantes de 7.º año anterior, ha tenido presente que la disminución que puedan sufrir los fondos de esa Escuela por la de los derechos que devengan los graduandos ha de quedar más que superabundantemente compensada con el mayor número de estos que se ha de presentar; y al paso que ha consultado el interés de los cursantes que se veían privados del ejercicio de la facultad al fin de una carrera cuya terminación había costado a muchos inmensos sacrifi-

⁷⁹ AUV, *Libros de Claustros*, caja 3, legajo de 1842, claustro de 16 de diciembre. Se trata del mismo claustro en que se recibe la orden de 26 de noviembre. Véase también *Documentos y Borradores de Claustros*, caja 477, documentos de 10 y 14 de diciembre de 1842.

⁸⁰ *Colección de órdenes...*, II, pp. 56-57.

⁸¹ AUV, *Libros de Claustros*, caja 3, legajo de 1843, claustros de 3, 14 y 26 de julio de 1843, y *Documentos y Borradores de Claustros*, caja 477, documento de 14 de julio de 1834. Conocemos un escrito que el nuevo rector, Francisco Villalba, remite a la Junta el 16 de agosto de 1843, en el que se hace referencia a esta cuestión; véase *Correspondencia al rector*, caja 213, legajo si número de 1843.

cios, tampoco ha perdido de vista los derechos adquiridos de los catedráticos, doctores y demás, los cuales ningún perjuicio sufren, atendida la obligación de sujetarse al último plan de exámenes y grados ⁸².

Por orden de 1 de agosto de 1843, el gobierno provisional generalizaba este beneficio a todas las universidades, con la rebaja de sólo un tercio del depósito y sin la opción al doctorado, pues, a pesar de todo, «el Gobierno reconoce que no son idénticas las circunstancias en que unos y otros se hallan» ⁸³.

La cuestión de los depósitos de grados era capital, pues suponía una de las rentas más importantes de la universidad de estos momentos. Con las rebajas efectuadas con disposiciones como ésta, algunas universidades dudaban si debían modificar las propinas fijas que los examinadores recibían con el nuevo reglamento de exámenes, a lo que el gobierno provisional respondía que, efectivamente, todos los preceptores, incluida la caja de la universidad, debían sufrir un descuento proporcional ⁸⁴.

Uno de los sectores más afectados por la difícil situación económica que atravesaba la universidad española era el salario de los profesores, hasta el punto de que muchos de ellos impartían simultáneamente enseñanza en las aulas universitarias y en colegios y demás establecimientos privados ⁸⁵.

2.2.5. Premios de grado

El plan de estudios de 1824 concedía ciertos premios de graduación a los estudiantes pobres y a los más sobresalientes, previa

⁸² AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo de 1843 núm. 142/51.

⁸³ *Colección de órdenes...*, II, pp. 57-58.

⁸⁴ Resolución de 19 de agosto de 1843; AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo de 1843 núm. 142/91. El tema de las propinas también fue habitual en Madrid; BHMV, *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, juntas de 9 de noviembre de 1842 ó 29 de enero de 1843.

⁸⁵ Simultaneidad que ocasionó numerosas quejas ante actitudes presuntamente partidistas de estos profesores en los exámenes y grados de los alumnos que provenían de estos centros privados. Por ello, el gobierno provisional prohibió esta compatibilidad por circular de 1 de noviembre de 1843. M. Baldó Lacomba, *Profesores y estudiantes en la época romántica...*, pp. 74 ss., y *Colección de órdenes...*, I, p. 116.

sujeción a unas pruebas especiales. El *Arreglo* Quintana no había suprimido estos premios. Es más, bajo su vigencia se modificaron los requisitos por la real orden de 2 de julio de 1838, y por la circular de la Dirección General de Estudios de 16 de agosto del mismo año, aprobada por real orden de 15 de septiembre⁸⁶. El decreto de *reunión* de 1842 tampoco regulaba ni se refería a los premios, como tampoco lo hizo el posterior reglamento de exámenes. De manera que nada hacía dudar sobre su permanencia.

Pero al principio también hubo confusión. En los días siguientes al decreto de *reunión* se recibieron numerosas peticiones de estudiantes, todavía no graduados y que aspiraban a hacerlo gratis por pobreza, en las que solicitaban se pusiera fin a la incertidumbre del momento, «que se hace cada vez más precaria, a medida que se van complicando los inconvenientes y dificultades»⁸⁷. Es decir, que se les permitiese examinar según el régimen anterior o, subsidiariamente, que no les afectase el nuevo plan de estudios. En concreto, solicitaban el inicio de las pruebas para la obtención del grado por pobreza, bien a claustro regular bien a claustro pleno. Estos últimos pretendían, además, que mientras tanto se les permitiese matricularse y asistir a las clases de séptimo⁸⁸.

Veamos los premios por separado:

⁸⁶ *Colección de órdenes...*, I, pp. 35-36 y 46-49. Véase también Carlos Tormo Camallonga, *El Colegio de Abogados de Valencia...*, pp. 243 y ss; Íd. «Implantación de los estudios...», pp. 244-249. La comprobación de la pobreza se realizaba según orden de 8 de enero de 1838; *Colección de órdenes...*, I, pp. 31-32.

⁸⁷ Ver los casos, para claustro regular, de José María Marín Buendía, y para claustro pleno, de José Mercé, José Cortado, Bartolomé Escolano o Miguel de los Santos Muñoz (o de Isidro Andreu, que ya se había matriculado en quinto); AUV, *Documentos y Borradores de Claustros*, caja 477, legajos de 1842. Para presentarse al examen a claustro pleno se requería la nota de sobresaliente en cuarto; de ahí que algunos estudiantes que no la habían obtenido en junio solicitaban a la Dirección General de Estudios permiso para volverse a examinar en los exámenes de extraordinario; BUB, *Reserva, Cervera*, caja 211, o caja 78, núm. 636,22.

⁸⁸ Téngase en cuenta que la solicitud y la concesión del permiso para presentarse al bachiller a claustro pleno se otorgaba por la Dirección General de Estudios, tanto antes como después del decreto de *reunión*. BUB, *Reserva, Cervera*, caja 78, núms. 636,20 ó 636,70.

1. Premio por buen comportamiento y pobreza.

De cada diez grados de bachiller o de licenciado, se concedía uno gratis al estudiante pobre más sobresaliente en doctrina y conducta. «Sólo tendrán derecho a optar los estudiantes que se hallen matriculados o hubiesen debido serlo gratis por pobre, conforme a la real orden de 8 de enero de 1838, y que hayan ganado y concluido los cursos necesarios para graduarse en el último año escolar»⁸⁹. Pero el ajuste de esta escueta orden a los estudios universitarios no resultaba sencillo, por lo que la justificación y el reconocimiento de la pobreza dio lugar a dudas entre las universidades y a controversias entre éstas y algunos estudiantes rechazados⁹⁰.

Se trataba de un premio que se concedía por oposición. Para el grado del bachiller se realizaba un examen escrito de catorce preguntas, sorteadas de entre cien, a contestar en el tiempo de hora y media, y de otro examen posterior, oral, por espacio de al menos un cuarto de hora. Aunque la contabilización de los diez grados de bachiller se hacía separadamente entre los regulares y los de claustro pleno, el examen era el mismo para ambos grupos. Para el grado de licenciatura las preguntas escritas eran veinticuatro, a contestar por espacio de dos horas, mientras que el oral duraría al menos media hora. En ambos casos el examen se realizaba ante el decano y cuatro catedráticos de la facultad, teniendo presentes la nota del tribunal de censura.

Tanto en este caso como en los siguientes, para optar al premio cada aspirante debía obtener en los ejercicios de oposición la nota de sobresaliente, no con respecto a sus coopositores, sino mereciéndola por sí. Si fueren dos o más los que obtuviesen dicha calificación, se añadiría a ésta una censura respectiva, adjudicándose el premio al que fuera más digno de obtenerlo.

⁸⁹ BUB, *Reserva, Archivo Histórico, Subfondo Superior*, legajo 38/2/1/1A. Por orden del gobierno provisional de 9 de septiembre de 1843, y a pregunta del rector de la universidad de Valencia, se aclara que en el cómputo de los diez grados de licenciado se incluyen tanto los conferidos con la totalidad del depósito como los que lo han sido con una rebaja del mismo, «para sacar luego a concurso los que correspondan según el número que de ambas clases se hayan conferido durante el año»; *Colección de órdenes...*, I, p. 112.

⁹⁰ AUV, *Órdenes*, caja 142, legajos de 1843 núms. 142/187 y ss.

2. Premio por rendimiento o sobresaliente.

Dentro de este grupo hay que distinguir dos supuestos: el grado de bachiller gratis que cada año se concedía al estudiante más sobresaliente, fuera pobre o rico; y el grado de doctor que se conferiría al licenciado, pobre o rico, también gratis y a título de sobresaliente, pero en esta ocasión cada dos años.

La oposición al grado de bachiller se realizaba ante el decano y los catedráticos de Instituciones, y todo indica que se llevaba a cabo de la misma manera que en el supuesto anterior, teniendo presentes las notas de conducta libradas por el tribunal de censura. Mientras, los ejercicios para el grado de doctor consistían en contestar por escrito en el término de dos horas a veinticuatro preguntas sorteadas de un total de cien formadas para este fin, sufriendo después, cada opositor por separado, un examen oral y público por espacio de al menos media hora. De nuevo, el ganador debía contar también con nota favorable en conducta. En este caso las pruebas se realizaban ante el decano y todos los catedráticos de la facultad.

Los opositores que no obtenían el premio podían graduarse más tarde sin nuevos estudios ni ejercicios, y aunque ya hubiese transcurrido el plazo concedido al efecto, siempre que hubieran hecho completo el depósito y fueran aprobados sus ejercicios de oposición⁹¹. Pero, como ya sabemos, la orden de 22 de febrero de 1844 retrasaba la concesión de este grado de doctor hasta finalizado el curso 1844-1845. En todos los casos, las preguntas por escrito se formularían en latín o castellano, indistintamente, mientras que los opositores siempre redactaban sus respuestas en castellano.

Además de los premios por graduación, el plan Calomarde permitía a las universidades gratificar por su cuenta al cursante o a los dos concursantes más sobresalientes de cada curso. De hecho, la universidad de Barcelona otorgaba un premio por sobresaliente y otro por aplicación y asistencia, cada año y por cada curso. El régi-

⁹¹ BUB, *Reserva, Archivo Histórico, Subfondo Superior*, legajo 38/2/1/1A, y caja 292; caja 78, núm. 637,70. AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo de 1843 núm. 142/242, y caja 143, legajo de 1844, documento sin número. Por orden del Ministerio de la Gobernación de 25 de mayo de 1844, los asuntos controvertibles a sacar de la urna en los exámenes de doctor regulares debían ser cincuenta, y no cien.

men de los mismos quedaba fijado en los edictos de convocatoria según lo acordado en claustro de la Universidad⁹².

2.3. Academias

Durante la vigencia del plan de estudios de 1842 tenemos que diferenciar dos tipos de academias: la academia teórico práctica de Jurisprudencia, a la que el estudiante tenía que asistir en el curso octavo, y las tradicionales academias de oratoria.

Con la asistencia obligatoria a la primera se perseguían dos objetivos: por una parte, preparar al alumno para el grado de licenciado, con un continuo repaso a todo lo aprendido a lo largo de la carrera; y por otra parte, iniciarlo en el ejercicio de la abogacía, puesto que sobre la práctica de los tribunales sólo se habían estudiado cuatro meses de teoría general de los procedimientos en el curso tercero. La importancia que se le otorgaba a la práctica forense queda reflejada en el hecho de que el curso octavo era el único que duraba diez meses. Tres días a la semana se dedicaban al seguimiento de casos prácticos, y los otros tres a la discusión y consulta de las cuestiones más relevantes que se planteaban en el ejercicio general de la abogacía. En ambos casos se cuidaba especialmente la elocuencia forense.

No nos encontramos, pues, ante una academia tal y como se conocían hasta estos momentos sino, realmente, ante un curso universitario más, si bien con una metodología de trabajo diferente, por lo que de práctica suponía. Pero considero que recibe este nombre por imitación, ya que tradicionalmente estas materias se aprendían en academias que funcionaban al margen del horario escolar, muchas de ellas privadas, solo que en estos momentos la universidad pretende acaparar la formación completa de la abogacía y de los abogados. Era una universidad que buscaba la suficiencia de los conocimientos que impartía.

Las otras academias, las de oratoria, no eran exclusivas de Jurisprudencia, sino que también se celebraban en las otras carreras y

⁹² BUB, *Reserva, Cervera*, caja 292. Estos premios también estaban previstos en los estatutos de la universidad de Madrid que no llegaron a aprobarse; BHMV, *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, fols. 115 v ss.

para todos los cursos de la licenciatura. Por no venir reguladas en el decreto de *reunión* ni en el *Arreglo Provisional*, nos tenemos que remitir, como en tantos otros asuntos, al plan de estudios de 1824. No obstante, pienso que en este punto, y con los años, se estaba sobre todo a la práctica de cada universidad⁹³.

De estas academias, también llamadas dominicales —y que, a pesar de su nombre, se podían celebrar otros días de la semana—, no nos ha quedado constancia documental para las universidades de Valencia y de Madrid, pero sí para la de Barcelona. Al menos conocemos los edictos impresos en que se convocaban hasta el curso 1845-1846. Poca información más podemos tener, ya que los ejercicios eran orales. Se celebraban para todos los cursos, y en jueves, y consistían en un acto público presidido por el rector y un catedrático, en el que un estudiante defendía una proposición que previamente había sido fijada y publicada en los edictos, para después contestar a las objeciones que le hacían otros compañeros. Éstos eran siempre cuatro; de octavo todos ellos si se trataba de la academia de este curso, mientras que para las academias de los cursos inferiores, los estudiantes eran dos de ese curso y los otros dos del superior. En las academias de quinto los estudiantes del curso superior eran de séptimo. Como ejemplo, una proposición de la academia de octavo podía ser la siguiente:

Ningún ciudadano puede ser puesto en prisión sino por algún motivo racional bastante en que no haya arbitrariedad, y para recibírsele la confesión basta que exista contra él una prueba semiple-na del delito o delitos que se le atribuyan⁹⁴.

2.4. El fin de la reválida

Varios eran los requisitos con que se debía contar hasta ahora para ejercer la abogacía: el grado académico, la pasantía, el examen

⁹³ M. Peset Reig, «La enseñanza del Derecho y la legislación sobre universidades durante el reinado de Fernando VII», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 38 (1968), 229-375, p. 350.

⁹⁴ BUB, *Reserva, Archivo Histórico, Subfondo Superior*, legajo 26/6/4/8; acto celebrado el 15 de mayo de 1845. Véase en este mismo legajo edictos de otros años y cursos.

ante el colegio de abogados, el recibimiento ante los tribunales y, finalmente, el ingreso en el colegio de abogados si lo había donde se pretendía ejercer⁹⁵.

Desde el plan de estudios de 1824, el recibimiento de abogado ante los tribunales podía efectuarse por una doble vía: con la licenciatura, tras el séptimo curso y su presentación ante el Supremo Consejo; o con sólo el bachiller, tras un octavo curso y la reválida ante cualquier audiencia. Aunque no dispongo de datos exactos, me consta que durante los últimos años, los que incorporaron el título de abogado en la audiencia de Valencia, después de haber sido habilitados en Madrid como licenciados, no llegaban siquiera a una quinta parte del total⁹⁶.

Con el decreto de *reunión* se exigirá siempre el grado de licenciado. Y, lo que es más importante, desaparece la reválida, poniéndose fin así a esta secular institución. Si los orígenes de la pasantía todavía nos resultan inciertos, su final no lo es menos.

La cuestión es que para estos cambios también se dictaron las oportunas disposiciones transitorias y hubo las confusiones de rigor. Resulta interesante el comentario de la orden de 26 de noviembre de 1842, sobre las dificultades que las audiencias ponían a los estudiantes de octavo que, sin ser licenciados, pretendían revalidarse:

Esta conducta, que honra sobremanera a los Tribunales de justicia, por cuanto declarado requisito indispensable la licenciatura para la conclusión de la carrera literaria del abogado, se está ya en el caso de dar exacto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución política de la Monarquía, exige sin embargo de parte de la administración de los estudios públicos que se respete en los cursantes que se encuentran en aquel caso un derecho consentido hasta aquí, y contra el cual nada se había determinado⁹⁷.

⁹⁵ C. Tormo Camallonga, *El Colegio de Abogados de Valencia...*, pp. 179 ss. Véase también, del mismo autor, «Implantación de los estudios...», pp. 250-252.

⁹⁶ C. Tormo Camallonga, «L'advocacia durant la vigència...», y *El Colegio de Abogados de Valencia...*, pp. 249 ss. y 275 ss.

⁹⁷ Art. 63: «A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado».

Es decir, que los estudiantes que tenían en mente ahorrarse los gastos del examen de licenciatura, supliéndolos con el octavo curso y el recibimiento ante los tribunales, veían desaparecer sus expectativas con el decreto de *reunión* ⁹⁸. Algunos todavía no habían cursado octavo, pero otros sí, y ahora, además, tenían que costearse todos ellos el grado. Así es que ante las quejas presentadas por lo que se entendía como otro de los perjuicios comparativos del nuevo plan de estudios, la orden de 26 de noviembre intenta reducir al máximo este agravio. Para ello distinguía dos supuestos: los que en el año anterior habían cursado séptimo y no se habían licenciado con la intención de revalidarse ante la audiencia tras el curso octavo, y los que ya habían terminado este curso y tampoco podían revalidarse.

Para los primeros, el nuevo plan les obligaba a licenciarse, retirándoles un derecho que hasta ese momento tenían, por lo que la orden intentará compensarles admitiéndoles al examen de licenciado por sólo la mitad de los gastos y depósitos de costumbre, con la ventaja, además, de distribuirse los pagos en tres partes, previa la correspondiente fianza a satisfacción de los correspondiente rectores ⁹⁹. Eso sí, si hacían uso de esta concesión, no podían optar al

⁹⁸ En la primavera de 1842, la universidad de Valencia informa negativamente a la Dirección General de Estudios sobre la petición de Antonio Sanchis, para que se le conmutara la reválida de abogado por el grado de licenciatura, alegando falta de recursos. Vemos así que la cuestión económica era determinante a la hora de optar por un sistema u otro; AUV, *Documentos y Borradores de Claustros*, caja 477, documentos de 10 y 11 de marzo, y 15 de abril.

⁹⁹ De las tres partes, la primera se repartía entre los doctores en el acto de licenciarse; las otras dos eran para la universidad, a los cuatro y ocho meses después; AHUCM, *Jurisprudencia*, D-512, caja 3, *Libro de Actos de Posesión...*, fols. 153v y ss. Meses más tarde, con motivo de la regulación de las simultaneidades, en que se concedieron diferentes rebajas en los pagos, el gobierno provisional acuerda, por equidad, que todo descuento en los depósitos se prorrateara en proporción entre todos los que tuvieran derecho a propina, incluida la propia caja de la universidad. AHUCM, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias...*, documento de 19 de agosto de 1843, y D-516, documento de 31 de agosto del mismo año. Por orden de 28 de febrero de 1843, se exigía de los estudiantes interesados que prestaran «la competente fianza a satisfacción de los respectivos rectores», y por otra orden de 17 de marzo, «con el fin de aliviar a los interesados de

grado de doctor sin los dos nuevos cursos, pues en ningún momento la reválida había tenido ni podía tener efectos académicos. A *sensu contrario*, si querían doctorarse sin estos cursos debían licenciarse con los gastos y depósitos de costumbre¹⁰⁰.

Para los segundos, la orden les admitía al grado de licenciado con la misma cantidad que hubieran tenido que abonar en el acto de reválida ante su audiencia respectiva, y también con la posibilidad de pagar en tres partes. En cuanto a los efectos académicos de este grado —entendemos que para la obtención del doctorado—, se observaría lo visto en el supuesto anterior.

Como ya estamos viendo, cada concesión era el punto de partida para una nueva petición. En concreto, y con motivo de estas rebajas, algunos estudiantes se sintieron agraviados por ya haberse licenciado con los depósitos ordinarios, por lo que, como medida compensatoria, solicitaron la misma rebaja a la mitad de los derechos para el examen de doctorado, a lo que no accedió la Dirección General de Estudios¹⁰¹.

Pero una cuestión seguía quedando en el aire. Ni el decreto de *reunión* ni la orden de 26 de noviembre habían prohibido que las audiencias siguieran revalidando. Simplemente, no decían nada, y el artículo 58. 6.^a del *Reglamento provisional para la administración de justicia*, de 26 de septiembre de 1835, fijaba como facultad de las audiencias «hacer en su territorio el recibimiento de abogados, previas las formalidades prescritas por las leyes»¹⁰². Ante sendas consultas de las audiencias territoriales de Madrid y Barcelona —señal inequívoca de confusión—, la orden de 11 de febrero de 1843 decla-

los gastos que les ocasionaría el otorgamiento de las escrituras de fianza», se substituía esta fianza por pagarés firmados por fiadores. *Colección de órdenes...*, II, pp. 37-38 y 40. Hubo algunos licenciados que solicitaron, infructuosamente, la devolución de la mitad de estos gastos y depósitos, por creerse agraviados; *Colección de órdenes...*, II, pp. 45-46; AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo de 1843, núm. 142/140.

¹⁰⁰ Por orden de 17 de mayo de 1843 se insistía en esta limitación, aun cuando los graduados de licenciado depositaran la totalidad de los derechos. Sobre la fianza véase AHUCM, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias, usos y prácticas de la Universidad. 1836 al 1845*, legajo sin número de 18 de marzo de 1843.

¹⁰¹ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 637,38.

¹⁰² M. Martínez Alcubillas, *Diccionario de la Administración Española*, 8 vols., Madrid, 1886-1887, VI, p. 848.

rá que se admitiera al examen de reválida a todos los que habiendo cursado octavo en el año 1841-42 —segundo supuesto—, lo hubieran solicitado antes del mismo 26 de noviembre, y que las audiencias les concediesen, en su caso, el título para ejercer la abogacía ¹⁰³.

La orden de 6 de noviembre de 1843 terminaba, definitivamente, con esta situación de intermedio. A partir de ahora quedaba bien claro que con sólo el título de licenciado iba a ser suficiente para ejercer en cualquier parte del territorio español, sin necesidad de ningún tipo de autorización previa por parte de los tribunales. La orden reiteraba que el recibimiento, entendido como autorización por los tribunales para abogar, era una injerencia del poder judicial en el ejecutivo, propia de un sistema judicial y administrativo ya caducado, y contraria, en concreto, al artículo 63 de la constitución. Por lo mismo, el título de licenciatura ya no será expedido por las universidades, sino por el Ministerio de la Gobernación sobre las actas de aprobación remitidas por aquéllas ¹⁰⁴.

Consecuencia y prueba de la efectividad de esta orden es otra de 4 de marzo de 1844, por la que se modifican los *Estatutos de los Colegios de Abogados del Reino* de 28 de mayo de 1838, en el sentido de que, para la inscripción de los nuevos miembros, la Junta de gobierno del colegio en cuestión ya no debía pedir la certificación del título correspondiente al tribunal supremo o superior, sino al ministerio de la Gobernación ¹⁰⁵.

¹⁰³ *Colección de órdenes...*, II, pp. 35-36. El estudiante Pacario Nogales llegó tarde: el 26 de mayo de 1843 la Dirección General de Estudios ordenaba a la universidad de Barcelona admitirle al grado de licenciado, «sin más gastos que el que le ocasionaría su examen en una audiencia si continuasen éstas ejerciendo tales atribuciones o en tiempo oportuno hubiera solicitado su habilitación de abogado ante ellas». BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 637,41.

¹⁰⁴ *Colección de órdenes...*, II, pp. 64-65. Las universidades remitían sendas listas al Ministerio de la Gobernación —aprobación de los exámenes—, y a la Junta de Centralización de los Fondos de Instrucción Pública —depósitos—; AUV, *Comunicaciones*, caja 170, hojas sueltas del legajo de 1845. Véase remisiones de títulos en BUB, *Reserva*, Cervera, caja 79, núm. 644.7.

¹⁰⁵ Artículo 7 de los *Estatutos*, modificado, a su vez, por orden de 3 de marzo de 1839; Marcelo Martínez Alcubillas, *Diccionario de la Administración...*, I, pp. 58-61. Véanse también órdenes de 26 de abril y 14 de octubre de 1844, sobre centralización de los títulos de licenciados; *Colección de*

En definitiva, si el plan de estudios Calomarde de 1824 ofrecía la posibilidad de abogar con sólo el título de licenciatura, sin necesidad de superar prueba alguna ante los tribunales, el plan de 1842 prescribía que éste era el único camino. La orden de 6 de noviembre despojaba definitivamente cualquier prerrogativa que pudiera tener la administración de justicia en la aprobación o recibimiento de abogados¹⁰⁶.

3. *Adaptaciones para los canonistas*

La benevolencia que hemos observado en el trato a los estudiantes de Leyes se repite, incluso con creces, para los canonistas. En la línea que hemos visto, no cabía ningún tipo de agravio comparativo respecto a aquéllos. Si la intención inequívoca de los liberales era suprimir definitivamente la facultad de Cánones, las normas que al efecto se dictan buscarán causar el menor daño posible a sus estudiantes. Es más, las compensaciones para los canonistas estaban previstas incluso con anterioridad a las de Leyes. En el decreto de *reunión*, el Regente ordenaba al ministro de la Gobernación la preparación de compensaciones para los ya graduados y que, rápidamente, también se harían extensivas a los que en estos momentos todavía estaban estudiando. Hablamos, por lo tanto, de dos supuestos: las conmutaciones en favor de los que ya tenían un grado en Cánones, y las compensaciones de cursos en favor de los que todavía no tenían ninguno.

Cierto es que la adaptación al nuevo plan no ocasionaría tantos problemas a los canonistas como a los legistas, puesto que con el *Arreglo Provisional* la carrera de Cánones ya compartía los cinco primeros cursos con Leyes, así como el grado de bachiller. Es decir, que el plan de 1842 no supuso una reducción drástica de los estudios canonistas, sino que venía a ser un paso más en una progresiva reducción que ya venía operándose en los planes anteriores.

Con el plan Calomarde hablamos de cuatro cursos de Derecho canónico y eclesiástico para una licenciatura de siete años. Con

órdenes..., II, pp. 66-67 y 72-73, y C. Tormo Camallonga, «Un col·legi d'advocats: Sueca (1841-1895)», *Actas VII Asamblea de Historia de la Ribera*, en prensa.

¹⁰⁶ C. Tormo Camallonga, *L'advocacia durant la vigència...*, p. 512.

Quintana estas enseñanzas se reducen a dos cursos y parte de otro, de los siete cursos de la licenciatura. Con el plan de Espartero los estudios eclesiásticos se reducen todavía más, dos cursos de ocho: uno para el bachiller y otro para la licenciatura, incidiéndose en ambos cursos —y aquí se deja sentir la impronta liberal— en la «autoridad Real en los negocios de la Iglesia». Además, estas materias no se incluyen en los programas de doctorado. Y todo ello entendiendo que Cánones no se consideraba como una carrera propia, sino como un estudio auxiliar a Teología y Leyes. Por otra parte, ya sabemos que el número de sus estudiantes era poco más que simbólico, puesto que los que deseaban profesar en religión y los ya religiosos se decantaban más por los estudios de Teología y los seminarios conciliares.

3.1. Graduados

Para este primer grupo se dicta una orden el mismo 1 de octubre de 1842, en donde se establece una detallada lista de conmutaciones, que se incrementan cuando, junto a los grados de Cánones, se cuenta con algún grado o curso de Leyes o Teología. La orden de 18 de mayo siguiente, además de aclarar la anterior, ampliaba sus conmutaciones, mientras que por otra de 13 de octubre el gobierno provisional ampliaba el plazo para su concesión¹⁰⁷. Para la aplicación de cualquier compensación se tendría presente el plan que regía cuando los graduados en Cánones concluyeron sus estudios de Leyes. Conjuntamente, se establecían las siguientes reglas:

- A los doctores en Cánones que tuviesen los estudios completos de Leyes o Teología, tuviesen el grado de licencia o no, se les conmutaría su grado de doctor en Cánones por el de doctor en Jurisprudencia o Teología, respectivamente. Igualmente se les conmutaba aunque no hubiesen terminado sus estudios de Leyes en la universidad, pero sí fuera de ella en

¹⁰⁷ El artículo 9 del decreto de 1 de octubre fijaba en un año el término dentro del cual deberían realizarse las conmutaciones, pero por orden de 13 de octubre de 1843 se amplió dicho plazo en seis meses más; *Colección de órdenes...*, II, pp. 20-22, 46-48 y 63.

virtud de la legislación de la época, y siempre que hubieran obtenido la reválida en las audiencias; previo examen extraordinario, eso sí, de las asignaturas que no hubieran estudiado en la universidad ¹⁰⁸.

- Para las futuras oposiciones a cátedras de Jurisprudencia y Teología serían preferidos, respectivamente en cada facultad, los doctores que, además del grado mayor en Leyes o Teología, tuviesen el de Cánones, siempre que hubiesen estudiado esta carrera. La orden de 9 de agosto de 1844 progresaba en este supuesto, al otorgar preferencia a los doctores en Derecho civil, licenciados en Cánones, para desempeñar las nuevas cátedras de cuarto y sexto de Jurisprudencia, ambas de Derecho canónico y eclesiástico ¹⁰⁹.
- A los licenciados en Cánones que también lo fuesen de Leyes o Teología, se les dispensaba la mitad de los depósitos si se presentaban a los nuevos grados de doctor en Jurisprudencia o Teología, respectivamente. De acuerdo con lo dispuesto para los legistas, se concedía un año a los ya licenciados en Cánones que quisieran doctorarse según la normativa anterior.
- Si los licenciados en Cánones estuvieran estudiando Leyes, se les conmutaría aquella licenciatura por la de Jurisprudencia, sin más exámenes ni ejercicios que los de los cursos que le quedasen.
- Los legistas y teólogos bachilleres en Cánones, permutarían este grado por el de bachiller en Jurisprudencia o Teología, respectivamente ¹¹⁰.
- Si a los comprendidos en cualquiera de las anteriores casos les faltase algún curso de la facultad en la que obtener el nuevo grado o conmutación, o sea, Jurisprudencia o Teología, podrían suplirlo sujetándose a examen extraordinario de aquella o aquellas asignaturas que les faltasen.
- La regla octava de la orden de 18 de mayo de 1843 establecía una conmutación realmente sorprendente. Los doctores en

¹⁰⁸ Para los doctores en Cánones que conmutaran su grado por el de Jurisprudencia, la orden de 8 de mayo de 1843 les respetaba la antigüedad del primer grado en el nuevo claustro de Jurisprudencia; *Colección de órdenes...*, II, p. 45.

¹⁰⁹ *Colección de órdenes...*, II, pp. 70-71.

¹¹⁰ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 637,18.

Cánones con estudios terminados de Teología, tuvieran o no la licencia, podrían optar a la conmutación del grado de doctor en Jurisprudencia examinándose de las asignaturas que les faltasen que, por lo visto, podían ser todas. Es decir, que mientras que hasta ahora toda compensación de Cánones por Jurisprudencia exigía la tenencia de grado o estudios previos en Leyes —1.^a regla—, ahora también valían los de Teología. Vemos aquí una gran complacencia para con los estudios y estudiantes de Teología, aunque las consecuencias en la práctica ya podemos adelantar que fueron nulas.

Efectivamente, la aplicación de las conmutaciones iba a ser muy reducida. La universidad de Valencia, en concreto, sólo conmutó ocho grados: dos de bachiller, dos de licenciado y cuatro de doctor. Es cierto que algunos apartados eran de difícil aplicación, pero otros no. Por lo tanto, más que efectividad práctica, no sabemos si lo que se pretendía con estas disposiciones era simplemente un lavado de cara, o evitar descontentos innecesarios por parte de los sectores eclesiásticos y sociales más conservadores. O las dos cosas ¹¹¹.

¹¹¹ Destaca en Valencia el caso de Jacinto Rosell. Catedrático separado de Cánones en 1840, había estudiado bajo el plan Calomarde de 1824. En agosto de 1842 solicitaba la conmutación de un año de Decretales por sexto del *Arreglo Provisional*, así como dos años de práctica en el bufete de un abogado por el curso séptimo. Su intención era obtener a continuación los grados de bachiller y licenciado en Leyes, para poderse dedicar al ejercicio de la abogacía. No sabemos cuál fue el sentido de la contestación, pero lo más seguro es que no la hubiera por la inminente publicación del nuevo plan de estudios. Así es que en noviembre lo vuelve a intentar, solo que por no tener los estudios terminados de Leyes su caso no quedaba previsto por ninguna disposición de conmutación. El claustro de la Universidad, atendida la excepcionalidad del caso, y considerando que, «digno es de que se le conmute el grado de Cánones y sus largos estudios en los de Jurisprudencia», eleva la petición a la Dirección General de Estudios, para que «de este modo pueda lograr el título de abogado y con ello endulzar algún tanto su amarga suerte». Pero parece que no se le libró de nuevos estudios, pues conmuta sus grados en Cánones por el de bachiller y licenciado en Jurisprudencia los años 1844 y 1845, respectivamente, después incluso de ser repuesto en su cátedra por la Junta de Salvación en el verano de 1843. AUV, *Comunicaciones*, caja 170, documentos sin número del legajo de 1842.

3.2. Estudiantes

Para los canonistas que en el momento de entrar en vigor el nuevo plan de estudios todavía no eran graduados, el punto de partida era, como para los legistas, la orden de 17 de octubre de 1842. El párrafo 9 decía:

Los juristas canonistas que tuvieran que continuar sus estudios en la carrera de jurisprudencia, se matricularán en el año que les corresponda, con arreglo a las disposiciones que quedan establecidas para cada curso de la carrera actual.

Puesto que en el *Arreglo Provisional* los cinco primeros cursos de Cánones eran comunes a Leyes, estas adaptaciones quedaban reducidas a los cursos superiores.

En las matrículas de la universidad de Valencia no nos consta que ninguno de los 16 estudiantes que cursaban Cánones en el año 1841-1842 se integrara en Leyes en los cursos siguientes. Tan sólo conocemos una solicitud de conmutación de dos cursos de Cánones por el octavo de Jurisprudencia, y otra de otros dos cursos por cuarto y quinto; ambas fueron desestimadas por la Dirección General de Estudios por no encontrar previsión reglamentaria¹¹². Lo que se conmutaba, en su caso, eran los grados, y ya hemos visto que fueron pocos. Tampoco nos consta que aquellos estudiantes de Cánones se integraran en Teología. Simplemente, su rastro desaparece. Algo similar sucede en Barcelona y Madrid¹¹³.

¹¹² AUV, *Órdenes*, caja 142, legajos núms. 9 y 142/197 de 1843, respectivamente. Nos consta también una curiosa solicitud de conmutación de años de Cánones por Medicina, que la universidad de Valencia remitió a la Dirección General de Estudios, y que no creemos que fuera estimada; véase *Comunicaciones*, caja 170, legajo de 1843, hoja suelta sin número.

¹¹³ En la universidad de Madrid, el estudiante Ignacio Tro intentó la conmutación de séptimo de Cánones por sexto de Teología, y así se le concedió en el momento de la redacción de las listas, si bien, finalmente se le rechazó por no tener ningún tipo de cobertura legal; AHUCM, *Jurisprudencia*, D-514, caja 5, *Lista de matrícula de cursantes de 1841 a 1842*.

4. Teología

Aunque el decreto de *reunión* de Leyes y Cánones no se refería en ningún momento a los estudios ni a los estudiantes de Teología, las adaptaciones que se dictaron para los canonistas sí que les afectarían. La incorporación de Cánones a la facultad de Jurisprudencia iba a tener una significativa repercusión en los cursantes de Teología, atendiendo a las tradicionales conexiones que éstos tenían con los estudios de Cánones, puesto que compartían algunas cátedras. De hecho, estas cátedras resultaron una de las cuestiones más debatidas con ocasión del plan de Quintana¹¹⁴. A lo que se añaden los intereses que pudieran tener una vez finalizados los estudios.

Las asignaturas fijadas en el *Arreglo Provisional* eran las siguientes: en primero, Lugares teológicos e Historia eclesiástica; en segundo, Instituciones teológicas e Historia eclesiástica; en tercero y cuarto, Instituciones teológicas y Sagrada escritura; en quinto y sexto, Teología moral y Teología pastoral; y en séptimo, Disciplina eclesiástica y Oratoria sagrada. El grado de bachiller se recibía tras el quinto año, y el de licenciado tras el de séptimo.

Prueba de las estrechas relaciones entre Cánones y Teología es la orden de 3 de marzo de 1843, en la que, vistas las consecuencias prácticas del decreto de *reunión*, el regente se ratificaba en la no compensación de cursos, ni mucho menos grados, en favor de los teólogos que, habiendo estudiado algún curso de Cánones, estuviesen matriculados en Jurisprudencia:

El año, pues, de instituciones canónicas que se exigía al teólogo para graduarse de Bachiller, y el de decretales que se requería para licenciarse en cánones, sin una interpretación la más violenta, no puede considerarse como aplicables a la nueva carrera de jurisprudencia, y sin exponerse al propio tiempo a incurrir en el absurdo de que se diesen letrados y Profesores en tan importante y difícil ciencia a quienes faltasen los elementos que constituyen la base esencial de la misma¹¹⁵.

¹¹⁴ C. Tormo Camallonga, «Implantación de los estudios de Jurisprudencia...», pp. 226 y ss.

¹¹⁵ Orden de 3 de marzo de 1843, *Colección de órdenes...*, II, pp. 38-40, en concreto, p. 39.

La orden insistía de manera clara y precisa en que sólo cabían compensaciones para los estudiantes, teólogos o no, que tuvieran algún grado en Cánones, para lo que se remitía a las compensaciones en favor de los canonistas. Tampoco se permitía a los teólogos acogerse al régimen de simultaneidades que a continuación explicaremos si habían iniciado los estudios de Jurisprudencia con posterioridad a su publicación. Como vemos, la ventajosa transición otorgada a legistas, y especialmente a canonistas, no se traslada de la misma manera a los teólogos.

Como sucedía con Cánones, los estudios de Teología eran muy poco concurridos¹¹⁶. Valencia parece ser una excepción¹¹⁷. La matrícula en esta universidad era francamente alta, muy superior incluso a la de Cánones. Es más, todo indica que la universidad de Valencia tenía la facultad de Teología más concurrida de España¹¹⁸. La explicación pasa por la calamitosa situación en que se encontraba el seminario conciliar de la ciudad, que tuvo que cerrar sus puertas a principios de la década y no volvió a abrirse hasta 1845¹¹⁹. Los nu-

¹¹⁶ En Barcelona no se había abierto matrícula en los tres cursos 1839-1842; en el curso 1842-1843 sólo se abre para dos matriculados en primero; en 1843-1844 para otros tres alumnos en primero; y en 1844-1845 tampoco se abre matrícula. El resto de universidades también ofrece cifras muy bajas. En Madrid sólo nos constan veintiséis matriculados en el curso 1841-1842, otros veinticinco en el curso siguiente, veintiuno en 1843-1844, y llegan a los cuarenta y cinco en el curso 1844-1845. AHBUC, *Jurisprudencia*, D-515, caja 6.

¹¹⁷ BUB, *Reserva*, *Cervera*, caja 211. Pueden verse algunos datos sobre número de matrículas en V. Cárcel Ortí, «Segunda época del Seminario Conciliar de Valencia (1845-1896)», *Sociedad Castellonense de Cultura. Obras de Investigación Histórica*, 45 (1969), p. 8.

¹¹⁸ En el curso 1841-1842 cuenta, según los libros de matrículas, con ciento once alumnos, en el siguiente con ochenta y siete, en 1843-1844 con ochenta y cuatro, y en 1844-1845 los matriculados son ciento dos. Otros registros ofrecen otras cifras; así, en el estado numérico que la universidad remite al Ministerio de Gobernación para este último año constan 90 alumnos (89 según la suma del secretario), sin contabilizar los que tenían pendiente su solicitud de matrícula; AUV, *Órdenes*, caja 143, legajo de 1844, documento sin número.

¹¹⁹ Un documento de 1840 cifra en tan sólo cuatro los colegiales de este año; véase V. Cárcel Ortí, «Primera época del Seminario Conciliar de Valencia (1790-18)», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*,

merosos centros que se habían abierto en la anterior centuria, repartidos por toda la geografía nacional, habían vaciado las aulas universitarias de estudiantes de Teología. Los mismos cambios en los planes de estudio parece que no convencían a muchos de los futuros sacerdotes, lo que les empujaba a abandonar las aulas universitarias y a concentrarse en los seminarios. Si perduraban estos estudios en la universidad española no era por cuestiones académicas ni mucho menos prácticas, sino por inercia y tradición, y por no abrir un nuevo frente de batalla con algunas universidades y los catedráticos de esta ciencia —también con amplios sectores de la sociedad—.

Y a pesar de los datos de la universidad de Valencia, con la supresión de los órdenes el número de sacerdotes y religiosos en general no hacía más que disminuir desde la centuria anterior. Con los estudiantes teólogos sucedía lo mismo. La facultad y los seminarios conciliares eran el fiel reflejo de la nueva sociedad. En estos momentos estaba en mente del Gobierno una inmediata y más que conveniente actualización de los estudios de Teología, paralela a Cánones, para que «los jóvenes que se dedican al Ministerio Sacerdotal reciban una instrucción literaria correspondiente al estado de los conocimientos humanos»¹²⁰. La Iglesia estaba en el punto de mira de los liberales, especialmente de los progresistas. Hay que situar estos cambios dentro de un marco de reformas mucho más amplio, en el que las desamortizaciones representan el ejemplo más visible. Los nuevos políticos querían terminar con las rancias conexiones entre la Iglesia y los clérigos con las antiguas formas y costumbres políticas de un régimen que definitivamente debía superarse. Es difícil saber si la Iglesia no quiso o no supo adaptarse a los nuevos tiempos.

Las universidades, o algunos de sus catedráticos, muestran en ocasiones sus deseos de que las modificaciones en Leyes y Cánones se extendieran también «a los demás ramos de la enseñanza en el modo que el giro de la ciencia y las necesidades reclaman»¹²¹. Los

43 (1967), 85-133, en concreto, p. 121. Algunos documentos de principios de la década nos hablan del masivo abandono de esta carrera por los estudiantes; AUV, *Comunicaciones*, caja 170, hojas sin número del legajo de 1842.

¹²⁰ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 636,86.

¹²¹ BHMV, *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, junta de 26 de octubre de 1842, proposición aprobada a petición de los profesores Sánchez, Wambauroeghen y Acacio.

hermanos Peset reflejan muy bien estos cambios en Teología, cuando se plantean: «¿tan profundo fue el paso hacia la modernidad que hasta la ciencia varió en sus planteamientos? ¿O lo que motivó el fin de la vieja teología en los claustros fue el cambio social?»¹²². El que las reformas de Cánones y Teología se pretendieran realizar al mismo tiempo no es fruto de la coincidencia, sino que tiene su origen en la misma idea de modernización de la sociedad y de las universidades españolas.

En definitiva, que lo que los progresistas perseguían realmente era una universidad laica, a sabiendas de que en el proceso de reformas emprendido no podían contar con la Iglesia. Los moderados, no obstante, serán más complacientes, al menos hasta el concordato con la Santa Sede de 1851.

Al parecer, la reforma universitaria a fondo de Teología estaba prevista en un primer momento para inmediatamente después de la de Cánones, para el año académico de 1843-1844. Sin más demora. Pero la Dirección General de Estudios, antes de remitir al ministro de la Gobernación el informe requerido sobre esta cuestión, decide recabar información de las universidades:

En consecuencia de la precedente disposición, y deseosa por otra parte esta Magistratura de elevar los estudios teológicos a la altura necesaria para que los eclesiásticos españoles no decaigan del ventajoso concepto que por su ilustración supieron sostener en todos tiempos en el orbe cristiano; ha creído debe oír sobre tan grave asunto a los claustros de la facultad de todas las universidades del Reino, con objeto de reunir los datos que de tan ilustrados cuerpos deben esperarse y poder satisfacer cumplidamente los deseos del Gobierno. Mas si bien la reforma por su misma importancia debe llevarse sin precipitación, para evitar errores que pudieran ser trascendentales, la voluntad de la Dirección es que por todo el mes de febrero próximo quede evacuado el encargo que a ese claustro se hace, a fin de que medie espacio suficiente hasta la apertura del curso inmediato, para adoptar las disposiciones que se juzguen oportunas¹²³.

¹²² M. y J. L. Peset Reig, *La universidad española...*, pp. 707 y ss., en concreto, p. 708

¹²³ Resolución de la Dirección General de Estudios de 29 de diciembre de 1842; BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 636,86.

Pero todo indica que no iba a ser un asunto de fácil trato en los claustros generales, ni mucho menos en los particulares de Teología. Aunque la información que nos proporcionan los claustros es prácticamente nula, lo entiendo así a la vista de la consiguiente circular de la Dirección General de Estudios de 4 de mayo de 1843:

En 29 de *Diciembre* del año último se manifestó a V.S. que para cumplir con una orden del gobierno en que se manda a ésta Dirección que proponga el arreglo que crea conveniente en la carrera de Teología, era necesario que el claustro de la facultad de esa y todas las escuelas de la Península dijeran su opinión e indicaren los medios que conceptuaren más adecuados para realizar la reforma que S.A. tiene proyectada. Contra las esperanzas de la Dirección, ha espirado en 1.º del corriente el plazo que para reunir y remitir estos trabajos se señaló sin que ninguna de las Universidades haya cumplido con su encargo tan importante y que tanta relación tiene con su existencia propia. Lamenta en verdad esta Magistratura que los Claustros de Teología se hayan mostrado tan poco celosos por el lustre de las ciencias eclesiásticas, y que no hayan acogido con entusiasmo esta ocasión que la buena voluntad de S.A. les presenta para elevar la facultad a la altura que conviene a la ilustración de la época. Mas si es de sentir que las escuelas superiores se encuentran tan poco dispuestas a coadyuvar a la regeneración de la enseñanza pública, la dirección no puede receder de esta venda a que la llaman su deber y sus creencias; y en este concepto ha venido en resolver que inmediatamente y bajo la más estrecha responsabilidad que se hará efectiva, caso necesario, remita inmediatamente a esta Secretaría los trabajos que el claustro de Teología de esa Universidad haya formado en cumplimiento de la citada orden ¹²⁴.

También es cierto que la poca frecuencia con que se reunían los claustros a estas alturas del siglo impedía que cualquier negocio se ventilara con la rapidez demandada ¹²⁵. Finalmente, la reforma de

¹²⁴ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 637,14.

¹²⁵ La facultad de Teología de Valencia parece que delega en el pavorde Villalba, quien en sólo un mes redacta un proyecto de mejora, visto en claustro general, sin que sepamos si finalmente fue remitido a Madrid. En los claustros de Madrid —ya hemos dicho que más pobres—, sólo aparece esta cuestión en septiembre de 1843, cuando se nombra una comisión para la proposición al Gobierno del nuevo plan de estudios teológicos, sin que

Teología no se llevó a cabo para el curso 1843-1844, sino que tuvo que esperar al plan universitario de Pedro José Pidal de 17 de septiembre de 1845.

4.1. Simultaneidades

Que la reforma de Teología no tuviera lugar hasta el siguiente plan de estudios general, no quiere decir que sus alumnos no vieran alterados sus estudios con la unificación de Leyes y Cánones. Consecuencia inmediata del decreto de *reunión* es la orden de 29 de noviembre de 1842, que modifica el régimen de simultaneidades vigente hasta entonces.

Entendemos por *simultaneidad* la posibilidad y el derecho de conmutar un determinado número de cursos de una carrera, por el estudio y examen de varias asignaturas de otra carrera en un mismo año. Cosa diferente, en la que no vamos a entrar aquí, era la simultaneidad entendida como autorización para examinarse de un curso superior al de la matrícula, habitualmente en la convocatoria extraordinaria. De esta manera se conseguía aprobar dos cursos el mismo año. Aunque la legislación prohibía esto último, parece que se practicaba en alguna universidad y en algún seminario conciliar incorporado¹²⁶.

Partimos del *Arreglo Provisional*, que modificaba considerablemente el plan de estudios de Teología de 1824, a la vez que acercaba Cánones a Leyes. Con ello se ensanchaba el distanciamiento entre Cánones y Teología. De hecho, sólo compartían ahora dos asignaturas, Historia y Disciplina eclesiástica. Las disputas que en su momento hubo en los claustros de Teología y Cánones sobre la adscripción de estas cátedras unificadas se resolvieron a favor de este último, al menos en Valencia, con la posibilidad de que a ellas también pudieran aspirar los doctores en Teología¹²⁷. Ahora, con la

sepamos cuáles fueron sus trabajos o resultados, si es que los hubo. AUV, *Claustros*, caja 3, legajo de 1843. BHMV, *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, junta de 20 de septiembre de 1873.

¹²⁶ AHUCM, *Jurisprudencia*, D-511, *Órdenes sobre ceremonias...*, circular de la Dirección de 15 de julio de 1842.

¹²⁷ C. Tormo Camallonga, «Implantación de los estudios de Jurisprudencia...», pp. 226 y ss.

supresión de Cánones, el claustro de Valencia decide que, a falta de otra resolución de la Dirección General de Estudios, estas dos asignaturas fueran repartidas entre los profesores de Teología¹²⁸.

La letra de la legislación nos da a entender que muchos de los teólogos estudiaban con la pretensión de presentarse, también, a los grados en Cánones e, incluso, una vez obtenidos éstos, a los de Leyes, gracias al generoso régimen de conmutaciones. Y aunque no fuera ésta la intención inicial de los estudiantes, se permitían cambios de carrera entre Teología y Cánones realmente ventajosos. Lo que no se concedían, sin embargo, eran cambios ni conmutaciones directas de Teología por Leyes, sino sólo simultaneidades¹²⁹.

A la entrada en vigor del decreto de *reunión*, el régimen de simultaneidades venía regulado por decreto de 30 de mayo de 1842, que reiteraba otro de 19 de junio de 1837. En esencia, se permitía a los teólogos simultaneizar asignaturas de otras carreras en cada año, «según la compatibilidad de las materias y según el número de cursos que en Teología o Cánones tuviesen ganados»: dos años de Teología o Cánones por uno, en este caso de Leyes, o cuatro por otros dos, y siempre que la simultaneidad no se pidiera para el primer curso¹³⁰. Ahora bien, esta posibilidad sólo podría ser aprovechada por los que a 30 de mayo de 1842 ya tuviesen iniciada la carrera de Jurisprudencia.

Previendo un considerable número de solicitudes de simultaneidad, se dicta un nuevo decreto el 29 de noviembre, que pretendía reparar los perjuicios que las últimas disposiciones hubieran causado a los estudiantes que habían abandonado Teología como

¹²⁸ AUV, *Libro de Claustro*, caja 3, claustro de 28 de octubre de 1842.

¹²⁹ Resolución de la Dirección de 13 de diciembre de 1836; C. Tormo Camallonga, «Implantación de los estudios de Jurisprudencia...», pp. 235 y ss. Véase también el decreto de cortes sobre conmutación y simultaneidades de cursos de Teología y Cánones de 19 de junio de 1837, así como la resolución de la Dirección de octubre de 1841; *Colección de órdenes...*, II, pp. 4-6. La procedencia de Teología entre los matriculados en Cánones, así como las simultaneidades, se observa bien en la matrícula de Teología de Barcelona; BUB, *Reserva, Cervera*, caja 211.

¹³⁰ *Colección de órdenes...*, II, pp. 4-5 y 7-8; BUB, *Reserva, Cervera*, caja 78, núms. 636,61 y 636,65.

consecuencia del decreto de *reunión* ¹³¹. La nueva situación giraba en torno a las siguientes ideas básicas:

- Sólo tenían derecho a la simultaneidad de estudios los que hubiesen empezado Teología antes del decreto de 8 de octubre de 1835, por el que se prohibía la colación de órdenes sagradas, pero no a los que a esta fecha ya hubiesen obtenido el grado.
- La simultaneidad suponía necesariamente la invalidación de los dos o cuatro cursos de Teología cursados. Por lo tanto, quedaban anulados los respectivos grados académicos y se recogían los títulos.
- Se prohibía simultaneizar cursos prácticos, en este caso octavo de Jurisprudencia. A modo de excepción, a los que estuviesen en el año previo al curso de práctica —séptimo—, y demostrasen haber estudiado privadamente tanto las materias de séptimo como de octavo, se les abonarían ambas, previo examen extraordinario y «entendiéndose como su estudio principal el de la práctica y como simultáneo el teórico» ¹³².
- A los que ya no les quedase por estudiar ningún curso teórico, viéndose privados, por lo tanto, de cualquier simultaneidad, la ley les compensaba con una rebaja de la tercera parte en los gastos de la licenciatura, si el derecho que les asistiere fuera sólo a una simultaneidad, y de la mitad de los gastos si fuera a dos ¹³³.

¹³¹ *Colección de órdenes...*, II, pp. 32-34. Véase AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo de 1842, en donde encontramos numerosas solicitudes de simultaneidad, unas estimadas y otras no. En este último caso por provenir, generalmente, de estudios cursados privadamente o en establecimientos no reconocidos. Los estudiantes que empezaron este mismo curso la carrera de Teología también solicitaron que les fuera aplicable el mismo régimen de simultaneidades; lo que fue desestimado por la Dirección, por su clara oposición al artículo 1 del decreto de 30 de mayo (legajo núm. 142/441).

¹³² BUB, *Reserva, Cervera*, caja 78, núm. 637,8; AUV, *Órdenes*, caja 142, legajos núms. 142/150 y 142/162 de 1843.

¹³³ Para la simultaneidad de séptimo y octavo, BUB, *Reserva, Cervera*, caja 78, núms. 637,8; 637,42; y 637,45; y para los que ya no podían acceder a la simultaneidad, núm. 637,57. Véanse solicitudes de dispensa de depósitos en AUV, *Comunicaciones*, caja 170, legajo de 1843.

La Dirección General de Estudios tuvo que atender a una cascada de peticiones en los últimos meses de 1842 y primeros del año siguiente¹³⁴. Además, por orden de 7 de enero el gobierno despejaba, en favor de los solicitantes, cualquier duda que pudiera plantearse sobre la acumulación de las simultaneidades y la dispensa concedida en noviembre pasado del sexto curso de Jurisprudencia¹³⁵. Muchas de las solicitudes de simultaneidad, eso sí, se situaban claramente al margen de lo regulado, como las simples conmutaciones de cursos de Teología por otros de Jurisprudencia, o incluso conmutación de grados. Pero el gobierno no solía acceder a pretensiones tan desmedidas¹³⁶.

¹³⁴ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núms. 636,47; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 81, núm. 637,4 y núm. 637,56. AUV, *Órdenes*, cajas 142 y 143.

¹³⁵ *Colección de órdenes...*, II, pp. 34-35. Véase orden de 27 de diciembre de 1842 (p. 34).

¹³⁶ A José Torres Bosquet, que pretende compensar cuatro años de Teología, la Dirección General de Estudios le autoriza para simultanear cuarto con quinto de Jurisprudencia, pero no sexto con séptimo, ya que la orden de 26 de noviembre dispensaba el estudio de sexto a los cursantes de cuarto, por lo que habría de tener lugar con octavo, que era un año práctico y, como tal, no lo podía simultanear, pues no tenía los estudios privados que se exigían. Pero, en compensación, y ampliando el sentido y alcance de la orden de 29 de noviembre, la Dirección ordenaba al rector su admisión al grado de licenciado con la rebaja del tercio del depósito. No contento con esta solución, y movido tal vez por la normativa más reciente —especialmente el nuevo reglamento de exámenes—, el interesado se reitera a los pocos meses en la petición de simultaneidad de los cursos séptimo y octavo, a cambio de renunciar a la rebaja en el depósito, lo que es rechazado por la Dirección de Estudios, «como contrario a las órdenes vigentes» —como si su anterior decisión viniera prevista por alguna orden—. Y tal vez movido por la supresión de la Dirección y, especialmente, por la complacencia del nuevo gobierno provisional para con la Iglesia, Torres Bosquet insiste de nuevo, a finales de 1843, ante la Junta de la Sección de Instrucción Pública del Ministerio de Gobernación. Y la solución, esta vez, sí le satisface, puesto que la Junta le permite simultanear sus cursos sexto y séptimo naturales, que son séptimo y octavo de la carrera. La Junta intenta salvar la contrariedad de esta decisión con la orden de 29 de noviembre, aduciendo una cierta compensación al sujeto en cuestión, que no podía acogerse a la reciente orden de 5 de octubre de 1843. Orden que poco venía al caso, pues hablaba de la posibilidad que tenían los legistas que no se habían graduado de bachilleres a claustro pleno de poder simultanear los cur-

Observamos que, por lo general, el duque de la Victoria no tuvo con los teólogos la misma consideración que con los canonistas. Al menos en un principio. De lo contrario, «las escuelas se verían indudablemente invadidas por multitud de cursantes que, o bien conmutando los grados, o bien usando de la facultad de simultanear, concluyesen la carrera de jurisprudencia, y hasta que aspirasen al doctorado sin haber siquiera abierto el libro de los prolegómenos del derecho»¹³⁷. Ciertamente es que Cánones era una carrera exclusivamente universitaria mientras que Teología podía estudiarse en cualquiera de los seminarios conciliares existentes, cosa que hacía posible este trato diferente.

Pero, como ya hemos visto, y de la misma manera que sucedió en cuestiones similares, el gobierno provisional suavizará las cosas a favor de la Iglesia. Por orden de 4 de octubre de 1844, se derogaba el artículo 1 de la orden de 3 de marzo de 1843, permitiéndose en adelante abonar en la carrera de Jurisprudencia los estudios de Derecho canónico hechos por los teólogos durante la vigencia del *Arreglo Provisional*, al considerar «que las asignaturas son idénticas y han sido estudiadas con un mismo Profesor por los que seguían ambas carreras». Por lo tanto, se les abonará Instituciones canónicas de cuarto de Jurisprudencia e Historia y Disciplina general de la Iglesia, de sexto, «siempre que no los hayan utilizado hasta el presente de otra manera»¹³⁸.

los quinto y sexto naturales. Es decir, que una compensación concedida exclusivamente a los estudiantes de Jurisprudencia se reinterpreta de manera amplísima para beneficiar también a los de Teología. BUB, *Reserva, Cervera*, caja 78, núms. 637,3; 637,40; y 637,83. Sobre la supresión de la Dirección General de Estudios véase el decreto del regente de 1 de junio de 1843; *Colección de órdenes...*, I, pp. 100-105. En junio de 1844, y para compensar la imposibilidad de disfrutar de ninguna de las simultaneidades que como teólogo había sido, el Ministerio de la Gobernación permite a Heliodoro Martínez presentarse a los exámenes extraordinarios de octavo de Jurisprudencia, después de concurrir a dicha cátedra durante lo que quedaba de curso —entendemos que a los cursillos de recuperación—. Ese mismo año 1843-1844 había cursado séptimo y quinto, en virtud de la orden de 17 de octubre de 1842, por lo que en un mismo año este estudiante aprobó tres cursos. AUV, *Órdenes*, caja 143, legajo de 1844, expediente sin número.

¹³⁷ Orden de 3 de marzo de 1843, *Colección de órdenes...*, II, p. 39.

¹³⁸ *Colección de órdenes...*, II, p. 71, o BUB, *Reserva, Cervera*, caja 79, núm. 644,56.

La nueva clase política, aprovechando el camino avanzado por los progresistas, adoptaba esta medida con intención claramente propagandística, pues a estas alturas su repercusión efectiva iba a ser prácticamente nula por los escasísimos estudiantes que podían verse beneficiados.

5. *Catedráticos*

Las *Instrucciones* de 1 de octubre de 1842 encomendaban a la Dirección General de Estudios la distribución de los catedráticos de Leyes y Cánones entre las nuevas asignaturas, procurando que a cada uno le correspondiera el curso más análogo al que hubiesen tenido hasta esos momentos. En caso de ofrecerse alguna dificultad, sería el gobierno el que juzgaría lo conveniente. La reestructuración debía estar lista para ese mismo curso, pues con anterioridad al 15 de noviembre los nuevos catedráticos debían remitir a la Dirección los cuadernos razonados y los programas de enseñanza. Si hay algo en lo que coincidían progresistas y moderados era en el interés por controlar, o al menos supervisar, los programas de los catedráticos¹³⁹.

La Dirección decide consultar la designación de catedráticos a las respectivas universidades, para lo que el 10 de octubre traslada a los rectores la resolución siguiente, en la que se indicaba el camino a seguir:

V.S., asociado de los tres catedráticos más antiguos de Cánones o Leyes, y completando este número a falta de éstos con interinos encargados de la enseñanza, y aun sustitutos atendiendo en éstos a la categoría de la cátedra que desempeñan en lugar de la antigüedad que en aquéllos será circunstancia preferente, marque la distribución que en su concepto deberá hacerse de las nuevas asignaturas entre los profesores. Al hacer la propuesta que conceptúe más provechosa para la instrucción de la juventud deberá V.S. tener muy en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los profesores, los ramos del saber humano a que con preferencia se haya dedicado cada uno de ellos y la enseñanza que por más tiempo haya

¹³⁹ Órdenes de 20 de abril de 1843 y 6 de febrero de 1844; *Colección de órdenes...*, I, pp. 119-120.

desempeñado con acierto. No olvidará tampoco V.S. que siendo ocho las cátedras de la carrera de Jurisprudencia que deben abrirse, y ocho los profesores o catedráticos que hayan de desempeñarlas, deben inutilizarse los conocimientos de los catedráticos propietarios antes de echar mano de los interinos encargados o sustitutos¹⁴⁰.

La Dirección exigía celeridad, quería contar con las propuestas de las universidades a lo más tardar el día 24 del mismo octubre, lo cual era, prácticamente, imposible. De hecho, en Barcelona se trata esta cuestión en el claustro precisamente de 24 de octubre, en el que se aprueba remitir la lista propuesta por el rector. Ni en Valencia ni en Madrid hay constancia de que llegara a verse esta cuestión, por lo que no sabemos hasta qué punto se tuvieron en cuenta las propuestas de los claustros, si es que las hubo.

Por lo visto, la Dirección había hecho saber al Gobierno las dificultades y tardanzas que necesariamente iban a originarse, con lo que por una temprana orden de 19 de octubre era el regente el que ya se había encargado directamente de los nombramientos, que remitía después a los rectores. Según esta orden, en dichas distribuciones se pretendía «conservar la mayor parte de los maestros en iguales o muy análogas enseñanzas que las que actualmente desempeñan», intentando reducir «el número de excedentes a alguno de los sustitutos de cada escuela, los cuales según esa Dirección no pueden alegar ningunos derechos a recompensas o indemnizaciones»¹⁴¹.

En el caso de Barcelona la distribución realizada por el regente coincide, salvo en el tercer curso, con la que había propuesto el claustro: para primero y segundo, los anteriores catedráticos de Derecho romano; para tercero, el de cuarto de Instituciones de Derecho patrio; para cuarto, el de Instituciones canónicas; para quinto, el de Códigos españoles de sexto; para sexto, un catedrático de Cánones; para séptimo, otro de Derecho público español; y para octavo, el anterior catedrático de Práctica forense de séptimo y octavo. Que-

¹⁴⁰ BUB, *Reserva*, Cervera, caja 78, núm. 636,52; AUV, *Órdenes*, caja 142, legajo 142/347 de 1842.

¹⁴¹ *Colección de órdenes...*, II, pp. 25-26. La orden de 11 de junio de 1843 (pp. 54-55) niega cualquier derecho o mejora a favor de estos sustitutos.

daban como excedentes los anteriores substitutos de séptimo de Cánones y de primero de Leyes¹⁴².

En Valencia ya he dicho que las actas de los claustros no recogen este asunto. Seguramente no les dio tiempo antes de recibir las órdenes de 17 y 19 de octubre de nombramiento de sustitutos y catedráticos, respectivamente, de la nueva facultad. La designación, como en Barcelona, suponía la rigurosa asignación a cada profesor de la cátedra más afín a la que desempeñaban hasta entonces. Como excedentes quedaban, en Cánones, los dos substitutos en el año anterior de las cátedras de sexto y séptimo, y en Leyes, otros dos substitutos de Derecho natural y de gentes y de Derecho romano¹⁴³.

Tras la caída de Espartero, en Valencia se plantea un problema con ocasión del reingreso en la carrera docente de los catedráticos de Cánones Jacinto Rosell y José Domingo Costa. Ambos habían sido separados en 1840 y repuestos por la Junta de Salvación, en el verano de 1843, en los mismos términos que desempeñaban antes de la separación, sin caer en la cuenta de que había cambiado el plan de estudios¹⁴⁴. El primero había ocupado en su momento la cátedra de Instituciones canónicas y el segundo la de Disciplina eclesiástica. Teniendo en consideración que había sido suprimida la Dirección General de Estudios, que era la encargada de recolocar a los catedráticos en las nuevas cátedras, el claustro remite de nuevo la cuestión a la Junta de Salvación, que era a quien competía ahora tomar la decisión. Previamente propone a José Domingo Costa para la cátedra de sexto curso y, por estar ya ocupada la de cuarto por Salvador del Viso, el claustro considera que a Jacinto Rosell se le debía asignar la más análoga a su perfil de entre las que en ese momento se encontraban vacías —que eran las de primero, segundo y tercero—, decantándose por la de primero.

No obstante, el rector remite escrito particular a la Junta de Salvación en el que manifiesta sus dudas sobre la recolocación propuesta para Domingo Costa. Si el curso sexto quedaba liberado de

¹⁴² BUB, *Reserva, Cervera*, Libros de Claustros, caja 329, núm. 2047, 60, claustro de 24 de noviembre de 1842. A. Palomeque Torres, *Los estudios universitarios...*, pp. 621-622.

¹⁴³ AUV, *Libros de Claustros*, caja 3, y *Órdenes*, caja 142, legajo de 1842.

¹⁴⁴ M. Baldó Lacomba y V. Mir Montalt, «De Isabel II a Alfonso XIII», *Historia de la Universidad de Valencia*, 3 vols., Valencia, 2000, III, pp. 15-28, en concreto, p. 20.

alumnos durante los cuatro años siguientes, la Universidad se encontraría con un profesor «repuesto pero sin ejercicio», y con una dotación que «habrá de abonar sin ventaja alguna para la enseñanza». Considerando que su formación había tenido lugar bajo el plan de estudios de 1824, el rector desestima proponerlo para la vacante de Derecho constitucional por no considerarlo el más proporcionado, y recomienda su designación interina para una de las otras dos cátedras que quedaban vacantes, segundo y tercero; si es que a Rosell se le designaba definitivamente para la de primero.

Finalmente, el gobierno provisional confirma a ambos catedráticos en los nuevos puestos, asignando a Jacinto Rosell la enseñanza de cuarto de Jurisprudencia, y a Domingo Costa la de séptimo de Teología con la calidad de propietario. A este último, el ministerio de la Gobernación le adscribió inicialmente al claustro de Teología, aunque después rectificó y le situó de nuevo en el de Jurisprudencia, «quedando reducida su agregación a Teología tan sólo a la enseñanza de la cátedra referida».

En el tiempo transcurrido entre el escrito del rector y la definitiva decisión del nuevo gobierno se había dictado la orden de 2 de septiembre de 1843, en la que se designaba al rector como el encargado de recolocar a los catedráticos de sexto en la cátedra vacante que, a su juicio, tuviera la mayor analogía con su carrera literaria y con los ejercicios de oposición que hubiera acordado. Con la recolocación de estos catedráticos, el mismo gobierno incumple su propio mandato de otorgar este poder de decisión a la persona del rector. Eso sí, tampoco sigue la propuesta del claustro. Una decisión, por lo tanto, un tanto salomónica¹⁴⁵.

¹⁴⁵ AUV, *Clasustros*, caja 3, legajo de 1843, claustros de 1 de agosto y 18 de octubre; *Correspondencia al rector*, caja 213, legajos sin número de 16 de agosto y 18 de septiembre de 1843. El rector consideraba que, a la vista de las más recientes disposiciones, en el curso siguiente la cátedra de octavo quedaría vacante de alumnos, como la de sexto. Lo cual era una equivocación, como vino a reconocer más tarde; *Comunicaciones*, caja 170, documento sin número del legajo de 1843; *Órdenes*, caja 142, legajos de 1843, núms. 142/56, 142/57, 142/79, 142/110 y 142/111. Sobre la adscripción de Costa a Teología y Jurisprudencia véase órdenes de 20 de noviembre de 1843 y 6 de febrero de 1844, respectivamente, en AUV, *Órdenes*, caja 143, legajo de 1844, documentos sin número. *Colección de órdenes...*, II, p. 60.

En Madrid tampoco parece que se plantearan problemas destacables; al menos no ha quedado constancia en las actas de claustros ni en la documentación paralela. Tan sólo nos referiremos a los avatares del doctor Joaquín Lumbreras.

A la entrada en vigor del plan Espartero, y según el claustro, la legislación permitía ser jueces para los grados de licenciado a los catedráticos de la facultad aunque no fueran doctores, al de la asignatura accesoria que fuera doctor en la facultad principal, y a los que desempeñaran una asignatura a que hubieran debido asistir los graduandos. Por lo tanto, Lumbreras, doctor en Leyes y Cánones, catedrático de séptimo de esta última facultad, común con el séptimo de Teología, podía ser juez en los grados de licenciatura de Teología, pero no en los grados de bachiller, ni a claustro regular ni pleno, como tampoco podía ser miembro del claustro de esta última facultad.

Lo que no se entiende es cómo a principios de 1843, el claustro le apoya en su petición ante el Ministerio de Gobernación, de que se le nombrara un subprofesor para encargarse de parte de su cátedra, que era la de sexto, justo cuando ese año no había tenido alumnos. Además, también solicitaba la conmutación del grado de doctor en Cánones por el de Teología, lo que no quedaba permitido por la normativa de compensaciones, ya que el solicitante no tenía ningún curso de esta facultad. En este punto no consiguió el favor del claustro. En diciembre de 1843, y por el fallecimiento del catedrático de segundo de Jurisprudencia, es nombrado el mismo Lumbreras. Vemos, pues, que por cuestiones meramente pragmáticas, todo profesor sin plaza o sin discípulos era recolocado en la primera vacante que se producía, al margen de la carrera seguida o de la posible afinidad de materias ¹⁴⁶.

6. *Consideraciones finales*

Al margen de los pormenores que llenan este trabajo, y que he creído conveniente reflejar para una mejor comprensión de la realidad académica de estos años, pasamos a continuación a resumir

¹⁴⁶ BHMV, *Libro de acuerdos del Claustro General*, Mss. 538, juntas de 6 de agosto de 1842, 29 de enero y 2 de abril de 1843, y 5 de enero de 1844.

las ideas generales y fundamentales que dirigen el quehacer universitario en los estudios de Jurisprudencia bajo la vigencia del plan de estudios de Espartero.

Si hasta el plan de estudios Calomarde de 1824, el eje principal de todas las modificaciones, tanto ilustradas como liberales, se centraba en mantener o en reducir más o menos su contenido romanista y sustituirlo por el Derecho nacional, con el *Arreglo Provisional* de 1836 otras cuestiones pasarán a ocupar el centro de las discusiones. Una vez el liberalismo se consolida y el estado controla, definitivamente, las universidades, en las que se impone el estudio de los códigos nacionales, las reformas en los estudios de Jurisprudencia se propondrán nuevas metas.

El acercamiento de la universidad a los nuevos tiempos exigía, entre otras medidas, la supresión de la facultad de Cánones y la profunda reforma de Teología. Pero, puesto que las pugnas políticas no cesarán, las diferentes posturas que progresistas y moderados mantendrán sobre estas materias quedarán reflejadas en el sentido y en el alcance de las normas. Ahora bien, aunque todas las iniciativas en esta dirección partieran de los progresistas, en ningún momento los moderados ofrecieron resistencia convincente ante el progresivo arrinconamiento de los estudios eclesiales. Ni mucho menos se apartan, cuando llegan al gobierno, del camino trazado por aquéllos. Las diferencias obedecerán más bien a motivos extraacadémicos y coyunturales, y se manifestarán en asuntos menores, como en el alcance de las compensaciones a favor de los pocos estudiantes de Cánones que quedaban y, en especial, a favor de los de Teología, que eran algunos más. También en el modo de aligerar entre los legistas las contrariedades derivadas de la acomodación al nuevo plan de estudios.

Con el decreto de 1 de octubre de 1842 los estudios de Jurisprudencia alcanzan su mayor extensión temporal conocida: ocho años para el grado de licencia y diez para el de doctor; equiparable en cierta medida a las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 y al plan de 1807. Pero, de la misma forma que en estos casos, todo quedó en una mera programación, pues, con las compensaciones propias de la transición y la inmediata publicación del plan Pidal, en ningún momento se materializó semejante extensión. Ningún estudiante tuvo que cursar tantos años para graduarse. Tampoco ningún plan de estudios posterior volverá a exigir tantos años. En concreto, el grado de licencia, necesario y suficiente para abogar sin

necesidad de pasantía, irá reduciéndose de manera considerable en los sucesivos planes de estudios.

Si hasta ahora para presentarse a los exámenes de grado en Leyes y Cánones no importaba tanto lo estudiado como el número de años cursados, con el decreto de *reunión* asistimos a un importante cambio. Importa el número de cursos, pero también el contenido de los mismos, las materias que se estudian. Importa seguir el «orden metódico de la enseñanza», en palabras de la Dirección General de Estudios. Hablamos, por ejemplo, de que se tendrán muy en cuenta las materias que con las adaptaciones se dejarán de cursar. O de que los alumnos reprobados en el grado de bachiller no podían aprobar el quinto curso ni matricularse en los siguientes. Se observa, pues, un creciente seguimiento y control de las materias estudiadas.

Paralelamente, asistimos a un replanteamiento de la estructura de los grados, con decisiones, definitivas unas, transitorias otras, e incluso de ida y vuelta. Y ello junto a la implantación definitiva de los exámenes anuales que, durante años, convivirán con los de grado hasta la definitiva desaparición de éstos. La propia regulación del doctorado, así como su irregular y escasísima concesión, evidencian la crisis que este grado está sufriendo en estos años, en búsqueda de un nuevo sentido u orientación. Se pretende, tal vez, terminar con todo lo que de superfluo había tenido hasta entonces, de manera que quedara dirigido especialmente a los que pretendiesen dedicarse a la universidad, al tiempo que se procuraba entre los doctores y profesores una formación más allá de la licenciatura. Insistimos en que este último grado ya no podrá ser evitado en ningún caso para poder abogar.

De todos estos cambios y de todas las nuevas exigencias académicas se deriva la cada vez mayor complejidad de las normas sobre adaptaciones. Estamos lejos de la política casuística e improvisadora que había presidido la implantación de los anteriores planes de estudios, cuando no se preveían los problemas de reasignación de estudiantes a los nuevos cursos. Eran cuestiones que se resolvían de manera individual, caso por caso, por la propia universidad o, llegado el momento, por el Consejo de Castilla. Y habitualmente después de una petición particular. Ante la evidencia de una realidad, una norma posterior solía generalizar soluciones para futuros casos iguales. Ahora, vaciados de capacidad de decisión los claustros, será siempre la Dirección General de Estudios, o el Ministerio de la

Gobernación, quienes intentarían resolver estas cuestiones de manera generalizada y, lo que es más importante, antes de que se plantearan. No obstante, tampoco se evitarán posteriores correcciones, que vendrán impulsadas muchas de ellas por cambios de gobierno. Aunque algunas de estas correcciones evidencian diferencias ideológicas, insistimos en que los objetivos principales eran ampliamente compartidos.

Respecto a cambios anteriores, la normativa de estos años gana mucho en su redacción. Resulta más clara y depurada, a la vez que previsor, profundizando en el camino iniciado con el *Arreglo Provisional*. El legalismo y la tan buscada seguridad normativa de los liberales también dejaban su impronta, por lo tanto, en la legislación universitaria.

Pero, a pesar de que la transición estaba prevista desde el mismo decreto de *reunión*, y de una manera detallada como nunca lo había estado hasta entonces, lo cierto es que la cascada de disposiciones que se dictó con posterioridad sumió a los estudiantes en un complejo sistema de normas, algunas de ellas contradictorias y de consecuencias difícilmente predecibles, aunque con unos resultados siempre satisfactorios para sus intereses.

Que el resultado fuera siempre provechoso para el escolar obedece a que el principio de salvaguarda de los derechos adquiridos era el norte que debía guiar todas las disposiciones, como bien lo tenían presente tanto claustros como estudiantes. Si la Dirección General de Estudios mostraba una gran transigencia con el régimen de compensaciones y simultaneidades, parece que la Junta de Instrucción Pública del Gobierno Provisional todavía era más generosa, especialmente con canonistas y teólogos.

Tantas facilidades en las compensaciones no dejaba de contradecir, sin embargo, la necesidad manifestada en alguna ocasión de poner freno al exceso de estudiantes de Jurisprudencia. A esta pretensión obedece, por ejemplo, el aumento en el número de cursos, en la línea ya marcada por reformas precedentes. El decreto de *reunión* se autojustificaba, entre otros motivos, en «embarazar por último con circunspección y con prudencia el excesivo concurso de la juventud que tal menoscabo causa a los verdaderos intereses de muchas familias con notorios perjuicios para la sociedad», lo que pasaba por disuadir a los jóvenes de la elección de esta carrera. Pero mucho se cuidaba la legislación de perjudicar lo menos posible a los que ya habían iniciado la carrera, a los que en ningún momento se

les exigirán más años de los exigidos en el momento en que iniciaron los estudios, permitiéndoles acumular las ventajas prevista tanto en un plan como en el otro.

A pesar de todo, no se terminó con las frecuentes peticiones de los estudiantes que, a título individual, solicitaban concesiones al margen, e incluso en contradicción, con lo fijado por las normas. Pero ahora debían pasar por el conducto e informe del rector. La condescendencia para con estas peticiones va a ser muy poca respecto a lo que era habitual hasta la fecha. En este sentido, disminuirán las peticiones, aunque todo era cuestión de intentarlo.

Por otra parte, la universidad pasa a ser la única fuente formadora y emisora de abogados. Se busca la suficiencia de sus enseñanzas para capacitar a los nuevos profesionales. Consecuencia de ello es la supresión de la obligatoria pasantía privada —que viene operándose desde principios del siglo— y su sustitución por las asignaturas de práctica forense. Se revitaliza y se le da un nuevo sentido al grado de licenciado. Por lo mismo, se suprimen los exámenes ante los colegios de abogados y las audiencias territoriales. Esta autosuficiencia de la universidad, junto con la estricta interpretación del principio de división de poderes, tan propio del primer liberalismo, no se entiende compatible con ningún tipo de control sobre la abogacía por parte de los tribunales de justicia y colegios profesionales. Se quiere identificar así licenciatura con abogacía.

Y si la universidad pasa ahora a controlar el acceso a la abogacía, es la misma legislación liberal que lo ha dispuesto la que querrá eliminar cualquier manifestación de autonomía universitaria. La capacidad de cada universidad para decidir la formación de sus alumnos quedaba ya muy lejos de lo que en algún momento había sido. De acuerdo con los principios de la administración centralista liberal, las universidades a penas muestran señales de sus antiguas costumbres. Es la universidad uniforme del liberalismo. Muy atrás quedan los tiempos en que cada una tenía su propia organización —tampoco tan diferente—, y cada claustro interpretaba y aplicaba a su entender las normas que se dictaban desde el Supremo Consejo. Normas que, por elementales y poco precisas, permitían y venían a justificar aquellos usos particulares. Incluso permitían diferentes planes de estudios y grados.

Ahora, la meticulosidad de las disposiciones, junto con las mayores atribuciones del rector frente al claustro y la dependencia de aquél del gobierno central, unificará la realidad práctica de todas

las universidades. En estos años resulta difícil encontrar asuntos que recuerden vagamente una autonomía ya perdida. Son cuestiones menores que evocan viejas prácticas y que evidencian que la nueva situación nada tiene que ver con la del siglo pasado.

En el caso de la universidad de Madrid hablamos, por ejemplo, de la paralización por el Gobierno de la aprobación de sus estatutos. Por ser un tema que chocaba frontalmente con la política centralizadora y unificadora liberal, estaba condenado al fracaso. La redacción del proyecto se discute en claustro durante el verano de 1842 y se remite al Regente el 20 de agosto, sin que éste muestre intención alguna en su aprobación. Del Gobierno Provisional parece que se tenían otras expectativas, pues en septiembre de 1843 el claustro le recuerda la remisión del reglamento y se ofrece, incluso, para realizar las modificaciones que en su caso parecieran necesarias. Ciertamente, el nuevo régimen parece ser más receptivo. La orden de 16 de octubre devuelve el reglamento a la universidad y ordena al claustro la redacción de las oportunas modificaciones para que, en su caso, resultara aplicable a todas las universidades del Reino —véase el cuño uniformista—. Pero nada más se supo, ni por parte de la universidad ni del gobierno.

En el caso de Valencia, podemos ver un atisbo de autonomía cuando el claustro, después de recibir el decreto de *reunión*, decide seguir concediendo el grado de bachiller a claustro pleno como lo había hecho hasta entonces, arguyendo derechos adquiridos. O cuando discute sobre si cabía la votación en el otorgamiento de los nuevos grados de doctor, y si se podía otorgar *nemine discrepante*. Aunque la normativa no decía nada al respecto y el claustro parece opinar que no lo permitía, finalmente se decide continuar votando como hasta entonces se había hecho.

En el caso de Barcelona podrían traerse a colación algunos exámenes extraordinarios que llegaron a celebrarse más allá del mes de septiembre.

En cualquier caso, migajas de autonomía.

Carlos Tormo Camallonga
Universitat de València

BIBLIOGRAFÍA

Con la periodicidad habitual, apareció en 2004 el número ocho de los *Annali di Storia delle Università italiane*. En esta ocasión, la primera de sus secciones, titulada *Il Punto*, ofrece el trabajo de Maria Luisa Bianco sobre las mujeres en la universidad italiana contemporánea tanto en calidad de docentes como de estudiantes.

La segunda sección *Studi*, dedicada habitualmente a concentrar un grupo de trabajos que analizan de forma monográfica uno de los centros universitarios italianos, se centra esta vez en la Universidad de Ferrara. Los trabajos atienden a diversos asuntos relativos a este centro, así el texto de Alessandro Fabbri observa en conjunto la realidad de esa Universidad entre 1942 y el reciente 2004 y el de Gian Guido Balandi y Andrea Maggi analiza la celebración en 1932 en la misma Universidad del segundo congreso de estudios sindicales y corporativos. El resto de trabajos se centran en el análisis del desarrollo e impartición de determinadas materias tales como el Derecho (véanse los textos de Franco Edoardo Adami sobre la enseñanza del derecho canónico entre los siglos XV y XVI; el de Michele Pifferi sobre la actividad de los profesores de derecho criminal; y el de Giovanni Cazzetta sobre la facultad de derecho en la universidad libre de Ferrara entre 1860 y 1942); los Estudios Clásicos (Angela Maria Andrisano los observa en el renacimiento atendiendo a las reflexiones teóricas de Giovambattista Cinzio); la Medicina (el trabajo de Franco Baccheli estudia la relación entre medicina, moral y religión en el caso concreto de Antonio Musa Bravola y el de Marco Bresadola se centra en la reforma de los estudios de Medicina a finales del siglo XVIII); la Matemática (Alessandra Fiocca nos acerca a los estudios matemáticos y a la canalización de las aguas); la Química (Fernando Pulidori observa su institucionalización y primer desarrollo en la universidad pontificia de Ferrara entre 1742 y 1860) y, finalmente, la Física (es Grazia Zini quien escribe sobre la física experimental y el gabinete de física en Ferrara desde finales del siglo XVIII y hasta comienzos del XX). Un último estudio, el de María Teresa Gulinelli nos muestra la colección numismática del museo de la Universidad que nos ocupa.

La tercera sección de la revista, como siempre, nos informa acerca de las fuentes para el estudio de la universidad italiana. Así, Nicole Bingen nos ofrece el análisis de los datos recogidos en un censo sobre estudiantes francófonos en la universidad italiana del renacimiento; Giuseppe Catturi, Giuseppe Grossi y Angelo Riccaboni, nos aproximan a la evolución histórica y prospectiva de la contabilidad en las universidades italianas; Giovanni Gonzi, nos informa sobre un debate sostenido en la segunda mitad

del siglo XVIII, en Parma, en relación con el obispo-canciller de la Universidad, y, por último, Sandro Serangeli y Raffaella Zambuto escriben a propósito del poder central y el colegio de doctores juristas de Macerata.

El cuarto apartado de la revista, sobre archivos, bibliotecas y museos nos ofrece la posibilidad de conocer la nueva sede del archivo histórico de la Universidad de Siena (gracias al texto de Alessandro Leoncini), de acercarnos a la biblioteca universitaria alejandrina de Roma, desde el barroco a nuestros días (el trabajo es de Giovani Rita) y de recorrer el fondo antiguo Naldo Maestrini de la biblioteca centralizada Giovan Battista Ercolani de la facultad de Medicina veterinaria de la Universidad de Bolonia (sobre ello han trabajado Alba Veggeti y Mirella Mazzucchi).

Gracias a la quinta sección, con reseñas y listas bibliográficas, estamos al corriente de las novedades editoriales italianas sobre historia de las universidades y gracias, igualmente, a la sexta, conocemos los congresos y seminarios celebrados sobre el mismo particular, las actividades por venir y proyectos, las tesis recientemente defendidas y las revistas que se editan en relación con la historia de las universidades.

Carolina Rodríguez López

Antonio Luis Cárdenas Colménter, *El concepto de universidad. Origen y evolución*, Ediciones del Rectorado, Mérida (Venezuela) 2004, 271 pp.

Se trata de un libro escrito por un profundo conocedor de la realidad universitaria (como docente, como gestor, como político) y concebido desde el prisma de la crisis de la universidad, es decir, como respuesta al fenómeno de la masificación y a la nueva sociedad de la información y del conocimiento que exigen un replanteamiento de las funciones universitarias.

Cárdenas parte de una premisa: para solucionar los problemas actuales la mejor herramienta es la historia. Y con este bagaje se adentra a desentrañar el origen y evolución de esta institución milenaria. El libro recoge tanto sus experiencias en distintas universidades de Europa y América, como distintas investigaciones ya publicadas. Con él pretende estimular una reflexión en la comunidad universitaria que haga más rica la tarea desempeñada y que permita reinventarla para servir a una sociedad en continua evolución.

El autor dedica el primer capítulo a la universidad medieval, a su origen y significado, a la aparición de los primeros centros, al valor de la autonomía. El resto del libro está constituido por el análisis de los distintos modelos universitarios que han operado en la modernidad una mutación del fenómeno original: el alemán (caracterizado por la primacía de la investigación), el inglés (por la formación integral del estudiante), el francés (por la vertiente profesional) y el norteamericano (por el servicio a la comuni-

dad). En todos ellos analiza cómo se han ido formando, su evolución y la situación actual.

En fin, un último capítulo se reserva a la universidad hispanoamericana, desde la época colonial hasta nuestros días. En él presta atención primera a la reforma de la Universidad de Córdoba.

Manuel Martínez Neira

J. L. Polo Rodríguez, J. Hernández de Castro, *Ceremonias y grados en la Universidad de Salamanca. Una aproximación al protocolo académico*, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 2004, 72 pp. [= Historia de la universidad, núm. 74]

En la colección dirigida por el Centro de historia universitaria Alfonso IX, y como fruto de la labor que éste viene desarrollando, aparece este número dedicado al protocolo académico y, en concreto, a ceremonias de colación de grados en la Universidad de Salamanca.

La obra consta de dos trabajos que pueden decirse independientes. El firmado por Juan Luis Polo, se dedica a la universidad de antiguo régimen, elemento esencial para su reconstrucción ha sido el manuscrito del *Zeremonial sagrado y político de la Universidad de Salamanca*, del que existe una edición facsímil reseñada en el número primero de estos *Cuadernos*. El autor nos describe los distintos grados existentes en ese periodo universitario (bachiller, licenciado y doctor o maestro), su significado y las diversas ceremonias existentes para su colación en las distintas facultades.

Jerónimo Hernández de Castro dedica sus páginas a las graduaciones en la universidad contemporánea, un periodo en el que los usos propios de cada universidad dan paso a la uniformidad y a la simplificación de las ceremonias. Con el plan Pidal de 1845 el doctorado se centraliza en Madrid, y Salamanca no volverá a recuperarlo hasta 1953. Las investiduras de los grados de licenciado y bachiller fueron suprimidas en 1868 y, por otro lado, el grado de bachiller pasará a los institutos de segunda enseñanza en 1870. El reglamento de universidades de 1859 codificó con minuciosidad el ceremonial liberal.

En la autonomía del ministro Silió surgió propiamente el doctorado honoris causa, y Salamanca lo dio por vez primera a santa Teresa de Jesús en 1922. Otro momento de interés fue el periodo republicano.

Desde la celebración de su séptimo centenario, la Universidad de Salamanca se esforzó por recuperar sus señas de identidad protocolarias. Tarea facilitada por la autonomía conseguida con la ley de 1983. En esta línea hay que subrayar el esfuerzo realizado desde el Centro Alfonso IX que ha cristalizado en el nuevo ceremonial para la investidura del grado de licenciado.

Manuel Martínez Neira

I. Sánchez Sánchez y E. Muñoz Sánchez, *La Universidad, un reto de Castilla-La Mancha*, Biblioteca Añil/ Almud-Ediciones de Castilla-La Mancha, Ciudad Real 2003, 341 pp. + apéndices.

Para la mayoría de los españoles 1982 fue el año de las manos levantadas de González y Guerra en el ventanal del *Palace* y el de una animada naranja con patas amenizando un importante campeonato deportivo que devolvía a España a la escena internacional. Mientras todo esto sucedía un millón y medio largo de ciudadanos asistían expectantes pero sobre todo impasibles e incrédulos a la publicación de dos textos legales que cambiarían para siempre su futuro y el de sus hijos. Esos textos fueron el *Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha* y la *Ley de creación de la Universidad Castellano-Manchega*. Culminaban, aunque de momento sólo sobre las páginas del *BOE*, dos procesos que habían comenzado casi simultáneamente y terminarían por hermanarse y alimentarse mutuamente de tal forma, que como señalan los autores, resulta del todo imposible comprender hoy Castilla-La Mancha sin el *tándem* autonomía-universidad. «*Tenemos Universidad porque tenemos Autonomía*» titula el presidente Barreda su interesante prólogo a la obra, pero como se desprende también de sus palabras y del propio texto, el éxito del proyecto político, económico, social e identitario que comenzaba en 1982 como un engendro *penta-provincial* rebotado del *café* autonómico *para todos*, hubiera sido del todo imposible sin el concurso de la universidad regional.

Desde mi punto de vista Esmeralda Muñoz e Isidro Sánchez han conseguido elaborar una más que interesante síntesis de historia política sobre el nacimiento de la UCLM, por momentos incluso diría que apasionante teniendo en cuenta la característica aridez del género. Sobresale la seriedad y la rigurosidad con que los autores han trabajado el imponente volumen de información con que avalan su obra, y lo destaco porque imagino no les ha debido resultar sencillo teniendo en cuenta lo que algunos llegaron a decir, hacer y escribir durante aquellos procelosos años. No queda en este sentido sino animarles a que en un tono más distendido y menos académico, rescaten para el deleite general algunas de aquellas *perlas*.

Sin tener en cuenta los cuidados apéndices documentales, que habrá quien considere extensos en demasía pero que a mí se me antojan útiles e interesantes en cualquier caso, el trabajo se articula en tres grandes bloques constituyendo los dos primeros el núcleo fundamental de la obra. Apenas ciento ochenta páginas sobre las que los autores reconstruyen básicamente pero con todo lujo de detalles la *prehistoria* de la UCLM (1958-1985). La tercera parte, mucho más breve, resume los diferentes procesos de ampliación, consolidación y modernización desarrollados desde la puesta en marcha de la universidad en 1985 hasta los albores del siglo XXI. Un tema que como tantos otros en esta región hasta la fecha no había encontrado investigadores, por lo que no podemos sino felicitarnos y felicitar a

estos que han abierto brillantemente el camino. Para los que no vivieron o siguieron de cerca el proceso de creación de la UCLM es probable que este libro les resulte un pequeño descubrimiento. No creo que puedan encontrarse muchos ejemplos de gestación de una estructura universitaria de carácter regional y dispersa, tan peculiar, rocambolesca y exitosa como la manchega.

Desde que en 1845 fuera suprimida la Real y Pontificia Universidad de Santa Catalina en Toledo herida previamente de muerte con el *plan Calomarde*, ningún centro universitario propiamente dicho quedó ubicado en la futura región *castellano-manchega*. A finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, producto de la debilidad de la dictadura y la masificación universitaria, los diferentes poderes locales y provinciales de la región conseguirían la instalación un puñado de escuelas y colegios universitarios con los primeros ciclos de algunas licenciaturas, dependientes fundamentalmente de Madrid y Murcia. A la postre esta débil infraestructura universitaria determinaría la futura elección de un modelo universitario *multicampus*.

Ya se sabe que a diferencia del fracaso, el éxito suele disfrutar de numerosos *padres*, y este es un trabajo que ayuda a identificar bastante bien la porción de *paternidad* que transcurridos los años a cada uno corresponde. Curiosamente la primera iniciativa para la creación de una universidad regional correspondió a los últimos responsables locales de la dictadura en una especie de *canto del cisne* en palabras de los autores, allá por 1977. El proyecto-reivindicación lo heredaría la UCD cuyos dos primeros presidentes regionales (CLM ya va por el quinto) se encargarían de darle forma y se enfrentaron al único gran problema que presentaba el reto universitario: la ubicación de los centros. El proyecto era viable, el dinero podía conseguirse, había alumnos más que suficientes, se evitaría su éxodo las más de las veces definitivo a otras universidades y ciudades, y todo redundaría en beneficio de una región que comenzaba su tránsito desde el *desierto* hacia la *esperanza*. La UCD apostaría por el reparto, por el *campus* disperso, iniciándose así una dura batalla política entre provincias que no se cerraría hasta algunos años más tarde. Era lógico, la región y sus partidos políticos no eran sino la suma de cinco *taifas* provinciales y *provincianas*. Pero más allá de eso todos querían para sí la universidad porque todos tenían los mismos y graves problemas de subdesarrollo enquistados desde hacía siglos, todos se sentían marginados y olvidados, y el universitario era el primer tren de progreso que veían estacionar delante de sus ojos ¿Quién iba a renunciar a cogerlo? Como señalan los autores citando al Plinio de García Pavón, «*difícil se presentaba el reinado de Witiza*». En 1982 la UCD pasaría a la oposición sin haber conseguido siquiera disminuir la intensidad del debate. La pelota quedaba ahora en el tejado del PSOE, por entonces bastante desorientado, dubitativo y dividido en todo lo que tenía que ver con la ubicación de la universidad regional. A partir de aquel año los acontecimientos se pre-

cupitaron, José Bono asumía el liderazgo del PSOE y en 1983 se convertía en el primer presidente de la recién estrenada autonomía mientras la UCD casi desaparecía en beneficio de la futura AP. El modelo universitario comenzaba a aclararse: cuatro *campus*, uno por capital y Guadalajara con Alcalá de Henares. Todos parecían medianamente satisfechos, excepto los dirigentes de AP en Toledo que se embarcaron en una lucha sin cuartel contra el proyecto *socialista* de universidad regional. Al final en 1985 con algo más de cinco mil alumnos y un presupuesto inicial inferior a los cien millones de pesetas, la UCLM echaba a andar superando los escollos propios y los que se ponían desde el Ministerio dirigido por Maravall.

En este libro se recogen por tanto las claves históricas y políticas que determinaron el tránsito desde lo que empezó siendo una utopía hacia lo que hoy es una brillante realidad con casi treinta mil alumnos y el segundo presupuesto de la región tras la propia Junta de Comunidades. En estos últimos veinte años y en buena parte gracias a la configuración de un cada vez más denso tejido universitario, CLM ha pasado de ser una suma de provincias a convertirse en una región vertebrada y con identidad, ha superado pesimismo atávicos y todo tipo de complejos al tiempo que ha modernizado su estructura productiva. Tienen razón los autores cuando titulan la parte tercera con un contundente «*Sin Universidad no hay desarrollo*». No es este sin embargo un trabajo elaborado desde la autocomplacencia sino desde la medida de quienes conocen bien la realidad de su región y saben que es todavía mucho lo que queda por hacer. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que de la mano de la universidad los castellano-manchegos han conseguido lo que se proponían cuando comenzaron su andadura conjunta allá por 1982: ganar juntos un futuro, un futuro mejor.

Damián A. González Madrid

María Ángeles Sotés Elizalde, *Universidad franquista: debate sobre la libertad de enseñanza (1939-1962)*, Eunsa, Pamplona 2004, 585 pp.

La autora, profesora de ciencias de la educación, se enfrenta al estudio de la universidad española de la posguerra desde un prisma singular: el derecho de los particulares e instituciones no estatales —y en concreto de la Iglesia— a crear centros de enseñanza superior o universidades. Este enfoque determina el periodo cronológico propuesto. Parte de los primeros planteamientos que comenzaron ya antes de terminar la guerra y concluye con la firma del convenio entre el Estado español y la Santa sede en 1962 que reguló las condiciones para el reconocimiento civil de los estudios no eclesiásticos realizados en universidades de la Iglesia.

El argumento investigado permite individualizar las distintas sensibilidades y discursos que sobre lo público circularon en estos años del régi-

men de Franco; permite distinguir entre los intentos de fascistización y las plurales resistencias a ese proceso, entre diversos corporativismos y continuidad de planteamientos anteriores. Nos muestra una sociedad compleja, donde las ideologías se mezclaron con las simpatías personales.

Los centros de estudios superiores ya existentes (CEU, Deusto e ICAI) así como la flamante Universidad de Navarra emergen en el desarrollo de estas páginas. Una historia diferente —y por tanto enriquecedora— para los que estamos acostumbrados a historiar a las doce universidades estatales de ese periodo.

Manuel Martínez Neira

Diana Elvira Soto Arango, *La reforma del plan de estudios del fiscal Moreno y Escandón, 1774-1779*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2004, 166 pp.

La colección *Cuadernos para la historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario* de la Universidad del Rosario (Colombia) viene publicando desde el año 2000 una serie de monografías de historia universitaria. Se trata de una feliz iniciativa que pretende conmemorar 350 años de enseñanza universitaria (1653-2003). Los frutos de este proyecto ya van siendo abundantes, de lo que da buena prueba el listado de «publicaciones recibidas» referido al final de este número de los *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*.

El libro de la profesora Soto Arango, estructurado en siete capítulos y un apéndice documental, se centra en el estudio de la reforma universitaria concebida por Francisco Antonio Moreno y Escandón (1736-1792). Siendo fiscal de la Real Audiencia de Santafé y tras la expulsión de los jesuitas, propuso en 1768 la creación de una universidad que debería estar bajo el patronato real. Fiel servidor de la monarquía, en su concepción acerca de cómo había de ser un Estudio de nueva planta, participó de los postulados del regalismo. Desde un punto de vista institucional, quiso truncar la participación de los religiosos, tanto en los órganos de gobierno, como en la propia docencia. Pero además, se mostró contrario a la tradicional metodología escolástica y a favor de la experimentación empírica. Estos planteamientos decididamente reformistas le acercaron a otro criollo involucrado en los cambios educativos del momento, Pablo de Olavide. La propuesta de Moreno y Escandón se aprobó en 1774 y fue aplicada en los colegios mayores de Nuestra Señora del Rosario (dominicos) y de San Bartolomé (jesuitas). Ahora bien, apenas perduró en el tiempo. La oposición al plan auspiciada por los dominicos y por los propios colegiales del Rosario provocó su derogación en 1779.

Ramon Aznar i Garcia

L'Università degli studi di Firenze. 1924-2004, 2 vol., Leo S. Olschki, Firenze 2004, 798 pp. [=Storia delle università italiane, vol. 3]

Continuación de los dos tomos titulados *Storia dell'ateneo fiorentino* publicados en 1986, ahora, en el contexto de la celebración de los ochenta años de la Universidad de Florencia aparecen estos dos nuevos volúmenes. Si los primeros abordaban la historia de las disciplinas, éstos se dedican a la historia institucional a través de una estructura —la facultad— protagonista de estos ochenta años y que sólo recientemente pierde su importancia frente a la creación de los departamentos. Ambas obras por lo tanto se complementan entre ellas.

El libro parte de la transformación en universidad del *Istituto di studi superiori* en 1924. Las tres secciones del Instituto se convirtieron en facultades (letras, ciencias, medicina) y a ellas se unió de nueva creación la de derecho. Y llega hasta nuestros días, cuando la Universidad de Florencia se articula en cuatro polos: humanidades, sociales, científico-tecnológico y biomédico.

Tras una sustanciosa introducción a cargo del rector Augusto Marinelli, al estudio singular de las facultades preceden dos capítulos: uno primero que analiza los antecedentes de la Universidad, desde el origen del *Studium* en 1321, redactado por Franco Cardini; otro dedicado al desarrollo de los espacios —no sólo los edificios— de la universidad, escrito por Francesco Gurrieri y Luigi Zangheri.

Después, por orden cronológico, vienen los capítulos dedicados a las facultades. Paolo Marrassini nos habla de la facultad de letras (una facultad improductiva —como él la califica— entre la cultura y la política); Bernardo Sordi de la facultad de derecho. Vincenzo Schettino de la de ciencias experimentales y exactas; Gian Gastone Neri Serneri y Donatella Lippi de la de medicina; Franca Buffoni de los estudios de farmacia; Francesco Gurrieri y Luigi Zangheri de la facultad de arquitectura; Mario Falciai e Isabella Napoli de la facultad agraria; Giulia Di Bello de los estudios de pedagogía y magisterio; Piero Roggi de los estudios económicos; Sandro Rogari de las ciencias políticas; Gaetano Villari, de los estudios de ingeniería.

Se trata de ochenta años en los que el desarrollo de la Universidad ha sido extraordinario, tanto desde el punto de vista del número de profesores y alumnos como de la explosión de los medios materiales (bibliotecas, laboratorios, aularios, etc.). En estos años se encierra el periodo del fascismo, la segunda guerra mundial, el despegue de la Italia republicana, el paso de una universidad de elites a otra de masas, la creación de los departamentos, la conquista de la autonomía, la realidad de los polos, los centros de excelencia, etc.

En su introducción el rector contemplaba con orgullo esta trayectoria, realizada gracias a tantos sesudos estudiosos que con su dedicación han

hecho de Florencia una universidad de referencia. Que Leo S. Olschki haya editado el libro es un valor añadido.

Manuel Martínez Neira

Viajar para saber. Movilidad y comunicación en las universidades europeas, Valencia 2004, 365 pp. / *Viatjar per saber. Mobilitat i comunicació a les universitats europees*, València 2004, 365 pp.

Para conmemorar el veinticinco aniversario del convenio firmado en abril de 1979 entre las universidades de Valencia y Maguncia se organizó una exposición cuyo catálogo tengo la oportunidad de reseñar.

La efeméride sirvió para crear un espacio de reflexión sobre el alcance que han tenido las universidades y el intercambio de conocimiento en la construcción de la cultura europea, y —en concreto— sobre la importancia del viaje: el viaje de los individuos (profesores y estudiantes), la experiencia de los viajeros, la comunicación científica, el intercambio entre culturas. De esta manera, Gonzalo Montiel y Elena Martínez —los comisarios de la exposición— nos invitan a ser testigos de esa curiosidad que movió a valencianos y maguntinos que decidieron traspasar las fronteras espaciales que encuentra el saber.

La movilidad permitida por el convenio mencionado se interpreta a la luz de una larga tradición que parte de la *peregrinatio academica* de la edad media, cuando los estudiantes erraban entre universidades en busca de maestros. Práctica que entra en conflicto con el fortalecimiento del poder político a partir del siglo XIV, pues éste intentará imponer sus propios estudios para poder controlar contenidos y como fuente económica. A pesar de ello, con el humanismo presenciaremos la edad de oro del estudiante viajero.

Pero la reforma de Lutero y sus plurales consecuencias acabaron también en esto con el legado medieval y las fronteras del saber se dibujaron con precisión. Cuatro grupos de universidades individualizadas por la confesión religiosa se distinguen en este momento: católicas, luteranas, calvinistas y otras menos permeables a este nuevo ambiente.

En el siglo XVII aflora en las universidades un nuevo tipo de estudiante, de origen aristocrático y nobiliario, que reclama una formación diferente a la impartida hasta entonces. El *homo universalis* fue sustituido por el «perfecto caballero», un referente más frívolo sin duda. Esto motivó un cambio en el modelo de viaje académico y supuso la aparición del fenómeno del *Grand Tour*. El viaje aparece como una experiencia cultural y juvenil que permitía la adquisición de amistades, modales y habilidades sociales. El nuevo estudiante no está dispuesto a pasar por un largo proceso de aprendizaje para obtener un título y las universidades se adapta-

ron a las nuevas condiciones: entraron en competencia por ofrecer la emisión de títulos a cambio de cantidades económicas.

En el contexto de la Ilustración los viajes se hacen más pragmáticos, se avanza hacia una regionalización de la formación, las áreas de influencia de las universidades se reducen mucho y el número de los estudiantes extranjeros desciende considerablemente. Al mismo tiempo, continúa el interés del poder político en controlar los contenidos del estudio y por lo tanto en dificultar los viajes. Además las nuevas elites profesionales empiezan a tener una formación extrauniversitaria.

La Universidad de Maguncia estuvo cerrada entre 1800 y 1946; Valencia como las otras españolas vivió un siglo XIX bastante decadente. La creación de la junta para ampliación de estudios (JAE) en 1907 representa un hito en el impulso de las relaciones de la ciencia y las universidades españolas con Europa, y supone una explosión de los viajes.

Tras estas reflexiones previas, el texto reseñado se divide en tres partes: la dimensión internacional de estas universidades a lo largo de la historia, el viaje, el convenio. La primera se analiza desde los dos centros: la parte valenciana ha sido redactada por Salvador Albiñana y Javier Palao, la maguntina por Helmut Mathy.

Sobre el viaje han reflexionado Víctor Navarro (viajeros científicos valencianos), José María Cruselles (viajes valencianos en la edad media), Nicolás Bas (impresores alemanes en la Valencia del siglo XV), Júlia Benavent (universidad y política en los siglos XV y XVI), Enrique González y Víctor Gutiérrez (las impresiones de Vives en Maguncia), Antonio Mestre (Mayans y la cultura alemana), Manuel Bas (viajeros alemanes en Valencia), Justo Serna y Anacleto Pons (los viajes verticales y los viajes interiores), Josep Lluís Barona (los pensionados de la JAE).

La historia reciente —dedicada a la vida del convenio entre estas dos universidades, la movilidad de sus estudiantes y el horizonte de la convergencia europea— han sido analizadas desde distintas perspectivas por Dieter Janik, Mercedes Torrevejano, Inés Fernández, Rainer Henkel von Klass e Ignacio J. Alfaro.

Si a esto añadimos que se trata de una edición cuidada, primorosamente ilustrada, sólo se puede concluir recomendando su lectura.

Manuel Martínez Neira

P. Ysàs, *Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975*, Barcelona, Crítica, 2004, 342 pp.

Vienen sucediéndose en los últimos años, trabajos que, gracias, entre otras cosas, a la utilización de fuentes no consultadas hasta el momento permiten no sólo observar parte de una realidad histórica poco explorada

sino también matizar enormemente —y de un modo extraordinariamente útil— generalizaciones y trazos gruesos que a veces pueblan episodios concretos de nuestro pasado. Esta afirmación sirve para tener una idea primera de la utilidad y pertinencia de esta obra de Pere Ysàs, profesor de historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y componente del activo e importantísimo Centro de Estudios sobre la Época Franquista y Democrática (CEFID) de la misma universidad.

El libro se propone tres objetivos esenciales: analizar la percepción de la dictadura respecto al crecimiento y extensión del disenso (centrado inicialmente en críticas puntuales y derivado siempre hacia un cuestionamiento global del régimen), examinar las actitudes, propuestas y actuaciones reales efectuadas desde las instituciones del régimen para hacer frente a los disidentes así como sus resultados, y evaluar el impacto en las instituciones franquistas del ascenso de la protesta, en cuanto a su capacidad para alterar y condicionar la política del régimen.

Para cumplir tales objetivos, como hemos avanzado, Ysàs utiliza, además de la legislación de la época y los discursos y memorias de los protagonistas, fondos de archivo en su mayoría inéditos, preferentemente gubernamentales, tales como el del Ministerio de Información y Turismo, del Gabinete de Enlace; del Ministerio de la Gobernación (donde destacan las memorias de los gobernadores civiles), de los ministerios de Presidencia del Gobierno y Educación y Ciencia, así como los fondos del Consejo Nacional del Movimiento, de la Secretaría General del Movimiento, y de la Organización Sindical Española.

El volumen observa cinco tipos de actuaciones gubernamentales ante cinco tipos de manifestaciones contra el régimen, todas ellas, no obstante, muy interrelacionadas: el disenso de los estudiantes universitarios, el de los intelectuales, la conflictividad obrera; la oposición antifranquista organizada en las tres anteriores dimensiones y el disenso en el seno de la iglesia elemento clave para el inicio de la deslegitimación del régimen.

Nuestro interés como lectores de una revista de historia universitaria se centra ahora de forma preferente en la primera de las disensiones apuntadas. Con antecedentes que se sitúan en los años cincuenta (con los acontecimientos vividos en Barcelona en el boicot de los tranvías y con el hito de los sucesos de febrero de 1956 en Madrid) la actividad creciente de los universitarios españoles a lo largo de los años sesenta (con un nuevo hito en 1965 con el crecimiento de la protesta, la multiplicación de los problemas de orden público, el apoyo de destacados profesores a la causa estudiantil y el comienzo de las actividades de los primeros sindicatos democráticos de estudiantes) dio lugar a una generalización del conflicto hasta el momento no conocida con lo que el ya identificado como «problema universitario» se convirtió en una fuente de preocupación para los dirigentes franquistas hasta el punto de que se sucedieron diversos informes sobre el

tema y de que el asunto acabó siendo uno de los más tratados en los consejos de ministros.

Con una percepción bastante acertada —en palabras del autor— de las causas del disenso entre los jóvenes universitarios una y otra vez, las autoridades gubernamentales recomendaban lo que en lenguaje de la época se expresaba como «encauzamiento» de tales actitudes. Las fórmulas y métodos ofrecidos como receta para ese encauzamiento fueron variando.

Las autoridades eran conocedoras desde el comienzo de la desazón de los jóvenes (ya había advertido sobre ella muy pronto Pedro Laín Entralgo), fueron reconociendo luego (con distintos grados de dificultad, según el caso) la existencia de estudiantes inquietos entre los que cundía la desafección, que no reconocían los símbolos del Movimiento, cercanos a la heterodoxia, y que, en lo que tocaba más directamente al régimen, suponían, de un lado, el reconocimiento de la pérdida para el mismo del valor de la juventud (no olvidemos la importancia de ésta para los regímenes de corte fascista) y la obligación de enfrentar los problemas de orden que las manifestaciones estudiantiles estaban provocando. Con el correr del tiempo estas mismas autoridades supieron también sobre la necesidad de dotar a la universidad de más medios para atender a su crecimiento (empezaba a preocupar ya la masificación estudiantil) y de reformarla dado su desfase respecto a algunas de las necesidades reales de los universitarios.

Ysàs identifica cronológicamente las soluciones concretas que fueron aportándose desde el régimen para certificar su objetivo «encauzador»: desde la puesta en marcha de campañas propagadoras de un planteamiento cultural «verdadero y patriótico»; la invitación a que el SEU se adaptara a los problemas vigentes y mejorara la socialización política de los jóvenes dentro del régimen; hasta las progresivas reformas del SEU para desideologizarlo y sindicalizarlo mediante la creación de consejos de curso, cámaras sindicales de facultad y cámaras sindicales de distrito —elegidos por los estudiantes—, primero; los intentos sucesivos de democratización, después; hasta su final desaparición a favor de las, a la postre, inoperantes también, Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APEs). En definitiva, se trataba de ofrecer a los problemáticos estudiantes cauces para vehicular desde dentro del sistema sus propuestas y reivindicaciones profesionales.

No obstante, pronto se percibió que cada uno de los pasos emprendidos (por ejemplo la puesta en marcha de los consejos y cámaras mencionados) eran utilizados para la inserción en primeras líneas de los no afectos que llegaron incluso (rechazadas de plano las APEs) a extender los ilegales sindicatos democráticos, con lo que, enseguida también, se instaló una dinámica que el autor detecta en todo el recorrido del capítulo: el inmovilismo y la represión como fórmulas más eficaces para acallar la disensión. Los llamamientos constantes a la recuperación del orden, la disciplina y la «normalidad» en las aulas condujeron a simplificar el asunto y

adoptar una dura política de orden público y una constante actuación policial, incluso dentro de los recintos universitarios. El momento culminante de esta dinámica se identifica claramente en el estado de excepción tras las protestas por la muerte del estudiante Ruano.

El autor concluye, pues, que desde finales de los cincuenta el régimen franquista había sido consciente del peligro de la pérdida de la juventud universitaria. Frente a esta amenaza había intentando en todo momento canalizar las inquietudes estudiantiles aunque siempre «de forma limitada e incluso contradictoria» combinándolas con el recurso repetido a la represión. Las limitaciones y contradicciones señaladas llevaron al fracaso de las soluciones propuestas; el recurso a la fuerza (también en el discurso se seguía apelando a la guerra civil) no hacía sino incrementar el descontento y, por ende, sus manifestaciones, en una especie de dinámica imparable, abonada por la distinta coyuntura económica e internacional, y que certificaban que el temor a la pérdida era una realidad inevitable.

En la intención esclarecedora y matizadora que hemos otorgado a esta publicación en el comienzo de este comentario, el libro intenta contextualizar el argumento simplista y tantas veces colocado sobre la mesa que se resume rápidamente en la expresión «Franco murió en la cama», lo que suele identificarse con la idealización de la fortaleza del régimen franquista hasta su final y con la debilidad del antifranquismo. Viendo las posibilidades de acción de unos y otros, en el campo universitario, el libro en su conjunto —y el capítulo comentado en particular— cumple su propósito de observar hasta qué punto el movimiento estudiantil dificultó la vida de los sostenedores del franquismo y cómo éstos se vieron obligados una y otra vez a contraatacarlo. Matices y claridades conseguidos indudablemente gracias a un riguroso análisis y tratamiento historiográfico.

Carolina Rodríguez López

VARIA

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO

Seminario permanente

Bajo el lema «letras y derecho en la universidad liberal», durante el curso académico 2004-2005 el Instituto organizó un seminario permanente que aparece como heredero de las *Jornadas sobre ciencia y universidad* que este centro organizó desde 1997.

Las reuniones se han concebido como un foro de exposición, discusión y difusión de trabajos de investigación en relación con la historia de las universidades. A lo largo de cada sesión, el investigador invitado presentó su trabajo ante los asistentes para después darse paso al debate correspondiente. Con el ánimo de que estas reuniones fueran dinámicas y participativas, intentamos que dos semanas antes de la celebración de cada seminario quedase colgado el web del Instituto el resumen del trabajo que el autor presentaba para que así, con el conocimiento previo de todos los asistentes, el debate fuera más ágil. Igualmente, los miembros del consejo científico han tenido la posibilidad de valorar los trabajos y ofrecer sus comentarios.

En esta ocasión los ponentes han sido Mirella Romero Recio, Ricardo Fonseca, Manuel Martínez Neira, Ana María Merico-Stephens y Carlos Petit.

Cursos

A lo largo del año 2005, Carolina Rodríguez López ha impartido dos cursos para estudiantes de la Carlos III. El primero, celebrado entre los meses de febrero y abril, tuvo una duración de 20 horas y el segundo, impartido en octubre, de 10 horas. En ambos casos, bajo el título *La universidad española bajo el régimen de Franco*, se ha pretendido acercar a los estudiantes a la vida universitaria española bajo el régimen franquista.

Entre los días 11 y 15 julio de 2005 tuvo lugar en el campus de Colmenarejo el curso de verano, *Cine e historia. Buceando en el pasado: de cómo el cine reflejó el franquismo*, dirigido por Carolina Rodríguez.

guez López y organizado desde este Instituto. El curso se centró en la explicación del franquismo a partir de cuatro temas cruciales para entender su fundamento y evolución: las características del espacio físico *donde* éste se desarrolló (el campo y la ciudad), los valores esenciales que promovió y que nos indican *cómo* era la vida de esos años; el *marco familiar* como agencia primera de desenvolvimiento de esos valores y, finalmente, el mundo de la *educación* organizado como instrumento de perpetuación de los mismos y derivado después en espacio privilegiado para su contestación.

Para estas explicaciones, la directora y la ponente María Teresa Largo Alonso, utilizaron el *cine* como fuente esencial: como *fuentes historiográficas*, como *recurso didáctico* y, en ocasiones, como *relato historiográfico* en sí mismo. Ello permitió el acercamiento a buena parte del discurso y del imaginario que el franquismo elaboró sobre sí mismo, a las fórmulas utilizadas por los realizadores a la hora de reflejar lo que se estaba viviendo y a las recreaciones de ese mismo momento histórico por parte de cineastas de cronologías posteriores.

En la sesión de clausura tuvimos el placer de contar con la reflexión de un excepcional cineasta, Basilio Martín Patino, uno de los que mejor y más certeramente han sabido retratar la memoria de la guerra civil y del franquismo.

Proyectos de investigación

A lo largo del año 2005 algunos miembros del Instituto han seguido colaborando en el proyecto de investigación (DGESIC PB98-1471) dirigido por el profesor Mariano Peset desde la Universidad de Valencia y que lleva por título: *Ciencia y doctrina en las universidades españolas y su relación con América y Europa (ss. XVI a XX)*.

En el seno del Instituto se ha seguido desarrollando el proyecto de investigación: *Manuales para la enseñanza y ciencia jurídica* dirigido por Adela Mora. Igualmente, se han puesto en marcha los siguientes proyectos: *El doctorado en derecho en España durante el siglo XX*, con la dirección de Manuel Martínez Neira, y *De artes a letras. Orígenes y desarrollos de la facultad de filosofía y letras en España. Siglos XVIII-XX*, dirigido por Carolina Rodríguez López.

Asuntos varios

Durante el año 2005 ha continuado la dotación de la beca de investigación de la que viene disfrutando la doctora Carolina Rodríguez López. Asimismo, han continuado los trámites para la conversión del Instituto Antonio de Nebrija en Instituto Universitario de Investigación a la luz de la Ley Orgánica de Universidades (6/2001 de 21 de diciembre).

El Instituto sigue dedicando una importante partida de su presupuesto a la adquisición de obras para los fondos bibliográficos sobre historia de las universidades.

Por último, María Fernanda Mancebo Alonso y Jorge Correa Ballester se han incorporado a nuestro Consejo Científico.

*Próximas actividades del Instituto**Seminario permanente Instituto Antonio de Nebrija*

El Instituto Antonio de Nebrija continúa con el seminario permanente que se puso en marcha el pasado año. En esta ocasión contaremos con las ponencias de José M.^a Puyol Montero, Manuel Martínez Neira, Carolina Rodríguez López, Ramon Aznar i Garcia, Laura Beck, Marc Baldó, María José María e Izquierdo y Manuel Ángel Bermejo Castrillo.

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija

El número 9 de los *Cuadernos del Instituto* de cerrará en la primera semana de septiembre de 2006, por lo que a lo largo del curso podrán enviarse artículos y colaboraciones propuestas al consejo de redacción, así como reseñas bibliográficas y noticias.

NOTICIAS

Coloquio Internacional: Migraciones estudiantiles, formación de elites y modernización de los Estados nación (segunda mitad del siglo XIX-1939)

Entre los días 7 y 9 abril de 2005 tuvo lugar en Budapest (Hungría) el *Coloquio Internacional: Migraciones estudiantiles, formación de elites y modernización de los Estados nación (segunda mitad del siglo XIX-1939)* organizado por la Research network «Academic migrations within and to Europe» y el Pastis Inc. Center for Historical Studies, Central European University (Budapest, Hungría). Los objetivos de la reunión eran cuatro, básicamente: ofrecer una puesta al día sobre la investigación historiográfica centrada en las migraciones académicas, señalar los logros y lagunas de las historiografías nacionales en relación con el tema, discutir los problemas surgidos en torno a las fuentes y sugerir soluciones para elaborar instrumentos, conceptos y categorías comunes para mejorar el trabajo.

Tras la bienvenida ofrecida por el profesor Victor Karady (de la Central European University de Budapest y organizador del evento), tomó la palabra la profesora Helga Hammerstein (del Trinity Collage de Dublín y presidenta de la Comisión Internacional de Historia de las Universidades) quien ofreció un primer balance de los estudios aparecidos hasta el momento en relación con las migraciones estudiantiles. La primera sesión de trabajo se centró en las migraciones académicas procedentes de los países de la Europa periférica y del Mediterráneo. Se presentaron en ella los trabajos de Carolina Rodríguez López (Universidad Carlos III de Madrid), Nicolas Manidakis (EHESS, París), de Boris Czerny (de la Universidad de Caen) y de Laszlo Szögi (del archivo y biblioteca de la universidad Eötvös Loránd de Budapest). La primera habló sobre los viajes de estudios de los universitarios españoles entre 1900 y 1939; el segundo ofreció un balance del estado de la investigación sobre los estudiantes griegos en Europa entre 1880 y 1940; el tercero presentó un trabajo (realizado en colaboración con Claudie Weill), sobre los estudiantes rusos en París, entre 1908 y 1911 y el cuarto habló sobre los resultados de la reciente investigación acerca de los estudiantes húngaros en el extranjero.

En la segunda sesión, *Migraciones académicas procedentes de los países del Este y del centro de Europa*, presidida por Natalia Tikhonov (de la Universidad de Ginebra, otra de las organizadoras) tomaron la palabra Anatolij Ivanov (de la Academia Rusa de Ciencias), quien disertó sobre la diáspora de los estudiantes rusos en el extranjero en el tránsito de los siglos XIX a XX; Alexander Dmitrev (del Instituto de historia de la ciencia y la tecnología) quien observó esa misma presencia rusa en Europa entre 1910 y 1920; Ljubinka Trgovcevic (de la Universidad de Belgrado) quien presentó un estado de la investigación sobre las migraciones académicas y la formación de la elite en Serbia entre 1839 y 1914; Lucian Nastasa (del Instituto de historia G. Baritiu de Rumanía y de la Academia de ciencias rumana) quien disertó sobre las migraciones académicas rumanas entre 1864 y 1948 y Dimitar Vesselinov (de la Universidad San Clemente de Sofía) quien analizó la formación de la elite búlgara entre 1878 y 1939.

La tercera sesión, *Estudiantes extranjeros y países de acogida*, estuvo presidida por Claudie Weill (de la EHESS de París) y contó con las aportaciones de Eva Bauer (del Instituto Europeo de Florencia) centrada en las motivaciones nacionales de los estudiantes en la monarquía aabsbúrgica, de Hartmunt R. Peter (de la Universidad Martin-Luther de Halle y tercer y último organizador) sobre las fuentes e investigación en relación con los estudiantes extranjeros en Alemania; de Zsuzsanna Heilauf (de la Colección histórica, educativa y regional de Budapest) sobre estudiantes extranjeros en las instituciones de educación superior en Hungría; de Elisa Signori (de la Universidad de Pavía) sobre los estudiantes extranjeros en las universidades italianas entre 1900 y 1939; de Pierre Moulinier sobre la historiografía y fuentes de la historia de las migraciones estudiantiles en Francia (1800-1940), de Natalia Tikonov sobre los estudiantes extranjeros en las universidades suizas entre 1870 y 1930 y de Marc Vuilleumier (de la Universidad de Ginebra) centrado también en el ámbito suizo.

La sesión cuarta, *Migraciones académicas más allá de las universidades y nuevas investigaciones*, estuvo presidida por Elisa Signori. En primer lugar, tomó la palabra Claudie Weill que habló sobre migraciones estudiantiles y nomadismo institucional; le siguió Ewa Bobrowska-Jakubowski (del museo de arte americano de Giverny) que disertó sobre la formación artística de los creadores polacos; Alexandre Rostov, (del Instituto de estudios balcánicos de la Acade-

mia de ciencias de Bulgaria) sobre los estudiantes balcánicos en las escuelas técnicas francesas y Florea Ioncioaia (de la Universidad Alexandra-Oian Cuza de Rumanía) sobre los estudiantes rumanos en la Escuela Normal Superior de París entre 1867 y 1940.

Las sesiones se cerraron con una mesa redonda en la que todos los ponentes estuvieron invitados a discutir sobre el proyecto editorial resultante de sus intervenciones.

IX congreso internacional de historia de las universidades hispánicas

Entre los días 14 y 17 de septiembre de 2005 tuvo lugar en Valencia el IX congreso internacional de historia de las universidades hispánicas. Organizado por el área de Historia del Derecho y de las instituciones de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, la reunión se celebró en torno a varias sesiones de trabajo simultáneas a lo largo de los tres días señalados.

La conferencia inaugural corrió a cargo del decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Fernando Serrano Migallón quien disertó acerca del exilio español en México.

En la primera jornada se celebraron seis sesiones. En la primera tomaron la palabra Adela Mora, Amparo Felipe Orts y Alfonso Espinera Cerdán; en la segunda, José M.^a Hernández Díaz, Isabel Ramos Ruiz, Yolanda Blasco Gil y Jorge Correa; en la tercera Armando Pavón, Antonio Fernández y Ramón Aznar; en la cuarta Telesforo Hernández, Nicolás Bas y Emilio Callado Estela; en la quinta Clara Ramírez, Mónica Hidalgo y Manuel Febrer Romaguera y en la sexta Manuel Martínez Neira, José M.^a Puyol Montero; María José María e Izquierdo y Mario Quirós Soro.

La segunda jornada contó con la participación, también a lo largo de seis sesiones, de: Antonio Merchán, Mariano Peset, José María Lahoz, Lourdes Alvarado, Pascual Marzal, Rosalina Ríos, José María López Piñero, José Luis Peset, José Vicente Martí, Antonio Rey, Manuel Bermejo, Pilar Hernando, María Fernanda Mancebo, Leticia Pérez Puente, Javier Palao, Carles Tormo, Pilar García Trobat, Carolina Rodríguez y Mónica Soria.

La tercera y última jornada contó con la participación de Enrique González González, Víctor Gutiérrez, Sergio Villamarín, Margarita Menegus, Marc Baldó y Rodolfo Aguirre. El congreso fue

clausurado por el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el profesor Carlos Luís Alfonso Mellado.

XI jornadas de archivos universitarios

Con la periodicidad habitual, se reunió, en junio de 2005, la conferencia de archivos universitarios (CAU). En esta ocasión la organización corrió a cargo del Archivo de la Universidad Complutense de Madrid. La primera sesión tuvo lugar el día 16 de junio. Pronunció la conferencia inaugural la profesora Elena Hernández Sandoica quien habló sobre la importancia de los archivos universitarios para la investigación. Seguidamente y en sesiones paralelas se reunieron los distintos grupos de trabajo fijados para la ocasión. Por último, se celebró una mesa redonda en la que archiveros e investigadores abordaron su mutua relación bajo el título general: «Archiveros de Universidad e investigadores: ¿una relación por construir?». Intervinieron: Carmen de la Peña Montes de Oca (directora del archivo de la Universidad de Alcalá de Henares), Carolina Rodríguez López, Antonio Olivares Poza (director del Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid) y Carlos Flores Varela (director del Archivo General de la Universidad Complutense). El 17 de junio, a lo largo de la segunda jornada, se reunió el pleno de la CAU y se clausuraron las jornadas con una visita conjunta al Palacio Real y a su Archivo General.

RESÚMENES*

R. Aznar i Garcia, *Humanismo y derecho canónico: La obra de Jean Doujat*

Resumen: El plan de estudios de 1772, para la universidad de Alcalá de Henares, erigió la cátedra de Historia eclesiástica. En ella debían cursar los aspirantes a la licencia en Cánones, quienes utilizarían como manual las *Praenotiones canonicae* del canonista francés Jean Doujat. ¿Quién fue Jean Doujat? ¿Cuál fue su producción jurídica? ¿Qué criterios inspiraron la redacción de sus *Praenotiones*? Estas son básicamente las preguntas a las que he tratado de responder. Así mismo, he analizado el capítulo que el autor dedicó al método de enseñanza del derecho canónico. En él se evidencia que Doujat ha de ser enmarcado en las coordenadas del humanismo jurídico y del galicanismo. El conocimiento de la historia y de las lenguas, el afán de síntesis, orden y claridad, la conexión entre los derechos civil y canónico, además de su actitud proclive a los intereses políticos de la Corona de Francia definieron su actividad como jurista.

Palabras clave: Jean Doujat, derecho canónico, siglo XVII, humanismo jurídico, plan de estudios.

Abstract: In 1772, the Spanish University of *Alcalá de Henares* included within its program of studies a Chair for Ecclesiastic History. The students of Canonical Law had to study under this Chair and to use as textbook the *Praenotiones canonicae* written by the French canonist Jean Doujat. Who was Jean Doujat? What other books on Law he wrote? What criteria he used on writing *Praenotiones*? These are the questions that the author tries to answer in this work. Mr. Aznar analyzes the chapter that Jean Doujat dedicated to the methodology of the teaching of Canonical Law. From this analysis, it becomes evident to the author that Jean Doujat has to be considered within the Juridical Humanism and the Gallicanism. Jean Doujat's activity as a jurist was set up by his knowledge of history and languages, his zeal for synthesis, order and clarity and the con-

* Esta sección ha sido coordinada por Luis Grau.

nexion he established between Civil and Canonical Law, as well as by his defense of all political interests of the French Crown.

Key words: Jean Doujat, Canonical Law, 17th century, Juridical Humanism, Program of studies.

E. Fernández García, *La polémica de la ciencia española (1876-1877). ¿Un debate ideológico acerca de las dos Españas?*

Resumen: En esta lección inaugural se ofrece una descripción, no exenta de algunas valoraciones, de una conocida polémica sobre la existencia o no de tradición científica y filosófica en España, acompañada de un conjunto de reflexiones sobre sus estímulos, obstáculos, comparaciones con otros países y alcance. Se trata de una cuestión desarrollada en el último cuarto del siglo XIX, y condicionada por otros presupuestos pertenecientes al ámbito de lo extra-científico lo que da cuenta de la estrecha conexión entre producción científica y situación social. Así, la polémica de la ciencia española se convirtió en un debate ideológico. La idea central es que la polémica sobre la ciencia española, además de ser un debate sobre el desarrollo o falta de desarrollo (y sus causas) de la ciencia en nuestro país se convierte en un debate ideológico desde el momento en que aparecen en escena las posibilidades de falsear la realidad y de un conocimiento interesado que, tanto en un caso como en otro, y tanto en una como en otra postura de la polémica, se describen como lo verdadero.

Palabras clave: ciencia, historia de España, Menéndez Pelayo, libertad de enseñanza, krausismo.

Abstract: The author describes the well known controversy on the existence of a scientific and philosophical tradition in Spain and includes a number of considerations regarding the incentives and obstacles that tradition had as well as how it compares to the one in other countries. The controversy developed in the last part of the 19th century and it was constrained by non-scientific premises, which explains the closed connection between scientific output and social development. The central thought being that the controversy regarding the development of the science in Spain -debated among traditionalists, positivists, neo-Kantians or Krausists and institutionalist on the bases of the scientific development, or the lack of it and

its causes- became an ideological debate when it was possible to falsify the reality and to present this, by a biased knowledge, as the truth.

Key words: Science, History of Spain, Menéndez Pelayo, Freedom of education, Krausism.

R. M. Fonseca, *A formação da cultura jurídica nacional e os cursos jurídicos no Brasil: uma análise preliminar (1854-1879)*

Resumen: Este trabajo pretender detectar las características de la formación de la cultura jurídica brasileña en la segunda mitad del siglo XIX. Considerando el esfuerzo realizado por Brasil nada más independizarse por formar sus propios cuadros culturales, deben insertarse en esa línea las dos únicas facultades de Derecho del período imperial (1822-1889), las de Recife y São Paulo, la búsqueda relación de estas dos instituciones de enseñanza del derecho con la incipiente cultura jurídica brasileña y su papel en la formación del jurista brasileño del ochocientos.

Palabras clave: Brasil, facultades de derecho, formación de juristas, cultura jurídica.

Abstract: This work attempts to identify the characteristics of the origin of the juridical culture in Brazil during the second half of the 19th century. The only two Law Schools created during the Imperial Period (1822-1889), in Recife and in São Paulo, must be considered as part of the effort made by Brazil to develop its own culture after independence, and they played an important role in the development of the early Brazilian juridical culture and in the education of the Brazilian jurists of that century.

Key words: Brazil, Law Schools, Education of jurists, Juridical culture.

M. Martínez Neira, *La facultad de Derecho en los años sesenta. Creación de departamentos y nuevos planes de estudios*

Resumen: Tras la guerra civil española (1936-1939) se fue construyendo cuidadosamente la denominada universidad nueva, concepción que quedó plasmada en la ley sobre la ordenación de la uni-

versidad española (LOUE) de 1943. Aunque esa ley estuvo vigente hasta 1970, lo cierto es que bastante antes empezó a ser cuestionada. La contestación tuvo su epicentro en los años sesenta y se identifica con lo que se llamó el problema universitario. Dicha cuestión evidenciaba una crisis de crecimiento, no sólo cuantitativa sino también cualitativa. Es decir, el fenómeno de masificación que comenzó a perfilarse en esos años supuso tanto el incremento del número de alumnos matriculados en las universidades como el cambio en las clases sociales que lo componía. Así, la masificación catalizó el paso de una universidad elitista a una universidad de masas. Esa inédita universidad de masas no encajaba bien en los esquemas y moldes de la LOUE, ley que a pesar de sus declaraciones seguía proponiendo una universidad elitista y centralizada. Este desfase entre la realidad social y la estructura legal provocó una crítica y distintos intentos de reforma que de entrada fueron parciales y después cristalizaron en la LGE. En el artículo se estudia cómo afectó todo esto a las facultades de derecho, sobre todo en lo relativo al diseño de nuevos planes de estudio y a la creación de los departamentos universitarios.

Palabras clave: Universidad, Franquismo, Facultades de derecho, Planes de estudio, Departamentos.

Abstract: Just after the Spanish Civil War (1936-1939), the winning forces started to build up a so called *new university*; concept that was expressed in the 1943's Law for the Planning of the Spanish University (*Ley sobre la ordenación de la universidad española* o LOUE). This law was in force until 1970, but really it had begun to be questioned quite earlier. The citizens' opposition to the law had its main focus during the sixties, and it was identified by the government with the term «the university problem». That «problem» proved the Spanish university suffered of a deep growing crisis, both in qualitative as quantitative terms. In the sixties, a very larger number of students began to access to the university, students that were from all the social classes. This overcrowding transformed quickly the ancient elitist university world into a new concept of a congested university for everybody. This new situation didn't fit well into the strict concepts of the LOUE, which still proposed an outdated archetype of university, of elitist and centralist connotations. Inevitably, that conflict between social circumstances and legal status produced an intolerable situation that resulted in several partial

attempts to change the law and, finally, in the Law of General Education (*Ley General de Educación*, LGE). This essay studies how these affairs have affected the Law Schools, especially to the design of the programs of studies and to the creation of the faculty departments.

Key words: University, Franco's Regime, Law Schools, Departments, Program of Studies.

F. Morente Valero, *La universidad fascista y la universidad franquista en perspectiva comparada*

Resumen: La universidad fue un importante instrumento de control y legitimación ideológica en los regímenes fascistas. Aquí se propone una comparación entre las universidades de la Italia fascista y la España de la primera mitad de la dictadura franquista. Partiendo de la situación de la universidad liberal, se analizan los cambios que en ambos países tuvieron lugar en las estructuras universitarias y se muestra cómo al final del proceso las similitudes en la organización administrativa y el gobierno de las universidades, la situación del profesorado y el papel de los estudiantes fueron notablemente superiores a las diferencias, que también se dieron.

Palabras clave: Universidad, fascismo, franquismo, Italia 1922-1943, España 1936-1956

Abstract: The university has been an important instrument of control and of ideological legitimation in fascist regimes. The author compares in this article the Italian universities of the Fascist period with those in Spain during the first half of Franco's Dictatorship. Starting from the situation at the liberal university, the author analyzes the changes that took place in the structures of the universities of both countries and shows that, at the end of the process, the similarities considerably outnumbered the differences, not only in terms of the administrative organization and management of the two university systems, but also in relation to the situation of the academic staff and to the role played by the students.

Key words: University, Fascism, Franco's Regime, Italy 1922-1943, Spain 1936-1956

G. Perales Birlanga, *Los estudiantes católicos de la Universidad de Valencia (1875-1936)*

Resumen: Desde 1875 a 1936, una parte de los estudiantes universitarios participó activamente en las concepciones políticas del catolicismo. Este artículo se centra en el caso de los estudiantes de la universidad de Valencia. Estos universitarios desarrollaron una activa participación política, dieron formas estables de asociación en las que reforzaron sus vínculos y relaciones, y se opusieron a las actividades de los estudiantes liberales y de izquierdas. Para ello contaron con notables apoyos exteriores que aspiraban a conquistar las universidades.

Palabras clave: Estudiantes católicos, asociaciones de estudiantes, universidad de Valencia

Abstract: From 1875 to 1936, some of the university students actively took part in the political conceptions of Catholicism. Focused especially on the students from the University of Valencia, this article shows how they were actively involved in political issues, created steady societies in which their ties and relations grew stronger, and worked against the activities of the liberal and left-wing students. To achieve all this, they relied on outstanding contacts from the outside world, aimed at gaining control of the universities.

Key words: Catholic students, student societies, University of Valencia.

C. Petit, *De la historia a la memoria. A propósito de una reciente obra de historia universitaria*

Resumen: Este trabajo analiza la publicación *Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal*, miscelánea que recoge los trabajos presentados en el séptimo congreso de historia de las universidades hispánicas editada por Manuel A. Bermejo. Se observa la utilidad del libro desde el punto de vista bibliográfico y su valor como panorámica de variadas disciplinas: Medicina, Economía, Filosofía, Literatura, Historia de la Filosofía, Matemática, Historia y las carreras industriales. Lugar destacado, por su volumen, tiene los trabajos dedicados al análisis de las diferentes disciplinas jurídica.

Palabras clave: Manuales, textos de enseñanza, universidad liberal.

Abstract: This work analyzes the publication «*Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal*», miscellany which collects works presented at the 7th Congress on History of Hispanic Universities and edited by Manuel A. Bermejo. In addition to its bibliographic usefulness, the book is valuable from its panoramic view on multiple disciplines: Medicine, Economy, Philosophy, Mathematics, History and Industrial studies. Of particular interest are those works dedicated to the analysis of the different legal disciplines.

Key words: Manuals, Textbooks, Liberal University.

J. M. Puyol Montero, *El plan de estudios de derecho y la Universidad Central. Desde Primo de Rivera hasta la II República (1923-1931)*

Resumen: Este trabajo propone una lectura desde la facultad de derecho de la Universidad Central de las diferentes reformas acaecidas en la universidad española a lo largo de la dictadura de Primo de Rivera y hasta la llegada de la segunda república. Se presta especial atención a los sucesivos planes de estudios, sus contenidos, dificultades de implantación y suerte final.

Palabras clave: Planes de estudios, facultad de derecho, Universidad central, Primo de Rivera, Segunda República española.

Abstract: This work analyzes the reforms that the Spanish university suffered during Primo de Rivera's Dictatorship and until the advent of the Spanish Second Republic. The work pays particular attention to the successive programs of study of the Law Schools, their contents and the difficulties for their implementation and their final fate.

Key words: Programs of Study, Law School, *Universidad Central*, Primo de Rivera, Spanish Second Republic.

C. Tormo Camallonga, *Los estudios y los estudiantes y estudios y los estudiantes de jurisprudencia y teología tras la unificación de las facultades de leyes y cánones*

Resumen: La reunión de Leyes y Cánones, que venía materializándose desde los planes de estudios anteriores, se completa en 1842 con la facultad de Jurisprudencia. Las adaptaciones para los estu-

diantes de ambas facultades son, ciertamente, ventajosas, especialmente para los canonistas. Por sus conexiones con Cánones, los estudiantes de Teología también se vieron afectados. Los grados académicos también sufren modificaciones. Sin embargo, las medidas que se adoptaron para la transición, y la inmediata publicación del siguiente plan de estudios, impidieron la aplicación exacta y completa del plan.

Palabras clave: Adaptaciones, Jurisprudencia, Teología, Plan de Estudios.

Abstract: The creation of the Faculty of Jurisprudence in 1842 completes the unification of the studies of Laws and of Canons that had been taking place in previous programs of studies. The adjustments made in both faculties were clearly advantageous for the students, particularly for those of the Canons. The students of Theology, because of its inherent connections with Canons, were also affected by the changes. Academic degrees and titles were also modified; nonetheless the measures taken for the transition and the swift publication of the resulting program of study prevented the precise and total application of the program.

Key words: Adaptations, Jurisprudence, Theology, Program of Studies.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

- R. Aguirre Salvador (coord.), *Carrera, linaje y patronazgo. Clérigos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos XVI-XVIII)*, CESU, México 2004, 319 pp.
- R. Aguirre Salvador, *El mérito y la estrategia. Clérigos, juristas y médicos en Nueva España*, CESU, México 2003, 586 pp.
- M. de Lourdes Alvarado, *La educación «superior» femenina en el México del siglo XIX. Demanda social y reto gubernamental*, Universidad Nacional Autónoma de México-CESU, México 2004.
- Boletín de Historia de la Educación en Latinoamérica* 10, Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, Colombia 2004, 131 pp.
- U. Brihuega Moreno, *La instrucción pública en Alcalá de Henares. El período entre Repúblicas, 1873-1939*, Fundación Colegio del Rey, Madrid 2005, 558 pp.
- A. L. Cárdenas Colmener, *El concepto de universidad. Origen y evolución*, Ediciones del Rectorado, Mérida (Venezuela) 2004, 271 pp.
- Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, *Siete años: 1997-2004*, Universidad de Salamanca, Salamanca 2004, 83 pp. [Incluye CD-Rom].
- J. E. Constaín Croce, *Librorum. Libros políticos en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario*, Grafiq editores, Bogotá 2003, 129 pp.
- C. Duque, *Historia de la cátedra de medicina durante el período republicano, 1839-1867*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2003, 179 pp.
- L. E. Fajardo; J. Villaveces y C. Cañón, *Las reformas santanderinas en el Colegio del Rosario*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2003, pp. 95 pp.
- L. E. Fajardo; J. Villaveces y C. Cañón, *Historia económica de las Haciendas, 1700-1870*, Centro Editorial Rosarista, Bogotá 2004, 182 pp.
- A. Fernández Luzón, *La Universidad de Barcelona en el siglo XVI*, Barcelona, Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 2005, 340 pp.
- M. C. Guillén de Iriarte, *Rectores y rectorías del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 1653-2003*, Academia Colombiana de Historia, Bogotá 2003, 666 pp.
- Hipócrates, *Aforismos*, Barcelona, Alta Fulla, 1986 [Presentación José Luis Peset].

- Historia y sociedad* 10, Universidad Nacional de Colombia, 2004, 272 pp.
- P. Jaramillo de Zulueta, *La producción intelectual de los rosaristas. 1700-1799. Catálogo bibliográfico*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2004, 153 pp.
- S. Negruzzo, *L'armonia contesa. Identità ed educazione nell'Alsazia moderna*, Il Mulino, Bologna 2005, 396 pp.
- C. Ortega Ricaurte, *La producción intelectual de los rosaristas, 1800-1899. Catálogo bibliográfico*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2004, 249 pp.
- A. P. Ortiz Rodríguez, *Reformas borbónicas. Mutis catedrático, discípulos y corrientes ilustradas, 1750-1816*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2003, 210 pp.
- A. P. Ortiz Rodríguez, *Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, 1890-1930*, Centro Editorial de la Universidad del Rosario, Bogotá 2004, 287 pp.
- J. L. Peset, *Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales*, Crítica, Barcelona 1983.
- J. L. Peset, «Ciencia y Universidad», *Actas del II Simposio de enseñanza e historia de las ciencias*, Escuela Universitaria de EGB de Navarra, Pamplona, 23-25 septiembre 1985, pp. 13-31.
- J. L. Peset, «La sociedad antropológica de Londres y el antidarwinismo», en M. Hormigón (ed.), *Actas del II Congreso de la Sociedad española de Historia de las ciencias*, Jaca, 27 septiembre-1 octubre 1982, vol. I, pp. 489-512.
- J. L. Peset, «Ciencia, nobleza y ejército en el seminario de nobles de Madrid (1770-1788)», *Mayas y la Ilustración*, Simposio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, Ayuntamiento de Oliva, Oliva 1982, pp. 518-535.
- J. L. Peset, «Los orígenes de la enseñanza técnica en América: el Colegio de Minería de México», *Universidades españolas y americanas*, Valencia, 1987., pp. 415-431.
- J. L. Peset y A. Lafuente, «El conocimiento y el dominio de la naturaleza: la ciencia y la técnica», J. M. Jover Zamora (dir.), *Historia de España Menéndez Pidal*, Tomo XXI-I, *La época de la Ilustración. El Estado y la cultura (1759-1808)*, Espasa Calpe, Madrid 1987, pp. 349-394.
- J. L. Peset y A. Lafuente, «Ciencia e Historia de la ciencia en la España ilustrada», *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Tomo CLXXVIII, Cuaderno II, (1981) pp. 267-300.

- M. A. Plazas Vega y otro, *Jeremías Bentham: el joven y el viejo radical, su presencia en el Rosario*, Centro Editorial de la Universidad del Rosario, Bogotá 2002, 159 pp.
- Juan Luis Polo Rodríguez, Jerónimo Hernández de Castro, *Ceremonias y grados en la Universidad de Salamanca. Una aproximación al protocolo académico*, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 2004, 72 pp. [= Historia de la universidad, núm. 74]
- E. Quevedo y C. Duque, *Historia de la cátedra de Medicina, 1653-1865*, Centro Editorial de la Universidad del Rosario, Bogotá 2002, 287 pp. 242 pp. [Incluye CD-Rom]
- Revista de historia de la educación latinoamericana* 6, Rudecolombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sociedad de historia de la Educación Latinoamericana, Colombia 2004, 400 pp.
- L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares y J. L. Polo Rodríguez (eds.), *Saberes y disciplinas en las Universidades Hispánicas, Miscelánea Alfonso IX, 2004*, Universidad de Salamanca, Salamanca 2005, 308 pp.
- D. Soto Arango, *La reforma del Plan de estudios del fiscal Moreno y Escandón, 1774-1779*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2004, 166 pp.
- D. Soto Arango (ed.), *Historia de la Universidad comlobiana. Tomo I. Historiografía e fuentes*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja 1998, 345 pp.
- D. Soto Arango, M. Lucena Salmoral y C. Rincón (dirs.), *Estudios sobre la universidad latinoamericana. De la colonia al siglo XXI*, Ediciones Doce Calles, Tunja 2000, 352 pp.
- D. Soto Arango, *Mutis. Educador de la élite neogranadina*, Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja 2005, 304 pp.
- G. Terenna y F. Vanozzi (eds.), *Il Museo anatomico «Leonetto Comparini»: gli strumenti scientifici*, Siena, Centro servizi di Ateneo tutela e valorizzazione antico patrimonio scientifico senese, Università degli Studi di Siena, 2004, 223 pp.
- UIMP, *Clausura solemne de los cursos de verano de 2003 con la presidencia de su majestad la Reina*, Santander, 11 septiembre 2003, UIPM, Santander 2003, 58 pp.
- J. T. Uribe Ángel, *Historia de la enseñanza en el Colegio Mayor del rosario, 1653-1767*, Centro Editorial Rosarista, Bogotá 2003, 211 pp.
- B. Villegas (Dir.), *Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años*, Villegas editores, Bogotá 2003, 221 pp.
- VVAA, *La reforma de la Universidad Pública de Bolivia*, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid 1998, 293 pp.

Los *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija* tienen por objeto los estudios sobre la historia de la universidad y de la ciencia, sobre todo en el contexto de la civilización occidental.

Quieren ser un vehículo que facilite el conocimiento de investigaciones en marcha, bibliografía, reuniones científicas y otras noticias.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores enviarán su colaboración en disquette o por correo electrónico a la redacción. Cada número se cierra en la primera semana completa de septiembre. Junto al trabajo debe aparecer un resumen en castellano e inglés de una extensión máxima de cien palabras así como las palabras clave que estime oportunas el autor o la autora.

En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco se utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes.

Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título de la obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se utilizará la coma. En el caso de artículos, éstos irán entre comillas. Los títulos de revistas no irán abreviados y se pondrán en cursiva, el número de la revista en arábigos y el año entre paréntesis. Cuando se cite la misma referencia varias veces, se hará completa la primera vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas.

El nombre del autor y la institución a la que pertenece aparecerá al final de la colaboración.

La redacción acusará recibo de los originales, que serán sometidos a la valoración de dos lectores anónimos miembros del consejo asesor. Su publicación podrá ir condicionada a la introducción de modificaciones de acuerdo con los criterios de los evaluadores y la redacción.

Asimismo se informará de las publicaciones recibidas que podrán ser recensionadas.

INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA

PUBLICACIONES

CUADERNOS

- Vol. 1 (1998)
- Vol. 2 (1999)
- Vol. 3 (2000)
- Vol. 4 (2001)
- Vol. 5 (2002)
- Vol. 6 (2003)
- Vol. 7 (2004)
- Vol. 8 (2005)

BIBLIOTECA

1. *Estado de la Universidad de Alcalá (1805)*
Estudio preliminar de José Luis Peset
Edición de Diego Navarro
2. *La investigación en la universidad*
Edición de Carmen Merino
3. *Orientalismo y nacionalismo español*
Aurora Rivièrè
4. *El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea*
Manuel Martínez Neira
5. *Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia*
Daniel Comas Caraballo

6. *La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad*
Carolina Rodríguez López
7. *Cánones y Leyes en la universidad de Alcalá durante el reinado de Carlos III*
Ramon Aznar i Garcia
8. *Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América*
Enrique Villalba Pérez
9. *Archivos universitarios e historia de las universidades*
Edición de José Ramón Cruz Mundet
10. *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*
Edición de Adela Mora Cañada
11. *La Universidad española 1889-1939. Repertorio de legislación*
Manuel Martínez Neira, José M.^a Puyol Montero y Carolina Rodríguez López
12. *Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III de Madrid*
Edición de Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez López
13. *Manuales y textos de enseñanza en la universidad liberal*
Edición de Manuel Ángel Bermejo Castrillo
14. *Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval*
Susana Guijarro González